

Los actores sociales frente al desarrollo rural

**Yolanda Massieu Trigo, Michelle Chauvet Sánchez
y Rodolfo García Zamora**

coordinadores generales

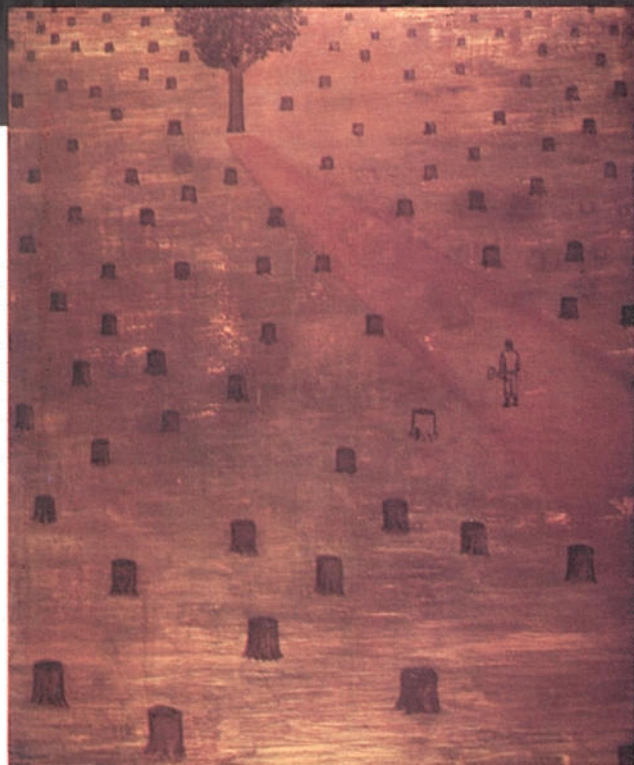
**ACCIONES SOCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS
CONTRA LA POBREZA**

**Ivonne Vizcarra Bordi
y Boris Marañón Pimentel**

coordinadores

TOMO

3



La Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER) ha buscado, desde sus inicios, hacer un análisis desprejuiciado y sugerente de la compleja realidad rural mexicana. Los nuevos fenómenos, que muchas veces rebasan los marcos teóricos existentes, requieren de un esfuerzo de este tipo. A través de sus congresos, la AMER ha convocado a investigadores de toda la república y del extranjero para contribuir con este objetivo. La colección que aquí se presenta cuenta, además, con el valioso apoyo del gobierno de Zacatecas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin el cual no hubiera sido posible su publicación.

IVONNE VIZCARRA BORDI
BORIS MARAÑÓN PIMENTEL
Coordinadores

Acciones sociales públicas y privadas contra la pobreza

YOLANDA MASSIEU TRIGO
MICHELLE CHAUVET SÁNCHEZ
RODOLFO GARCÍA ZAMORA
Coordinadores generales

LILIAN MARTÍNEZ ACOSTA
EVELYN AGUILAR MUÑOZ
Asistentes

Ivonne Vizcarra Bordi
Boris Marañón Pimentel
Coordinadores

ACCIONES SOCIALES PÚBLICAS
Y PRIVADAS CONTRA LA POBREZA



Obra en portada de
BORIS VISKIN

Diseño de portada
JOSÉ MANUEL ALDERETE

Formación
FERNANDO QUINTANILLA

DR © ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES
DR © EDITORIAL PRAXIS
PRIMERA EDICIÓN, 2005

ISBN 970-682-223-2, OBRA COMPLETA
ISBN 970-682-226-7, TOMO III

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, archivada o transmitida, en cualquier sistema –electrónico, mecánico, de fotorreproducción, de almacenamiento en memoria o cualquier otro–, sin hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las leyes, salvo con el permiso escrito del titular del *copyright*. Las características tipográficas, de composición, diseño, corrección, formato, son propiedad del editor.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES, Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, 04510, México, DF

EDITORIAL PRAXIS, Vértiz 185-000, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, 06720, México, DF, tel. 57 61 94 13, telefax 55 78 86 89

PRESENTACIÓN

YOLANDA MASSIEU TRIGO, MICHELLE CHAUVET SÁNCHEZ
Y RODOLFO GARCÍA ZAMORA

Los diferentes congresos de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER) se han caracterizado por brindar una panorámica del acontecer en el campo mexicano y por la incorporación de una nueva visión de temas inmanentes como los relacionados con el impacto de la globalización en las respuestas desde lo local, la creciente migración, las nuevas experiencias de financiamiento y ahorro, las repercusiones hacia el medio ambiente, los recursos naturales y los recursos genéticos, las nuevas tecnologías, en general, y la biotecnología, en particular, entre otros. El medio rural se ha transformado, urbanizado y globalizado de una forma en que la mayor parte de los productores ya no vive exclusivamente de la producción agrícola y la globalización aparece como el contexto general para el estudio de problemas específicos.

La colección de cinco tomos que presentamos aquí, fruto del esfuerzo del III Congreso de la AMER, realizado en Zacatecas en 2001, contiene en sus trabajos algunas convergencias en temas fundamentales, como la incorporación de las actividades rurales a la economía mundial, la importancia de las políticas supranacionales y la dirección de las empresas transnacionales. Este proceso no es homogéneo, existen particularidades, desde lo local, y va de la mano con la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, el desmantelamiento de la infraestructura de investigación y transformación tecnológica, la migración masiva y el crecimiento de la pobreza y la violencia. Se sigue dando una competitividad del sector basada, sobre todo, en la fuerza de trabajo barata, pese a la aplicación de las nuevas tecnologías.

Es evidente la polarización entre pequeños productores campesinos y grandes empresarios. La agricultura es ejercida por millones de pequeños productores, mientras que una minoría detenta las tierras arables de riego, tecnología y financiamiento. De seis a siete millones de hectáreas planas son susceptibles al riego, mientras que más de diecisiete millones son laderas difícilmente sujetas a mecanización e irrigación.

La apertura comercial sin cortapisas, instrumentada en el país desde los años ochenta y agudizada con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha colocado a la mayoría de los productores, especialmente a los de granos básicos, en franca desventaja ante la entrada de importaciones, en su mayoría estadounidenses, con precios artificialmente bajos por los subsidios que esta producción recibe en su país de origen.

Destaca en toda la serie la variedad de respuestas que dan los diferentes actores sociales al proceso globalizador que conlleva la exclusión. En el espacio nacional resalta la pérdida de soberanía del país frente a políticas dictadas por organismos internacionales. Está presente la crítica a la política económica, donde se plantea que el intervencionismo excesivo y el derroche de recursos, tanto de organismos internacionales como del Banco Mundial y los gobiernos sexenales, aunado al largo proceso histórico de programas agropecuarios que buscaban la modernización a ultranza de los productores mexicanos, ha generado más una dependencia de las comunidades hacia las instituciones que el fortalecimiento de las estructuras y redes sociales comunitarias. En este ámbito, la carencia de gobernabilidad trunca la operatividad de los programas. También, se destaca la incapacidad, en muchos casos, de los agentes gubernamentales para distribuir los recursos en tiempo y forma.

El telón de fondo del esfuerzo analítico de esta colección lo constituye el cambio de modelo de desarrollo desde principios de los ochenta, es decir, el radical viraje en las relaciones entre estado y

sociedad, caracterizadas por un andamiaje de políticas de apoyo productivo y, en el plano político, por una relación corporativa y clientelar conformada por el intercambio de recursos materiales y simbólicos por estabilidad social, que no posibilitaba ni toleraba la existencia de organizaciones autónomas. Esta versión autoritaria del compromiso de clases fue sustituida por otra en la que se dejaba al mercado la asignación de los recursos y se despojaba al estado de su función central en la regulación social y económica, lo cual se profundizó en procesos como la apertura comercial. Este giro, en el que se han suprimido casi todas las políticas de apoyo, ha tenido resultados negativos, como la caída en la producción agropecuaria de alimentos básicos, el crecimiento explosivo de las importaciones, el descenso de los precios al productor y los términos de intercambio, así como el incremento de la pobreza y la migración internacional.

Las diversas respuestas, desde lo local, que aquí podemos conocer en un interesante recorrido, incluyen recurrentemente la búsqueda de nuevas formas de ciudadanía, tanto de las mujeres como de los grupos indígenas y campesinos, pasando por la lucha por conseguir mejores condiciones para la producción, mejores servicios y el respeto a los derechos humanos fundamentales y al medio ambiente. La problemática indígena está presente en la colección, a través del registro y análisis de hechos relevantes para la vida nacional provenientes del antiguo conflicto de identidad y justicia referente a los pueblos indios.

En el panorama actual del espacio rural mexicano se entretajan imágenes inéditas y de viejo cuño, resultantes de la emergencia de nuevos fenómenos y la persistencia de añejos problemas. Se perfilan nuevos rasgos a partir de la mayor interacción de lo local con lo global y de los nuevos arreglos de las actividades productivas. El estado, que durante más de cuarenta años interviniere en la vida económica y política del campo, ha ido retirándose, a veces de manera abrupta y otras gradual, favoreciendo la participación de nuevos agentes eco-

nómicos y sociales, modificando el entramado de relaciones sociales y de producción.

Hoy, el espacio rural se vislumbra como un escenario complejo, inmerso en un profundo proceso de restructuración, fruto de la respuesta de los actores a la tensión permanente entre lo local y lo global.

La intervención gubernamental en el campo en México tiene un punto de quiebre a partir de 1982, cuando el estado reduce los ámbitos de su participación y comienza a dejar que las fuerzas del mercado sean las encargadas de ordenar la producción agropecuaria y de establecer, en función de su competitividad, quiénes se quedan en el sector y quiénes deben buscar otra actividad económica para sobrevivir o generar riquezas. Se habla de medidas de ajuste, como el retiro de los subsidios, la actualización de los precios de los bienes y servicios otorgados por empresas estatales o paraestatales, el cierre o privatización de muchas de estas empresas, la renuncia a realizar la planeación de la producción y comercialización de productos generados por el sector o requeridos como insumos por otras industrias, la clausura o limitación de las fuentes de financiamiento rural. Estas medidas pretendían evitar la anterior distorsión de los mercados por la intervención gubernamental. El retiro del estado muchas veces favoreció la presencia o reaparición de agentes económicos del sector privado, en buena medida transnacional, que asumen funciones como la comercialización, distribución, financiamiento y abastecimiento de insumos.

Desde hace varios años, el estado no invierte en infraestructura productiva y recorta el presupuesto para el sector rural, por lo que los campesinos de autosubsistencia y los pequeños propietarios se han quedado sin acceso al crédito y la asistencia técnica. Ahora reciben, en su lugar, los subsidios de Progresas/Oportunidades, programa paliativo de contención de la pobreza rural. Este programa subsidia el consumo y aumenta la escolaridad (principalmente femenina), pero indirectamente fomenta también el despoblamiento del campo y la

migración, al cambiar valores y expectativas sin preparar una mano de obra realmente más calificada ni crear nuevas fuentes de empleo a nivel local y regional. Se suman a esta situación la disminución estacional del empleo y las sequías, la política de importación de granos básicos y los precios fluctuantes y, en general, bajos de los productos agrícolas.

En este aspecto, las políticas sociales del estado neoliberal actual han recrudecido la pobreza, especialmente en el medio rural e indígena. Se vuelve ineludible, en este contexto, buscar modelos analíticos donde pobreza y salud, género y salud reproductiva y salud de los pueblos indígenas no constituyan áreas separadas de investigación y de programas de intervención.

En el tomo 1 de esta serie, titulado *Manejo de los recursos naturales y tecnológicos en el marco de la globalización*, coordinado por María del Carmen del Valle Rivera y Eckart Boege, se manifiesta la crisis ambiental en el campo mexicano en toda su crítica dimensión, enmarcada en lo que los coordinadores denominan las tres D: deuda económica, deuda social y deuda ecológica. Vivimos en medio de una paradoja: siendo un país megadiverso (10% de la biodiversidad mundial), la agricultura campesina, con 120 especies domesticadas, se enfrenta al mercado globalizado y homogeneizador para satisfacer necesidades de consumo de la sociedad estadounidense y el sector nacional urbano de ingresos medios y altos.

El 80% de los bosques y selvas está en manos campesinas e indígenas, pero el sector forestal sólo aporta el 7% del PIB nacional (excluyendo los aportes de los servicios ambientales), mientras da cabida en su territorio a diecisiete millones de personas, de las cuales, por lo menos, el 40% es indígena. Las nuevas instituciones políticas surgidas a partir de la Cumbre de Río, en 1992, no han sido suficientes. Así, encontramos a América Latina con una alta tasa de deforestación, de la que México y Ecuador llevan tristemente la delantera. Junto con Brasil y Colombia, los 4 países deforestan cuatro millones de hectáreas anuales, además de que padecen graves problemas ambientales,

algunos relacionados con el cambio climático global. Se presentan nuevos conflictos ecológicos no previstos, como los desastres naturales, las intensas sequías, las temperaturas sin precedentes y las hambrunas, en particular los huracanes. Asimismo, son insuficientes e insatisfactorias las regulaciones frente a nuevos retos, como la bioprospección y la bioseguridad, a pesar de los acuerdos internacionales.

Los coordinadores se preguntan: ¿Quién paga los daños generados por la agricultura industrial basada en la proteína animal y el uso extensivo de recursos y tierra? Para que prospere la agricultura industrial intensiva en insumos y energía, dentro del marco de la globalización, se requieren las mejores condiciones para el acceso a la mano de obra, al financiamiento, al agua, a buenos suelos, a un régimen de clima favorable y a recursos genéticos. Las regiones que se han insertado con éxito en la economía mundial, principalmente los horticultores, tienen estas condiciones, mientras que los productores de granos básicos están en franca desventaja, provocada, entre otras razones, por la competencia desleal de las importaciones de Estados Unidos, que gozan de altos subsidios. Ello tiene importantes consecuencias, pues la mayoría de los agricultores mexicanos siembran granos básicos.

Para el «desarrollo» del sur de México existe la iniciativa del Plan Puebla Panamá, cuyos promotores adoptan el modelo chileno exportador y pretenden una explotación extractiva de los recursos naturales, todo ello bajo el concepto de «desarrollo sustentable». Ante esta opción, a los campesinos e indígenas habitantes de estas tierras se les plantea la única posibilidad de castellanizarse e integrarse o emigrar.

En contrapartida, México tiene condiciones para estrategias de desarrollo rural alternativo basadas en el manejo colectivo de los recursos naturales. La forestería social o comunitaria puede dar las pautas y existe en diferentes regiones del país. Como contraparte de los al-

tos índices de deforestación, se cuenta hoy en día con más de 500 mil hectáreas de tierras de uso común, evaluadas por su buen manejo por la Dirección de Certificación del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, bajo el protocolo del Forest Stewardship Council. Todas las áreas certificadas están bajo el régimen de uso o bienes comunes con la modalidad de tenencia de la tierra ejidal y comunal. Aunque no todas sean áreas naturales protegidas, son consideradas como zonas de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad. El tomo 1 cuenta con varios trabajos sobre manejo forestal. En este caso, es fundamental la contradicción entre la explotación individual o colectiva del bosque como recurso común, sobre todo si se toma en cuenta la posibilidad de incluir a los miembros más jóvenes como nuevos socios.

Otros trabajos del tomo 1 abordan el carácter estratégico del suelo y el agua para la producción agrícola y la importancia de la gestión de los mismos por los productores. Asimismo, se aborda el análisis de la producción orgánica como una alternativa para el desarrollo del campo mexicano. Se documenta la aparición de los nuevos cultivos transgénicos como factor que agudiza la tendencia al control del sistema alimentario mundial por un grupo de empresas y los riesgos que esto conlleva. También se aborda el intenso debate público que estas nuevas plantas y alimentos han generado, la percepción y acción de las organizaciones sociales y las políticas gubernamentales y empresariales al respecto. Específicamente, se tocan los casos del maíz y la soya; el primero, por la situación de riesgo que implica la contaminación transgénica de variedades nativas o criollas.

Las nuevas experiencias de financiamiento y ahorro para paliar la creciente pobreza en el campo son otros de los temas relevantes en el tomo 1. Las nuevas microempresas han sido promovidas y favorecidas desde el estado como parte de su estrategia de combate a la pobreza, si bien muchas de ellas surgen por propia iniciativa. Al respecto, se tocan temas relacionados con el género, con los movimien-

tos sociales (como El Barzón), con las cajas de ahorro y los fondos regionales indígenas.

La creciente subordinación de las políticas económicas y sociales hacia organismos internacionales se expresa en la escasa sensibilidad gubernamental para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales y genéticos, así como la incapacidad para generar respuestas de financiamiento que permitan a hombres y mujeres del medio rural insertarse en proyectos viables y superar la pobreza.

El tomo II se titula, sugerentemente, *Nueva ruralidad, viejos problemas*, puesto que los coordinadores, María del Carmen Hernández y Carlos Javier Maya Ambía, plantean que el actual proceso de transformación de lo rural, en el que se conjugaron factores internos sumados a las tendencias de integración internacional, si bien perfiló nuevos escenarios como los ya descritos, también agudizó problemas estructurales de la agricultura que desde los años setenta se mostraba incapaz de continuar con la función que le tocaba en el modelo industrializador. La descapitalización del sector, el deterioro, cada vez más acelerado, de los recursos naturales, la expulsión cada vez mayor de fuerza de trabajo que no encuentra acomodo en el sector industrial y/o de servicios, son rasgos del campo mexicano que se manifestaban aun antes de la apertura y que se han agudizado en los últimos veinte años. Las respuestas de los distintos actores difieren; por lo general, los empresarios le están apostando a la asociación con agentes externos a la localidad. La unidad de producción campesina se ha vuelto más versátil, las dificultades actuales la han orillado a diversificar su capacidad de respuesta, haciendo cada vez más complejas sus relaciones con los sectores sociales y económicos que en principio le son ajenos. Es importante destacar la situación de los indígenas mexicanos, quienes tampoco han permanecido al margen y han desarrollado estrategias de sobrevivencia que comprenden la movilización armada, la organización social y la salida de sus comunidades tras la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Las novedades en el sector rural están relacionadas con la apertura comercial que está vigente desde los ochenta (aun antes de la firma del TLCAN), que provocara la entrada masiva de productos agropecuarios, muchos de ellos producidos en condiciones más ventajosas, poniendo en franca vulnerabilidad a los productores internos, campesinos y empresarios. La competencia de la oferta externa tiene un fuerte impacto: cultivos tradicionales están siendo desplazados y, en algunos casos, sustituidos por nuevos productos destinados a abastecer segmentos de mercados específicos y de consumo suntuario. Productos antes beneficiados por los apoyos gubernamentales y las condiciones imperantes en un mercado interno cerrado y protegido enfrentan serias dificultades para sobrevivir y mantener su competitividad en un mercado cuyas reglas no se definen en función de las prioridades nacionales, sino conforme a las estrategias de expansión de las grandes corporaciones multinacionales, principales agentes de este proceso que a nivel internacional ha desencadenado una nueva división del trabajo en la agricultura.

Algunas regiones resultan útiles, en la lógica del mercado mundial de alimentos, por su posición geográfica o por su estructura productiva e institucional. La competencia por entrar a los circuitos de producción mundial adquiere una dimensión regional, pues es ahí donde algunos productores, básicamente los empresariales, y los gobiernos locales se organizan y definen estrategias para atraer inversiones extranjeras o estar en condiciones de atender nichos especiales en el mercado mundial. Otras regiones, en cambio, se ven marginadas, de manera drástica, de la integración internacional.

Esta nueva división internacional del trabajo, junto con el retiro del estado de muchas de sus funciones de regulación en la producción agropecuaria, se expresa a través de contratos, subcontratos o convenios entre los productores y las corporaciones transnacionales en los que los primeros aseguran la demanda de sus cosechas, obtienen crédito e insumos y las segundas aplican sus estrategias de ex-

pansión y flexibilización para concentrarse en las fases más lucrativas y de menores riesgos, ahorrando, de modo considerable, costos de inversión en capital fijo. Son convenios, por lo general, de corta duración, con productores, y en regiones compatibles con los intereses de las corporaciones en el momento.

Hace pocos años la ruralidad era entendida como el espacio de la producción agropecuaria, la cual se concebía como una construcción social residual, vestigio de una sociedad arcaica y rústica que debería evolucionar hacia un modelo urbano-industrial en un proceso unidireccional. No obstante, los acontecimientos descritos han puesto en evidencia la precariedad de estos enfoques. Por ello, los actuales estudios que aluden a la nueva ruralidad trascienden la visión sectorial y ponen énfasis en las relaciones complejas entre lo rural y otros sectores de la sociedad o, inclusive, con mercados urbanos internacionales. También, en el resguardo de los recursos naturales, que se ofrecen como espacios de esparcimiento y recreación en ambientes naturales y aportan elementos para el mantenimiento y desarrollo de la cultura.

La pesca, el turismo ecológico, la producción artesanal y el comercio son algunas de las actividades que los habitantes del medio rural han practicado en los últimos años como parte de sus estrategias de sobrevivencia, que muchas veces tienen lugar en sitios distantes de su comunidad, intensificando los tradicionales flujos migratorios. Estas actividades tienen repercusiones importantes: muchas veces los flujos migratorios abren un puente de contacto y transferencia con otros ámbitos culturales, sociales y económicos y la comunidad expulsora. Los flujos financieros, producto de la migración, se convierten en el motor de la reproducción de muchas comunidades rurales, aunque a veces migra toda la familia y se abandona definitivamente la tierra.

El volumen documenta algunas de esas experiencias, agrupándolas en tres temas: nueva ruralidad, migración y empleo y producción. Los ensayos referentes a la nueva ruralidad abarcan dos aspectos: la aclaración conceptual del término y la presentación de algunos refe-

rentes empíricos para dar testimonio sobre los cambios y situaciones inéditas en el espacio rural. Destacan las estrategias y formas de resistencia que desde las comunidades rurales van conformando los pobladores del campo en aras de defender su identidad y lograr una manera sostenible de desarrollo social. La mayor proximidad entre lo urbano y lo rural es también un signo distintivo de este proceso de cambio y adaptación y se expresa en las nuevas demandas de los pobladores del campo, desde el reclamo de servicios netamente urbanos hasta los apoyos a las actividades agrícolas, que se presentan también en los espacios ciudadanos más humildes y marginados.

En cuanto al empleo y la migración, se dan novedades a raíz de los fenómenos suscitados en la mecánica operativa y la conformación de los flujos humanos, a raíz de la internacionalización de los procesos productivos en la agricultura y la segmentación y flexibilización de los procesos de trabajo. Es de especial interés el impacto de las nuevas tecnologías sobre la estructura tradicional del empleo rural, así como la aparición de desempleados urbanos que incrementan la presión sobre estos puestos de trabajo y cuya existencia refuerza la idea de interacción más estrecha entre lo urbano y lo rural. Son también objeto de análisis las formas de organización de los migrantes para defender sus derechos y la vigencia de los derechos humanos en un escenario de sobreexplotación del trabajo, así como el papel de los intermediarios laborales o enganchadores, cuya efectividad en la regulación de la oferta y la demanda de trabajo descansa en una compleja red de relaciones diversas y en compromisos sociales y simbólicos que estos agentes logran establecer con los trabajadores asegurando su obediencia y disposición a las reglas establecidas por los contratantes.

En el aspecto productivo, el tomo II contiene trabajos que hacen referencia a los impactos de la integración de la agricultura mexicana al sistema agroalimentario internacional. Prevalcen los enfoques sobre desarrollo tecnológico y sus implicaciones en la estructura social de la producción, puesto que las respuestas, sobre todo empresaria-

les, a estas exigencias, dependen del posicionamiento de los productores en dicha estructura. Se analizan diversas experiencias de agricultura de contrato, enfatizando su forma de operación y las estrategias de las empresas consumidoras. Aparecen aquí los grandes consorcios lecheros en sus regiones de influencia, así como los ganaderos en pequeña escala.

El tomo III, *Acciones sociales públicas y privadas contra la pobreza*, coordinado por Ivonne Vizcarra Bordi y Boris Marañón, está dedicado a las acciones políticas, individuales y colectivas, en los ámbitos públicos y privados. Está dividido en dos grandes apartados: en el primero incurren los análisis de las acciones públicas institucionalizadas y en el segundo las acciones públicas que impulsan las organizaciones y los individuos (hombres y mujeres).

En ambos apartados está presente el tema de la justicia en la toma de decisiones que buscan elevar la calidad de vida de las poblaciones rurales en México. En esta búsqueda se plantean los debates en torno al desarrollo rural, los fenómenos concurrentes al desarrollo (como la pobreza) y se enfatiza la capacidad de los actores y actoras en la resolución de problemas sociales y el enfrentamiento con los conflictos. Los trabajos del tomo III coinciden en una ética sobre las acciones políticas y humanas que norman el orden social con responsabilidades públicas y privadas; ambos apartados se diferencian precisamente en el marco de las acciones que estructuran el orden social.

El contexto del primer apartado lo conforman las pautas neoliberales, la globalización y las reformas legales e institucionales que agilizan el TLCAN. Se apunta al reconocimiento de la multiperspectiva para conceptualizar la pobreza rural y se realizan propuestas para influir en el cambio institucional a través de la acción política colectiva. En los trabajos también se observa una tendencia a relacionar las intervenciones planeadas para combatir la pobreza rural con el proceso de humanización (género, clase y etnia) como una condición *sine qua non* del cambio con justicia social. Se trata de

estudiar los activos y poderes sociales, redes e instituciones locales de las familias rurales pobres, distinguiendo dos vías importantes generadoras de ingresos: una agrícola y otra laboral. Destaca la complejidad del capital social como fruto de la acción de los actores sociales, lo cual requiere necesariamente de arreglos institucionales.

En el esfuerzo de avanzar en la construcción del concepto de pobreza cobra importancia la noción de capital social, donde se destaca que reducir el concepto a un índice de productividad y de relaciones mercantiles y comerciales corre el riesgo de deshumanizarlo y aislarlo de procesos de desarrollo rural y reducción de la pobreza. Se recomienda aprovechar el capital humano de las mismas comunidades, ya formado, para actuar como promotor de los programas gubernamentales, así como fortalecer el capital social a través de acciones de autogestión, haciendo hincapié en reconsiderar las autonomías.

Otro esfuerzo en el primer apartado es el de la redefinición del concepto de calidad de vida, resaltando el papel que juegan las condiciones, los modos y las expectativas de vida de los pobres y redefiniendo las políticas sociales desde un ámbito sociocultural, tomando la comprensión y los significados de las formas de vida particulares de las poblaciones como centro de las acciones en materia de asistencia y seguridad social. Asimismo, se destaca el carácter de la pobreza como círculo vicioso, donde la política social, si bien es necesaria, al ser engendrada por el mismo sistema, resulta parcial, poco integral y no comprende la continuidad con otras esferas de la política económica.

El análisis de la pobreza se enriquece por la perspectiva de género y por la de etnia, que da mayor peso a los aspectos socioculturales y destaca las organizaciones tradicionales como estrategias eficaces para hacer frente a las necesidades de producción y reproducción social. De esta manera, el concepto de pobreza no se reduce al consumo de bienes y servicios, sino que es ampliado a las funciones simbólicas de reproducir la vida social según la etnia de pertenencia. Siguiendo esta

línea, hay análisis de los efectos de la inversión agregada (pública y privada) en el campo, planteando que las zonas agrícolas dependen cada vez más de los cambios del mercado global y no de la demanda interna, provocando fuertes flujos migratorios.

Están presentes los intentos campesinos de formar parte de la modernización rural, pese a la estigmatización y a veces prohibición de ciertas prácticas tradicionales, como la medicina herbolaria. En el caso de la relación salud-enfermedad, la modernización sanitaria, específicamente la reproductiva, en las comunidades rurales, socava la integridad de la población, pues las jóvenes son clientas de prácticas sanitarias «modernas» que transgreden el orden normativo de esas sociedades y las deshabilitan de tener alternativas de salud, pues la pérdida de un saber no es necesariamente su remplazo por el otro. De esta manera, la política de modernización sanitaria emprendida por el estado ha contribuido más bien a generar una relación de dependencia de los servicios de salud pública y nuevas formas de marginación que una apertura de oportunidades para el desarrollo humano.

En el segundo apartado se muestra un abanico de acciones sociales, presentes en organizaciones, acciones educacionales y culturales y en la conformación de identidades que se reivindican en su lucha por persistir, pese a los embates de los nuevos capitalismos, más voraces y menos conciliadores.

Los ensayos, en su mayoría, muestran impactos de las políticas de apertura establecidas en las distintas administraciones mexicanas desde los ochenta y las respuestas de los actores en términos políticos, organizativos, culturales, sociales, educativos e identitarios. Respuestas desiguales y germinales, pero que pueden contribuir a la formulación de alternativas desde abajo.

Las remesas de dinero proveniente de Estados Unidos se distinguen como un recurso fundamental para la sobrevivencia campesina con distintos destinos: consumo familiar, compra de terrenos, construcción de casas, uso productivo, compra de tierra, insumos, gana-

do, maquinaria. En algunos trabajos se encuentra muy debilitada la fuerza política de los ejidos, aunada a las estrategias de sobrevivencia en la agroindustria privatizada, como la azucarera. Dichas estrategias llegan, en algunos casos, a la autogestión de los ingenios por parte de los cañeros. Estas luchas también pasan por la acción organizada de los campesinos en torno a la tierra, el precio y la democracia, de manera que contribuyen a la desestructuración de las formas más tradicionales de poder y al proceso de construcción de ciudadanía.

Paralelamente, otros trabajos del tomo III registran el papel de la etnia en la construcción histórica de identidades, donde la configuración regional de poderes políticos es importante, así como la relación corporativa y conflictiva con el estado. Todo ello contribuye a matizar las ideas de dominio, subordinación y resistencia, tanto como la metáfora «desde arriba» y «desde abajo».

En este abanico de temas, cobra importancia real el papel de los agentes externos en los proyectos de desarrollo rural, en una reflexión en que no son sólo las deficiencias, la ignorancia y la corrupción los que llevan al fracaso, sino la mirada sociocultural distante de los valores y costumbres indígenas y campesinos. Asimismo, se considera también la necesidad de adecuar la capacitación de los profesionales rurales a las nuevas condiciones económicas, políticas, tecnológicas e institucionales imperantes desde los ochenta y abandonar el carácter compensatorio que tenía como objetivos tratar de suplir las insuficiencias del sistema educativo y apoyar las políticas de empleo y productividad.

También en el aspecto educativo aparece el flagelo del trabajo infantil en el medio rural como una traba a la educación formal desde la infancia. Se incluye el análisis de la potencialidad del maestro rural y la escuela para proyectos de educación ambiental en áreas deterioradas, con resultados diversos. La polémica de la educación pública en México como proyecto nacional, que incluye la posibilidad de integrar o destruir a la cultura tradicional campesina e indígena, tiene

también un papel relevante en el análisis de la educación en el medio rural. Siguiendo esta línea, la reflexión sobre experiencias de proyectos educativos alternativos en las comunidades indígenas también está presente.

No podía faltar en el estudio la consideración de los derechos humanos en el medio rural, en este caso, tratando dos problemas fundamentales y poco conocidos: el de la tercera edad y el de la religión. Aquí se destacan fenómenos de intolerancia religiosa y divergencia de religiones en una misma etnia. La reflexión conduce hacia la legitimación de un estado laico, pero también plural. En cuanto a la población de la tercera edad, se documenta el maltrato, sobre todo en condiciones de necesidad y profunda pobreza económica.

El conjunto de ensayos del tomo III conduce a preguntar al estado sobre su responsabilidad institucional en el futuro de las poblaciones pobres del campo mexicano, según sea su género, etnia, raza, edad y posición en la familia, reivindicando la necesidad de repensar las acciones sociales públicas y privadas.

En el tomo IV, con el título *Derechos étnicos y territoriales de la población indígena y campesina en México*, las coordinadoras Gabriela Kraemer Bayer y Martha Judith Sánchez inician con la reflexión acerca de que 2001 fue un año cumbre para el movimiento indígena en México. Ello, como una manifestación más de la tensión existente entre las etnias, el estado y la nación que ha estado presente, de manera permanente, en la historia de México después de la conquista, con el resultado de que, en lugar de unidad, lo que se manifiesta es una separación cada vez más notoria.

En 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se vuelve a poner sobre la mesa este persistente problema. Desde esa fecha han ocurrido hechos relevantes para la vida de la nación, provenientes del antiguo conflicto de identidad y justicia referente a lo indígena. Una guerra con sus muertos, marchas multitudinarias para evitar una masacre, una ley dictada por el Congreso de la Unión para llevar la solución del conflicto por cauces

pacíficos, la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), mesas de negociación, consultas a las bases indígenas, a la sociedad civil, un acuerdo firmado por representantes del estado mexicano y el EZLN (los llamados Acuerdos de San Andrés), innumerables desplegados de organizaciones nacionales e internacionales en favor del cumplimiento de los acuerdos, actos multitudinarios de apoyo a las demandas de los indígenas. Mientras tanto, masacres y desplazados en la zona de conflicto en Chiapas.

Llega un nuevo partido al poder, por primera vez en setenta años, entre otros factores, gracias a la movilización de la sociedad civil lograda por el EZLN. El presidente responde enviando la propuesta de modificación a la Constitución elaborada por la Cocopa y aceptada por todas las organizaciones indígenas, producto de una negociación y consulta a los interesados. Para manifestar su apoyo a esta iniciativa, los indígenas y miembros diversos de la sociedad civil se suman a una marcha convocada por el EZLN; «la marcha del color de la tierra», la llamaron. Al fin, después de un arduo debate entre congresistas e indígenas, se permite a representantes de estos últimos hablar ante el Congreso y los medios masivos, aunque los legisladores del gobernante Partido Acción Nacional se negaron a oír y escuchar. Después, los legisladores elaboraron una propuesta que poco tenía que ver con la de la Cocopa, por lo que el resultado del trabajo del Congreso fue rechazado por las organizaciones indígenas casi de inmediato y el diálogo con el EZLN quedó interrumpido hasta la fecha.

La reforma se aprobó en agosto de 2001. Tres semanas después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía ya 270 controversias constitucionales de los municipios indígenas de diferentes estados, la mayoría de Oaxaca, escritas en cinco toneladas de papel. Para febrero del siguiente año, la SCJN acumularía 300 controversias constitucionales en contra de la reforma en materia de derechos y cultura indígenas. Un mes después, 110 legisladores reconocían la necesidad de rediscutir la reforma indígena. Pese a ello, la SCJN decla-

ró improcedentes las controversias con el argumento de que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es objeto de control jurisdiccional. La reforma rechazada por los indígenas continúa, por tanto, vigente hasta hoy.

Para las coordinadoras, este episodio representa sólo la punta del *iceberg* de una historia mucho más larga y compleja. Los indígenas de diferentes regiones del país lucharon por conservar su autonomía desde los primeros años después de la conquista. Lucharon por conservar su territorio, sus recursos naturales, y contra los excesivos tributos, con los medios que estuvieron a su alcance. A veces, era una lucha en el terreno legal; otras, ocupando las tierras por la vía de los hechos y otras más, recurriendo a la defensa violenta. Si las rebeliones contra autoridades despóticas fueron violentas, la represión no lo fue menos. En la mayoría de las regiones indígenas, las comunidades han logrado adecuar sus propias formas de gobierno a partir de una larga historia de imposiciones. En algunos casos se lograron modalidades de gobierno autónomo supralocal.

El tomo IV reúne una diversidad de acercamientos a la problemática campesina e indígena con tratamientos desde muy generales hasta estudios de caso minuciosos que contribuyen a evitar las explicaciones simplistas de un fenómeno de gran complejidad, expresión de comunidades mucho más vitales de lo que la intelectualidad urbana suele imaginar.

En el volumen se consideran dos aspectos básicos: la lucha por la autonomía y la lucha por la tierra y el territorio, que constituyen dos apartados. En el primero, el centro del debate y los protagonistas son sólo los indígenas. Es posible que este énfasis tenga algo de ilusión óptica, puesto que algunas conclusiones bien podrían tener aplicaciones en comunidades rurales sin una identidad étnica reconocida, nos plantean las coordinadoras de la compilación. Por ejemplo, la necesidad de preservar un componente identitario en las difíciles condiciones del migrante no es exclusiva de los indígenas. Lo mismo se puede

decir de la necesidad de una mayor autonomía y representación política. Es por ello que surge en uno de los ensayos la preocupación sobre la posibilidad de que la fuerza democratizadora que emana del movimiento indígena pueda rebasar el estrecho límite de los pueblos originarios.

Los artículos abordan desde temas más generales, como las necesarias reformas constitucionales y legales, el papel de la oportunidad política e ideológica en la aparición del movimiento indígena, la historia de la lucha de las organizaciones indígenas por la autonomía en México y América Latina, las diversas alternativas autonómicas presentadas y la propuesta de los Acuerdos de San Andrés. Otros trabajos enfocan distintos aspectos de la lucha por la autonomía en regiones específicas.

El segundo bloque del texto aborda un tema central que afecta a campesinos e indígenas por igual: la lucha por la tierra y el territorio. Abarcan desde los diversos cambios de la legislación en la dinámica agraria, en la posesión de tierras comunales indígenas, así como estudios de caso que permiten pensar grandes temas, como las virtudes de la propiedad privada *versus* la concentración de la tierra y el origen de los conflictos sociales con la necesaria presencia de la siempre inabarcable complejidad de los hechos concretos.

Con el título *Transformaciones del campo mexicano: una mirada desde los estudios de género*, las coordinadoras del tomo v, Paola María Sesia y Emma Zapata Martelo, nos hablan de que las voces de las mujeres en los estudios rurales no son nuevas; han estado siempre presentes, si bien por mucho tiempo fueron ignoradas o consideradas poco relevantes o inexistentes, aun por los investigadores. Pese a ello, desde los años setenta las mujeres se hacen visibles e irrumpen en la escena rural y urbana. En el medio rural asumen un papel protagónico como campesinas, migrantes, indígenas, promotoras rurales, trabajadoras en las maquilas, ejidatarias y activistas sociales.

En este volumen se recogen muchas de estas experiencias y se tratan los temas más diversos, utilizando metodologías que permiten escuchar las voces de las protagonistas. Los enfoques van de lo sociológico a lo etnográfico, de lo objetivo a lo subjetivo, de lo macro a lo micro, de lo público a lo privado.

Se vislumbran en este tomo las dinámicas, acomodados y repliegues de las mujeres y sus grupos domésticos en el espacio local o microrregional que han surgido como consecuencia de las grandes problemáticas que experimenta el agro en la actualidad: la pobreza, la migración, la baja rentabilidad de la producción campesina, el desempleo o subempleo, la explotación laboral, la ausencia o baja calidad de servicios básicos de salud y educación, el deterioro del ambiente y la sobrexplotación de sus recursos naturales, el despoblamiento rural, la inseguridad alimentaria y la discriminación y desigualdad social, cultural y genérica, entre otros temas. Desde la perspectiva de género, se tienen nuevas visiones sobre estos problemas. Las experiencias relatadas provienen de contextos regionales específicos que han influido en las relaciones entre los géneros y la construcción de identidades de mujeres y varones. Se escuchan voces extremadamente pesimistas, como las de mujeres que no han recibido tierra y analizan la destrucción de su medio, y voces fuertes de las mujeres indígenas, vertidas a lo largo de la Marcha por la Dignidad Indígena; voces sorprendidas cuando escuchan que las mujeres también tienen derechos humanos, o las reflexivas, que se dan cuenta de los múltiples cambios que hay que hacer en torno al grupo doméstico, la comunidad y el entorno para que puedan tener un nuevo papel en la vida socioeconómica, porque ya no quieren continuar invisibles; voces que dan cuenta de los procesos de cambio que han tenido los grupos domésticos y las mujeres protagonistas.

Todo lo anterior constituye el escenario donde viven y actúan las mujeres rurales de hoy, un escenario de enormes dificultades en la

supervivencia cotidiana, pero que también ofrece nuevas posibilidades y horizontes.

Los trabajos del tomo v hacen un aporte importante al conocimiento del sector rural y en especial de las mujeres y las relaciones entre los géneros. El volumen cubre ocho temas sobre género y ruralidad: *a)* medio ambiente y recursos naturales; *b)* derechos indígenas y multiculturalismo; *c)* organización y liderazgo; *d)* microfinanciamiento; *e)* manejo y uso del agua; *f)* salud, nutrición y alimentación; *g)* educación; *h)* globalización, migración y trabajo.

Respecto al medio ambiente y los recursos naturales, los trabajos desmienten una de las falacias que domina los programas de conservación, es decir, la idea de que las mujeres tienen una predisposición «natural» a la conservación y existe una relación «especial» de la mujer con la naturaleza. Se ignora así la división del trabajo por géneros y el hecho de que los intereses e incentivos ante el manejo de los recursos naturales difiere entre hombres y mujeres. Se destaca la visión social de la forestería comunitaria que tuvieron los programas de conservación y que en muchos casos trae consigo el debilitamiento de los mecanismos tradicionales nativos con que se mantenían los recursos naturales, las milpas y las selvas o los bosques. Las consecuencias del deterioro ambiental son diferenciadas para hombres y mujeres, pues mientras los primeros se preocupan por la falta de productividad de las tierras, a las segundas les preocupa la desaparición de fauna que anteriormente contribuía a la alimentación y la obtención de plantas útiles de las tierras comunes.

La presencia de las mujeres indígenas plantea una contradicción: el multiculturalismo reivindica los derechos colectivos de las minorías, mientras que el feminismo asume la crítica a todas las culturas patriarcales. En la introducción del tomo v, las coordinadoras discuten este aspecto.

Se resalta el papel de las mujeres indígenas del EZLN, cuyas voces comienzan a escucharse para apoyar las demandas de sus compañe-

ros, pero también para exigir respeto a sus derechos específicos, como la construcción de relaciones democráticas al interior de la familia, la comunidad y la organización, acceder a cargos y participar en asambleas comunitarias. Son voces que cuestionan los sistemas de impartición de justicia comunitarios, marcados por la desigualdad, que proponen su transformación.

También, se describen experiencias de grupos organizados de mujeres rurales donde destacan los procesos de empoderamiento individual y colectivo, la construcción de la ciudadanía, en la que propugnan por los derechos relacionados con la salud, el acceso a la tierra, la toma de decisiones en los espacios domésticos y la negociación con otros actores sociales. Entre los avances, aparecen la construcción de espacios colectivos, donde se impulsan los cambios, la desestructuración de los mecanismos de poder existentes en los sistemas de género que sostienen la opresión de las mujeres, la participación en luchas electorales municipales y la construcción de redes con otras organizaciones indígenas y de mujeres de la sociedad civil. Se ofrece una visión crítica e histórica de los proyectos de microfinanciamiento para mujeres, donde la obtención de recursos institucionales ha sido limitada y se incorpora a las mujeres en actividades poco rentables y dentro de los rubros tradicionales.

A pesar de la exclusión de las mujeres de los sistemas financieros formales, los estudios realizados señalan que, cuando han accedido a las pocas fuentes existentes, son excelentes pagadoras y los ingresos que obtienen los invierten en sus grupos domésticos. En los últimos años surgen los esquemas ahorro-préstamo, en donde los recursos para la inversión se obtienen de los ahorros de las mujeres. Aunque limitados en su alcance, porque los ahorros de las mujeres lo son, estos esquemas facilitan su empoderamiento, especialmente si se acompañan de procesos de capacitación, gestión y control de los recursos por parte de las mismas beneficiarias. De igual forma, obtienen formación para administrar, comercializar y darle prioridad a actividades

que vayan más allá de la supervivencia para generar ingresos que mejoren la calidad de vida de las microempresarias.

La problemática derivada del abasto, uso y manejo del agua también tiene cabida en el tomo v, donde se observan dos espacios simbólicos que son mutables durante los ciclos agrícolas. Las actividades ocupan espacios simbólicos de producción material y social con ritmos y tiempos diversos. Los cambios están relacionados con las transformaciones propiciadas por los movimientos migratorios, los procesos de reconversión productiva, la inserción de algunos productos al mercado regional, nacional e internacional, así como la intensificación del uso de los recursos naturales, en especial de tierra y agua. En cuanto al manejo del recurso, se destacan de manera específica los roles sociales que muchas veces son aceptados, sin cuestionarlos, por las mujeres.

Es destacable, en esta línea, el papel de las mujeres dentro del grupo doméstico como las encargadas de la salud, la alimentación y el bienestar de la familia. En este ámbito, la simple actividad de hacer tortillas adquiere un significado simbólico y una valoración cambiante, según las ideologías predominantes en la sociedad hegemónica, en la que los pueblos indígenas se insertan de una manera subordinada.

El análisis de salud y nutrición aporta interesantes hallazgos en cuanto a las inequidades étnicas, genéricas y generacionales que dan lugar al acceso diferenciado a los servicios de salud institucionales y a los alimentos disponibles, dando como resultado una morbilidad, también diferenciada, en ocasiones a nivel del grupo doméstico, sobre todo en situaciones de pobreza extrema.

El tema de la educación se aborda considerando cómo la población femenina ha pasado de una exclusión abierta de la educación formal en los siglos xix y xx a ser objeto de una discriminación mucho más sutil, pero manifiesta, en la escuela, donde las expectativas son mayores para los niños que para las niñas, tanto por parte de los maestros como de los padres de familia, a la vez que la exclusión no

ha desaparecido por completo, sobre todo en el medio rural empobrecido. Asimismo, la situación de pareja y de nivel educativo de las madres marca, de manera definitiva, la educación de las hijas, donde las madres solteras propician, en mayor medida, la posibilidad de que las hijas sean analfabetas, en comparación con los hogares donde están presentes el padre y la madre. Se encuentra también la relación directa entre un mayor nivel educativo y un comportamiento reproductivo más lento por parte de las mujeres rurales.

Respecto a la migración y el empleo, los análisis de género comprenden la relación entre la trayectoria laboral y el ciclo de vida, con ausencia de derechos, y la inserción en los eslabones peor pagados y más desprotegidos de diversas industrias, todo ello relacionado con la decisión de dar prioridad a la maternidad y el cumplimiento de las obligaciones conyugales. Lo anterior se da dentro de una mayor articulación entre lo rural y urbano, con la presencia de algunas industrias en comunidades rurales y la creciente pluriactividad de las unidades domésticas campesinas. La migración femenina, por su parte, ha estado presente desde hace décadas, así como la presencia de las mujeres en las labores agrícolas, con destinos migratorios cambiantes, debido a que las profundas transformaciones estructurales de la agricultura mexicana y estadounidense generan un fluctuante mercado laboral. En este contexto, está aumentando en importancia la ocupación femenina en el comercio y se detecta una mayor inequidad en las poblaciones indígenas migrantes en comparación con las mestizas.

No obstante la profunda transformación que han experimentado los estudios feministas desde los años setenta en México, Latinoamérica y el resto del mundo para llegar en la última década a la adopción de la perspectiva de género, llama la atención que ninguno de los trabajos presentados en el tomo v cubra dimensiones de la construcción de la masculinidad en relación con el medio rural. Parece que todavía prevalece una tendencia a seguir equiparando mujer con género, postura que ha sido criticada.

Es importante remarcar que la crisis agropecuaria, las sequías, la pérdida de rentabilidad de la producción agrícola, las expulsiones y atracciones migratorias, la agroindustria de exportación, las maquilas fronterizas, el deterioro ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, las transformaciones en el papel del estado y, en general, los grandes cambios rurales que afectan a enormes extensiones del país son parte de la gran diversidad que presenta el México rural contemporáneo. En este *otro* México, estas problemáticas tan apremiantes deben tener, en algunos o muchos casos, repercusiones diferenciales entre hombres y mujeres en el empleo, la vida doméstica cotidiana, la supervivencia económica, las estructuras y dinámicas sociodemográficas familiares, las perspectivas de vida futura, la educación y las condiciones de salud, entre otros aspectos. Esto abre un campo inmenso de exploración, que representa un gran reto para quienes se interesen en el tema de la ruralidad.

Lo rural no es más (si es que alguna vez lo fue) lo inamovible y el universo cerrado concebido por enfoques tradicionales. El espacio rural está resultando mucho más dinámico de lo que se consideró y hoy día hay quienes postulan que debe ser el eje mismo de cualquier estrategia de desarrollo sostenible y con equidad. Su participación en la producción de alimentos y la preservación de los recursos naturales le confiere un lugar estratégico dentro de la economía nacional y el hecho de ser el asiento principal de los más pobres del país lo convierte en el centro del objetivo político de gobernabilidad del país.

Esta colección se inscribe dentro del esfuerzo que ha realizado la AMER desde hace varios años para asumir los retos de investigación y propuestas de alternativas que urgen en un país como México, donde la agricultura y lo rural han sido subordinados entre los grandes objetivos de la política económica y social. Ante ello, los investigadores agrupados en AMER le recuerdan a la nación que no puede haber un desarrollo social equitativo y sustentable sin una estrategia que valore el papel de este sector en la viabilidad de nuestro país.

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

INTRODUCCIÓN

IVONNE VIZCARRA BORDI
BORIS MARAÑÓN

Este tomo está dedicado a la inclusión de actores y agentes pasivos y activos que intervienen en los procesos sociales, políticos y económicos del medio rural mexicano. Como su título lo sugiere, y sin poder negar su complejidad, trata de los temas que atraviesan las acciones políticas (individuales y colectivas, humanas e institucionales) en los ámbitos público y privado. Por el número de piezas que componen el rompecabezas de este tomo, lo hemos dividido en dos grandes apartados; en el primero, incurren los análisis de las acciones públicas institucionalizadas, en un plano normativo más que práctico, aunque este último no es excluido del análisis; en el segundo, se aglomeran las acciones públicas y privadas que impulsan tanto las organizaciones como los individuos (hombres y mujeres).

Los diversos actores sociales implicados en las decisiones que reivindican un protagonismo en el campo mexicano se reconfiguran en lo que Renate Mayntz (1997: 272) denomina «la gestión de la interdependencia», noción que hace finalmente un llamado al «bien común». En este sentido, ambos apartados persuaden a la justicia en la toma de decisiones que buscan elevar la calidad de vida de las poblaciones rurales en México. En esta búsqueda, no sólo se formulan enigmas del desarrollo rural sino que, desde diferentes ángulos de reflexión, varias perspectivas teóricas y numerosos datos empíricos vislumbran, por un lado, los fenómenos sociales concurrentes del desarrollo, como es la pobreza, y, por el otro, se apremian las capacidades de los actores y actrices en la resolución de problemas sociales

(demandas) y en afrontar diferentes conflictos (identidades y autonomías).

Es importante resaltar que los trabajos que conforman el presente tomo tienen una característica peculiar: una ética sobre las acciones políticas y humanas que norman el orden social con responsabilidades públicas y privadas. Sin embargo, ambos apartados se diferencian precisamente en el marco de la acción o más bien de las acciones que estructuran el orden social (Prats, 2002). El primero recopila los trabajos que analizan las instituciones que son el propio orden social, perteneciente al plano de análisis gubernamental y de la política pública. El segundo conjunta los trabajos que analizan los y las actuantes, así como los elementos o componentes en dicho orden social (cultura, educación y cooperativismo, por ejemplo), es decir, las movilizaciones y organizaciones que, junto con sus sujetos sociales, forman en un continuo no lineal pero histórico, la armazón donde las identidades se reconfiguran.

Las pautas neoliberales, la globalización y las reformas legales e institucionales que agilizan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte son el marco de referencia que contextualizan los doce artículos que conforman el primer apartado del tomo. Éstos apuntan al reconocimiento de la multiperspectiva para conceptualizar la pobreza rural y realizan propuestas para influir en el cambio institucional a través de la acción política colectiva. En los trabajos también observamos una tendencia a relacionar las intervenciones planeadas para combatir la pobreza rural con el proceso de humanización (género, clase y etnia), como una condición *sine qua non* del cambio con justicia social.

Para abordar la relación entre la pobreza rural y las políticas sociales, Renato Javier Martínez y Víctor Antonio Hernández posicionan su reflexión conceptual desde la perspectiva de calidad de vida. Su trabajo, «Posibilidades de una vida de calidad en el entorno de la pobreza rural», pone en evidencia, precisamente, los contenidos

socioculturales de dos procesos en particular: el de la satisfacción de las necesidades básicas y el de la implementación de las políticas sociales. Esto los conllevó a reparar en el concepto calidad de vida, al confrontarse con los pocos logros de la sociedad rural para reducir su pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, el esfuerzo de los autores por redefinir la pobreza rural desde el enfoque de la calidad de vida los condujo no sólo a resaltar el papel que juegan las condiciones, los modos y las expectativas de vida de los pobres, sino, sobre todo, a redefinir las políticas sociales desde un ámbito sociocultural, tomando la comprensión y los significados de las formas de vida particulares de las poblaciones como centro de las acciones en materia de seguridad y asistencia social.

En cambio, la pobreza, para Verónica Villarespe, quien realiza una «Evaluación del Progreso» con base en la documentación de fuentes secundarias, es un círculo vicioso que no puede trocarse en uno virtuoso, pues se hereda y se reproduce dentro del mismo sistema que la engendra, como el reflejo necesario de la política social para reducir la pobreza. Así, la política social es necesaria y tal vez la más eficaz para reducirla. Sin embargo, Villarespe concluye que la elaboración y ejecución de planes y programas, como el Progreso, para combatir la pobreza, pertenecen al mismo sistema que la reproduce, y pese a que el Progreso pudiera reducirla de modo significativo, el programa ha resultado parcial, poco integral a otros y no se compromete en la continuidad con otras esferas de la política económica.

Por su parte, Miriam Núñez, Tomás Martínez y Fernando Manzo ofrecen «Un nuevo enfoque en el estudio de la pobreza rural: la perspectiva femenina». A partir de la experiencia de las mujeres, los autores y la autora buscan formular un nuevo concepto de pobreza que parta de relaciones de poder, de desigualdad y discriminación. El debate se manifiesta en dos ejes que marginan los roles de las mujeres rurales y pobres; una, en la misma conceptualización de la pobreza basada en la satisfacción de necesidades básicas y, la otra, en la

aplicación de métodos para calcularla. Su propuesta erradica los prejuicios conceptuales clásicos de la pobreza, profundizando en las raíces de la desigualdad social y de género, donde la privación de las mujeres es la permisividad para los hombres, principalmente en cuanto a la conquista del espacio público, alta y socialmente valorados. En el concepto renovado de pobreza como privación, resalta el fenómeno de la violencia familiar y sexual de que son objeto las mujeres campesinas e indígenas. De aquí que la pobreza, en términos de relaciones de poder, desigualdad y discriminación entre los géneros, permite asumir otras responsabilidades más que económicas: se nos propone un nuevo concepto de pobreza en espera de lograr un proyecto de transformación social.

Siguiendo esta trinchera de reflexión, el trabajo «Políticas de seguridad alimentaria campesina de los noventa con asignación genérica», de Ivonne Vizcarra, muestra que las acciones políticas que se diseñan en un marco normativo para reducir la pobreza rural y ampliar las capacidades para asegurar la alimentación de las familias campesinas tienen una fuerte sesgo genérico que impide el desarrollo pleno de las mujeres y refuerza las desigualdades sociales entre los géneros. Para Vizcarra, la asignación de géneros a distintos roles sociales viene de una ideología patriarcal reforzada a través de las prácticas discursivas sobre el papel de los individuos en la sociedad, según sea su género; así, los varones son responsables del manejo y de proveer los recursos para el sustento del hogar y las mujeres son las responsables del buen uso de ellos para el bienestar de su familia. Dentro del ámbito de lo político e institucional, este sesgo ideológico se prolonga en la manifestación de los diferentes programas. La mayoría de estos programas sociales y aun «productivos» formulados y ejecutados en México durante la década de los noventa, tiene un objetivo claramente asociado a la formulación de políticas de alivio a la pobreza, al menos en los discursos oficiales: identificar y apoyar aquellas estrategias que permitan a los hogares campesinos un sendero dinámico para

salir de la pobreza. Sin embargo, la concepción, instrumentación y ejecución de cada uno de ellos tienen un sesgo social en su formulación inicial, que acuerda la asignación genérica a esos programas. Bajo la perspectiva de género, Vizcarra desglosa algunos de los programas (Pronasol, Procampo, Progresá, Firco-PET) y reformas (art. 27), con su respectiva asignación genérica, que llegan de ribete a la vida cotidiana de los hogares de campesinos mazahuas. Con esta perspectiva, identifica, asimismo, algunos problemas relevantes que conducen a entender el género como una variable clave que afecta, de alguna manera, las responsabilidades institucionales en el manejo de esos recursos.

En la misma etnorregión de estudio, Laura Mota dirige su reflexión para mostrar las diversas dinámicas que sigue la etnia mazahua del Estado de México para sobrevivir en condiciones de pobreza y marginalidad. Su trabajo «Pobreza rural en el Estado de México. Situación actual y potencialidades de las comunidades indígenas, el caso de los mazahuas» hace poca referencia a los conceptos de pobreza y marginalidad, para darle mayor peso a los aspectos socioculturales que estructuran las dinámicas y resaltan el trabajo femenino en la reproducción económica y social de los grupos domésticos. Desde un enfoque etnicista, Mota destaca las organizaciones tradicionales en torno a procesos culturales y relacionales de los mazahuas como estrategias eficaces para hacer frente a sus necesidades de producción y reproducción social. Entre estos relacionamientos de parentesco y comunitarios, son analizados los lazos de solidaridad, la reciprocidad de confianza y de intercambio local, las alianzas, los ritos, las costumbres, las creencias y las festividades. En estos términos, el concepto de pobreza no se reduce al consumo de bienes y servicios, sino es ampliado en sus funciones simbólicas de reproducir la vida social según la etnia de pertenencia.

Desde el análisis de la política económica, Guillermo Montoya, Francisco Hernández y José R. Mijangos teorizan y operativizan un

modelo de interrelación de variables para medir los efectos que la inversión agregada en los sectores rurales, privada y pública, puedan tener sobre la economía. La propuesta de los autores se dirige «Hacia un cambio estructural para el desarrollo sostenido y sustentable en Chiapas». Para ello se toma como referencia un círculo virtual keynesiano, para dar cuenta de los cambios estructurales con datos e indicadores de diferentes sectores económicos (turísticos y agrícolas) en Chiapas. Así, observamos gráficamente que existen regiones como la selva, el norte, la costa y el Soconusco caracterizadas por sus agriculturas de monocultivo que dependen cada vez más de los cambios del mercado global que de las demandas internas, provocando fuertes flujos migratorios. Su propuesta de cambio estructural se enfoca a lo que ahora se llama turismo ecológico sustentable, pues demuestran con su modelo, sin descuidar la agricultura de subsistencia y de mercado, que el aprovechamiento de los recursos naturales puede generar un proceso, en el mediano y largo plazos, de crecimiento y de desarrollo.

En otro ángulo de observación, Benito Ramírez, Pedro Juárez y Gustavo Ramírez nos acercan más a la opinión de los productores de maíz para evaluar las acciones públicas del institucionalismo que promueve el desarrollo rural que a la propia evaluación de los programas. El trabajo «Opinión del campesino sobre el programa de subsidios directos a la agricultura (Procampo) en una región del estado de Puebla» muestra que desde la regionalización de la agricultura por agrosistemas se pueden obtener datos de primera mano sobre el sentir y las formas de establecer relaciones de los campesinos con el estado. Revalorar el papel del maíz en las agriculturas campesinas es un deber político que no puede dejarse en manos de las viejas estructuras burocráticas. Los autores nos acercan a un análisis cuanti-cualitativo sobre los usos que le dan los campesinos de los cinco agrosistemas a los apoyos directos del Procampo, entre los que destaca, precisamente, el recibo inoportuno o fuera de tiempo de ellos

para asegurar la producción de maíz, pues en general el desvío de los recursos se debe, en gran medida, a la incapacidad de los agentes gubernamentales en distribuir los recursos en tiempo y forma.

Si bien el maíz debe ser tratado con lentillas y replanteado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque es baluarte de la seguridad alimentaria mexicana, y por su construcción social y cultural sigue siendo el alimento de base para muchas poblaciones mexicanas, el consumo del frijol, que también formó por muchos siglos parte de esa dieta equilibrada, ha perdido su papel en el consumo alimentario mexicano, sobre todo en las poblaciones pobres. Mario del Roble realiza un diagnóstico sobre «La evolución del consumo de frijol de los pobres rurales y urbanos en México» y demuestra que, en efecto, existe una diferenciada estructura social del consumo del frijol, influida tanto por la aculturación de los patrones de consumo alimentario occidentales como por la sustitución del consumo de frijol por alimentos más baratos. Es evidente que las estrategias de subsistencia de muchos hogares pobres del México rural y urbano se rediseñan a medida que las fluctuaciones de los precios están regulados más por los mercados libres que por una política social alimentaria. El riesgo de este rediseño forzado se refleja en la pérdida de la autonomía, pero también de los saberes tradicionales sobre nuestra cultura alimentaria y otros paliativos de la vida rural.

En efecto, en este riesgo de pérdida, los saberes tradicionales sobre la medicina campesina se encuentran en un proceso de redefinición con el fin de reivindicar su papel en la reproducción social campesina, por lo que busca formar parte de la modernización rural, pese a los medios represivos que las políticas públicas de salud practican, como son la amenaza, la estigmatización y la prohibición de ciertas prácticas tradicionales. Así nos lo expresa Veronika Sieglin en su trabajo «Políticas de salud y tradición médico-herbolaria en áreas rurales de Nuevo León». Según la autora, la racionalidad científica parece que desestima más la razón que modernizar su misma razón de ser. Ba-

sándose en su experiencia en una zona rural del estado de Nuevo León, Sieglin concluye que la modernización del saber salud-enfermedad, y específicamente la reproductiva, socava la integridad de la población, pues las jóvenes son clientas de las prácticas sanitarias modernas que transgreden el orden social normativo de esas sociedades. Pero, además, las deshabilita para tener alternativas que mejoren su estado de salud, pues la pérdida de un saber no es por el remplazo de otro, ya que el estado no ha logrado instrumentar sus programas adecuadamente a todas las poblaciones. Según Sieglin, la política de modernización sanitaria emprendida por el estado ha contribuido más bien a generar una relación de dependencia de los servicios de salud pública y nuevas formas de marginación que una apertura de oportunidades para el desarrollo humano.

En el segundo apartado se agrupan catorce trabajos que transminan en organizaciones sociales, acciones educacionales, culturales y, por supuesto, en la conformación de identidades que se reivindican en su lucha por persistir pese a los embates de los nuevos capitalismos, más voraces y menos conciliadores. Lo que Pierre Bourdieu (2002) llamaba, en uno de sus últimos escritos, luchar contra la política neoliberal de despolitización y desmovilización, definida en las reuniones secretas de las grandes instituciones internacionales o en el seno de las redes de empresas multinacionales, y que aspira a otorgar un dominio irremediable del mercado sobre gobiernos y ciudadanos. Esto es lo que los diversos movimientos sociales agrarios y rurales, en México y en todo el mundo, han tratado de hacer, con un balance desigual, contra la hasta hace poco avasalladora globalización del capital, buscando la democratización de la vida económica, social, política y cultural y el respeto a la diferencia. Estos procesos sociales son, una vez más, muestra fehaciente de que no hay tal «fin de la historia», de que el peso de las estructuras no es capaz de neutralizar indefinidamente la acción grupal y de que la acción organizada de los

individuos puede convertirlos en sujetos históricos, con memoria colectiva y objetivos estratégicos.

Éste es el contexto global en el que se presentan las ponencias agrupadas en esta parte del libro, las cuales, en su mayoría, muestran los impactos de las políticas de apertura establecidas por las distintas administraciones mexicanas desde los ochenta y las respuestas de los actores en términos políticos, organizativos, culturales, sociales, educativos, ambientales e identitarios. Respuestas desiguales y germinales, pero que pueden contribuir a la formulación de una nueva utopía desde abajo.

El análisis de este problema tiene como telón de fondo, en el caso mexicano, el cambio del modelo de desarrollo desde principios de los ochenta, es decir, el radical viraje de las relaciones entre estado y sociedad, caracterizadas por un andamiaje de políticas de apoyo productivo, y, en el plano político, por una relación corporativa y clientelar, caracterizada por el intercambio de recursos materiales y simbólicos por estabilidad social, que no posibilitaba ni toleraba la existencia de organizaciones autónomas. Esta versión autoritaria del compromiso de clases fue sustituida por otra en el que se dejaba al mercado la asignación de los recursos y se despojaba al estado de su función central de regulación social y económica, lo cual se profundizó con los procesos de conformación de espacios económicos regionales, interiormente asimétricos para México, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con Estados Unidos y Canadá, que expuso la producción agrícola a una competencia desigual con las importaciones subsidiadas de Estados Unidos. Este giro en el modelo de desarrollo, en el que se han suprimido las políticas de apoyo, ha tenido como resultados la caída en la producción agropecuaria de alimentos básicos, el crecimiento explosivo de las importaciones, el descenso de los precios al productor y de los términos de intercambio, así como el incremento de la migración internacional.

Carmen Cebada, en «Condición campesina y participación social. Los campesinos guanajuatenses ante los procesos de cambio», analiza los comportamientos adoptados por segmentos de productores en varios municipios guanajuatenses diferenciados en cuanto a características productivas, demográficas y formas de inserción en el mercado, y destaca las tendencias resultantes. Primero, sectores de productores que se refugian en la condición campesina y producción simple, y en los que el ingreso salarial es fundamental; segundo, segmentos inclinados hacia una producción más empresarial, pero con fuertes contradicciones y desigualdades económicas y sociales dentro de sus ejidos; finalmente, aquellos que tienden hacia una situación de pobreza, ya que sus condiciones de producción y reproducción son muy precarias. Para los tres segmentos las remesas de los migrantes son una variable importante de sus ingresos, pero con destinos diferentes (consumo familiar, compra de terrenos, construcción de casas, uso productivo-compra de tierra, insumos, ganado, maquinaria). Finalmente, destaca que la fuerza política de los ejidos está muy debilitada, pues el comisariado ejidal ha sido sustituido por el presidente municipal en la negociación de recursos, el cual se ha fortalecido con la llegada de programas de desarrollo comunitario y contra la pobreza, lo cual es revelador del desplazamiento del apoyo gubernamental del ámbito productivo al de política social.

En su contribución «Globalización, crisis azucarera y luchas cañeras en los años noventa», Francis Mestries analiza la crisis actual de la industria azucarera y de los productores cañeros, resaltando que, por razones ideológicas y económicas, el estado, a fines de los ochenta, vendió los ingenios, principalmente a consorcios refresqueros asociados al capital extranjero, en condiciones muy ventajosas (de precios, plazos y formas de pago), pero las unidades productivas pocos años después entraron en falencia económica, de nuevo, entre otros factores, por la importación masiva de azúcar (mayormente de alta fructosa, muy barata y utilizada en la elaboración de refrescos), la contracción

del mercado interno y la saturación de los mercados internacionales. La privatización supuso, además, la desincorporación del brazo comercializador público, quedando la etapa comercial en manos del sector privado; la reestructuración laboral que buscó reducir en un tercio la planta obrera de los ingenios, eliminar prestaciones sociales y flexibilizar la mano de obra; y la búsqueda de quitar del mercado a los minifundistas y productores excedentes, estableciendo el pago en función del rendimiento individual. Esta situación desfavorable entre los cañeros, quienes no cuentan con apoyos para producir y permanecen impagos durante meses, ha hecho que establezcan, en el plano económico, varias estrategias de sobrevivencia (cultivo de frutales, venta o renta de parcelas, la migración a las maquiladoras del norte y a Estados Unidos); y en el político, además de la recurrencia a las huelgas de machetes caídos, la creación de nuevas organizaciones o fracciones gremiales, dentro o fuera de sus agrupaciones nacionales, disidencias que prosperan debido a que el estado ya no es el patrón paternalista. El autor analiza este contexto en el que se abren nuevos cauces hacia la independencia política y la democratización interna de las organizaciones cañeras, a la creación de movimientos más representativos y combativos, posibilidad que va de la mano con la tecnificación del campo y con nuevas formas asociativas para la producción, el crédito y la comercialización. Al mismo tiempo, propone una renegociación del tratado con Estados Unidos y una presión conjunta, con este objetivo, de las organizaciones representativas de todos los actores.

Álvaro Martínez, en «Movimiento social y relaciones de poder en La Frailesca, Chiapas», aborda el problema de cómo la acción organizada de los campesinos en torno a la tierra, precio y democracia ha contribuido a la desestructuración de las formas más tradicionales de poder y al proceso de construcción de ciudadanía. Hasta principios de los ochenta, la región, en la que existe una marcada pugna entre ejidatarios y pequeños propietarios, recibió un significativo apoyo

productivo gubernamental que favoreció, sobre todo, a los primeros, y le permitió a dicho espacio convertirse en el granero del estado y contener las demandas por la tierra. Posteriormente, con las políticas de ajuste, las demandas sociales tuvieron como eje mejores precios y democracia, con resultados más favorables en el plano político que en el económico, pues el movimiento social favoreció la sustitución del caciquismo tradicional por otro subordinado a la acción hegemónica del estado en el marco de la recomposición de los grupos de poder. No obstante, el cambio más significativo se registró en los noventa, cuando el campesinado, influido por el surgimiento del zapatismo, se movilizó de manera independiente, política y orgánicamente respecto al estado, y combinó la lucha político-electoral por tierra, precios, creación de nuevos municipios con tomas de tierras, para hacer surgir una visión que busca democratizar la vida política local, en medio del desgaste del corporativismo como forma de control social, del debilitamiento político del ejido —el mismo que enfrenta serias divisiones en torno a las diferentes opciones partidarias— y al control de los ingresos, principalmente de los apoyos gubernamentales.

«Procesos de identidad entre población chichimeca y otomí de Guanajuato (1856-2000)», de Jorge Uzeta, revisa algunos cambios vividos por los grupos chichimeca y otomí de la sierra gorda guanajuatense a partir de la segunda mitad del siglo XIX, planteando que el liberalismo decimonónico y la formación del estado revolucionario impactaron de manera diferente a ambos grupos, al delinear, en una misma región, perfiles políticos contrastantes. Los chichimecas se asumieron como un engranaje de la maquinaria autoritaria posrevolucionaria, buscando revertir los efectos del liberalismo decimonónico; a cambio, inhibieron los rasgos de autonomía política utilizados para intentar hacer válidos sus derechos sobre la tierra en el periodo prerrevolucionario. En tanto, los vínculos que unieron a los otomíes con el estado paliaron la notable ausencia del corporativismo

y clientelismo ejidal a través de un laxo corporativismo «popular», obteniendo resultados menos contundentes. Sin comprometer la carga histórica, emotiva y política de su identidad idéntica, que han sintetizado en símbolos religiosos y en prácticas que dan cuerpo a un complejo sistema ritual, las diecinueve comunidades congregadas son hoy entidades mucho más diversificadas en su constitución interna y, en consecuencia, están abiertamente comprometidas con la construcción de un entorno de competencia electoral, de definición de grupos de interés y de presidencias municipales estrechamente vigiladas. Por tanto, la comprensión diferencial del liberalismo y del proceso revolucionario en la sierra gorda resulta útil para matizar ideas de dominio, subordinación y resistencia, tanto como la metáfora de «desde arriba» y «desde abajo», que ofrece la perspectiva de posiciones de control y subordinación bastante fijas.

En el trabajo «Abrir mentes y corazones en la formación de los profesionistas», Gisela Landázuri sostiene que, en general, los resultados de los proyectos de desarrollo rural han sido poco positivos no sólo debido a deficiencias, ignorancia o corrupción, como comúnmente se ha dicho, sino también a la mirada sociocultural distante de los valores y costumbres indígenas con la que los profesionistas se acercan a las comunidades rurales consideradas como «objetos del desarrollo». La autora destaca la necesidad de considerar que la intersección entre los actores externos y locales se da tanto en el discurso e intervención institucional como en la búsqueda cotidiana que emprenden los actores rurales de opciones económicas y sociales para cubrir sus carencias. Por tanto, hay un campo en construcción, una arena en donde se ponen en juego las diferentes perspectivas de los actores, los conocimientos que las sustentan, sus formas de comunicación, su afán de control y los intereses y sentidos que cobran para ellos las posibles acciones en un contexto histórico específico. Esto, a su vez, requiere que los futuros profesionistas sean capacitados bajo la premisa de que el productor debe ser el actor protagónico

en el desarrollo rural, comprendiendo, respetando y contribuyendo a respetar sus prácticas de vida.

El artículo de Héctor Robles, «Educación y participación laboral de los niños en México: la evidencia de las encuestas de hogares, 1984-1996», analiza el grave problema de los niños en edad escolar que trabajan. Robles sostiene que, en las últimas décadas, el trabajo infantil en países en vías de desarrollo ha tendido a disminuir mientras que la asistencia de los niños a la escuela ha tendido a aumentar. No obstante, en México, entre 1984 y 1996, la escolaridad de los niños aumentó, pero la participación laboral no disminuyó, lo cual se explicaría por el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y porque existe una importante proporción de unidades económicas familiares intensivas en trabajo no calificado. A través del análisis de las encuestas nacionales de empleo (ENE) el autor sostiene que la participación laboral de los niños de 12 a 17 años no decrece y aumenta significativamente entre los niños rurales y que el costo de oportunidad de educarse para una porción importante de niños es muy elevado, ya que el trabajo infantil asalariado es muy significativo, representando cerca de la quinta parte de los ingresos monetarios de las familias. Los principales demandantes del trabajo infantil son las unidades económicas familiares o el mercado laboral informal. El autor concluye afirmando que existen rezagos educativos entre los niños urbanos y rurales, entre los que se dedican de manera exclusiva a estudios y los que no: la asistencia escolar no es satisfactoria y las condiciones de estudio de los jóvenes y niños que trabajan no son compatibles con su buen desempeño escolar.

«Maestros y maestras rurales en las comunidades rurales: encrucijada de caminos hacia la sustentabilidad», de Elena Lazos, basándose en la experiencia de promoción de una parcela ecológica realizada durante tres años en la Sierra de Santa Marta, zona de reserva sometida a un intenso proceso de deforestación, analiza las posibilidades de revalorizar a la escuela como agente del desarrollo rural a través

de la vinculación entre el maestro rural, los productores y alumnos primarios y que la escuela pueda convertirse en el espacio que permite plantear proyectos de educación ambiental no formal capaces de convertirse en parte de la educación formal de los niños. Los resultados son diversos, pues si bien se dieron intercambios de aprendizaje entre campesinos, maestros y niños y se desvanecieron barreras verticales de enseñanza entre los dos primeros, el proyecto fue bloqueado por discrepancias en las visiones respecto al futuro productivo de la parcela, por la ausencia de compromiso de la asociación de padres de familia y de los maestros frente a la corrupción de la mesa directiva, la falta de liderazgo a favor de la parcela escolar y la desinformación. En este contexto, los diversos intereses quedaron polarizados, sin posibilidades de mediaciones, lo cual evidencia la falta de consenso y de una cultura de negociación. Estos conflictos, aunados al contexto sociopolítico y económico de alta vulnerabilidad, son reveladores de la fragilidad de los procesos de autogestión, los cuales, en el caso analizado, requerían una mayor inversión de trabajo y de tiempo de planeación. No obstante, algunas semillas quedaron; entre ellas, la insistencia de los niños en continuar reflexionando, a través de talleres, sobre su propia problemática ambiental y la necesidad de investigar las posibilidades de incluirlos como sujetos estratégicos para sumarse a la validación social de la reserva.

Reflexionar sobre la educación bilingüe e intercultural es el propósito de José Manuel Juárez y Sonia Comboni en su trabajo «Educación y construcción de la identidad en una comunidad indígena. Los ayuuk de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca: un proyecto de desarrollo social». Los autores explican los problemas surgidos en el México posrevolucionario que ignoró los reclamos de los indígenas de respeto a su cultura e idioma, ya que se relacionó con ellos con base en una visión etnocéntrica. En este contexto, la comunidad ha formulado un plan de desarrollo sustentable, considerando a la educación como la línea estratégica para promoverlo y afirmarlo y cons-

cientes de que dicha educación debe adecuarse a sus necesidades, a su realidad social y a su entorno social. El proyecto educativo y cultural, apoyado por la Secretaría de Educación Pública y varias instituciones académicas, comprende la educación bicultural y bilingüe, no rechaza los avances de la ciencia ni de la tecnología, ni desconoce las nuevas relaciones internacionales que se dan en el mundo de la economía y de la cultura por la globalización del conocimiento, la ciencia, la cultura y la comunicación. Este proyecto muestra uno de sus primeros logros en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuuk Polivalente, el cual ha mostrado significativos frutos, pues la formación es de alta calidad, ya que la mayoría de los egresados que presentaron examen de admisión en centros de estudios superiores logró su ingreso. Sin embargo, los autores se preguntan si los jóvenes con nuevas calificaciones estarán motivados a quedarse en la comunidad o emigrarán por falta de oportunidades de empleo e ingresos.

Finalmente, el reclamo a los derechos humanos por parte de la población campesina e indígena subyace al final del tomo en dos artículos con análisis de dos categorías que continuamente olvidamos en numerosos estudios: la religión y la vejez. Miguel Hernández, por su parte, muestra, en «Del derecho al hecho hay mucho trecho: la intolerancia religiosa en las sociedades rurales», que la convergencia y divergencia de religiones en las mismas etnias depende en mucho de los conflictos políticos y agrarios de cada comunidad. El autor dirige su reflexión hacia la legitimación de un estado laico, pero también plural, que respete las libertades individuales de profesar alguna religión sin que el escenario político sea protagonista de esos conflictos. Por otro lado, el trabajo de Laureano Reyes sobre «El maltrato al viejo entre los zoques de Chiapas» recapitula la concepción clásica del idilio mesoamericano, en el que se respeta al viejo y se le da un lugar privilegiado en la estructura familiar. Laureano Reyes demuestra que, para algunos zoques, tal relación armónica no existe, sobre todo cuando las familias se encuentran en situación de profunda pobreza eco-

nómica. Más bien, los ancianos y ancianas reciben maltratos que van desde el abandono a su suerte, la humillación de la familia y de la comunidad hasta el maltrato físico. En su estudio también destacan diferenciaciones de maltrato por género, siendo las ancianas las que sufren mayor grado de desprecio y despojo de sus bienes, legitimados por las instituciones sociales. Al terminar el artículo, el autor se interroga sobre qué futuro le depara a generaciones venideras si la población envejecida mantiene su curso de crecimiento, pregunta que puede ser ampliada si le preguntamos al estado cuál es la responsabilidad institucional en el futuro de las poblaciones pobres del campo mexicano, según sea su género, etnia, raza, edad y posición en la familia. Bien vale la pena repensar las acciones sociales públicas y privadas.

BIBLIOGRAFÍA

- BOURDIEU, P., «Contra la política de despolitización», *Revista de Sociología*, núm. 13-14, UNMSM, Lima, 2002
- MAYNTZ, R., *Soziale Dynamik und Politische Steuerung. Theoretische und Methodologische Ueberlegungen*, Francfort-New York, 1997
- PRATS, J., «D.C. North: el neo-institucionalismo y la teoría del desarrollo institucional», *Colección de documentos: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya*, Barcelona, 2002

THE [illegible] OF [illegible]

[illegible text]

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS
USADOS EN ESTE TOMO

AC	asociación civil
Acll	Liga de la Ley Anticerealera
ADM	Archer Daniels Midland
Anagsa	Aseguradora Nacional Agrícola
ANPC	Asociación Nacional de Productores de Caña
ASUR	Grupo de Aeropuertos del Sureste
Banrural	Banco Nacional de Crédito Rural
BICAP	Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
Caze	Consorcio Azucarero Escorpión
CEB	comunidades eclesiales de base
Cebas	centros de educación básica para adultos
Cepal	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPED	Centro de Estudios sobre Población Empleo y Desarrollo
CESE	Centro de Estudios Sociales y Ecológicos
CICSUG	Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato
Cidem	Centro de Investigación del Estado de Michoacán
CIESAS	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Cinterfor	Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional
CNA	canasta normativa alimentaria
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNIA	Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias

CNIAA	Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica
CNOP	Confederación Nacional de Organizaciones Populares
CNPP	Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad
CNSE	canasta normativa de satisfactores esenciales
Cocp	Consejo de Capacitación Profesional
Codereg	Coordinación para el Desarrollo Regional
Conacyt	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conapo	Consejo Nacional de Población
Conet	Consejo Nacional de Enseñanza Técnica
Conocer	Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral
Coplamar	Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
CREFAL	Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina
DGAPA	Dirección General de Asuntos del Personal Académico
DIF	Desarrollo Integral de la Familia
DSS	Desarrollo Sostenido Sustentable
ENE	Encuesta Nacional de Empleo
ENIGH	Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
EPA	educación popular ambiental
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura/ Food and Agricultural Organization
FCE	Fondo de Cultura Económica
FDC	Fondo de Desarrollo Campesino
Fidamérica	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para América
Fidelist	Fideicomiso para la Liquidación al subsidio de la Tortilla
Fina	Financiera Nacional Azucarera
FIRA	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Firco	Fideicomiso de Riesgo Compartido
Fobaproa	Fondo Bancario de Protección al Ahorro

olera res	FOCC	Fideicomiso para la Organización y Capacitación Cam- pesina
	GAM	Grupo Azucarero Mexicano
	GIA	Grupo de Investigaciones Agraria
	HFCS	high fructose corn syrup
	IAF	Interamerican Foundation
	Iberfop	Programa de Cooperación Iberoamericana para el Di- seño y Formación Profesional
	ICI	Instituto de Cooperación Iberoamericana
mpe-	IDH	Índice de Desarrollo Humano
s De-	Iied	Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina
	IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
Amé-	INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
	Inacap	Instituto Nacional de Capacitación Profesional
mico	Inatec	Instituto Nacional Tecnológico
	INCA	Instituto Nacional para la Capacitación Agropecuaria
	Incca	Instituto Nacional de Capacitación Campesina
	INCE	Instituto Nacional de Cooperación Educativa
gares	Indap	Instituto de Desarrollo Agropecuario
	INEA	Instituto Nacional de Educación para Adultos
nenta- ization	INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
	Infop	Instituto Nacional de Formación Profesional
	INI	Instituto Nacional Indigenista
a Amé-	INIFAP	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí- colas y Pecuarias
	INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Tortilla	Intecap	Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
	IAP	institución de asistencia privada
cultura	ISEI	Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática
	Laige	Laboratorio de Información Geográfica
	LFA	Ley de Fomento Agropecuario

LICAS	Líneas de Investigación y Capacitación para el Aprendizaje Significativo
Liconsa	Programa de Abasto Social de Leche
LP	línea de la pobreza
MIP	medición integrada de la pobreza
NAFTA	North American Free Trade Agreement
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
Ocvi	Organización Campesina de Villacorzo
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONG	organización no gubernamental
Orca	Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Pátzcuaro
PAN	Partido Acción Nacional
Pasaf	Programa de Asistencia Social a Familias
PDAT	Proyecto de Desarrollo de Áreas de Temporal
PE	política económica
PEA	población económicamente activa
PEAT	Programa Elemental de Asistencia Técnica
PET	Programa de Empleo Temporal
PIB	producto interno bruto
Pider	Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural
Pmetyc	Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PRCDR	Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Procampo	Programa de Apoyos Directos al Campo
Procede	Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares

Progresa	Programa de Educación, Salud y Alimentación
Pronadri	Programa Nacional para el Desarrollo Rural Integral
Pronasol	Programa Nacional de Solidaridad.
REPEC	Red de Educación Popular y Ecología para América Latina y el Caribe
RIMISP	Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción
RLC	Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Sagar	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
SARH	Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secap	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
Secofi	Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Sedesol	Secretaría de Desarrollo Social
Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje
Senac	Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial
Senai	Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
Senar	Servicio Nacional de Aprendizaje Rural
Senati	Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
Sence	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Sencico	Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
SEP	Secretaría de Educación Pública
Sincri	Sistema Nacional de Capacitación Rural Integral
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNIAASRM	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, Alcohólica y Similares de la República Mexicana
TLC	Tratado de Libre Comercio
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Uach	Universidad Autónoma de Chapingo
UAIM	Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer

UANL	Universidad Autónoma de Nuevo León
UCISVER	Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda del Estado de Veracruz
UGOCEM	Unión General de Obreros y Campesinos del Estado de México
UGOCP	Unión General de Obreros y Campesinos Popular
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
Unión	Unión de Ejidos Irapuato
UNPASA	Unión Nacional de Productores de Azúcar, s.A.
Unpca	National Union of Sugarcane Growers
Upromaíz	Unión de Productores de Maíz
UT	Universidad del Trabajo

POSIBILIDADES DE UNA VIDA DE CALIDAD
EN EL ENTORNO DE LA POBREZA RURAL
Notas para estudiar la relación entre
pobreza y políticas sociales

RENATO JAVIER MARTÍNEZ HUERTA
VÍCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ CRUZ

I. LA IDEA DE LOGROS SOCIALES.

CONSIDERACIONES AL CONCEPTO CALIDAD DE VIDA

Para comenzar esta exposición, queremos señalar la manera en que nos vamos a referir al concepto *calidad de vida*. Y para ello tomaremos en cuenta dos aspectos que consideramos son los más relevantes en relación con la problemática abordada en esta mesa de trabajo. En pocas palabras, la primera consiste en la idea de que, dado que el principal obstáculo para el desarrollo de las sociedades es la pobreza, su superación consiste en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas, de modo que el concepto denota una motivación, la de una búsqueda en un futuro muy cercano de lo valioso de la vida, lo cual está sustentado en principios éticos de tipo universales respecto a la condición humana, de tal suerte que los seres humanos tenemos derechos básicos por medio de los cuales podemos aspirar a vivir sin el riesgo de morirnos de hambre, sin los peligros de no tener algún tipo de asistencia médica o sin las limitaciones que implica el no saber leer y escribir. Por otro lado, en una segunda manifestación de este concepto, que se fue acuñando con el enfoque conocido como el estudio de las necesidades básicas, la idea de una vida de calidad se refiere al conjunto de bienes de los que

puede disponer una persona o una sociedad, a partir no sólo de los derechos que tiene sino de las oportunidades que se le presentan y que son construidas socialmente. Ambas características no son excluyentes entre sí, así que la idea de calidad de vida que queremos compartir es la que nos ofrece evidencias de un perfil del modo en que la sociedad ha alcanzado una serie de logros. Logros que desde la perspectiva sociocultural tienen que reconocer la valía de la vida comunitaria, de la integración social y de los lazos de solidaridad que se traban entre las personas, dado que es a partir de éstos que se resuelven los problemas que les permiten a sus habitantes gozar de algún tipo de bienestar. Por estos motivos podemos decir que con el concepto calidad de vida no se trata de validar una idea en particular acerca de lo que es, o sería, una buena vida, sino de poner atención en los modos en que la población ha podido superar a la pobreza¹, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas calificadas. En suma, si el estudio de la calidad de vida se convirtiera en una manera de abordar a la pobreza, los logros obtenidos en materia del bienestar serían tratados como una conquista social y no como la consecuencia evidente de vivir en la pobreza. Por lo tanto, los estados de pobreza constituyen el tejido donde se plasman los obstáculos que son cotidianamente superados.

Si nos preguntamos sobre la capacidad de los pobres para superar sus problemas, necesariamente tenemos que pensar que la principal limitante es la polarizada distribución del ingreso y la inequitativa distribución de la riqueza, pero a pesar de esta circunstancia estructural se puede asegurar que vivir bien no depende únicamente de este factor; implica una complejidad de asuntos que abarcan diferentes facetas de la vida en sociedad, como la política que nos ubica en una

¹ De acuerdo con la perspectiva de estudio de la calidad de vida, referirse a la valía de la vida en sociedad implica abordar el estudio de la interrelación entre: a) las transformaciones operadas en el medio ambiente; b) el análisis de los cambios en la organización política, económica y social, y c) los deseos y aspiraciones para satisfacer las necesidades.

jerarquía de relaciones de poder; la del acceso a la infraestructura pública; la del desarrollo, en lo individual, de ciertas destrezas, etcétera. En atención a una de ellas, la que nos revela el contenido social de la problemática de gozar de una vida de calidad, podemos decir que uno de los saldos negativos de la pobreza es la herencia de una serie de prejuicios en contra de la condición de ser pobre. Prejuicios que si bien en algunos casos son un incentivo para superar este estado, inciden de manera negativa para la convivencia social, toda vez que reproducen el no reconocimiento del otro, a veces subrayando las incapacidades de los pobres y otras simplemente negando los derechos propios de la condición humana.

Revelar el contenido social de la superación de la pobreza significa apoyarnos en el concepto calidad de vida para mirar de cerca la lucha que se libra en contra de lo que le da sustento a estos prejuicios y reconocer que son los habitantes pobres los que afrontan estas luchas. Así que en lugar de plantearnos la utopía de la convivencia en armonía de todos los miembros de la sociedad, es ya una obligación, para todos los involucrados en el esfuerzo de aprender a recobrar lo más básico de la condición humana, identificar y defender los derechos que todos los individuos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Cuando la actuación de los gobiernos se pone en relación con estas luchas, evidentemente se está poniendo a prueba la responsabilidad de los funcionarios públicos, pues, desde el punto de vista ético, la obligación por reconocer este tipo de derechos plantea el reto a los estados-nacionales de que ya no se le pueden negar los servicios básicos de asistencia y seguridad social a ningún ser humano, aunque los gobiernos todavía los condicionan a un intercambio político «utilitarista» cuando se comercia este tipo de bienes y servicios por votos, negándole al individuo su condición de sujeto de derechos, y no sólo eso, sino limitándole la posibilidad de desarrollar sus capacidades como actor social, es decir, como protagonista de su propio destino.

2. LA POBREZA RURAL EN LA PERSPECTIVA DE LA CALIDAD DE VIDA

En el marco de esta reflexión, queremos hacer algunos señalamientos a la manera como se concibe a la pobreza rural cuando se persigue la meta de elevar los niveles de bienestar y de promover los logros sociales considerando la incidencia de las políticas sociales en este proceso. Visto así, la población que vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el reconocimiento que han hecho los organismos internacionales que aseguran que todo ser humano debe ser concebido como un capital humano, de modo que mantener o elevar los niveles de vida implica que los individuos sean capaces de superar los problemas a través del desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas (que aprenden y ponen en práctica en la vida cotidiana), de modo que darle satisfacción a las necesidades básicas convierte al pobre en una persona cuya condición dependerá de las oportunidades que pueda tener para cumplir con esa meta. Si seguimos esta línea de pensamiento para el caso de la pobreza rural, tenemos que reconocer el papel del territorio en la delimitación del fenómeno, como sugieren algunos autores (Torres, 2000); por lo tanto, hay que distinguir entre las capacidades que desarrolla el sujeto respecto de su inserción en un territorio en particular, lo cual es relevante en el caso de México por el gran número de localidades pequeñas que están dispersas en un vasto territorio, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tamaño de la localidad	Total
Hasta 99	55,975
100-999	41,897
1,000-2,499	5,051
2,500-4,499	1,455
5,000-14,999	889
15,000-49,999	313
50,000-299,999	118
300,000-999,999	44
1,000,000 o más	7
Total	105,749*

* De un total de 198,430 localidades registradas en el Catálogo de Integración Territorial 1995, se excluyen 94,288, que corresponden a localidades que tienen una o dos viviendas habitadas, y a 113 que sólo tienen viviendas colectivas. En ese tipo de localidades habitan, en total, 585,944 personas. Pero se suman 1,720 localidades de 15 municipios de Chiapas no considerados en el Censo '95, con una población de 554,106 personas.

Tenemos así que, de un total de 105,749 localidades (según la distribución de localidades con más de dos viviendas en 1995²), el 53% corresponde a localidades de menos de 100 habitantes, y el 92.6% a localidades menores de 1000 habitantes, distribuidos en la mayor parte del territorio nacional, con las siguientes características evidenciadas por Conapo:

Rango-tamaño	Número de localidades	Localidades dentro del área de influencia urbana	Localidades cerca de una carretera	Localidades aisladas
Menos de tres viviendas	87,352	29,718	26,829	30,805
Menos de 100 habitantes	51,622	15,587	15,393	20,642
De 100 a 499 habitantes	30,908	10,698	7,980	12,230
Total	169,882	56,003	50,202	63,677

Fuente: Conapo, 1998: 35

El elemento a destacar es que cualquier aspiración de bienestar no se puede separar de las condiciones de las que depende, es decir, llegar a logros en materia de bienestar también incluye el acceso a la infraestructura pública y social dispuesta en el territorio, misma que se asocia a los lugares de concentración demográfica, dejando a las localidades pequeñas sin este tipo de beneficios por lo difícil que resulta aprovechar las economías de escala de los servicios básicos. Además, ante la escasez de los recursos, las razones de costo-beneficio económico obligan a los gobiernos a ponerlos a disposición del mayor número posible de personas, dirigiéndolos bajo la conocida estrategia de focalización, que teóricamente no es sino concentrar el gasto público social en los grupos más vulnerables mediante programas dirigidos a comunidades específicas previamente evaluadas. Situación problemática, si se toma en cuenta que el 80% de las

² INEGI, XI Censo de Población y Vivienda, 1990; INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1995

localidades menores de 500 habitantes tienen un grado de marginación alto (21%) o muy alto (59%), lo que afecta a casi 7 millones de personas (6'991,469)³. Es necesario agregar que, de las 100 localidades con mayor grado de marginación, 94 son predominantemente indígenas y se ubican en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Nayarit, Puebla y Chihuahua.

Las consecuencias inmediatas de localidades pequeñas y dispersas revelan otras condicionantes que definen a la pobreza rural, asociadas básicamente con tres aspectos, a saber:

- i. Las limitaciones regionales en materia de infraestructura, acumuladas en el tiempo, que en muchos casos anulan la posibilidad de implementación de políticas de asistencia social;
- ii. Los saldos negativos de la producción agropecuaria, centradas en aspectos que tienen que ver con:
 - a) el acceso a la tierra
 - b) el otorgamiento de crédito para la producción
 - c) la comercialización de los productos
 - d) el acceso a los servicios básicos para lograr una alimentación adecuada, estados óptimos de salud, y una instrucción apropiada para superar las consecuencias de los rezagos existentes, sin hacer de lado la disposición de energía eléctrica y agua potable como aspectos inherentes de los satisfactores básicos.
- iii. Las agresiones hacia las formas de vida rurales, que van desde una constante asimilación y transformación de las identidades

³ «La asociación del tamaño de las localidades con la incidencia de la marginación también se constata en el hecho de que de las 113,885 localidades que se encuentran fuera de la influencia de las ciudades, 67% son pequeñas. De ellas, las ubicadas a menos de tres kilómetros de la carretera principal, 53% tenían menos de tres viviendas (26,829), 31% menos de 100 habitantes (15,393) y las restantes, 7,980, esto es, 16% entre 100 y 499 personas (...). En las 23 mil localidades habitadas cercanas a las carreteras viven 2.4 millones de personas, de ellas, 72% tienen un alto o muy alto grado de marginación (45% muy alto y 27% alto). Y ahí viven 1.7 millones de personas» (Conapo, 1998: 33).

de estas poblaciones hasta la sistemática violación de sus derechos más fundamentales. En el primer polo mencionado, los cambios se dirigen, de manera paulatina, hacia modos de ser globales, transculturalmente afectados, que los subordina a formas de vida megalopolitanos, y cuyo proceso redundará en un franco deterioro de los valores de la vida rural, mientras que en el segundo polo de la asimilación y transformación de las identidades rurales de lo que se está hablando es del exterminio de estas poblaciones por medios violentos.

Bajo estas consideraciones, recapacitar en la población rural como un capital humano nos permite ubicar el panorama de 24.6 millones de personas⁴, cuya idea de las posibilidades de vivir una vida de calidad, a pesar de tratarse de poblaciones diversas en muchos sentidos, está sujeta a un ritmo de crecimiento demográfico que tiene como escenario más probable el siguiente:

Ante un panorama que plantea que la población del país se duplicará en un periodo aproximado de 45 años, los niños que nazcan en las zonas rurales (localidades menores de 2,500 habitantes) alcanzarán a vivir 68 años. Comparado en el contexto internacional, esto significa que vivirán más de 19 años que si nacieran en Angola, pero menos de 12 si nacieran en Canadá. En el contexto nacional quiere decir que vivirán 7 años menos si nacieran en Oaxaca y no en el Distrito Federal. Desde el punto de vista del crecimiento de la población, las mujeres que hoy nacen en las zonas rurales marginadas, de acuerdo con las tendencias de fecundidad, muy probablemente tendrán en promedio 4 hijos, y también es muy probable que sus alumbramientos serán atendidos por personas sin una capacitación adecuada, y aunque la infraestructura educativa será suficiente para cubrir la demanda de los niños en edades de 6 a 15 años, es muy probable que éstos desertarán de sus estudios de primaria para formar parte en las labores domésticas y

⁴ Cifras definitivas del XII censo del año 2000

productivas en general, ante las circunstancias que en estas zonas convierten al hogar en una unidad de producción de familias incompletas debido a los flujos migratorios. Para ubicar en la realidad nacional este cuadro, diremos que el 52.7% de las localidades se ubican en el grupo de alta marginación y todas ellas son rurales. Estos datos coinciden con los del estudio de Boltvinik y Hernández, quienes aseguran que del total de pobres extremos, el 52.82% está ubicado en las zonas rurales, y que del total de la población rural los pobres representan el 85%, y los muy pobres el 61.8%, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Distribución geográfica de la población de cada estrato por tipo de localidad (MMIP)

	Nacional	Total urbano	Total rural	Nacional	Total urbano	Total rural
<i>Pobres extremos</i>	100.00	47.18	52.82	44.7	34.1	61.8
Indigentes	100.00	40.65	59.35	29.4	19.3	45.7
Muy pobres	100.00	59.72	40.28	15.3	14.8	16.1
<i>Pobres moderados</i>	100.00	65.85	34.15	25.9	27.6	23.1
<i>Total de pobres</i>	100.00	54.03	45.97	70.6	61.7	85.0
No pobres	100.00	80.50	19.50	29.4	38.3	15.0
Población total	100.00	61.82	38.18	100.00	100.00	100.00

% del total nacional por estrato

Fuente: Boltvinik y Hernández, 1999: 194, 197

El perfil de la pobreza rural se puede completar con los siguientes datos obtenidos del INEGI:

- De acuerdo con la ENIGH de 1998, el 50% de los hogares en localidades de menos de 2,500 habitantes gana hasta 2 salarios mínimos, ingresos con los que se estima que no llegan a cubrir ni la mitad de sus requerimientos básicos (vivienda, educación, alimentación y salud)⁵, ya que el 80% de su gasto se distribuye en alimentación, vestido y vivienda, de modo que con el 20% res-

⁵ De la distribución del ingreso por deciles de población, en 1998 el 40% más pobre concentraba el 10.7%; el 50% intermedio, el 49.1%; y el 10% más rico, el 40.2%.

tante tiene que cubrir gastos en transporte, educación, salud, etcétera.

- ii. En atención a lo que se refiere a la alimentación, se estima que aproximadamente el 75% de la población rural no consume regularmente carne ni leche. El 30% más pobre de las localidades menores de 2,500 habitantes alcanza a consumir sólo 12% de proteínas de origen animal. Y la desnutrición en menores de 5 años en el área rural es de 38.5%, pero con presencia de grupos indígenas es de 45.2%, y se eleva hasta 58.3% cuando las comunidades sólo son indígenas (Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural, 1996).
- iii. El analfabetismo cubre al 22% de la población de 15 años o más, y el 30% de este universo no ha concluido los estudios de primaria⁶.
- iv. Por lo que hace al acceso de servicios en la vivienda, el 27% de los ocupantes de las viviendas no tiene excusado, el 17% no cuenta con energía eléctrica y el 35% no tiene agua entubada.

La situación que se alcanza a observar con estos indicadores nos puede dar a entender que la pobreza rural se define por las condiciones de vida, y que éstas surgen como parte de las actividades agrícolas y ganaderas, pero también por el aislamiento territorial y sociocultural. Aislamiento que, al ser inherente de las actividades rurales, se ha visto acentuado socioculturalmente mediante un rechazo a los modos de vida rural por muy diversas causas; como ejemplo se puede mencionar que, en la actualidad, la idea de modernidad se opone a lo rural, porque en la primera predomina la diseminación de tipos de conocimiento científico y tecnológico que no son propios del medio rural o que se cree que no alcanzarían a entender los habitantes de las localidades rurales.

⁶ El promedio nacional indica que el 11% de la población de 15 años o más es analfabeta y que el 24% de este universo no concluyó la primaria.

Curiosamente, en contraste con el desarrollo de las comunicaciones, se puede asegurar que todavía existe un aislamiento de las localidades rurales, sobre todo de las más pequeñas.

3. LA PERSPECTIVA DE ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA

Los datos antes mencionados no los describimos porque queremos cumplir con una especie de «requisito de objetividad», mediante el cual se tienen que enunciar evidencias acerca de lo que se está diciendo. La orientación que deseamos cumplir con esto, además de saldar el requisito, es la de poner sobre la mesa una de las características de la perspectiva de estudio de la calidad de vida, pues, al exigirnos precisión en el estudio de la satisfacción de las necesidades, hemos ido descubriendo que hay una serie de aspectos que por obvios no son motivo de una atención adecuada. En este sentido, cuando se valora la vida en los estudios que buscan abrir posibilidades hacia un desarrollo social o hacia un crecimiento económico, se obvian aspectos —sociales, sobre todo— que no sólo tienen que ver con los prejuicios que nos condicionan la percepción de lo observado sino con los procesos de reproducción social que le dan forma a la vida en sus aspectos más cotidianos, como los que condicionan el tamaño de las familias, los que determinan la calidad de la producción y del consumo e incluso aquellos que nos indican cómo gozar del esparcimiento y la diversión, cada vez más pegada a un televisor. De modo que con los indicadores antes mencionados pretendemos hacer evidentes una serie de aspectos de los procesos de reproducción social que no se nos presentan claramente. Dicho de otro modo, la perspectiva de estudio de la calidad de vida, en atención al proceso de satisfacción de las necesidades básicas, lo que nos ofrece es una síntesis del estado alcanzado por logros sociales que por estar inscritos en las inercias sociales no se presentan como objetos propios de las luchas

políticas en los términos en que conocemos a los movimientos sociales, sino como el resultado de un proceso oculto, latente, pero cotidianamente permanente, en contra de los obstáculos que tejen las condiciones de pobreza. Por esta razón, la perspectiva de estudio de la calidad de vida centra su atención en las condiciones de vida, pero también en los modos en que se desempeña la vida en sociedad y en los deseos y aspiraciones socialmente construidos.

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTENIDO SOCIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Para vincular el asunto de las posibilidades de gozar una vida de calidad en el entorno de la pobreza rural es indispensable tomar en cuenta el ámbito de las políticas sociales, toda vez que es uno de los instrumentos que promueven los estados nacionales para «corregir» la desigualdad promovida por las fuerzas del mercado, de manera que se pueda proporcionar un mínimo de asistencia y seguridad social a la población.

Hemos mencionado que, estructuralmente, la equidad es un problema que depende de la distribución del ingreso y la riqueza, y resulta evidente que su polarización tiende cada vez más a agravar la situación de los pobres. Ante esto, los lineamientos propuestos por los organismos internacionales han convertido a las políticas sociales en un medio que para incidir positivamente en el desarrollo de las capacidades y habilidades de los recursos humanos, de manera exitosa con medios escasos, indican que deben implementarse bajo la modalidad de la focalización. Sin embargo, la focalización ha planteado una serie de problemas que deben ser abordados para cumplir con el objetivo propuesto. Mencionaremos sólo tres de estas dificultades:

1. La viabilidad de las políticas sociales focalizadas es muy limitada, ya que depende de una amplia gama de servicios sociales

básicos con los que tienen que interactuar, los cuales son puestos en funcionamiento por diversas instituciones, empresas y grupos sociales en general en donde no sólo se encuentran las ONG sino diferentes tipos de asociaciones, como los clubes sociales, por ejemplo. De modo que los lazos gubernamentales tienen que extenderse hasta esos ámbitos.

2. Éticamente, no hay una razón de peso para que los pobres sean los únicos que pueden beneficiarse de las políticas de asistencia y seguridad social, y no sólo por ética, pues si atendemos las condiciones estructurales, hay que tomar en cuenta que los cambios sociales requieren de coaliciones políticas amplias que incluyan la heterogeneidad social, como lo han demostrado los movimientos sociales más recientes.
3. En la medida en que se trata de acciones muy particulares, la focalización de las políticas requieren de un excelente diagnóstico de la naturaleza, profundidad e intensidad de la pobreza en cada región. Situación que no sólo hace costoso el diseño de la política sino que tiene que ver con la debilidad de su ejecución cuando se trata de un fenómeno generalizado.

En lo que compete a la pobreza rural, avanzar en esta situación implica, en primer lugar, decidirse a resolver de una vez el problema de la exclusión social, en cuanto a acciones categóricas en materia de reformas institucionales de tipo, calidad y costo en las prestaciones de los servicios vigentes. Se deriva de lo anterior la necesidad de acotar a la política en función de sus propósitos particulares, de tal modo que las acciones no abarquen a la pobreza rural en general sino a la pobreza de un municipio en particular, o a la pobreza alimentaria de los indígenas de Guerrero, por ejemplo. Las personas que lleven a cabo estas acciones tienen que ser sujetas a una valoración ética en cuanto al ejercicio responsable de sus funciones, lo cual todavía resulta difícil de encontrar en los funcionarios públicos. Por lo que

hace al aspecto de quiénes deben ser incluidos en estos beneficios, es conveniente prever los efectos de dichas políticas y en particular las consecuencias de los sectores cercanos a la población que se espera beneficiar, por su vulnerabilidad, pero también por su papel sociocultural respecto de la población objeto, ya que el resultado puede ser generar conflictos sociales. Pero lo que consideramos más importante, de acuerdo con la perspectiva de estudio de la calidad de vida, es que los analistas y el gobierno deben tener claro cuál es el contenido social de las acciones a favor de la asistencia y la seguridad social, a través del conocimiento de la población, de su estructura y dinámica, de sus modos de vida y de sus expectativas, de tal modo que se puedan realizar acciones en esta materia que por fin incidan en los ciclos de vida de la población, en el umbral de vida socialmente productiva y en los múltiples significados que la seguridad social asume, dependiendo de las formas de vida de cada región.

Una vez apuntadas las anteriores consideraciones, queremos terminar subrayando el hecho de que aún nos queda mucho por aprender de las comunidades rurales y de la población en general, de tal suerte que si deseamos que los beneficios lleguen a estas localidades, si queremos mejorar la calidad de los servicios en busca de una equidad social, o simplemente que haya una cobertura menos desigual en los servicios y bienes a los que tiene derecho cualquier ser humano, la producción y la gestión de los servicios sociales ya no pueden ignorar las condiciones, los modos y las expectativas de vida que socioculturalmente se construyen en espacios y momentos específicos de la sociedad, y la racionalidad administrativa debe convivir con la comprensión y significatividad de las formas de vida, pues la intensidad de la pobreza se revela en un ámbito complejo, que es el de la existencia humana.

BIBLIOGRAFÍA

- BOLTVINIK, Julio, y E. Laos Hernández, *Pobreza y distribución del ingreso en México*, Siglo XXI Editores, México, 1999
- CARPIO, Jorge, y I. Novacovsky, comp., *De igual a igual. El desafío del estado ante los nuevos problemas sociales*, FCE/Flacso/Siempro, Buenos Aires, 1999
- Conapo-Progresa, *Índices de marginación, 1995*, Conapo/Progresa, México, 1998
- INEGI, *Catálogo para la integración territorial 1995*, INEGI, México, 1998
- _____, *Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 1998*, INEGI, México, 2000
- Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, *Encuesta nacional de alimentación y nutrición en el medio rural, 1996*, INNSZ/Sedesol/DIF/SSA/Gobiernos de los Estados/IMSS/INI/Unicef, México, 1997
- ORDORICA, M., «El habitante 6 mil millones nacerá en México en 1999 y será una niña», en *Este País*, núm. 80, nov, 1997
- TORRES SALCIDO, G., «El diseño y la gestión de las políticas alimentarias en el campo mexicano», en Rolando Cordera y Alicia Ziccardi (comps.), *Las políticas sociales de México al fin del milenio. Descentralización, diseño y gestión*, Miguel Ángel Porrúa/IIIS-Coordinación de Humanidades-Facultad de Economía-UNAM, México, 2000

EVALUACIÓN DEL PROGRESA

VERÓNICA VILLARESPE REYES⁷

I. NEOLIBERALISMO Y POBREZA

Durante el siglo XIX, los principios de la libertad individual, las restricciones del gobierno para participar en la esfera económica, la confianza en las instituciones de la sociedad civil y el libre mercado para el orden social y la prosperidad económica se fundieron en una poderosa síntesis conocida como liberalismo. La Escuela de Manchester se refirió, en un principio, al movimiento del libre comercio en el siglo XIX en Gran Bretaña, que tuvo sus orígenes en la Liga de la Ley Anticerealera (Acll), fundada en 1836, y que tenía sus oficinas en Manchester, de allí su nombre⁸. La Escuela de Manchester se identificaba con el liberalismo radical en política económica, es decir, con el libre cambio, con el «dejar hacer», con la retirada del estado de la esfera económica y con la importancia prioritaria del libre mercado y de la libre empresa⁹. Posteriormente, fue en la Segunda Escuela de Chicago, donde los postulados de Manchester se desarrollaron y actualizaron, tomando características propias: el antiguo liberalismo se fue convirtiendo en nuevo, es decir, en neoliberalismo.

⁷ Doctora en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Economía de la UNAM.

⁸ Véase Verónica Villarespe, *Solidaridad en el contexto de las políticas de mercado. El caso mexicano*, capítulo 3, tesis doctoral, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, 2000.

⁹ Manchester School Liberalism («Classical Liberalism»), <http://cepa.newschool.edu/~het/schools/manchester.htm>, p. 1. Los guías espirituales de esta escuela fueron el francés Frédéric Bastiat (1801-1850) y el estadounidense Henry C. Carey (1793-1879).

La Segunda Escuela de Chicago se inició en la década de 1960, encabezada por George J. Stigler (1911-1991) y por Milton Friedman (1912-?) y se caracterizó por adherirse fielmente a la economía neoclásica y por mantenerse en contra del concepto del fracaso de los mercados. Ésta es la Escuela de Chicago que ha sido frecuentemente acusada de ser la versión moderna de la Escuela de Manchester, es decir, de mantener la tradición radical más conservadora. La preservación del paradigma neoclásico se extendía a lo concebido por los economistas de Chicago, como, por ejemplo, a la teoría del «capital humano», a los derechos de la propiedad y a la teoría de los costos de transacción.

Por ser de interés con nuestro tema, aquí trataremos la concepción de Milton Friedman sobre la pobreza. De acuerdo con este teórico, la filosofía liberal cree en la libertad que tiene cada individuo de aprovechar al máximo su capacidad y sus oportunidades de acuerdo con sus propias preferencias, siempre que no interfiera con la libertad de los otros que hacen lo mismo; en este sentido, la caridad privada ejemplifica el uso adecuado de la libertad, en tanto que «los esfuerzos estatales sustituyen la acción voluntaria por la obligatoria». Para esta filosofía, una consecuencia agradable de la sociedad «libre» es que tiende a producir una «mayor igualdad material que ninguna otra sociedad de las que ha habido», en contraposición al igualitario, que sobre la base de la justicia «querrá quitarles a unos para dárselo a otros». La igualdad entra así en un grave conflicto con la libertad y hay que elegir, afirma Friedman: «no puede uno ser al mismo tiempo igualitario y liberal»¹⁰.

«El extraordinario crecimiento económico que han experimentado los países occidentales en los últimos dos siglos y la amplia distribución de los beneficios de la libre empresa han reducido enormemente la pobreza existente en los países capitalistas de Occidente...»¹¹, dice

¹⁰ *Ibidem*, p. 248

¹¹ Milton Friedman, *Capitalismo y libertad*, Ediciones Rialp, Madrid, 1966, p. 242

Friedman. De acuerdo con su defensa de la «libertad», plantea que el recurso más conveniente para la «eliminación» de la pobreza es la caridad, en tanto que ésta es voluntaria y no obligatoria. Aunque pudiera aceptar, dice, la acción del estado en dicha eliminación para establecer un mínimo en el nivel de vida de cada miembro de la sociedad, estaría a discusión «cuánto y cómo hacerlo»: a) si el objetivo es el alivio de la pobreza, se debe tener un programa encaminado a ayudar al pobre («ayudar a la gente como gente»); y b) dicho programa «no debería deformar el mercado o impedir su funcionamiento, si es que ha de establecerse a través del mercado»¹².

Las palabras de Friedman «ayudar a la gente como gente» recuerdan las del jurista Matthew Hale (1609-1676) en *A Discourse Touching the Provision for the Poor* (publicado en 1683): «La obligación de socorrer a los pobres es un acto de gran piedad hacia Dios omnipotente, quien requiere esto de nosotros: él ha dejado a los pobres como sus pupilos y a los ricos como sus administradores para proveerlos. Es uno de aquellos grandes tributos que él justamente requiere del resto del género humano, que por supuesto los pobres no le pueden pagar; él ha esparcido a los pobres entre el resto de la humanidad como sus suplentes y receptores. Es un gran acto de la mayor humanidad entre los hombres. Piedad y bondad son obligadas a las bestias que nos sirven, mucho más a aquellos que son participantes de la misma naturaleza común que nosotros»¹³.

La ayuda a los pobres será más útil si se da en «metálico», pues ello establece «claramente» lo que le cuesta a la sociedad, afirma Friedman. Propone graduar tanto la escala de subsidios como la de impuestos, por encima de la exención, con el objeto de establecer un mínimo debajo del que no pudiera encontrarse el ingreso de ningún miembro de la sociedad, después de incluir el subsidio. Ese mínimo, a

¹² *Ibidem*, p. 243

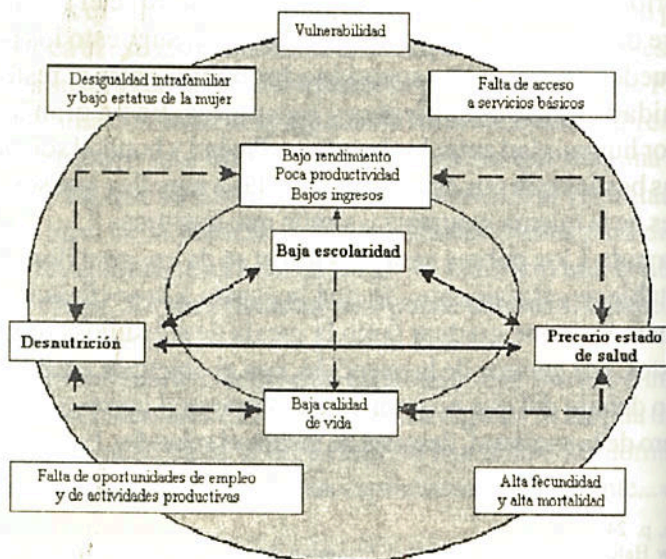
¹³ Matthew Hale, *A Discourse Touching Provision for the Poor*, consúltese la dirección electrónica: <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/hale/poor>

su vez, dependería de la capacidad de financiación de la sociedad; en otras palabras, se establecerá claramente lo que le cuesta a la sociedad la ayuda a los pobres. En este contexto se inscribiría el actual programa contra la pobreza que opera en México, el Progresá (anexo 1).

2. EL PROGRESA Y LA CONVERSIÓN DEL CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Progresá otorga recursos monetarios a las familias suponiendo que, como la pobreza se hereda, se rompe así el círculo vicioso de la pobreza (véase figura 1) y ésta no será ya reproducida generacionalmente. Se parte de un enfoque integral, en el que a mayor nivel de educación el uso de los servicios de salud mejora, favoreciendo la higiene y la

Figura 1
Pasarse de un círculo vicioso de la pobreza a círculos virtuosos de combate a la pobreza
Círculo vicioso de la pobreza



Fuente: <http://www.sedesol.gob.mx/progresá/texto.htm>

prevención, la salud infantil y juvenil incide en un mayor y mejor rendimiento escolar y un mejor estado nutricional coadyuva a desarrollar las capacidades de las personas. Estos factores se imbrican entre sí en el Progresá y a un largo plazo la hipótesis oficial es de que se cancele el círculo vicioso de la pobreza, pasando o convirtiéndose en círculos virtuosos de combate a la pobreza.

En una óptica meramente subjetiva e individualista, se afirma que «la superación de los factores que dan lugar y perpetúan la condición de pobreza depende fundamentalmente de la activa corresponsabilidad de las familias beneficiarias y sus comunidades»¹⁴. Además, se ha argumentado que el programa no desalienta la autoayuda, y en ese sentido se establecen los tabuladores. Aquí encontramos en el fondo la vieja discusión que se dio en Inglaterra, en los siglos xvii y xviii, acerca de si la ayuda a los pobres desalentaba su interés por ser empleados, por trabajar, como si el ser empleado, el trabajar, dependiera de ellos y no de condiciones externas y ajenas a ellos. En este sentido, el debate se centraba en cuáles pobres eran meritorios de la ayuda y cuáles no, cuáles querían trabajar y no podían y cuáles podían trabajar y no querían hacerlo: en esto consistía quiénes eran los pobres dignos y cuáles los indignos.

El coordinador nacional del Progresá declaró en 2001 (el 30 de mayo, en *La Jornada*) que el programa no es asistencialista, sino un «instrumento de política social de inversión en capital humano»¹⁵. Así, en relación con el pasado, ahora, dentro del más puro lenguaje neoliberal, se presenta una diferencia sustancial que parece de forma, pero es significativa de contenido: los pobres ya no son pobres, ahora son «capital humano».

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este capital humano se clasifica junto con otros dos tipos de activos, el capital físico (privado y público) y el capital social. Los «activos»

¹⁴ <http://www.sedesol.gob.mx/progresá/texto.htm>, p. 8

¹⁵ *Ibidem*

generan ingresos o bienestar, dependiendo de los mercados y del comportamiento de los agentes económicos. El razonamiento es el siguiente y nos lleva de nueva cuenta a los círculos virtuosos o a los viciosos. La combinación de los mercados y del comportamiento de los agentes económicos definirá los recursos que se obtienen por poseer los activos; a su vez, los ingresos y los satisfactores que producen bienestar determinan la decisión de invertir y adquirir nuevos activos. Esto es lo que origina círculos virtuosos o círculos viciosos; dicha circularidad, entonces, abre «un nuevo espacio de acción para las políticas públicas para la eliminación permanente de la pobreza», afirma el estudio del BID.

3. RIQUEZA Y POBREZA

Ser pobre significa carecer de los recursos necesarios para tener un nivel de vida satisfactorio en una sociedad, es una condición que impide a los individuos no privilegiados y a sus familias satisfacer sus necesidades básicas o participar de lleno en la sociedad, y es una condición que se transmite, que se hereda.

Además, como escribió Amartya Sen, «la pobreza es un fenómeno socioeconómico que tiene amplios efectos en la sociedad como un todo: el crecimiento y composición de la población; su salud y el nivel de cultura; patrones de asentamiento y migración; desarrollo económico; estabilidad política y asuntos del medio ambiente». La pobreza afecta, pues, todas las regiones del mundo en sus diversas facetas y dimensiones. Las magnitudes políticas, sociales, económicas y culturales de la pobreza tienen sus propias y hondas raíces, identificables en el estancamiento y declive del crecimiento económico, baja productividad, bajo nivel de los servicios públicos y marginalización de sectores de la sociedad. El acceso limitado a la información y a la educación, las grandes desigualdades en la distribución del ingreso, la

exclusión de empleos lucrativos reservados para un cierto grupo, la existencia de subempleo y desempleo, discriminación por edad y por género son algunos de los factores causantes y retroalimentadores de la pobreza, que inciden y marcan las diferencias entre países y entre los miembros de sus sociedades: pobreza colectiva y pobreza individual se entretajan y están emparentadas la mayoría de las veces.

Es obvio que en los países subdesarrollados, como México¹⁶, los factores causantes y retroalimentadores de la pobreza, así como sus dimensiones, adquieren connotaciones más agudas y dramáticas.

En síntesis, la manifestación más obvia, más importante y más común de la pobreza es la negativa a la satisfacción de las necesidades básicas de la existencia humana; sus efectos, la inseguridad de todos los miembros de la sociedad. Llama la atención la similitud entre las palabras de Amartya Sen y las del jurista Hale, a pesar de que las separan un poco más de tres siglos. Para el premio Nobel 1998, la mejoría de la condición humana es más que una proposición humanitaria justa para la década que viene: es una necesidad de supervivencia para todos los desposeídos y los no desposeídos. El peligro estriba en que un orden político no estable puede ser construido sobre las bases de sociedades perturbadas a causa de la pobreza extrema. Para el jurista Hale, la pobreza en sí misma castra las mentes de los hombres o por lo menos se hacen hombres tumultuosos e inquietos, y por ello socorrer a los pobres es un acto de gran prudencia civil y de sabiduría política: donde hay muchos muy pobres, los ricos no pueden estar seguros ni continuar como tales.

¹⁶ En México, en 1994, año en que termina Solidaridad, la pirámide social se formaba por 40% de pobres extremos (33% de indigentes y 7% de muy pobres), 29% de pobres moderados y 31% de no pobres. Para 1996, la pirámide cambió brutalmente: 55% de pobres extremos (43% de indigentes y 12% de muy pobres), 24% de pobres moderados y 21% de no pobres. Es decir, 55-24-21, en 1996, contra 40-29-31, en 1994 (datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1996, elaborada por el INEGI, y reproducidos por Julio Boltvinik en *La Jornada*). En un país con una población de 94'275,000 habitantes (en 1997), con una pirámide de pobreza de 55-24-21, el problema de la pobreza se vuelve crítico, por decir lo menos.

4. EL ENFRENTAMIENTO A LA POBREZA

Enfrentar la pobreza en México supone una cobertura importante de la asistencia o beneficencia pública, un gasto social vigoroso y programas torales para combatirla o paliarla; en fin, una política económica que no produzca más pobres ni empobrezca más a los que ya lo están y una política social de envergadura. Cuestiones que no ocurren.

La asistencia pública carece de importancia, el gasto social ha decrecido y hay ausencia de programas que contemplen acciones amplias para la superación de la pobreza extrema y la pobreza a secas. El eje rector de la política social sigue siendo el Progreso, que es eminentemente rural, y que, desde mi punto de vista:

1. No sienta las bases para un posterior desarrollo económico como, por ejemplo, lo hacía Solidaridad al postular obras de infraestructura, proyectos productivos y obras de desarrollo social. El Progreso opera en localidades de alta y muy alta marginación, generalmente zonas indígenas, en donde hay ausencia de un planteamiento de desarrollo rural incluyente.
2. Es un programa de caridad institucionalizada. Las ayudas monetarias que otorga no transforman las condiciones en las que se originan y desarrollan los pobres, pero sí sirven para establecer claramente a la sociedad, como señala Friedman, cuánto cuesta ayudar al pobre.
3. No comparto la idea de que se está invirtiendo en «capital humano» para recoger los frutos a largo plazo. En primer lugar, no comparto la noción de capital humano; en segundo lugar, las «inversiones» del Progreso en educación, salud y alimentación no revierten sustancialmente la condición de pobreza; considero que incorporan, de manera temporal (mientras tienen los recursos monetarios del Programa), a una parte de los pobres al me-

cado, y a la esfera más baja del mercado; en otras palabras, el pobre se vuelve consumidor, aunque sea por un día, de las mercancías de más baja calidad, como las llamadas *brummagem ware*¹⁷ que se producían en la Inglaterra del siglo xvii y se intercambiaban por esclavos.

4. Otra cuestión importante compete a la evaluación del programa. No es posible evaluar su impacto en el combate a la pobreza extrema, pues la evaluación que han hecho los voceros del programa es una evaluación endógena, es decir, el programa se compara consigo mismo (qué tanto aumentó su cobertura, etc.), pero no es comparable con las cifras de pobreza, que cierto es, también, tienen bastante dificultad en su cálculo.

CONCLUSIÓN

Es innegable que el concepto de pobreza sigue estando enlazado al concepto de desarrollo. Ya en el siglo xix, Alexis de Tocqueville observaba la diferencia entre los pobres de países diferentes; así, un inglés pobre en Inglaterra no resultaba pobre en Portugal. Las diferencias tenían que ver con el diferente grado de desarrollo entre los países. En un sentido amplio, se trata de cómo el desarrollo, o, en su defecto, el crecimiento económico, se manifiesta —o fracasa al manifestarse— en un desarrollo humano. El punto nodal es que el desarrollo debiera ampliar las posibilidades para que el ser humano viva mejor.

¹⁷ Véase *The Anti-Slavery Campaign in Britain*, texto elaborado por Marjorie Bloy, Rotherham College of Arts and Technology, en *The Victorian Web*: <http://www.stg.brown.edu/projects/hypertext/landow/victorian/history/antislavery/html>. El comercio de esclavos era bastante lucrativo a fines del siglo xv. Los barcos salían de las costas occidentales inglesas (de Liverpool y Bristol, sobre todo) y dejaban en África mercancías (armas de fuego, pólvora, té, cuchillos, espejos) que frecuentemente eran de muy baja calidad. La mayoría de estos bienes eran de lo más barato, se hacían en Birmingham y eran conocidos como *brummagem ware*; eran estos bienes los que se intercambiaban por esclavos.

Desde la década de los setenta hasta la fecha, el estado mexicano ha instrumentado diversos programas para combatir la pobreza —el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider), la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), Solidaridad y Progresá— que no han tenido éxito.

Los teóricos del neoliberalismo, en su defensa a ultranza de la libertad —léase defensa del capitalismo—, afirman que sólo en un sistema de libre competencia, cuyo eje es el mercado, los miembros de una sociedad pueden desarrollar sus capacidades; el rico puede entonces volverse más rico y, por una suerte de alquimia del mago Friedman¹⁸, el pobre puede volverse rico. Lamentablemente, esta suerte de alquimia es desconocida no sólo para mí sino para los casi cuarenta millones de mexicanos que aún hoy sobreviven en pobreza extrema.

La pobreza se hereda y su círculo vicioso no puede trocarse en uno virtuoso, pues la pobreza se reproduce dentro del mismo sistema que la engendra. Es por ello que la elaboración y ejecución de planes y programas para combatirla, dentro de ese sistema, no pueden acabar con ella, aunque quizá pudieran menguarla significativamente. Pero plantear que un solo programa la erradicará o bien es demagogia insulsa o bien absoluta ignorancia y desconocimiento del desarrollo del fenómeno. Así, el actual Progresá ha resultado parcial, al igual que los otros programas, en tanto que no se integra ni entrelaza ni plantea continuidad con otras esferas de la política económica. La pobreza no puede ser cancelada con un programa.

¹⁸ Cfr. Milton y Rose Friedman, *Libertad de elegir*, Ediciones Orbis, España, 1983, p. 209-210. En el capítulo 5, «Creados iguales», en la conclusión se plantea que «libertad significa diversidad, pero también movilidad. Conserva la posibilidad de que los desgraciados de hoy sean los privilegiados de mañana y, en el curso del proceso, capacita a casi todos, de arriba abajo, para llevar una vida más plena y más rica».

ANEXO 1 El Progresa

En 1997, hace su aparición pública este Programa, argumentando que «el combate a la pobreza extrema requiere la atención, entre otras, de tres dimensiones básicas: alimentación, salud y educación...». Sus objetivos centrales son:

1. Mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación, en particular de los niños y de sus madres, que impacten un mejor aprovechamiento escolar y abatan la deserción escolar.
2. Apoyar a la economía familiar, «procurando que el hogar disponga de recursos suficientes para que los hijos completen su educación básica».
3. Hacer corresponsables y partícipes a todos los miembros de la familia en acciones de bienestar social.
4. «Promover la participación y el respaldo comunitario a las acciones que se emprendan, para que los servicios educativos y de salud beneficien al conjunto de las familias».

El Progresa opera de la siguiente forma: Se seleccionan localidades identificadas como de alta y muy alta marginalidad, que generalmente son zonas indígenas; a estas localidades van promotores del programa para levantar un padrón con las posibles familias beneficiarias; se realiza una asamblea con la comunidad, para sancionar a las familias beneficiarias; aprobándolo la asamblea, las familias seleccionadas pueden recibir los apoyos. Una cuestión en que se ha puesto énfasis es que se tiende a dividir a las comunidades, pues se elige a unas familias y a otras no.

Los apoyos que otorga Progresa son de tres tipos:

1. Para educación, se dan becas y apoyos en especie o en dinero para útiles escolares, siempre y cuando haya una asistencia regular de los niños a la escuela. Las becas se brindaban desde tercer año de primaria hasta tercero de secundaria; en secundaria eran ligeramente mayores para las niñas que para los niños. En la actualidad, se ha informado que su cobertura se extenderá hasta la educación media superior.
2. En salud, se apoya con un paquete básico de salud, que integra desde pláticas para el cuidado de la salud hasta elementos preventivos de enfermedades; toda la familia tiene que hacer uso de dicho paquete.
3. En alimentación, se otorga dinero en efectivo y un sobre de polvos de micronutrientes para las mujeres embarazadas y las que se encuentran lactando a sus hijos; además, los micronutrientes son para los niños en los que se ha detectado desnutrición; el dinero en efectivo se entrega, por lo general, a las madres (cuadro 1).

Cuadro 1
Contenido nutrimental del suplemento alimenticio

Niños y niñas ¹		Mujeres embarazadas o en lactancia ²	
Dosis diaria: 44 g		Dosis diaria: 52 g	
Proteína	5.8 g	Proteína	12 g
Energía	194 kcal	Energía	250 kcal
Grasas	6.6 g	Grasas	11.2
Carbohidratos	27.9 g	Carbohidratos	25.3 g
Sodio	24.5 mg	Sodio	81.2 mg
Hierro	10 mg	Hierro	15 mg
Zinc	10 mg	Zinc	15 mg
Vitamina A	400 ug	Yodo	100 g
Vitamina E	6 mg	Vitamina E	10 mg
Vitamina C	40 mg	Vitamina C	70 mg
Vitamina B12	0.7 ug	Vitamina B12	2.6 ug
Acido fólico	50 ug	Acido fólico	100 ug

¹ Se presenta en tres sabores: chocolate, plátano y vainilla

² Se presenta en tres sabores: plátano, vainilla y natural (leche)

Fuente: <http://www.sedesol.gob.mx/progresatexto.htm>

Según cifras dadas por el mismo programa, en 1999 se benefició «a poco más de 80% de los hogares rurales en condición de pobreza extrema» (cuadro 2) y todavía existían 18 mil 220 localidades marginadas, con 127 mil 48 hogares, más de 600 mil personas que no habían recibido los beneficios del programa: «Y no recibirán beneficios en el mediano plazo, porque son asentamientos con una o dos familias, o centros de población con menos de 100 personas que no cuentan con servicios de salud, abasto y educación, lo que es una

Cuadro 2
Cobertura anual del Progreso

Entidad	1997			1998			1999		
	Municipios	Localidades	Familias beneficiarias	Municipios	Localidades	Familias beneficiarias	Municipios	Localidades	Familias beneficiarias
Aguascalientes							11	99	1,440
Baja California				3	40	1,378	4	140	3,500
Baja California Sur				3	23	1,249	5	64	1,807
Campeche	8	137	6,610	10	404	25,611	11	455	29,485
Coahuila	13	247	11,909	24	440	19,995	28	464	20,721
Colima				10	87	3,827	10	99	4,149
Chiapas				108	3,575	184,497	109	5,077	243,273
Chihuahua	17	554	7,486	19	893	15,605	42	961	17,493
Durango				32	600	15,045	39	1,066	27,172
Guanajuato	23	546	10,144	46	2,376	90,060	46	2,773	107,370
Guerrero	37	1,021	61,277	76	3,020	172,973	76	3,479	176,949
Hidalgo	49	1,458	50,065	76	2,331	99,802	76	2,749	110,369
Idioma				105	1,626	34,572	122	2,561	42,404
México				64	1,931	142,640	66	2,254	155,224
Michoacán	34	727	12,736	71	5,531	106,409	113	3,797	140,748
Morelos				33	274	14,383	33	376	19,432
Nayarit				20	603	34,296	20	740	38,029
Nuevo León	1	13	475	24	583	14,873	30	778	16,477
Oaxaca	60	836	62,000	293	2,897	138,622	396	3,138	176,255
Puebla	91	1,610	68,979	191	2,732	164,545	208	3,663	213,882
Querétaro	11	487	9,805	18	876	34,373	18	1,014	39,193
Quintana Roo				6	262	14,276	6	286	20,999
San Luis Potosí	33	1,462	40,439	58	2,580	94,668	58	3,255	107,876
Sinaloa				18	1,580	60,145	18	1,967	66,487
Sonora				21	515	24,457	36	646	27,665
Tahuaca				17	1,003	59,760	17	1,136	66,634
Tamaulipas				35	997	33,458	35	1,149	35,691
Tlaxcala				24	162	9,289	29	227	11,828
Veracruz	79	1,671	62,316	184	4,164	194,539	185	4,871	243,614
Yucatán				99	545	59,118	99	665	63,612
Zacatecas				55	1,256	45,481	56	1,830	68,818
Total	456	10,769	404,241	1,743	40,906	1,909,946	2,002	51,769	2,298,596

Familias beneficiarias al cierre de cada año e/ cifras estimadas

limitante, pues tener acceso a esos servicios es una condicionante para acceder al programa contra la pobreza extrema, además de que por ser zonas de difícil acceso se dificulta aún más su atención»¹⁹. (En pocas palabras, los indigentes deben tener servicios para que puedan ser sujetos de un programa contra la pobreza extrema, cuestión que resulta bastante paradójica).

Voceros oficiales han señalado que hasta el año 2000, 2.6 millones de familias están inscritas en el Progreso y que quizá alrededor del 10% de dichas familias «estaría en condiciones de no estar vinculadas al programa, quizá porque este sector estaba muy cerca de la línea tope de la pobreza y ya la brincaron»²⁰.

Los apoyos monetarios del Progreso se entregan a las madres beneficiadas, en efectivo y cada dos meses, y se ajustan a la inflación acumulada. En 1999, el monto máximo ascendió a 750 pesos mensuales, acumulándose las becas y la ayuda alimentaria, desalentando con esto la fecundidad, el tener más hijos. En 2001, se sometió a estudio si se elevaba a 1,300 pesos mensuales si se tienen hijos en la educación media superior (cuadro 3).

Respecto a la evaluación, se incluyen estudios del impacto de Progreso en la educación de los niños, salud y nutrición, dinámica de consumo de la familia, la condición de las mujeres y la participación en la fuerza laboral.

¹⁹ Progreso, *Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados de Progreso. Primeros avances*, Sedesol, México, 2000

²⁰ Cfr. *La Jornada*, 30 may, 2001, p. 16, entrevista a Vicente Arredondo Martínez, coordinador nacional del programa, «El Progreso, instrumento de política social de inversión en capital humano»

Cuadro 3
Monto mensual de los apoyos monetarios (pesos)

Concepto	1997	1998 (1er. semestre)	1998 (2do. semestre)	1999 (1er. Semestre)	1999 (2do. semestre)
Apoyo alimentario	90	95	100	115	125
Primaria					
3	60	65	70	75	80
4	70	75	80	90	95
5	90	95	100	115	125
6	120	130	135	150	165
Secundaria					
Primero					
Hombres	175	190	200	220	240
Mujeres	185	200	210	235	250
Segundo					
Hombres	185	200	210	235	250
Mujeres	205	220	235	260	280
Tercero					
Hombres	195	210	220	245	265
Mujeres	225	240	255	285	305
Monto máximo	550	585	625	695	750

Fuente: <http://www.sedesol.gob.mx/progesa/texto.htm>

BIBLIOGRAFÍA

- ARROW, Kenneth, y T. Scitovsky, *Ensayos sobre economía del bienestar*, FCE, México, 1974 (Lecturas, núm. 9, tomos I y II)
- CONTRERAS SUÁREZ, Enrique, María Elena Jarquín Sánchez y G. Torres Salcido, comps., *Pobreza, marginalidad e informalidad (una bibliografía mexicana 1960-1990)*, núm. 9, Serie Fuentes, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, México, 1992
- DRESCHER, S., *Dilemmas of Democracy: Tocqueville and Modernization*, Pittsburgh, 1968
- FRIEDMAN, M., *Capitalismo y libertad*, Ediciones Rialp, Madrid, 1966
- _____, *Libertad de elegir*, Ediciones Orbis, España, 1983

- HAYEK, Friederich A., *The Trend of Economic Thinking*, en *The Collected Works of F.A. Hayek*, volume III, The University of Chicago Press, Estados Unidos de América, 1991
- HIMMELFARB, G., *La idea de la pobreza. Inglaterra a principios de la era industrial*, FCE, México, 1988
- KNIGHT, F., «Fallacies in the Interpretation of Social Cost», publicado en *Quarterly Journal of Economics*, núm. 38, may, 1924
- NUSSBAUM, Martha, y A. Sen, comps., *La calidad de vida*, FCE, México, 1996
- Progresá, textos diversos sobre el funcionamiento del programa, informes, evaluaciones y datos, consúltense en la página electrónica <http://www.sedesol.gob.mx/progresatexto.htm>
- SEN, Kumar A., *Elección colectiva y bienestar social*, Alianza Editorial, Madrid, 1976
- SHAW LOWELL, J., *Public Relief and Private Charity*, Ed. Ayer, EU, 1984
- Solari, Aldo E., *La desigualdad educativa: problemas y políticas*, CEPAL-ONU, Santiago de Chile, 1994 (Serie Políticas Sociales, núm. 4)
- STIGLITZ, J., «Lo que aprendí de la crisis económica», en *Momento Económico*, núm. 108, México, mar-abr, 2000
- SZÉKELY, M., *Policy Options for Poverty Alleviation*, Inter-American Development Bank, Washington, abr, 1997
- TOCQUEVILLE, A. de, Seymour Drescher (trad.) y Gertrude Himmelfarb (introd.), *Memoir on Pauperism*, Iván R. Dee (ed.), Londres, 1997
- VILLARESPE REYES, V., «Neoliberalismo: riqueza y pobreza. Algunos de sus fundamentos teóricos», ponencia presentada en el XVII Seminario de Economía Mexicana, may, 2001 publicación en CD
- _____, *Pobreza: teoría e historia*, Juan Pablos/UNAM, México
- VUSKOVIC BRAVO, P., *La pobreza, desafío teórico y estratégico*, IIE-UNAM, México, 1993
- ZEDILLO PONCE DE LEÓN, E., *Las políticas de bienestar*, Comité Ejecutivo Nacional del PRI, México, ago, 1994

UN NUEVO ENFOQUE EN EL ESTUDIO DE LA POBREZA RURAL:
LA PERSPECTIVA FEMENINA

V. MIRIAM NÚÑEZ²¹

S. TOMÁS MARTÍNEZ²²

R. FERNANDO MANZO²²

I. INTRODUCCIÓN

En el debate sobre la pobreza existe una controversia fundamental. Unos autores la relacionan con la ausencia de necesidades y la intervención del estado. La definición que elaboran sobre la pobreza ha contribuido a la identificación de los pobres y la formulación de políticas sociales. Otros autores asocian los conceptos de pobreza y desigualdad para la comprensión del proceso de empobrecimiento generado en los últimos años, producto del modelo económico impuesto y de las políticas implementadas.

La discusión teórica del fenómeno de la pobreza se centra en aspectos relacionados con el ingreso, la falta de servicios, la alimentación, los problemas de salud y las desigualdades sociales. De estas perspectivas se desprende una nueva propuesta, la que busca las particularidades de la pobreza femenina. El empobrecimiento de las mujeres está relacionado con el proceso de transformación económica a escala global. La pobreza para las mujeres no sólo es la carencia de necesidades básicas, se relaciona con la falta de oportunidades, la

²¹ Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo, campus Morelia, y alumna del doctorado en ciencias del desarrollo rural, Colegio de Postgraduados, Montecillos, Estado de México

²² Profesores investigadores del programa doctoral en ciencias del desarrollo rural, Colegio de Postgraduados

ausencia de reconocimiento a su trabajo, la falta de acceso al sistema productivo, la ausencia de realización personal, la violencia y la falta de autonomía personal.

El objetivo del presente trabajo es aportar un nuevo concepto y análisis de la pobreza rural a partir de la experiencia de las mujeres. Esta perspectiva significa reflexionar la pobreza en términos de relaciones de poder, de desigualdad y discriminación.

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POBREZA

Para analizar la situación de pobreza vivida por las mujeres, Salles (1995) plantea que es necesario un acercamiento general al tema de la pobreza, debido a que la pobreza de la mujer se inserta en un fenómeno mayor que atañe a amplios sectores de la población masculina y femenina. Sin embargo, la pobreza femenina no puede ser comprendida bajo el mismo enfoque conceptual que el de la pobreza en general. Para hacerlo, es necesario estudiar el fenómeno de la pobreza a través de las diferencias de género, identificando los diversos mecanismos de carácter social e institucional que contribuyen a reproducir y agudizar la situación de privación y carencia de las mujeres.

Al hacer una reflexión general del fenómeno de la pobreza, encontramos dificultades para definirla y la aplicación de métodos para calcularla. Pobreza y medición se encuentran determinadas de manera recíproca; en ocasiones, limitados por una visión economista; en otras por su significación social. Esto ha generado un debate sobre la conceptualización de la pobreza, cuya discusión puede ubicarse en tres propuestas de reflexión:

- 1) Los trabajos que enfatizan la pobreza en la ausencia de necesidades básicas, las cuales requieren de un esfuerzo productivo y capacidad para su satisfacción.

- 2) Los que plantean que la pobreza de hoy no es una herencia del pasado sino que es una pobreza nueva, resultado del modelo económico y de la desigualdad existente.
- 3) Los trabajos que enfatizan las particularidades de la pobreza femenina, que centran su atención en los determinantes de género, integrando a la vez elementos conceptuales de la pobreza en general y aportando nuevos conceptos e interpretaciones.

2.1 POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS

La aproximación conceptual de la pobreza nos lleva necesariamente a revisar su fundamentación básica: conceptualizar las necesidades humanas y la forma de su satisfacción. Marx, en *El capital*, utiliza la categoría de necesidades naturales en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Las necesidades naturales para este autor son: alimento, vestido, vivienda, calefacción, que varían de acuerdo con las condiciones naturales de cada país. La forma de satisfacer las necesidades naturales es un producto histórico que depende de la cultura de un país, sus condiciones, hábitos y exigencias (Heller, 1998).

Así, para Marx, las necesidades naturales son necesarias en la medida en que contribuyen al mantenimiento de la vida humana, ya que sin su satisfacción el hombre no podría conservarse como ser natural. Diferencia a éstas de las necesidades animales en términos de sus modos de satisfacción: al objetivar las necesidades, éstas se convierten en humanas. Es decir, el hombre crea los objetos de su necesidad, expresa sus sentidos y, al mismo tiempo, crea los medios para satisfacerlos.

Marx, en la introducción a *El capital*, sostiene que el hambre que se satisface con cuchillo y tenedor es un hambre muy distinta a la de quien devora carne cruda con las manos, uñas y dientes. Los modos de satisfacción hacen social a la necesidad, esto es, modifican a la

necesidad. La satisfacción de las necesidades necesarias es un proceso histórico, determinado socialmente por la cultura, los hábitos y las costumbres.

En su descripción de necesidades necesarias, Marx no sólo considera las necesidades materiales sino también las no materiales, como la enseñanza, los libros y la adscripción a un sindicato. La satisfacción de este tipo de necesidades depende de los medios materiales con que cuenta cada individuo. Pero todas ellas forman parte de las necesidades necesarias y el valor de su satisfacción debe estar incluido en el valor de la fuerza de trabajo (Heller, 1998).

Por otro lado, los organismos internacionales que realizan estudios sobre la pobreza en América Latina y destinan cuantiosos recursos para enfrentar el problema también plantean el tema de las necesidades humanas y la pobreza. El Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define las necesidades como básicas, y son aquellas necesidades que de manera evidente y directa, requieren de un esfuerzo productivo para su satisfacción. Las necesidades son las siguientes:

- 1) una alimentación que cumpla con los requisitos nutricionales y las pautas culturales, lo que supone como satisfactorios no sólo el agua y los alimentos sino también la energía y los medios para prepararlos y consumirlos;
- 2) mantenimiento de la salud, lo que supone servicios de salud personales y no personales (salud pública) y los satisfactores que permitan la higiene del hogar y la personal, como prevención, y los medicamentos, como curación;
- 3) una vivienda con espacios adecuados al tamaño de la familia y materiales apropiados que aseguren su protección y su privacidad que cuenten en su interior con los servicios de agua potable, drenaje (o similar) y energía, así como el equipo y mobiliario básico;
- 4) educación básica;

- 5) acceso a servicios básicos de información, recreación y cultura;
- 6) vestido y calzado;
- 7) transporte público, y
- 8) comunicaciones básicas, como el correo, y acceso al teléfono.

De la misma manera, se afirma que el ser humano necesita seguridad en el acceso a los satisfactores básicos durante toda su vida y en cualquier circunstancia. Para esto requiere de un empleo o fuente de ingresos que le permita obtenerlos, así como de sistemas de seguridad social que proporcionen esta seguridad.

El Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza conceptualiza a la pobreza como la ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un mínimo de ciertas necesidades, llamadas básicas. Esta definición distingue dos tipos de pobreza: por un lado, la pobreza extrema, en la que se ubican los hogares que tienen un ingreso tan ínfimo que, aun destinándose en su totalidad a la alimentación, no les permite satisfacer sus requerimientos nutricionales. Por otro lado, está la pobreza que incluye a los hogares que tienen un ingreso total insuficiente para satisfacer el conjunto de sus necesidades básicas.

Sin embargo, la pobreza también puede ser vista en términos absolutos o relativos. Townsend plantea el enfoque relativo de la pobreza; señala que no puede haber una concepción rigurosa de la determinación social de las necesidades básicas, está en contra de las necesidades absolutas. La relatividad se aplica en el tiempo y en espacio, por lo que las necesidades de la vida no son fijas. Éstos se adaptan y aumentan conforme ocurren cambios en una sociedad y en sus productos²³. Los autores que argumentan la relatividad de la pobreza la definen a partir de dietas, actividades, condiciones de vida y equipamiento usuales o, al menos, ampliamente promovidas y aprobadas en la sociedad. Para este enfoque, ser pobre significa tener

²³ Citado en Julio Boltvinik, *Pobreza y necesidades básicas. Conceptos de medición*, PNUD, Caracas, 1990, p. 27

menos que un grupo de referencia. Esto significa que la pobreza se disuelve en la desigualdad.

El enfoque absoluto de la pobreza señala que la privación absoluta de la pobreza va más allá del contexto social, sea éste un país o comunidad. Éste tiene que ver con los elementos básicos de bienestar y estilo de vida que todo ser humano tiene derecho a satisfacer. Este planteamiento parte de la dignidad humana y de la universalidad que se le otorga a los derechos humanos básicos. Todo ser humano tiene derecho a satisfacer sus necesidades, por lo que no pueden relativizarse. En términos generales, los dos enfoques son complementarios para un mejor acercamiento al fenómeno de la pobreza.

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA POBREZA

El acercamiento al problema de la medición de la pobreza nos enfrenta a la diversidad de medidas. Las respuestas para evaluarla han seguido principalmente dos métodos: la línea de la pobreza (LP) y el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)²⁴.

El método LP compara el ingreso per cápita con la llamada línea de pobreza. Los hogares cuyos ingresos son menores que la línea de pobreza se consideran pobres, así como cada una de las personas que en ellos habitan. El método LP analiza cinco aspectos:

- 1) definición de las necesidades básicas y de sus componentes (qué es necesario);

²⁴ El método LP es el método más utilizado en la medición de la pobreza en América Latina. Se considera que es el método dominante para la medición de la pobreza en países desarrollados, así como el promovido por el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En este sentido, Boltvinik (1993) plantea que la respuesta a la institucionalización del análisis de la pobreza ha sido el PNUD y el índice de desarrollo humano (IDH) como un indicador alternativo del desarrollo. El índice toma en cuenta: la esperanza de vida como expresión de la salud y la nutrición, los niveles educativos, las condiciones de la vivienda y sus servicios y el producto interno bruto (PIB) per cápita.

- 2) definición de una canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE) para cada hogar (cuánto y qué es necesario para cada componente);
- 3) cálculo del costo de la CNSE que se constituye en la línea de pobreza;
- 4) comparación de la línea de pobreza con el ingreso del hogar o con su consumo; y
- 5) clasificación de todos los hogares cuyo ingreso o consumo sea menor a la línea de la pobreza.

Lo central de este método es la definición de línea de pobreza. En América Latina se ha definido una canasta normativa alimentaria (CNA), se calcula su costo y se multiplica éste por el recíproco del coeficiente de Engels (porcentaje del gasto en alimentos) de algún grupo de hogares para obtener la LP (Boltvinik, 1992).

Para el caso de México, la CNSE fue diseñada, en un primer momento, por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar)²⁵. La CNSE incluye ocho grupos de necesidades básicas: alimentación, los bienes necesarios para prepararlos y consumirlos; vivienda, su uso, servicios de agua, drenaje, electricidad, mobiliario y equipamiento del hogar; salud, servicios personales, bienes y servicios para la higiene personal y del hogar, así como un pequeño grupo de productos para la autoatención; cultura y recreación, un paquete de material de lectura, un conjunto de bienes y servicios recreativos y un pequeño paquete electrónico; vestido y calzado, un paquete para cada edad y sexo. No se incluye la inversión pública para servicios, educación y salud.

El método LP tiene sus limitaciones, debido a que no toma en cuenta la satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas, al considerarse que éstas son cubiertas de acuerdo con el potencial de la perso-

²⁵ *Macroeconomía de las necesidades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000*, Coplamar, Siglo XXI Editores, 1990

na o del hogar. Además, de que centra su análisis en el ingreso o consumo privado de los hogares en donde no existen las necesidades sociales, por lo que no toma en cuenta otras dimensiones, y plantea una visión parcial de la pobreza.

El método NBI compara cada hogar con un grupo de necesidades determinadas, esto es, con una serie de normas para cada una, que expresan el mínimo de satisfacción. Este método considera los siguientes pasos:

- 1) definición de las necesidades básicas y de sus componentes (qué es necesario);
- 2) selección de las variables e indicadores que, para cada necesidad y componente, expresan el grado de su satisfacción;
- 3) definición de un mínimo para cada indicador, debajo del cual se considera que cada hogar no satisface la necesidad en cuestión;
- 4) clasificación de los hogares (o personas) como pobres con una o más necesidades insatisfechas.

Los problemas del método NBI son la selección de necesidades, definir sus normas y qué entiende por pobreza. Otro problema es considerar pobre al hogar que tenga una o más necesidades insatisfechas. La manera en que ha sido aplicado el método NBI en América Latina ha sido a través de la elaboración de mapas de pobreza, en donde se obtienen resultados de disgregación geográfica detallada. El método es limitado por la disponibilidad de información de hogares, de municipios o estados. Su análisis se ha basado en el uso de censos de población y vivienda para diseñar los mapas de pobreza.

Los indicadores que se toman en cuenta para los mapas de pobreza son los siguientes: hacinamiento, vivienda (materiales), abastecimiento de agua, servicios sanitarios, inasistencia a escuelas primarias por parte de los menores y la capacidad económica del jefe del hogar con la tasa de dependencia económica. Quedan excluidos alimenta-

ingreso o necesidades, y plantea necesidades a una, que lera los si- nentes (qué da necesi- ción; del cual se n cuestión; res con una cesidades, roblema es es insatisfe- en América pobreza, en a detallada. ón de hoga- en el uso de de pobreza. apas de po- les), abaste- las primarias efe del hogar os alimenta-

ción, salud, vestido y calzado. El método NBI se basa en un concepto absoluto de la pobreza y centra los requerimientos de consumo público y privado de las necesidades básicas; no considera en su análisis variables como el ingreso y sus fuentes, la educación de los integrantes, el patrimonio básico, ni el tiempo disponible, por lo que subestima la pobreza.

Para Boltvinik (1990, 1992), la satisfacción de las necesidades básicas de una persona u hogar depende de las siguientes seis fuentes de bienestar:

- 1) un nivel de ingreso corriente para hacer frente a los bienes y servicios; sin embargo, es más conveniente usar el consumo como indicador de este acceso. Por ejemplo: con la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, los hogares aumentan su nivel de ingreso monetario. Sin embargo, la mujer requerirá del apoyo de otra persona para el cuidado y limpieza del hogar o, por el contrario, duplicará su jornada de trabajo. Además, tendrá gastos de transporte y comida fuera del hogar, por lo que podrá aumentar sus ingresos, pero el bienestar resultará escaso o nulo;
- 2) derecho de acceso a servicios gubernamentales, esto es, servicios, atención médica y educación. O, en su caso, contar con ingreso adicional para satisfacerlos. Los servicios de agua y drenaje requieren de inversiones altas, por lo que no se pueden solucionar de manera individual;
- 3) propiedad (o derecho de uso) de activos que proporcionan servicios de consumo básico (vivienda, equipamiento del hogar, enseres domésticos). Se requiere de un patrimonio acumulado, gastos de mantenimiento y reparación o ingresos adicionales para cubrir la renta de éstos;
- 4) los niveles educativos, las habilidades y destrezas, entendidos no como medios de obtención de ingresos sino como expresiones de la capacidad de entender y hacer;

- 5) el tiempo disponible para la educación, el descanso, la recreación y el trabajo del hogar; en este último, se incluye un ingreso adicional para pagar los servicios domésticos, y
- 6) la propiedad de activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar.

Para Boltvinik, en la medida en que son distintas las fuentes de bienestar consideradas por los métodos LP y NBI, el análisis de la pobreza debe hacerse a través de la unión de ambos métodos, es decir, son complementarios. Este autor propone el método de medición integrada de la pobreza (MIP), en el cual integra los dos métodos.

En la integración de los métodos NBI y LP, la variable ingresos pierde su sentido al aplicarse de manera simultánea, por lo que se elimina. Como resultado, con el método de NBI se pueden identificar las siguientes necesidades: *a)* servicios de agua y drenaje; *b)* el nivel educativo de los adultos y la asistencia escolar de los menores; *c)* la electricidad; *d)* la vivienda; *e)* el mobiliario y el equipamiento del hogar; *f)* el tiempo libre para la recreación, información y cultura; *g)* alimentación; *h)* vestido, calzado y cuidado personal; *i)* higiene personal y del hogar; *j)* transporte y comunicaciones básicas; *k)* gastos corrientes por parte del hogar; *l)* gastos monetarios requeridos para la transferencia de salud, educación y tiempo libre (cuadro 1).

El análisis de servicios de salud, así como la asistencia social, a satisfacerse de manera gratuita o privada, necesariamente es mixto. Si las personas no tienen acceso a servicios gratuitos, sus costos deben ser incluidos en la línea de pobreza. Las necesidades que se atenderían por LP son alimentación, calzado y cuidado personal, higiene personal y del hogar, transporte público, recreación y cultura y comunicaciones básicas. Los gastos corrientes de salud, educación y vivienda deben considerarse para fijar la línea de pobreza. Así mismo

Cuadro 1
Método de medición integrada de la pobreza (MIP)
Procedimiento básico para la versión refinada

Necesidades que se verifican siempre por NBI (1)	Necesidades que conforman siempre la línea de pobreza (2)	Rubros que requieren criterios combinados de NBI y de LP (procedimiento) (3)	Definición de LP por hogar (4)	Ingreso o consumo del hogar comparable con la LP (5)
1. Agua 2. Drenaje 3. Electricidad 4. Vivienda 5. Nivel educativo de los adultos 6. Asistencia escolar de los menores 7. Tiempo disponible 8. Mobiliario y equipo del hogar	1. Alimentación 2. Combustible 3. Higiene personal y del hogar 4. Vestido y calzado 5. Transporte 6. Comunicaciones 7. Recreación y cultura 8. Gastos en servicios de la vivienda 9. Gastos asociados a las transferencias públicas en salud y educación	Atención a la salud y seguridad: si no tienen acceso a servicios gratuitos de salud o acceso a la seguridad social, el costo privado de estos servicios debe añadirse a la línea de pobreza.	1) Los requerimientos incluidos en la columna 2 se determinan para cada persona por grupo de edad y sexo (excepto los rubros 3 y 8). 2) Se identifican necesidades de consumo de alimentos fuera del hogar, que se suman a la LP. 3) Si no hay disponibilidad de tiempo para el trabajo doméstico, se añaden a la LP los costos de guarderías o los servicios domésticos.	El gasto o ingreso del hogar que se compara con la LP es el remanente una vez deducidos los gastos en los rubros de la columna 1. Éste se compara con la LP que resulta de las columnas 2, 3 y 4.

Fuente: elaborado por Julio Boltvinik, México, 1992

para definir la línea de pobreza lo mejor es diseñar una canasta normativa complementaria para las necesidades. Puesto que se separan las necesidades (o satisfactores) para trabajarse por NBI, el ingreso del hogar (o gasto) es aquel del que la familia efectivamente dispone para las necesidades que conforman la línea de pobreza. Por esto se tiene que deducir del ingreso (o gasto) del hogar el erogado en los satisfactores de NBI (Boltvinik, 1993).

La crítica más contundente que se ha realizado a estos métodos de medición de la pobreza ha sido por parte del enfoque de la desigualdad, debido a que plantea la desigualdad como el principal factor determinante de la pobreza.

3. POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL

Vuskovic (1993) plantea que el fenómeno de la pobreza no puede comprenderse en su verdadera dimensión si no se le relaciona con la desigualdad como su fuente principal. Señala que esta asociación está ausente en la mayoría de los análisis, queriéndose desconocer los grados extremos de desigualdad económica y social que constituyen un rasgo singular de la evolución histórica de América Latina y que se agudizan con las políticas neoliberales.

La crítica que realiza Vuskovic (1994) a los métodos de medición de la pobreza es que éstos son ejercicios aritméticos que demuestran que, sin redistribución, es imposible elevar las condiciones de vida de la población por encima de las líneas de pobreza. Para este autor, los análisis sobre pobreza deben rebasar su significación económica de ingresos familiares y de disponibilidad de bienes y servicios básicos y tomar en cuenta las formas de propiedad de los medios de producción, la asimilación del progreso técnico y las prioridades científico-tecnológicas, los términos de relación de la economía nacional con las economías externas, los hábitos y la propensión del consumo, la concepción del estado con sus funciones y responsabilidades.

Vuskovic sugiere un marco interpretativo para situar los análisis en un conjunto de proposiciones:

Una primera observación es la no-correspondencia de una prevalente pobreza extendida y profunda con los grados relativos de desarrollo alcanzados en los países latinoamericanos, tomando en cuenta la disposición y capacitación de la fuerza de trabajo, la infraestructura económica básica, las capacidades productivas instaladas, los desarrollos institucionales, las experiencias acumuladas, la variedad de los recursos naturales. La falta de aprovechamiento de esta potencialidad se origina en los patrones de desarrollo económico prevalecientes, en la subordinación de intereses del capital y en las transferencias de ingresos al exterior.

En segundo lugar, la situación de pobreza del presente no corresponde a una herencia del pasado no superada, sino a una pobreza que se reproduce y amplifica. Se trata de una pobreza nueva generada en los últimos años, de un proceso activo de empobrecimiento debido al deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población que aumenta el número de pobres y que profundiza su pobreza. El proceso de empobrecimiento se agudiza a comienzos de la década de los ochenta, producto de la crisis que afectó los niveles de empleo, los ingresos familiares y el acceso a bienes y servicios. Las políticas de ajuste impusieron sacrificios que pretendieron ser compensados en el futuro y que nunca se cumplieron. El desafío no es superar una pobreza de siempre sino detener y revertir las tendencias de empobrecimiento.

En tercer lugar, la pobreza actual no puede explicarse como resultado del grado relativo de desarrollo de las fuerzas productivas sino también por la forma que asume el reparto social del producto obtenido. No es un problema de crecimiento, sino también de distribución, en el que sectores de la población no alcanzan a satisfacer sus necesidades porque otras capas sociales se apropian de proporciones elevadas del ingreso, sustentando altos niveles y formas de vida y consumo. Por los grados de desigualdad que caracterizan a las sociedades latinoamericanas, se ha configurado un proceso creciente de desintegración social, de dualización cada vez más acentuada, esto es, el mundo próspero de los ricos, y uno cada vez más castigado, el mundo de los pobres, separados en sus niveles de ingreso, consumo de vida, así como por sus valores y conductas sociales y políticas.

En cuarto lugar, la crisis latinoamericana desemboca en una dinámica de desigualdad que impide superarla. Marca el agotamiento de la política económica de desarrollo exportador e industrial sustitutiva, por lo que la desigualdad, que pudo ser una condición y motor de crecimiento, se constituye en un escollo fundamental para el crecimiento económico.

Los diagnósticos liberales sobre pobreza no toman en cuenta las proposiciones antes sugeridas. Parten del concepto de que el crecimiento económico y su derrame, y no la distribución, es la única fuente de mejoramiento generalizado en las condiciones de vida, así como que el crecimiento asegura las condiciones de estabilidad económica y de inserción en la economía global. Señalan como responsables del deterioro económico las políticas sociales implementadas, la expansión del aparato estatal y las barreras proteccionistas al comercio y capital exterior. Impulsa la privatización de las empresas y servicios públicos, la producción hacia el exterior, una política salarial restrictiva y el mercado como el regulador de la vida económica sin la injerencia estatal.

La realidad es que las políticas neoliberales no revierten el fenómeno de empobrecimiento; al contrario, lo fortalecen. La competencia al mercado de las unidades económicas de manera equitativa no es tal, se encuentra dominado por las grandes concentraciones de poder económico que lo manejan de acuerdo con sus intereses. El adelgazamiento del estado lo que ha traído consigo es un aumento en el desempleo, la disminución de acceso a servicios de salud y educación. La reconversión productiva de cultivos básicos por productos de exportación ha respondido a sectores de la población con altos ingresos, generando problemas de desempleo, acrecentándose la desigualdad social.

Vuscovik (1994) señala que la única concesión que se permite al modelo neoliberal es la de unas políticas y acciones de *focalización* de la pobreza, en la que se identifican a los grupos en condiciones de pobreza para ayudarlos a que alivien en algo su situación. Éste es un enfoque parcial que no sólo se expresa en la selectividad de los grupos sino en concentrar las acciones en determinados aspectos, sin considerar el deterioro de las condiciones de vida de la población. Lo atractivo de estas estrategias es no enfrentar al poder político existente, sino constituirse en un instrumento de éste para favorecer el acer-

amiento de amplios sectores de la población que esperan aliviar su pobreza.

La única opción para los grupos de mayor pobreza es la implementación de las llamadas estrategias de sobrevivencia, es decir, una diversidad de actividades que modifican los roles tradicionales de los hogares, con las que las familias pobres mitigan sus carencias básicas. Los pobres han sobrevivido en la economía informal y con el trabajo en actividades económicas de pequeña escala. Una de las estrategias de sobrevivencia familiar es la incorporación de la fuerza de trabajo femenina, la cual se sitúa en los márgenes de infrasubsistencia.

El sistema económico global profundiza la desigualdad y extiende la pobreza, por lo que el desafío es penetrar en las raíces de la desigualdad, esto es, en las situaciones de propiedad de los medios de producción, en la distribución del ingreso, de los procesos de concentración y centralización del capital en el mundo, en la producción y los patrones de consumo, la política salarial y de precios, en los requerimientos del mercado, en la tecnología y en la absorción de la fuerza de trabajo. Se requiere reflexionar sobre el futuro del sistema económico y su viabilidad, plantear un proyecto transformador.

4. POBREZA Y CONDICIONANTES DE GÉNERO

Otro planteamiento que existe en relación con el análisis de la pobreza es buscar las particularidades de la pobreza femenina, que centra su atención en los determinantes de género, integrando, a la vez, elementos conceptuales de la pobreza en general. Este enfoque cuestiona el planteamiento de que la pobreza afecta de igual manera a mujeres y hombres, propone que la pobreza es vivida de manera diferente por las mujeres con mayor intensidad, por lo que son consideradas las más pobres entre los pobres. El sustento de este enfoque es la pers-

pectiva feminista de la desigualdad social entre mujeres y hombres, la cual analiza la significación de la jerarquía entre los sexos en la distribución de los recursos y del poder. La teoría feminista identifica las diferencias biológicas de los sexos, socialmente definidas como un sistema de diferenciación social en el que se representa la desigualdad.

Entendemos que la pobreza se presenta en la medida en que se da una distribución desigual de la riqueza, porque no existe un reparto equitativo de los recursos, porque hay una exclusión de los individuos y de las familias a los procesos productivos, a la integración social y al acceso a las oportunidades: la pobreza no es sólo la ausencia de satisfacción de necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y transporte), significa también autorrealización personal, derechos humanos, tiempo libre y la violencia familiar y sexual en la que viven. El proceso de empobrecimiento de las mujeres se relaciona con el proceso de globalización. La pobreza para ellas se relaciona con la falta de oportunidades, la ausencia de reconocimiento a su trabajo, la dificultad para acceder al sistema productivo, la ausencia de realización personal, su carencia de autonomía y la violencia familiar y sexual que se ejerce sobre ellas. Para entender la situación de miseria de la mujer campesina no sólo es necesario medir las categorías económicas sino todas aquellas que nos permitan entender las particularidades de su situación en el contexto de desigualdad que vive en la sociedad.

El análisis de la pobreza femenina cuestiona cuatro aspectos fundamentales de la investigación tradicional de la pobreza: a) la neutralidad del fenómeno de la pobreza, al plantear que este fenómeno afecta de igual manera a hombres y mujeres, niega las diferencias que existen en la distribución de los recursos y del poder en los trabajos que se les asignan, las condiciones laborales a las que se enfrentan, la manera en que es percibido el trabajo femenino en la sociedad y su valoración respecto del hombre; 2) la invisibilidad de las mujeres niega la presencia y participación de las mujeres y devalúa las activida-

des que realizan, así como las diferentes estrategias que implementan para enfrentar sus estados de marginación; 3) el carácter individual de la pobreza centrado en el jefe de familia (hombre); 4) la medición de la pobreza sobre la base de ingresos y egresos.

La neutralidad e invisibilidad de las mujeres han sido problemas centrales para la teoría feminista. El cuestionamiento de neutralidad de los fenómenos sociales se hace en términos de que los parámetros de cientificidad como el de la razón, objetividad y separación reflejan verdades «no contaminadas de valor». Estas verdades se presentan como ideas rectoras de justicia, en las que no caben las experiencias vividas ni la subjetividad de los sujetos. La racionalidad de los estudios de pobreza se ven seriamente cuestionados cuando en el fenómeno de empobrecimiento las mujeres se presentan como las más afectadas en la profundización de la miseria y en la expresión de los problemas que enfrentan para el logro de su supervivencia. La pobreza, por lo tanto, no es neutral, puesto que para la mujer no es un fenómeno que se presenta en iguales condiciones y circunstancias que el hombre, sino que, al estar inmersa en un sistema que genera e intensifica las desigualdades y que utiliza las jerarquías existentes, la mujer queda ubicada en posiciones subordinadas dentro de los distintos niveles de interacción que se dan entre los sexos, reproduciendo sus estados de marginación.

Desde la perspectiva feminista, la pobreza afecta de manera diferente a mujeres y hombres del medio rural, al sostener que es necesario ubicar los determinantes de género, es decir, preguntarse: ¿cómo es que las construcciones sociales determinan la situación de privación de mujeres y hombres en el campo?, ¿cómo es vivida la pobreza por las mujeres y hombres en el contexto de la sociedad global?, ¿cómo afecta la vida de las mujeres su estado de privación?, ¿cuáles son las expectativas de vida de las mujeres en la pobreza?

Para Mackinnon (1995), desde el punto de vista de las mujeres, el género es más una desigualdad de poder que una diferenciación exacta,

en el que las diferencias naturales se convierten en la excusa de la desigualdad, puesto que permiten distinciones arbitrarias y restrictivas. El género es la forma institucionalizada del dominio sexual masculino y la sumisión sexual femenina. Para esta autora, la diferencia hombre-mujer y la dinámica dominio-sumisión constituyen el significado social del sexo y la explicación feminista de la desigualdad sexual. El género nos permite comprender las relaciones entre mujeres y hombres como una construcción social, en la cual las sociedades crean una concepción del mundo, ideas, valores, actitudes y conductas a partir de las diferencias biológicas que existen entre los sexos. Se crea una división de lo femenino y lo masculino, se asignan ciertas funciones y tareas que se entienden como naturales, pero en realidad forman parte de la construcción simbólica de la vida social.

La simbolización permea las relaciones y fenómenos sociales, lo cual contribuye a establecer las normas del orden social, distribuir la riqueza y el poder como forma de legitimación de las relaciones sociales. Estas relaciones han sido diferenciadas para hombres y mujeres, lo que significa privilegios y jerarquías para los primeros (Scott, 1990). A través del género podemos entender cómo se establece una desigual distribución de los espacios masculinos y femeninos, privilegiándose a uno sobre el otro. La construcción ideológica público-privado se convierte en una asignación simbólica de los espacios que se consideran para hombres y mujeres, con lo que se establecen jerarquías sexuales. En el espacio privado se desarrollan las actividades que se consideran femeninas, las cuales son socialmente desvalorizadas. En contraposición, las actividades que suelen tener prestigio y mayor valoración son las públicas, que son las que lleva a cabo el hombre en todas las sociedades. El espacio público se convierte en el espacio del reconocimiento, del prestigio y la competencia (Amoros, 1994).

La asignación de la mujer al ámbito privado se plantea por su relación con la naturaleza y las funciones que derivan de ésta. La

mujer, por el hecho de ser madre, tiene la obligación de cuidar y educar a los hijos, así como a todos los integrantes de la familia; en consecuencia, ella es vista como la responsable de las actividades de la casa. Socialmente, la mujer es definida como mujer en su casa, en donde cuida, alimenta a los integrantes y transmite las normas y valores necesarios. Esta asignación significa para la mujer su razón de ser y la manera de entender el mundo, cuyo límite es la esfera privada. Cuando la mujer logra trascender este espacio, la manera en que suele desenvolverse es reproduciendo el ámbito de la necesidad, por lo que las actividades que realiza son las asignadas en función de su sexo.

El análisis de la distribución de los espacios público y privado permite la identificación de códigos valorativos de las diferentes culturas. Las sociedades establecen los espacios prácticos y simbólicos para hombres y mujeres cuyos contenidos dependen de lo que consideran que es más o menos valorado. La jerarquización de los valores para un espacio u otro genera relaciones no de igualdad sino de dominio y subordinación que marcan profundas desigualdades entre mujeres y hombres. La distribución de los espacios se conforma a partir de la desigualdad de los géneros, en la que el género se presenta como una división de poder. En los diferentes espacios sociales la diferencia sexual se vuelve una forma primaria de diferenciación significativa que funciona para legitimar las relaciones sociales.

El proceso de globalización, al favorecer aún más la acumulación de capital, generó nuevas formas de división sexual del trabajo y modificó los mercados; pero ha negado la presencia y participación de las mujeres, así como devaluado las actividades que realizan. El problema de invisibilidad de la mujer es fundamental, pues se le niega el estatus de actora social, por lo que se convierte en una cuestión de poder, y perpetúa su posición subordinada y su imagen de receptora pasiva de las acciones de los demás. Las mujeres, al tratar de garantizar la sobrevivencia de la economía familiar, están finan-

ciando una parte de los efectos del modelo económico. Sin embargo, el trabajo de las mujeres no es valorado social ni económicamente, por lo que se ha llegado a plantear que las medidas de ajuste estructural tienen un rostro invisible, puesto que oficialmente no es reconocido.

Algunos ejemplos de lo anterior los encontramos en la gran diversidad de actividades que realizan las mujeres, quienes, al considerarse como propias de sus deberes domésticos, no son tomadas como productivas. Así también, los hogares que se encuentran con jefatura femenina, que son responsabilidad de las mujeres, no son reportados por las estadísticas. La diferenciación en las remuneraciones para las mujeres no es presentada en la información que se proporciona. En términos generales, se subestima la participación de las mujeres. Los análisis de pobreza deben reconocer la participación heterogénea de las mujeres, la cual está determinada por su condición de integrante de un núcleo familiar de producción y reproducción que mantiene vínculos con el sistema. Debe reconocer, además, el valor del trabajo de producción social que realizan las mujeres y que es el eje de la sobrevivencia de estos núcleos.

El hogar como unidad de análisis permite comprender la pobreza no como una condición de la persona sino de grupo, en el que se producen y reproducen relaciones sociales de carácter íntimo (Salles, 1994). Las unidades familiares son espacios de interacción entre sus integrantes, pero no sólo es un ámbito de reproducción biológica sino también es un espacio de socialización de los individuos. Por ello, es necesario decodificar lo que sucede en los hogares para reconocer la existencia de pautas de convivencia entre géneros, que provocan mayores desventajas para las mujeres. Estos espacios privados de convivencia permiten plantear el proceso de transmisión generacional del estatus de pobre, es decir, la situación de nacer y crecer en hogares pobres ejerce una influencia en la biografía de las personas, en el proceso de socialización, que es de inequidad y de desigualdad de

género. El análisis de los hogares pobres, a partir de los condicionantes de género y generación de sus integrantes, permite observar otros aspectos que intensifican la pobreza de las mujeres.

La centralización de la medición de la pobreza, a partir de los ingresos de los hogares, supone que los integrantes de los hogares padecen las mismas privaciones. Salles y Tuirán (1999) argumentan en contra de este supuesto, por varias razones: la asignación de recursos familiares en el espacio doméstico no se presenta de manera equitativa y las desigualdades de género provocan un acceso diferenciado de sus integrantes a los recursos. En la distribución de alimentos encontramos las asimetrías de género, es decir, se privilegia al varón por encima de los otros, los hijos mayores reciben mayor atención, se favorece a los niños en la educación en lugar de las niñas y se subestima el número de integrantes del hogar en estados de pobreza como si los satisfactores fuesen también equitativos.

El enfoque de la pobreza, desde la perspectiva de género, cuestiona los métodos tradicionales para el estudio de la pobreza. Su propuesta es una nueva forma metodológica de investigación en la que se destacan los aspectos cualitativos de la pobreza, pero dentro de su amplia comprensión. Las desigualdades de género nos permiten comprender todo el entramado de relaciones sociales que provocan mayores desventajas para las mujeres, exponiéndolas a situaciones de marginación y pobreza que hacen que las mujeres las vivan con mayor intensidad.

El análisis de la pobreza de las mujeres requiere ubicarlo, en términos generales, en el contexto social y económico en que se produce, conociendo las condiciones de vida de las mujeres y hombres dentro de la familia y la sociedad. Planteamos que las desigualdades para las mujeres campesinas que inciden en una mayor pobreza son:

- a) la negación al acceso a los recursos: tierra, trabajo, créditos y poder;

- b) la asignación de trabajos para las mujeres en función de su sexo, así como las condiciones a las que se enfrentan;
- c) las remuneraciones que obtienen son las más bajas y determinadas por la manera en que es percibido y valorado su trabajo;
- d) la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de los integrantes de la economía doméstica;
- e) la falta de acceso a la educación y servicios de salud;
- f) la escasa participación política y limitada autonomía personal;
- g) la violencia familiar y sexual de la que son objeto.

Las mujeres campesinas e indígenas han sido continuamente marginadas del acceso a la tierra, el riego y los créditos. En México, durante el reparto agrario no fueron consideradas sujetos de derecho a tierra, puesto que los hombres fueron vistos como los jefes de familia. Posteriormente, con la reforma al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria, se canceló el carácter de patrimonio familiar del ejido, con lo que se excluye de nueva cuenta a las mujeres a acceder a este recurso, a decidir sobre su venta y a lo que significa la obtención de créditos y apoyos institucionales. Sin embargo, no sólo es un problema de legislación, sino que existe una concepción de la mujer y patrones de herencia que privilegian a los varones. Es decir, existen ideas tales como que las mujeres «no trabajan la tierra» sino que «ayudan en la producción», o que las hijas se casarán y heredarán en nombre del marido. Estas justificaciones contribuyen a la marginación de las mujeres para el acceso a la tierra (Marroni, 1995).

El proceso de empobrecimiento rural generó nuevas formas de participación de las mujeres; a pesar de esto, se niega su presencia con lo que se perpetúa su subordinación. La gran diversidad de actividades que realizan las mujeres campesinas e indígenas no es considerada productiva por considerarse que forman parte de las labores domésticas. Las unidades en que las mujeres son las responsables de la producción agrícola no son reportadas por las estadísticas con je-

fatura femenina. La diferenciación en las remuneraciones para las mujeres no se presenta en la información que se proporciona. En términos generales, se subestima su participación.

La agudización de la pobreza ha hecho visible el trabajo de las mujeres, pero éste no es valorado. Los análisis de la pobreza deben reconocer la participación heterogénea de las mujeres en el campo, la cual está determinada por ser integrante de la unidad doméstica. Se debe reconocer, también, el valor del trabajo que realizan las mujeres, que están siendo el eje de los núcleos familiares, y proponer una distribución equitativa de los recursos, lo que significa reconocer las necesidades particulares de las mujeres y su participación en la producción agropecuaria.

En la búsqueda de ingresos para los integrantes de la familia, las mujeres han quedado relegadas: al sector tradicional de la economía, en la producción de subsistencia; a trabajos específicos de su sexo en la agricultura comercial, en la agroindustria y manufactura rural; a actividades de preparación y venta de alimentos; al trabajo a domicilio y al servicio doméstico. Las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en apariencia obtienen iguales salarios por las mismas labores que realizan los hombres. Pero, al segmentarse la producción en tareas que se distribuyen por sexo, edad y estado civil, reciben un pago diferente, a la vez que se exaltan las cualidades femeninas que son apreciadas en el mercado, como son la responsabilidad, la sumisión, la pasividad, la delicadeza y la ternura. El problema para la mujer en el medio rural no es sólo la falta de participación en condiciones de igualdad respecto al hombre sino que la mujer queda ubicada en posiciones subordinadas que reproducen sus niveles de pobreza.

La marginación de la mujer también se da en la esfera política. No son consideradas como sujetos con intereses propios y con capacidad de decisión. Una verdadera participación democrática requiere la aceptación de las mujeres en la política, actuando como dirigentes

en las organizaciones sociales del campo, y en la toma de decisiones al interior de las familias.

Pero el estudio del fenómeno de la pobreza queda inconcluso si se continúa negando la violencia familiar y sexual de que son objeto las mujeres campesinas e indígenas. La violencia contra las mujeres se presenta en la medida que le son asignados determinados papeles en nuestra sociedad, los cuales delimitan y determinan sus actividades. La violencia es una forma de expresión del poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Son pocos los estudios que se han hecho en nuestro país sobre la violencia en el campo contra las mujeres. Datos proporcionados por Núñez (2000) nos muestran que el 64% de las mujeres rurales es víctima de violencia familiar y que el 19% de las mujeres dice conocer casos de violación. Se presentan, también, casos en los que las mujeres, al obtener más ingresos que los maridos, viven la violencia de éstos, puesto que ellos pretenden reafirmar una autoridad que sienten cuestionada.

La reflexión de la pobreza de las mujeres en el medio rural implica comprender su realidad, lo que significa analizar su situación en términos de las relaciones de poder, de la desigualdad y de la discriminación. Se debe aceptar que la situación de las mujeres cambie, que ellas puedan asumir sus propias responsabilidades bajo su propia existencia, para poder plantear una sociedad más equitativa, diferente.

BIBLIOGRAFÍA

- BOLTVINIK, J., «El método de medición integrado de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo», en *Comercio Exterior*, núm. 4, México, abr, 1992
- _____, *Pobreza y necesidades básicas. Conceptos de medición*, PNUD, Caracas, 1990
- _____, «Indicadores alternativos del desarrollo y mediciones de pobreza», en *Estudios Sociológicos*, núm. 33, Colmex, sep-dic, 1994
- HELLER, A., *Teoría de las necesidades en Marx*, Ed. Península, Barcelona, 1998

decisiones
 cluso si se
 objeto las
 mujeres se
 papeles en
 ctividades.
 ombre ejer-
 ho en nues-
 eres. Datos
 de las muje-
 19% de las
 ambién, ca-
 los maridos,
 afirmar una
 rural implica
 zión en térmi-
 a discrimina-
 cambio, que
 ajo su propia
 iva, diferente.
 a. Una propuesta
), abr, 1992
 zión, PNUD, Cara-
 de pobreza», en
 , Barcelona, 1998

- MACKINNON, C., *Hacia una teoría feminista del estado*, Editorial Cátedra/Universidad de Valencia/Instituto de la Mujer, 1995
- MARRONI, G., «Trabajo rural femenino y relaciones de género», en Soledad González y Vania Salles, *Relaciones de género y transformaciones agrarias*, Colmex, 1995
- MARX, C., *Introducción general a la crítica de la economía política*, Siglo XXI Editores, México, 1980
- NÚÑEZ, M., *Charo: la feminización de la pobreza*, Uach, México, 2000
- Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Documento técnico y declaración regional sobre la pobreza*, Bogotá, Colombia, 1989
- SALLES, V., «Pobreza, pobreza y más pobreza», en *Las mujeres en la pobreza*, Gimtrap/Colmex, 1994
- SALLES, Vania, y R. Tuirán, «La investigación sobre la pobreza», en *¿Cuánto cuesta la pobreza de las mujeres?: una perspectiva de América Latina y el Caribe*, Unifem, México, 1995
- , «Mujeres y hogares en México: ¿cada vez más pobres?», en *¿Cuánto cuesta la pobreza de las mujeres?: una perspectiva de América Latina y el Caribe*, Unifem, México, 1995
- SCOTT, J., «El género, una categoría útil para el análisis histórico», en *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, J. Amelang y M. Nash., Ed. Alfons/El Magnanim/Instituto de Valencia, 1990
- VUSKOVIC, P., *Pobreza y desigualdad en América Latina*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, 1993
- , *La pobreza, desafío teórico y estratégico*, IIE-UNAM, 1994

en las organizaciones sociales del campo, y en la toma de decisiones al interior de las familias.

Pero el estudio del fenómeno de la pobreza queda inconcluso si se continúa negando la violencia familiar y sexual de que son objeto las mujeres campesinas e indígenas. La violencia contra las mujeres se presenta en la medida que le son asignados determinados papeles en nuestra sociedad, los cuales delimitan y determinan sus actividades. La violencia es una forma de expresión del poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Son pocos los estudios que se han hecho en nuestro país sobre la violencia en el campo contra las mujeres. Datos proporcionados por Núñez (2000) nos muestran que el 64% de las mujeres rurales es víctima de violencia familiar y que el 19% de las mujeres dice conocer casos de violación. Se presentan, también, casos en los que las mujeres, al obtener más ingresos que los maridos, viven la violencia de éstos, puesto que ellos pretenden reafirmar una autoridad que sienten cuestionada.

La reflexión de la pobreza de las mujeres en el medio rural implica comprender su realidad, lo que significa analizar su situación en términos de las relaciones de poder, de la desigualdad y de la discriminación. Se debe aceptar que la situación de las mujeres cambie, que ellas pueden asumir sus propias responsabilidades bajo su propia existencia, para poder plantear una sociedad más equitativa, diferente.

BIBLIOGRAFÍA

- BOLTVINIK, J., «El método de medición integrado de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo», en *Comercio Exterior*, núm. 4, México, abr, 1992
- _____, *Pobreza y necesidades básicas. Conceptos de medición*, PNUD, Caracas, 1990
- _____, «Indicadores alternativos del desarrollo y mediciones de pobreza», en *Estudios Sociológicos*, núm. 33, Colmex, sep-dic, 1994
- HELLER, A., *Teoría de las necesidades en Marx*, Ed. Península, Barcelona, 1998

- MACKINNON, C., *Hacia una teoría feminista del estado*, Editorial Cátedra/Universidad de Valencia/Instituto de la Mujer, 1995
- MARRONI, G., «Trabajo rural femenino y relaciones de género», en Soledad González y Vania Salles, *Relaciones de género y transformaciones agrarias*, Colmex, 1995
- MARX, C., *Introducción general a la crítica de la economía política*, Siglo XXI Editores, México, 1980
- NÚÑEZ, M., *Charo: la feminización de la pobreza*, Uach, México, 2000
- Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Documento técnico y declaración regional sobre la pobreza*, Bogotá, Colombia, 1989
- SALLES, V., «Pobreza, pobreza y más pobreza», en *Las mujeres en la pobreza*, Gimtrap/Colmex, 1994
- SALLES, Vania, y R. Tuirán, «La investigación sobre la pobreza», en *¿Cuánto cuesta la pobreza de las mujeres?: una perspectiva de América Latina y el Caribe*, Unifem, México, 1995
- , «Mujeres y hogares en México: ¿cada vez más pobres?», en *¿Cuánto cuesta la pobreza de las mujeres?: una perspectiva de América Latina y el Caribe*, Unifem, México, 1995
- SCOTT, J., «El género, una categoría útil para el análisis histórico», en *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, J. Amelang y M. Nash., Ed. Alfons/El Magnanim/Instituto de Valencia, 1990
- VUSKOVIC, P., *Pobreza y desigualdad en América Latina*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, 1993
- , *La pobreza, desafío teórico y estratégico*, IIE-UNAM, 1994

POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CAMPESINA
DE LOS AÑOS 90 CON ASIGNACIÓN GENÉRICA²⁶

IVONNE VIZCARRA BORDI

INTRODUCCIÓN

Así como el género y la pobreza son construcciones sociales con asignación femenina en los discursos, las políticas dentro del ámbito alimentario son construcciones sociales que responden tanto a mecanismos externos como internos de control social, con un fuerte sesgo de asignación genérica (*gendered*). Entonces, la asignación genérica se entiende como el conjunto de gestos, roles y actividades construidos socialmente, que designan los ámbitos de acción social de cada sujeto, según sea su sexo (varón o mujer) o género (masculino o femenino). Este sesgo viene de una ideología patriarcal reforzada, a través de las prácticas discursivas sobre el papel de los individuos en la sociedad, según sea su género; así, los varones son los responsables del manejo y de proveer los recursos para el sustento del hogar y las mujeres son las garantes del buen uso de ellos para el bienestar de su familia o «lo doméstico para la mujer y lo público para el hombre» (Quezada, 1996: 27).

Dentro del ámbito de lo político e institucional, este sesgo ideológico se prolonga y se encuentra, por ejemplo, que para el alcance del desarrollo rural y el aumento de la productividad, acorde con una

²⁶ Este trabajo es extracto del capítulo VIII, «Pobreza y globalización», del trabajo de tesis de doctorado en antropología, *Entre el taco mazahua y el mundo, la comida de las relaciones de poder, resistencia e identidades*. La tesis se sustentó el 16 de febrero en la Universidad Laval de Quebec y obtuvo el premio Mejor Tesis de Doctorado en Estudios Rurales, que otorgó la AMER en 2001.

visión incluyente de la población campesina y del papel reformado del estado, se diseñan mecanismos internos (programas) de asignación masculina, como es Procampo y Crédito a la Palabra, por ser los varones los poseedores de los recursos; en cambio, los planes de combate a la pobreza tienen asignación femenina, como es el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresá), ya que se considera que el cuidado del hogar es cuestión de género, en donde las mujeres tienen un papel esencial, aunque corrientemente los recursos no les llegan²⁷.

Progresá reconoce que existe un trato social desigual hacia las mujeres, por lo cual, como una contribución para erradicar dicha desigualdad, promueve la igualdad de género en las comunidades donde opera. Así, el Programa canaliza todos los apoyos económicos a las madres de familia. Ello tiene un doble cariz. Por un lado, el Programa se apoya en el hecho de que habitualmente las mujeres hacen un uso más juicioso, responsable y provechoso de los recursos que tienen a su alcance en pro de todos los miembros del hogar, pero particularmente de los niños y niñas; por otro lado, el Programa busca potenciar la condición de la mujer (desde niña), valorando y apoyando el decisivo papel que desempeñan las mujeres a favor del desarrollo familiar y comunitario. Para ello, satisfecerá varias de sus necesidades para el cuidado de su salud y nutrición. También, les acercará información y conocimientos que promuevan su desarrollo personal y el despliegue de sus potencialidades (Progresá, 2000).

La mayoría de estos programas sociales y productivos, que se ejecutaron durante la década de los noventa en México, tienen un objetivo que se asocia, con claridad, a la formulación de políticas de

²⁷ En los últimos años, las cuestiones de género aparecen en la mayor parte de los proyectos que financia el Banco Mundial (BM). Entre 1991 y 1995, 35% de los planes del BM estaban dirigidos, de forma específica, a las mujeres, y el 55% trataban de aspectos relacionados con el género, en donde se amplía la participación de las mujeres en los hogares, las comunidades o localidades (CEPED, 1996: 11-12).

alivio a la pobreza, como se observa en los discursos oficiales: identificar y apoyar aquellas estrategias que permitan a los hogares campesinos un sendero dinámico, para salir de la pobreza (Reardon, 2000). Sin embargo, la concepción, instrumentación y ejecución de cada uno de ellos tienen un sesgo social en su formulación inicial, que acuerda la asignación genérica a esos planes.

Con la perspectiva de género, con base en una etnografía multisitios²⁸ y fundados en puntos de observación (el discurso global, los programas, reformas y planes agropecuarios y rurales, así como la vida cotidiana de los hogares campesinos), en este trabajo se analizan y desglosan algunos de los programas y reformas —con sus respectivas asignaciones genéricas—, que llegan de ribete a la vida cotidiana de los hogares de los Matías Segundo y demás hogares examinados en una comunidad mazahua del Estado de México. Asimismo, con esta perspectiva, identifiqué problemas relevantes que conducen a entender el género como una variable clave que afecta, de alguna manera, las responsabilidades institucionales en el manejo de esos recursos cuando ya vienen sesgados, genéricamente (Rocheleau, Thomas-Slayter y Wangari, 1996).

LAS POLÍTICAS REFORMADORAS

La polémica en torno al nuevo agrarismo en México, el cual proviene de los cambios al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la nueva legislación agraria —que se puso en vigor en febrero de 1992²⁹—, se orienta, por una parte, a

²⁸ La etnografía multisitios es el enfoque metodológico que permite rechazar las categorías dualistas, que distinguen los niveles de abstracción entre lo local-global, lo micro-macro, así como la subsistencia y el sistema, y que impiden o limitan los estudios de objetos o realidades más complejas (Marcus, 1995).

²⁹ Desde el sexenio de López Portillo (1976-82), el estado ya había puesto fin al reparto de tierras. Época en que todas las políticas ponían el énfasis al aumento de la producción

que las nuevas reformas tienen fines para canalizar mayores recursos económicos y financieros del sector privado a la agricultura, aspecto que se considera decisivo para la capitalización del campo; pero, por otra parte, se considera que las acciones del estado están vinculadas con los procesos de globalización y de inserción al libre mercado, por lo que estas prácticas tendrían impactos diferenciados, según la estructura productiva social del agro mexicano³⁰.

El retiro del estado paternalista del sector ejidal pone al mercado como principal mecanismo para la disposición de los recursos. Abandonando el enfoque estatal, las nuevas políticas escogen, sobre todo, la demanda del mercado, la productividad y la rentabilidad como criterios clave, para los productores, al momento de tomar las decisiones para la atribución de recursos, donde la tierra es el más delicado (Otero, Singleman y Preibisch, 1997). Aunque las polémicas en torno a las posibles implicaciones de la nueva reforma agraria mexicana son más de índole ideológico que realista (Collier, 1994), la necesidad de las reformas agrarias surge del reconocimiento de esa realidad: una crisis productiva y la pobreza rural que, a juzgar por las agencias internacionales, son consecuencias de la antigua Ley Agraria y del papel del estado proteccionista (FAO, 1997).

La nueva legislación, aun cuando no se plantea como un mecanismo de acceso a la tierra por medio de la redistribución de ésta, sí deja en entrevisto que las reformas serán parte del paquete de oportunidades, para que las mujeres aspiren a acceder a la tierra (al menos en

agropecuaria, a través de la Ley de Fomento Agropecuario (LFA), y en particular a la promoción de la producción campesina, en donde el estado seguía siendo el agente regulador de esta promoción. En cambio, con las nuevas modificaciones a la legislación, el estado se retira, prácticamente, del control básico de la estructura social de la producción campesina. Entre estos cambios no sólo se legisla el fin del reparto agrario, sino que se da cabida a las reformas de asociación y pleno reconocimiento a la autoridad del núcleo ejidal, para que el ejidatario determine, en los casos que proceda, conforme a la nueva Ley Agraria, sobre su parcela (Baños, 1993: 2).

³⁰ La obra colectiva de Alcalá *et al.* (1996) y la de Rivera H. (1993) son algunos ejemplos del debate sobre el callejón sin salida en cuestión agraria mexicana y sus reformas actuales (Miller, 1994).

los discursos) y así puedan mejorar la alimentación y quizás el ingreso de sus hogares. No obstante, esta voluntad no puede pretender reducir las asimetrías de acceso entre los géneros ni entre los diferentes tipos de productores, pues el aprovechamiento de las oportunidades será regulado en los mercados de tierra con dominio masculino.

Por tales razones, las nuevas modificaciones agrarias vuelven a tener una asignación de género masculino. Mientras a las mujeres campesinas se les siga responsabilizando del cuidado de la familia como el papel más importante de su género y no sean consideradas productoras potenciales (FAO, 1997), su acceso a la tierra y su inserción económica y social quedarán sujetos a las condiciones locales de subsistencia, y seguirán sometidas a las mismas relaciones de poder.

En otras palabras, para que las mujeres tengan acceso a la tierra, cuando por más de 70 años han estado excluidas de toda posibilidad (a menos que hayan sido viudas jefes de hogar y reconocidas por el cuerpo jerárquico ejidal), tendrán que comprarla en el mercado de tierras, pues difícilmente los varones aceptaron registrar sus parcelas a nombre de sus esposas, hermanas o hijas. Entonces, para que las mujeres obtengan tierras, no sólo deberán de contar con ingresos propios suficientes, sino encontrar áreas disponibles que se les quieran vender, eso sin contar con la dudosa calidad del terreno.

En la comunidad de estudio (que se encajona en la alta montaña de San Felipe del Progreso), después de cuatro largos años de convencimiento comunal para certificar sus tierras ejidales ante Procede, en 1998, tanto titulares como posesionarios procedieron a subdividir sus tierras, según el número de hijos varones que tenía cada hogar. Esta práctica mazahua excluyó, de principio, a un gran número de mujeres, pero no impidió que, gracias a la lucha de algunas de ellas, se les reconociera como posesionarias o inclusive titulares, cuando no existía algún varón dentro del hogar. Por otra parte, en esta batalla, la compra de tierra por parte de las mujeres se da en una escala

recursos
, aspecto
pero, por
ncladas
cado, por
gún la es-

mercado
os. Aban-
obre todo,
como cri-
is decisio-
s delicado
as en torno
xicana son
cesidad de
alidad: una
s agencias
graria y del

in mecanis-
ésta, sí deja
oportunida-
al menos en

particular a la
agente regulador
ión, el estado se
ción campesina.
e da cabida a las
jidal, para que el
Agraria, sobre su

algunos ejemplos
reformas actuales

marginal no por la falta de deseo femenino sino por limitantes de orden cultural-ideológico (Vizcarra, 2001).

Las prácticas mazahuas corresponden a una ideología patriarcal, que se heredó y se reproduce de afuera hacia a dentro y viceversa. Así, por ejemplo, un campesino mazahua exclama que «no es la costumbre que las mujeres compren tierra», «después, qué van a hacer los hombres sin tierra» o «no, pues ya hay mujeres como locas que quieren una parcela a su nombre, le digo a mi primo que no sea tonto...». Expresiones como éstas son frecuentes, pero si se dan con intensidad es porque los cambios se empiezan a anunciar.

La obstinación para registrar a las mujeres en la titulación o certificación de parcelas es muy profunda en esta comunidad. Sin duda, las leyes de reparto agrario (1915, 1917 y 1920) fueron medidas legales, ideológicas y estructurales que obstaculizaron la justa incorporación de la mujer a los beneficios directos de las reformas agrarias, aun cuando ella sea considerada como jefe del hogar, pues no participó en la toma de decisiones de la cúspide ejidal (Baitenmann, 2000). Pero, sobre todo, las prácticas fundadas en la democracia patriarcal (Mallon, 1995) fueron y siguen siendo más dominantes que el marco legal para que las mujeres tengan el derecho a la tierra.

Pese a esos acondicionamientos culturales, el derecho a la propiedad de la tierra se ha convertido en un campo de batalla donde las mujeres luchan con sus adversarios (ideológicos) para acceder a tal recurso. Es frecuente observar, cada vez más, grupos de mujeres en las reuniones con los gestores del Procede; tal vez sólo asistan en representación de sus esposos, padres, hermanos u otros varones cercanos, pero también es cierto que el Procede ha permitido que muchas mujeres vean en este instrumento el medio legal de presión hacia sus varones, para que ellas o sus hijas sean beneficiarias de una de las parcelas. Este cambio, aparentemente ocasionado desde afuera, se debe a que el programa promueve el derecho a la tierra a am-

bos sexos, pero en realidad esto no ha venido más que a recrear (por añadidura) una lucha interna y dinámica que ya existía en la comunidad, entre los hogares y entre los géneros y generaciones. Batalla que se ha redefinido, de manera constante, desde que las niñas y jóvenes frecuentan más la escuela, y se integran, masivamente, a los mercados de trabajo asalariado. Además, no hay que minimizar la importancia de los discursos de género, clase y etnia que atraviesan estas nuevas esferas de participación social.

PROGRAMAS CON SESGO MASCULINO

Para de Janvry y Sadoulet (1998), en la óptica neoinstitucionalista, la tierra puede ser una ruta para salir de la pobreza, siempre y cuando el acceso a este recurso se asocie con programas de desarrollo y con la posibilidad de que los productores sean competitivos. Pero si el mercado de tierra queda como el único mecanismo de acceso, cabría interrogarnos: ¿cómo el estado (neoinstitucionalizado) podría intervenir en el mercado para asegurar la subsistencia de más de dos millones de hogares de campesinos (marginados)?

A esta pregunta no la atenderá el mercado como se había previsto en un inicio, pues la población «incompetente» para «modernizarse» sigue aumentando, en términos relativos; por ello, el estado sigue interviniendo, de forma directa, en la cobertura de sus programas de asistencia social, que no sólo deben proteger a los hogares en extrema pobreza sino, sobre todo, salvaguardar a los productores de maíz temporal del desgravamiento arancelario que traería consigo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Cuatro programas de rescate y amortiguamiento a la apertura, entre 1992 y el 2000, penetraron en los hogares mazahuas de San Felipe del Progreso, y alternan, de manera discontinua, el acceso al maíz: Crédito a la Palabra, cuya agencia ejecutora es la Secretaría de Desa-

rollo Social (Sedesol); Procampo, que controla, directamente, el poder federal, a través de su agencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar); el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firc) y el Programa de Empleo Temporal (PET). Estos planes tienen, en principio, una asignación de género masculino, pues se diseñaron para los productores varones y para los posesionarios de la tierra, lo que no impide que la mayoría de las mujeres puedan interferir y obtener los recursos de alguno de los programas.

Pese a que todos estos planes, al igual que los dirigidos a combatir la pobreza, se crean con fines políticos y con carga electoral, y por tanto son temporales, pues una vez que cumplieron su objetivo político desaparecen o son sustituidos por otros concebidos para el mismo fin, pero bajo otro aparato burocrático (Vizcarra, 1999), al menos durante el tiempo de su ejecución, introducen algunos cambios en las dinámicas de los hogares campesinos mazahuas, para que de alguna manera aseguren el autoconsumo de maíz, por lo que vale la pena reparar en los programas.

CON EL CRÉDITO A LA PALABRA

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) fue uno de los primeros mecanismos de control social que se dirigió para combatir la pobreza como parte de la política social compensatoria al desarrollo neoliberal de la economía mexicana. El papel estado-benefactor se redujo en acciones concretas, que deberían mejorar las condiciones de vida de los pobres, aunque no de los más pobres (Raygoza y de la Torre, 2000)³¹.

En la comunidad de estudio, se organizaron diferentes comités de Solidaridad para realizar obras de infraestructura, como la amplia-

³¹ El Pronasol fue ejecutado por la Sedesol. Sus principales acciones fueron obras públicas de infraestructura: escuelas, pavimentación, rehabilitación del sistema de alcantarillado, electrificación, agua potable y carreteras rurales (Raygoza y de la Torre, 2000).

ción del panteón; además, se pintó la escuela primaria del centro y se construyeron canchas de basquetbol y dos aulas en la secundaria técnica. Asimismo, se entregaron seis becas Pronasol y, en un acto democrático, los niños decidían a quiénes se les concedían las becas por un año escolar (300 pesos mensuales y despensa). Entre otros apoyos, se creó el programa Crédito a la Palabra, y se otorgaron préstamos blandos para acciones productivas hacia los campesinos y los hogares mazahuas.

La propuesta de organizar grupos de acreedores en las comunidades llegó de la presidencia municipal de San Felipe del Progreso por iniciativa de la Sedesol. El primer préstamo lo otorgó el programa, en 1993; el monto variaba, según las hectáreas cultivadas del grupo en gestión; a cambio del préstamo, cada productor debería entregar una factura o recibo de alguna herramienta de trabajo, maquinaria, hato de ganado, animales de tiro, transporte o molinos para el maíz, que correspondiera al monto total del préstamo.

Al año siguiente, los campesinos deberían de haber reembolsado el adeudo a una agencia del municipio; sin embargo, debido a que, en 1992, el presidente municipal cometió fraude con los programas de Solidaridad, los campesinos desarrollaron una cierta desconfianza hacia la administración pública municipal. Para subsanar este inconveniente y dar credibilidad al programa, los agentes burocráticos sugirieron abrir una cuenta en el banco, para depositar el adeudo de los campesinos, el cual se convirtió en su propio recurso crediticio. De esta manera, a los campesinos que cumplieron con su pago del primer adeudo, se les otorgaron, en lo sucesivo, nuevos préstamos. A los del caso contrario, se les canceló el segundo crédito y con ello la posibilidad de volver a integrarse al programa.

En 1993, comenzó a funcionar el primer grupo con 20 productores. Pablo fue de los primeros que se inscribió. A cambio, otorgó la factura de un toro que compró, para suplir su yunta. Al año siguiente, adquirió borregas, y uno después, aplanó con cemento el piso de su

casa. El programa no ha sido bien aceptado por todos los hogares, debido a que hay que rembolsar el préstamo en una fecha límite, además de que necesitan contar con la agilidad de manejar las facturas, lo cual es nuevo para la mayoría de las familias.

No obstante su poca aceptación, debido a la administración del programa por un comité formado por ellos mismos, en 1999, se formó el tercer grupo de Pronasol, para participar en Crédito a la Palabra, pero en esta ocasión las mujeres que no tenían en su posesión algún predio podrían ingresar al grupo gestor, siempre y cuando las avalara algún poseionario.

CON EL PROCAMPO

Procampo es un programa de pago directo a los productores de temporal. Se instauró en 1993, y empezó a pagar en 1994 (el primer año en que entró en vigor el TLCAN). Su lapso de vida es de 15 años legislativamente, es decir, el mismo tiempo en que aparecen las desgravaciones arancelarias lentas, con cupos bajos de importación de maíz, frijol, cebada y oleaginosas acordadas en el TLCAN. Sin embargo, el gobierno ajustó los precios nacionales a los internacionales y junto con la crisis financiera y las tres grandes sequías (1997 a 1999) de vastas regiones de temporal, las cuotas de importación ya se rebasaron, por lo que se tuvo que ajustar el programa a 11 años.

El presupuesto federal destinado a los pagos de Procampo fue aumentando al ritmo de 1.3% anual, de 1994 a 1999, orientación que iba a contracorriente de las recomendaciones generales de disminuir el gasto público en políticas proteccionistas, las cuales se acordaron en el marco de negociaciones del TLCAN, de la Ronda de Uruguay y de la OCDE (OCDE, 1997). El pago directo de Procampo a los productores si bien es un mecanismo que se diseñó para ir remplazando, progresivamente, los precios tope a la producción, y compensar la

baja de los precios nacionales de granos y oleaginosas por referenciarlos a los internacionales (principalmente los precios en Estados Unidos), ha sido un instrumento efectivo de apoyo a la producción y al consumo de subsistencia. Aunque no beneficia, directamente, a la producción de maíz (los pagos llegan después de la aplicación de fertilizantes), ni modifica las decisiones de los productores sobre la orientación de sus cultivos, sí compensa una parte de la pérdida del poder de compra de maíz de los hogares, que por lo general es más alto de lo que pueden vender.

En comparación con el programa de Crédito a la Palabra, Procampo es un recurso para todos los campesinos que tienen en su posesión una parcela productiva. Para una gran parte de los productores que no habían trabajado con las instituciones pasadas (Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado de México Codagem, Banrural), ésta sería la primera ocasión en que recibirían un apoyo directo del gobierno para solventar los costos de producción del maíz, y en que, en caso de ausencia, las mujeres podrían ejercer los trámites y el cobro.

En el primer trimestre de 1995, los agentes (funcionarios burocráticos) de la Sagar se presentaron con el comisariado ejidal y el tesorero, en la comunidad. En la reunión con todos los poseedores o sus representantes (esposas, hermanas y/o madres), se explicó el desarrollo del programa, el cual consiste en pagos relativos a la superficie cultivada por productor. Mediante el llenado de una forma, cada productor registró las hectáreas para que se le calculara el único pago anual. De esta situación, surgieron los que pretendían sacar provecho de las personas, convenciéndolos de registrar más terreno del que tuvieran, con el fin de recibir mayores beneficios. Una vez realizados los cálculos, la superficie cultivada rebasaba la superficie total de la comunidad, y se crearon, de nuevo, conflictos y desconfianza entre los hogares, los consejeros ejidales y con el gobierno. Duró todo un año para que se ajustaran las dimensiones de cada predio,

hasta que la mayoría de los productores se convenció de la inscripción justa al programa.

En febrero de 1996, llegó el primer pago de Procampo; los cheques se repartieron un viernes después del mediodía. Junto con los agentes burocráticos se presentaron varios funcionarios, quienes convencieron a la mayoría (sobre todo mujeres) de cambiar los cheques con ese banco portátil, a cambio de una comisión (bastante generosa). Pablo menciona que eso bastó para tenerle desconfianza al plan. Los que reclaman directamente son los productores varones. Las mujeres prefirieron pagar hasta 300 pesos por el cambio del cheque, con el fin de tener acceso inmediato al dinero, antes de que sus esposos lo malgastaran. El desacuerdo entre ambos sexos ha recreado varios conflictos; sin embargo, en los años siguientes, las mujeres aprendieron a dar una propina a los cambiantes en lugar de recibir el dinero con el descuento correspondiente por comisión. Pero también surgieron otras formas de cambiar los cheques más ventajosas para los productores.

A partir de Procampo, don Valente fía el fertilizante a todos los beneficiarios del programa, y el día que reciben los cheques, don Valente se los cambia en efectivo, cobrándose el pago del fertilizante. Esta transacción no muy generalizada ha permitido que los hogares que subsisten de actividades agrícolas siembren maíz en las fechas indicadas (según el temporal) sin tener que depender de salarios extra agrícolas para la compra de los insumos.

CON EL FIRCO Y EL PET

El Firco fue la agencia ejecutora que financió programas provisionales con los campesinos de temporal, quienes a cambio de su trabajo recibían maíz y frijol, mientras se creaban las condiciones institucionales, que canalizarían los recursos de un préstamo del BM. El préstamo (85

millones de dólares) era destinado a crear (1994) el Proyecto de Desarrollo de Áreas de Temporal (PDAT), el cual debería beneficiar a los productores de menos de 10 há de temporal con pequeños proyectos productivos, tecnológicos y ecológicos (Adelson, 1999).

Debido al cambio de sexenio, a la crisis económica del país y a los reajustes sectoriales, el PDAT nunca arrancó; en su lugar se financiaron los tres componentes de Alianza para el Campo: Fert-irrigación, Establecimiento de Praderas y Fomento Lechero (*ibid.*). Con esto, se dejaba de lado a los productores maiceros de temporal, quienes eran afectados por la evolución del precio internacionalizado del maíz. Esta situación provocó que los agentes del BM presionaran al gobierno mexicano para hacer efectivos los recursos que sobraban, y se destinaran a programas menos excluyentes. En 1997, se creó, bajo esta condicionante, el Programa de Empleo Temporal (PET), con el objetivo de contratar productores para la conservación de suelos en municipios de alta y muy alta marginalidad, seleccionados por la Sagar. Entonces, se escogió al ayuntamiento de San Felipe del Progreso.

En agosto de 1998, durante mi trabajo de campo, en menos de una hora, la comunidad completa se enteró de que el gobierno repartiría apoyo en dinero en efectivo. Las filas crecieron al pasar el tiempo. Dos de ellas se organizaron, según la costumbre de la comunidad: en un lado, los varones (no más de 20), y en el otro, las mujeres con sus hijos (más de 300 mujeres). Pablo y Eduardo dicen que esta costumbre se debe a que hay más mujeres que varones en la comunidad, que residen permanentemente, y no es justo, para los hombres, hacer colas tan grandes. Esta práctica no es sino una relación de poder masculino, que se ejerce en la esfera pública cuando las mujeres son mayoritarias. Hacerlas esperar, para atender primero la hilera de los varones, y el que los encargados interrumpen el reparto de sobres (con el dinero) por una hora para ir a echarse un taco, una vez que despacharon la fila de los hombres, son muestras claras de esta relación.

El comisariado ejidal y el tesorero con ayudantes municipales fueron quienes repartieron los sobres, por supuesto, con la cobranza de la famosa comisión; según Pablo, llegan a juntar hasta cuatro mil pesos en un día. Tanto a varones como a mujeres les pregunté si sabían qué programa otorgaba el apoyo y cuánto les correspondía; la mayoría desconocía la información. Los que más preguntaron sobre el origen del apoyo eran los varones, quienes pensaban que provenía del Firco, pues los de Fideicomiso fueron a solicitar algunos datos semanas antes. Por fin, con las autoridades ejidales, se logró confirmar que la ayuda provenía del PET.

Para los hogares campesinos mazahuas, estos apoyos vienen del gobierno y, a cambio de unas horas de fila, obtuvieron dinero gubernamental, cuya cantidad se asignó, de acuerdo con el tamaño del predio. Con estas prácticas de respaldos esporádicos, el estado no se ha retirado del todo de sus funciones, lo que da pauta a que, de nuevo, los varones y las mujeres campesinas establezcan con el estado una relación paternalista.

PROGRAMAS CON SESGO FEMENINO

Con la reproducción de las prácticas discursivas sobre el reconocimiento de la mujer como agente productivo, generador de ingresos y responsable directo de la alimentación para el buen desempeño del hogar, el FIRA, en coacción con Pronasol, Progresía y Gente Nueva (ONG), diseñó mecanismos internos que permitan a las mujeres acceder a recursos financieros (crediticios y monetarios), a proyectos productivos y rentables, a becas de estudios para sus hijos, a despensas alimentarias y a servicios médicos.

Estos programas señalan en sus propuestas que «todavía los proyectos de desarrollo rural y agropecuario están orientados hacia los jefes de familia, siendo difícil, para las mujeres, el acceso al proceso

de modernidad rural con proyectos novedosos, tecnología, producción de insumos y créditos» (FIRA, 1996: 1) y que «un hecho lamentable es constatar que, por encima de la inequidad que de suyo significa vivir en condiciones de pobreza, generalmente las mujeres sufren condiciones más agudas de marginación y exclusión, y que éstas cobran expresión desde edades tempranas» (Progres, 1997: 2).

Con este amplio reconocimiento del papel de las mujeres, que impulsan discursos dominantes sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares pobres rurales (véase Mestrum, 2000), el neoinstitucionalismo orienta su intervención en dos líneas de acción interdependientes, pero diferentes. La primera es la concepción ideológica de los programas. En ésta, se aprovechan los cambios legislativos para crear las condiciones institucionales propicias de acceso a cajas de ahorro, créditos y proyectos productivos, con el fin de que las mujeres los soliciten, libre y voluntariamente. La segunda es instrumentar y ejecutar la distribución de los recursos, es decir, cómo otorgarles, de manera directa, a las *madresposas* o madres recursos de bienestar social, para comprometer el desarrollo humano futuro de sus hijos (capital humano). Los recursos son: la educación, la alimentación-nutrición y la salud reproductiva y preventiva.

DE LA PRIMERA LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Con el Pronasol y el FIRA-UAIM

Pese a que desde 1971 se creó, en el nivel nacional, el programa que otorga a la mujer la posibilidad de organizarse legalmente y de solicitar recursos para crear unidades agrícolas industriales para la mujer

(UAIM)³², fue hasta 1979, tiempo después del año internacional de la mujer (1975), cuando se dio el establecimiento normativo, con el fin de que las mujeres tengan acceso al financiamiento de las UAIM. Sin embargo, esta posibilidad no fue privilegiada, prácticamente, para la mayoría de las hijas del régimen agrario (Labrecque, 1987): las mujeres campesinas mazahuas, pues su capacidad de organización y solitud dependían, completamente, del comisariado ejidal. En 1981, se formó sólo una UAIM textil, en la cabecera de San Felipe del Progreso, que beneficiaba a 40 mujeres mazahuas, pero pronto se convirtió en una empresa que dirigían terceros (gubernamentales), en beneficio de unos cuantos. Hortensia trabajó algún tiempo en la UAIM a destajo, pero desde que se convirtió en un taller de tejido, no ha podido reintegrarse, pues el costo del pasaje (15 pesos) redondo consume la mitad de la paga por día.

El poco éxito de las UAIM se debe, entre otros motivos, a los acondicionamientos culturales de la democracia patriarcal, que se reproduce en el espacio ideológico ejido-estado. Es decir, que aun con los cambios legislativos, los varones vieron en este proyecto una actividad secundaria y complementaria al ingreso del jefe del hogar. Además, debido a que las reformas agrarias de 1992 no cambiaron la figura legal de las UAIM, éstas se quedaron como formas asociativas al ejido, por lo tanto, el sujeto de rédito es el mismo ejido, que proporciona la garantía necesaria ante los organismos financieros y no las mujeres. Así, desde entonces (de 1979 a 1996), el 9% de los ejidos integraron una UAIM (FIRA, 1996: 2). Por su parte, Banrural fomentó la integración de la mujer rural como sujeto de crédito, y otorgó préstamos de 1979 a 1999 a 466 UAIM, o sea, al 20% del total (*ibid.*: 3)³³.

³² Grupos de 15 mujeres como mínimo, mayores de 16 años y sin posesión de tierras ejidales, tenían el derecho de solicitar a los consejos ejidales una parcela de igual tamaño a la de un ejidatario, para que practicasen proyectos agropecuarios generadores de ingresos (FIRA, 1996).

³³ El artículo 54 de la Ley General de Crédito Rural de 1976 establece que todas las instituciones oficiales y de la banca privada deben considerar sujetos de crédito rural a las personas

Con los cambios estructurales y a la puerta de la globalización, algunas de las UAIM pasaron a revitalizarse en regiones estratégicas para la expansión de las maquiladoras, como es el caso de las de Yucatán (Labrecque, 1998), y otras fueron consideradas como proyectos de bienestar social, administrados por Pronasol, mediante el programa de Mujeres en Solidaridad, a partir de 1989. Estos últimos financian, principalmente, planes de instalación de molinos de nixtamal en 184 comunidades. A este esquema se agregaron los apoyos Conasupo, los cuales se otorgaban para el establecimiento de tiendas, panaderías y tortillerías (FIRA, 1996).

Asimismo, en 1992, el FIRA se unió a los pocos organismos financiadores de proyectos productivos conducidos por mujeres campesinas. A partir de que el enfoque neoinstitucionalista se difunde en todas las instancias públicas y privadas, gubernamentales o no, el FIRA amplía su base crediticia a las UAIM y a las empresas privadas que manejan mujeres y que generan empleos. La UAIM de Zinacatán, que surge de la necesidad de las mujeres de no depender del salario de sus varones—quienes dejaron de cultivar maíz, para comprar ése y otros alimentos, en 1992—, generaba 39 empleos. Con el apoyo que amplió el FIRA, en 1995, originaba 110 vacantes, en pequeños proyectos artesanales y tortillerías (FIRA, 1996: 9). En el Estado de México se apoyó con más de 800 mil pesos, en 1995, a la empresa privada Actividades Florícolas, del grupo VisaFlor, que generó 500 empleos femeninos (*ibid.*).

La apertura de estos canales de acceso a créditos, para la gran mayoría de mujeres mazahuas, no está dentro de sus posibilidades (u oportunidades), porque los hogares marginados por definición están excluidos del apoyo crediticio de la banca comercial y, además, porque las figuras crediticias no consideran a las mujeres campesinas

físicas y morales: productores, ejidos, comunidades, sociedades de producción rural, uniones de ejidos y comunidades, uniones de sociedades de producción rural, sociedades rurales de interés colectivo y UAIM, en forma de asociaciones y sociedades (*ibid.*).

como personas físicas y morales, sujetas de crédito, fuera del dominio ideológico patriarcal y organizacional del ejido.

Con otros esfuerzos gubernamentales

Las posibilidades de acceder a recursos crediticios productivos para las mujeres por esta vía institucional son, prácticamente, nulas. Empero, existen otras experiencias con instituciones de beneficencia social (DIF) y de cohesión política (PRI) que han promovido actividades con las mujeres, con el fin de incentivar su organización y participación en proyectos que, aunque no necesariamente generan ingresos, ofrecen algún tipo de beneficio, directo o indirecto, sobre la seguridad alimentaria del hogar, en el momento de su aplicación.

Uno de los proyectos (por parte del DIF) en el que los hogares observados participaron fue el de Formación para Construir Estufas Ahorradoras de Combustibles de Alto Nivel. El proyecto se ejecutó entre 1992 y 1993, y una vez que concluyó el curso, a cada una de las participantes se les otorgó una parte del material para construcción; asimismo, se les vendió medias despensas o medias canastas básicas con precios subsidiados, y se les dieron, de forma paralela, cursos de tejido y costura.

Las mujeres que participan en los comités locales o se adhirieron al PRI reciben beneficios directos, como material para construcción, estufas y/o tanques de gas.

Como dicen por ahí, aunque nada más lo que sobra me van a dar, pues por eso no, no voy a dejar (el PRI). Yo soy del comité; ahí, en el centro, yo soy del comité directivo estatal; me nombraron secretaria. Ah, pus aquí tengo las credenciales. Yo soy del PRI, porque trabajo qué voy ir a pedir; soy miembro activo del PRI, secretaria de finanzas; yo siempre del PRI, yo no cambio de partido, para qué me voy a cambiar. Como yo le digo a mi esposo, mi nacimiento fue ...; yo nací

³⁴ El su sitio obtuvo sitio restru
³⁵ Ad. Creac

domi- cuando estaba el PRI, pues, es ése que voy siguiendo, ¡je, je, je!, pues, sí, ¿para qué voy a cambiar?; mucha gente ya cambió; está Martina, que es del PAN, y el PAN no da nada. El PRI da algo, da material, da despensa, y ya cuando está ahí, ya cuando se escucha que viene a dar despensa o material con el PRI. Acá abajo es del PRD. Yo no cambio; yo digo: ¿para qué voy a cambiar cada rato?; como nací, así voy a morir, ¡je, je, je! Ora, yo llevaba mi credencial para San Felipe y fui a preguntar un curso con la señora Elda y, pues, que sí me va a dar beca de mujeres, dice. Si por eso le dije a mi esposo: no, yo no soy tonta... Ya preparo mi credencial para preguntar un trabajo allí... (Modesta, 41 años).

DE LA SEGUNDA LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Con Gente Nueva

Me detendré, con mayor especificidad, para mostrar los cambios en las dinámicas domésticas y las reacciones que las mujeres han tenido frente a nuevos mecanismos de control social que se diseñaron con valores universales sobre la igualdad y libertad.

A la Asociación Programa Compartamos, IAP, la fundó Gente Nueva, en 1987. Lleva(ba)³⁴ a cabo tres proyectos con mujeres, en la comunidad San Miguel de la Labor (y en muchas otras poblaciones mazahuas del municipio): Programa de Alcancías (cajas de ahorro), Un Kilo de Ayuda y Programa de Alimentos³⁵.

³⁴ El 21 de junio de 2000, traté de comunicarme con Gente Nueva, a través de internet, pero su sitio ya no existe, aunque el año pasado realicé una consulta por este medio, de ahí que obtuviera esta información. Envié un correo electrónico a la dirección que anoté, pero el sitio web ya no existe. Esto me hace sospechar que el programa desapareció o está en reestructuración.

³⁵ Además, existen otros programas específicos en la misma Asociación: el Programa de Creación de Microempresas y el Programa de Bancos Comunes.

Gente Nueva es una organización internacional de jóvenes y adultos (de ingresos medios a altos). Busca promover, a través de sus acciones, en provecho de los pobres y sin fines lucrativos, una corriente positiva a favor de los valores universales humanos, morales y espirituales, «sustentando su motivación en el compromiso y amor a la patria». Los programas de ayuda que desarrolla (integralmente) son de asistencia social y para las comunidades indígenas marginadas (tarahumaras, lacandones, tzotziles y mazahuas). Los fondos para estos planes provienen de donaciones filantrópicas de individuos, de empresas y de instituciones financieras y bancarias mexicanos(as) y extranjeros(as), principalmente de Estados Unidos³⁶.

Dos *madresposas* mazahuas (entrevistadas en agosto de 1998) participaban en el Programa Generadora de Ingresos, desde mayo de 1997. Éste consiste en estimular a las mujeres campesinas el ahorro grupal y comunitario. Con el fondo que se capta, se autofinancian préstamos bancarios, los cuales se otorgan a un grupo de mujeres (de 15 a 20) organizadas, principalmente, por promotoras que conocen la región. El día que tuve la oportunidad de acompañar a una de ellas a una reunión para la entrega de préstamos, observé los conflictos que genera, entre las mujeres, la organización que impone el Programa, así como los ajustes en la vida cotidiana que implica asistir a las reuniones.

Después de esperar cuatro horas a la promotora y a la supervisora de zona, se celebró una junta (a la orilla de la carretera) para elegir una nueva tesorera y una secretaria del grupo. Por su poca experiencia y debido a que la tesorera anterior no llegó a la sesión, corrieron

³⁶ Estas donaciones son sujetas a deducción de impuestos, que las empresas y residentes de Estados Unidos deben pagar en su país, cuando los ingresos se obtuvieron en México. Para evitar pagar la doble tributación, se creó un convenio (1994) entre ambos países. Se registraron, entre 1994 a mayo de 2000, 160 organismos mexicanos, los cuales se beneficiaban de las donaciones; todos están inscritos en el Centro Mexicano de Filantropía. Entre los que vale la pena destacar están: el Centro Integral de Apoyo para el Pobre más Pobre, el Organismo de Nutrición Infantil, el Banco Internacional de Alimentos, la Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana y la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Todas son asociaciones civiles.

los rumores del desvío de fondos; luego de dos horas de alegato, una de las mujeres aceptó a regañadientes, por chismosa, ser secretaria de la promotora.

El nuevo arreglo implicó nuevas responsabilidades, como fueron los trámites en el banco (depósito y cambio del cheque) en Atlacomulco, avisar a todas las integrantes del grupo sobre los días y horas de reunión, así como vigilar que cada una de las mujeres cumpla con sus pagos. Según la nueva secretaria, se metió en un problema, «pues con dos negocios (un molino de maíz y una tiendita rural) y, ahora esto, no voy a poder», pero su temor más grande es que las otras mujeres le carguen la envidia, que le trae mala suerte³⁷. Esta barrera ideológica se ha modificado a medida que otras mujeres se integran a proyectos o programas parecidos como el Progresá.

Las cajas de ahorro, más que un sistema de crédito para generar ingresos, son, de cierta manera, una alcancía institucional. Las mujeres deciden cuánto pueden ahorrar por semana y lo juntan en su grupo, para depositarlo en una sola cuenta, que administra la Asociación Programa Compartamos (con sede en Monterrey) con el Banco Inverlat. Cada mes, si ellas lo prefieren, se benefician de los intereses, según la cantidad que cada mujer ahorró (la tasa de interés es de 15% anual). Después de seis meses de ahorro, una o varias (que no pase de la mitad del grupo) tienen derecho a pedir un préstamo igual o menor a lo ahorrado, el cual pagará cada semana, un mes después de recibir el crédito. Una de las mujeres cuenta que con ese dinero

³⁷ La brujería se practica mucho entre las mujeres. Por lo general, relacionan las desgracias familiares, la muerte, las enfermedades, los accidentes y la pérdida de empleo con una brujería, por envidia. Por ejemplo, una *madresposa* de 28 años de edad atribuye que la muerte de dos de sus hijas (antes del año de edad) se debe a que le han echado la envidia o el mal de ojo a su hogar, porque está relativamente mejor que otros hogares. Ambas hijas murieron de neumonía (primera causa de mortalidad infantil en menores de cinco años). Sus sospechas se basan en que las llevaba al doctor hasta Atlacomulco, pero las inyecciones que les recetaron no fueron suficientes. Sin embargo, de su primera hija, quien sufrió el mismo padecimiento, ella, dice: «la salvé, porque la llevé a tiempo con el doctor, que ése era bueno, pero creo que me echaron mucha envidia, porque estaba muy fregada con mi vida, en casa de mi suegra».

llevó a su hija al hospital (quien murió) y, en otra ocasión, lo invirtió en mercancía para su tiendita. Para ella, «lo difícil es aguantarse en el grupo que te toca, para seguir teniendo los ahorros y préstamos. Hay muchas que ya no pagan y se salen; luego, no se pueden inscribir, porque dicen que son incumplidas o ya no tienen dinero.

En la comunidad de estudio existían, hasta 1998, dos grupos de mujeres y otro estaba formándose. Sin importar la orientación filosófica que exista detrás de la asociación, las mujeres inscritas son dueñas de su dinero y lo distribuyen según las necesidades de su hogar y de ellas. La mayoría de las mujeres obtienen el dinero de sus actividades de intercambio y del dinero que les dan sus hijos que trabajan fuera de la comunidad. Es muy raro que introduzcan las sumas que les dan sus esposos, pues de esta manera aseguran un justo retorno de sus recursos. Por esta razón el proyecto no se ha expandido, a pesar de que la invitación es abierta para todas las mujeres, pues para inscribirse por primera vez se deben depositar 200 pesos (seis salarios mínimos/al día) y, como es de esperarse, no todas las mujeres tienen acceso a esa cantidad (de recursos propios).

El dinero se ocupa en varias situaciones; de las que predominan, puedo mencionar las fiestas religiosas, los compromisos sociales (bautizos, matrimonios, etc.) y la compra de borregos y gallinas. Dado que el año de 1998 presentó un temporal malo y más de la mitad de las tierras no se sembraron o se perdieron, algunas mujeres pensaban en comprar maíz con ese dinero.

Por su parte, algunas mujeres (*madresposas*) han estado inscritas en el Programa de Alimentos, donde adquieren despensas subsidiadas cada 15 días, y en el programa Un Kilo de Ayuda, que consiste en otorgarles arroz, frijoles y harina nixtamalizada a los hogares sin tierra y, a cambio, se les obliga a consultar a los médicos del Hospital Mazahua, que ahora es sede de los programas de Gente Nueva. Ahí, se reparten los kilos de alimentos, se venden las despensas a costos de mayoreo y se dan demostraciones de huertos familiares.

Con Progresas

Otro programa de mayor cobertura e importancia política, que hoy en día sigue siendo noticia en los medios de comunicación, problemática en los recintos universitarios y científicos y polémica en las tribunas políticas, es el Progresas.

Por su carácter focalizador, el Progresas se convierte en el medio por el cual se favorecerá el aprovechamiento de las oportunidades de las familias marginadas. Si bien el Programa no garantiza producir cambios en las nuevas generaciones, es de los pocos que presenta una alternativa de alivio a la pobreza en los tres últimos años.

Junto con la ausencia de políticas de desarrollo social, programas de apoyo productivo para los campesinos, programas de creación de empleos y salarios justos, así como programas sociales que operaban hasta 1999 serían sustituidos, de forma gradual, por el Progresas, con el fin de no duplicar esfuerzos, y acabar con las viejas prácticas que desviaban los recursos. Los siguientes programas serían sustituidos: Programa de Abasto Social de Leche (Liconsas), Subsidio para el Consumo de Tortilla (Fidelist), Becas Educativas SEP/Pronasol, Becas y Despensas del Instituto Nacional Indigenista (INI) y Despensas del Programa de Asistencia Social a Familias (Pasaf) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

A partir del Progresas, los esfuerzos gubernamentales, como alternativa de bienestar social y ayuda alimentaria, se han reducido a este Programa. De hecho, el Progresas señala que su fin es conjugar acciones de educación, salud y alimentación, para mejorar y aprovechar las oportunidades. Uno de sus objetivos es, precisamente, «favorecer el mejoramiento del consumo alimentario de las familias beneficiarias, mediante el otorgamiento de un apoyo económico destinado a este propósito» (Progresas, 1997: 1). Asimismo, como última meta, «el Progresas busca potenciar la condición de la mujer (desde niña), valorando y apoyando el decisivo papel que desempeñan las mujeres

en favor del desarrollo familiar y comunitario. Para ello, satisficera varias de sus necesidades para el cuidado de su salud y nutrición. También, les acercará información y conocimientos que promuevan su desarrollo personal y el despliegue de sus potencialidades» (*ibid.*).

Bajo esta orientación, las oportunidades se reducen a las que existen en la comunidad. Para nuestra población de estudio, esto se dirige a aprovechar las tres escuelas primarias, los dos jardines de niños y una escuela secundaria técnica. Aparte del centro de salud, existe un albergue indígena, que da asistencia a los niños más pobres para que no abandonen la escuela.

Frente a su inaccesibilidad a los recursos (monetarios), una madre con seis hijos menores de 14 años se ha visto orillada a dejar de mandar a la escuela, al menos, a dos hijas en edad escolar. Su esposo (ayudante de un comerciante ambulante) pasa la mayor parte del tiempo fuera del hogar y de la comunidad; no obstante su ausencia, él decide quiénes no van a la escuela cuando el gasto no alcanza. Ella dice que no sería justo mandar a la escuela a las niñas sin un taco en el estómago. Además, debido a que es más fácil colocar a sus hijas en otros grupos como ayudantes en las labores domésticas, para ganarse el taco (almuerzo del día), los varones son los que frecuentan la escuela. En esta lógica, por primera vez, su hija mayor de 14 años salió tres meses a trabajar de *muchacha* en la ciudad de México; «lo bueno es que se regresó, porque no le gustó su patrona».

Las mujeres y los varones saben que una forma de acceder al mercado de trabajo es a través de la educación, y que una mejor manera de adquirir los alimentos que no producen es por medio de la obtención de buenos salarios.

Sin embargo, el Progreso minimiza este conocimiento en sus objetivos:

Fomentar la inscripción y la asistencia regular a la escuela de los niños y jóvenes, así como promover la valoración de los padres sobre las ventajas —y la obligación que significa— de la educación de sus hijos. Propiciar un cambio sustancial y perdurable en la conducta

tanto de las familias como de las instituciones proveedoras de servicios, que derive de una actitud preventiva para el cuidado de la salud y la nutrición (Progresá, 1997).

Además, produce discursos matizados de lástima, para justificar sus acciones o intervenciones:

La existencia de niños que dejan de estudiar para dedicarse al trabajo, es una realidad que nos lastima y nos ofende. En el medio rural, por ejemplo, es frecuente que los niños trabajen en el campo y las niñas, en labores domésticas, condiciones que favorecen el abandono escolar. En este sentido, Progresá es una herramienta para enfrentar este problema desde el seno familiar (Progresá, 2000).

Una vez que se propuso la superación de la pobreza y se rompió el círculo que los ata, el Progresá crea instituciones responsables para ejecutar esas acciones. Su primer paso es seleccionar las localidades marginales.

En su primera fase, para escogerlas (localidades objetivo) se creó la coordinación del programa (Conprogresá), la cual, con los siguientes criterios, eligió a nuestra comunidad de estudio, por ser una localidad de muy alta marginación, de acuerdo con el índice de marginación definido por la Conprogresá³⁸:

- Alto índice de mortalidad infantil (12/1000 por año; la media nacional es de 4/1000).
- Falta de infraestructura, que afecta la calidad de vida (8 habitantes por vivienda; sólo 26 casas cuentan con agua entubada y siete, con drenaje de desagüe a una grieta o barranca; 392 tienen energía eléctrica).

³⁸ Datos obtenidos del INEGI (1996), del Centro de Salud de la Comunidad de San Miguel de la Labor y de la información de los resultados de mi investigación en curso

- Su actividad agrícola se considera como de subsistencia y sin potencialidad productiva.
- Alta tasa de crecimiento poblacional (4.7 anual; la nacional es de 2.7). Es decir, la población pasó de 3700, en 1995, a 4300, en 1998.
- Elevada incidencia de desnutrición infantil (de cada 10 niños, 4.5 presentan algún grado de desnutrición, de los cuales uno se considera grave).
- Elevado índice de ausentismo, deserción escolar y analfabetismo. Mil 127 niños mayores de 6 años no saben leer y escribir.

Es importante mencionar que el segundo criterio (contar con un centro de salud en la localidad) fue el decisivo para que seleccionaran a la comunidad. Es comprensible que para ejecutar el Programa se requiera de una infraestructura burocrática ya existente y que funcione en el lugar. Sin embargo, estas medidas excluyentes, más que incluyentes, provocaron no tanto diferenciación social sino resentimiento social de parte de las localidades que no fueron elegidas. Resentimientos que se acentuaron cuando las familias beneficiarias fueron identificadas bajo criterios imparciales, rigurosos y objetivos de la línea de pobreza extrema³⁹.

Los hogares de tres encuestadas resultaron seleccionados en la primera encuesta del Progresá. En 1998, 387 hogares en San Miguel la Labor fueron seleccionados y para finales de 1999, 570 mujeres (en 536 hogares) ya estaban inscritas en el Programa. Progresá en-

³⁹ A través de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (Encaseh), que coordinó y levantó la Conprogresá con la cooperación de los gobiernos de los estados y en colaboración con las autoridades municipales, se recaban 105 datos, para que una vez que se trataran en un modelo econométrico, es decir, por medio de un puntaje «que busca asegurar igualdad comparativa en la determinación de las familias en pobreza extrema», se obtenga una calificación, que en contraste con un valor predeterminado (desviación estándar) —el cual equivale a un valor de línea de pobreza extrema (muy alta marginalidad)—, si las familias encuestadas obtienen una calificación inferior a esta línea, quedan seleccionadas. El conjunto de familias identificadas en condición de pobreza extrema conformarán el padrón de beneficiarios de Progresá.

trega 115 pesos por familia cada dos meses; asimismo, una beca por cada niño que está en la escuela, suma que se incrementa para las niñas y de acuerdo con el nivel escolar. El total del apoyo no puede rebasar los 580 pesos (58 dólares estadounidenses bimensuales) por vivienda.

Los hogares excluidos y las comunidades que no participaron crearon un ambiente de resentimiento o el síntoma del paciente, el cual consiste en que todos dicen que padecen del mismo mal o que están más graves para poder beneficiarse del tratamiento que a otros les socorre (Sen, 1982).

No es por costumbre que desarrollen tal resentimiento, pues como dice un campesino: «Siempre que reparten dinero o comida, a las mujeres se les olvida la injusticia y las irregularidades, así no se puede exigir nada». En efecto, los métodos de selección e identificación de la localidad y de la población-objetivo pueden no ser eficaces en cuanto a que originan resentimientos de injusticia, pero una vez que los destinatarios reciben su primer beneficio (aunque lo consideren injusto), éstos quedan sujetos a las determinaciones de las acciones públicas.

La encuesta se aplicó en abril de 1998; los resultados se difundieron en la comunidad el 15 de septiembre del mismo año, fecha en que se entregaron los primeros beneficios a las mujeres, quienes firmaron su carta de identificación con código de barras del Progreso (holograma). El apoyo se dio, por primera vez, en un cheque por concepto de alimentación (transferencia base, \$210.00 pesos). Sin considerar el problema que implica cambiar un cheque en las comunidades aisladas de los servicios bancarios, y el costo del transporte que se requiere para trasladarse, el equivalente de \$210 pesos en alimentación sería de 70 kilos de maíz. Si se piensa que una familia constituida por cinco miembros consume sólo tortillas de maíz, con una ración de 2 kilos diarios, el apoyo cubriría los 35 primeros días.

Obviamente, estos apoyos no generarán un cambio social en lo que se refiere a mejorar la nutrición infantil, la de las madres embara-

zadas o de las que se encuentran en período de lactancia. Por lo que de no existir, de forma paralela, otros programas de desarrollo social y de continuar con la tendencia de ampliar más la brecha de las desigualdades sociales, como resultado de las posturas neoliberales económicas de México, sería casi imposible que la condición de pobreza extrema cambie en beneficio de esas familias.

Las mujeres Progresas, llamadas así por ser las que firmaron y aceptaron recibir los apoyos del Programa, son las responsables directas del éxito del plan. A cambio de la ayuda, ellas deben: inscribir a los niños a la escuela y ayudarles a que estudien; llevar a su familia a la unidad de salud a las consultas; asistir a 25 pláticas (los miércoles) sobre enfermedades, embarazo, prevención, alimentación, etc.; utilizar el apoyo económico para mejorar la alimentación de su familia y para que sus hijos no se ausenten de la escuela.

Como toda política pública, no se satisface con sólo distribuir sus recursos o transferir sus ingresos, ni espera que casualmente los indicadores sociales se modifiquen como resultado de su intervención en términos generales. Son necesarios algunos mecanismos que vigilen, regulen y controlen el comportamiento social que se desea cambiar.

Para tal efecto, el Conprogesa estipula los medios por los cuales las mujeres beneficiarias quedan sujetas a un sistema de vigilancia y control (por evitar la palabra represión), pues el Conprogesa podrá suspender los beneficios económicos a que da derecho el Programa por alguno de los siguientes dos tipos de incumplimiento en los requisitos a los que se comprometen las familias.

No obstante todos los mecanismos que se ejecutan para el control del Progresas, el destino del dinero es decisión individual de las mujeres. La mayoría no utilizó el primer apoyo económico para mejorar la alimentación, más bien lo destinaron para cubrir deudas pasadas, especialmente las contraídas para adquirir alimentos, ir al médico, comprar los uniformes y/o útiles escolares. Algunas utilizaron su dinero

para comprar cosas que urgen (material para terminar de construir un cuarto, por ejemplo) y otras que no urgen tanto, pero que son importantes en los compromisos sociales (la cerveza, por ejemplo, hace parte de los festejos sociales y religiosos).

Si bien es difícil vigilar en qué se gasta el apoyo económico, un control o evaluación del gasto destinado a procurar alimentos balanceados sería dar seguimiento al estado nutricional de los menores de cinco años (talla y peso), pero con 2 kilos de tortillas de consumo diario para una familia de cinco miembros durante 35 días es poco probable que el estado nutricional infantil, al menos aumento de peso respecto a la edad, tenga cambios sustanciales.

CONCLUSIÓN

La formulación de propuestas para dinamizar las economías rurales y superar la persistente pobreza de la población rural ha ido generando nuevos discursos que plasman las políticas sociales en un enfoque propositivo para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria de los hogares. En este trabajo intenté remarcar que para acceder a los recursos que logren la seguridad alimentaria de los hogares campesinos mazahuas —principalmente el maíz— es necesario instrumentar políticas que reconozcan las estrategias diferenciales de los varones y de las mujeres, de los hogares y de las comunidades.

El aprovechamiento de las oportunidades para acceder al maíz no puede seguir siendo diseñado sólo desde la política social proyectada para combatir la pobreza extrema ni distinguiendo dos ámbitos institucionales: uno para las mujeres y otro para los varones. Pues como se observó, para que los hogares mazahuas se beneficien de otras políticas económicas sería necesario recategorizar a los varones y las mujeres desde las formulaciones de base y considerar a la equidad, en términos económicos, como el principio de base, para que

así ambos tengan acceso a los recursos, a la información y al proceso de toma de decisiones.

Entonces, correspondería a la sociedad en su conjunto (incluyendo la producción de nuestros conocimientos) participar en la elaboración de alternativas capaces de renderezar las estrategias actuales, replanteando una política económica alimentaria incluyente y diversificada, con el fin de que todas las capas de la población no vean reducidas las posibilidades de acceder a sus alimentos básicos y que eviten el daño ambiental y la pérdida de los valores locales.

BIBLIOGRAFÍA

- ADELSON, N., «El maíz, el TLC y el rescate que nunca llegó», *La Jornada del Campo*, 31 mar, 1999
- ALCALÁ, E., et al., *Campesinos, artículo 27 y estado mexicano*, Plaza y Valdés/INAH, México, 1996
- BAÑOS, O., «Algunas implicaciones del nuevo agrarismo de Salinas de Gortari», *Revue Canadienne des Études Latino-Américaines et Caraïbes*, núm. 18, 1993
- BAITENMANN, H., «Gender and Agrarian Rights in Twentieth-Century Mexico», ponencia que se presentó en Latin American Studies Association, XXII International Congress, Miami, 2000
- CEPED, *Genre et Développement: des Pistes à Subiré. L'Atelier: Recherche et Formation sur Genre et Développement*, CEPED, París, 1996
- COLLIER, G., «Reforms of Mexico's Agrarian Code: Impacts on the Peasantry», *Research in Economic Anthropology*, núm. 15, 1994
- FAO, *Los componentes centrales de las políticas ligadas al desarrollo rural, la reforma agraria y la lucha contra la pobreza en América Latina y el Caribe*, División de Desarrollo Rural, Roma, 1997
- FIRA, «El apoyo financiero de FIRA a la mujer campesina», *Banco de México*, núm. XXVIII, mar, 1996
- INEGI, *Resultados definitivos, conteo 95. Tabuladores básicos del Estado de México*, INEGI, México, 1996
- JANVRY, Alain de, y E. Sadoulet, «Acces to Land for the Rural Poor : How to Keep it Open and Effective for Poverty Reduction?», ponencia que se

presentó en Latin American and Caribbean Economic Association, Nueva York, ene, 1998

LABRECQUE, Marie F., «Les Femmes de la Campagne Mexicaine: Filles Privilégiées du Régime? », *Anthropologie et Sociétés*, núm. 11, 1987

_____, «Women and Gendered Production in Rural Yucatan: Some Local Features of Globalization», *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*, núm. 27, 1998

MALLON, Florencia E., *Peasant and Nation. The Making of Postcolonial Mexico and Perú*, University of California Press, Berkeley, 1995

MARCUS, G., «Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-sited Ethnography», *Annual Review of Anthropology*, núm. 24, 1995

MESTRUM, F., «La mujer latinoamericana en el nuevo discurso sobre la pobreza», ponencia que se presentó en Latin American Studies Association, xxii International Congress, Miami, 2000

MILLER, S., «The Agrarian Question in Mexico: Debate in a Cul-de-sac», *The Journal of Peasants Studies*, núm. 22, 1994

OCDE, *Examen des Politiques Agricoles du Mexique. Politiques Nationales et Échanges Agricoles*, Organisation de Coopération et Développement Économiques, París, 1997

OTERO, Gerardo, Peter Singleman y K. Preibisch, «La fin de la Réforme Agraire et les Nouvelles Politiques Agricoles au Mexique», en Henri Favre y Marie Lapointe (coords.), *Le Mexique. De la Réforme Neolibérale à la Contre-Réforme. La Présidence de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994*, L'Harmattan, París y Montreal, 1997

PROGRESA, *Programa de Educación, Salud y Alimentación. Lineamientos generales de ejecución*, Secretaría de Desarrollo Social/Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 1997

_____, *Evaluación de resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación. Primeros avances*, Sedesol, México, 2000

QUEZADA, N., *Sexualidad, amor y erotismo. México prehispánico y México colonial*, Plaza y Valdés/UNAM, México, 1996

RAYGOZA, Jorge, y R. de la Torre, «Política social, desigualdad y pobreza en México», ponencia que se presentó en Latin American Studies Association, xxii International Congress, Miami, 2000

REARDON, T., «Challenges in Fighting Rural Poverty in the Globalizing Economy of Latin America: Focus on Institutions, Markets and Projects», ponencia que se presentó en el Seminario Latinoamericano sobre Experiencias Exitosas de Combate a la Pobreza Rural, FAO/CEPAL, Santiago de Chile, ene, 2000

RIVERA H., G. (ed.), «Implicaciones de las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria», Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 1993

- ROCHELEAU, Dianne, Barbara Thomas-Slayter y E. Wangari, *Feminist Political Ecology; Global Issues and Local Experiences*, Routledge, Londres, 1996
- SEN, Amartya K., *Choice, Welfare and Measurement*, MIT Press/Oxford/Blackwell, Cambridge, Massachusetts, 1982
- VIZCARRA B., I., «El bienestar social de los noventa en México: el caso de las familias «marginales» de la región mazahua», ponencia que se presentó en el Congreso de la Sociedad Canadiense de Antropología (Casca), Université Laval, Quebec, 1999
- _____, «... Y la lucha sigue entre sombreros y rebozos. Historia de una tierra de subsistencia "marginal" mazahua», *Estudios Agrarios*, núm. 18, México, 2001

OPINIÓN DEL CAMPESINO SOBRE EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS
DIRECTOS A LA AGRICULTURA (PROCAMPO)
EN UNA REGIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA⁴⁰

BENITO RAMÍREZ VALVERDE⁴¹

PEDRO JUÁREZ SÁNCHEZ⁴²

GUSTAVO RAMÍREZ VALVERDE⁴³

En el mundo, debido al modelo económico que impera, se ha dado una corriente que se inclina por la reducción y eliminación de los subsidios. México no ha estado fuera de esta tendencia, pero, ante el evidente descontento social, ha creado programas de subsidio directo, como es el caso del Programa de Subsidios Directos a la Agricultura (Procampo). El gobierno federal lo anunció el 4 de octubre de 1993 para apoyar cultivos básicos. El Procampo implicaba un fuerte incremento de los recursos que se dedicarían al campo en 1994. En ese año, el presupuesto total fue de 11 mil 700 millones de nuevos pesos, y su meta era subsidiar a 3.3 millones de campesinos, entre los que se encontraban 2.5 millones que no reciben ningún apoyo del estado. El subsidio que se planteó fue de 300 nuevos pesos por hectárea, en el ciclo otoño-invierno de 1993-94, y de 350 nuevos pesos para el ciclo primavera-verano de 1994. Durante su campaña política, el actual presidente de México prometió extender el Procampo por 15 años e incrementar a 450 nuevos pesos el subsidio por hectárea.

⁴⁰ Tercer Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 3-6 jun, Zacatecas, 2001

⁴¹ Profesor investigador adjunto, Colegio de Postgraduados, campus Puebla, México

⁴² Investigador asociado, Colegio de Postgraduados, campus Puebla, México

⁴³ Profesor investigador adjunto, Colegio de Postgraduados, ISEI, México

Desde el inicio, el Procampo ha sido criticado. Gómez *et al.* (1993) mencionan que el Programa no es apoyo para el campo y que no revertirá la situación crítica de la agricultura; concluyen que el Procampo es un plan más para el campo. Rubio (1997) reconoce que el Procampo fue el primer esquema productivo que incluyó a los campesinos pobres, pero señala que los apoyos que se otorgaron, en 1993 y 1995, no se acompañaron de una política de fomento productivo y no constituyeron apoyos al consumo; también, indica que la ayuda tuvo una connotación asistencialista.

De acuerdo con Téllez (1994), el Programa presenta ventajas respecto a los subsidios que se canalizan a través de precios, debido a que este último tipo de subsidio se vincula al nivel de producción; el autor plantea que «los precios como mecanismo para canalizar subsidios no constituyen la fórmula más eficiente. Este apoyo está vinculado al nivel de la producción, por lo cual favorece, proporcionalmente, más a los productores con mayores niveles de producción. En este sentido, son indiscutibles ciertas ventajas de los subsidios directos al ingreso del productor, respecto a los subsidios canalizados a través de los precios».

Como el subsidio es directo, se benefician con Procampo los campesinos que producen, de manera exclusiva, para el autoconsumo. Dentro de esta categoría, se encuentra un gran número de familias campesinas y de volumen de producción. Appendini (1993) menciona: «Se estima el autoconsumo de maíz en una cifra entre 3 y 5 millones de toneladas, del 20 al 30% de la producción nacional».

En este trabajo, también se estudiará al Procampo como un mecanismo que permite sobrevivir al productor, aun en condiciones de pérdida total de las cosechas. El seguro agrícola ha cambiado y está disminuyendo el número de productores asegurados por el alto costo del servicio. Esto es un grave problema, debido a que existen al año grandes pérdidas como consecuencia de los desastres naturales y biológicos. Hay zonas que se denominan de alta siniestralidad, donde

año tras año se dan pérdidas. En estos casos, el Procampo es una buena alternativa, ya que al menos los productores reciben el estímulo económico, aunque no cosechen ni un kilo de maíz. En este sentido, se puede pensar el Procampo como una opción de seguro agrícola.

En la agricultura mexicana, el papel del Programa se revisa en un estudio que se realizó al noreste de México con datos de 1994. La investigación concluye que el plan constituye un modesto, pero real apoyo para el ingreso de los productores, pues les ayuda a seguir sembrando cultivos tradicionales, aunque los autores de este artículo consideran que el Procampo no es suficiente para la modernización y diversificación de la agricultura (Martínez *et al.*, 1999).

La pobreza que enfrentan los campesinos que cultivan el maíz y las medidas que se acordaron en el Tratado de Libre Comercio obligan a pensar en nuevas políticas de apoyo a los productores o en modificar las que existen, como es el caso del Procampo, pero es necesario tomar en cuenta la opinión de los actores más importantes: los campesinos.

LA REGIÓN

En México, el estado de Puebla es una de las entidades que participa con mayor proporción en el valor de la producción agrícola; sin embargo, es uno de los estados más pobres. Según la clasificación del Consejo Nacional de Población (1993), Puebla se ubica en el 6° lugar de marginalidad, en el nivel nacional, pero ésta no se distribuye con homogeneidad, sino que se encuentran grandes contrastes, en los que se presentan regiones de extrema pobreza.

El lugar donde se realizó este estudio se encuentra en el centro oriente del estado de Puebla, entre los paralelos 18°41'34" y 10°20'11" de latitud norte y los meridianos 97°09' 08" y 97°46'00" de latitud oeste del meridiano de Greenwich. Esta zona comprende

11 municipios: Soltepec, Mazapiltepec, San Salvador el Seco, San Nicolás Buenos Aires, Aljojuca, San Juan Atenco, Tlachichuca, Ciudad Serdán, Atzitzintla, Esperanza y Cañada Morelos. En el siguiente mapa (figura 1), se muestra la ubicación de los municipios que se analizaron.

Figura 1
Ubicación de la región que se estudió



La superficie de la zona es de 204,759 há; de éstas, 116,092 há se destinan a uso agrícola, en su gran mayoría de temporal (112,828), y sólo 2,992 cuentan con riego. El principal cultivo que se siembra es el maíz, con 89,189 hectáreas; 22,747 há se dedican a la ganadería; 28,927, al sector forestal; y 36,993, a otros usos (Plan Llanos de Serdán, 1995).

En la región que se estudió se encuentran cuatro municipios, los cuales se clasifican con alto nivel de marginación; los demás están en el nivel medio. Esto significa que la zona no se encuentra entre las más deprimidas del estado de Puebla. Es claro que en regiones con mayor grado de marginación se agudizan los problemas de pobreza entre las familias campesinas.

METODOLOGÍA

Los datos para esta investigación se obtuvieron mediante una encuesta a productores de maíz. Se realizó sobre el ciclo agrícola primavera-verano, 1999. El procedimiento consta de dos apartados:

- 1) La encuesta que se aplicó a los campesinos de la región, donde se seleccionó al azar una muestra entre las comunidades de la zona y, después, entre los campesinos de las comunidades que se escogieron. El tamaño de la muestra se definió en 118 productores.
- 2) La estimación de rendimientos en el cultivo de maíz. Además de la entrevista a los agricultores, se procedió a visitar el predio y a tomar muestras de la producción para estimar su rendimiento por hectárea. El procedimiento es seleccionar a lo largo del predio tres sitios de 10 metros lineales, se cosechan y se hace el ajuste a humedad comercial. Luego, con base en la densidad de población, se estima la utilidad del inmueble. Con estas medidas, se tiene un resultado objetivo del rendimiento de maíz.

En este estudio, se revisan variables de tipo agronómico y aspectos productivos, por lo que empleamos los agrosistemas definidos en la región. El concepto agrosistema es una abstracción que relaciona al cultivo con el ambiente y que involucra: 1) factores controlables de la producción, como son las dosis, la oportunidad, la fuente y el método de fertilización; y 2) factores incontrolables de la producción, como el régimen de lluvias, la textura y profundidad del suelo, entre otros. Esta serie de elementos define áreas con características similares, que llamaremos agrosistemas, las cuales se ubican dentro de una región agrícola.

En la zona, se definieron cinco agrosistemas, por medio de la metodología del Colegio de Postgraduados. Mayor información sobre

la definición, diseño e importancia de los agrosistemas se encuentra en los trabajos de Turrent (1979 y 1980). Los agrosistemas que se delimitaron en el área de estudio presentan las siguientes características (Taboada, 1996):

Agrosistema I. Ciudad Serdán. Los suelos que dominan son de textura arenosa y profunda con topografía plana y un pH de 6.5 a 7 y de tipo cambisol. El agrosistema se localiza en el valle de Serdán.

Agrosistema II. Coyotepec. La región presenta suelos arenosos. Es donde se presentan mayores riesgos de daño a los cultivos por la presencia de heladas. El agrosistema se ubica desde Mazapiltepec hasta Santa María Techachalco, al sur del municipio de Ciudad Serdán.

Agrosistema III. Tlachichuca. Presenta suelos de textura arenosa, profundos y con topografía ondulada. El agrosistema abarca parte de los municipios de Tlachichuca, Aljojuca, San Nicolás Buenos Aires y San Salvador el Seco.

Agrosistema IV. Bajo Potencial. Los suelos son de textura gruesa, de color claro y profundos con pH de 7.5 a 8.5. En este sistema se presentan problemas de heladas, sequías y vientos fuertes.

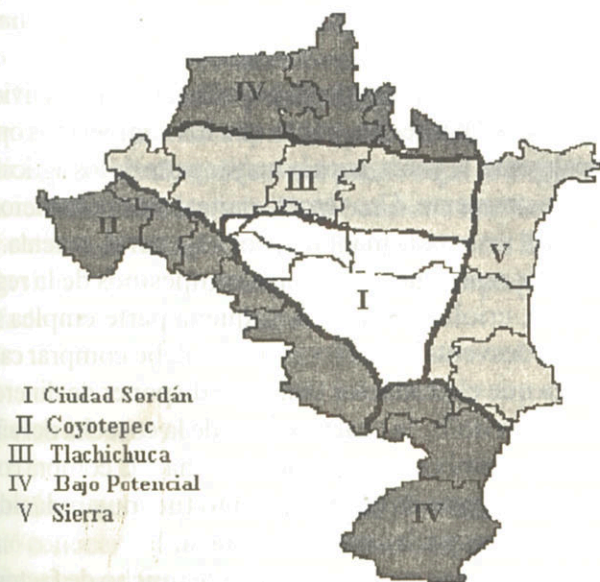
Agrosistema V. Sierra. Se ubica en Atzitzintla y parte de Ciudad Serdán y Tlachichuca. El agrosistema no es importante en cuanto a la producción del cultivo de maíz.

Un intento de mapear los agrosistemas en la región lo presenta Taboada (1996) en la figura 2.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

El maíz es el cultivo más importante para el pueblo mexicano y en su mayor parte se cultiva en áreas de temporal. Entre el 70% y el 75% de la producción de maíz en el país se obtiene en terrenos que dependen del temporal. La región presenta una agricultura que depende del temporal, donde el maíz fue el cultivo más frecuente que se encontró en

Figura 2
Agrosistemas definidos en la región de estudio



Fuente: Taboada, 1996

las entrevistas y es una de las principales productoras de este cereal en Puebla.

En la zona, se estima que el 45% de los campesinos realizó un barbecho, el 49% dio dos barbechos y el 6% realizó la actividad en tres ocasiones durante un mismo ciclo agrícola. Para realizar el barbecho, la mayor parte de los campesinos usó un tractor, pero como muy pocos agricultores son propietarios de uno, la mayoría pagó a algún dueño de la maquinaria para hacer el trabajo. El 36.10% de los cosecheros utilizó yunta para el barbecho y en este caso la mayoría de ellos (91.03%) fue propietaria de la yunta. El barbecho es una práctica muy laboriosa, por lo que una gran cantidad de campesinos

renta un tractor. Los que usaron yunta para realizar esta labor, lo hicieron principalmente por ser dueños de aquélla y, por lo tanto, no tienen que desembolsar dinero, que es uno de los factores limitantes en este tipo de agricultura.

El rastreo es una práctica agrícola posterior, y es una actividad menos laboriosa que el barbecho, por lo que los campesinos optan por usar, principalmente, la yunta, pues la mayor parte de los agricultores es dueña de ese instrumento. Una tercera parte de los cosecheros ocupa un tractor para el rastreo; la máquina, por lo general, se renta.

La semilla de maíz que utilizan los campesinos de la región es, principalmente, criolla y sólo una pequeña parte emplea semilla mejorada. Una desventaja de ésta es que se debe comprar cada año, lo cual implica que el productor tiene que disponer de dinero. En el caso de la semilla criolla, la cual proviene de la cosecha del año anterior, el agricultor siembra de su propia cosecha o la compra con alguno de sus vecinos (cuando el rendimiento fue muy reducido) a un precio mucho menor que la semilla mejorada.

En la agricultura campesina se depende mucho de factores ambientales para la producción. La presencia de siniestros (sequías, heladas, vientos, granizo, etc.) incide, de forma muy marcada, sobre la producción. En la región, las adversidades se presentan con frecuencia. Los daños a los cultivos por siniestro son variables, y pueden llegar hasta la pérdida total de la cosecha. Los principales desastres son las sequías y las heladas. La forma en que los campesinos se defienden de estos fenómenos meteorológicos es mediante prácticas de cultivo, como, por ejemplo, la fecha de siembra y el uso de variedades con características de mayor resistencia a estas catástrofes.

Cerca de una cuarta parte de los campesinos manifestó que se presentaron plagas en su cultivo. La incidencia y el daño al cultivo son variables, de acuerdo con el año, la época y el manejo del cultivo, pero es claro que el fenómeno reduce los rendimientos y, en casos severos, la pérdida de la cosecha es total.

La presencia de siniestros es muy frecuente y, durante mucho tiempo, el seguro agrícola garantizaba la sobrevivencia de muchas familias campesinas cuando se presentaba algún problema de este tipo. Sin embargo, con el modelo económico neoliberal, desapareció la Aseguradora Nacional Agrícola (Anagsa), que era manejada por el estado, por lo que los agricultores ahora prácticamente no cuentan con este servicio y una catástrofe severa puede dejar al hogar campesino sin capacidad de subsistencia. Esto ocasiona mayor pobreza en el campo y obliga a la migración hacia las ciudades o a Estados Unidos. Ante esta situación, el Procampo representa un pequeño alivio a la economía de la familia agricultora.

PROCAMPO EN LA REGIÓN

De los productores que sembraron maíz, se encontró que el 99.2% manifestó conocer el Procampo. Sólo uno desconoció el Programa: se trata de una persona de 69 años, con bajo rendimiento en su producción, la cual se dedica, de forma exclusiva, al autoconsumo. El medio por el cual los campesinos se enteraron del Procampo fue variado y se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 1

Medio por el cual los campesinos de la región se enteraron del Procampo

¿Quién le dio a conocer el Procampo?	Frecuencia	Porcentaje
Comisariado ejidal	40	34.2
Folletos	6	5.1
Vecinos	4	3.4
Televisión	3	2.6
Técnico	2	1.7
Personal SARH	35	29.9
Presidencia municipal	1	.9
Juez de paz	3	2.6
Periódicos	1	.9
No recuerda?	22	18.8
total	117	100.0

Como se mencionó, la tenencia de la tierra que predomina en la región es la ejidal. En este caso, el comisario ejidal juega un papel importante en la difusión del Programa entre los integrantes de su ejido. Otro medio importante de divulgación fueron los técnicos de la Secretaría de Agricultura. En este sentido, es necesario mencionar que, con la entrada del neoliberalismo, la Secretaría abandonó otras funciones que realizaba en el agro: por ejemplo, en lo que se refiere al servicio de asistencia técnica, los técnicos se dedicaron, casi en la totalidad de su tiempo, a la difusión y manejo burocrático del Procampo. Por último, destaca la labor que desempeñaron los medios masivos de comunicación, donde se nota un interés gubernamental en el Programa.

En el caso del trámite de solicitud para participar en el plan, se tiene la intervención importante, otra vez, de los técnicos de la Sagar y del comisario ejidal, aunque el papel principal en las gestiones lo tienen el campesino y su familia. En el cuadro que sigue, se presenta la frecuencia y porcentaje de quienes tramitaron la solicitud.

Cuadro 2
Persona que realizó el trámite de solicitud en el Procampo

¿Quién le tramitó la solicitud Procampo?	Frecuencia	Porcentaje
Comisario ejidal	34	29.1
Personalmente	53	45.3
Personal SARH	14	12.0
Esposa (o)	3	2.6
Hijo (a)	5	4.3
Pariente	2	1.7
Hermano (a)	2	1.7
No recuerda	4	3.4
Total	117	100.0

Los productores que conocieron el Programa participaron en él (99.2%). La situación cambió, al preguntarles sobre los objetivos del Procampo: el 48.7% los ignoraba; de los que afirmaron conocerlos, el 21.7% manifestó que una de las metas era apoyar al campo

por la baja en el precio del grano, el 15% mencionó que era para favorecer al campesino por la producción de autoconsumo, el 23.3% consideró que era para ayudar al campo por el alza de los insumos y el 10% indicó que era para ayudar a los campesinos de bajos recursos. También, los agricultores creen que el Procampo sirve para compensar los subsidios a productores en otros países y no dejar que suban los precios de garantía de los granos, y el 6.7% de ellos manifestó que el objetivo del Procampo es «taparle la boca al campesino por la poca ayuda que da».

En las anteriores informaciones sobre las metas del Programa, puede notarse que un número importante de productores tiene claridad sobre lo que originó el Procampo. El productor en esta región controla una superficie pequeña de tierra, la cual, por lo general, se distribuye en varios predios con un promedio de 6.409 hectáreas. La superficie que se siembra con maíz y que recibe el subsidio es, en promedio, por productor, de 4.618 há, como se muestra en el cuadro 3, donde también se señala el espacio total y la extensión dentro del Procampo en el nivel agrosistema. En la diferencia de área, entre la superficie total, se siembran otros cultivos, principalmente haba y frijol, como se puede apreciar a continuación.

Cuadro 3

En el Procampo, promedio de há y de maíz bajo control de los productores de la región (por agrosistema)

Agrosistema	Hectáreas totales		Hectáreas de maíz en Procampo	
	Promedio	Desviación estándar	Promedio	Desviación estándar
1	6.461	4.138	5.0921	2.8849
2	6.226	4.241	4.0125	1.9030
3	5.800	2.990	4.7333	1.8971
4	7.975	6.766	4.5500	1.4591
5	5.167	2.264	3.7222	2.2236
Total	6.409	4.374	4.6175	2.2451

Al hacer un análisis del número de há totales bajo control, se encontró que no existe diferencia significativa entre los agrosistemas, de acuer-

do con los resultados del análisis de varianza ($\bar{U}=0.423$). En el caso de las há que se destinan a la siembra de maíz con subsidio del Procampo, se descubrió el mismo resultado, al usar esta prueba ($\bar{U}=0.325$). Esto indica un comportamiento similar respecto a la superficie que poseen los campesinos que siembran maíz y las há dentro de los subsidios del Procampo.

En el cuadro 3, se pueden notar los promedios de cada uno de los agrosistemas que se estudiaron, presentando entre 4 y 5 há por agricultor. Se aprecia que en el agrosistema 4 los productores tienen la proporción menor de tierra que se dedica al maíz con estímulo Procampo (.57) en relación con los otros agrosistemas, porque en el agrosistema 4 se tienen serios problemas con fenómenos meteorológicos (heladas, sequías y vientos), que afectan el cultivo de maíz, por lo que los agricultores siembran cultivos con mayor resistencia a estas catástrofes como una medida de protección a la economía de la unidad campesina. Sin embargo, la siembra de maíz continúa siendo primordial, ya que es la base de la alimentación de los hogares de los agricultores.

Para el cultivo de maíz en la región, el fertilizante es un insumo necesario y se aplica desde hace varios años. La cantidad de este producto que se emplea en cada agrosistema y en el nivel regional se presenta a continuación.

Cuadro 4
Promedio de nitrógeno, fósforo y potasio
que aplican los productores (por agrosistema)

Agrosistema	Nitrógeno		Fósforo		Potasio	
	Promedio	Desviación estándar	Promedio	Desviación estándar	Promedio	Desviación estándar
1	131.21	37.36	32.95	23.71	4.53	13.63
2	122.43	23.36	19.71	23.33	.00	.00
3	135.23	32.83	26.83	28.38	2.00	10.95
4	138.17	11.07	20.44	23.52	.00	.00
5	141.78	29.02	.00	.00	.00	.00
Total	132.56	30.42	24.47	25.28	2.00	9.69

Como se observa en el cuadro anterior, existe variación entre las dosis de fertilizante que se aplicaron por agrosistema y en el nivel regional: 132.56 kg de nitrógeno, 24.47 de fósforo y, en términos generales, no se utiliza potasio. Es necesario comprar el fertilizante con anticipación, aunque la época en que se requiere es muy posterior a la cosecha del ciclo anterior, donde el agricultor tendría recursos económicos en caso de que hubiera vendido. En la encuesta, se preguntó el tipo de fertilizante que se empleó y la cantidad de kg que se aplicó por há; después, se calculó el costo de los productos, el cual se muestra en el cuadro que sigue.

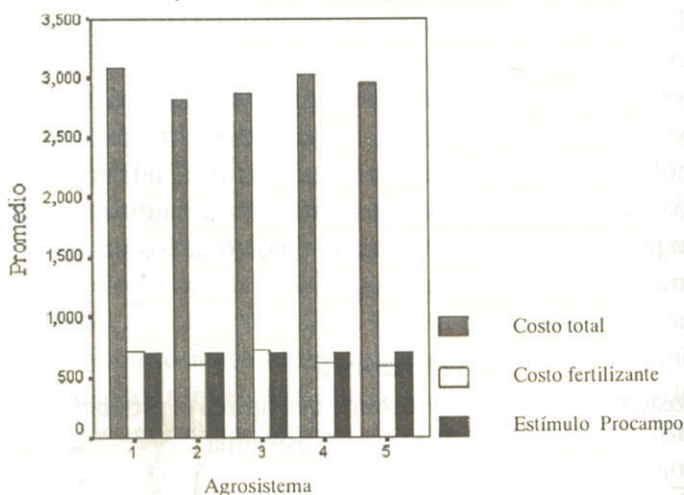
Cuadro 5

Costo promedio del fertilizante que aplicó el productor en la región (por agrosistema)

Agrosistema	Promedio	Desviación estándar
1	722.1579	157.7552
2	610.9286	104.5736
3	733.1433	175.2204
4	600.5000	158.1185
5	600.5000	190.6843
Promedio regional	680.1190	164.5159

La época para adquirir el fertilizante es difícil, porque el agricultor debe tener los recursos para comprarlo, pues, en caso de que no lo aplique, la producción se vería reducida. Entonces, es importante el subsidio que provee el Procampo para esta obtención. Una de las críticas de los productores era la insuficiencia del recurso que se proporciona y la falta de oportunidad, especialmente para el fertilizante. La cantidad que dio el Procampo, en el ciclo primavera-verano de 1999, fue de 708 pesos. En la figura 3, se presenta la comparación que permite conocer si el estímulo fue suficiente para la compra del fertilizante.

Figura 3
Comparación del costo total de producción con el del fertilizante
y el estímulo del Procampo (por agrosistema)



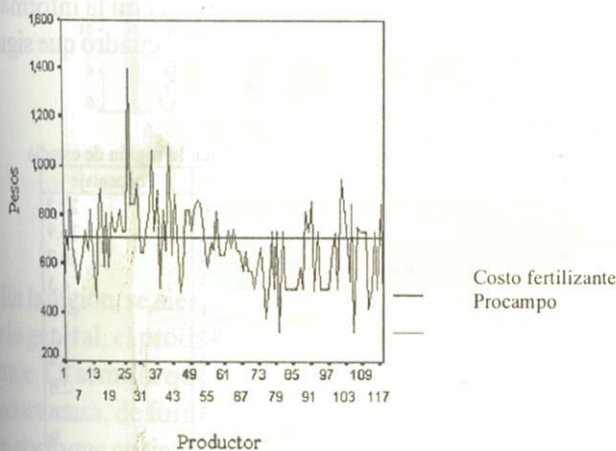
En los agrosistemas 1 y 3, la ayuda del Procampo no alcanza para cubrir el costo de los fertilizantes, pero en los otros agrosistemas es suficiente. En términos generales, para el 47.4% de los campesinos, el dinero no fue el necesario para pagar el importe del fertilizante. En la figura 3, se muestra el nivel del productor al que le es suficiente el subsidio para cubrir el fertilizante que usó en su predio. Se puede concluir que el estímulo Procampo es suficiente para la compra de este insumo, pero queda una duda: ¿si el apoyo fuera mayor, el agricultor usaría mayor dosis de fertilizante? Es necesario profundizar en este aspecto.

Al equiparar, en el nivel individual, el costo del fertilizante con el estímulo del Procampo, se encontró que:

Alrededor de la mitad de los campesinos (52.6%) puede cubrir el valor del fertilizante con la ayuda económica del Procampo. Es claro que la cantidad de fertilizante que se requiere está en función de la dosis que se aplica: los agricultores que mayor dosis usan tendrán que

pagar más por el insumo. De los productores que se encuestaron, el que aplicó mayor cantidad tuvo que aportar dinero de su bolsillo (además del estímulo de 693 pesos del Programa) y el que aplicó menos con el Procampo le alcanzó y le quedaron 390 pesos. Lo anterior se puede observar en la siguiente figura.

Figura 4
Comparación entre el precio del fertilizante y el estímulo del Procampo en los productores de la muestra



Aquí se presenta el costo del fertilizante que pagó el productor por há en relación con los \$708.00 que proporcionó el Procampo. El estímulo se presenta con la línea recta, por ser una cantidad común a todos los campesinos; la línea irregular es el costo del fertilizante. Se puede notar que los puntos por debajo de la línea recta son los gastos que cubrió el Programa.

Un aspecto importante es la oportunidad de la entrega del estímulo o del fertilizante, debido a que por las condiciones agronómicas existen periodos claramente definidos para la aplicación. Si se sale de

este tiempo, ya no tiene sentido el empleo del insumo. Es en esta época cuando el productor requiere recursos. Además, ante la disminución brutal del crédito agrícola oficial, que permitía —en muchos casos— la compra de insumos y el pago de las prácticas, el Procampo proporciona recursos que pueden ser determinantes en función de la época de entrega.

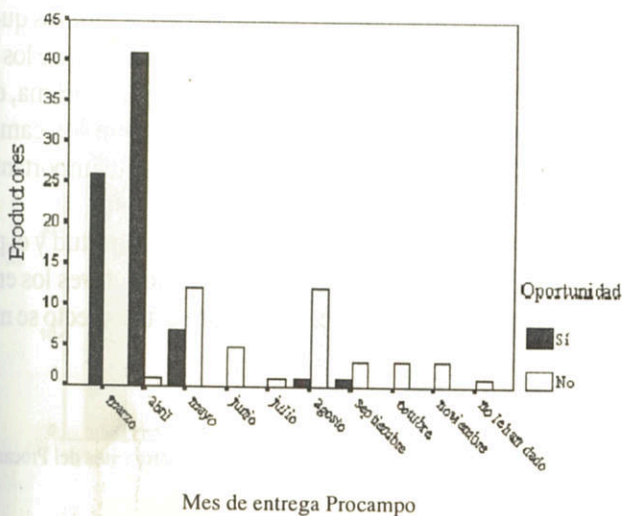
El 65% de los productores afirmó que el apoyo del Procampo se entregó en el momento necesario y el 35% juzgó lo contrario. En el nivel del agrosistema, sólo en el número 5 se encontró que la mayor parte de los productores considera inoportuna la entrega del estímulo. La fecha de pago del Procampo, de acuerdo con la información que proporcionó el productor, se presenta en el cuadro que sigue.

Cuadro 6
Mes de entrega del Procampo a los productores en la región de estudio

Mes de entrega del Procampo	Frecuencia	Porcentaje
marzo	26	22.2
abril	42	35.9
mayo	19	16.2
junio	5	4.3
julio	1	.9
agosto	13	11.1
septiembre	4	3.4
octubre	3	2.6
noviembre	3	2.6
no le han dado	1	.9
Total	117	100.0

Al analizar la opinión de los productores sobre la oportunidad de la donación en relación con el mes de entrega del estímulo económico, se encontró que dicha apreciación tiene gran conexión con las fechas de siembra y la aplicación del fertilizante. En la región, se recomienda aplicar todo el fósforo y la mitad del nitrógeno al momento de la siembra y es entonces cuando se requiere el apoyo. Si cruzamos en una gráfica la opinión de los productores sobre la oportunidad de entrega y la fecha de ésta, obtenemos lo siguiente.

Figura 5
Opinión de los campesinos sobre la oportunidad
de la entrega del Procampo (por mes de entrega)



En la región, se siembra en marzo y abril. Es en la siembra donde, por lo general, el productor requiere dinero para la compra del fertilizante. La semilla que se planta es, en su mayoría, criolla, pues el productor usa, de forma habitual, la que obtuvo en la cosecha anterior, por lo que no tiene que desembolsar para la compra de la semilla.

De acuerdo con la opinión de los campesinos, en el caso en que manifestaron oportunidad en la entrega, aquélla se debió, principalmente, a que recibieron, de manera oportuna, como apoyo fertilizante químico. Las razones por las que los agricultores afirmaron que fue inoportuna la entrega son: 1) Les dieron tarde el fertilizante para poder aplicarlo (29.3%); 2) La ayuda se requería para comprar fertilizante y otro insumo (26.8%); 3) No pudieron pagar deshierbes a tiempo o trabajos (14.6%); y 4) Otras razones (29.3%).

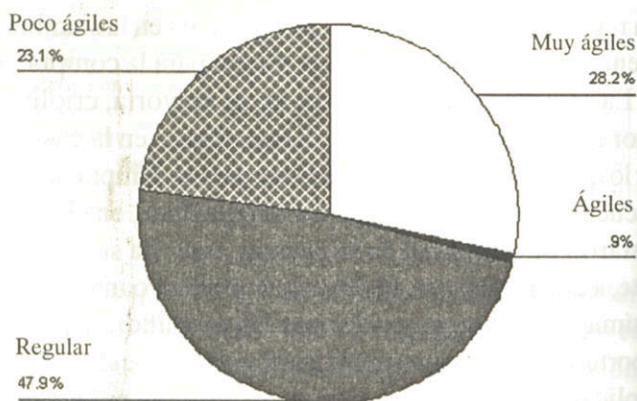
En las fases de producción, según la opinión de los agricultores, las actividades que ayuda a cubrir el apoyo del Procampo fueron: 1)

Sólo para fertilización; el sobrante del apoyo es muy poco (78.63%); 2) Para deshierbe o despunte (7.69%); 3) Para la cosecha (6.84%); y 4) Otras razones. Como puede deducirse de los montos que otorga el Procampo, del gasto en el fertilizante y de la opinión de los productores sobre las labores que les ayuda a cubrir el Programa, el apoyo de éste, en el mayor de los casos, sirve para que los campesinos tengan acceso al fertilizante. Esto es especialmente importante, debido al retiro del crédito oficial de la región.

Sobre los trámites que se requieren para la solicitud y el pago del estímulo del Procampo, la mayoría de los productores los encontró, por lo regular, ágiles. Los porcentajes sobre este aspecto se muestran en la figura que sigue.

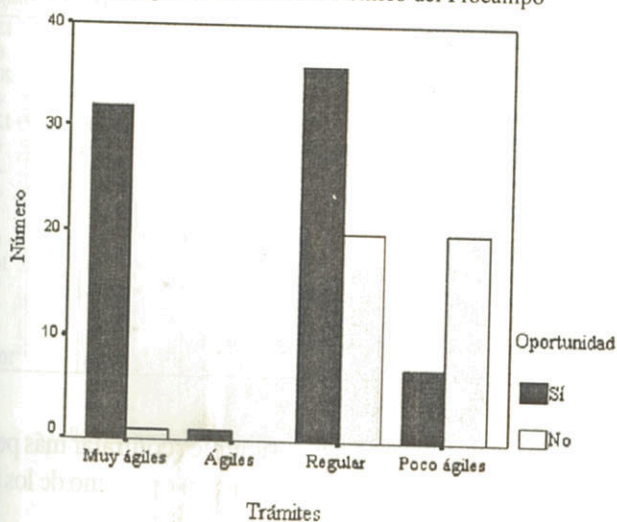
Figura 6

Opinión de los campesinos sobre la agilidad de los trámites del Procampo



Para tratar de explicar la opinión de los productores, se cruzó la variable oportunidad en la entrega del estímulo. El resultado se muestra a continuación.

Figura 7
Opinión de los productores sobre la agilidad en los trámites por oportunidad de entrega del estímulo económico del Procampo



La opinión de los productores se midió en una escala de tipo ordinal; para conocer si existía diferencia de apreciación por oportunidad, se realizó una prueba de Kruskal-Wallis. El resultado indica una diferencia significativa ($\bar{U}=0.000$) entre los productores, de acuerdo con la oportunidad en la recepción del recurso. Esto demuestra la importancia que tiene para el agricultor la oportunidad en la entrega del apoyo.

De la información que se obtuvo, se puede notar una serie de problemas en la ejecución del Procampo, los cuales afectan su ejecución. La idea de los productores sobre cómo mejorar el Programa se muestra en el cuadro 7.

En ese cuadro, se nota que los productores consideran al personal el elemento más importante para un trabajo más efectivo, ya sea por considerarlo inadecuado (cambiar a todo el personal), ineficiente (ma-

Cuadro 7
Opinión de los productores sobre cómo mejorar
los trámites que realiza el Procampo

Opinión	Frecuencia	Porcentaje
Cambiar a todo el personal	11	13.3
Vigilancia del personal	5	6.0
Capacitación del personal	17	20.5
Inscripciones en enero	4	4.8
Utilización de computadoras	10	12.0
Al recibir fertilizante, entregar resto de apoyo	5	6.0
Contratando personal capacitado	4	4.8
Entrega oportuna de fertilizante	4	4.8
Agilizar el pago	1	1.2
Contratar a más personal	5	6.0
Que el personal vaya a la comunidad	14	16.9
Avisar con anticipación la fecha de inscripción	1	1.2
Menos papeleo	1	1.2
Presionar a las empresas para entrega oportuna de Fert.	1	1.2
Total	83	100.0

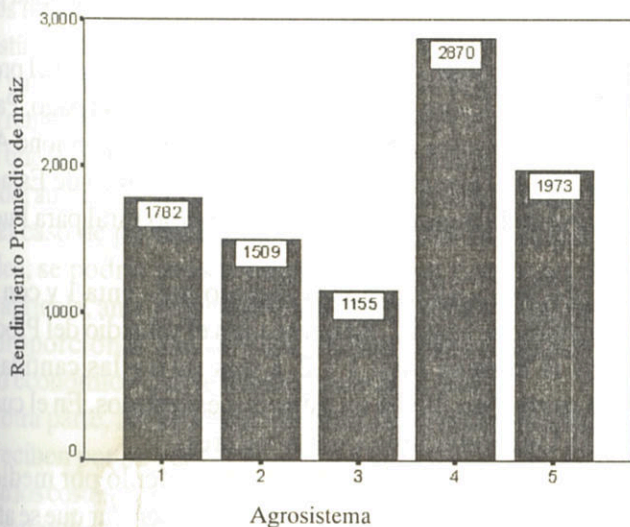
por capacitación y vigilancia) o insuficiente (contratar más personal). Otro aspecto importante es el cumplimiento oportuno de los apoyos.

INGRESO ECONÓMICO OBTENIDO

Para revisar el ingreso del productor por el cultivo de maíz, vamos a estudiar, primero, el rendimiento que obtiene por hectárea. Esta información se estimó, de manera directa, en los predios de los agricultores de la muestra y en la forma en que se presentó en la metodología. Los promedios en el nivel agrosistema se muestran en la figura 8.

El promedio general que se obtuvo en la región fue de 1972.56 kg por há ($s=1245.56$). En el nivel agrosistema, se encontró, mediante análisis de varianza, que existe diferencia significativa ($\bar{U}=0.000$) entre los agrosistemas en relación con el rendimiento por hectárea. Con la ayuda de la prueba de Tukey, para separación de medias, se encontró, en términos generales, que el agrosistema 4 presenta mayor rendimiento. Este resultado justifica el análisis por agrosistema para determinar el ingreso de los productores.

Figura 8
Rendimientos promedio de maíz (por agrosistema)



En la agricultura campesina, el cultivo del maíz es la base de la alimentación, por lo que su función primordial es proveer a la familia y el excedente se envía al mercado. De acuerdo con los resultados de la investigación, el 45.9% de los productores destina la cosecha de maíz, exclusivamente, al autoconsumo, el 2.7%, a la venta, y el 51.4% busca ambos fines.

A continuación, calcularemos el ingreso económico por productor por há, la cantidad recibida por la venta del maíz más el estímulo del Procampo.

Para conocer cuánto recibe el productor por venta, es necesario saber cuánto destina de su cosecha a la comercialización. En el caso del autoconsumo total de la producción, no recibe ingreso económico. Cuando comercializa el 100% de su cosecha, la cantidad que obtiene por há es igual al rendimiento por el precio rural. Cuando su producción la destina al autoconsumo y al comercio (el caso más

frecuente), es necesario averiguar qué fracción de su producción la destinó al mercado y calcular el ingreso por esta venta. Esta proporción se determina mediante la encuesta a agricultores.

Uno de los propósitos del Procampo fue desaparecer el precio de garantía del maíz. Ahora, existen fluctuaciones en su pago. Para este trabajo, consideraremos dos precios: 1) El que proporcionó Acerca: Puebla, \$1,081.00 por tonelada; y 2) El del Centro de Estadística Agropecuaria de la Sagar, con un precio medio rural para Puebla de \$1,651.00.

Con el precio 1, calculamos el ingreso por venta 1 y con el precio 2, el ingreso por venta 2. Al agregarles el subsidio del Procampo, tendríamos el ingreso total 1 y 2. Éstas serían las cantidades de dinero que se reciben por há en estos dos escenarios. En el cuadro 8, se presentan los promedios de estos valores.

El costo total de producción por há se calculó por medio de la encuesta a agricultores; además, es necesario señalar que se atribuyó valor a la mano de obra de la familia. Aquí, se usará el costo total (sólo como referencia) con el dinero que recibe el productor y el papel que juega el Procampo. El objetivo de este estudio no fue conocer el ingreso, que requiere de un escrutinio más riguroso de los ingresos y egresos de los productores.

Un caso a revisar es cuando el campesino pierde su cosecha por algún fenómeno natural. En el año en que se llevó a cabo el estudio no

Cuadro 8
Promedios de ingresos económicos por há en dos escenarios

	Valor mínimo	Valor máximo	Promedio	Desviación estándar
Rendimiento de maíz	0.00	5745.00	1773.1700	1245.5600
Costo total de producción	815.00	4106.00	2932.0300	589.8100
Ingreso por venta 1	0.00	4817.60	768.0509	1017.7388
Ingreso por venta 2	0.00	7356.86	1172.8734	1554.1662
Ingreso total 1 (venta + Procampo)	708.00	5525.60	1476.0509	1017.7388
Ingreso total 2 (venta + Procampo)	708.00	8064.86	1880.8734	1554.1662

se presentaron siniestros de gran magnitud, pero el 5.1% de los productores tuvo pérdida total. En este caso, los agricultores sólo reciben el estímulo del Procampo, como ingreso, en su parcela. La situación es muy parecida con los bajos rendimientos. Por ejemplo, el 26.3% obtuvo rendimientos por debajo de la ton por hectárea. Es necesario reiterar que los campesinos tienen pequeñas extensiones de tierra. En el caso del autoconsumo, el ingreso es sólo del subsidio del Procampo.

En el caso de pérdida total o bajos rendimientos por desastres naturales, se podría pensar en el Procampo como una especie de seguro agrícola, ante la desaparición de la institución oficial encargada de proporcionar ese servicio, como consecuencia del nuevo modelo económico que se implementó en el país.

Por otra parte, los productores que comercializan parte de su cosecha reciben por su venta cantidades muy reducidas, en comparación con los costos de producción. Se conoce y se discute la relación del precio del maíz en México y en el mundo, pero considero que se debe escuchar a ese gran grupo de campesinos que cultiva este producto, aun en esas condiciones adversas. En la región que se analizó, los productores opinaron sobre el precio del maíz y su punto de vista se presenta en el cuadro que sigue.

La mayoría de los campesinos opinó que los precios están por debajo de los costos de la producción del cultivo y, en términos gene-

Cuadro 9

Opinión de los campesinos de la región sobre los precios del maíz

Opinión de los precios de maíz	Frecuencia	Porcentaje
Son precios competitivos.	1	.9
Están por abajo de los costos de producción.	105	89.7
Con esos precios, ni pierden ni ganan.	1	.9
Que den mejores precios de garantía.	5	4.3
Con los actuales precios, no alcanza para sobrevivir.	1	.9
Que haya mejores precios por la descapitalización.	1	.9
Que el gobierno dé una solución.	2	1.7
El costo de los insumos tendría que valer la mitad.	1	.9
Total	117	100.0

rales, que son reducidos. Esto coincide con los resultados que se presentaron aquí, por lo que es necesario revisar la política del precio del maíz y su papel en el Tratado de Libre Comercio.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se derivan de este trabajo son:

- La mayoría de los campesinos productores de maíz en la región participó en el Procampo. Alrededor de la mitad afirmó conocer los objetivos del Programa, y puede notarse que un número importante de estos productores tiene claridad sobre el origen del Programa.
- En términos generales, el estímulo del Procampo sólo es suficiente para la compra del fertilizante.
- La mayor parte de los productores afirmó que el apoyo del Programa se entregó en el momento necesario, pero una tercera porción consideró que la repartición fue inoportuna. Este porcentaje es muy alto, debido al escaso capital de los campesinos y a lo importante que es el fertilizante para la producción. No tener en la época adecuada el recurso económico puede ser determinante para obtener una buena cosecha, lo que impacta las condiciones de vida de la familia campesina.
- Se presentan diferencias en las opiniones de los productores, de acuerdo con el agrosistema. En el agrosistema 5, se encontró que la mayoría de los productores considera inoportuna la entrega del estímulo.
- Al analizar la opinión de los productores sobre la oportunidad de la donación en relación con el mes de entrega del estímulo económico, se encontró que dicha apreciación tiene gran conexión con las fechas de siembra y la aplicación del fertilizante.

- Como puede deducirse de los montos que otorga el Procampo, del gasto en el fertilizante y de la opinión de los productores sobre las labores que les ayuda a cubrir el Programa, el apoyo de éste, en el mayor de los casos, sirve para que los campesinos tengan acceso al fertilizante. Esto es, de manera especial, importante, debido al retiro del crédito oficial de la región.
- Sobre los trámites que se requieren para la solicitud y el pago del estímulo del Procampo, la mayoría de los productores los encontró, por lo regular, ágiles. También, se evidenció que la opinión sobre los trámites estaba relacionada con la oportunidad en la entrega del estímulo económico del Programa. Esto demuestra la importancia que tiene, para el productor, la puntualidad en la distribución del apoyo.
- La mayor parte de los productores considera que el factor más importante, para mejorar la operación del Procampo, es el humano.
- Se encontró una diferencia significativa en rendimiento entre los agrosistemas de la región.
- En la agricultura campesina, el cultivo del maíz es la base de la alimentación, por lo que su función primordial es proveer a la familia y el excedente se envía al mercado. De acuerdo con los resultados de la investigación, el 45.9% de los productores destina la cosecha de maíz exclusivamente al autoconsumo, el 2.7%, a la venta, y el 51.4% busca ambos fines.
- Una pequeña proporción de los agricultores tuvo pérdida total de su cosecha. En este caso, los productores sólo reciben el estímulo del Procampo, como único ingreso, para su parcela. La situación es muy parecida con los bajos rendimientos. Es necesario reiterar que los campesinos tienen pequeñas extensiones de tierra. En el caso del autoconsumo, el ingreso es sólo el subsidio del Procampo.
- En el caso de pérdida total o bajos rendimientos por desastres naturales, el Procampo podría ser una especie de seguro agrí-

cola, ante la desaparición de la institución oficial encargada de proporcionar ese servicio, como consecuencia del nuevo modelo económico que se implementó en el país.

- Los resultados de este estudio muestran que los productores que comercializan parte de su cosecha reciben por su venta cantidades muy reducidas, en comparación con los costos de producción; asimismo, los agricultores perciben dichos resultados. También, la mayoría de los campesinos opinó que los precios están por debajo de los costos de la producción del cultivo y, en términos generales, que son reducidos. Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la familia campesina y en defensa de la soberanía alimentaria, es necesario revisar la política del precio del maíz, el monto del apoyo del Procampo y el papel del maíz en el Tratado de Libre Comercio.

BIBLIOGRAFÍA

- APPENDINI, K., «Los productores campesinos», en José Luis Calva (ed.), *Alternativas para el campo mexicano*, Distribuciones Fontamara, México, 1993
- GÓMEZ, Manuel Á. et al., *Procampo o anticampo*, CIESTAAM-Uach, 1993 (Reporte de Investigación, núm. 20)
- MARTÍNEZ, Lorenzo, Francisco Martínez y G. Aboites, «Acerca del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) en el noreste de México», *Agrosociedad*, núm. 1, nov-dic, 1999
- Plan Llanos de Serdán, *Informe anual de resultados*, Colegio de Postgraduados, Puebla, México, 1995
- RUBIO, B., *Resistencia campesina y explotación en México*, Ediciones Era, México, 1997
- TABOADA GAYTÁN, Rey O., *Diversidad de los maíces criollos en el valle de Serdán, Puebla*, tesis profesional, Depto de Fitotecnia-Uach, 1996
- TÉLLEZ KUENZLER, L., *La modernización del sector agropecuario y forestal*, FCE, México, 1994
- TURRENT FERNÁNDEZ, A., *El método cp para el diseño de agrosistemas*, Colegio de Postgraduados, Chapingo, 1979
- _____, «El agrosistema, un concepto útil dentro de la disciplina de productividad», *Productividad de Agrosistemas*, núm. 3, Colegio de Postgraduados, Chapingo, 1980

LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DEL FRIJOL DE LOS POBRES RURALES Y URBANOS EN MÉXICO

MARIO DEL ROBLE PENSADO LEGLISE

El objetivo de esta ponencia es plantear que en México se presenta una evolución diferenciada en la estructura social del consumo del frijol y que, en la actualidad, las familias pobres manifiestan una mayor propensión relativa a la disminución del consumo de dicho alimento, que se considera, en lo oficial, como un producto básico en la canasta alimentaria de la población.

El documento consta de cuatro partes: en la primera, se presentan los antecedentes sobre cómo se forma un patrón de consumo alimentario con base en una identidad cultural (y se ejemplifica en el caso de México y otros lugares) y cuáles han sido los efectos que se derivan del proceso de transculturación que domina en el mundo respecto al consumo de alimentos; en la segunda parte, se atienden los cambios de naturaleza social en el consumo del frijol en el país y el contexto internacional; en la tercera, se exhiben los resultados de la observación que se realizó sobre la evolución del consumo de frijol en los hogares rurales y urbanos en México; en la cuarta parte, se exponen conclusiones que emanaron de este ejercicio.

1. ANTECEDENTES

El consumo del frijol en México se ha constituido en un elemento sustancial de la identidad cultural de la sociedad. Los antecedentes de su utilización, como alimento, nos remontan a la época del

poblamiento de la región mesoamericana; algunos autores señalan claros indicios de su cultivo en el valle de México, en 1300 a.C. (Wolf, 1967). No obstante, la permanencia del empleo de un cultivo —que sirva de alimento básico a una sociedad dada— no está garantizada; la identidad cultural es un proceso dinámico, que puede presentar tendencias de signo diferente, el cual está circunscrito a influencias de hechos históricos, económicos, ambientales, sociales y políticos.

Cuando la identidad cultural de una población se genera y desarrolla tiende a someterse a un proceso creativo y acumulativo de bienes o productos culturales y a un enriquecimiento permanente de valores sociales. De tal manera que valores sociales, contenidos en bienes culturales que relativamente fueron importantes en algún momento, pueden caducar y dejar de serlo por los cambios en el entorno o por fenómenos sociales de tipo endógeno; en contraste, otros bienes culturales obtienen su preservación en términos relativos. Éstos últimos originalmente pudieron ser causados por ciertas condiciones y factores naturales, pero más tarde fueron o son susceptibles de ser transformados o recreados y tienen la posibilidad de lograr mayor relevancia social en la medida en que se les reconoce la valía de otros atributos sociales.

El caso de la sociedad y el consumo estadounidense

La evolución histórica de la alimentación en las sociedades resume cambios culturales, que se vinculan a procesos sociales e históricos con los cuales se va conformando la preferencia en el gusto, los sabores y aromas, así como en las formas de preparación y condimentación de los alimentos y guisos populares. A veces, esta moldeabilidad de la identidad cultural gastronómica se ha sometido a influencias generales externas lo suficientemente poderosas como para cambiar, de manera parcial, el hábito alimenticio y sustituir algunos productos por otros.

Un tipo de evolución cultural alimenticia de una sociedad moderna en transición es el caso de la estadounidense, ya que, en la etapa inicial de su formación, manifestó cierta incapacidad, que mostraron los colonizadores ingleses y franceses en América del Norte, para generar una nueva cultura alimenticia propia y sofisticada. Además, la región de América del Norte sólo había desarrollado formas culturales incipientes.

Más tarde, la continua inmigración influyó en la sociedad estadounidense, lo cual generó una amalgama culinaria, que se orienta a la producción de alimentos industrializados de consumo masivo, en la cual los alimentos que se procesan emulan o retoman raíces latinas y caribeñas; además, utiliza las bien cimentadas y establecidas herencias gastronómicas europeas, asiáticas, así como las originarias de su territorio. Todo ha llevado a un desarrollo histórico de sesgo multicultural, y ha edificado una identidad estadounidense transculturizada con sus alimentos propios, a partir de la recreación *sui generis* de alimentos procesados con base en aportaciones culturales de los inmigrantes, como lo significan los rasgos que se heredaron del consumo originario de carne de pavo, maíz y frijoles y de la comida sajona, normanda, polaca, irlandesa, italiana y de origen latinoamericana y oriental (muestra de lo anterior es la dieta de comida rápida de salchichas y hamburguesas de origen alemán, que se mezcla con pizzas italianas, chili beans, nachos, otros alimentos latinos y/o productos de comida rápida de tipo oriental —como los tallarines con sabor a camarón, pollo o res—).

La transculturación del consumo de alimentos en México

En la sociedad mexicana, el influjo cultural de los alimentos transculturizados, que provienen de América del Norte, es evidente e incuestionable. Por ejemplo, en el transcurso de una semana, la dieta

de familias pobres urbanas puede consistir en una variedad disímbole que combina tamales con bolillos y refrescos de gas, tacos de la calle con sopas instantáneas calentadas en el microwaves de la tienda de la esquina, memelas, tortas, hamburguesas y hots dogs baratos con tortillas con frijoles de lata, que se compran en el estancuillo. Estas nuevas mezclas de alimentos preparados con tradicionales son parte de la realidad cotidiana de la gente de escasos recursos que vive y labora en la calle durante todo el día o que forma parte de la creciente economía informal de las ciudades y del entorno periurbano.

El cambio de la dieta de la sociedad pobre se asocia a transformaciones profundas en la dinámica y estructura familiar: el papel de la mujer en el ingreso económico de la casa y sus actividades económicas extrahogar, la permanencia de los miembros de la familia en ella y el tiempo social de que se dispone para elaborar los alimentos, es decir, el cambio de vida al que se está dispuesto con tal de sobrevivir.

No obstante y pese a las condiciones más adversas, los alimentos que provienen de la cocina mexicana se preservan de algún modo y los alimentos tradicionales simples con los muy elaborados persisten, al imperar ese tipo de gusto, el cual se liga a la pertenencia a una identidad cultural propia, lo cual suele no ser sólo nacional, sino que tiene su origen en los ámbitos locales y regionales.

2. LOS CAMBIOS DE NATURALEZA SOCIAL EN EL CONSUMO DEL FRIJOL

En este contexto, el frijol ha jugado un papel extraordinario. Esta leguminosa ha perdurado, como alimento de la mesa de los mexicanos, durante siglos y ello se debe a que posee riqueza de proteínas (contenido de 19%). Además, se ha mantenido asociada con el maíz, el chile y las calabacitas, como principales alimentos que se consumen en el hogar. El siglo xx con su industrialización y expansión urbana no afectó su permanencia como alimento básico que se consume

en las familias, ya que junto con la tortilla de maíz, por ser alimentos básicos, adquirieron su carácter de bien-salario y la política pública de abasto popular los considera dentro de una canasta de alimentos por la que el estado debe velar, en forma permanente, para garantizar un satisfactor básico para los asalariados urbanos y rurales del país.

No obstante, las tendencias en el medio urbano para transformar la dieta alimenticia se asociaron a la disponibilidad de nuevos productos proteínicos y a la emergencia de nuevos estratos sociales medios (asalariados o no) con mayor poder adquisitivo, que irrumpieron en el escenario de la alimentación con un aumento del consumo de proteínas contenidas en cárnicos y lácteos, lo cual fue en detrimento del consumo tradicional de las suministradas por los vegetales. Como consecuencia de ello, poco a poco, en términos sociales, se aceptó consumir al frijol en forma complementaria, lo cual redundó, objetivamente, en una gradual disminución de su consumo per cápita sobre todo en la población urbana, aunque ello también se reflejó en los indicadores de consumo en el nivel general del país.

Sin embargo, la vigencia cultural del alimento genera que el consumo cada vez más complementario del frijol ofrezca oportunidades a la población en su conjunto para disponer de él y de otras despensas. Con ellos, la familia puede modificar su dieta y tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a las circunstancias económicas que prevalecen. Esto le da oportunidad de adoptar variantes en su patrón de consumo alimentario, las cuales le permiten sortear las contingencias en situaciones de caída abrupta de sus ingresos o cuando inciden factores como: *a)* la disponibilidad de los alimentos; *b)* la relación de precios relativos; y *c)* la elasticidad de la demanda de alimentos por parte de los grupos sociales inmersos en la población.

Por ejemplo, con la crisis económica de la década de los ochenta en México, se evidenció una abrupta caída del consumo de proteína animal, dado el encarecimiento de los productos cárnicos y lácteos.

Entonces, probablemente el frijol recuperó, de pronto, su importancia en la mesa de la mayoría de los hogares. Por el contrario, en la década de los noventa, pese a las condiciones recesivas que vivió la economía del país, la importación libre de productos cárnicos y lácteos pudo influir en el abaratamiento relativo de este tipo de alimentos, por lo que algunos grupos de la sociedad pudieron recuperar o elevar su consumo de dichos productos en detrimento de la adquisición de víveres como el frijol.

Ante los avances de una globalización, que incide en los procesos de identidad cultural de una manera más inmediata y profunda —a diferencia de otras formas de transculturación y sincretismo cultural antes conocidas—, el consumo del frijol sintetiza la recreación de la identidad cultural y expresa su permanencia frente a los cambios en la naturaleza social de su consumo (como en el hogar de la familia pobre urbana) y a los efectos que provoca la variación de los precios relativos de otros víveres proteínicos.

El proceso de globalización influye en la modificación del patrón alimentario. Ello sucede aun cuando esto puede expresarse, en forma desigual, en la estructura segmentada del consumo en las sociedades de los países en desarrollo. En este sentido, J. Sanz Cañada señala que «la tendencia en el consumo alimentario es hacia un modelo cuyo eje central es el denominado alimento-servicio, cuyo concepto presenta las siguientes características: elevado nivel de transformación, durabilidad, alta incidencia de la diferenciación y de la marca, incorporación de altos niveles de normalización y de información, utilidades procedentes del envasado, adaptación a las economías de tiempo, importancia de los criterios nutricionales y de salud e incluso dimensión social».

Esta tendencia se presenta ligada, en forma indisoluble, con la profundización de la transnacionalización de las empresas agroalimentarias, así como con la expansión y crecimiento de los gigantes conglomerados de distribución comercial (Wal-Mart,

Carrefour, etc.), que se establecen en los países industrializados y en vías de desarrollo, y significan una porción cada vez más importante de la comercialización interna, que se expresa mediante la proliferación de los hipermercados y de las tiendas de autoservicio. Con esta visión, las políticas de promoción de descuentos en precios, el peso en el mercado para la compra de mayoreo y la inversión en la publicidad tienden a ser un efectivo instrumento de orientación en el consumo alimentario.

El vínculo de los cambios en el consumo de frijol en México y el mundo

En los hechos, estamos hablando de cambios en el consumo de frijol, los cuales están influidos por los aspectos que se definieron, pero, ¿cómo se expresa esta relación en otros países?

En primer lugar, se debe señalar que el consumo per cápita de frijol en el mundo ha tendido a disminuir en los últimos 30 años, con una tasa de crecimiento promedio anual negativa del -1%. Sin embargo, la tendencia de disminución no es la misma en el mundo. Contra la simple opinión apriorística, sucede que los países desarrollados presentan un menor crecimiento negativo que las naciones en desarrollo, aun cuando se sabe que el consumo de esta leguminosa es marginal y las variaciones en los precios relativos no impactan en mayor medida, debido a que la población no gasta en alimentos más que en una proporción muy pequeña de su ingreso. ¿Cómo se explica esto?

La razón de lo anterior es que el proceso de globalización también ha tendido a intensificar los procedimientos migratorios de la población y con ellos se mudan rasgos culturales. En países como Estados Unidos de América, Reino Unido o España, el consumo per cápita del frijol se ha elevado, en términos relativos y absolutos, dado el proceso de transculturación que gestan los grupos sociales de las na-

ciones del sur que inmigran a esos territorios. Esto, a su vez, hace que la influencia cultural de su alimentación tienda a ser relevante en regiones y zonas o influya en nuevos víveres procesados, por lo cual el aumento neto en el consumo de frijol no sólo se explica por una mayor presencia numérica de población latina en Estados Unidos, sino por la renovada influencia que ejerce sobre la población asentada en su transculturizado patrón alimentario.

En el caso latinoamericano, en el nivel del conjunto de países, también ha existido una tendencia hacia la disminución en el consumo per cápita de frijol. No obstante, la región sigue siendo ligeramente deficitaria, por lo cual la demanda regional se satisface, por lo general, mediante las exportaciones estadounidenses y canadienses hacia México y Centroamérica; además, hay transacciones en el ámbito intrarregional suramericano (exportaciones argentinas a Brasil y Venezuela y exportaciones chilenas hacia Colombia y Venezuela, etcétera).

Al interior de la región latinoamericana, destacan México y las naciones de Centroamérica, porque son los principales consumidores per cápita de frijol (detentan un consumo anual entre los 10 y 20 kg por cabeza, de los más elevados en el mundo); sin embargo, otras patrias importantes por la magnitud de su consumo de frijol son Brasil y países que son importadores reconocidos como Venezuela y Colombia.

3. LA EVOLUCIÓN DEL GASTO ALIMENTARIO Y DEL FRIJOL EN MÉXICO

Para comparar el consumo del frijol, se utilizó el que se registró a través del gasto de los hogares urbanos y rurales en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en un periodo de tiempo determinado. El lapso que se seleccionó para la observación fue entre 1989 y 1998 para abarcar un tiempo suficiente en el que se

puvieran contrastar cambios en el consumo de un alimento específico (9 años).

Es de reconocer que la distinción de los hogares como urbanos y rurales sólo tiene fines de ejercicio analítico, pues en sentido estricto se presentan dificultades para su comparación, dado que la fuente que suministró el INEGI sufrió modificaciones en relación con la clasificación de los hogares. En 1989, éstos se identificaron mediante la vivienda y se clasificaron por los conceptos de alta y baja densidad de población, mientras que en 1998, los hogares se distinguen entre hogares de poblaciones de 2,500 habitantes y más o de menos de 2,500 habitantes.

En particular, los datos de 1989 se referían al concepto de hogares en zona de alta densidad de población como aquéllos que se encontraban en los municipios del país que cumplían con una o más de las siguientes consideraciones: a) tener al menos una localidad con 15 mil o más habitantes; b) que el total de población sea mayor o igual a 100 mil habitantes; c) contener a la capital de la entidad; y/ o d) formar parte de alguna de las 12 áreas metropolitanas del país: ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Orizaba, Torreón y Tampico. Los hogares en zonas de baja densidad de población se definían como aquéllos que se asentaban en los municipios que detentaban localidades menores de 15 mil habitantes y los relativos a la parte rural de 19 municipios de zonas de alta densidad, que reunían las características de poseer localidades menores a 2,500 habitantes y/o donde el uso del suelo era forestal o agropecuario o se trataba de áreas naturales, como bosques, desiertos o pantanos⁴⁴.

La ambigüedad de la actual clasificación de hogares urbanos y rurales es palpable, porque la delimitación de zonas con una pobla-

⁴⁴ INEGI, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1989*, anexo 2, glosario de términos, INEGI, México, p. 287

ción mayor o menor a 2,500 habitantes es insuficiente, al existir, en la actualidad, muchas poblaciones con menos de esa cantidad de habitantes que se ligan a la formación de asentamientos irregulares urbanos en la periferia de las grandes ciudades y tienen poco que ver con las actividades del medio rural⁴⁵; al mismo tiempo, se puede considerar que en las zonas rurales ha existido un crecimiento natural de las poblaciones, por lo que se presentan casos mayores a 2,500 habitantes, aunque las actividades rurales sigan siendo predominantes en lo económico.

El significado que se otorga al comportamiento de los indicadores también es fundamental, pues la variación en el número de los hogares con gasto en frijol respecto al total que realizan gasto alimentario puede representar algo diferente entre los hogares urbanos y rurales, ya que mientras en unos significa, efectivamente, la disminución de familias que dejan de consumir el producto, en otros puede ser que se limiten a no adquirir el bien, a través del desembolso de su gasto monetario, sino que accedan a él mediante la producción para autoconsumo en circunstancias económicas difíciles y de falta de liquidez monetaria. Asimismo, la mayor o menor reducción del monto que se desembolsa en el gasto del frijol también puede significar incremento de precios relativos y menor cantidad consumida o una contracción en el consumo de frijol.

Después de señalar las salvedades y condiciones del manejo de la información que se utilizó, se presentan las observaciones que resultaron de la comparación de los indicadores sobre cantidad de hogares y del monto de gasto erogado por los hogares rurales y urbanos, entre 1989 y 1998, así como las variantes que existen entre los hogares clasificados por deciles de ingreso-gasto.

⁴⁵ El ejemplo más evidente son las poblaciones aledañas a la ciudad de México, en las que muchas de las nuevas poblaciones menores de 2,500 habitantes son asentamientos irregulares, establecidos en tierras ejidales, comunales y de parques nacionales, que luego son regularizados, de manera oficial, y se les dota de infraestructura y servicios públicos.

- 1) En términos globales, la cantidad de familias mexicanas que consumen frijol ha disminuido, relativamente. Esto se puede observar a través del descenso relativo del número de hogares con gasto en frijol, que en el nivel nacional en el lapso de 1989 a 1998 ha variado de 53% al 51% del total de hogares con gasto alimentario, respectivamente. Entre los hogares más afectados se pueden encontrar, con base en la distribución de ingreso-gasto por decil, a aquéllos con gasto en frijol, referentes al decil primero (varió de 58% a 49% respecto al total de hogares con gasto alimentario, entre 1989 y 1998), es decir, a la fracción de familias con los ingresos más escasos. Por el contrario, los hogares en donde se consume frijol, ubicados en los deciles intermedios (cuarto y octavo) fueron los que al interior de su decil correspondiente elevaron su peso relativo respecto al total de hogares con gasto alimentario.
- 2) Al observar el caso de los hogares urbanos, cabe señalar que, en términos del conjunto, prácticamente se estancó su peso relativo, pues aumentó tres décimas porcentuales en el lapso (citado) de nueve años, variando de 48% a 49% respecto al total de hogares con gasto alimentario. Sin embargo, en términos de la distribución de ingreso-gasto por deciles, los hogares consumidores de frijol correspondientes al decil primero disminuyeron de 57% a 50% del total de hogares con gasto alimentario respectivo. Otros hogares con gasto en frijol que también tendieron a disminuir en el periodo estudiado fueron los correspondientes a los deciles segundo y octavo; en contraste, los hogares consumidores de frijol que aumentaron su participación relativa dentro de su decil respectivo fueron los ubicados en los deciles séptimo, décimo, noveno y tercero.

Esta situación se constata, al considerar las dinámicas de crecimiento en el periodo citado: en el conjunto de hogares urbanos con gasto en frijol, se observó una dinámica de crecimiento de

istir, en
d de ha-
lares ur-
que ver
ede con-
atural de
,500 ha-
ninantes

licadores
los hoga-
mentario
y rurales,
ución de
ser que se
su gasto
ción para
falta de li-
del monto
nificar in-
ida o una

anejo de la
que resul-
d de hoga-
y urbanos,
e los hoga-

ico, en las que
ientos irregu-
que luego son
públicos.

Evolución de la importancia relativa de los hogares con gasto alimentario en hogares rurales y urbanos de México, 1989-1998

% de hogares con gasto en frijol respecto al total de hogares con gasto alimenticio		Total	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Urbano	Zonas de alta densidad	1989	48	57	55	52	57	55	52	43	46	39	27
	De 2,500 y +	1998	49	50	53	57	57	51	51	49	44	44	32
	Variación relativa		0	-6	-2	4	0	-4	-1	6	-2	4	5
Rural	Zonas de baja densidad	1989	61	60	63	53	64	64	64	63	60	62	56
	De - 2,500	1998	58	38	53	63	59	66	65	63	60	56	55
	Variación relativa		-3	-22	-9	9	-5	3	1	0	0	-6	-1

Ritmos de crecimientos en el periodo 1989-1998 de los hogares con gasto alimentario y en frijol

Hogares con gasto urbano nacional	Total	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Gasto en alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar y en tabaco	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Gasto en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar	7	12	10	6	8	7	8	7	5	7	7
Frijol	6	4	5	7	5	5	5	7	5	7	7
Hogares con gasto rural nacional											
Gasto en alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar y en tabaco	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
Gasto en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar	-1	-2	3	0	-1	2	1	-2	-1	-4	0
Frijol	-1	-5	-2	1	-1	0	-1	-1	-1	-2	0

5.6% de promedio anual, pero en el caso de los hogares ubicados en el decil primero se denotó un crecimiento inferior al citado promedio (4% anual). En cambio, en los hogares con gasto en frijol de los deciles décimo, séptimo, noveno y tercero se observaron dinámicas de crecimiento muy superiores al promedio.

- 3) La evolución en los hogares rurales fue distinta dado que, en conjunto, el número de hogares con gasto en frijol disminuyó, de manera relativa, al pasar de 61% al 58% del total de hogares con gasto alimentario; esto sucedió, principalmente, en el caso de los hogares ubicados en el decil primero, pues su peso relativo se redujo de 60% a 38% en el lapso 1989-1998. Otros hogares con gasto en frijol que también retrocedieron, en términos relativos, fueron los ubicados en los deciles segundo, noveno y cuarto. En

contraste, los hogares con gasto en frijol que elevaron su peso relativo fueron los correspondientes al decil tercero.

Asimismo, la comparación de las dinámicas de crecimiento también constata lo anterior, dado que, en conjunto, los hogares rurales con gasto en frijol mostraron un ritmo de crecimiento de -1% de promedio anual, siendo los hogares ubicados en el decil primero los que tuvieron un mayor decrecimiento promedio (-5.5% anual) y los hogares con gasto en frijol del decil tercero fueron los menos afectados con esta tendencia, pues mostraron un crecimiento muy pequeño, pero positivo (0.9%) durante el lapso 1989-1998, en contraste con los similares ubicados en los demás deciles.

- 4) La importancia relativa del monto en el gasto monetario del frijol respecto al total del gasto alimentario en los hogares urbanos se mostró con una ligera variación positiva de 2%, en 1989, a 2.5%, en 1998. Las familias de más escasos ingresos (decil primero) siguieron siendo las principales en las que el gasto del frijol respecto al total del gasto alimentario se mantuvo importante (6% del total durante el periodo). Los hogares urbanos con incremento en el peso relativo del monto en el gasto del frijol respecto al total alimentario fueron los relativos a los deciles tercero, segundo, cuarto y séptimo. En los hogares urbanos inscritos en los deciles octavo y décimo, no existió variación en la importancia relativa del monto en el gasto del frijol en su total alimentario correspondiente (1.7% y 0.9%, respectivamente).

Es interesante observar que existió un considerable dinamismo de crecimiento del monto en el gasto del frijol en el conjunto de hogares urbanos, ya que fue de 3.8% de promedio anual en el periodo 1989-1998. Los ritmos de crecimiento del monto en el gasto del frijol, a través de los hogares por deciles de ingreso-gasto en el periodo citado, indican que los más elevados fueron en los deciles séptimo, sexto, tercero y noveno. Por el contrario, los hogares urbanos de más escasos ingresos (decil primero)

7
2
5
56
55
-1

	x
6	6
7	7
7	7
0	0
-4	0
-2	0

subica-
r al cita-
on gasto
rcero se
s al pro-

o que, en
sminuyó,
e hogares
el caso de
relativo se
ogares con
s relativos,
cuarto. En

**Evolución de la importancia relativa del monto del gasto
alimentario en hogares rurales y urbanos de México, 1989-1998**

% de hogares con gasto en frijol respecto al total de hogares con gasto alimenticio		Total	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Urbano	Zonas de alta densidad	1989	2.0	5.8	3.4	2.9	2.5	2.5	2.0	1.6	1.7	1.3	0.7
	De 2,500 y +	1998	2.5	6.0	4.3	4.0	2.9	2.9	2.8	2.3	1.7	1.7	0.9
Rural	Zonas de baja densidad	1989	5.6	11.2	10.8	7.4	6.7	6.7	6.9	6.3	3.9	3.7	3.0
	De - 2,500	1998	7.3	7.7	10.5	11.6	8.8	8.8	8.5	7.2	7.4	4.8	4.3

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1989 y 1998

**Ritmo de crecimiento en el periodo 1989-1998
de los montos de gasto alimentario y en frijol**

Hogares con gasto urbano nacional	Total	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Gasto en alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar y en tabaco	1.2	-1.2	2.2	1.8	1.3	1.6	1.4	1.9	2.4	1.8	-0.5
Gasto en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar	-0.9	5.7	7.8	-3.4	2.0	1.2	1.4	3.5	-0.9	-0.8	-3.6
Frijol	3.8	-0.9	4.8	5.3	4.8	2.9	5.4	6.3	2.6	5.2	2.5
Hogares con gasto rural nacional											
Gasto en alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar y en tabaco	-4.8	-5.6	-4.0	-4.9	-5.6	-4.1	-4.3	-4.4	-5.4	-5.8	-4.0
Gasto en alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar	-6.1	1.6	-2.9	-11.5	-5.8	0.9	-1.6	-8.6	-9.9	-9.4	-3.9
Frijol	-2.0	-9.4	-4.2	0.1	-2.5	-1.2	-2.1	-2.9	1.5	-2.9	0.0

mostraron un crecimiento negativo en su monto de gasto en el frijol (-0.9% en el lapso 1989-1998).

- 5) En términos globales, la participación relativa del monto en el gasto del frijol dentro del total del gasto alimentario en los hogares rurales manifestó una elevación que varió de 5.6%, en 1989, a 7.3% del total, en 1998. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el medio urbano, las familias de más escasos ingresos en el medio rural sufrieron una drástica reducción del monto destinado al gasto alimentario para el consumo del frijol, variando de 11.2% a 7.7% del total, en el lapso citado. En contraste, los hogares urbanos inscritos en los deciles tercero y octavo fueron

los que detentaron un mayor peso relativo del monto en el gasto del frijol respecto al total del gasto alimentario. La dinámica de crecimiento del monto en el gasto del frijol, en el conjunto de los hogares rurales, denotó un ritmo de crecimiento negativo del orden del -2%, en el periodo 1989-1998. El monto en el gasto del frijol de los hogares rurales de las familias de más escasos ingresos (decil primero) manifestó un drástico decrecimiento, pues su ritmo de crecimiento negativo llegó a ser del -9.4% de promedio anual. En contraste, las dinámicas de crecimiento más elevadas en el periodo correspondieron al monto en el gasto del frijol perteneciente a los hogares rurales inscritos en los deciles séptimo, sexto, noveno y tercero.

IX	X
1.3	0.7
1.7	0.9
3.7	3.0
4.8	4.3

1998

II	IX	X
1.4	1.8	-0.5
0.9	-0.8	-3.6
2.6	5.2	2.5
5.4	-5.8	-4.0
9.9	-9.4	-3.9
1.5	-2.9	0.0

Comentarios a los resultados de la observación

A manera de hacer una primera línea de comentarios, se podría decir, como se ha señalado en el principio de este apartado, que las variaciones en la importancia relativa y en la dinámica de crecimiento en el consumo del frijol en el número de hogares urbanos y rurales y en el monto de gasto alimentario destinado al consumo de frijol pueden significar cosas distintas. No obstante, en términos generales, el número de familias mexicanas que mediante el gasto en frijol accedían a él ha disminuido; asimismo, los hogares pobres y de ingresos más escasos, ubicados en el decil primero, han sido los más proclives a dejar de acceder al consumo de frijol por la vía del gasto monetario.

En el caso de los hogares rurales, pudieran existir posibilidades de que esta disminución en parte se haya suplido a través de la actividad productiva para autoconsumo de esta leguminosa, pero no existen estimaciones sobre ello. Por otra parte, es claro que las familias pobres urbanas, al dejar de efectuar un desembolso monetario para acceder al consumo de frijol, incidieron en una reducción del consumo

gasto en el

monto en el
en los hoga-
%, en 1989,
de lo suce-
ingresos en
monto desti-
variando de
ontraste, los
ctavo fueron

de frijol, pese a que esta leguminosa sigue siendo importante dentro del total de su gasto alimentario.

En el caso de los hogares de las familias pobres urbanas, es posible que el cambio en el patrón de consumo alimentario se encuentre asociado a modificaciones en el comportamiento y la estructura de vida familiar, donde la estrategia de sobrevivencia económica familiar tiende a efectuar un mayor gasto en el consumo alimentario fuera del hogar durante el día ante la creciente informalización económica de la vida urbana.

Una segunda línea de comentarios es que el efecto causado por la variación de los precios relativos en la elasticidad de la demanda respecto a los precios, en el caso del consumo del frijol, puede ser uno de los factores determinantes en las modificaciones en los hábitos de consumo alimentario de las familias ubicadas en los deciles intermedios de la distribución ingreso-gasto. La variación en el monto del gasto en frijol dentro del gasto total alimentario, en un grupo de hogares urbanos inscritos en un decil de población, puede reflejar una elevación de los precios de esta leguminosa o flexibilidad en el consumo para adaptarse a circunstancias económicas restrictivas; ello se podría manifestar en un incremento en la cantidad consumida de frijol (entre otras cosas) como consecuencia de la contracción del consumo alimentario extra-hogar y ante condiciones de crisis o de tipo recesivas económicas.

En lo que respecta a los hogares con gasto en frijol dentro del consumo alimentario —que se ubican en el decil décimo o de ingresos más elevados—, su comportamiento tiende a reafirmar la Ley de Engel relativa a que los sectores sociales más elevados tienden a manifestar una inelasticidad en su gasto alimentario, debido a la condición marginal del consumo alimentario dentro del gasto monetario total; no obstante, en términos relativos, creció (algo) el número de familias con gasto en frijol dentro del gasto alimentario, por lo que es posible que dicha expansión del consumo en este decil se atribuya a factores

extraeconómicos, como los de tipo cultural, que han actuado bajo esa dirección a modo de contratendencia en la sociedad contemporánea.

4. CONCLUSIONES

En México, la transformación del consumo de alimentos, como el frijol, pasa por considerar un conjunto de elementos, que interactúan en su definición, como componentes característicos y distintivos en la formación de la identidad cultural. Bajo la actual tendencia de transculturación imperante en el proceso de globalización, las modificaciones sufridas en el consumo de alimentos básicos y populares —como en el caso del frijol en nuestro país— conllevan las posibilidades de permanencia, aun cuando la naturaleza social de su consumo se transforme y su papel, como objeto de identidad cultural, también resienta cambios.

De tal modo, los cambios en el comportamiento de vida y de estrategia de sobrevivencia en las familias pobres han tendido a disminuir el consumo de frijol; ello se expresa en la reducción de familias que erogan un gasto monetario en este alimento tanto en el medio urbano como en el rural. En el caso rural, la reducción del gasto monetario para el acceso al consumo del frijol puede estar relacionada con un incremento del autoconsumo; en el caso del medio urbano, se podría aducir la disminución del consumo debido a un incremento en el consumo alimentario extrahogar, porque, sin dejar de considerar al frijol como alimento de calidad e indispensable, objetivamente la familia pobre ya no dispone del tiempo social necesario para mantener la estructura social del consumo alimentario familiar dentro del hogar.

Por otra parte, la presencia, en el periodo 1989-1998, de los impactos por la apertura externa comercial en el consumo alimentario, que es provocada por la importación de productos proteínicos de origen animal a bajos precios y a la que se añan variaciones relativas de los precios de alimentos en el mercado interno —que han conllevado a cambios en

la elasticidad de la demanda-precios—, ha resultado, para el caso del frijol, en que los hogares urbanos y rurales ubicados en los deciles intermedios en la distribución de ingreso-gasto han mostrado una flexibilidad para adaptar su consumo y diferenciarlo, así como para ajustarse, según sus propias condiciones, a las circunstancias macroeconómicas y a factores extraeconómicos, que inciden en la transformación social del consumo del frijol en México.

Por tanto, en términos de las observaciones realizadas, se puede concluir, en el nivel general, que en nuestro país, en el lapso 1989-1998, se demostró una evolución diferenciada en la estructura social del consumo del frijol y, en el particular, que las familias pobres urbanas y rurales han manifestado una mayor propensión relativa a la disminución del consumo del frijol, pese a que culturalmente lo siguen considerando como uno de los alimentos principales de la población mexicana.

BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, G., R. Rama y F. Rello, *Agricultura y alimentos en América Latina, el poder de las transnacionales*, ICI-UNAM, México, 1985
- BOLTVINIK, J., y E. Hernández Laos, *Pobreza y distribución del ingreso en México*, Siglo XXI Editores, México, 2001
- GARCÍA CANCLINI, N., *Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización*, Grijalbo, México, 1995
- INEGI, *Encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares a nivel nacional, 1989 y 1998*, México
- SANZ CAÑADA, J., «Articulación espacial de la cadena agroalimentaria: impacto de los procesos de globalización y reestructuración postfordista», en Bretón García y Mateu (eds.), *La agricultura familiar en España, estrategias adaptativas y políticas agropecuarias*, Iniversitat de Lleida, 1997
- TORRES SALCIDO, G., y I.M. Morales, *Introducción en maíz-tortilla, políticas y alternativas*, CIICH-UNAM, México, 1997
- TORRES T., F., y José Gasca Z., *Ingreso y alimentación de la población en el México del siglo xx*, IIEC-UNAM/Portúa, México, 2001
- WOLF, E., *Pueblos y culturas de Mesoamérica, 2000*, 14ª impr., Era, México, 1967

HACIA UN CAMBIO ESTRUCTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO Y SUSTENTABLE EN CHIAPAS

GUILLERMO MONTOYA GÓMEZ⁴⁶

FRANCISCO HERNÁNDEZ RUIZ⁴⁷

JOSÉ R. MIJANGOS SOLÍS⁴⁸

1. INTRODUCCIÓN

En Chiapas, el desarrollo sostenido sustentable (DSS) sólo se podrá alcanzar si se plantea una política económica (PE) coherente a las necesidades de cambio estructural que demandan los sectores de la sociedad, en especial los que menos tienen. Dicha PE debe tener un papel central y ordenador en el Plan de Desarrollo Estatal. Para ello, habrá que superar las inercias, mentales y empíricas, de un modelo de acumulación, que sustentó sus bases en los factores productivos: tierra y fuerza de trabajo no calificada. Inercias que se levantan, como obstáculos, e impiden la reconversión hacia un nuevo esquema de crecimiento y desarrollo sustentable. Por eso, el reto no sólo radica en atreverse a imaginar acciones innovadoras de política económica, sino en emprender procesos inéditos de inversión pública y privada, que hagan viable el tránsito estructural, porque resulta paradójico que la aportación al producto interno bruto (PIB) del sector primario, que absorbe todavía más fuerza de trabajo que ningún otro sector

* Investigador, profesor titular de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

⁴⁷ Técnico asociado B, Ecosur

⁴⁸ Técnico titular A

de la economía, haya perdido la posibilidad de generar efectos de arrastre y configure círculos perversos de pobreza difíciles de traspasar. Peor es que siga siendo el sector al que más se destina la escasa inversión. Si bien en el sector rural, otrora fuente de divisas y de alimentos baratos, es donde se localiza la población extremadamente pobre, desde el punto de vista de un proyecto de desarrollo, no se justifica que por esa situación se siga pensando que aún tiene potencial para configurar un proceso de crecimiento y de desarrollo.

En efecto, la situación a la que ha arribado el sector se explica como resultado del deterioro secular de los términos de intercambio y porque sus ventajas competitivas —extracción de rentas naturales, basada en la ampliación de las fronteras agrícola y pecuaria, y fuerza de trabajo barata— se han venido diluyendo en un mundo mucho más interdependiente, que exige calidad y precios baratos, en otras palabras, que requiere productividad, competitividad, innovación y mayor organización para la gestión.

Por todo ello, nuestro estado necesita, de manera urgente, una alternativa de desarrollo —que se sustente en otros sectores productivos de mayor arrastre e impacto— y de sectores que vayan, de forma acelerada, sustituyendo las actividades primarias, que si bien antaño procuraron un sustantivo impulso económico, en la actualidad sólo contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de la economía chiapaneca; por ejemplo, ante la inminente baja del precio del café, los productores del Soconusco exigen que se considere como de seguridad nacional el asunto de las importaciones que hace la transnacional Nestlé, porque con ello los presionan para que vendan a 4.65 pesos el kg (*La Jornada*, 8 feb, 2001).

Ésta y otras exigencias se convierten en lugares comunes de todos los años de los cafetaleros, maiceros, azucareros, cacaoteros, etcétera. Y no es que los productores, hasta cierto punto, no tengan razón, sino que la carga económica termina sien-

do un
cias e
clo tra
de los
costos
los pa
Por
versió
do ésta
dijimo
al PIB s
Res
tiva a u
verso –
secular
ciment
de romp
3,670 de
es un ej
existe c
dice de p
(*El Fin*
Para
mundos
pezar co
tual secr
historia e
ra rural,
recanaliz
micos, cu
tar en el
conducen

do un enorme subsidio enmascarado, que obedece a las deficiencias estructurales de la economía chiapaneca, reproduciendo, ciclo tras ciclo, la misma lógica: cargar con los costos del deterioro de los términos del intercambio a las endeblas arcas del gobierno; costos que terminan filtrándose, vía comercio internacional, hacia los países a los que se les venden los productos primarios.

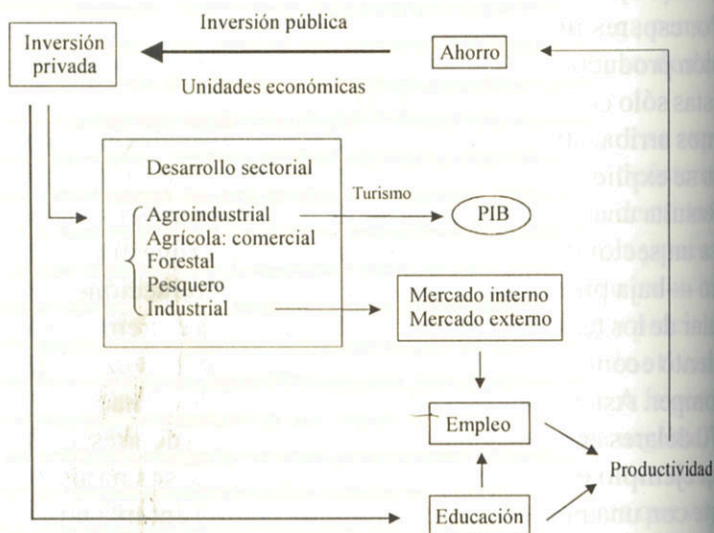
Por eso, resulta contradictorio que los mayores montos de inversión productiva se canalicen a las actividades primarias, cuando éstas sólo contribuyen con el 14% del PIB estatal. Si bien, como dijimos arriba, absorben un 48% de la PEA, su magra contribución al PIB se explica, básicamente, por la muy baja productividad.

Resulta una deseconomía canalizar la mayor inversión productiva a un sector de muy baja productividad, porque el círculo perverso —baja productividad-altos costos de producción-deterioro secular de los términos de intercambio-pobreza extrema-lento crecimiento económico-mayor pobreza— será cada vez más difícil de romper. Así, mientras el PIB per cápita, en el nivel nacional, es de 3,670 dólares anuales, en la entidad, es de 2,100 dólares. «Chiapas es un ejemplo en el que la abundancia de recursos naturales coexiste con una población empobrecida, al presentarse un alto índice de pobreza, marginación, desnutrición y rezago educativo» (*El Financiero*, 18 feb, 2001).

Para revertir dicha situación, que se asemeja al peor de los mundos posibles, hay necesidad de iniciar el cambio. Se debe empezar con nuestras estructuras mentales, porque, como dice el actual secretario de Gobierno en las conclusiones de su libro *Breve historia de Chiapas*: «La cultura de los chiapanecos es una cultura rural, ranchera» (Zebadúa, 1999: 89). Luego, comenzar a recanalizar los flujos de inversión hacia sectores mucho más dinámicos, cuyos efectos de locomotora empezaremos a experimentar en el mediano plazo, si se aplican desde ahora las políticas conducentes.

En lo que sigue, trataremos de esbozar un nuevo modelo de acumulación y desarrollo sostenido y sustentable (diagrama 1) para

Diagrama 1
Modelo de interrelación de las variables



emprender el cambio estructural, que permita, sin exclusiones, incorporar a sectores clave de la economía y éstos se conviertan en el pivote del nuevo dinamismo. Si la nueva política económica empieza a impulsar, por la vía de las inversiones públicas y privadas, al sector turismo —vinculado a las áreas naturales protegidas—, al subsector forestal, a la agroindustria —articulada a los productos altamente comerciales— y al sector pesca e industrial, podríamos iniciar un genuino cambio estructural, en el cual las locomotoras que arrastrarán la economía tendrían una base productiva distinta con conservación de recursos naturales. Además, la tierra dejaría de ser el factor productivo por excelencia y el capital ocuparía su lugar; asimismo, la fuerza de trabajo tendría mucha

mayor calificación con alto potencial de movilidad social, configurando un círculo virtuoso de crecimiento y de desarrollo sostenido y sustentable.

2. VARIABLES Y SECTORES CLAVE SUSTITUYENTES:

ALGUNOS INDICADORES PARA SU MEDICIÓN

Partimos de las siguientes hipótesis: La inversión agregada: privada, pública y la del resto de los agentes económicos, en los sectores clave sustituyentes del sector primario, tendrá un efecto multiplicador sobre el resto de la economía.

El nivel del consumo agregado interno deberá verse disminuido para destinar mayores montos monetarios a la reinversión, es decir, deberá disminuir la propensión marginal a consumir para incrementar la propensión marginal a ahorrar. En este sentido, habrá que medir:

El ingreso: consumo y reinversión subsector productivo

El nivel de consumo agregado

El excedente productivo

Las exportaciones

Será importante formar cuadros técnicos para apoyar las actividades sustituyentes; por tanto, será necesario medir:

El empleo generado por unidad de inversión, en términos promedio

El empleo generado por subsector productivo

Lo anterior es posible medirlo, a través del siguiente modelo:

$$PIB = f(I, E, P, Y, C, RI, X)$$

En donde:

PIB= producto interno bruto estatal

I= inversión

E= empleo

P= productividad

Y= ingreso

C= consumo

ri= reinversión

x= exportaciones

2.1 Operativización del modelo de interrelación de variables

El cuadro que alude al crecimiento sectorial se refiere a que la producción debe girar en torno a los recursos forestales, atendiendo la vocación productiva del estado. En efecto, algunos estudios indican que el potencial de Chiapas radica en sus recursos forestales y todo lo que se articula a éstos: servicios ambientales, reservas naturales, bancos de germoplasma y biodiversidad, recarga de acuíferos y ríos; los últimos se vinculan con la generación de energía eléctrica.

En esta perspectiva, la idea es implementar políticas dirigidas al impulso de la industria forestal sustentable, que incluyan a los dueños de los recursos y a los industriales. En este marco, hay ejemplos exitosos: el modelo chileno de aprovechamiento integral de los recursos maderables, que ha sabido insertarse en mercados externos, y ha incrementado su participación en el PIB subsectorial. Pero también se pueden aprovechar los productos no maderables con alto potencial comercial y artesanal.

Estrechamente vinculadas a la conservación de los recursos naturales se ubican la producción orgánica y la producción verde, entre otras modalidades de producción amigable con los recursos naturales. No se trata de dejar de lado las actividades primarias, sino de reordenar territorios, actividades productivas, planes de trabajo y mercados y, sobre todo, conservar, acumular y redistribuir los beneficios para mejorar los niveles de vida.

Por el lado del turismo y ecoturismo, se requieren políticas de ampliación de infraestructura, que permitan cumplir con el cometido de facilitar los flujos de personas y mercancías, cuyas externalidades positivas permitan abaratar las transacciones y eliminar el excesivo

intermediarismo. De manera que la infraestructura sea multifuncional, es decir, que sea el pivote de la nueva estructura productiva y la punta de lanza del desarrollo de mercados internos, locales y regionales. Dichos mercados internos se verán reforzados por el incremento del ingreso de los agentes económicos locales y por la demanda agregada, conformada por los turistas, esto es, por la demanda filtrada del exterior. Aquí, el modelo a seguir es el de San Cristóbal de Las Casas, que aprovecha la renta arquitectónica, pues su ventaja comparativa consiste en su relativa cercanía a varios de los centros ceremoniales indígenas.

Como se puede observar, el subsector vinculado al turismo y al ecoturismo propaga efectos hacia otros subsectores y ayuda a incentivar inversiones adyacentes (Montoya, 1998; Villafuerte, 1997; Narváez, 2001). No es casual que, para la economía estadounidense, el subsector en cuestión sea el tercero en importancia, como generador de ingresos, y el número dos por su absorción de fuerza de trabajo. En un lustro, tiene el objetivo de convertirse en el que genera más ingresos del subsector productivo (*El Financiero*, 25 may, 2001).

Este círculo virtuoso keynesiano —si se quiere— absorbería fuerza de trabajo, incrementaría el ingreso, fortalecería el ahorro y, siendo atractiva la rentabilidad, estimularía la inversión, con lo que habría posibilidad de incidir en el PIB estatal. No obstante, otro elemento fundamental para incrementar la productividad, reforzar los volúmenes de excedentes para la exportación e incrementar la generación de divisas es la educación. La política educativa debe impulsar un cambio en el aparato educativo para ofertar las capacidades y perfiles que demandará el cambio estructural.

En este proceso de cambio estructural, hay factores que están actuando a favor: la muy pronta terminación de dos importantes vías de comunicación —la autopista Tuxtla Gutiérrez y la de Tuxtla Gutiérrez-ciudad de México, las cuales, según las autoridades, podrán operar en agosto próximo— (*Cuarto Poder*, 26 may, 2001), el Plan Puebla Panamá —que en el mismo tenor busca impulsar la infra-

estructura de las comunicaciones— y la entrada en vigor desde marzo pasado del Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte. Más aún, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, Sectur dará apoyo a «la pequeña y mediana empresa turística para elevar la calidad de los servicios y para impulsar el desarrollo de proyectos sustentables —que respeten el medio ambiente y sean rentables—» (*El Financiero*, 28 may, 2001).

3. EVIDENCIAS DEL AGOTAMIENTO DEL MODELO ACTUAL

En la gráfica 1, se muestra la tendencia que el PIB experimentó de 1980 a 1993. Se puede observar cómo, en consonancia con la crisis del país, la economía chiapaneca resintió una suave caída en la dinámica productiva, en comparación con los otros estados del sureste del país. Las explicaciones que nosotros inferimos son:

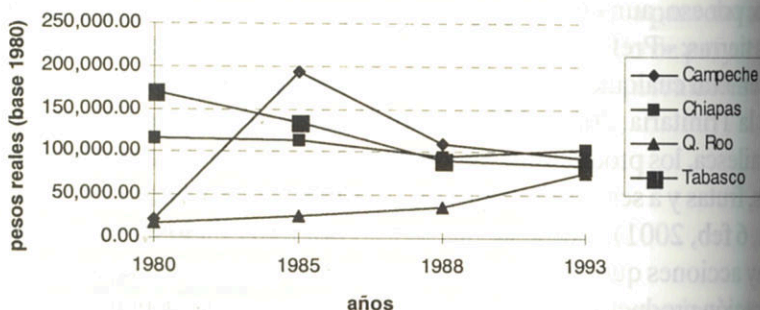
- La caída de los precios de los productos primarios: petróleo, café, cacao, soya y maíz, que originó, a su vez, reducciones severas en la reinversión y en las unidades de producción. Lo anterior presionó en los niveles de rendimientos y en la absorción de fuerza de trabajo.
- La reducción de la inversión pública y privada, que se explica por la reducción en el nivel de ingresos públicos, por el crecimiento desordenado del personal adscrito al gobierno, por las altas tasas de interés y por la incertidumbre, derivada de la inestabilidad de la economía nacional.
- El surgimiento del sector informal, que engrosó a la PEA informal comercial y a los servicios urbanos, donde muchos escapan al pago de impuestos y a las estadísticas.
- La caída del consumo interno de varios productos chiapanecos, de manera que no encontraron ni mercado interno ni externo.

A estos razonamientos, se agrega que el efecto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ha sido, para el caso de los productos básicos, devastador. El maíz ha dejado de ser negocio; por eso, aun en los distritos de riego, se observa el abandono de las tierras: «Prefieren dar rentada en 300 pesos la há que arriesgarse a sembrar cualquier cultivo» (comunicación personal, distrito de riego de la Trinitaria, 2001). Más aún, en el otrora granero de Chiapas: La Frailesca, los productores maiceros están aprendiendo a sembrar flores, frutas y a ser agroindustriales (Foro Estatal de Política Económica, 6 feb, 2001). Como se puede ver, por parte de los productores, hay acciones que reflejan el deseo de cambio, a través de la diversificación productiva, y hay muchas iniciativas que se deben impulsar, pero que al parecer los funcionarios del nuevo gobierno no quieren poner en práctica; por ejemplo: «En tan sólo 5 años, los productores pecuarios pueden duplicar la producción hasta en 50%, si se aplican los programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural», destacó Gerardo Villareal Moreno, delegado de esta dependencia en la zona norte (*Cuarto Poder*, 10 mar, 2001), cuando el sector ganadero, aparte de haber propiciado un proceso de deforestación, tiene muy baja demanda de fuerza de trabajo por no mencionar que el modelo extensivo es depredador de los recursos naturales.

Como se puede observar en la misma gráfica, en sentido inverso al comportamiento del PIB de Chiapas, el de Quintana Roo muestra, en el mismo periodo, un crecimiento sostenido. La tendencia es porque en Quintana Roo se practican actividades articuladas al sector turismo. Pero, ¿qué significa el sector turismo en términos de arrastre del resto de los subsectores de la economía?

En el nivel nacional, por ejemplo, de 1994 al 2000, la balanza turística tuvo un saldo favorable que alcanza la cifra de 18 mil millones de dólares (*El Financiero*, 22 sep, 2000) en contraste con la balanza de otros sectores, cuyos resultados fueron negativos: el subsector agrícola y forestal, por citar sólo dos (*Momento Económico*, vol. 7,

Gráfica 1
Comportamiento del PIB real de los
estados fronterizos del sur, 1980-1993



Fuente: INEGI, *Anuario estadístico de Chiapas*, v/a

2001). Ello se debió a que en ese periodo, el país recibió poco más de 100 millones de paseantes internacionales, lo que generó ingresos netos por al menos 40 mil millones de dólares. De esta cantidad, una vez descontados los egresos en divisas por los viajes de los mexicanos al extranjero, se obtuvo el superávit de 18 mil millones de dólares. Lo cual ha procurado que nuestra nación ocupe, en el nivel mundial, el decimocuarto lugar.

A esta dinámica se sumarán las inversiones para mejorar los servicios aéreos que han anunciado Cintra y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes aportarán un millón 737 mil dólares para la promoción sustentable del mundo maya. En Chiapas, se inicia el recorrido hacia el denominado mundo maya, donde se ubican cuatro de las reservas de las biosferas más importantes en el nivel mundial. Nos referimos a: Montes Azules, en Chiapas; Calakmul, en Campeche; Sian Kan, en Quintana Roo; y la reserva de la biosfera maya, en el Petén, Guatemala (Montoya, 1998).

En estos lugares, se encuentran asentados centros de población que de no tener alternativas productivas sustentables pronto incidirán

sobre las zonas núcleo de dichas reservas. Por eso, megaproyectos, como los del mundo maya⁴⁹, son necesarios para detonar procesos de crecimiento y desarrollo.

Tanta importancia tiene el subsector turismo que el grupo de Aeropuertos del Sureste (Asur), que opera nueve aeropuertos—incluidos los de Cancún, Villahermosa, Tapachula y Cozumel—, invertirá este año 24 millones de dólares para ampliar y modernizar los servicios aeroportuarios (*El Financiero*, 6 feb, 2001). En el mismo tenor, autores en otros países han encontrado que «in this era of neoliberal economic policies, tourism offers developing nations a rare opportunity for a source of economic growth that can substantially benefit the poorest of the poor: indigenous peoples» (Snow, 2000).

Impulsar al sector turismo implica, en primer lugar, iniciar un proceso económico expansivo, al activar la industria de la construcción, porque el sector demanda vías de comunicación terrestres, aéreas y, eventualmente, marítimas; además de insumos, requiere mucha fuerza de trabajo calificada (ingenieros, arquitectos, maestros de obra, etc.) y no calificada (peones, técnicos, etc.) y, en segundo, dinamizar el sector de los servicios especializados, como el de hotelería y restaurantería, así como el financiero, de agencias de viajes, transportes terrestres y aéreos y los subsectores subyacentes. Luego, también el impacto se propaga hacia las actividades agropecuarias, sobre todo las vinculadas a la producción de alta demanda de los turistas (si son orgánicas mejor): frutas y carnes. En el ámbito de la agregación de valor, sobresalen las artesanías.

Se debería estimar el impacto en la generación de empleos por unidad de inversión inicial, pero no están disponibles los datos que se requieren. Algunos autores estiman «que por cada millón de pesos

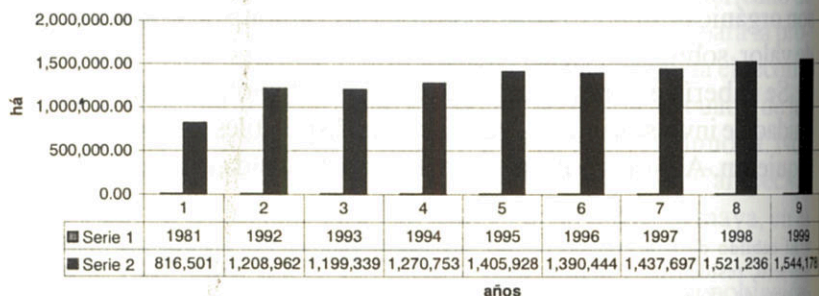
⁴⁹ El cabildo de Isla Mujeres aprobó, por unanimidad, el plan maestro del complejo hotelero, residencial y náutico Playa Mujeres, en cuya fase inicial se invertirán 40 millones de dólares de un total de mil 500 millones de dólares. Todo para construir en una superficie de 376 há la instalación de 13 mil 200 habitaciones» (*El Financiero*, 23 oct, 2000).

invertidos se crea un valor agregado de 791 mil (...) y se crean 41 empleos en el sector servicios» (Ramírez, 1990). Sin embargo, se puede argumentar que, además de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que se configuran, se consolidan mercados locales y regionales, porque esa demanda estacional que se genera es una especie de demanda externa, que se filtra hacia el interior de las regiones en donde se localizan esquemas de esta naturaleza, los cuales, obviamente, van a depender del número de turistas, de la capacidad de recepción, del volumen del gasto que hagan los turistas y de otros factores locales, como los encadenamientos productivos (Narváez, 2001).

De manera que se puede colocar al sector turismo como el que pudiese iniciar un efecto de arrastre al resto de la economía, apoyándose en el enorme potencial de los recursos naturales que se tienen no para la extracción minera, sino para apreciar los valores escénicos y de existencia que poseen de forma intrínseca. Además, puede contrarrestar la sostenida apertura de la frontera agrícola, cuya tendencia en nuestro estado indica que no ha alcanzado todavía su estabiliza-

Gráfica 2

Superficie total ocupada en la agricultura en Chiapas,
1981-1999 (há)



Fuente: INEGI, *Anuario estadístico de Chiapas*, v/n

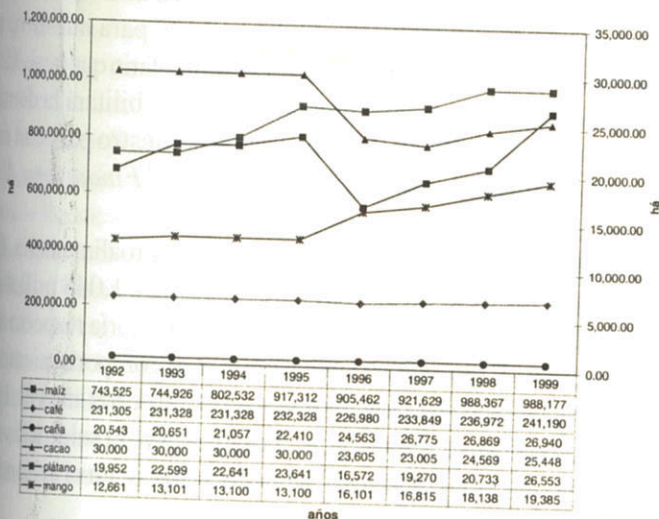
se crean 41
 embargo, se
 nacia atrás y
 los locales y
 ra es una es-
 de las regio-
 , los cuales,
 a capacidad
 as y de otros
 os (Narváez,
 como el que
 nía, apoyán-
 que se tienen
 res escénicos
 s, puede con-
 ya tendencia
 su estabiliza-

ción, porque la tierra es el factor productivo central en el modelo actual.

El cultivo de maíz sigue ganando terreno, aun en condiciones nada aptas para su cultivo (gráfica 3). En este proceso de sostenida incorporación de nuevas tierras a la actividad agrícola, sin duda se afecta superficie forestal; por ejemplo, un estudio reciente encontró que la pérdida de superficie forestal en dos municipios de Chiapas, entre 1972 y 1995, fue de 53.3 y 41% (Morales, 2000). Dicho proceso conlleva a consecuencias conocidas: pérdida de biodiversidad, alteración de mantos freáticos, mayor exposición a la erosión de los suelos con pendientes elevadas, incremento en el déficit de captura de bióxido de carbono, entre otras externalidades negativas, que tienen que ver con bienes y servicios ambientales, cuyos valores intrínsecos aún no se traducen en precios de mercado

Gráfica 3

Evolución de la superficie plantada de los principales cultivos de Chiapas, 1992-1999



Fuente: INEGI, Anuario estadístico de Chiapas, v/n

	8	9
	1998	1999
17	1,521,236	1,544,178

como para poder cuantificar las pérdidas en términos monetarios y los ingresos que pudieran obtenerse, dándole otro tipo de uso a dichos recursos naturales.

Y aunque en este proceso, en efecto, los cultivos comerciales han ido ganando terreno, como el caso del café, el plátano y la caña de azúcar, no deja de ser paradójico que, por ejemplo, en la actualidad, el precio del café haya alcanzado sus niveles más bajos de los últimos años (*El Financiero*, 2001) y que, como mencionamos arriba, el estado tenga que echar mano de recursos ciclo tras ciclo, de manera que el gobierno se convierte en una especie de respaldo de última instancia ante la caída de los precios; de esa forma, se transfieren recursos al exterior.

Por ejemplo: para la actual crisis de los precios, la Sagarpa autorizó la entrega de 100 millones de pesos, como apoyo emergente, para los cafecultores de Chiapas (*La Foja Coleta*, 2 mar, 2001), la crisis del azúcar obligó a declarar la quiebra de ingenios —en el caso del de Huixtla, todavía no liquidan a los cañeros— (*El Financiero*, v/n, 2001) y la actual desaceleración económica de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, equivaldrá, para nuestro país, a una «agudización del déficit comercial agroalimentario que tiene México en su intercambio comercial externo, pues se debilitará la demanda de productos que tradicionalmente exporta nuestro país con éxito, como café, hortalizas, mango y camarón» (*El Financiero*, 1 mar, 2001).

En efecto, el déficit comercial de la balanza agroalimentaria, forestal y de pesca, entre 1994 y 2000, fue de 1,522 a 1,048 millones de dólares, es decir, se experimentaba una ligera mejoría respecto al año previo a la crisis. Estas cifras contrastan con el comportamiento de la balanza de pagos del sector turismo, que durante los años de 1999 y 2000 alcanzó cifras superavitarias. Por ejemplo, el saldo a favor, en el primer año, fue de 3,555 millones de dólares; en el segundo, de

acuerdo con los datos disponibles en el tercer trimestre, fue de 3,081 millones de dólares (*Momento Económico*, 2001).

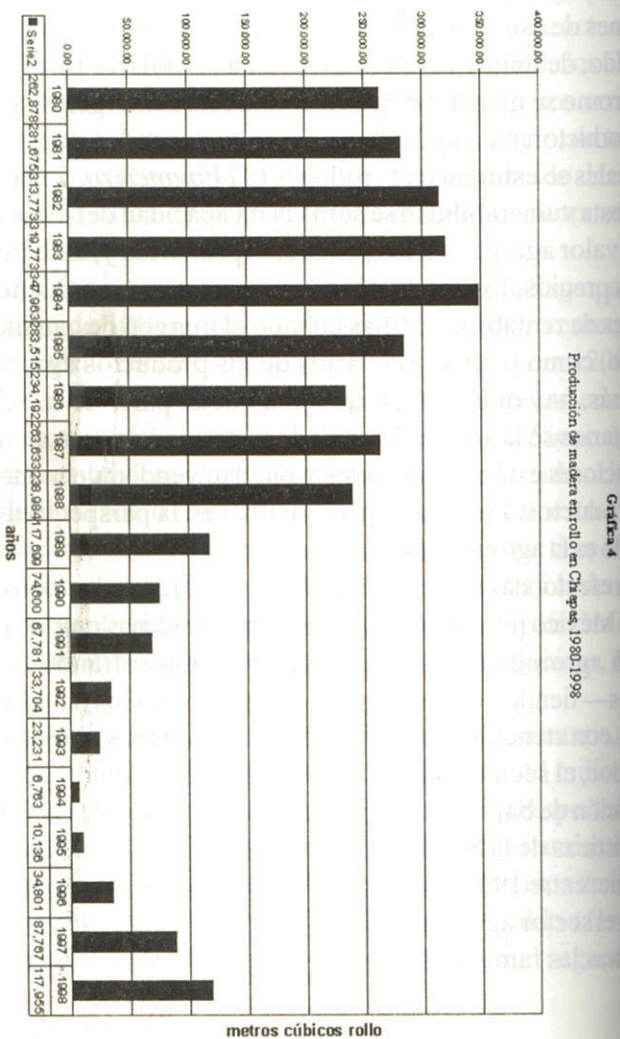
Todo, sin mencionar que la balanza agropecuaria de 2001 se verá agravada por la crisis del precio del café que viven los cafeticultores del país y de Chiapas. Efectivamente, México dejará de cosechar 1.7 millones de sacos de café de 60 kg cada uno, debido a que el precio ha caído, de manera drástica, de 125 a 63 dólares las cien libras, lo cual, como se mencionó más arriba, afecta al margen de ganancia de los productores y a los trabajadores que dependen de esta actividad, los cuales se estiman en 5 millones (*El Financiero*, 5 mar, 2001).

A esta vulnerabilidad se suma la incapacidad del modelo para generar valor agregado a los productos primarios y, ante ligeras bajas en los precios, los productores resienten las consecuencias en sus niveles de rentabilidad (más cuando el margen de ganancia es muy escaso, como ocurre con varios de los productos agropecuarios). Además, hay que agregar que una buena parte de los excedentes monetarios se la siguen llevando los intermediarios, a menos que los productores estén organizados y puedan vender, de manera directa, sus productos. Por eso, una alternativa en la perspectiva del nuevo modelo es la agroindustrialización.

En efecto, datos recientes indican que «la producción de alimentos en México refleja desigualdades en sus cadenas productivas; mientras la agroindustria —cada vez más concentrándose en menos manos— tiende a crecer y asume como propios los paradigmas mundiales con atención a las demandas cada vez más exigentes del consumidor; el sector primario se ha quedado rezagado y enfrenta una condición de baja o nula rentabilidad (...). Datos de FIRA, basados en estadísticas de la Sagarpa y de la hoy Secretaría de Economía, ubican que, entre 1994 y 1999, la inversión extranjera directa acumulada en el sector agropecuario no llegó ni a 200 millones de dólares, mientras las ramas de harina de maíz, botanas, refrescos, cerveza y

malta, así como la de cigarros, rebasaron los seis mil millones de dólares» (*El Financiero*, 6 mar, 2001).

A ello, se agrega que el aprovechamiento forestal no ha sido el adecuado. Desde los años sesenta, se ha aplicado una política errática del



nes de dó-
sido el ade-
errática del

dejar hacer y dejar pasar, plagada de corrupción, miopía de los industria-
les y profundo deterioro de la base de los recursos. Sin embargo, aun
con esos lastres, la producción estatal en su época de oro llegó a aportar
hasta el 23% de la producción nacional (Montoya, 1998). Lo anterior
se ejemplifica en la gráfica anterior.

Si no se toman las providencias necesarias, pronto se caerá en el
mismo círculo perverso. Aun con restricción en el aprovechamiento
forestal maderable, impuesto desde 1989 por el gobierno de Patroci-
nio González Garrido, se empieza a notar un acelerado ascenso en el
volumen de la producción desde 1996.

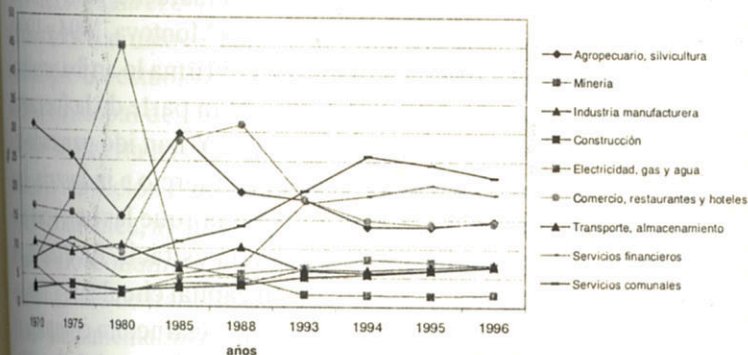
En este contexto, resulta coherente la información estadística que
refleja el comportamiento subsectorial de la economía chiapaneca; por
ejemplo, analizando la contribución al PIB de los subsectores a la eco-
nomía en su conjunto, se observa que, en términos porcentuales, ha
habido un cambio en el nivel de contribución desde 1970 hasta 1996.
Resulta dramático ver cómo los sectores agropecuario y minero han
venido disminuyendo su contribución al PIB, mientras que otros, como

Producción de madera en rollo en Chiapas, 1980-1998

Gráfica 4

Gráfica 5

Participación porcentual por rama de actividad
en el PIB de Chiapas, 1970-1996



Fuente: INEGI, Anuario estadístico de Chiapas, v/a

el de servicios financieros y la industria de la construcción, se han comportado de manera inversa. Los datos están en la gráfica anterior.

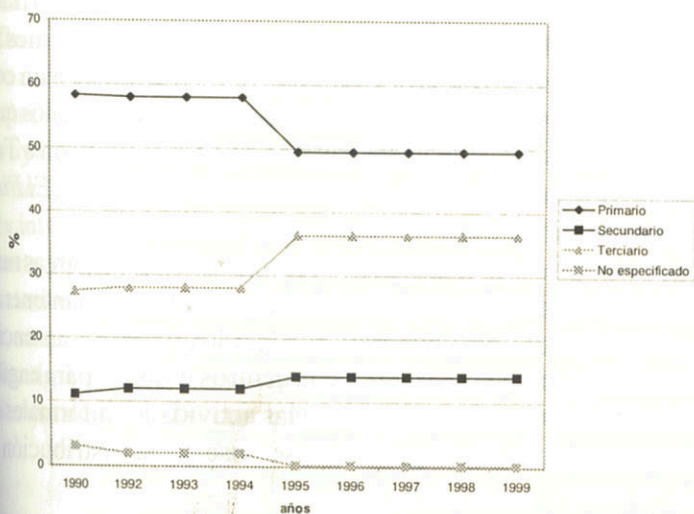
En realidad, visto en el largo plazo, pareciera que ningún sector ha tenido un comportamiento positivo. Empero no hay que olvidar que la crisis nacional, que el país experimentó desde 1982, afectó los comportamientos sectoriales y que ello estaría explicando, en mucho, dichas tendencias. Más allá de lo anterior, analizando más a profundidad la gráfica 5, desde principios de los ochenta, la minería pierde su importancia relativa que tenía en el PIB; un lustro más tarde, le sigue el sector agropecuario, mientras que desde principios de los noventa, empiezan a repuntar los subsectores de servicios financieros y comunales.

En síntesis, en el largo plazo, ha habido una especie de redistribución de la participación subsectorial más o menos equitativa en el nivel de participación en el PIB. Han quedado atrás los tiempos en los que un solo sector hegemonizaba su participación. Regresando a la gráfica 5, se aprecia que el sector primario aportaba más de un tercio del PIB estatal, en 1970, y que le cedió el lugar al petróleo, en 1980. De manera que primero el sector agropecuario y, luego, el minero —cuando el petróleo adquirió tremenda relevancia— fueron los que llegaron a dinamizar al resto de la economía. Eran tiempos de extrema petrolización de la economía nacional (Villafuerte, 2001) y de extrema primarización de la economía estatal (Montoya, 1994 y 1998).

El análisis de la evolución de la PEA confirma lo arriba analizado (gráfica 6). El sector que absorbía gran parte de la fuerza de trabajo ha empezado a dejar de hacerlo. Y han ido ganando terreno, en este sentido, los sectores de comercio e industria. Las actividades comerciales son atractivas, porque las barreras a la entrada no existen y porque la ganancia es fácil. En efecto, se requieren bajos niveles de inversión en capital circulante y fijo, es decir, no es necesario contar con una infraestructura compleja ni pagar renta; además, el perfil de los empleados es de baja califi-

Gráfica 6

Evolución de la PEA sectorial en Chiapas, 1990-1999 (en porcentaje)



Fuente: INEGI, Anuario estadístico de Chiapas, v/a

cación y los niveles de ganancia, en el corto plazo, alcanzan en ocasiones más del 100%.

A ello se suma el comercio informal, donde los agentes económicos forzados son niños, ancianos, mujeres y algunos jóvenes migrantes del campo. Un estudio reciente, realizado con migrantes indígenas en San Cristóbal de Las Casas, muestra que el 36.7% de esa población se inserta en actividades del sector informal. «Lo anterior indica la transición por la que ha pasado esta población en su actividad económica, al ubicarse en un espacio urbano, donde la dinámica socioeconómica y política transforma las condiciones y oportunidades de trabajo, de manera que esta población, antes dedicada fundamentalmente a labores agrícolas, tiene que diversificar sus estrategias de sobrevivencia, al carecer de tierra y al tener que

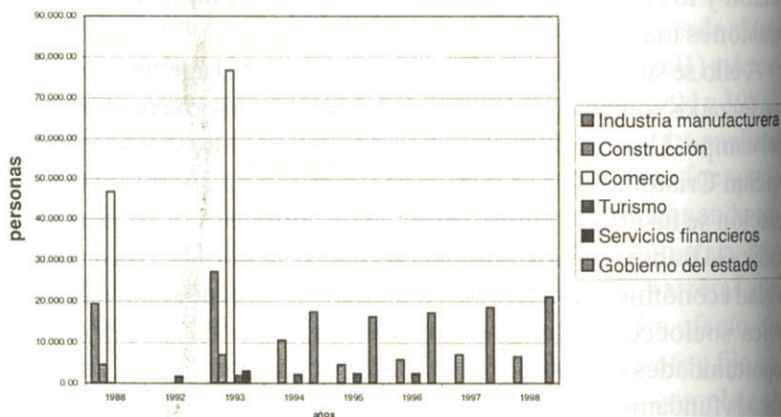
insertarse en el mercado de trabajo que ofrece la ciudad» (Figueroa *et al.*, 2000: 48).

Otro tanto ocurre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez: «Sólo trabajamos para sacar la renta del local y del cuarto donde dormimos. Nos cobran 600 pesos al mes, así que nos queda muy poquito para comer frijoles, tortillas y pozol», dice María, madre de tres pequeños que no acuden a la escuela. La mayoría de los tzotziles emigraron a Tuxtla Gutiérrez, porque el mercado en San Cristóbal se saturó (*El Financiero*, 2 mar, 2001).

Como se aprecia, hay una sostenida migración de las áreas rurales a la ciudad. Migración que refleja la imposibilidad de mantener a dicha población en actividades primarias, por lo que ante la ausencia de oportunidades, opta por migrar hacia centros urbanos para engrosar las filas de los que se desempeñan en las actividades informales o en el sector comercio. En la gráfica 7, se observa la distribución por

Gráfica 7

Personal ocupado por rama productiva en el estado de Chiapas, 1988-1998



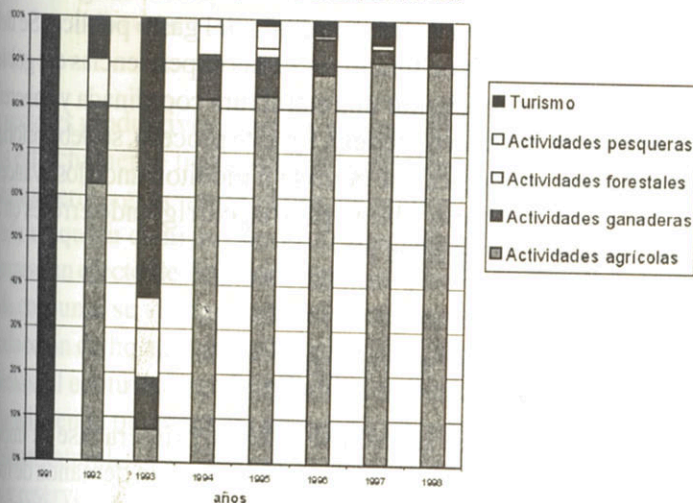
Fuente: INEGI, *Anuario estadístico de Chiapas*, v/n

rama del personal ocupado en las actividades urbanas. Sin duda, el dedicado al comercio sobresale, seguido del que se ocupa en la industria manufacturera, ganando terreno el que se emplea en los servicios financieros y el que trabaja en la burocracia gubernamental.

De nuevo, todo indica que el agotamiento del modelo primario exportador esta llegando a su fin. Se requiere de uno nuevo, de uno que vaya consolidando al nuevo sector que tenga la capacidad de arrastrar al resto de la economía chiapaneca, que articule procesos inter e intrasectorialmente y que consolide cadenas productivas hacia adelante y hacia atrás, porque, de lo contrario, todos los recursos monetarios de los que se disponen hoy día, que no han de ser muchos, se irán a una especie de barril sin fondo. Por ejemplo, en la gráfica siguiente, se observa que el 75%, en promedio, de la inversión pública se destina al sector agrícola. A un sector que, como hemos

Gráfica 8

Distribución de la inversión pública federal y estatal por sector productivo en Chiapas, 1991-1998



Fuente: INEGI, *Anuario estadístico de Chiapas*, v/a

demostrado, ha dejado de cumplir con su misión de aportar volúmenes importantes de recursos al PIB, que ha dejado de absorber fuerza de trabajo, pero lo más grave, que parece no poder reactivarse por más recursos que se le inyecten.

Por eso, nosotros creemos que el cambio estructural debe empezar por reordenar la distribución de la inversión del gobierno federal y estatal, sin abandonar, obviamente, al sector agrícola. Tal reordenación debe privilegiar a los nuevos sectores clave, los sectores que harán las veces de locomotora —como el sector turismo, el de la construcción y el agroindustrial—, vinculados con los artículos de alta productividad del sector agropecuario y con los recursos forestales y pesqueros, es decir, con los nuevos sectores sustituyentes.

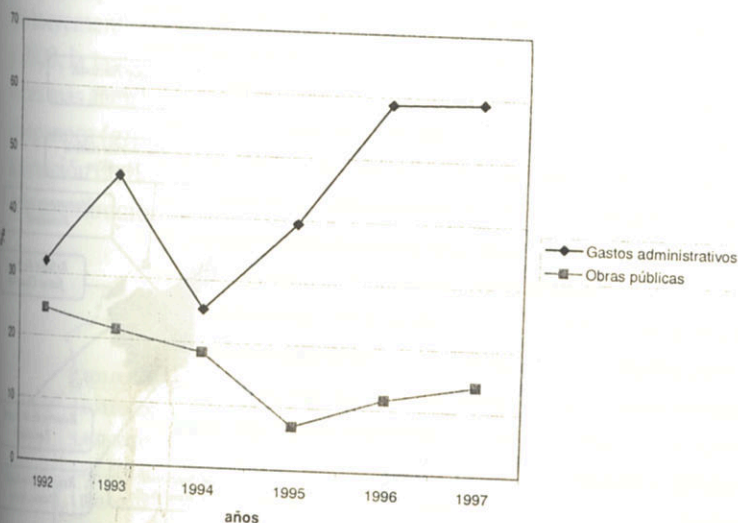
Otro tanto ocurre con la inversión en obra pública que realiza el gobierno del estado. Aquélla requiere eficientarse, porque frente a los gastos de operación resulta minúscula y porque la contratación de fuerza de trabajo amplía la brecha entre gasto de operación e inversión pública. Si se pretende empezar a colocar los cimientos de un nuevo modelo, hay que empezar desde los gastos del gobierno. En efecto, se requiere de un reordenamiento del gasto público. Se debe empezar por la revisión de funciones de las dependencias del gobierno del estado y por configurar una estructura coordinada y coherente con la propuesta del nuevo modelo. En este proceso, se debe priorizar la planificación estratégica que permita ir monitoreando los avances y logros de corto, mediano y largo plazos, corrigiendo errores en las evaluaciones *ex post* (gráfica 9).

4. POTENCIALIDADES DEL SECTOR LÍDER

El subsector turismo, al articularse —en su primera fase de impulso— al subsector construcción, generará una gran demanda de fuerza de trabajo y efectos multiplicadores, que se irradiarán al resto de

Gráfica 9

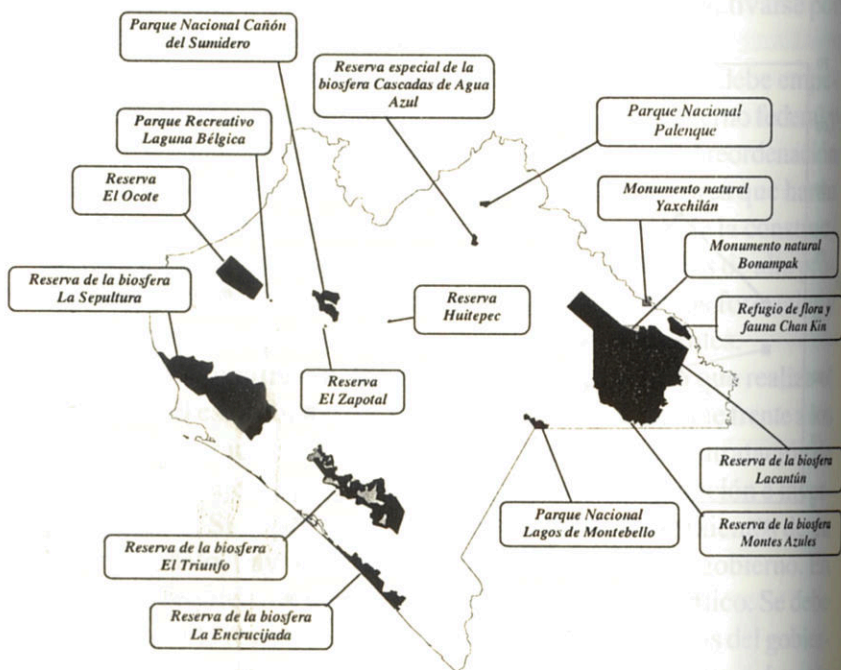
Evolución de la inversión en obras públicas del gobierno del estado de Chiapas, 1992-1997



Fuente: INEGI, *Anuario estadístico de Chiapas*, v/n

los sectores productivos. Luego, al vincularse con otros subsectores más estrechamente ligados a los servicios: transportes, hotelería, restaurantería, agencias de viajes, bancarios, *cibercafés*, entre otros, tiende a requerir de mano de obra especializada. Finalmente, al configurarse un efecto de demanda agregada, los impulsos de la estructura de consumo se vierten hasta el sector agrícola regional, como la producción de hortalizas en los altos de Chiapas (Montoya, 1998); además, el ecoturismo, vinculado al sector turismo, ofrece un alto potencial en la perspectiva económica y en la conservación de los recursos naturales. En Chiapas, se identifican áreas naturales protegidas y reservas de la biosfera (mapa 1).

Mapa 1
Poligonales de las áreas naturales protegidas en Chiapas



Fuente: Laboratorio de Información Geográfica (Laige), Ecosur, 2000

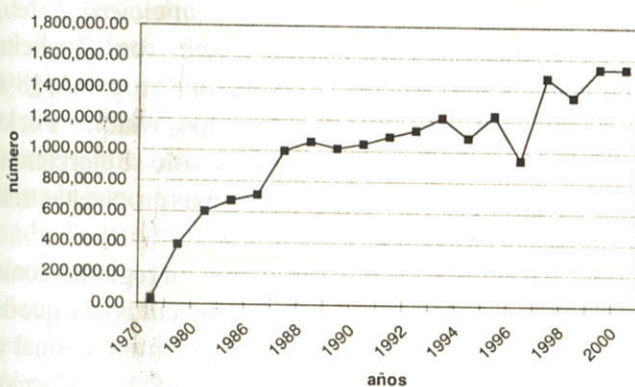
Impulsar proyectos vinculados al ecoturismo, aparte de ser una alternativa de ingreso, propicia acciones de conservación, que pueden generar efectos de demostración para áreas potenciales. Por ejemplo, la próxima inversión de 8.5 millones de dólares, que se realizará en el Parque Nacional Cañón del Sumidero por parte del grupo Xcaret, sin duda abrirá amplias oportunidades. En efecto, «con ello, se buscará el desarrollo sustentable de la industria hotelera de los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez; también, elevar la

calidad de los servicios, y crear agencias de viajes para atender a los 150 mil paseantes que visitarán cada año esta zona» (*El Financiero*, 8 mar, 2001).

En Chiapas, el número de turistas que han visitado la entidad ha ido incrementándose, de manera rápida y sostenida. Así, entre 1970 y 2000, la tasa promedio de crecimiento anual fue de 13.7%; tres veces más aceleradamente que el crecimiento natural de la población chiapaneca (gráfica 10). Lo anterior, desde 1993 ha significado una aportación de hasta el 18.54% al PIB estatal, que se ubica por arriba de la contribución de los sectores agropecuario y forestal, que fue de

Gráfica 10

Tendencia del número de turistas que visitaron Chiapas, 1970-2000



Fuente: Gobierno del Estado, *Chiapas turístico: Indicadores estadísticos del sector en Chiapas, 2001*

18.38% (Gobierno del Estado, 2001). En términos monetarios, la derrama en 2000 alcanzó 167 millones 868 mil dólares.

Todo ello en un contexto funcional, como ya mencionábamos arriba, para nuestra propuesta de cambio estructural, es decir, en plena efervescencia de los proyectos, que sin lugar a dudas impactarán en

la estructura productiva. Estamos hablando del Plan Puebla Panamá y del Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte, cuyos ejes gravitan, justamente, en el desarrollo de las potencialidades de la región. Chiapas jugará en este proceso un papel importante en el TLC con Centroamérica y en el Plan de Desarrollo Puebla-Panamá. Por ello, resulta crucial revisar su dinámica productiva en aras de plantear cambios estructurales que permitan emprender, de manera rápida y eficiente, el reto que significa dicho proceso. De otra forma, se desperdiciará esta oportunidad para iniciar un crecimiento sostenido y sustentable.

Otros intentos han fracasado, como el Fondo Chiapas. En efecto, «ni siquiera la presencia del Grupo Modelo, Maseca, Minsa, Grupo Mexicano de Desarrollo, Vital, Grupo Escorpión y Santander en el consejo de administración de este Fondo logró fortalecer la inversión de las referidas empresas en ese estado» (*El Financiero*, 27 feb, 2001). Por ejemplo, al inicio de operaciones, se recibieron 89 solicitudes de proyectos de inversión, pero sólo 12% fueron aprobadas, 18% requirieron de un análisis y el resto fueron proyectos inviables. Por lo que de los 40 millones de dólares comprometidos, sólo se ejercieron 74 mil 807 pesos. Eran otras condiciones y las mismas propuestas trilladas de siempre, sin articulación alguna.

Así, «en el caso de Chiapas, observamos en regiones como selva, norte, costa y Soconusco una agricultura monocultivista, que depende, cada vez más, de los vaivenes del mercado internacional y de las transnacionales. Esta política está desmantelando la producción destinada al mercado local, y generando una gran masa de campesinos jornaleros en su propia tierra...» (Barrios, 2000: 80).

5. CONCLUSIONES

Aunque durante el 2000 hubo un descenso en la afluencia de turistas a Chiapas, eso no quiere decir que el sector no pueda ejercer la fun-

ción que aquí le estamos atribuyendo. Algunas voces exacerbadas de inmediato le pasan la factura al conflicto zapatista: «Ahora, precisamente, estamos trabajando con la Secretaría de Turismo para cambiar la imagen de Chiapas y, para ello, asistiremos a todas las ferias turísticas nacionales, debido a que la afluencia ha decaído en 65 o 70%» (*Cuarto Poder*, 10 mar, 2001). Sin embargo, es al revés: la renta que generó el movimiento zapatista a los hoteleros ha empezado a disminuir. Dicho sea de paso, a los vendedores de servicios no les costó nada la promoción que se hizo de estas tierras chiapanecas durante la insurrección de los indígenas zapatistas.

Como hemos demostrado a lo largo de este trabajo, el agotamiento del modelo primario exportador deja libre la inserción de otro sector líder que sea capaz de jalar al resto de la economía hacia un proceso de acumulación de capital. Nosotros pensamos que están todas las condiciones dadas, incluidas las del poder político, para que el nuevo gobierno pueda empezar a impulsar al nuevo modelo. No habrá otra oportunidad.

De manera que el subsector turismo, articulado a subsectores de arrastre y a la base de recursos naturales con que cuenta la entidad, no es nada despreciable; al contrario, posee nichos que ningún otro estado tiene y puede generar un proceso en el mediano y largo plazos de crecimiento y desarrollo. Lo anterior no implica abandonar a su suerte al subsector agropecuario; al contrario, pensando en que se mejoren sus condiciones de producción es que se plantea el cambio, más cuando dicho sector ha mostrado alta vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios internacionales, muy poca capacidad de impulso y postración en la disposición de recursos de inversión. De lo que se trata, entonces, es de crear condiciones distintas y de generar mercados internos o, mejor dicho, de traer consumidores externos (con altos niveles de ingreso y consumo) para que consuman localmente a precios más competitivos con costos de transporte más baratos, pero sin dejar de lado al mercado internacional.

Pero no es fácil desprenderse de la ideología rural. Pensar que el campo ya no tiene la suficiente fortaleza para seguir aportando a la economía chiapaneca —no sólo para lograr su propia recapitalización, sino para emprender la siguiente fase de acumulación— causa prurito, miedo y, quizás, desesperanza. Pero, en aras del desarrollo, es necesario superar esas inercias y fobias, y empezar a imaginar un rumbo y futuro distintos. Nos parece que por eso votó la mayoría de la población chiapaneca. Más aún, sólo así se despejará la disputa por la tierra, porque dejaría, como lo hemos reiterado muchas veces, de ser el factor productivo más importante, por no decir casi único.

Expertos en la temática del campo dicen que la nueva ruralidad enfrenta «transformaciones importantes en la estructura productiva, orientadas a la producción de bienes exportables, cuyas necesidades técnicas, financieras y comerciales no encuentran su contrapartida en los viejos paradigmas del desarrollo agropecuario ni en las políticas públicas (...). La persistencia de la heterogeneidad económica y social requiere de políticas diferenciadas, pues sólo así se podrían resolver los variados requerimientos de los agentes y de los procesos económicos. Un ejemplo es el de la necesidad de reconstruir los débiles eslabonamientos productivos entre la agricultura y el sector agroindustrial, lo que se expresa en las dificultades de los productos agropecuarios para generar bienes a precios competitivos en el entorno de una política macroeconómica restrictiva y en las ventajas que la apertura comercial les ofrece a los agroindustriales para encadenarse productiva y financieramente a eslabones ubicados fuera de la economía mexicana» (Escalante *et al.*, 2000).

De no empezar a asumir el compromiso de cambio estructural, en el mediano plazo, la megadiversidad y la imagen de un estado rico en recursos naturales serán sólo un mito. El grado de marginación se acentuará y es muy probable que la entidad entre en un nuevo ciclo de inestabilidad social y política, donde la libertad de los individuos,

siguiendo a Amartya Sen (Sen, 2000), se vería reducida; además, se alejaría la oportunidad de salir del enorme atraso en el que nos encontramos. Por ejemplo, de acuerdo con el índice de desarrollo humano, nuestro estado se ubica en una posición semejante a la de los países que se encuentran en los lugares 101 y 102: Túnez y República de Moldovia (Tuirán, 2000).

BIBLIOGRAFÍA

- Cuarto Poder, «Innovan programa para duplicar producción ganadera», 10 mar, 2001
- , «Atribuye Astrid Pastrana a conflicto zapatista la baja afluencia turística», 10 mar, 2001
- El Financiero, «Asur, en las ligas mayores: coloca acciones por 386 mdd», 29 sep, 2000
- , «Luz verde a Playa Mujeres: 40 mdd para urbanización», 23 oct, 2000
- , «Cancún: aumentan protestas por proyecto turístico», 8 oct, 2000
- , «Dañan desechos de barcos al ecosistema de El Caribe», 6 nov, 2000
- , «Sostenido el flujo a Aeropuertos del Sureste», 6 feb, 2001
- , «Comienzan en marzo el TLC con Centroamérica», 13 feb, 2001
- , «Mayor déficit agroalimentario: disminuirán las exportaciones a Estados Unidos», 1 mar, 2001
- , «Microchangarros rebeldes», 2 mar, 2001
- , «Piden cafeticultores recursos del programa de emergencia: cayó la cotización internacional del aromático», 5 mar, 2001
- , «Acelerado crecimiento agroindustrial: aprovechan la globalización para importar insumos a bajo costo», 6 mar, 2001
- ESCALANTE SEMERENA, R., y F. Rello Espinosa, «El sector agropecuario mexicano: los desafíos del futuro», *Comercio Exterior*, núm. 11, vol. 50, nov, 2000
- FIGUEROA, Patricia F., M.J. Herrera Jácome et al., *Rumbo a la calle: trabajo infantil, una estrategia de sobrevivencia*, Caridad y Educación Integral, 1a. ed., Melel Xojabal, México, 2000
- INEGI-Gobierno del Estado, *Anuario estadístico de Chiapas*, v/n
- La Foja Coleta, «Cafeticultores fantasmas bloquean 100 millones: hasta personas fallecidas están inscritas», 2 mar, 2001
- La Jornada, «La zona libre de Belice, paraíso fiscal para chetumalenses», 27 oct, 2000

- Momento Económico*, «Indicadores económicos», núm. 2, vol. 7, IIE-UNAM, 2001
- MONTOYA G., G., «Ni desarrollo ni conservación de los recursos naturales: paradoja de la frontera sur», *Comercio Exterior*, núm. 5, vol. 48, may, 1998
- _____, «El subsector silviagropecuario de Chiapas: un breve recuento», *Revisita Cimtech*, núm. 1 y 2, 1994
- _____, Manuel Parra V. y Ramón Mariaca M. (eds.), «Estudios comparativos de la franja fronteriza del sur de México» (en prensa)
- RAMÍREZ BLANCO, M., *Teoría general del turismo*, 3a. ed., Editorial Diana, México, 1987
- SNOW G., S., «Pathways in the Periphery: Tourism to Indigenous Communities in Panamá», *Social Science Quarterly*, núm. 3, vol. 18, sep, 2000
- VILLAFUERTE S., D., *Intercambio comercial entre México y Centroamérica*, tesis de doctorado, UAM-X, 2000
- _____, «Tendencias de integración entre México y Centroamérica», *Comercio Exterior*, may, 1998
- ZEBADÚA, E., *Breve historia de Chiapas*, FCE, México, 2000

POLÍTICAS DE SALUD Y TRADICIÓN MÉDICO-HERBOLARIA
EN ÁREAS RURALES DE NUEVO LEÓN⁵⁰

VERONIKA SIEGIN⁵¹

INTRODUCCIÓN

Las teorías de modernización parten de una relación estrecha entre el desarrollo de la modernidad capitalista y la racionalización de las cosmovisiones. Max Weber (1944 y 1989), uno de los clásicos más importantes en el área de la teoría social, afirmaba, por ejemplo, que el capitalismo industrial encarnaría el «racionalismo occidental» y que la empresa capitalista representaría la forma más desarrollada del quehacer económico racional. Sugiere, por ello, la tesis de que el capitalismo no surge sólo por la conjunción de ciertos factores económicos, sociales y políticos presentes en Occidente, sino que posee, además, un origen racional.

El papel de la racionalidad capitalista en la consecución del progreso y del bienestar reviste, hoy en día, una gran importancia en los debates de los problemas del desarrollo. Instituciones supranacionales y nacionales, así como públicas y privadas atribuyen el retraso socioeconómico de ciertas regiones del planeta (es decir, el subdesarrollo, la pobreza y la marginación) a dos factores:

⁵⁰ Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación sobre modernización e invalidación de culturas tradicionales. Lo apoya parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del programa Paicyt. A las dos instituciones se agradece el apoyo brindado.

⁵¹ La autora es profesora titular del departamento de postgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

1) a desequilibrios estructurales; y/o 2) a la prevalencia de formas de interacción tradicionales, identificadas como irracionales, que guiarían el intercambio de sectores socioculturales con la sociedad y la naturaleza. Abrir las puertas al desarrollo significaría, de este modo, superar la tradición cultural y remplazarla por una visión cientifista.

Los defensores de esta tesis —hegemónica en las áreas de la administración pública, donde se diseñan e instrumentan las políticas socioeconómicas y culturales— parten de una visión dicotómica que identifica a la cultura y a la sociedad modernas como las titulares de la racionalidad, mientras que las comunidades y culturas tradicionales (no modernas o no suficientemente modernas) se mueven en el reino de la irracionalidad (o de la poca racionalidad). Por ello, argumentan que toda posibilidad de progreso y bienestar depende, de modo sustantivo, de la superación de la tradición cultural de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas pobres. La pobreza y la marginación se resolverían siempre y cuando se eduque a la población afectada para que pueda remplazar sus creencias y posiciones de fe por una cosmovisión cientifista. Dicho de otro modo, las comunidades campesinas e indígenas sufren miseria por vivir en el error y el autoengaño.

Pero, ¿qué tan racionales son estas visiones modernistas en relación con las tradiciones culturales campesinas? Una respuesta posible podría generarse: 1) analizando el potencial racional de las nuevas orientaciones de acción, transferidas por medio de programas de desarrollo; y/o 2) valorando los efectos de la intervención institucional en la vida cotidiana de las comunidades.

El presente trabajo intenta participar en esta discusión, mediante un análisis del impacto de programas de modernización sanitaria, implementados por el estado mexicano desde la década de los años setenta en la cultura médico-herbolaria de comunidades campesinas en el sur de Nuevo León.

1. RACIONALIDAD Y TRADICIÓN

Dado que la sociología nació como una teoría de la sociedad burguesa (moderna), de sus formas de desarrollo y de sus manifestaciones anómicas, el tema de la racionalidad y de los procesos de racionalización se encuentra en el centro de su temario disciplinario. En el nivel metateórico, su instrumental conceptual pretende ser lo suficientemente sensible para entender el incremento de la racionalidad en la organización social. En el ámbito metodológico, el estudio de la acción racional se convierte en una clave para la comprensión de todo tipo de orientaciones de acción. En el plano empírico, la sociología se ocupa de la modernización desde la perspectiva de los procesos de racionalización cultural y social (Habermas, 1989: 22), dando por supuesto la universalidad e inevitabilidad de dichos procesos. La sociología sostiene, además, que la racionalidad se incrementará en el decurso de la evolución social. Si partimos, empero, de la tesis de que todas las culturas disponen de una serie de elementos para responder a problemas mediante la innovación de los mecanismos cognitivos, técnicos y sociales a su disposición, la cuestión crítica refiere aquí, más que todo, al significado del concepto de racionalidad que se supone universal e inevitable.

En la discusión sociológica, el tema de la racionalidad se liga, de forma estrecha, a conceptos de acción social, que subyacen en el fondo de las teorías de modernización. Weber (1989: 20 y s.), por ejemplo, describía a la modernización social como un proceso ligado al desarrollo de un sector social (la economía), donde imperaría, de forma exclusiva, la acción teleológica: los actores sociales persiguen un fin determinado mediante la selección y el cálculo de los medios que prometen mayor eficacia para alcanzarlo (Habermas, 1995a: 444 y s.). Según Habermas (1989: 125 y s.), la acción teleológica se convierte en estratégica cuando un individuo integra a su cálculo las decisiones de otros actores que podrían intervenir en el curso del acontecer

planeado. En el caso de la acción instrumental, otros actores sociales, al igual que los elementos contextuales (por ejemplo, la naturaleza), son utilizados, como instrumentos, para alcanzar un fin propuesto. En Occidente, las acciones teleológica, estratégica e instrumental son celebradas como prototipos de racionalidad pura.

Por otro lado, se habla de acción normativa cuando los actores orientan su hacer en valores y saberes que subyacen a la tradición cultural de un grupo social y que representan el trasfondo simbólico de su interacción cotidiana. Mediante constantes referencias a esta base normativa, los individuos interpretan situaciones y acontecimientos, y determinan la pertinencia o impertinencia de un determinado modo de interacción. En este caso, la integración y cohesión de un grupo son de carácter social. El individuo actúa, de manera racional, cuando elabora y ejecuta sus expectativas de acción en función de las posibilidades dadas por el trasfondo normativo (Habermas, 1989: 130 y s.).

Los modelos de acción normativa y teleológica no son independientes del lenguaje; al contrario, lo integran, junto con otros medios, como vehículo de la acción (por ejemplo, como instrumento que transporta valores, normas o consensos o como recurso de autoescenificación o de expresión racional). Por el contrario, el modelo de acción comunicativa conceptualiza al lenguaje como recurso y centro de la interacción en busca de acuerdos entre los interlocutores en torno a algún fenómeno del mundo objetivo, social o subjetivo. Este modelo habermasiano de acción comunicativa retoma una serie de reflexiones de Gadamer (1990: 393), quien caracterizó al proceso comprensivo en el medio del lenguaje a través de los siguientes elementos: 1) la disposición de los interlocutores para validar la opinión del otro y para integrarla, de forma reflexiva y crítica, al propio proceso de argumentación; y 2) la apertura reflexiva y la capacidad de los participantes de fusionar sus horizontes interpretativos. La acción comunicativa presupone, por lo tanto, una constante crítica de los

argumentos propios y extraños con la finalidad de coordinar las acciones de los sujetos sociales a través de un proceso cooperativo de comprensión.

Al expresar una opinión o una afirmación, los participantes reclaman validez para tres momentos de sus manifestaciones verbales: *a)* pretenden proponer un enunciado verdadero acerca de un fenómeno del mundo objetivo; *b)* quieren efectuar un acto de habla legítimo dentro del contexto normativo presupuesto; y *c)* procuran expresar una intención comunicativa que coincide con lo que piensan. El receptor del mensaje puede rechazar alguna o, incluso, todas las pretensiones de validez del hablante por medio de una serie de argumentos, situación que obligará al emisor a integrar la crítica de su interlocutor en la reformulación del enunciado rechazado. Habermas (1989: 148 y s.) enfatizó que es la actitud reflexiva y argumentativa de los interlocutores la que permite la movilización de todo el potencial racional con tal de llegar a un acuerdo y de coordinar sus intervenciones en el mundo.

Las tres concepciones de la acción social difieren en varios aspectos: 1) en los mecanismos de coordinación de las acciones sociales (acción teleológica: integración por medio del cálculo egocéntrico de los beneficios óptimos; acción normativa: integración mediante el acuerdo de los interlocutores acerca de la validez de un orden normativo dado; acción comunicativa: integración a través de esfuerzos interpretativos); 2) en el tipo de mundo referido (el modelo teleológico presupone la relación de un actor con el mundo objetivo; el normativo incluye la referencia al mundo social y objetivo; el comunicativo hace referencia al social, objetivo y subjetivo); y 3) en la relación entre el actor y el entorno social, al momento de planear una acción (el modelo teleológico parte de un actor solitario, en tanto que los otros son por supuesto a un actor que pertenece a un contexto sociocultural). A pesar de las diferencias, los tres conceptos presuponen una misma motivación en los actores: realizar objetivos específicos. De este modo,

es posible afirmar que les subyace una estructura teleológica en general (Habermas, 1989: 150 y s.).

La diferenciación de los tres modelos de interacción social es de suma importancia para la conceptualización de los procesos de modernización, ya que las corrientes teóricas priorizan, por lo común, a un concepto de acción social como prototípico de la evolución social y de la racionalidad. La teoría estructural funcionalista explica, por ejemplo, el desarrollo de la sociedad mediante la interacción teleológica y estratégica de los actores participantes. El modelo weberiano lo describe como un proceso basado en el despliegue de la acción teleológica, que remplazaría, en las esferas económica y político-administrativa, la acción normativa identificada como prototípica de sociedades y/o comunidades precapitalistas (Habermas, 1995a: 452 y s.). En cambio, Habermas (1989: 150 y s.) parte de una visión dual: identifica a la acción teleológica y estratégica como los mecanismos integrativos del sistema, mientras afirma que en el mundo de la vida predomina la acción comunicativa.

Hasta ahora, podemos sostener que cualquier teoría que prioriza a un modelo de acción, como típico e independiente de los otros, cargará desde un principio con una serie de dificultades conceptuales, que cuestionan, en mayor o menor grado, la validez de su propuesta. Tal es el caso, por ejemplo, del concepto de actor solitario de la teoría estructural-funcionalista, que actuaría, de manera única y exclusiva, en función de una racionalidad teleológica. Esta perspectiva parte, por un lado, de la existencia de un campo de acción libre de convenciones y normas y, por el otro, da por supuesto que la capacidad de acción racional fuese una propiedad casi innata de los individuos (en particular, de los varones). Visualizada así, la racionalidad se independizaría del entorno sociocultural e histórico (una tesis muy cuestionable).

Una objeción similar se puede formular hacia las corrientes que definen la acción normativa por orientarse en convenciones sociales

establecidas en vez de basarse en un cálculo matemático de las posibilidades de éxito, como no racional o poco racional. Dan por supuesto que la referencia al ámbito normativo (tradiciones, valores, cosmovisiones) impediría un comportamiento racional. En otras palabras, estas corrientes parten de una supuesta oposición entre racionalidad y tradición.

Sin embargo, este presupuesto es falso. Muchos saberes tradicionales demuestran una elevada eficacia dentro de un campo de aplicación determinado, sin ser producto de una metodología científica. Más aún, la experiencia, como medio de comprobación (el principio popperiano del ensayo y error), no es un recurso exclusivo de la ciencia, sino que radica en el fondo de muchos acervos de saberes tradicionales, como los conocimientos médico-herbolarios (la validación intersubjetiva del saber médico-herbolario como efectivo constituye un fundamento de su integración al acervo de conocimientos tradicionales, que se transmiten de una generación a otra).

La equiparación de la acción estratégica e instrumental, como prototipo de racionalidad, fue cuestionada por Marcuse (cit. en Wehling, 1992: 320 y s.), quien sostuvo que esta racionalidad se torna irracional al momento de convertir al trabajo humano y a la naturaleza en simples instrumentos de la reproducción del capital. Su juicio resulta acertado si consideramos los problemas ecológicos que la modernidad y la modernización han acarreado por pretender dominar y explotar al planeta y por destruir, a nombre del progreso y del bienestar, formas de vida opuestas a la lógica del capital. Más aún, la modernización capitalista —como la podemos observar, hoy en día, en muchas áreas rurales— ha dejado a numerosos grupos sociales y étnicos en el más completo desamparo socioeconómico.

Wehling (1992: 323) propuso, por ello, separar la racionalidad teleológica de la instrumental, ya que ésta última reduce al medio ambiente (social y natural) a la categoría de un instrumento, y racionaliza la disposición de los recursos, sin atender y tomar en cuenta los

efectos secundarios. Dicho autor sostiene que una racionalidad que destruye a los medios de acción con tal de lograr el objetivo deseado no merece el predicado de racional.

Según Wehling (1992: 323), las acciones teleológicas se observan en el comportamiento de todas las sociedades modernas y tradicionales, en tanto que la racionalidad instrumental constituye una característica de las occidentales. Esta visión no estigmatiza a las culturas tradicionales de antemano como irracionales o poco racionales, y estimula, al mismo tiempo, una evaluación crítica de las acciones modernizadoras en cuanto a su potencial racional.

Ahora, ¿qué utilidad revisten los modelos de racionalidad para una teoría de la modernización? Un acercamiento a dicha pregunta permite el modelo de sociedad propuesto por Habermas (1995b: 229 y s.), quien distingue en la estructura de las sociedades occidentales dos grandes segmentos: el sistema (las esferas económicas y político-administrativas) y el mundo de la vida. Ambos cumplen con funciones distintas e influyen en las interacciones de los individuos por medio de imperativos y mecanismos desemejantes. Los mundos económico y político-administrativo se organizan, de forma prioritaria, en torno al cálculo racional de costos y beneficios y al entrelazamiento funcional y reglamentación de las tareas y puestos⁵². Por ende, en el ámbito sistémico, la interacción social tiende a separarse de las características personales de los individuos (en cuanto no son aprovechables para maximar los efectos de acción deseados) y de sus preferencias y valores, y se coordina en función de las necesidades organizativas por medio de dos instrumentos: el dinero y el poder.

No todas las funciones sociales pueden ser realizadas bajo una perspectiva netamente instrumental, sin generar trastornos y

⁵² Fraser (1990: 56 y s.) enfatizó que aunque la interacción en el sistema esté organizada por medio del dinero y del poder, las decisiones y formas de acción contienen siempre elementos consensuales y valores.

sociopatías; tal es el caso de la crianza de los niños o la reproducción simbólica y afectiva (Habermas, 1995: 451 y 471). En estas áreas pertenecientes al mundo de la vida, la interacción se guía, en mayor grado, por valores (solidaridad, compromiso emocional, respeto, etc.) y por la producción de consensos⁵³.

Desde la perspectiva de Habermas (1995b: 476), el sistema y el mundo de la vida dependen el uno del otro en cuanto a su funcionamiento y reproducción (la economía, por ejemplo, depende de la fuerza de trabajo y de consumidores de sus productos y servicios; el estado, de fuerza de trabajo, impuestos y lealtades y el mundo de la vida, de productos, servicios e ingresos, generados en el sector sistémico) por lo que ambos segmentos se encuentran entrelazados por medio de relaciones de intercambio. Sin embargo, al paso del tiempo, el desbordante e irrefrenado crecimiento del subsistema económico empieza a modificar los términos del intercambio en función de las necesidades sistémicas e introduce a las áreas de la reproducción social y a la cultura el dinero y el poder como mecanismos reguladores de la acción. De este modo, se da entrada a la racionalidad instrumental en el mundo de la vida, situación que, poco a poco, trastorna las funciones reproductivas de esta esfera. Dicho proceso es apoyado y facilitado por la acción del estado (por ejemplo, por medio de sus programas políticos, la legislación, etcétera).

En síntesis, la continua modernización sistémica exige, a partir de un cierto grado de desarrollo, la refuncionalización de las esferas donde predomina la integración social y simbólica. Se produce, así, una especie de colonización interna (Habermas, 1995b: 452). En consecuencia, ciertas funciones culturales (por ejemplo, la producción de nuevos conocimientos en función de las necesidades cotidianas de las personas) son remitidas al ámbito sistémico (por ejemplo, el subsistema

⁵³ Con lo anterior, no se descarta la intervención del dinero, del poder y del recurso al cálculo egocéntrico, estratégico e instrumental en las interacciones sociales al interior del mundo de la vida (Fraser, 1990: 61).

científico), lo que no se lograría a la velocidad requerida si las instituciones estatales no apoyaran dicho proceso mediante una labor de invalidación de los acervos culturales dados en el mundo de la vida. Ello permitirá introducir, de forma paulatina, una visión científicista e instrumental.

Habermas (1995b: 482 y s.) advirtió que, una vez concentradas dichas funciones culturales en manos de expertos, la integración de nuevos saberes y conocimientos a la práctica cotidiana se verá obstaculizada y la producción se desligará de las necesidades integrativas del mundo de la vida. Dependiendo de las áreas afectadas y las características socioculturales de las comunidades y/o sectores sociales, los perjuicios sociales serán de menor o mayor impacto. En este momento, la modernización se torna problemática y sus beneficios se ven rebasados por los daños causados.

2. TRADICIÓN MÉDICO-HERBOLARIA Y POLÍTICAS DE MODERNIZACIÓN SANITARIA

Existe una gran cantidad de literatura que atestigua la amplitud y profundidad del conocimiento herbolario en manos de comunidades campesinas e indígenas. A pesar de que dichos saberes no se encuentran distribuidos, de manera uniforme, entre todos los pobladores rurales, durante décadas y siglos su conservación y aprovechamiento quedaron asegurados gracias a ciertos individuos (la partera empírica, la curandera, el chamán, etc.), que aconsejaban a la población en caso de una enfermedad o una emergencia sanitaria (parto, accidente, etcétera).

Por ejemplo, las parteras tradicionales entrevistadas mencionaban el empleo de hierbas para combatir numerosos padecimientos: torceduras, quemaduras, fracturas, dolores de todo tipo, resfríos, gripas, fiebres, piquetes, presión alta o baja y trastornos gastrointestinales. Las utilizaban, de igual forma, para desinfectar heridas, prevenir infeccio-

nes, calmar hemorragias, acelerar o retrasar el trabajo de parto, evitar o estimular la concepción o provocar o impedir un aborto. Según el padecimiento y la finalidad terapéutica, los remedios naturales se administraban en forma de té, tintura y/o gotas, mezclados con aceites o alcohol por medio de ungüentos, fomentos o baños.

Si bien las hierbas no saneaban a todas las personas y no curaban todos los males (al igual que los medicamentos modernos), constituyeron un recurso sanitario de suma importancia para las comunidades campesinas, ya que los ingredientes se recolectaban en los alrededores y los servicios de preparación y aplicación (en caso de ser administrados por algún/a curandero/a o partera) representaban un gasto menor para las familias campesinas.

A partir de la década de los años setenta, el estado mexicano empezó a intervenir, muy fuerte, en la tradición herbolaria de las comunidades rurales en el marco de la implementación de un programa sanitario, que persiguió dos objetivos centrales: *a*) mejorar la atención médica de la población rural en general y abrir paso a cierto número de productos farmacéuticos básicos; y *b*) controlar, en particular, la fertilidad femenina en las zonas rurales mediante la introducción de anticonceptivos y acercar a las mujeres campesinas a los servicios de salud reproductiva, ofrecidos y promovidos desde entonces por el gobierno. El éxito del proyecto exigía, por un lado, el resquebrajamiento de la confianza de la población rural en el sistema de salud tradicional y, por el otro, su acercamiento a la medicina moderna.

Para tal efecto, se creaban pequeños centros de salud, donde pasantes de medicina atendían a los pacientes campesinos. En un principio, los servicios médicos prestados eran gratuitos, pero después se introdujo un módico⁵⁴ cobro por el suministro de ciertos medicamentos.

⁵⁴ Se sobrentiende que la modestia de un cobro no se define en función de un valor numérico menor o mayor, sino en relación con la capacidad de ingreso y consumo de un individuo. Lo que a los planificadores sociales (clase media urbana) les suele parecer un precio insignificante (10 o 20 pesos por consulta médica) resulta para muchas familias campesinas un gasto oneroso.

Las autoridades sanitarias estaban conscientes de que los resultados —sobre todo del programa de salud reproductiva— dependerían de su capacidad para formar un grupo de intermediarios, provenientes de las mismas comunidades campesinas, que motivarían, de forma activa y persistente, a los pobladores rurales a consultar a un médico en caso de enfermedad, embarazo o alumbramiento. Para tales fines, se ofrecieron cursos de capacitación a mujeres voluntarias dispuestas a colaborar en la difusión de los programas (las promotoras de salud). Al mismo tiempo, resultó vital convencer e involucrar a las parteras tradicionales: mujeres maduras que guardaban un estrecho contacto con las jóvenes en etapa reproductiva y que gozaban de su confianza. A través de cursos de adiestramiento continuo en torno a cuestiones de anticoncepción, embarazo, parto y lactancia, se planeaba convertir a las comadronas en intermediarias de los programas reproductivos y en promotoras entusiastas de los servicios médicos modernos.

La burocracia sanitaria se propuso, por lo tanto, redefinir la función social de las parteras. Para alcanzar la meta trazada, resultaba imprescindible que las parteras reconocieran, por un lado, las deficiencias de los servicios parteros y curativos prestados por ellas mismas, es decir, que desarrollarían una conciencia de los daños y perjuicios que podían provocar al atender indebidamente problemas sanitarios y, por otro, que adquirieran reservas hacia la promoción y aplicación de los remedios herbolarios y mágicos. Los programas se propusieron, por lo tanto, debilitar en una fase inicial la tradición médica campesina, a través de la capacitación de sus representantes naturales y la formación de jóvenes con poco o ningún contacto anterior con dicha tradición.

De este modo, se creaban los cimientos para lograr, a mediano plazo, la desaparición de la tradición médica comunitaria y la hegemonía de la medicina moderna. Se iniciaba, en nombre del progreso y del bienestar, una verdadera batalla educativa para invalidar la tradi-

sulta-
ende-
arios,
otiva-
onsul-
tiento.
es vo-
as (las
ncer e
uarda-
y que
conti-
y lac-
rias de
os ser-

ción cultural campesina, identificada como un importante obstáculo para establecer el control del estado sobre los cuerpos femeninos fértiles.

El presente trabajo analizará algunas formas, mecanismos y argumentos utilizados por el estado para invalidar el saber herbolario tradicional. El material empírico se integra por entrevistas profundas a 22 comadronas que residen en áreas rurales del centro-sur y sur de Nuevo León. En sus relatos, las mujeres interpretan sus experiencias con el personal médico a cargo de los cursos de adiestramiento; además, sus discursos reflejan, al mismo tiempo, los efectos de la invalidación cultural impulsada por la institución sanitaria estatal.

3. CURSOS DE CAPACITACIÓN SANITARIA Y TRADICIÓN MÉDICO-HERBOLARIA

la fun-
ultaba
s defi-
as mis-
años y
plemas
oción y
mas se
ón mé-
tantes
o ante-

Durante los cursos de capacitación, los instructores instaron a las comadronas participantes a abandonar la medicina herbolaria tradicional. Las tácticas adoptadas dependían de la estrategia general diseñada por la burocracia médica y de las características personales de cada instructor: su relación con las comadronas, su rango dentro de la burocracia, su formación profesional y su visión de la cultura herbolaria y campesina en general.

En las entrevistas, las parteras argumentaron la suspensión total o parcial de los remedios herbolarios durante los alumbramientos por tres motivos (tabla 1): *a*) por la prohibición de la autoridad médica de hacer uso del acervo médico-herbolario; *b*) por temor a actos represivos de parte del personal médico en caso de desobediencia; y *c*) por la supuesta mayor peligrosidad de la medicina herbolaria frente a los medicamentos de laboratorio.

Los actos de habla referidos a los médicos (fragmentos discursivos 1 y 2) aluden, en general, a una condenación de las hierbas medicina-

les y a la desautorización de las parteras para determinar su conveniencia terapéutica. La censura recayó, por consiguiente, sobre la sustancia y la persona que tradicionalmente la administraba. En otras palabras, los médicos intentaban impedir el uso de hierbas, introduciendo dos tipos de candados.

Fragmentos discursivos:

- 1) —¿Usted recurre a algunas hierbas para ayudar a las mujeres en el trabajo de parto?
—No les doy nada. Nos prohibieron darles hierbas.
(Doña María, 67 años, hija de partera, alfabeta)
- 2) «Los doctores a mí no me dieron permiso para darles una hierba para que no se embaracen; eso es lo que me tienen prohibido. A mí no me permiten que les dé una pastilla. Si quieren abortar y les doy una cosa, a mí me va mal con los doctores si algo les pasa, porque tienen que ir a dar con el doctor. Y fue fulano. Y eso es lo que he cuidado».
(Doña Jimena, desconoce su edad, nieta de partera, alfabeta)

Tabla 1

Razones que motivaron el abandono total o parcial de prácticas médico-herbolarias entre parteras empíricas del centro-sur y sur de Nuevo León

Tipo de razón	Acto de habla referido (cita literal)
De autoridad	No me dieron permiso. No estamos autorizados. Nos prohibieron. Les advirtieron. Me dijo: «no tome...». Nos dicen que no les demos nada.
Temor del castigo	Las regañaban. Les llamaban la atención. Ese doctor se enojó mucho. Nos reprochaban. Si les doy, a mí me va mal con los doctores.
Instrumental	(Las hierbas) no se pueden inyectar. Les hace daño. (Las hierbas) no son buenas, pues provocan hemorragia, alteración de la presión y del metabolismo.

Fuente: entrevistas con parteras empíricas

Según Kuhn (1992), para ejercer la autoridad sobre otra persona mediante actos de habla, se puede recurrir a estrategias discursivas, que abarcan desde la predicción de una acción del otro, enunciados imperativos, afirmaciones, expresiones de deseo o de necesidad hasta referencias a situaciones y alusiones indirectas⁵⁵. Mientras la predicción, los imperativos directos y la expresión de un deseo de parte del emisor señalan elevados grados de autoridad reclamados frente al interlocutor, la referencia a la necesidad, a una situación o a la capacidad del otro —con tal de legitimar una petición o exigencia— se ligan, en cambio, con niveles de autoridad menores y/o no suficientemente estables. Cuando el hablante justifica, por ejemplo, la prohibición de una acción alegando un reglamento vigente y la aleja, de este modo, de su persona, pretende reducir, a propósito, su autoridad personal frente al otro.

Kuhn (1992: 60 y s.) y Lakoff (1990: 32 y s.) asocian, asimismo, el uso de agravadores (por ejemplo, las amenazas) y suavizadores a las diferencias en los niveles de poder. En fin, la elección de una estrategia impositiva depende de una serie de variables socioculturales: de la distribución del poder entre los hablantes, de las diferencias de género (los hombres utilizan estrategias más directas y las mujeres prefieren las indirectas), de la posición social (a posición social más alta, mayor posibilidad de utilizar estrategias directas), de las diferencias de trasfondo cultural (la asumida superioridad de la cultura moderna frente a la campesina) y de los estilos de personalidad.

Los elementos citados permeaban, también, la comunicación entre los maestros (médicos) y las parteras empíricas. La mayor parte de los instructores eran hombres que contaron con niveles educativos muy superiores a los de sus interlocutoras; ocupaban rangos de po-

⁵⁵ Kuhn (1992: 60) da los siguientes ejemplos: predicción: «ustedes van a leer...»; imperativo: «tienen que leer...»; afirmación: «aquí están las lecturas»; deseo: «quiero que lean...»; necesidad: «es importante que...»; referencia a una situación: «el plan de trabajo exige...»; capacidad: «¿pueden leer el texto hasta el miércoles?»; referencia indirecta: «aquí están las lecturas».

der dentro de una institución burocrática; representaban una profesión de gran prestigio social y pertenecían a una cultura identificada como superior frente a la tradición rural de las parteras.

En estas circunstancias, no sorprende la considerable efectividad de las estrategias discursivas adoptadas por los médicos. Más aún, las parteras no limitaban la vigencia de la autoridad médica al espacio áulico, sino la sentían y la extendían, también, a su práctica cotidiana. Por ende, aun en ausencia del doctor, el mandato de éste seguía efectivo y respetado. Esto no hubiese sido posible si las ordenanzas médicas no hubiesen penetrado la mente de las parteras participantes y si no hubiesen logrado reestructurar sus identidades. Se observa que las comadronas integraron el rechazo médico hacia la medicina herbolaria a sus propias orientaciones de acción. El mandato se convirtió, de este modo, en una ley que rigió sus acciones posteriores.

La ejecución de las disposiciones médicas alude, además, al reconocimiento de los galenos, por parte de las parteras, como una autoridad facultada para enjuiciar, aprobar o censurar la práctica profesional de las comadronas. De este modo, las mujeres reconocieron y aceptaron el carácter asimétrico de su relación con los médicos, y expresaron su disposición a obedecer sus decisiones y mandatos, a tolerar posibles controles y a recibir regaños y castigos en caso de que infringiesen las reglas del juego.

Resulta llamativo que sólo una entrevistada recordaba algún argumento de sustancia en contra del uso de hierbas, mientras que las demás no podían justificar el abandono de la práctica herbolaria mediante la apelación a un nuevo acervo de saber. De hecho, el enjuiciamiento médico de las hierbas como inadecuadas contrariaba la experiencia personal de las parteras con la medicina herbolaria (fragmento discursivo 3).

- 3) —¿Usted tiene alguna mala experiencia con el uso de las hierbas?

—Yo digo que no tengo mala experiencia. ¡No!, porque era lo que tomábamos nosotros. Era lo que tomaban nuestras mamás y abuelas: esta hierba es muy buena. Todos tomaban y todos vivimos: nosotros y nuestros hijos, y no perjudican. Pero si no estamos autorizados, pues, para qué dar. Porque, mire, me pongo, nos ponemos, les doy un vaso de hierba y hay una necesidad: «vamos con el doctor». Dice el doctor luego, luego: «¿qué le han dado?»; luego, luego, la enferma contesta: «me dieron esto». Porque uno puede decir: «No, no le di nada», pero ella dice lo contrario, porque va enferma, ¿verdad?; pues mejor no dar.

(Doña Lilia, desconoce su edad, analfabeta, sin familiares, dedicada a la partería)

El que muchas comadronas no podían fundamentar, de modo racional, su renuncia al saber herbolario apunta al carácter autoritario del cambio introducido en su práctica profesional. Ellas lo percibían como una imposición. Basándonos en los actos de habla referidos por las narradoras, podemos suponer que los cursos de capacitación no constituían un foro donde se discutían las ventajas, desventajas y limitaciones de la medicina herbolaria; por ello, dichos eventos no asentaban las bases cognitivas para la sustitución de las hierbas, proceso que, además, contrariaba la experiencia de las comadronas. Por consiguiente, la cimentación del cambio en la personalidad de las mujeres tuvo que ligarse a la presencia de emociones negativas (temor, vergüenza, aprensión, ansia, consternación, etc.), que funcionarían como reguladores de la motivación (fragmento discursivo 4).

- 4) —Usted dice que a lo mejor le llamaban la atención por no estar autorizada, ¿había parteras a las que les habían llamado la atención antes?

—Pues, sí, porque ya empezaron a decirles los pasantes; las regañaban los pasantes.

Los doctores las regañaban cuando a ellas les tocaba un parto y le llamaban al doctor, porque ya no pudieron. Entonces, los doctores les llamaban la atención: «¿Por qué hace eso?». «Esto no está correcto. Esto sí está correcto».

Cuando estaba chiquita, en el centro de salud era muy raro que atendieran partos. Siempre esa señora, doña L., era la que, como quien dice, atendía, porque no había más. Era como un prestigio el que tenía ella. Cuando empezaron a venir más pasantes, empezaron a llamar la atención, cuando, por ejemplo, las comadronas daban un té o algo a las embarazadas. Pero nada más les advirtieron que tomaran el curso para autorizarlas».

(Doña Érika, 64 años, alfabeta, sin familiares en la partería)

Otro recurso utilizado, con frecuencia, para desmotivar la continuación de la práctica herbolaria consistió en la estigmatización de la cultura tradicional a la que pertenecía la partería empírica (fragmentos discursivos 5 y 6):

5) —¿Qué les dijeron (los médicos, en los cursos vs) sobre el uso de las hierbas en los cursos?

—Bueno, que no era aconsejable a estas alturas. Los indígenas todavía averiguaban su manera de trabajar...

(Doña Adela, 66 años, alfabeta, sin familiares en la partería)

6) —¿Qué les dijeron (los médicos) acerca del uso de las hierbas?

—Pues que no eran buenas. Tanto que nos dicen que no les demos nada, por eso nos tienen de parteras tradicionales, pero que se haga el parto como antes.

—¿Y cómo dicen que era antes?

—Pues nomás así, sin auxilio, sin nada.

(Doña Candelaria, 65 años, alfabeta, hija de una partera)

Según la interpretación de doña Adela, el uso de hierbas medicinales es asociado a los pueblos indígenas, en cuyo caso se justificaba, ya que, según la información médica recordada por la partera, los grupos indígenas aprovecharían los conocimientos herbolarios de manera razonada. La asociación de la medicina herbolaria a la etnicidad cuestiona su permanencia y práctica en las comunidades mestizas de Nuevo León. Desprovistos de un pasado indígena, los instructores negaban a las parteras la legitimidad de una cultura médica distinta a la de los mestizos urbanos. El discurso de doña Candelaria ratifica esta visión de las supuestas diferencias entre comunidades rurales indígenas y mestizas: las mestizas no brindarían a las parturientas ninguna ayuda. Esta afirmación niega, por lo tanto, a los auxilios parteros tradicionales toda utilidad y efectividad.

La argumentación integra, además, un segundo momento: el tiempo. La validez de un acervo de saberes es ligado a un contexto histórico y a los avances científicos del momento. De este modo, doña Adela afirma que, «a estas alturas», la medicina herbolaria debería estar, en definitiva, rebasada y representaría sólo un vestigio anacrónico sin mayor valor.

En suma, los patrones argumentativos evaden una evaluación de los beneficios y perjuicios de las hierbas medicinales, y se centran en calificar a una práctica cultural como atrasada, anacrónica e inauténtica en relación con su contexto sociohistórico y cultural. Por ello, esta tradición no podía reclamar alguna razón de ser.

La marcación de las identidades tradicionales constituye el tercer pilar de la invalidación de la cultura médica tradicional, proceso muy reproducido en los discursos de las parteras (fragmentos discursivos 7, 8, 9, 10, 11 y 12).

- 7) «Yo no les daba eso (hierbas), porque hay quienes a cada rato y a cada rato y eso les hace daño (a las parturientas, vs)».
(Doña Candelaria, 65 años, alfabeta, hija de una partera)

- 8) «Después de que yo me capacité, usé jeringa y tuve otra manera de valerme».
(doña María, 67 años, alfabeta, hija de partera)
- 9) «Todavía hay muchas parteras de la sierra que hacen cosas, porque temen que se les haga *cachana* (inflamación, vs), les entre un aire en la cabeza o les pase todo tipo de cosa».
(doña Adela, 66 años, alfabeta, sin familiares en la partería)
- 10) «Ellas (las parteras tradicionales de antes, vs) no sabían nada, oiga. Ellas nomás como atender a un animal, pues nomás le digo la forma en que trataban a uno. Pero decían que practicaban, que antes así era. Atendían a las personas, como le acabo de decir, dándoles hierbas, hierbas y más hierbas».
(Doña Cecilia, 75 años, alfabeta, nieta de partera)
- 11) «Antes, ellas (las parteras tradicionales, vs) tenían muchas costumbrillas malas. A uno lo atascaban de hierbas y hierbas. Que quién sabe qué, que para que te apures y te daban vino. Vino de ese con que se emborracha la gente; pues tomabas tequila, pero vino de ése, de la sierra, para que diera fuerzas, oiga: ¡mentiras! A ellas les gustaba, yo creo, tomar y decían que uno. Dios las haya perdonado».
(Doña Cecilia, 75 años, alfabeta, nieta de partera)
- 12) «Yo no fui de esas señoras que las tenían hincadas y que les daban hierbas, no. Dicen que ahora todavía hay unas a las que les dan muchas hierbas, las soban y las sacuden. No, pos, ahora, está muy moderno todo, ¿verdad?».
(Doña Erika, 64 años, alfabeta, sin familiares en la partería)

El uso de la medicina herbolaria se asocia, en estos discursos, a personas ignorantes, incultas, torpes, toscas, rudas, incompetentes y hasta inmorales (borrachas). La estigmatización de las identidades tradicionales se acompaña de procesos de distanciamiento, repudio y desidentificación; fenómenos que impulsan el desconocimiento de la

cultura tradicional como propia, y motivan el rechazo a aceptar y a continuar el legado del pasado en el futuro. Sin embargo, es importante recordar que no todas las parteras reaccionaron de la misma manera a los procesos de invalidación cultural. En otras palabras, la sensibilidad de las participantes al cuestionamiento de su cultura variaba en función de una serie de elementos que refieren a sus experiencias con la cultura partera y herbolaria, su edad, religión y no, en última instancia, a su autoestima. No obstante, en lo general, la mayor parte de las comadronas adiestradas redujo el uso de hierbas a un mínimo o desestimó su empleo por completo. En consecuencia, las hierbas empezaron a ser remplazadas por los productos de los laboratorios farmacéuticos (tabla 2).

Tabla 2
Remedios naturales y modernos en el tratamiento de problemas médicos relacionados a los alumbramientos en áreas rurales de Nuevo León

Dolencia	Remedio natural (nombres tal como fueron recordados por las mujeres)	Remedio farmacéutico recomendado
Intuertos	Fomentos en base panal de abeja hervidos en manzanilla	Buscapina y otros analgésicos
	Fomentos calientes	
	Té caliente	
	Baños de hierbas	
Contracciones camino de parto	Pimienta molida	Ocitosín
		Citosina
	Alcaniza molida	Cintosinol
	Laurel, hierbaniz y hojas de naranja	Pitosín
Dolor	Perlas de éter	Lerdotrate
	Alcohol Masajes	Buscapina
Fiebre	Rosa de castillo	Antibióticos
	Leche de chiva con ailador	

Fuente: entrevistas de campo

Los médicos y las parteras sabían que ciertas plantas medicinales (por ejemplo, el comino) y determinados productos de la industria farmacéutica estimulan la contracción del útero. Sin embargo, el peligro y los efectos secundarios posibles se atribuían sólo a las plantas medicinales, a pesar de que ambos tipos de sustancias pueden desencadenar consecuencias secundarias (fragmento discursivo 13).

13) —¿Por qué ellos (los médicos, vs) pensaban que no era aconsejable?

—Porque el comino funge como ositósico. Le meten un ositósico antes de que sea su trabajo de parto, y usted provoca, pues, puede provocar, una hemorragia, alteraciones en la presión y en el metabolismo de la paciente. Era cuando las señoras, pues, se ponían bastante malitas antes de tiempo, y les daban eso para saber si ya o no. Con los cominos, les daban los dolores del parto. Es como si usted aplicara la pitosina antes de tiempo». (Doña Adela, 66 años, alfabeta, sin familiares en la partería)

A pesar de enfatizar la potencial peligrosidad de la medicina herbolaria, ninguna partera entrevistada reportó problemas de salud asociados o asociables al suministro de hierbas. No es así al empezar a administrar productos farmacéuticos modernos. A menudo, las mujeres desconocían las propiedades y los efectos posibles de los medicamentos. Tampoco sabían qué hacer en caso de reacciones secundarias. Se los suministraban a las parturientas, porque así lo había indicado algún médico (fragmento discursivo 14).

14) «Ahora, me trajeron unas pastillas; oiga, pero ésas yo no las he usado. No sé cuántas se les dan. ¿Se les da una? Pues yo nada más les doy una, porque no sé si se les dan dos y no me lo pusieron. Pues yo creo que es lo mismo, porque ahí dice. Y, entonces, va el muchacho y le dice: «Véndame una caja de

Metarguín». Le dieron pastillas y él no se fijó; las pastillas no las conozco, pero le dije: «bueno». Como le digo, yo no conozco bien las inyecciones, porque dicen que una para la hemorragia, porque para eso son éstas, oiga. También, otro doctor de México me platicó. No, sí me han trabajado».

(Doña Cecilia, 75 años, alfabeta, nieta de partera)

Si tomamos en serio la pretensión del estado de mejorar, de manera efectiva, la atención sanitaria de los pobladores rurales, entonces resulta sorprendente e inexplicable —desde una perspectiva racional— que la burocracia sanitaria invalide una tradición curativa muy arraigada en una zona y la pretenda sustituir por una práctica completamente distinta, que no se relaciona con las experiencias y conocimientos de aquellas personas que la implementarían dentro de la comunidad.

Los posibles perjuicios que puede acarrear este modelo de intervención social tendrán que ser afrontados por dos tipos de actores: a) las mujeres embarazadas y parturientas, quienes arriesgan su salud en caso de un error de suministro; y b) las parteras tradicionales, quienes serían inculpadas por negligencia profesional.

A pesar de argumentar el 100% de cobertura médica en las zonas rurales de Nuevo León⁵⁶, el estado se encuentra aún lejos para poder reemplazar a las expertas tradicionales. La inaccesibilidad de cier-

⁵⁶ La cobertura médica alegada por el gobierno neoleonés tiene, más que todo, la función de facilitar la acreditación del sector médico ante instancias supranacionales. Sin embargo, resulta inservible como parámetro para medir la calidad de los servicios brindados. Aunque toda la población fuese atendida en un centro de salud a cargo de un médico —presupuesto mínimo, ya que el cobro de una módica cantidad de dinero margina, en la actualidad, a muchas familias campesinas de una consulta médica—, tal situación no garantizaría un cuidado efectivo, ya que un diagnóstico de nada sirve si no es acompañado por una estrategia terapéutica. Con frecuencia, los centros de salud no disponen de los medicamentos necesarios, por lo que el proceso terapéutico se trunca desde un principio. Por otra parte, muchas familias carecen de los recursos imprescindibles para adquirir los medicamentos en el mercado. Además, los centros de salud no cuentan con un laboratorio clínico ni con una infraestructura diagnóstica (rayos x, por ejemplo) lo que obstaculiza la identificación permanente de ciertos padecimientos.

tas zonas montañosas, la escasa población en las rancherías alejadas de los caminos transitables y la permanente restricción de recursos no permiten una expansión completa y, sobre todo, efectiva de los servicios médicos ni tampoco una mejora de su calidad. Los médicos enviados al campo son pasantes de medicina con poca experiencia profesional. Al mismo tiempo, existen aún mujeres que se resisten a dar a luz en algún hospital y que rechazan la presencia de un médico varón durante el alumbramiento. De esta manera, las parteras tradicionales cuentan, todavía, con clientela en ciertas zonas de Nuevo León (fragmentos discursivos 15 y 16).

15) «Los doctores nomás venían, temporalmente. Los pasantes a veces no estaban. Entonces, ¿quién atendía a las personas? El doctor ya estaba aquí y casi nunca atendía partos. Le daba mucho miedo. Me mandaba llamar para que fuera a atender un parto allá arriba y fui. Ahí estaba y me dijo: «No, pos, todavía le falta mucho y yo no puedo estar aquí». ¿Qué cree?, ¡qué vendría él como a una cuadra y no se alivió la señora! Es que sabía de eso».

(Doña Érika, 64 años, alfabeta, sin familiares en la partería)

16) —¿Cuáles son los problemas que ven las mujeres en el dr. Arroyo?

—Dicen que no pueden aliviarse en la camilla, porque es muy incómodo, pues tiene el lugar donde se ponen las piernas. Por eso, ellas dicen que no quieren ir ni con el dr. Arroyo ni a la clínica, no. Además, los doctores, luego de que nos acabamos de aliviar, nos escarban, como si fuéramos un maguey al que le sacan el agua y todo. Está muy mal una de tanto que la figonean, dicen las mujeres.

(Doña Érika, 64 años, alfabeta, sin familiares en la partería)

CONCLUSIÓN

La invalidación de la tradición medicinal campesina forma parte de la modernización rural. A pesar de promover una cosmovisión científica, identificada como baluarte de la racionalidad moderna, las formas de instrumentación de los procesos modernizadores parecen desestimar el ejercicio de la razón. La invalidación de los saberes tradicionales se basa, más bien, en medios represivos: la prohibición, la amenaza y la estigmatización. La voluntad de imponer, a toda costa, la visión moderna de cuerpo y de salud-enfermedad exime a las burocracias de elaborar un balance de las ventajas y desventajas de los sistemas médicos tradicionales y modernos, y de buscar opciones al tipo de modernización actual.

La radicalidad de la modernización sociocultural emprendida no sorprende, ya que se inscribe en una lucha por acceder al cuerpo femenino con el fin de controlar su fertilidad. Poco parece importar en esta batalla la calidad de los servicios ofrecidos y el precio a pagar por la población, en general, y las mujeres embarazadas y parturientas, en particular. La racionalización cultural adopta, de este modo, matices de una conquista. La meta consiste en el sometimiento y la erradicación de una tradición cultural identificada, de forma acrítica e irracional, como inferior.

La irracionalidad del proceso se demuestra, con gran particularidad, cuando se instruye a las parteras tradicionales en el uso de medicamentos inyectables, al tiempo de prohibirles el empleo de aquellos remedios naturales que producen efectos parecidos y cuyo manejo les es conocido.

El precio de esta modernización sanitaria no recae sólo en las jóvenes campesinas en edad reproductiva, sino que afecta a la población entera. Gracias a las campañas educativas, las autoridades contribuyeron a mermar la credibilidad de la tradición herbolaria y a disminuir el acervo del saber médico-herbolario de las comunidades rurales.

La tradición médica campesina sólo puede sobrevivir si es empleada por las personas. La pérdida de dichos conocimientos se tor-

na particularmente grave, en la actualidad, dado que el estado no ha logrado generar una infraestructura alternativa —que permitiría la atención efectiva de todos los enfermos rurales— y no cuenta con los recursos para construir nuevos centros, contratar personal, establecer infraestructura diagnóstica y terapéutica y suministrar los medicamentos necesarios.

La política de modernización sanitaria emprendida contribuyó, de este modo, sólo a la creación de nuevas dependencias y formas de marginación, que hablan de la irracionalidad de una modernización inscrita en un proyecto de poder.

BIBLIOGRAFÍA

- FRASER, N., «¿Qué tiene de crítica la teoría crítica?», en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell (eds.), *Teoría feminista y teoría crítica*, Ediciones Alfons/El Magnanim, Valencia, 1990
- GADAMER, Hans-Georg, *Wahrheit und Methode. Grundzüge Einer Philosophischen Hermeneutik*, JCB Mohr, Tübingen, 1990
- HABERMAS, J., *Teoría de la acción comunicativa*, t. 1, Taurus, Buenos Aires, 1989
- _____, *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des Kommunikativen Handelns*, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt, Main, 1995a
- _____, *Theorie des Kommunikativen Handelns*, t. 2, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt, Main, 1995b
- LAKOFF, R., *Talking Power. The Politics of Language in our Lives*, Basic Books, 1990
- KUHN, E., «Geschlecht und Autorität. Wie Lehrende Ihre Studenten/Innen zur Mitarbeit Bewegen», en Susanne Günthner y Helga Kotthoff (eds.), *Die Geschlechter im Gespräch. Kommunikation in Institutionen*, Verlag/B Metzler, Stuttgart, Alemania, 1992
- WEBER, M., *Economía y sociedad*, FCE, México, 1944
- _____, *La ética protestante*, Premiá, México, 1989 (La Red de Jonás)
- WEHLING, P., *Die Moderne als Sozialmythos. Zur Kritik Sozialwissenschaftlicher Modernisierungstheorien*, Nueva York, campus Frankfurt, Main, 1992

CONDICIÓN CAMPESINA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

LOS CAMPESINOS GUANAJUATENSES ANTE LOS PROCESOS DE CAMBIO

MARÍA DEL CARMEN CEBADA CONTRERAS

INTRODUCCIÓN

En décadas anteriores, cuando se hacía referencia a los cambios que se estaban dando en el medio rural mexicano, los comentarios versaban sobre si aquéllos giraban en torno a la vía *junker* o a la vía *farmer* y si se estaban generando procesos de descampesinización o campesinización. Discusiones que se daban en un contexto diferente al actual, pues en el modelo de desarrollo económico y social de entonces, la forma de intervención del estado y sus políticas y formas de relacionarse con el sector eran funcionales⁵⁷ para ambas partes, pero caracterizadas como un corporativismo de estado. Hoy en día, se ha asentado, en mayor medida, el modelo de desarrollo de corte neoliberal—que se comenzó a implementar desde 1982, con cuyos lineamientos se fueron instrumentando una serie de cambios en la forma de intervención del estado y en las acciones dirigidas hacia la agricultura—, dándose una gran variedad de respuestas productivas, sociales y políticas en el sector.

Dentro de estas acciones, la que plasmó los cambios que ya se estaban dando o generó una aceleración en dichos cambios fue la reforma al artículo 27 constitucional y su nueva ley reglamentaria, con lo cual se esperaba una transformación importante en la estructura

⁵⁷ La funcionalidad se ve en términos de que los líderes obtienen, a través de esta relación, recursos del estado con los que mantienen sus posiciones jerárquicas, y el estado obtiene el apoyo político de estos grupos con lo que consigue legitimidad de sus decisiones y gobernabilidad en sus acciones.

agraria del país. Asimismo, lo fue, en un contexto de apertura económica y comercial, el retiro de apoyos y subsidios para la producción y comercialización —que se habían venido canalizando al sector—, la eliminación de los precios de garantía y el establecimiento de los precios concertados, las políticas de reestructuración administrativa de instancias gubernamentales (principalmente la denominada banca de desarrollo) y los procesos de privatización de instituciones que tenían participación en acciones dirigidas al sector (Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, Fertilizantes Mexicanos, Instituto Mexicano del Café, Productora Nacional de Semillas, Servicios Agropecuarios Integrales —centrales de maquinaria—, entre otros). Cambios que fueron delineados con el fin de incentivar la inversión privada en el campo mexicano, con la que se establecía una nueva relación entre el estado y el sector.

En este contexto, en Guanajuato, se dio la alternancia política, al tomar el gobierno el panista Carlos Medina Plascencia (1991-1994), con lo que se da un cambio en el grupo en el poder, el cual va a continuar con el gobierno de Vicente Fox (1994-2000)⁵⁸ y con Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006). La pregunta es: ¿cómo se va a relacionar este gobierno con el sector rural? o ¿qué acciones va a emprender hacia la agricultura?

Con el fin de profundizar sobre estas cuestiones y sus impactos en los procesos de diferenciación social en el medio rural guanajuatense, se muestran, a continuación, ejemplos de lo que sucede en algunas zonas agrícolas de Guanajuato; en particular, se señala cómo se dan los procesos sociales de cambio y cómo están respondiendo los productores rurales, enfocando la atención en los productores campesinos (o agricultores pequeños y medianos)⁵⁹.

⁵⁸ En el periodo 1999-2000, Vicente Fox se lanza como candidato a la presidencia de la República Mexicana, y queda como gobernador interino Martín Huerta.

⁵⁹ Se considera que hay dos aspectos que caracterizan a este tipo de productores. Uno es el tamaño de la parcela o la superficie que poseen para sembrar, que en la práctica no pasan de

Para ello, se han realizado visitas de campo, en varios momentos entre octubre de 1997 y diciembre de 2001, en zonas agrícolas de Guanajuato, buscando que fueran contrastantes entre sí los lugares en cuanto a sus características productivas, disponibilidad de agua, principales cultivos, mercados de trabajo, migración, localización geográfica y regional y formas de asociación, entre otros aspectos. En cada localidad seleccionada, se aplicaron entrevistas enfocadas a los productores ejidales y entrevistas abiertas a autoridades, representantes locales, propietarios privados, mujeres y población no ejidataria. Este trabajo es para comprender las transformaciones que se están dando en el medio rural a raíz de los cambios en la forma de intervención del estado en la economía y sociedad mexicanas.

EL CONTEXTO: LA AGRICULTURA EN GUANAJUATO

La agricultura en Guanajuato ejemplifica, claramente, los cambios y continuidades que ocurren en el ámbito nacional. Se reporta para la entidad una superficie rural total de 1,997,229.1 há, de las cuales el 59% es superficie de labor. De ésta, el área sembrada representa el 85% (INEGI, 1994). El estado cuenta con 136,193 unidades de producción rurales con una superficie de labor total de 1,170,759.9 hectáreas. El 33% (45,464 há) es privada, con el 54% de la superficie de labor (629,355.2 há), el 65% (88,238 há) es ejidal y tiene unidades a las que les corresponde el 43% de la superficie de labor (503,373.8 há) y el 2% (2,499 há) se trata de unidades mixtas con el 3% de la superficie de labor (INEGI, 1994).

20 há por agricultor (ejidatario o pequeño propietario). El otro es la relación que guardan con la tierra, pues ésta es la que los define de manera más directa, al ser la base del patrimonio familiar y, por lo tanto, se convierte en un recurso estratégico para la producción y para su reproducción social. No buscan maximizar una ganancia, sino incrementar y salvaguardar dicho patrimonio.

De las unidades rurales privadas, el 42% tiene hasta 5 há con una superficie de 45,490.9 há y el 58% se ubica en el grupo de más de 5 há con una superficie de 583,864.2 hectáreas. De las unidades ejidales, el 51% se encuentra en el estrato de hasta 5 há con una superficie de 144,608.3 há y el 49%, en el estrato de más de 5 há, abarcando 358,765.5 hectáreas. La mixta presenta, para esos grupos, una participación de 15% y 85%, respectivamente (INEGI, 1994).

Por disponibilidad de agua, del total de las unidades rurales con superficie de labor, el 20% (26,895) tiene riego con una superficie de 236,034.7 há, que representan el 20.2% de la superficie de labor; el 62% (84,403) tiene sólo superficie de temporal con 624,125.6 há, que representan el 53% de la superficie de labor y el 18% (24,895) reporta superficie de riego y temporal con 310,599.7 há, que representan el 26.5% de la superficie de labor (INEGI, 1994).

Según el tipo de tenencia, la superficie privada con riego representa el 53% (126,183.7 há); la ejidal, el 44% (103,656.5 há) y la mixta, el 3% (6,194.5 hectáreas). De la superficie privada con riego, el 94% se concentra en las unidades de más de 5 há; de la ejidal, el 63% se ubica en este grupo y de la mixta, el 97% se localiza en esa agrupación (INEGI, 1994).

La participación por tipo de tenencia en la superficie de temporal es del 56% de la privada (350,176.6 há), 52% de la ejidal (259,294.7 há) y 2% de la mixta (14,654.2 hectáreas). En la superficie de riego y temporal, los porcentajes de participación son de 24% de la privada, 28% de la ejidal y 45% de la mixta (INEGI, 1994).

Respecto a la superficie sembrada, se estima que, en promedio, se plantan 1,065,170 há, de las cuales el 94% es cultivo cíclico y el resto es perenne. El maíz ocupa alrededor del 42% de la superficie sembrada con cultivos cíclicos y la alfalfa usa el 82% del área con cultivos perennes (INEGI, 1999).

Los principales cultivos cíclicos que se reportan son los granos (maíz, sorgo, trigo y cebada), las leguminosas (frijol) y las hortalizas (cebolla, brócoli, chile verde, ajo y papa). Entre los perennes, se

enlistan forrajes (alfalfa y pastos), hortalizas (espárrago y fresa) y frutas (aguacate). Aunque los porcentajes de participación en la superficie sembrada con hortalizas son menores al 1%, su contribución porcentual en el valor de la producción es de alrededor del 5%.

La siembra del maíz es, predominantemente, de temporal (80% de la superficie); de riego se usa 20%; se siembra en los 46 municipios de la entidad, pero 11 reportan una producción comercial importante; sobresalen Jerécuaro, con 42,075 há (10.2%), San Felipe, con 29,560 há (7%) y Pénjamo, con 22,008 há (5%). El 63% del sorgo se siembra en superficie de riego (150,799 há) y el 37% (88,051 há), en temporal; los municipios más importantes en la producción son Pénjamo (40,630 há), Valle de Santiago (28,107 há), Salamanca (22,908 há) e Irapuato (21,200 hectáreas). El 88% del frijol se siembra en superficie de temporal (99,370 há); los municipios productores, en orden de importancia, son San Felipe (14,066 há), Ocampo (11,547 há), Allende (8,919 há) y San Diego de la Unión (7,649 hectáreas). El trigo se siembra en 86% en superficie de riego (71,719 há); los principales municipios productores son Salamanca (8,507 há), Irapuato (7,202 há), Pénjamo (7,200 há) y Valle de Santiago (7,123 hectáreas).

Por el contrario, las hortalizas, como el brócoli, la cebolla, el chile verde, la papa y el ajo, se siembran únicamente en superficie de riego. En el brócoli (11,511 há), sobresalen Salamanca (1,209 há), San José Iturbide (1,035 há) y Dolores Hidalgo (933 há); también, se reportan siembras en Dr. Mora, Abasolo, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, San Luis de la Paz, Valle de Santiago, Allende y Huanímbaro. En cebolla (9,178 há), aparecen los municipios de Juventino Rosas (1,090 há), Celaya (1,516 há) y Salamanca (1,277 hectáreas). En chile verde (6,441 há), es importante la presencia de los municipios del noroeste del estado: San Felipe (1,719 há), Dolores Hidalgo (1,415 há), San Luis de la Paz (985 há) y San Diego de la Unión (680 hectáreas). La papa (4,427 há) se siembra en León (2,324 há), San Francisco

del Rincón (862 há) y Romita (465 hectáreas). El ajo (2,774 há) se siembra en Salamanca (636 há), Dolores Hidalgo (450 há) y Apaseo el Grande (268 há) (INEGI, 1999).

Los cultivos perennes se siembran sólo en superficie de riego. En la siembra de alfalfa (50,049 há) participan los municipios de Celaya (9,078 há), Apaseo el Grande (4,777 há), San Luis de la Paz (4,680 há) y Dolores Hidalgo (4,647 hectáreas). El espárrago (3,445 há) se siembra en San Luis de la Paz (938 há), Irapuato (713 há) y Silao (585 hectáreas). La fresa (2,439 há), en Irapuato (1,640 há) y Silao (280 hectáreas). El aguacate (781 há), en Comonfort (348 há), Silao (146 há) y Guanajuato (110 há). La superficie de pastos (1,734 há) sembrada en riego está presente en San Felipe (777 há), San José Iturbide (300 há) y Dr. Mora (270 há) (INEGI, 1999).

Cabe hacer notar que aparecen municipios del norte del estado, los cuales se caracterizan por la escasez de agua; sin embargo, existen almacenamientos o pozos en esas zonas, pero son propiedad de agricultores privados, quienes siembran, principalmente, hortalizas en riego.

Si bien la distribución por tipo de tenencia, tipo de cultivo y disponibilidad de agua no agota muchas de las explicaciones sobre las desigualdades en la agricultura guanajuatense, considero que sí ofrece un marco de referencia sobre la disponibilidad y acceso diferenciado de recursos naturales para la producción agrícola y sus formas de participación social⁶⁰.

LA OTRA ESCALA DE OBSERVACIÓN: RESPUESTAS O ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN CAMPESINAS

Al hablar del campesinado, es necesario remitirse al concepto de unidad doméstica campesina, porque ésta es el eje fundamental para la

⁶⁰ En términos generales, participación social se entiende aquí como aquellas acciones que emprende un grupo con las que expresa sus necesidades, demandas e intereses comunes, o busca influir en la toma de decisiones de las políticas públicas.

organización de las actividades que emprenden sus miembros y porque se convierte en el centro de decisión económica. El proceso productivo de la unidad doméstica campesina está organizado, principalmente, en la explotación de la tierra con base en el trabajo familiar. El ciclo de consumo se establece, paralelamente, al de la producción. Ambos, estrechamente imbricados, conforman una sola unidad de reproducción, cuyo tiempo de referencia es el del remplazo de una generación por otra. La reproducción de las condiciones de producción y perpetuación de todos los miembros de la familia son los factores que unifican las facetas de la actividad del grupo doméstico, siendo la pluriactividad económica una característica de la reproducción del grupo; con base en ello, se hace una jerarquización de actividades económicas entre sus miembros; el campesino es propietario de su tierra y no emplea, por lo general, trabajo externo. Sin embargo, la unidad de producción familiar se inserta, cada vez más, al mercado, y se ve en la necesidad de incorporarse en estructuras productivas asociativas más amplias.

Con la extensión de las relaciones capitalistas hacia el campo, la producción tiende a adoptar, cada vez más, una forma y lógica mercantil, y a sustituir la lógica de autoabasto presente en la elección de las estrategias de sobrevivencia campesinas. El campesino ya no puede vivir fuera del mercado; tiene que vender para poder comprar y viceversa. La producción campesina deja de ser, esencialmente, una unidad productiva familiar encerrada en el mundo agropecuario, para transformarse en una unidad de producción diversificada y plurisectorial, y combina, en diferentes grados, la actividad agropecuaria con el trabajo asalariado. Además, el trabajo familiar no sólo se relaciona con diferentes esferas de la economía, sino que sus actividades se sitúan en el nivel local, nacional e internacional: con trabajo a domicilio, como migrante o deslocalizado (Chayanov, 1974; Pepin, 1985; Faure, 1990; Linck, 1982; Carton de Grammont, 1995).

Asimismo, una característica de la reproducción biológica, social y económica de la fuerza de trabajo campesina se encuentra a través del desempeño combinado de actividades de diversa índole en un solo ámbito, que no admite la oposición entre una esfera doméstica y una económica, concebidas como departamentos estancos, y sólo reconoce una validez limitada a la contradicción entre la producción por cuenta propia y el trabajo para otros.

La producción campesina también está caracterizada por la existencia de relaciones asimétricas, que enlazan a los grupos domésticos por medio de las colectividades locales al sistema económico y social en el cual se insertan. La comunidad puede favorecer y obstaculizar las pautas de reproducción, que pueden afectar los procesos locales de homogeneización o diferenciación social. Además, la creciente limitación que tiene el campesinado para acceder a los recursos naturales, a los avances tecnológicos y a las nuevas oportunidades productivas crea situaciones entre las unidades campesinas en cuanto a que éstas ven, cada vez más, la brecha que las separa de sus competidores, y afianzan su dependencia al mercado, viendo también limitada su capacidad de negociación y participación social (Pepin, 1985, 1993 y 1996). Por lo que el término campesino dista mucho de tener un significado unívoco (Chamoux, 1993; Peña, 1986).

Ahora, podemos entender por campesino una célula socioeconómica —la unidad doméstica—, pero también un tejido social más amplio cuyo centro de gravedad es la comunidad agraria. El campesinado de hoy está, también, en las estructuras organizativas regionales, sectoriales, nacionales y hasta transnacionales; en este sentido, también forma parte de la moderna condición campesina una serie de aparatos económicos y sociales de gran escala y de carácter asociativo. Entonces, el campesino incorpora a su cultura los conocimientos y habilidades que demanda la operación de dicha serie. Los campesinos siguen siendo los pequeños productores familiares, pero hoy son, también, gestores colectivos de grandes em-

presas de servicios o de agroindustriales; emplean sistemas de cultivos tradicionales, lo que no obsta para que traten de apropiarse de la más avanzada biotecnología; pueden cosechar para el autoconsumo y a la vez para abastecer al mercado mundial. El núcleo de la sociabilidad campesina está aún en la comunidad agraria, pero su mundo ya no termina a orillas de la aldea. Las relaciones económicas, gremiales, políticas o culturales de las que el campesino es sujeto se extienden, regionalmente, recorren el país y, a veces, cruzan las fronteras nacionales (A. Bartra, 1995).

¿CÓMO SE OBSERVA ESTO EN GUANAJUATO?

Cabe mencionar, a grandes rasgos, aspectos que caracterizan la agricultura y estructura agraria de la entidad. En los años treinta, el acceso a la tierra se dio mediante un proceso de venta de parcelas por parte de los hacendados a sus trabajadores, como una respuesta a las amenazas de expropiación con la reforma agraria. Sin embargo, las expropiaciones se dieron y, además, muchos de estos trabajadores quedaron incluidos en los grupos de solicitantes y futuros ejidatarios. De ahí que se encuentren ejidatarios que también son pequeños propietarios. Esto puede ser un aspecto que explica el sentido de pertenencia a determinado grupo. No se dicen ejidatarios, sino pequeños agricultores.

Otro aspecto importante es lo relativo a la revolución verde y su introducción en el estado, principalmente en el sur (Bajío). El paquete tecnológico, que incluye la mecanización de la agricultura, generó un proceso de expulsión de mano de obra campesina, el cual se vio fuertemente vinculado con la instalación de oficinas de contratación de trabajadores para Estados Unidos, con el Programa Bracero, en la década de los cuarenta. Así, la migración internacional comienza a ser un recurso importante para las familias campesinas.

En los últimos años, los procesos de industrialización y el establecimiento de corredores, parques, ciudades o fraccionamientos industriales, por un lado, y el crecimiento de ciudades medias y los procesos de conurbación, por el otro, se han dado sobre tierras agrícolas, principalmente de los ejidos. Esto ha generado una reducción de la frontera agrícola, asentamientos irregulares urbanos y una mayor presión sobre el mercado de trabajo. Hay que resaltar que los campesinos dejan de ser productores agrícolas, pues ya ni siquiera se les puede considerar como productores de autoconsumo. Además, dentro de los ejidos, se han dado procesos de concentración de tierras y la migración internacional sigue siendo importante, observándose entre las generaciones más jóvenes una tendencia a perder el arraigo a la tierra.

Los casos que se describen a continuación de manera muy sintética ejemplifican diversas maneras de vinculación: campo-ciudad, agricultura-industria, agricultura-migración internacional, agricultura-mercado de trabajo o agricultura-pobreza en las que se dan formas de interacción social y política en distintos ámbitos de acción social (local o regional).

Huanímaro y León

Los ejidos visitados en estos municipios, San Cristóbal y Plan de Ayala, realizan agricultura de riego con agua superficial (aguas negras); por lo anterior siembran, básicamente, granos (maíz y sorgo, en primavera-verano, así como trigo y maíz, en invierno). Una parte de la producción de maíz se dedica para el autoconsumo (alimento y semilla) y la mayor porción se utiliza para la venta. Predominan terrenos planos con buen suelo, y se utiliza el tractor para las labores agrícolas.

San Cristóbal se caracteriza por ser un poblado tradicionalmente expulsor de migrantes hacia Estados Unidos. Por la ubicación de al-

stable-
indus-
procesos
princi-
a fron-
presión
pesinos
s puede
dentro
ras y la
se entre
igo a la

gunas parcelas ejidales y porque cuentan con pozos para riego agrícola, las compañías de la industria alimentaria (agroindustria), establecidas en el corredor industrial Celaya-Irapuato, se han acercado a los productores ejidales de San Cristóbal para ofrecerles llevar a cabo la siembra de hortalizas en una superficie delimitada por ellos, área que se define en función del mercado y de la capacidad de industrialización (entre 50 y 100 hectáreas). Es una forma de agricultura de contrato, pero en la que ahora se comparten por igual los riesgos y los costos de producción, y se establece una cláusula en la que se acuerda un rendimiento mínimo por hectárea (base del convenio).

La agricultura en esta comunidad ha estado financiada por los recursos monetarios que envían los trabajadores migrantes, que generalmente son hombres. Sin embargo, se hacen acuerdos familiares; entonces algunos se quedan como encargados de las tierras. Esto se facilita, porque las actividades (la mayoría) están mecanizadas y sólo se contratan trabajadores de las comunidades vecinas que no emigran para que lleven a cabo las prácticas agrícolas que requieren hacerse de forma manual, como el riego.

El papel de las mujeres en estas comunidades es muy tradicional, lo que puede explicar, de cierto modo, por qué a pesar de que, en 1993, se estableció una maquiladora textil en la cabecera municipal, administrada por exmigrantes y que se encuentra a 5 minutos viajando en autobús, muy pocas mujeres intentaron incorporarse a este trabajo. Por otro lado, se observó que cuando se requería hacer un gasto fuerte para el cultivo agrícola emprendido —comúnmente el pago de la luz eléctrica por el riego por bombeo—, los campesinos llamaban al familiar migrante para solicitarle el apoyo, el cual les era remitido en un promedio de ocho días (Cebada, 2000a).

En la región, predominan las relaciones familiares y de parentesco, las cuales están presentes en todos los acuerdos y decisiones en el aspecto productivo o de desarrollo de la comunidad. Se organizan grupos de trabajo entre los ejidatarios —incluyendo a los migrantes—, y

Plan de
guas ne-
y sorgo,
na parte
mento y
terrenos
grícolas.
almente
ón de al-

se nombra a un administrador por agrupación, quien se queda como responsable de los trabajos agrícolas a realizar en todas las parcelas. De la misma manera, se da la elección de las autoridades ejidales y del delegado municipal. La cohesión que se da entre los miembros de este poblado y el éxito relativo de sus migrantes han dado al lugar una presencia política importante en el ámbito municipal.

Por su parte, Plan de Ayala o Santa Rosa, en el municipio de León, es un ejido que se localiza entre dos de las ciudades importantes de la industria zapatera: León y San Francisco del Rincón. Se inserta, así, en un proceso de conurbación, que se da entre estas dos ciudades, las cuales se encuentran a una distancia aproximada de 30 kilómetros. El ejido se ha visto modificado en su estructura física inicial por su propio crecimiento demográfico, por las expropiaciones de tierra para usos públicos de que ha sido objeto y por su vecindad con la ciudad de León, que es su cabecera municipal y a la cual se subordina. Esta cercanía, las modificaciones físicas que fue sufriendo el poblado —en la zona urbana y en las parcelas agrícolas— y los recursos naturales con que contaba son aspectos que le han inyectado una dinámica específica a esta comunidad rural, y que alteran sus respuestas y forma de vincularse con su entorno local y regional. Con estas modificaciones también se ven alteradas sus formas y condiciones de vida. Un momento crucial para las relaciones internas fue el proyecto expropiatorio de una parte de la superficie de las parcelas ejidales, cuyo terreno se destinó para la reubicación de la industria curtidora de la ciudad de León.

Con ello, se hicieron manifiestas las contradicciones de intereses y, por lo tanto, las divisiones, las cuales se dieron, básicamente, entre dos grupos. Uno lo encabezaba el delegado municipal —quien ya llevaba ocho años en el cargo— y el otro, el presidente del comisariado ejidal, quienes, a su vez, decían pertenecer a diferentes partidos políticos: el delegado municipal al PAN y el comisariado al PRI. Se observó que el delegado se vio fortalecido en su posición, junto con la presi-

dencia municipal de León, con los recursos de la descentralización municipal del ramo xxxiii, al ser apoyado con estos recursos «por la buena relación que tiene con la presidencia» (Cebada, 2000).

Xichú

La Sábila y la Higerilla son las dos poblaciones visitadas, las cuales forman parte del ejido San Diego de las Pitahayas. Se ubican en serranías, por lo que la mayor parte de los terrenos presenta pendientes altas. El clima es cálido y semitropical. Estos lugares se caracterizan por una agricultura campesina de autosubsistencia en condiciones de pobreza. Son comunidades rurales que han estado aisladas y marginadas de los beneficios de las políticas de desarrollo implantadas por los gobiernos estatales. Contaban, únicamente, con caminos vecinales; a finales de los años noventa, se comenzó a construir un camino de terracería. Siembran maíz y frijol de temporal en pequeñas superficies que no pasan de 1 há; la cosecha la destinan para el autoconsumo.

Estos lugares combinan la agricultura con la producción de artesanía de ixtle —jarciería—. El problema que enfrentan los artesanos de estas comunidades es que la producción artesanal se ve alterada por la escasez que se está dando del recurso natural del cual obtienen la fibra. Cuentan con una pequeña área destinada a un corral para ganado caprino —cabras y chivos— y/o vacuno, para caballos, burros y/o mulas, los cuales utilizan como animales de tiro para las labores agrícolas o como transporte. Algunas unidades domésticas tenían pollos y puercos. Los pobladores señalan que la sequía echa a perder sus cosechas; hace tres años entró una plaga y se perdió todo.

En estos poblados se dan dos tipos de migración: la interna regional y nacional, así como la internacional hacia Estados Unidos. La

diferencia entre la migración de esta zona con la de las comunidades de Huanímaro es que en Xichú la movilidad se dio, primero, hacia las ciudades de Querétaro, San Luis Potosí, Toluca o ciudad de México y de ahí se establecieron las redes para ir a trabajar a Estados Unidos. En estas poblaciones, no se da la salida directa hacia el vecino país del norte. Las redes aún son débiles.

La jarciería es un trabajo artesanal desarrollado, básicamente, por los hombres de los lugares de estudio. Las mujeres participan en esta actividad ayudando en algunas tareas, como formar el hilo para coser los objetos deseados o hilar el ixtle para la reata. Esta actividad se ha vuelto fundamental, para algunas familias, al ser un ingreso importante (Moctezuma y Cebada, 1999).

Por las características de aislamiento geográfico, la gente sólo va a la cabecera municipal cada ocho o 15 días para hacer las compras de su consumo básico familiar y por temporadas para adquirir insumos agrícolas o pastura para los animales. Los pobladores de esas regiones establecen relaciones con el comerciante que adquiere sus productos, con el que se abastecen y con la iglesia, cuando en ésta se organizan las fiestas del pueblo o del santo patrono, para las cuales se pide cooperación. Los candidatos a la presidencia municipal son los que visitan estas poblaciones en época de elecciones y quienes, por lo general, residen en la cabecera municipal.

San Diego de la Unión y Puente de Ixtla

Los ejidos de San Diego de la Unión, en el municipio de San Diego de la Unión, y Puente de Ixtla, en el municipio de Apaseo el Grande, llevan a cabo una agricultura de temporal con cultivos básicos, que se destinan para el autoconsumo y la venta. Por las características de los terrenos, pedregosos o con pendientes, las actividades se realizan con tiro o yunta.

En San Diego de la Unión, al norte de Guanajuato, la producción agrícola de la zona es de temporal, y se siembra, básicamente, el maíz. Algunos productores —por lo general de la propiedad privada— se dedican a la generación del nopal y la tuna con fines comerciales. En la zona, predomina el ganado menor (cabras). La mayor parte de la superficie está clasificada como de monte o cerril (no laborables), lo que dificulta la agricultura mecanizada y la introducción de cultivos comerciales. El ejido presenta más limitaciones debido a la escasez de agua⁶¹ y a los bajos niveles de precipitación pluvial. Contaba, en 1993, con seis almacenamientos de agua superficial, que son utilizados para la agricultura de riego en los alrededores, pero, en 1996, se reportan cuatro de estas presas localizadas en tierras de propietarios privados, quienes siembran hortalizas (brócoli y chile). Además, están las frecuentes heladas, que restringen la actividad a cultivos de ciclo anual de primavera-verano, como se realiza en la actualidad con el maíz y el frijol. Una actividad importante, en el municipio de San Diego de la Unión, es la minería (alunita, plata, oro, mercurio y no metálicos).

Tras el rescate que agricultores hicieron de la Unión Regional de Productores de Nopal y Tuna, que había sido creada en tiempos de la administración de Luis Echeverría en los años setenta, los principales promotores fueron el presidente municipal de San Diego de la Unión (1995-1997) y uno de los principales productores de tuna en la región, quien tiene 480 há de nopal tunero (rojo pelón). Este pequeño productor funge como presidente de la Unión, e invitó a ejidatarios que habían participado en el programa inicial. Como Unión, comenzaron a hacer gestiones ante el gobierno del estado panista para solicitar apoyos para el mejoramiento de la producción de nopal y de tuna. En ese entonces (1997), la mayor parte de los municipios del

⁶¹ Se encuentra clasificado como de veda elástica, en cuanto a recursos hidráulicos, pues puede incrementar el uso de agua para riego por pozos.

norte del estado era de adscripción priista, entre ellos San Diego de la Unión.

Al no encontrar respuesta rápida a su solicitud, por parte del gobierno del estado, entablaron pláticas con los otros presidentes municipales de la zona norte del estado, obteniendo con ello la atención del gobierno del estado, que se da por medio de la Coordinación para el Desarrollo Regional (Codereg), creada en el gobierno de Vicente Fox. La instancia retoma al programa como eminentemente económico, pero no reconoce la representatividad del presidente de la Unión, sino que convoca a reuniones de planeación estratégica a los presidentes municipales de la región norte, a productores de la zona, a académicos y a otras dependencias del gobierno del estado.

Los iniciadores asisten a estas reuniones, plantean sus inquietudes y proponen la consolidación de la Unión, lo cual es retomado mediante la constitución de la Coalición de Presidentes Municipales del Norte de Guanajuato, en cuyo seno se manejó como prioritario el programa del nopal y la tuna, pues éste se veía como estrategia viable de desarrollo regional; se denominó Programa Integral de las Cactáceas. Además, se define, a propuesta de la Codereg, que el dirigente de la Coalición fuera el presidente municipal de San Felipe, que era el único municipio de extracción panista. Sin embargo, dentro de los programas de la Codereg, San Diego de la Unión se define como un agropolo de desarrollo agropecuario, donde se fomentará la producción de las cactáceas para su expansión y se abastecerá al mercado interno y externo. Con las elecciones de 1997, la mayoría de estos municipios del norte queda en manos de los candidatos panistas.

Por el contrario, Puente de Ixtla, localizado en el sureste de la entidad, es un ejido en el que los ejidatarios tienen dos tipos de parcela: una, en terrenos con pendiente, en la que siembran maíz y frijol, y otra, en terrenos con poca pendiente, en la que algunos plantan sorgo. Los ejidatarios tienen borregos y chivos; algunos cuentan con vacas. Es un ejido que colinda con propiedades privadas, que cuentan con riego y en las

que se siembran hortalizas (ajo, cebolla, chile, lechuga y brócoli) o alfalfa. Esta actividad se combina con la ganadería bovina de leche establecida y, en los últimos años, se está incursionando en la engorda establecida. La zona se ubica a unos 40 minutos de la cabecera municipal por camino de terracería; en este lugar se está dando la instalación de empresas industriales, debido a su cercanía con las ciudades de Querétaro y Celaya y porque se ubica en las inmediaciones del corredor industrial, el cual se está estableciendo entre estas dos ciudades.

Las oportunidades de trabajo las dan la agricultura y la industria, aunque también se reporta gente que se va a Estados Unidos a trabajar. La mujer se incorpora, de manera importante, a estas actividades laborales: en el cultivo de hortalizas, como obreras en la industria y como migrantes en Estados Unidos.

Los ejidatarios contaron con crédito hasta 1988, y trabajaban en grupos de crédito para la siembra de sorgo, pero quedaron endeudados y se dio la separación de los grupos. Ahora, la mayor parte de los ejidatarios trabaja de manera individual, pero hubo agrupaciones que se quedaron con los tractores. Son éstas las que siembran sorgo con riego, pues sus parcelas quedan cerca de un arroyuelo, las que encabezan las tomas de decisiones en el ejido y las que coordinan los programas del Procampo y del Progreso y, como consecuencia, las que establecen los vínculos con la presidencia municipal.

Irapuato

El ejido Rancho Grande es ejemplo de cómo agricultores ejidales han incursionado en la siembra de espárrago, pues presenta características de una producción más empresarial. La situación se dio por una coyuntura que le permitió incorporarse a este cultivo. Los agricultores comenzaron con un contrato de financiamiento bancario, tipo asociación, para la producción con un productor privado. Con este

financiamiento pudieron hacer la plantación inicial —el espárrago se considera cultivo perenne—, pero tuvieron desacuerdos con el socio y éste los dejó solos. Como se requiere mantener el cultivo por tres años antes de que empiece a producir, comenzaron a buscar comprador, el cual resultó ser, también, un productor de hortalizas en gran escala que cuenta con una empacadora y un invernadero. El acuerdo al que llegaron fue que este comprador les mandaría un técnico de campo para que los asesorara en las labores de cultivo que requiere el espárrago, así como en el corte, acarreo y envío a la planta. Estos ejidatarios se han organizado para comercializar, en forma colectiva, en la Unión de Ejidos Irapuato (que ya existía), lo que les ha permitido reducir los costos de transacción para el comprador, al tratar sólo con el representante del grupo, quien es el que lleva el control individual de las entregas. No obstante, siguen dependiendo, fuertemente, del comprador, pues desconocen el mercado de exportación de hortalizas, el cual se trabaja mediante *brokers*. Y aunque los ejidatarios que se han arriesgado con la siembra de este cultivo continúan incrementando la superficie sembrada —de 1 há piensan llegar a 6, incorporando una por año—, representan un porcentaje mínimo de las compras que hace este comprador-productor (5%) al año.

Los ejidatarios complementan la superficie con la siembra de maíz y sorgo; algunos incursionan, también, con la fresa, pero existe una plaga que no ha podido ser erradicada de la región, por lo que son pocos los que continúan sembrando fresa. Otro problema al que se enfrentan estos ejidatarios es el crecimiento de la ciudad de Irapuato, ya que ellos se encuentran en el área de conurbación de dicha ciudad, razón por la cual los que no tienen capacidad para sembrar o no cuentan con crédito agrícola están optando por vender sus tierras, las cuales son adquiridas por inmobiliarias que las destinan para fraccionamientos habitacionales-residenciales y para continuar con el corredor agroindustrial de esa zona. Los ejidatarios y algunos miembros de sus familias se incorporan al trabajo asalariado en la ciudad

de Irapuato o se van como trabajadores migrantes a Estados Unidos o Canadá.

Hasta ahora, los agricultores consideran que les ha ido bien con el espárrago; sin embargo, desde el punto de vista comercial, el espárrago tiene una vida útil de 10 años, dentro de los cuales los mejores, los más productivos, son entre el cuarto y el séptimo año, por lo que tienen que ir pensando en la forma de sustituir la superficie sembrada, según la antigüedad de las plantas, para que siga siendo comercialmente rentable la siembra para este tipo de productores. Sólo los que tienen los recursos suficientes y la capacidad para llevar a cabo esto son los que están concentrando la siembra del espárrago (Marañón y Cebada, 2000).

La división que se da entre los ejidatarios de este ejido es «productiva». Están los que siembran espárrago⁶², los que plantan fresa y los que siembran sorgo y maíz. En la Unión, se refleja la división existente en el ejido, donde las luchas se dan entre esos diferentes grupos de productores. Sin embargo, los esparragueros han logrado mayor capacidad de gestión y negociación, ya que con los acuerdos establecidos con el comprador están pagando una cuota a la Unión y con ello están generando empleo para la administración de ésta.

LAS SITUACIONES O TENDENCIAS RESULTANTES

Se observan tres procesos:

1. Los que se «refugian» en la condición campesina y reproducción simple, pero donde el ingreso obtenido por trabajo asalariado cobra enorme importancia para las decisiones productivas.

⁶² Los que siembran espárrago también plantan sorgo y maíz, pero su interés es sembrar sólo espárrago.

2. Los que tienden hacia una producción más empresarial, pero que muestran mucho más las contradicciones internas y desigualdades económicas y sociales en un mismo ejido.
3. Los que tienden hacia una situación de pobreza, pues sus condiciones de producción y reproducción social son muy precarias.

En los tres procesos, se encuentra el envío de remesas de los migrantes internacionales como algo importante. Lo que los diferencia es el destino o uso de dichas remesas. Algunas personas las destinan en su totalidad para el consumo familiar; otras, para comprar terrenos y construir casa y unas más las utilizan de manera productiva, comprando tierras para sembrar y para el ganado, maquinaria o insumos.

Estas situaciones no son nada nuevo; sin embargo, la reflexión gira ahora en torno a cómo se da la articulación entre la situación económica y la participación política. Una demanda que se daba fuertemente por este grupo de productores era la «democratización» del ejido y de sus asociaciones. Pero las peticiones se hacían en un contexto diferente. Ahora, la fuerza política que pudiera tener el ejido o las organizaciones de campesinos está muy debilitada. A raíz de las reformas del artículo 27 constitucional y de todas las políticas hacia el sector, la figura del comisariado ejidal ya no tiene la fuerza de la representatividad con la que venía negociando recursos; los liderazgos se modifican y aparece la figura del presidente municipal más fortalecida gracias a los recursos que le llegaron a través de los programas de desarrollo comunitario y erradicación de la pobreza (Pronasol/Progresá), los cuales serían manejados directamente por ellos. Esto ejemplifica, también, las áreas en las que ahora interviene el estado: más en aspectos de política social que en apoyo para la producción.

Se observan, también, diferentes contextos y grados de participación social. Vimos cómo algunos campesinos trascienden su acción

hacia al ámbito municipal; otros, al regional, y algunos más se mueven en su ámbito local. También, se aprecia que son los que tienen mayores recursos o intereses económicos los que buscan o gestionan recursos.

Finalmente, considero que se está generando un proceso de «desafiliación»⁶³ entre el campesinado mexicano, al tener que enfrentar a este mundo globalizado, al ser receptor de los efectos que todos estos procesos generan y al ser objeto de la presión que se ejerce sobre él para que se «modernice» y se vuelva más productivo y competitivo. No hay que olvidar que el desarrollo del capitalismo en el medio rural también genera procesos de concentración y centralización del capital.

En tal sentido, si bien no se ha dado la venta masiva de tierras ejidales, sí se están dando otros procesos que de igual forma actúan sobre ellas. El rentismo de tierras ejidales sigue estando presente, pero habría que verlo, también, como una estrategia empresarial en términos de que se aumenta o disminuye la superficie a tomar en renta según se mueva el mercado de los productos en cuestión y las características agroecológicas que tengan las tierras.

Creo que lo que continúa distinguiendo y caracterizando a este grupo de productores es su «racionalidad», que no busca maximizar una ganancia sino un patrimonio familiar; con base en este principio, se da su participación política con el fin de salvaguardar ese patrimonio. Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación que se da entre estos procesos de cambio, sus formas de organización social, su sentido de pertenencia y las formas de interacción social que desarrollan en sus ámbitos espacial y social con las instancias gubernamentales, sujetos sociales o agentes económicos con los que se relacionan para comprender las nuevas situaciones que enfrenta la condición campesina.

⁶³ Cfr. Robert Castel (2000)

BIBLIOGRAFÍA

- APPENDINI, K., *De la milpa a los tortibonos. Políticas de reestructuración económica*, Colmex/UNRISD, 1992
- _____, «Los productores campesinos», en Calva, *op. cit.*, 1993
- BARKIN, D., «Respuesta social hacia la modernización», en Rivera, *op. cit.*, 1993
- BARTRA, A., «Los nuevos campesinos», en Prud'homme, *op. cit.*, 1995
- CALVA, JOSÉ L. (coord.), *Alternativas para el campo mexicano*, t. 1, Fontamara/PUAL-UNAM/Fundación Friedrich Ebert, 1993
- _____, «El modelo de desarrollo agropecuario impulsado mediante la Ley Agraria y el TLC», en Calva, *op. cit.*, 1993a
- CARTON DE GRAMMONT, H., «Nuevos actores y formas de representación social en el campo», en J.F. Prud'homme (coord.), *El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano*, ILET-P y v, México, 1995
- _____, *Neocorporativismo o descorporativización, el dilema del Consejo Nacional Agropecuario*, UNAM, 1993 (Cuadernos, núm. 5)
- _____, «El fin de la ideología agrarista y la creación de un nuevo estado», en Rivera, *op. cit.*, 1993a
- CASTEL, R., «Desaffiliation et Affiliation. Un Scheme de Deconstruction-Reconstruction des Identities en Europe Occidentale», ponencia presentada en el Coloquio Franco-Mexicano Identidades, Globalización, Democracia, Colegio de San Luis, México, 6-9 nov, 2000
- CEBADA CONTRERAS, M. del C., «La industria curtidora y el ejido Plan de Ayala: vecindad concertada o conflictiva», ponencia presentada en el Tercer Encuentro de Estudios Regionales, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 26-28 abr, 1995
- _____, «El mercado del maíz en dos comunidades agrarias del sur de Tamaulipas», ponencia presentada en el Seminario sobre Crisis y Campesinado, Centro Tepoztlán/UNRISD, 1991
- _____, «El impacto del crédito rural en las nuevas formas de producción y organización campesinas en el sur de Tamaulipas», ponencia presentada en el Seminario Internacional Nuevos Procesos Rurales en México, IIS-UNAM/UAM-A/ENAH-CI, Taxco, Guerrero, 30 may-3 jun, 1994
- _____, «Nuevas experiencias de financiamiento rural en el centro de México», ponencia presentada en XIX International Congress, LASA, Washington, 1995
- _____, «Agricultura, mercados laborales y géneros: recomposición productiva y opciones de desarrollo local y regional», ponencia presentada en XXI International Congress, LASA, Miami, 2000
- _____, «Agricultura y trabajo en Guanajuato: recomposición productiva y desarrollo regional», VI Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER, DF, 2000a

- CHAMOIX, Marie-Noëlle, «Epílogo: un enfoque antropológico del crédito», en M. Chamoux, D. Dehouve, C. Gouy, M. Pepin Lehalleur, *Prestar y pedir prestado. Relaciones sociales y crédito en México del siglo xvi al xx*, CIESAS-CEMCA, México, 1993
- Codereg, *Programa Regional de Desarrollo, 1995-2000, de las seis regiones. Estado de Guanajuato*, Coordinación de Desarrollo Regional-Gobierno del Estado de Guanajuato, 1996
- _____, *Desarrollo integral de las cactáceas*, Gerencia de Promoción Regional, 1997
- CORDERO DÍAZ, B., «Las relaciones estado-campesinos vistas "desde abajo": la política cotidiana de los cañeros y el estado en un ingenio de Michoacán», *Regiones*, núm. 9, ene-jun, 1998
- CORRALES, T., «Heterogeneidad del estado y conflictos regionales. Desaparición de poderes en Hidalgo», *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 1, año XLIV, ene-mar, 1982
- CHAYANOV, Alexander V., *La organización de la unidad económica campesina*, Ed. Nueva Visión, 1974
- FAURE, C., «El campesino, el centro y la periferia», *Sociológica*, núm. 13, año V, may-ago, 1990
- INEGI, «Guanajuato. Resultados definitivos», *vii Censo Agrícola Ganadero*, INEGI, t. 1, 1994
- _____, *Anuario estadístico del estado de Guanajuato*, INFO-INEGI, 1999
- _____, *Cuaderno estadístico municipal (Huanímaro, Xichú, San Diego de la Unión, León, Irapuato, Apaseo el Grande)*, INEGI, 1997
- LINCK, T., *El campesino desposeído*, CEMCA-El Colegio de Michoacán, México, 1988
- MARAÑÓN, B., y C. Cebada, «Agricultura campesina y horticultura de exportación, ¿relación viable?», Congreso de Estudios Rurales, Querétaro, 1998
- MASSOLO, A., «Descentralización y reforma municipal: ¿fracaso anunciado y sorpresas inesperadas?», en *Procesos rurales y urbanos en el México actual*, UAM-1, 1991
- MOCTEZUMA, Patricia, y C. Cebada, «El ixtle, una materia prima que agoniza: el uso de los recursos naturales y estrategias de reproducción campesinas», Seminario Internacional sobre Agrodiversidad Campesina, Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias-Universidad Autónoma del Estado de México, 12-15 de may, 1999
- PADUA, Jorge, y A. Vanneph (comps.), *Poder local, poder regional*, CEMCA-Colmex, 1986
- PEÑA, Guillermo de la, «Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas», en Padua, *op. cit.*, 1986
- _____, *Herederos de promesas. Agricultura, política y ritual en los altos de Morelos*, CIESAS/La Casa Chata, México, 1980

- PEPIN LEHALLEUR, M., «Las unidades domésticas campesinas y sus estrategias de reproducción», en K. Appendini *et al.*, *El campesinado en México*, Colmex, México, 1985
- _____, «Un Mexique Rural Postagrariste pour l'An 2000», conf. presentada en la mesa redonda Mexique a L'Aube du Troisième Milénaire, París, dic, 1989
- _____, «¿Hacia una sociabilidad urbana en el campo mexicano? Reflexiones a partir de la desunión de producción y consumo», *Estudios Sociológicos*, núm. 29, vol. x, Colmex, may-ago, 1992
- _____, «Un Systeme Agraire Regional. Contradictions et Interdependance dans une Structure Geographique, Economique et Politique (région de Mante, Mexique)», Rapport Scientifique au Terme de la Première Anée d'Exécution, mimeo, CES-Colmex, 1985
- _____, «Operación del crédito y manejo del riesgo en el financiamiento institucional de la agricultura», en M.N. Chamoux *et al.*, *Prestar y pedir prestado. Relaciones sociales y crédito en México del siglo XVI al XX*, CIESAS-CEMCA, 1993
- _____, «Entre ruralidad y urbanidad: la fuerza del lugar», en *La nueva relación campo-ciudad y la pobreza rural*, UNAM/Plaza y Valdés, 1996
- _____, «Chercher le Clef des Champs Genese d'Un Espace Rural dan le Nordest du Mexique», mimeo, 1987
- _____, *et al.*, «Mante; Tamaulipas: una región en movimiento», en *Sistemas de producción y desarrollo agrícola*, Coloquio Mesoamericano, Texcoco, 22-26 jun, 1992
- _____, y G. Sauther, «El Mante (Tams., Mexique): un Systeme Agraire Regional?», conf. presentada en el Coloquio Dinámica de los Sistemas Agrarios, París, Francia, 16-17 oct, 1987, publicada en *Les Cahiers de la Recherche Développement*, núm. 20, 1988
- PRUD'HOMME, Jean Francois *et al.*, *El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano*, ILET/Plaza y Valdés, 1995
- RIVERA HERREJÓN, G., *Implicaciones de las reformas al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria*, UAEM, 1993
- RUBIO, B., «El 27 constitucional y el nuevo modelo de desarrollo económico», en Rivera, *op. cit.*, 1993
- SARMIENTO SILVA, S., «Movimiento campesino y nueva Ley Agraria», en Rivera, *op. cit.*, 1993
- VRIES, Peter de, y S. Zendejas, *Rural Transforms Seen from Below: Regional and Local Perspectives from Western México*, Center for us-Mexican Studies-University of California, San Diego, 1995

GLOBALIZACIÓN, CRISIS AZUCARERA Y LUCHAS CAÑERAS EN LOS AÑOS NOVENTA

FRANCIS MESTRIES BENQUET⁶⁴

INTRODUCCIÓN

La crisis actual de la industria azucarera y de los productores cañeros, que está amenazando de quiebra a la tercera parte de los ingenios del país, es una de las más severas de la historia, comparable sólo con la que sacudió al sector, entre 1928 y 1933, en la época de la gran depresión, cuando desaparecieron varios ingenios y los trabajadores del campo y la fábrica recibían vales en lugar de salarios por falta de liquidez de los ingenios; pero en aquella época, como en la crisis de los años setenta, la salida de la dificultad pasó por una mayor intervención del estado en la regulación de la comercialización en los años treinta (creación de Azúcar, S.A. y UNPASA)⁶⁵ y en la producción en los años setenta (creación de la CNIA⁶⁶ y estatización del sector). Hoy, la crónica crisis del sector azucarero ya no puede ser resuelta con una nueva intervención del estado a través de sus funciones anticrisis ni con un mayor proteccionismo, ya que los vientos de la globalización, en particular los del norte, vía el TLC, están derribando, poco a poco, las barreras aduanales que protegían la producción del dulce, o desplazándolo, muy rápido, con sustitutos mucho más potentes y baratos por medio de la revolución biotecnológica, como la fructuosa de maíz.

⁶⁴ Docente investigador, Departamento de Sociología-Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

⁶⁵ Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A.

⁶⁶ Comisión Nacional de la Industria Azucarera

En este trabajo, pretendemos explicar el deterioro de las condiciones de vida de los cañeros y la degradación de sus relaciones contractuales con los ingenios a partir de los procesos de privatización y desregulación de la industria azucarera, que trastocaron el marco de protección laboral y comercial del que gozaba el sector, y que convirtieron un éxito, la recuperación de la autosuficiencia del país en este rubro, en crisis de sobreproducción. A continuación, inferimos de las luchas cañeras contemporáneas, en reacción a su pauperización, una tendencia al cuestionamiento de sus organizaciones corporativas anquilosadas y a la emergencia de nuevas agrupaciones más críticas y democráticas. Tomaremos casos de Veracruz, principal productor de azúcar del país, con 20 ingenios (de un total de 60) y la tercera parte de la producción nacional, y cuna de los principales movimientos de productores de caña.

PRIVATIZACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN LABORAL

A partir de 1988 y hasta 1991, el estado, acosado por su crisis financiera, procede a vender sus ingenios (la mayoría de los activos del sector) en la presidencia de Miguel de la Madrid; el sector azucarero se habían convertido en uno de los sectores más subsidiados y con déficit fiscal elevado. Después de haber socializado las pérdidas del sector con su estatización y rehabilitación financiera y técnica en los años setenta, se privatizaron las ganancias de la recuperación azucarera de mediados de los ochenta: los ingenios se vendieron a precios de ganga (aproximadamente el valor de la producción de una zafra), y en condiciones inmejorables (pago al contado del 20% de enganche, plazo de 10 años más un año de gracia para pagar con bonos azucareros y anualidades indexadas sobre el precio del azúcar —si éste bajaba, el gobierno cobraba menos— y pagaderas en producto si fuera nece-

sario)⁶⁷. Así, el ingenio San Cristóbal, Veracruz, el mayor del país, fue vendido en \$50 millones de pesos, en 1990 (*Época*, 18/11/91).

Sin embargo, la deuda total de los compradores de ingenios estatales alcanzaba, en 1991, casi \$1,400 millones de pesos (*Época*, 24/06/91) y, en 1992, los nuevos dueños estaban lejos de saldarla (cuando mucho, algunos habían cubierto el 50%); al contrario, estaban presionando al gobierno para su condonación; en 1993, el gobierno, vía Financiera Nacional Azucarera (Fina), les dio créditos adicionales para cubrir sus adeudos, previo empeño de su producción anual. No sólo no saldaron su deuda, sino que se endeudaron más con créditos para reparación y modernización de los ingenios, que se sospecha fueron desviados, en partes, a otros negocios (hotelería, etcétera). Sin embargo, el gobierno refinanció y restructuró esta deuda año con año, convirtiendo deudas de adquisición en créditos de operación y otorgando a los empresarios créditos-subsidios por \$4,500 millones de pesos en las tres zafras de 1998-2000.

Así, el grupo Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), principal grupo azucarero del país y dueño del ingenio San Cristóbal —el mayor del país y uno de los ingenios más productivos—, debía 8 millones de pesos a Fina, en 2000 (*Reforma*, 27/02/00), a pesar de que el gobierno le restructuró, en 1999, su deuda a 10 años en cómodas condiciones de pago. Además, Caze logró restructurar 2 millones de pesos que debía a la banca privada, a cambio de dejar en prenda parte de su producción y de desprenderse de algunas de las acciones de sus otras empresas. Su deuda total rebasaba, dos veces, el valor de sus ingenios. El ingenio Cuatotolapan, que costó \$28 millo-

⁶⁷ Además, sobre la base del diferencial de precios del 50% existente entre el azúcar de consumo doméstico y subsidiado y el precio para consumo industrial, el gobierno permitió vender a los compradores azúcar a sus embotelladoras a precio del azúcar de consumo directo, por lo que pensaban finiquitar en dos años sus saldos (Espinosa, 1999). Sin embargo, el gobierno suprimió el diferencial de precios al poco tiempo, frustrando las expectativas de los nuevos consorcios azucarero-refresqueros.

nes de pesos, debía casi 10 veces más al gobierno (262 millones). El Grupo Azucarero Mexicano (GAM) se declaró en suspensión de pagos, en el 2000, para evitar el cierre de sus cinco ingenios, y pidió créditos a largo plazo con pignoración de su producción.

Parece repetirse la historia de los años sesenta cuando Finasa, hoy Fina, el banco azucarero del estado, financiaba las inversiones de los ingenios y, por su intermedio, la producción cañera; dineros que a menudo eran desviados a otros negocios y *jineteados* por los dueños de los ingenios, provocando paulatina obsolescencia tecnológica, caída de la rentabilidad y endeudamiento con el estado, dando pie a su intervención. Sin embargo, esta vez, la insolvencia de los azucareros parece también deberse a la apertura comercial decidida por el gobierno tan pronto como le compraron los ingenios, lo que provocó la importación de 2.5 millones de ton de azúcar, entre 1990 y 1992, a precios inferiores a los del dulce nacional. Esta situación fue provocada por la desregulación, que causó caos en el mercado, y por operaciones especulativas de algunos azucareros que buscaban hacer su agosto con la intermediación de azúcar importada, y eliminar así a sus competidores, pero desencadenó pérdidas financieras y carteras vencidas generalizadas en la industria. La crisis económica de 1994-95 empeoró las cosas, al provocar la conversión de las deudas de los ingenios en UDI (unidades de inversión) indexadas sobre la inflación, lo que incrementó, desmesuradamente, sus carteras vencidas (Espinosa, 1999).

Otro factor que influyó fue la peculiar forma de privatización: no se privilegió en la venta de los ingenios a los antiguos dueños, los *sacarócratas*, como A. Sáenz, García Mora y Machado, descalificados por su falta de recursos financieros, sino a los consorcios refresqueros, como el grupo Caze —embotelladora bajo licencia de la Pepsi-Cola—, al grupo AGA, refresquera nacional, a subsidiarias de la Coca-Cola, como el GAM, a grupos de políticos, como los exgobernadores de Veracruz: Acosta Lagunes (grupo Zafra) y Dante

Delgado, y a grandes empresarios, como Santos de Hoyos, exdueño de Gamesa, que compró cinco ingenios⁶⁸. Estos consorcios y otros como Zucarmex, Sucrum y Piasa se quedaron con la parte del *león*, dejando los peores ingenios a las organizaciones de productores (UNPCA/CNC y UNC/CNPR), a quienes se les vendieron sólo seis ingenios, los cuales pronto fueron traspasados a la iniciativa privada por insolvencia financiera o por absorción de los socios financieros.

La emergencia de este nuevo grupo social de grandes azucareros significó un cambio de hegemonía en el sector (Argüello y De la Cruz, 1998), pero se tradujo en falta de experiencia administrativa y técnica en el manejo de los ingenios, lo que explica, en parte, la crisis ya mencionada. Al igual que en la privatización de la banca, se prefirió escoger a miembros de la elite financiera, ligados a consorcios industriales y asociados al capital extranjero, y a políticos-empresarios en lugar de reinstalar a los viejos caciques azucareros del modelo de sustitución de importaciones. Sin embargo, el estado sigue protegiendo a los industriales, cobijando sus fracasos y fraudes, pero su paternalismo se volvió más selectivo: ya no ampara a trabajadores y cañeros como antes.

Paralelamente a la privatización de la planta productiva, se desincorporó a la empresa estatal Comercializadora Azúcar, dejando a los ingenios la responsabilidad de la comercialización del azúcar que se vende a comerciantes mayoristas.

Por otro lado, se implementó desde 1990 un plan de reestructuración laboral de la industria azucarera entre gobierno e industriales, que buscó *adelgazar* la planta obrera de los ingenios, que padecía de un fuerte sobrempleo, liquidando a casi 1/3 de sus asalariados (20 mil trabajadores) en los años noventa, eliminar prestaciones sociales y *flexibilizar* la mano de obra fabril, cancelando el contrato-ley que

⁶⁸ La cía. Nestlé compró acciones minoritarias en algunos ingenios, según Alfonso Romero Sánchez, alto funcionario de Finasa (entrevista, 8/09/93).

regía, imponiendo un nuevo contrato colectivo que suprimió 50 cláusulas del contrato-ley (prestaciones como vivienda, educación, etc.), implantando mayor polivalencia en los puestos y cancelando adeudos millonarios en prestaciones (seguro médico, jubilaciones, fondo de ahorro) de los ingenios hacia el sindicato obrero.

Además, se deterioró la seguridad en las fábricas, como lo comprueba el aumento de accidentes graves en áreas de calderas y destilería. En respuesta, el sindicato nacional de obreros (CTM) estalló varias huelgas nacionales (la última duró 40 días y retrasó la zafra 2000-2001) en demanda del pago de adeudos de prestaciones y aumento salarial, sin lograr que cedieran los ingenios sobre sus adeudos al fondo de jubilaciones.

Se reestructuró, también, al sector cañero con un nuevo decreto cañero, en 1991, y una Ley Cañera, en 1992, tendientes a eliminar a los minifundistas y a los productores ineficientes.

MODERNIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y EXCEDENTES

Ante la grave crisis azucarera, el gobierno restableció aranceles variables a la importación, en 1993, y suprimió subsidios al precio del azúcar en el mercado doméstico. Esto permitió a la industria emprender un proceso de modernización tecnológica en el campo y la fábrica con nuevas máquinas automatizadas —que incrementaron los rendimientos fabriles—, nuevas variedades de caña con mayor contenido de sacarosa y control de calidad de las cañas —que aumentaron la extracción de sacarosa de 9.1%, en 1992, a 10.77%, en 1997— y con una mejor programación de la zafra —que redujo los tiempos perdidos en zafra en una tercera parte—.

Como resultado de lo anterior, la productividad del campo y de la fábrica dio un salto de 69 ton de azúcar/há, en 1990, a 83 ton, en 1995 (Argüello y De la Cruz, 1998: 54); en consecuencia, la produc-

ción se recuperó al grado de que el país recobró la autosuficiencia y dispuso de excedentes para exportar, en 1995, pero la demanda interna se deprimió, debido a la pérdida de poder adquisitivo causada por la crisis; además, el precio del azúcar se rezagó, otra vez, frente a la inflación desatada, y las exportaciones eran sumamente restringidas y dirigidas al mercado mundial a precios muy bajos. Si bien el gobierno liberó el precio del azúcar, en 1995-96, dejándolo al libre juego de la oferta y la demanda, provocando un alza del 8% al consumidor, el problema de los excedentes se fue agravando año con año. Así, la producción alcanzó 4,980,000 ton, en 2000-2001, pero el consumo no rebasará 4,480,000 ton este año, generando un excedente de 500,000 toneladas. Incluso en la zafra 1997-98, México alcanzó una producción récord de 5,174,000 ton, izándose al 7º lugar mundial. Las exportaciones en el mercado mundial libre no son redituables, pues el precio, en 2000 (5.5 a 7 centavos de dólar/libra), era muy inferior al del mercado interno, y ocasionaba pérdidas de 180 dl/ton a los industriales (*Reforma*, 5/10/00). Por eso, prefieren acumular inventarios o inundar el mercado interno de azúcar, ocasionando caída de los precios en lugar de exportar en el mercado libre (*El Financiero*, 8/02/01).

México exportaba, en 1995, sólo 2,500 ton de azúcar al mercado de cuotas con precio preferencial de Estados Unidos. El mercado interno del azúcar ahí goza de alta protección y precios elevados, lo que permitió sustituir, en parte, las importaciones, las cuales son distribuidas entre países proveedores por el gobierno estadounidense, según criterios políticos (Chollett, 2000: 9). En las negociaciones del TLC, en vigor desde el año anterior, este país impuso a los negociadores mexicanos, que dieron muestra de su incompetencia y no consultaron a los interesados, una desgravación muy prudente de sus barreras arancelarias: el acceso a sólo 25 mil ton de azúcar mexicana (sobre importaciones totales de más de 2 millones de ton otorgadas a otros países) los primeros seis años; el 7º año (2001), se libera la importa-

ción de 150 mil ton; y en los años subsiguientes (hasta el año 15), se abre, de forma total, el mercado, y se incrementan las importaciones 10% cada año. Si México fuera excedentario dos años consecutivos, tendría acceso libre a todos sus excesos. Sin embargo, ante la presión de los poderosos azucareros estadounidenses, tradicionalmente ultraprotegidos por su gobierno, Estados Unidos impuso cláusulas derogatorias al gobierno mexicano, quien en aras de obtener la rápida aprobación del TLC por el Congreso Estadunidense firmó estas Cartas Paralelas, que liberalizan el comercio de alta fructuosa entre los dos países, y restablecen topes de exportación de México a Estados Unidos a partir del 7º año, cambiando los criterios para calcular el excedente de México y excluyendo el efecto de las importaciones de fructuosa del cálculo del excedente de azúcar, lo que hace más difícil para México cumplir la condición de excedentario para poder exportar sin límites; en compensación, se aumentó la cuota autorizada a México a 250 mil ton a partir del 7º año (Romero, 01/11/97). El senado mexicano que ratificó el TLC no tuvo conocimiento de estas Cartas por lo que no tienen validez para México, mientras que el gobierno estadounidense las considera válidas. Esta diferencia de interpretación es el principal punto del conflicto actual. A partir de 2001, México debería poder exportar cantidades crecientes de excedentes, ya que dispone de 600 mil ton de éstos.

El otro aspecto conflictivo es el rápido y masivo desplazamiento del consumo de azúcar en México por el jarabe de alta fructuosa de maíz, importado por Estados Unidos y producido en México por subsidiarias de las grandes transnacionales de granos estadounidenses (Cargill, CPC, Archer-Daniels, Tate and Lyle). Este producto es 30% más barato que el azúcar y tiene la ventaja de presentarse en forma líquida, por lo que conviene más utilizarlo para la elaboración de refrescos. Se produce con maíz subsidiado de Estados Unidos sobre la base de procesos de fermentación biotecnológica. Su industria ha sido fuertemente apoyada con investigación tecnológica del gobierno

del país del norte (Suárez, 01/10/97), por lo que su producción aumentó muy rápido, al grado de sustituir en 98% el uso del azúcar en la industria refresquera estadounidense y de sufrir hoy una crisis de sobreproducción y una caída de precios, razón por la cual interesaba mucho exportar los excedentes a México a través del TLC. Y así fue: México rebajó a 15% los aranceles de las importaciones de fructuosa, cantidad que se irá reduciendo, de manera paulatina, hasta desaparecer, en 2004 (Haley-Usda, 1999), evidenciando la debilidad de los negociadores mexicanos en comparación con la férrea defensa de los intereses azucareros estadounidenses por parte su gobierno.

Ahora bien, la industria embotelladora consume en México más del 30% del azúcar nacional y tiene altas tasas de crecimiento. En tres años (95-98), las importaciones de alta fructuosa se dispararon de 52 mil ton a 346 mil (*El Financiero*, 29/11/00), lo que refleja un alto dinamismo, a las que hay que agregar 300 mil ton producidas en México a partir de maíz importado sin aranceles, restando mercado para 600 mil ton de azúcar, lo que provocó y sigue provocando sobre oferta de azúcar, altos inventarios en los ingenios y bajos precios. Se estima que si la fructuosa sustituyera, totalmente, al azúcar en la producción refresquera (1,500,000 ton)⁶⁹, se tendrían que cerrar más de 20 ingenios, voltear 200 mil há de caña y suprimir 150 mil fuentes de empleo directo, perdiendo activos con un valor de 6 mil millones de dólares. En cambio, el cierre de las dos plantas de alta fructuosa en México eliminaría 200 empleos (Romero, 01/10/97). Por otro lado, los excedentes de azúcar generados así equivaldrían casi a la totalidad de las importaciones de cuota de Estados Unidos (*Reforma*, 17/11/99). Sin embargo, no hay que olvidar que las refresqueras mexicanas son, también, propietarias de ingenios, lo que reduce sus costos de materia prima, y que la sustitución total de azúcar por

⁶⁹ La tendencia del consumo mundial cada vez privilegia más los endulzantes de bajo nivel de calorías, como el aspartame, la isoglucosa, la sacarina y la fructuosa, impulsados por las grandes transnacionales (*El Financiero*, 23/12/94).

fructuosa reduciría sus opciones de compra, dejándolas indefensas ante prácticas monopólicas de la industria transnacional de la fructuosa (*El Financiero*, 03/09/1997).

Por tanto, bajo la amenaza de la principal organización gremial cañera de impulsar una campaña entre industriales, productores de caña y obreros contra las refresqueras (Chollett, 2000: 13), éstas aceptaron, en 1997, un acuerdo de limitar sus compras de jarabe edulcorante a 350 mil ton/año a cambio de un descuento del 20%, otorgado por los ingenios en sus compras de azúcar para proteger el mercado nacional. A su vez, el gobierno mexicano reaccionó e impuso aranceles más altos a las importaciones de fructuosa, arguyendo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que éstas fueron introducidas a precios de *dumping*; entonces, las transnacionales de Estados Unidos respondieron contrademandando a México por *dumping* acordado entre azucareros y refresqueras. Las cuotas compensatorias a las importaciones de fructuosa siguen vigentes, pero sólo han logrado frenar su crecimiento (García Chávez, 2000).

A su vez, bajo la presión del sector azucarero, el gobierno mexicano buscó renegociar el punto del azúcar en el TLC para anular las Cartas Paralelas; ha llevado el caso de las exportaciones de azúcar y de la entrada de fructuosa a las instancias de resolución de controversias de la OMC, pero ésta rechazó la demanda de México (*ibid.*), demostrando que las instituciones de la globalización son parciales y favorecen a los países poderosos. Estados Unidos no quiere ceder y su gobierno acaba de imponer a México una cuota de sólo 116 mil ton a las exportaciones mexicanas, en 2001, como medida de presión para que México acate las Cartas Paralelas, en lugar de las 250 mil ton a que tiene derecho (*Reforma*, 5/10/00)⁷⁰.

⁷⁰ El nuevo presidente de México, Vicente Fox, ha pedido la apertura del mercado a su homólogo de Estados Unidos, G. Bush, en varios encuentros, en 2001. Ambos han recibido presiones en sentido contrario de las organizaciones cañeras y de los grupos azucareros de sus respectivos países. Pero hasta hoy, Bush no ha accedido a las peticiones mexicanas.

Lo más justo sería lograr un acuerdo de real complementariedad económica. «Siendo Estados Unidos el mayor productor de maíz en el nivel mundial —materia prima de la alta fructuosa— y México un productor con capacidad real y potencial de ser un exportador importante de azúcar de caña, se podría esperar que el TLC propiciara el intercambio en ambas direcciones, pero la realidad es que sólo favorece el flujo de alta fructuosa a México o, en su salvedad, de maíz estadounidense para la fabricación en nuestro país de este edulcorante» (Romero, 01/10/97). Si no se resuelve el desacuerdo, México debe hacer uso de las salvaguardas en contra de la fructuosa, que contempla el TLC, en caso de grave daño a una industria, e imponer cuotas a la fructuosa estadounidense.

En efecto, las principales causas de la crisis, según los industriales, se derivan de la saturación y desorganización del mercado nacional por la importación masiva de fructuosa, de la caída del precio del azúcar, de las dificultades para colocar los excedentes en el mercado internacional, del sobreendeudamiento y de las cargas financieras excesivas de los ingenios y de las exigencias desmedidas de los obreros, cuya plantilla es demasiado numerosa; sin embargo, los industriales no deben obviar la necesaria eficientización de sus ingenios, cuya maquinaria es obsoleta, en muchos casos, para bajar costos y obtener competitividad. Empero, «los industriales están buscando un Fobazúcar para que el gobierno absorba con cargo a la nación los 22 mil millones de deuda que tienen con Fina, apostándole a que el gobierno no puede permitir una inestabilidad social como la que traería el cierre de tantos ingenios» (Rojas, *La Jornada*, 18/09/2000). En suma, de este breve recorrido de los antecedentes de la crisis destaca la falta de visión estratégica del estado mexicano del futuro de su agroindustria más antigua con el predominio del enfoque librecambista de la Secofi⁷¹ y de medidas emergentes de rescate y protección a la

⁷¹ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

industria, así como con la falta de espíritu *entrepreneur*, en el sentido de Schumpeter, de los industriales azucareros, timoratos y proclives a las operaciones especulativas.

LA CRISIS DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA EN VERACRUZ

La privatización de la industria azucarera provocó un grave deterioro de la situación económica de los cañeros, que han logrado revertir, de forma parcial, con la fuerza de sus organizaciones y sus luchas. En efecto, en 1991, el gobierno promulga un nuevo Decreto Cañero que establece lo siguiente:

- Creación de un Comité Nacional de la Agroindustria Azucarera con paridad de representantes del gobierno, de la industria azucarera y de los productores de caña, encargado de resolver las controversias entre los sectores y hacer cumplir el nuevo Decreto.
- Apertura a las posibilidades de asociaciones, coinversiones y contratos entre ingenios y cañeros, compartiendo los beneficios, para tecnificar la producción agrícola acorde con las reformas del artículo 27 constitucional; este punto autoriza la renta de parcelas cañeras por parte de los ingenios (práctica común hoy).
- El precio de la caña se establece mediante la fórmula siguiente: 57% del precio del kg de azúcar por el porcentaje de sacarosa en caña (azúcar recuperable), calculado en puntos de sacarosa para cada cañero o por frente de corte, y se paga en dos partes: preliquidaciones (80% del total) durante la zafra a la entrega de la caña y la liquidación final del 20% en el mes que sigue al fin de la zafra.
- Los cañeros tendrán un químico para controlar las mediciones de sacarosa realizadas por el ingenio en las cañas.

- Los ingenios deberán otorgar créditos a sus abastecedores, acorde con los recursos que consigan del gobierno o de la banca (*Diario Oficial de la Federación*, 31/05/1991).

Este Decreto obliga al productor a ser más eficiente, ya que su producción será pagada en función de su rendimiento individual (Argüello y De la Cruz, 1998), causando malestar entre los campesinos que temían verse perjudicados por el pago individual. En efecto, la privatización de los ingenios y su modernización diferencial, por parte de sus nuevos dueños, así como este nuevo Decreto Cañero, que privilegia el rendimiento individual, provocaron una creciente diferenciación social entre los cañeros en una misma zona y entre distintas zonas, y tienden a eliminar a los productores ineficientes. El mismo efecto buscan reformas posteriores a la Ley del IMSS, que ya no admite como nuevos derechohabientes al seguro social a cañeros de menos de 3.5 há, y el recorte por los ingenios del crédito a los de menos de 2.5 hectáreas. Es de notar que los beneficios sociales del seguro médico son el principal incentivo para que los campesinos siembren caña. Pero el aumento de rendimientos en el campo y la fábrica «no se tradujo, de manera automática, en mejoramiento de las condiciones de trabajo de obreros y campesinos, ya que el proceso de modernización trajo el desplazamiento de obreros eventuales, y exigió el control selectivo del crédito de avío sobre los productores de caña. Sin embargo, de manera indirecta se benefician obreros y campesinos, dado que, en los ingenios de alta productividad, ello influye en el tabulador de los sueldos de los obreros y en los sobreprecios de la caña que se otorgan a los productores» (Argüello y De la Cruz, 1998: 84-85).

Por otra parte, los cañeros del país perdieron con la privatización prestaciones del estado, como la construcción de viviendas a productores y cortadores por parte del Fioscer⁷², el cual desapareció.

⁷² Fideicomiso de Obras Sociales para Cañeros de Escasos Recursos

Asimismo, se quejan de la mala calidad de los servicios médicos del IMSS (falta de medicinas, mal servicio, etc.) y están en riesgo, porque muchos ingenios ya no pagan al IMSS sus cuotas. Los cañeros se sienten abandonados por el estado y extrañan el paternalismo de su antiguo patrón: «No es fácil administrar un ingenio. Es como una familia; si los dueños no son estrictos, todos los hijos se portan mal. Con los dueños privados, nosotros vamos a querer sacar algo, pero no vamos a obtener nada. Esto es la verdad. Sería mejor que el gobierno federal retomara (los ingenios). Estos dueños están en contra de los cañeros. Son propietarios y no tienen compromisos con el cañero. El gobierno tenía otro modo de tratarnos». (Chollett, 1997, citando a un cañero sobre la privatización).

Por otro lado, sus créditos dependen del capital de trabajo de los ingenios que abastecen, que es, por lo general, precario; debido a lo anterior, se observa una constricción fuerte del crédito de avío a los cañeros veracruzanos: los ingenios entregan cada vez menos financiamiento a sus productores o de plano lo suspendieron, como lo comprobamos en el ingenio La Concepción, porque, según ellos, no han podido vender toda su producción por la competencia de la fructuosa y porque tuvieron que pedirle prestado al gobierno o a la banca para ese fin; en tales circunstancias, cada vez más cañeros trabajan por su cuenta con recursos propios (los menos), otros consiguen habilitarse, de manera parcial, con el Fira y los más descuidan sus cañaverales por falta de recursos. Un número creciente de productores ya no contrata mano de obra para las labores de cultivo, sino que trabaja, de forma directa, en sus parcelas, usando el poco crédito que alcanza para pagarse a sí mismo. Formar uniones de crédito por parte de los cañeros organizados, por otro lado, no es fácil, debido a la larga tradición de paternalismo del estado y los ingenios hacia ellos y «porque las instituciones de crédito les ponen como condición que las finanzas de sus ingenios estén saneadas» (Rojas, *La Jornada*, 18/09/00)⁷³.

⁷³ Algunos grupos de cañeros han creado fideicomisos en los bancos para que sirvan de cobertura a los créditos contratados, pero son muy insuficientes. Por ello, las organizacio-

Los ingenios, a su vez, prefieren a menudo comprar caña a los *libres* con quienes no tienen contrato. Los insumos entregados por los ingenios llegan tarde y en forma insuficiente. Esta carencia de recursos está propiciando una caída de rendimientos en el campo por falta de insumos, e impide mecanizar la zafra para enfrentar un problema cada vez más agudo: la escasez de cortadores. Los ingenios que siguen recibiendo crédito se quejan de caer, con frecuencia, en cartera vencida (en 1990, 40% de los cañeros ya estaba endeudado, según la UNPCA)⁷⁴, por las altas tasas de interés y las bajas liquidaciones: no tienen alcances y quedan a deber. En síntesis, la severa contracción del crédito ha socavado uno de los principales mecanismos de control económico-político de los cañeros y los ha dejado en la total indefensión.

Más grave aún, las liquidaciones dependen, de manera creciente, de la capacidad de pago y de los rendimientos físicos y financieros de los ingenios que abastecen, ya que el Decreto Cañero así lo estipula. Pero la mayoría de éstos no tiene liquidez por privilegiar el pago a sus acreedores financieros sobre los compromisos con los cañeros. Así, en 1992, representantes cañeros de los ingenios San Francisco y San Pedro, del sur de Veracruz, tuvieron que pedir a Banrural un préstamo de 5 millones para sus ingenios con garantía de la producción embodegada para el pago de la liquidación de los cañeros. En el mismo tenor, el ingenio San Cristóbal, en graves dificultades financieras, tuvo que pedir, en 1998, un aval a Fina para obtener un crédito foráneo emergente de 25 millones de dólares con el fin de pagar las liquidaciones de sus cañeros, las cuales pagó con cinco meses de retraso y bajo la presión de una huelga de los campesinos. Esto, a pesar de que el ingenio y las organizaciones cañeras habían firmado, en 1992, un convenio para preservar la fuente de empleo, que impli-

nes de productores han planteado que los fondos destinados al Programa de Modernización del Campo Cañero, lanzado por la Secretaría de Agricultura, en 2001, sirvan para apuntalar estos fideicomisos, como capital-semilla (*El Financiero*, 14/02/01).

⁷⁴ Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar

có el compromiso de mayores y más puntuales liquidaciones por parte del ingenio a cambio de mejorar los rendimientos por parte de los cañeros, dichos rendimientos subieron de 64.6 ton/há a 70 ton, en 1998.

En la actualidad, muchos ingenios veracruzanos sólo alcanzan a cubrir sus compromisos con sus abastecedores, empeñando su producción futura, y ya no son sujetos de crédito de Fina. Año con año, retrasan el pago a los cañeros o les quedan a deber parte de sus liquidaciones. El ingenio Independencia debía a sus cañeros \$18/ton de la zafra anterior, en octubre de 2000. El dirigente de los campesinos cañeros del San Cristóbal, después de negociar con el dueño de Caze en México la entrega de 45 millones faltantes de sus liquidaciones, declaró: «La lucha es de cada año y la verdad ya nos está molestando; si los cañeros cumplen con cortar en las fechas definidas en zafra, y se proponen que cada año la cosecha sea mejor, por qué tenemos que estar sufriendo dos o tres meses para recibir nuestro pago de un producto que se entregó y se vendió en forma de azúcar» (*Sur*, 4/09/2 000). Las organizaciones cañeras ya están exigiendo el pago de intereses moratorios a los ingenios atrasados en sus liquidaciones. En intento conciliatorio, el gobierno propuso, en algunos casos, aportar parte de las sumas adeudas por los ingenios a los cañeros (1.38% del precio), pero no ha cumplido su promesa (Garrido, 2001).

Varios ingenios cerraron, de forma temporal, como el de San Cristóbal; otros estuvieron a punto de cerrar, como el de Cuatotolapan, Veracruz, o cerraron, de manera definitiva, como el de Oacalco, Morelos, y el de Rosales, Sinaloa. Hay 21 ingenios en el país en situación de quiebra técnica. Si bien algunos se declaran insolventes para no pagar sus liquidaciones a los cañeros o para forzar al gobierno a intervenir en su rescate, también hay casos de ingenios en quiebra virtual que no se han declarado en esa situación sólo por presiones del gobierno, preocupado por el clima sociopolítico de las regiones cañeras. Recientemente, el Banco Nacional de Comercio Exterior ofreció una línea de crédito a los ingenios que exportan por 450

millones de dólares, de los cuales 165 millones se canalizaron para pagar las deudas con los cañeros bajo garantía del 80% del producto; este préstamo emergente corresponde a 40% del financiamiento del cultivo (Seoane, presidente de la CNIAA⁷⁵, *El Universal*, 21/08/2000). Pero parece que el gobierno ya no está dispuesto a pagar más: Fina empezó a ser liquidada en 2001.

En estas circunstancias, los ingresos de los cañeros han caído, con severidad; en el ingenio La Concepción, «la caña ya no deja ingresos; sale uno a la mano con el ingenio, cuando no sale con deudas. El ingenio promovió la siembra de nuevas variedades de caña, pero la nueva variedad, que tiene menos fibra, da la mitad de rendimiento en ton por hectárea. Aunque el rendimiento de sacarosa es mejor, esto no compensa lo otro. Además, como el ingenio controla el laboratorio químico, transa a los cañeros sobre el punto de sacarosa. Por eso, muchos campesinos emigran» (informe de campo, Chiltoyac, Jalapa, 1999).

La relación entre los bajos rendimientos de los ingenios y las dificultades de pago y bajas liquidaciones a los cañeros se observa en este caso: el corte y alce de la caña en zafra son manuales, debido a lo pedregoso y empinado de los terrenos que no permiten la introducción de maquinaria; casi todos los indicadores de eficiencia han caído de 1995 a la fecha: volumen de caña molida, días de molienda por zafra, volumen de azúcar producida y rendimiento de caña por há (de 96.3 ton a 79.2 ton); y el rendimiento en fábrica, aunque alto, se mantiene estancado (CNIAA, 2000).

Los ingenios han obligado a los productores a firmar convenios de productividad, bajo amenaza de cierre; el dirigente de la UNC⁷⁶ de los cañeros del ingenio Cuatotolapan menciona que el dueño del ingenio «nos quiere agarrados del cogote con el programa de trabajo a cinco años y, a cambio, propone la introducción de mejores variedades

⁷⁵ Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera

⁷⁶ Unión Nacional de Cañeros

des de caña», pero se hace del rogar para pagar las liquidaciones (Rojas, *op. cit.*). Por otro lado, los ingenios interpretan a su manera el contrato cañero en cuanto a la forma de pago de la caña, pues quieren pagar sólo el azúcar recuperado (KABE) y no el recuperable (KARBE) o la sacarosa en caña: «Este año les entregamos 103 kg/ton de caña en sacarosa, y ellos recuperaron sólo 96 kg por la ineficiencia del ingenio y la mala operación», dice el dirigente de la UNPCA del mismo ingenio (*ibidem*).

El deterioro de los ingresos de los cañeros en los últimos años ha propiciado la multiplicación de estrategias de supervivencia añejas o novedosas: la venta de abonos suministrados por los ingenios o su desviación hacia cultivos de subsistencia para suplir, de forma parcial, la falta de crédito y la creciente diversificación de cultivos hacia los cítricos u otros frutales.

También, son cada vez más frecuentes los casos de renta de parcelas ejidales a horticultores acomodados (en Morelos y Sinaloa) y de venta de tierras por deudas a los mismos ingenios, como en Veracruz (Garrido, 2001), lo que constituye una forma de reconstitución del latifundio azucarero, y permite a los latifundistas lograr su integración vertical agroindustrial. En efecto, hay industriales que han ido presionando a los cañeros por la falta de avíos para rentarles o comprarles la tierra para sembrar caña, como en San Cristóbal, Tres Valles y El Higo, según Manuel León y Francisco Castro, dirigentes estatal y nacional de la UNPCA, respectivamente (Rojas, *ibid.*).

Sin duda, la estrategia de supervivencia más concurrida es la migración al norte y a la frontera para laborar en las maquiladoras o a Estados Unidos. Relativamente reciente (desde 1997, más o menos), la migración internacional desde las regiones cañeras de Veracruz ha tenido un crecimiento explosivo, y alcanza, en primer lugar, a los asalariados y cortadores de caña expulsados por los bajos jornales (70 pesos por día, en promedio, en Veracruz, en la zafra 2000), a los obreros azucareros despedidos o rebajados de permanentes a even-

tuales y a los campesinos cañeros o sus hijos; así, en la cuenca de Papaloapan, 1,500 jóvenes, hombres y mujeres del municipio de Chacaltianguis, salieron rumbo al sueño americano. La expulsión masiva de fuerza de trabajo jornalera de la cuenca ha llevado a las organizaciones privadas de productores de caña a plantearse, en breve, la mecanización total de la zafra (*La Jornada*, 10/06/2000), y ha provocado serios retrasos en ésta. En el área del ingenio La Concepción, se observa la misma tendencia con cientos de campesinos y obreros agrícolas, debido a la crisis de la caña y el café; se van a probar suerte del otro lado de la línea (información de campo, 2000).

Se trata de una migración temporal, ilegal, riesgosa y onerosa, por lo que es urgente que las autoridades reactiven la economía del estado para crear fuentes de empleo en el campo, y evitar la fuga de la fuerza de trabajo más productiva. También, es importante para Estados Unidos frenar esta migración ilegal, actuando sobre sus causas, lo que implica abrir sus fronteras al azúcar mexicana y limitar sus exportaciones de fructuosa a México.

«El reto para los ingenios al borde de la quiebra es mantener un nivel adecuado en el precios del azúcar en el mercado doméstico, lo que implica poder exportar los excedentes y que el consumo interno aumente, lo que se ve difícil por la expansión de la fructuosa y la lenta recuperación del poder adquisitivo de la población» (*Azúcar y Fructuosa*, jul, 1999).

LAS ORGANIZACIONES Y LAS LUCHAS CAÑERAS

El sector cañero ha sido, tradicionalmente, uno de los más organizados y fuertes del campesinado, aunque heterónimo en lo político por el carácter corporativo de sus organizaciones: la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y la Unión Nacional de Cañeros, afiliadas al PRI por medio de sus confederaciones matrices: la CNC y la

CNPP o CNPR⁷⁷. Esta fuerza gremial tiene que ver con la elevada «conciencia de gremio» de los cañeros, quienes están concentrados en regiones de densa población —en su mayoría ejidal—, dependen de un solo ingenio y comparten las mismas condiciones socioeconómicas y cultura del azúcar, y es «donde existe cierto grado de cooperación en el trabajo (sobre todo en la zafra). El hecho de que tuvieran el mismo «cliente-patrón» (el ingenio) permitió un alto grado de cohesión en torno a demandas comunes» (Mestries, 1990: 459).

La inconformidad organizada de los cañeros ha tomado, históricamente, dos caminos: las acciones colectivas tipo huelgas de «machetes caídos», que consisten en dejar de cortar y de entregar la caña a los ingenios y se acompañan, a veces, de bloqueos o tomas de la fuente de trabajo, y la creación de nuevas organizaciones o de nuevas facciones gremiales fuera o dentro de sus agrupaciones nacionales (Mestries, 1987: 131). Estas dos formas de acción se han manifestado desde 1990, periodo abarcado por este artículo.

Así, en 1990, aun cuando los dirigentes de sus dos principales organizaciones, la UNPCA y la UNC, eran líderes caciquiles, corruptos y disciplinados al PRI y al gobierno, estallan una huelga nacional de «machetes caídos», debido al descontento creciente de los cañeros por los bajos precios de la caña, rezagados frente a los altos índices de inflación; lo anterior ocasionaba que «estaban recibiendo liquidaciones en cero». Las dos organizaciones unidas sostuvieron una huelga de tres meses a principios de la zafra, y realizaron una marcha a México para exigir 100% de aumento en el precio de la caña, frente a la propuesta oficial de 20% de ajuste, la participación de sus agrupaciones en la fijación del precio del azúcar, la revisión del Decreto Cañero, la participación de los cañeros en las utilidades de la venta de subproductos de la caña, como las mieles, la condonación del 50% de su cartera vencida y un mejor suministro del crédito.

Estas demandas reflejan las repercusiones sociales de la primera crisis de la industria azucarera recién privatizada, causada por la se-

⁷⁷ Confederación Nacional de Productores Rurales

vada «con-
entrados en
ependen de
económicas
operación
tuvieran el
lo de cohe-
9).

do, históri-
as de «ma-
gar la caña
omas de la
de nuevas
nacionales
an mani-

principales
orruptos y
al de «ma-
ñeros por
índices de
iquidacio-
una huel-
a marcha
e la caña,
ión de sus
in del De-
ades de la
donación
édito.

a primera
por la se-

vera apertura comercial del agro, decidida por Salinas, las importa-
ciones masivas de azúcar (ver supra) y las altas tasas de inflación y
interés que padecía la economía nacional a consecuencia de la crisis
de 1987-88, que incubó el problema de las carteras vencidas. Si-
embargo, los logros del movimiento fueron escasos: 27% de aumento
al precio de la caña.

Por otro lado, entre 1990 y 1992, se gestan crecientes disidencias
en las dos organizaciones cañeras nacionales en contra de
cacicazgo de sus dirigentes en el contexto de la desestatización de
la industria azucarera: las fracciones más radicales pugnan por una
desincorporación de las organizaciones cañeras del PRI, paralela a
la privatización de los ingenios. Si el estado ya no es el «patrón»
paternalista y autoritario de los cañeros, ya no tiene caso mante-
ner una relación filial y clientelista con él. Todas estas disidencias
nacen y prosperan en Veracruz, donde existe una larga tradición
de combatividad cañera y de pugnas intragremiales (Mestries,
1987 y 1990).

En la Unión Nacional de Cañeros, en 1990, brotan protestas
en contra de su exdirigente vitalicio, J. González Gortázar, ahora
presidente de su confederación matriz, la CNPP, y «líder moral» de
la UNC, acusándolo de fraude durante su gestión al frente de la orga-
nización. Las bases de la Unión ratifican a Ángel Martínez, opositor
de la federación de Veracruz, en su puesto de dirigente de la UNC,
en contra de la intromisión de González Gortázar, quien lo ha-
bía destituido. Éste último, dirigente cañero desde los años se-
tenta, dueño de un ingenio y viejo politiquero del PRI, será
desconocido por sus propias bases en Jalisco, cuando surgió El
Barzón, en 1993 (Mestries, 1995).

En 1990, se forma la Asociación Nacional de Productores de
Caña con 5 mil cañeros de la CNC y de la CNPP de Veracruz y otros
estados. La naciente organización acusa a los dirigentes de la UNPC
y de la UNC de pasividad ante la privatización de la industria, y

pide una ley que regule, otra vez, la distribución del azúcar entre la industria refresquera y alcoholera, el consumo doméstico del dulce y la exportación, ante la política de los nuevos dueños de la industria de surtir, preferentemente, a sus embotelladoras. La Asociación tomó el ingenio de Tres Valles en Veracruz, y realizó gestiones para la reapertura del ingenio Oacalco, en Morelos. Esta organización parece ser un resurgimiento de la vieja ANPC, creada, en 1959, por F. Hernández y dirigida después durante muchos años por Soto Leyva; se mantuvo autónoma de la principal organización cañera, la UNPC, pero dentro de la CNC, y sólo se unificó con aquélla en los años setenta.

También, en 1990, surgió en el sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco la Unidad Cañera Democrática, vinculada al PRD, que pugna por la libertad de asociación y el fin del corporativismo en las organizaciones del sector cañero. Otras de sus demandas son el incremento al precio de la caña, el cálculo de la sacarosa en la báscula de entrada, el pago de subproductos de la caña y el fin de los descuentos injustificados de los ingenios. Sin embargo, la negativa del estado a aceptar como interlocutores a organizaciones no afiliadas al PRI, le impidió participar en los Comités de Producción Cañera, que organizan la zafra e intermedian las relaciones cañeros-industriales en cada ingenio y en las negociaciones cupulares nacionales sobre el precio de caña. La organización de la zafra entre los ingenios y las agrupaciones cañeras oficiales ha generado múltiples corruptelas, fraudes contra los cañeros y favoritismo en la distribución de las órdenes de corte, que han afectado, también, a los cortadores. Estas organizaciones burocratizadas son poco representativas e impiden la negociación directa ingenios-grupos de productores (Garrido, *op. cit.*).

El desafío más grave que enfrentaron los líderes de la UNPCA surgió, en 1992, con el Frente Democratizador Cañero, de A. Díaz Jácome, del sur de Veracruz, quien buscaba la presidencia de esta organización, e impedir la cuarta reelección de Isidro Pulido, su dirigente por nueve años. Esta disidencia interna de la CNC, presente en

Veracruz, Tabasco y Puebla, tomó las oficinas centrales de la UNPCA en México durante un mes para conseguir la realización de elecciones democráticas y secretas. Acusaba al líder máximo de un fraude millonario contra los cañeros por el desvío de las cuotas de un seguro de vida suscrito por la organización a su nombre y de los recursos obtenidos para la reparación de carreteras y caminos en zonas abastecedoras de caña, por perder una serie de prestaciones ganadas antes y por comprar el voto de los delegados y comisariados ejidales para reelegirse. Como gerente del ingenio de Mahuixtlán, Veracruz, vendido antes por Fina a la CNC, se le acusó de manejar la fábrica como si fuera de él, de robar parte de los alcances de los cañeros, de otorgar préstamos cuantiosos a sus favoritos y descontarlos a todos los cañeros del área y de solapar el despojo y la apropiación de tierras comunales del ejido por parte de sus incondicionales. El ingenio, ante la bancarrota inminente, fue vendido a la iniciativa privada poco después. Ante la cerrazón del líder nacional de la CNC, Hugo Andrés Araujo, que no quiso organizar elecciones democráticas, pese a proclamarse líder renovador de la CNC, el Frente amenazó con salirse de la organización. Finalmente, llegó a un acuerdo cosmético, y Díaz Jácome perdió las elecciones realizadas a la vieja usanza, frente a Pérez Bonilla, procedente de la misma facción que Pulido, pero con un programa democratizador y de lucha contra la corrupción.

En 1992, en el ingenio de Puruarán, Michoacán, recién cerrado por su dueño Santos de Hoyos, *Don Galletto*, debido a su contigüidad con otro ingenio, Pedernales, también propiedad de Santos, todo el pueblo tomó el ingenio, los obreros repararon la maquinaria, organizaron la zafra y lograron producir 3,300 ton de azúcar, pero fueron desalojados con violencia y los líderes encarcelados; a pesar de la destrucción premeditada de gran parte de las instalaciones del ingenio por parte de los guardias del dueño, los trabajadores, bajo la dirección del cura del lugar, retomaron la fábrica, crearon una cooperativa con ayuda de militantes del PRD, volvieron a reparar la maqui-

naría y realizaron una segunda zafra, aunque muy baja; finalmente, ante el boicot del dueño del ingenio en contra de la cooperativa, se logró un acuerdo con la cooperativa de refrescos Pascual, que se comprometió a financiar Puruarán a cambio de comprar toda su producción de azúcar y de no usar fructuosa. A pesar de las pugnas faccionales entre líderes, la cooperativa de Puruarán trabaja (Chollett, 2000). Esta lucha es una muestra de la desesperación y probable radicalización de los cañeros, obreros y habitantes de los pueblos cañeros ante el cierre de su única fuente de trabajo y pilar de toda la economía local.

En 1995, en los meses más álgidos de la crisis, los cañeros de la UNPC y de la UNC se movilaron, otra vez, como en 1990, para reclamar un aumento del 22.7% en el precio de la caña, pues sus costos de producción, en particular el de los fertilizantes, se habían disparado entre el 40 y el 80% desde la última revisión, en 1993. A pesar de pedir un aumento moderado para apoyar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, del presidente Zedillo, las autoridades no están dispuestas a otorgar más del 8% en aras de controlar la inflación (que fue de más de 50% ese año). Los cañeros aducían que «la rentabilidad es tan baja, que al final de cada zafra ni siquiera salimos parejos en las cuentas». Además, muchos ingenios se declaraban en quiebra para pagar menos liquidaciones o pagarlas con retraso. La huelga de «machetes caídos» duró 15 días y permitió a los cañeros obtener el 15% de aumento con promesa de discutir un alza adicional de 3.5 o 4% en poco tiempo, para alcanzar un incremento total de 19%. Finalmente, lograron un 40%, en 1995, verdadero triunfo político, dadas las condiciones del país.

Después, en 1997, la UNPCA amenazó, de nuevo, con recurrir a la huelga para obtener el 27% de aumento, alegando que se les había concedido a los industriales un incremento de 30% al precio del azúcar y 26% a los obreros, y emprendió una campaña para obligar a las refresqueras a frenar su consumo de fructuosa, logrando hacerlas

ente, firma el convenio mencionado. En 1999, repuntaron las acciones colectivas contra los ingenios con el trasfondo de la nueva crisis de sobreoferta que hundía a la industria azucarera. Los productores de la CNC impidieron la salida del azúcar de las bodegas de algunos ingenios que no cumplieron sus compromisos de exportar (cuota de 12.6% de su producción), lo que propiciaba la caída del precio en el mercado interno. En efecto, a los industriales no les convenía exportar en el mercado libre, pues los precios mundiales están por los suelos (40% inferiores al precio interno), y sólo podían exportar irrisorias cantidades a Estados Unidos. Sin embargo, esta medida de fuerza no fue respaldada por la UNC, que consideró que era una farsa inducida por los dueños de los ingenios, porque con la toma de bodegas no iban a exportar y porque la acción podrían ser contraproducente para los cañeros, provocando que no se les pagara la caña.

La agudización de la crisis del sector ha llevado a los cañeros a radicalizar y generalizar sus protestas durante el año 2000: «En agosto, miles de cañeros de 15 estados realizaron plantones, marchas y bloqueos de ingenios, carreteras y edificios públicos para presionar por el pago de 1,300 millones de pesos que por liquidaciones de su caña les adeudaban desde julio productores de los principales grupos de esta rama industrial: Caze, Grupo Azucarero Mexicano y grupo Machado» (Rojas, *op. cit.*). En septiembre, se dio la toma de carreteras y oficinas en el ingenio San Pedro, Veracruz, encabezada por la Unión Cañera Democrática para obtener el pago de 80 millones de pesos de sus liquidaciones en septiembre de 2000; a pesar del desalojo con violencia, las tres organizaciones (UNCPA, UNC y UCD) volvieron a bloquear la carretera federal. El ingenio Cuatotolapan no cerró en la zafra 2000-01 gracias a la oposición de los gremios cañeros, que firmaron un convenio de cogestión con el gerente: los cañeros pagaron el costo de operación, y el ingenio puso las instalaciones y el personal de confianza (Américo Savión, UNC, com. personal).

La situación tiene visos de convertirse en explosiva en el nivel nacional si se cierran más ingenios (como cuando en Argentina el gobierno militar de Onganía, en 1969, cerró varios ingenios en Tucumán, generando tal desempleo y miseria que fueron caldo de cultivo para la formación de la guerrilla en los años setenta). Recientemente, cañeros de ingenios de Oaxaca se acercaron a El Barzón para buscar su apoyo.

Sin embargo, la sangre no llega todavía al río. Las organizaciones tradicionales de productores juegan aún un papel de gestión y contención, y el gobierno ha aplazado las decisiones draconianas, como la liquidación de los ingenios en cartera vencida. Así, en abril de 2001, la UNPCA amenazó con movilizaciones a la ciudad de México para obligar al gobierno de Fox a firmar los certificados de depósito que garanticen a los cañeros el pago de sus preliquidaciones y liquidaciones en caso de insolvencia de los ingenios, luego de que no habían podido cobrar las primeras (*Diario de Xalapa*, 10/04/01). Parecería que industriales, cañeros y obreros, cada uno desde su trinchera, en lugar de hacer frente común buscan presionar al gobierno para que tome cartas en el asunto de manera decidida mediante la condonación de la deuda de la industria y la creación de un Fobaproa para el azúcar en el caso de los industriales o a través de una nueva estatización del sector en el caso de los productores y los obreros.

Estas soluciones serían muy costosas para el país y no garantizarían la «salida del bache» del sector. En cambio, se requiere de parte del gobierno una defensa enérgica de los intereses de la más antigua industria del país frente a la política comercial agresiva de Estados Unidos, adalid del libre comercio cuando se trata de otras naciones con las que comercia, pero proteccionista de sus productores agrícolas y agroindustriales. Sólo una presión vigorosa y conjunta de las organizaciones sociales representativas de todos los actores del sector podrá lograr la salida del bache y no las confrontaciones actuales entre ingenios y sus trabajadores de campo y fábrica.

CONCLUSIONES

La privatización y desregulación de la industria azucarera, así como la integración de su producción a los procesos de globalización, TLC mediante, han significado una reestructuración del marco económico, donde se desenvuelve la producción de los cañeros y sus relaciones con los ingenios, así como el encuadre político corporativista, en el cual los cañeros identificaban sus intereses gremiales y sus relaciones con el estado. A pesar de la fuerza aún respetable de los gremios, de la protección arancelaria (relativa, si tomamos en cuenta la fructuosa) y de los precios-soporte de los que goza el sector, los productores cañeros se sienten huérfanos de la protección tutelar del estado. Por tanto, se abren nuevos cauces potenciales de las organizaciones cañeras existentes hacia la independencia política y la democratización interna o a la creación de nuevos movimientos más representativos y combativos, aun cuando los grupos disidentes son todavía poco representativos. No se debe descartar la radicalización política de los cañeros ante la amenaza y cierre de sus fuentes de trabajo. Otra posibilidad nada optimista sería la descomposición total de las organizaciones oficiales, sin el respaldo financiero del PRI (gobierno) y la atomización de los productores, desde una perspectiva neoliberal.

Por otra parte, las nuevas condiciones macroeconómicas exigen, tarde o temprano, una mayor tecnificación del campo cañero y nuevas formas asociativas para la producción, el crédito y la comercialización. Esto implica una reconversión de los gremios, de las organizaciones de control político y de la gestión de prestaciones a una red descentralizada de cooperativas de servicios y de empresas asociativas; esto, sin perder su capacidad de movilización centralizada, aunque se antoja difícil dada la cultura política imperante entre los cañeros y la tradición corrupta y caciquil de sus gremios: «Con estos cambios, las dos uniones cañeras han asumido un nuevo papel

como organizadoras regionales y locales de las distintas fases del cultivo y de inversión... Estos cambios han requerido el "repensamiento" de la cultura política que define las relaciones internas de las uniones. Se busca una nueva correspondencia entre producción eficiente, responsabilidad propia de los cañeros individuales, elecciones abiertas y manejo eficiente y limpio por parte de los líderes... Ahora, su capital político tradicional (...) ha disminuido, dramáticamente, mientras su capital social, como representantes de "empresarios campesinos", se encuentra en un periodo difícil. En sus bases, la gente regular "espera para ver" y dentro de sus organizaciones no se pueden cambiar costumbres establecidas de un día a otro» (Singelmann, 1997).

Las crisis pueden ser parteaguas para emprender nuevos caminos y extraer fuerzas de la misma adversidad. Pero esto no exime al estado de sus responsabilidades en defensa de sus productores frente a países poderosos y proteccionistas y no exceptúa a los industriales de eficientizarse y de diversificar su producción hacia la generación de glucosa y fructuosa de caña, de etanol, de papel y cartón, de aglomerados, de alimentos para el ganado, de furfural y de medicinas⁷⁸. En este tenor, el ingenio Independencia, Veracruz, produce 60 mil litros de etanol para sustituir 15% de la gasolina en los vehículos automotores oficiales del DF, mediante convenio con el gobierno de la capital para un programa de prueba (*La Jornada*, 30/10/00). Las ventajas para el país son múltiples: reducción de emisiones de monóxido de carbono, de importaciones de gasolina, del precio de ésta y de la utilización de metil terbutil éter, agregado a la gasolina y el cual contamina, gravemente, el agua (*La Jornada*, 30/10/00). Otra asignatura pendiente de los industriales es organizar un mercado caótico en lugar del «sálvese quien pueda» actual.

⁷⁸ Existen 40 derivados que se pueden obtener de la caña.

BIBLIOGRAFÍA

- ARGÜELLO Z., Francisco, y José L. de la Cruz R., *La privatización de la industria azucarera mexicana y su impacto social*, Universidad Autónoma de Tamaulipas/Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, 1998
- Azúcar y Fructuosa, «Caze está a punto de renegociar sus pasivos con la banca comercial», núm. 17, jul, 1999
- Cámara Nacional de la Industria Azucarera y del Alcohol, *Manual azucarero 2001*, México, dic, 2000
- CEBALLOS, Y., «Empeñar su vida en el cañaveral», *Reforma*, México, 17 nov, 1999
- CORRO, Salvador, y G. Correa, «62 ingenios en quiebra; industriales endeudados y la caña sin cortar», *Proceso*, núm. 816, México, 22 jun, 1992
- CHOLLET, D., «Mexican Cane Growers and Reconstruction of the Cultural Matrix of Cane Production», ponencia presentada en la x Asamblea de la Latin American Studies Association, Guadalajara, 1997
- _____, «Los evasivos beneficios del neoliberalismo: un estudio de caso en Puruarán, Michoacán», *Boletín de Investigación de la Universidad Obrera de México*, México, sep, 2000
- Diario Oficial de la Federación*, Decreto Cañero, Sagar, México, 31 may, 1991
- Época, «Privatizaciones: un camino de regreso», México, 24 jun, 1991
- _____, «El azúcar mexicano: entre el desorden y la sobreoferta», México, 18 nov, 1991
- ESPINOSA, G., «Modelo infalible para armar una crisis: el caso de la industria azucarera», *Cuadernos Agrarios*, núm. 17 y 18, México, jul-dic, 1999
- GARCÍA COLÍN, M., «Azúcar: la crisis de nunca acabar», *Época*, México, 3 ago, 1992
- GARCÍA CHÁVEZ, Luis R., «La agroindustria cañera de México frente a la apertura comercial», *Reporte de Investigación*, núm. 12, CIESTAAM/Uach, 1992
- _____, «La industria azucarera en el TLC: la guerra del azúcar», ponencia en el Congreso Estrategias para el Cambio en el Campo Mexicano, Chapingo/CIESTAAM, 23-25 oct, 2000
- GARRIDO, C., «La situación del campo cañero desde la perspectiva de los productores y los trabajadores agrícolas», mimeo, 2001
- HALEY, Stephen, y N. Suárez, «US-Mexico Sweetener Trade Mired in Dispute», *Agricultural Outlook*, USDA, Washington, sep, 1999
- IGARTUA, Gabriela, y F. Mestries, «El movimiento cañero en Veracruz a principios de los setenta», en L. Paré (coord.), *El estado, los cañeros y la industria azucarera*, UAM-A/IIS-UNAM, México
- Mestries, F., «Reflexiones acerca del movimiento cañero en Veracruz», en L. Paré (coord.), *El estado, los cañeros y la industria azucarera*, UAM-A/IIS-UNAM, México, 1987

- _____, «La industria del azúcar y el movimiento cañero en Veracruz», en *Historia de la cuestión agraria mexicana: los tiempos de la crisis*, vol. II, Siglo XXI Editores/CEHAM, México, 1990
- _____, «El Barzón o la radicalización de los medianos y grandes productores agrícolas», *Sociológica*, núm. 28, UAM-A, México, 1995
- OLGUÍN, C., «Preocupa a azucareros la entrada de fructuosa», *El Financiero*, México, 3 sep, 1997
- ROJAS, R., «En riesgo de desaparecer un tercio de los ingenios del país», *La Jornada*, México, 18 sep, 2000
- ROMERO, José C., «El Tratado de Libre Comercio-azúcar y los sinsabores de la fructuosa», *La Jornada del Campo*, México, 1 oct, 1997
- SINGELMANN, P., «Liberalización del mercado, democratización política y campesinos: los desafíos para los cañeros y sus uniones», parte de la ponencia presentada en la X Asamblea de la Latin American Studies Association, Guadalajara, Jalisco, 1997
- SUÁREZ, V., «La guerra de la fructuosa de maíz: otro amargo saldo del TLC», *La Jornada del Campo*, México, 1 oct, 1997

MOVIMIENTO SOCIAL Y RELACIONES DE PODER EN LA FRAILESCA, CHIAPAS⁷⁹

ÁLVARO MARTÍNEZ QUEZADA⁸⁰

INTRODUCCIÓN

Los enfoques teóricos para el análisis de los movimientos sociales han estado definidos en torno a dos perspectivas: la que subraya la noción de los movimientos como actores estratégicos, es decir, la que explica la acción colectiva en términos de la teoría de la elección racional y la que elabora una conceptualización de la acción estratégica a partir de la noción de identidad colectiva, la que se construye dentro de la estructura de conflicto de una sociedad particular (Laraña, 1999; Arias, 1999). Ambas visiones, a final de cuentas, buscan dar cuenta del carácter de la acción colectiva, para lo cual, desde la sociología, se ha usado, a veces sin mucha precisión, el polisémico concepto de movimiento social.

Un acercamiento comprensivo del concepto, según Diani (citado por Laraña, 1999: 69), fundado en un creciente consenso entre los analistas, nos dice que los movimientos son «redes de interacción informal que comparten creencias y solidaridad, y desarrollan formas conflictuales de acción que se sitúan fuera de la esfera institucional y de los procedimientos rutinarios de la vida social».

⁷⁹ Ponencia preparada para el III Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER), Zacatecas, 3-6 jun, 2001

⁸⁰ Profesor del programa de maestría en desarrollo rural regional de la Universidad Autónoma Chapingo (sede Chiapas) y estudiante del doctorado en ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco)

Este autor establece que los ámbitos de la sociedad en que se plantean los conflictos pueden ser la cultura y el orden político.

Sin pretender profundizar en la discusión del concepto, señalamos que esta idea de movimiento social esta siendo revisada en la actualidad. El principal señalamiento a los enfoques dominantes es la analogía que establecen entre movimientos y tendencias históricas. Esto, en razón de que suelen centrarse en la modificación de la estructura de oportunidad política o en la disponibilidad de recursos para explicar su surgimiento. Es decir, se hace referencia a las correlaciones causales entre los movimientos sociales y los cambios estructurales, que se producen en el contexto en que surgen (Laraña, 1999: 71).

Desde la vertiente conocida como del constructivismo social, se propone una aproximación más fluida y situada de los movimientos. Por ejemplo, Melucci (1999: 12) sostiene que a los movimientos «es imposible abordarlos, de manera analítica, como entidades que avancen en una unidad de metas, como suelen hacerlo los ideólogos». Propone verlos como sistemas de acción, es decir, como redes complejas entre los niveles y significados de la acción social. Asume, así, que «la identidad de los movimientos no es un dato o una esencia sino el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores».

Este enfoque plantea que para reconstruir desde su interior el sistema de acción, es menester poner atención a los procesos de movilización, a los tipos de organización, a los modelos de liderazgo, a las ideologías y a las formas de comunicación, así como a las relaciones con el exterior, con los competidores, con los aliados y adversarios y, en particular, con la reacción del sistema político y el aparato de control social, quienes determinan un campo de oportunidades y limitaciones, donde el actor colectivo adopta una forma, se perpetúa o cambia.

Sin negar lo planteado por estas corrientes, la dinámica del movimiento social, como expresión de un conjunto de necesidades insatis-

fechas, en nuestra opinión, se presenta en un marco de relaciones de poder. Éstas son parte del sistema de relaciones sociales; la forma en que se ejerce este poder está definida —de acuerdo con lo dicho por Foucault— por la manera en que unos grupos actúan e inciden en el comportamiento de otros. En la dinámica de esa relación, los actores construyen las condiciones para adecuar el sistema o transformarlo⁸¹.

En este documento, buscamos avanzar en el análisis de las expresiones que ha tenido el movimiento social de los últimos años en la región La Frailesca, en Chiapas, no sólo como expresión de redes de relación social que existen en su interior —y que a menudo se manifiestan, de manera conflictual, mostrando la forma en que se mueven las fuerzas y grupos—, sino como condensador de necesidades históricas no resueltas, que cobran una expresión diferenciada en razón de las valoraciones que de las coyunturas hacen los actores sociales.

Este movimiento pareciera moverse en dos vertientes: la que convoca al sector de los productores, anclados en la vida rural y emplazados a responder a las condiciones que les impone una actividad productiva vinculada al mercado y de la cual provienen sus ingresos, y la que expresa la necesidad de una transformación de las relaciones políticas y de poder, heredadas de las formas de dominación que definieron, hasta hace poco, las estructuras de poder local.

LA REGIÓN LA FRAILESCA

La Frailesca es una región de Chiapas, donde coexisten la propiedad privada de la tierra, herencia de un pasado finquero, y formas de propiedad social (ejidal), resultado de una histórica confrontación entre campesinos y propietarios por la posesión

⁸¹ Enfoque tomado de M. Foucault (1985: 45)

de este recurso⁸². Es, también, un área que tradicionalmente se ha orientado en lo económico a la producción de alimentos, particularmente de maíz y ganado, reforzada por las políticas de fomento y de dotación de infraestructura productiva impulsadas por el estado mexicano hasta 1982, las cuales respondían a las prioridades del modelo de desarrollo imperante hasta ese momento.

Los numerosos ejidos, que surgieron en las fases del reparto agrario, orientaron sus esfuerzos a fines de los cuarenta hacia una producción campesina centrada en la producción de granos, actividad realizada en esos años mediante técnicas rudimentarias, que se había mantenido como parte de las prácticas productivas en la región. Los propietarios privados dedicaban sólo una pequeña parte de sus tierras a la producción agrícola y el resto las orientaban a la ganadería (Blanco, 1985: 61).

En los años setenta, se refuerza la presencia del estado en la región, quien, buscando revertir la crisis productiva que se había hecho presente desde mediados de la década de los sesenta, apoyaba por diversas vías la producción de granos básicos. Se buscaba desarrollar los paquetes tecnológicos de la revolución verde sobre la base de aprovechar el potencial productivo de los suelos mediante el cultivo del maíz, es decir, se pretendía aportar la tecnología y dotar a la región de la infraestructura necesaria para la comercialización.

Esta fase de fomento productivo se mantuvo por 15 años, siendo los ejidos los principales beneficiarios a quienes se canalizaron por intermediación de las instituciones de gobierno apoyos tecnológicos y crediticios. El impulso de esta política se desarrolló con un acuerdo tácito de los ejidos con el estado mediante el control que sobre ellos tenía el aparato gubernamental. En los hechos, la política productivista del periodo permitió desactivar el movimiento social de la época en demanda de tierra.

⁸² Ubicada en la depresión central de Chiapas, La Frailesca está integrada, en la actualidad, por cinco municipios: Villaflores, Villacorzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo y el recientemente creado Montecristo de Guerrero.

Como resultado de las políticas de fomento productivo, La Frailesca se proyectó en los ochenta como una de las regiones del país especializadas en la producción del grano, reconociéndosele como el granero de Chiapas. Así, en los años ochenta, a partir de la especialización en la producción de maíz y ganado, la zona vive una situación de aparente bonanza, no obstante que la crisis agrícola en nivel nacional se hacía evidente y que el país se veía obligado a importar, año con año, crecientes volúmenes de alimentos.

A mediados de los 80, el estado inicia sus políticas de ajuste para enfrentar la crisis económica en el país. El cambio en el trato hacia la región, que el gobierno impulsó en estos años, provocó que los productores se consideraran discriminados por la nueva política oficial, e iniciaran un movimiento de carácter estatal por un precio justo para el maíz, que termina sin resultados favorables.

Con el empuje modernizador generado a raíz de la implantación de las políticas neoliberales⁸³, que otorgan centralidad al capital privado en los procesos de desarrollo rural, y con el impacto de los cambios observados en la vida política nacional, en la región se viene operando una profunda transformación en diferentes planos, que muestra una recomposición de los grupos de poder locales tradicionales, la reconfiguración de las construcciones identitarias que por años han definido las formas de socialización y las nuevas condiciones en la dinámica de los movimientos sociales.

MOVIMIENTO SOCIAL: ACTORES EN CONFLICTO

La caracterización del movimiento social en la zona en los últimos 25 años —en razón de las condiciones particulares bajo las cuales se

⁸³ Nos referimos a tres elementos de la política neoliberal que han incidido, de manera directa, en el comportamiento de los grupos de campesinos maiceros de la región: el retiro del estado del fomento de la actividad productiva, la desregulación del precio del maíz y las reformas al artículo 27 constitucional, cuyo objetivo es la liberación del mercado de tierras en todo el país.

mueven los actores— nos lleva a establecer al menos tres momentos: el primero, donde se avanza en desestructurar al caciquismo de corte tradicional; el segundo, donde aparecen cacicazgos de nuevo tipo, subordinados a la acción hegemónica del estado en el proceso de recomposición de los grupos de poder; y el más reciente, donde el movimiento aparece bajo expresiones múltiples, buscando incidir y orientar los conflictos de acuerdo con su propio proyecto e interés.

a) Los setenta: fin del caciquismo tradicional

En la década de los setenta, el control político de los municipios de La Frailesca se ejercía por parte de los grupos de caciques, que sustentaban su poder sobre la base del control territorial⁸⁴, es decir, eran quienes representaban los intereses de las agrupaciones de comerciantes y ganaderos, las cuales imponían a voluntad a quienes habrían de ocupar puestos de elección popular. Para el caso de Villaflores, es sabido que el poder municipal era controlado por la familia de Alfonso Macías, quien acostumbraba poner y quitar autoridades a su antojo. Esta práctica generó —a mediados de los setenta— un movimiento opositor en contra de la imposición del candidato a la presidencia municipal, que aglutinó a la mayor parte de los ejidos, lo cual abrió la vía para nombrar a Efraín de Coss Velazco⁸⁵ como una autoridad municipal alternativa propuesta por los campesinos.

La lucha por el poder municipal mostraba en ese momento la pugna entre dos fuerzas: la que encarnaba en los grupos de poder tradicional, que históricamente habían detentado el poder político-territorial,

⁸⁴ Con el término cacique o caciquismo se alude a «un personaje central o líder local que posee poder casi absoluto en lo económico, político y social sobre una área geográfica determinada, que puede usar la violencia para que sus deseos se impongan, que representa a las fuerzas del atraso cultural y que es reconocido como una persona importante por líderes externos de orden superior en el ámbito local, regional o nacional» (L. Allup, 1986: 118).

⁸⁵ A la sazón, pariente de quien había sido gobernador de Chiapas durante el echeverrismo: Manuel Velazco Suárez.

y la que se establecía en un grupo social emergente que, consciente de su fuerza, pugnaba por destrabar relaciones políticas, las cuales ya no correspondían a las nuevas condiciones de la democracia política, acotada desde el estado corporativo y que al menos en la región se sustentaba en los grupos campesinos.

El fortalecimiento de esta alternativa «democratizadora» en los setenta abrió paso a un grupo que al interior del PRI encabezaba Germán Jiménez, quien a mediados de esa década —y como medida de presión— impulsó movilizaciones de campesinos, para demandar la dotación de tierras, a través de la Alianza Campesina 10 de Abril, fundada años antes por gente cercana al Partido Socialista de los Trabajadores. Al final de la década, este grupo constituyó la Coalición Frailescana de Defensa y Producción, que después se transformó en la Asociación Agrícola Local de Villaflores.

Con base en esto y consciente de la fuerza acumulada, esta corriente dentro del priismo disputó la presidencia municipal al grupo de caciques, cuestión que consigue en el periodo 1979-82 a pesar de que el gobernador de entonces (Salomón González Blanco) apoyaba a los grupos de poder tradicional. Este grupo aparentemente entendió que ya no era posible mantener el control político del municipio, y sus líderes se orientaron, a partir de entonces, a invertir sus recursos en empresas y negocios.

El ascenso de la agrupación de Germán Jiménez significó el término de una forma de dominación y la implantación de un caciquismo de nuevo tipo. Terminar con la práctica del grupo Macías y de imposición de autoridades locales significó un cambio en la forma (pero no en el fondo) del ejercicio del poder político en el municipio de Villaflores, pues en adelante sería el nuevo líder quien impondría a los sucesivos presidentes municipales⁸⁶.

⁸⁶ Con excepción, quizá, durante el sexenio 1982-1988, cuando el gobernador Absalón Castellanos impuso candidatos leales a su gobierno.

Al margen de las posiciones políticas de mayor o menor independencia frente al estado por parte de Germán Jiménez y de los vínculos orgánicos que este líder tenía con el movimiento social, es evidente que, como dice Alberoni (1984: 413), el control y la institucionalización de los movimientos por parte del estado forman parte de la práctica y cultura política de funcionarios y líderes políticos surgidos en el sistema de relaciones local.

Eran los tiempos de la hegemonía del PRI y difícilmente se podía pensar en el impulso de un proceso político que estuviera al margen del control corporativo del estado. Por ello, al encabezar este líder las demandas de los campesinos, y aunque lo hiciera a través de la movilización y la presión, siempre se mantuvo leal al sistema. En los hechos, esta postura expresaba una forma diferente de construir las relaciones políticas, donde superar la relación de dominación que ejercían los exfinqueros en la sociedad local era lo fundamental, lo cual se tradujo, a la postre, en un fortalecimiento de la relación corporativa de los campesinos con el estado.

Esta primera fase del movimiento social estuvo centrada en la lucha contra las formas tradicionales de dominación (política y territorial), enfocándose, por lo tanto, en la necesidad y posibilidad de destrabar este control. Fue, también, una etapa que preparó las condiciones para las movilizaciones que los campesinos maiceros protagonizaron a mediados de los ochenta, como veremos a continuación.

b) Los ochenta: no más hijos predilectos

La experiencia acumulada por este grupo al interior del PRI —incluida la dirección estatal de la CNC— sería la base para encabezar, entre octubre de 1985 y mayo de 1986, un movimiento estatal por el aumento de los precios de garantía del maíz en alianza con exlíderes del movimiento magisterial chiapaneco. El movimiento reaparece en

el contexto de la crisis económica, enarbolando demandas productivas. Los productores de maíz de la región demandaban homologar el precio del grano al otorgado en otros estados de la República⁸⁷.

Con la llegada de Absalón Castellanos al gobierno del estado, se produce una recomposición de la agrupación gobernante, y se busca un acercamiento con los grupos de poder tradicionales en Chiapas. Antes del inicio de esa administración, fue evidente el conflicto que mantenía el nuevo gobernador con este grupo de poder y su principal líder, que para ese entonces se desempeñaba como diputado federal. Sabedor de que su fuerza estaba en La Frailesca, al término de su periodo como legislador, Jiménez regresó a su región y, al margen de la dirección estatal de la CNC, se propuso encabezar las demandas de los productores mediante la Coalición Frailescana de Productores de Maíz⁸⁸.

Entre enero y mayo de 1986, el movimiento realizó acciones y medidas de presión, como: la concertación de alianzas, la realización de foros campesinos, la entrevista con funcionarios de alto nivel, la toma de bodegas rurales y el bloqueo de la carretera panamericana, principal vía de comunicación entre Tuxtla y la ciudad de México. Los productores tenían confianza en que el gobierno accedería a aumentar el precio del grano, como se había otorgado en otros estados del país. Sin embargo, las cosas no resultaron como se esperaba; por el contrario, el gobierno reaccionó con la represión y el encarcelamiento, por más de dos años, de siete de sus principales líderes.

Para agosto del mismo año, era evidente que el movimiento había sido conducido a la derrota, con la consecuente frustración de los campesinos. La confianza que los dirigentes tenían al creer que man-

⁸⁷ Sobre el movimiento maicero que tuvo lugar en la zona central de Chiapas a mediados de los ochenta, ver M.T. Castillo, 1988.

⁸⁸ Durante este periodo, el gobernador se dedicó a golpear a Jiménez; se trataba de borrar de la memoria de los campesinos de Chiapas el papel jugado por Jiménez durante el corto lapso que estuvo al frente de la CNC.

teniéndose leales al sistema evitarían la represión fue un error de cálculo que demostró sus limitaciones, al imponerse las contradicciones y revanchismo de quienes detentaban en su momento el monopolio del poder estatal. Por lo demás, la negativa a satisfacer las demandas mostraba —además del uso político que se hizo con el manejo de precios de garantía— los propósitos del gobierno federal para poder administrar la crisis. Con todo, y aunque las demandas planteadas no hayan sido en su momento satisfechas y el movimiento fuera reprimido, los campesinos mostraron, una vez más, su capacidad de movilización y de protesta desde la CNC —bajo el liderazgo de Germán Jiménez—, en ese momento, la única agrupación que podía canalizar el descontento social.

La respuesta positiva a la convocatoria de luchar por mejores precios y las acciones que acompañaron este movimiento no hubieran sido posibles sin la red de relaciones tejida durante los años previos, la cual dio como resultado una base social amplia en términos regionales, toda vez que mantuvo la capacidad de construir acuerdos y alianzas con grupos de campesinos de los municipios de La Concordia y Ángel Albino Corzo y con las agrupaciones de poder tradicional ahí establecidas.

Podemos decir que Jiménez representa un cacicazgo clásico en la región por la violencia utilizada en contra de los opositores, por la forma de ejercer el poder repartiendo lealtades, por el carisma —en el sentido weberiano del término— que este líder mantiene entre grupos de campesinos y por la evidente delimitación regional de su área de influencia. La influencia del «germanismo»⁸⁹, como grupo al interior del PRI y con una base social propia, se mantiene en la actualidad como una fuerza real en prácticamente toda la región de La Frailesca. Sin embargo, como dice Escalante (1995: 3), «es evidente que

⁸⁹ Por «germanismo» nos estamos refiriendo a la corriente política construida en torno a la figura del carismático líder local, que influyó con sus prácticas en la conducta de funcionarios gubernamentales, así como en dirigentes y grupos campesinos que en diferentes coyunturas lo apoyaron.

esta situación va cambiando y su fuerza disminuyendo en la medida en que el estado entra en la vía de desarrollo neoliberal y en las políticas modernizadoras».

La desatención de que fue objeto la región, en cuanto al fomento productivo a fines de la década pasada y principios de la actual por revanchismo político, por el desinterés que la burocracia mostró hacia el sector rural y, sobre todo, porque las prioridades de la política gubernamental eran otras, indicaba que los tiempos habían cambiado. Ello provocó que, para principios de los noventa, la mayoría de los productores cayera en cartería vencida, situación que no se resolvería pese a los programas gubernamentales tendientes a la regularización de adeudos.

Las reformas al sector rural de principios de los noventa presagaban cambios importantes de la política del estado hacia los campesinos del país, quienes habían construido en gran parte su socialidad y sus formas de convivencia en torno a la figura del ejido. La perplejidad de los campesinos de la región frente a estas reformas—particularmente ante la posibilidad de enajenar sus parcelas—era enorme y sin la posibilidad de comprender que en ellas estaba en juego la hipoteca de su espacio comunitario.

No hay que olvidar que existía un proceso de modernización económica en marcha a la cual estaban emplazados a adscribirse los grupos de poder; cada cual aportaba desde su particular situación e interés, sin importar que en ese proceso los más afectados fueran los campesinos. Y aunque en este periodo la política local aparece hegemonizada por este grupo, a principios de los noventa, la región empieza a abrirse, de manera muy lenta, a otras opciones políticas. A ello contribuyó el importante movimiento electoral que se desarrolló en el país, en 1988, y que en lo regional coadyuvó—junto con el desgaste al que fue sometido el «germanismo» como opción política y de poder— a la estructuración de opciones políticas diferentes a la oficial.

c) Los noventa: un movimiento multifacético

Para la segunda mitad de los noventa, las condiciones políticas bajo las cuales se desarrolla el movimiento social son muy diferentes. Éstas experimentan en la región un proceso acelerado de transformación, prefigurando una recomposición de los actores sociales y políticos; no obstante, se siguen reproduciendo muchas de las viejas prácticas políticas, como el clientelismo y el corporativismo, recreadas por líderes e instituciones mediante los programas de apoyo al campo⁹⁰.

En esta etapa, el movimiento social tiene como característica fundamental la reivindicación de su independencia política y orgánica respecto al estado y los líderes políticos vinculados al oficialismo. La explicación habría que buscarla en la coyuntura política que vivió la entidad desde 1994, época que todavía no se cierra. El conflicto político chiapaneco, abierto con la irrupción del zapatismo, vino a alentar y fortalecer al movimiento social en la región, que se mostró como un despertar de conciencias para algunos y en un acicate para otros. La movilización política electoral por la gubernatura, en 1995, sensibilizó a actores sociales y políticos, lo que se expresó en la fuerte disputa por las presidencias municipales durante el proceso electoral de ese año.

En ese ciclo, el movimiento social combinó la lucha político-electoral con la tarea de conquistar las viejas demandas, como las de tierra y mejores precios para el maíz, al mismo tiempo que aparecerían exigencias como la creación de nuevos municipios a partir de los ya existentes. En este contexto de agitación política, la solicitud de tierra por parte de los campesinos vuelve a presentarse, buscando hacerse efectiva con la toma de algunos ranchos

⁹⁰ Tal es el caso del uso de los recursos canalizados por el Procampo o la Alianza para el Campo, programas administrados por la Sagar, que sólo entrega a los productores algunos subsidios.

de los municipios de Villaflores y Villacorzo, dando por resultado la entrega a campesinos de propiedades que fueron compradas.

Aparece, así, una visión que busca democratizar la vida política local, acorde con los nuevos tiempos de competencia política, que más allá de la pugna entre facciones partidistas evidenciaba —desde entonces— un reacomodo de los grupos de poder local, donde la tradicional filiación al priismo mostraba que éste ya no satisfacía las expectativas y necesidades de amplios sectores sociales, y la posibilidad de un ejercicio más pleno de los derechos políticos y ciudadanos. La combinación de la lucha social con el movimiento político trajo como consecuencia la agudización de los enconos y viejas rivalidades entre los actores en conflicto.

En todos los municipios de la región, la disputa evidenciaba un alto grado de confrontación entre los grupos en pugna y el desgaste del corporativismo, como forma de control social. En Villacorzo, cuyo ayuntamiento había sido ganado por el PRD, el conflicto provocó el asesinato del presidente municipal a los pocos meses de la elección. Un año después, los caciques asesinaron —a la vieja usanza— al líder de la Organización Campesina de Villacorzo (Ocvi). En Ángel Albino Corzo, la disputa por el gobierno municipal se tradujo, primero, en el asesinato del candidato priista y, después, del perredista.

La situación de efervescencia política que se vivía en Chiapas en ese momento sentó las bases para que en el imaginario de los productores se construyera la necesidad de una nueva fase del movimiento maicero por mejores precios. Éste inició a principios de 1996, e involucró a 14 municipios de la depresión central, incluidos los de La Frailesca, para entonces ya sin la hegemonía del «germanismo», que fue visto con desconfianza, pues en la memoria de la gente se valoraba que fue la pugna entre grupos dentro del oficialismo lo que llevó a la derrota del movimiento de 10 años atrás.

Así, esta movilización, cuya demanda volvía a ser por aumento al precio del maíz, cuidó que no se le identificara con líderes políticos o partidos; se buscaba que el movimiento se reconociera como más genuino por parte de la sociedad, toda vez que los campesinos eran conscientes de que sería muy difícil cambiar la política del gobierno hacia el campo. En efecto, el gobierno del estado estaba decidido a no atender, una vez más, las demandas de los productores y a no resolverlas de manera favorable⁹¹.

De este movimiento lo único que los productores obtuvieron fue la aplicación de un conjunto de apoyos a la producción en el marco del Programa de Alianza para el Campo y del Programa de Empleo Temporal⁹², iniciativas que ya estaban programadas y presupuestadas. Como resultado de esta movilización y del parcial logro de sus demandas, los campesinos toman conciencia de la necesidad de la organización. De este movimiento, surge la Unión de Productores de Maíz (Upromaíz) con la postura de desarrollarse con independencia del gobierno y partidos y de tomar en sus manos el control del proceso productivo⁹³.

A fines de los noventa, junto a la lucha de esta organización por mantener su legitimidad en el plano de lo social, estaba la defensa de la Unión de Productores contra los embates de los gobernantes en turno. La propuesta de impulsar una línea de independencia frente al gobierno era su fortaleza y debilidad. Los intentos del gobierno del estado, que buscaban intervenir a esta organización maicera y «comprar» a sus dirigentes mediante sobornos y dinero, estaban a la orden del día. Ello provoca continuas intrigas y pugnas entre liderazgos y

⁹¹ Irónicamente, a dirigentes encarcelados a causa del movimiento de los ochenta, después vinculados con posiciones clave en el gobierno, se les identificó como represores del movimiento maicero de los noventa.

⁹² Este Programa consiste en realizar en los ejidos pequeñas obras, para lo cual se paga un salario a los campesinos que participan en dichas actividades. Este Programa no lograba recuperar los altos costos de producción del maíz.

⁹³ Upromaíz mantiene una alianza tácita con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. No obstante, la organización reivindica su autonomía política como principio.

sus bases, quienes se dan a la tarea de conformar nuevas organizaciones⁹⁴.

En relación con la movilización municipalista, la lucha por el poder local se expresó, prácticamente, en todos los municipios de la entidad, como reclamo para descentralizar la administración de recursos o para nombrar a nuevas autoridades municipales; eran procesos que mostraban, de manera contundente, el agotamiento, la ruptura del modelo de dominación y la irrupción de una nueva fase autonómica de los procesos y las organizaciones. De este modo, la disputa entre los grupos y facciones por el control de los ayuntamientos y otros espacios de poder, como las organizaciones sociales, se mantiene, teniendo como protagonistas a los grupos de poder tradicional y a los emergentes.

Pero la lucha política por el poder no se ha expresado sólo en los ayuntamientos. La confrontación política de los años recientes muestra un silencioso y paulatino cambio de opción política, la cual manifiesta una profunda recomposición de los grupos que antes se ostentaban como hegemónicos. Hoy en día, no existe un ejido que no esté dividido o seriamente confrontado en torno a opciones partidistas, restando con ello capacidad de gestión a los grupos ejidales. Esto es así por la cantidad de recursos que controlan, los cuales a menudo son cuantiosos —sobre todo en los más urbanizados— y generados por la renta de inmuebles o por los que canaliza el gobierno para obras.

Con base en los elementos dichos y el reconocimiento de las etapas en que se expresó el movimiento social en la región, podemos caracterizarlo, como dice Melucci (1994: 122), como «la demanda de inclusión en un sistema institucionalizado, que puede presentarse como radical, pero que no implica antagonismo hacia la lógica del

⁹⁴ Entre otros grupos de productores que se han desprendido de Upromaíz están: Asociación de Maiceros, AC (1998), Cuprocen, AC (1999), Maiceros de Villacorzo, AC (2000) y Productores Asociados de Chiapas, AC (2001).

sistema, sino más bien un impulso redistributivo». Este impulso redistributivo sería en cuanto a las posibilidades de insertarse, de manera incluyente, en los espacios de la vida política y social que los actores sociales tienen a su alcance.

Pareciera que la dinámica y el funcionamiento de la región y del estado con sus propios actores y reglas específicas, su funcionamiento y la correlación de fuerzas están supeditados a la dinámica que los actores locales establecen con el estado mexicano en su conjunto. En esta última fase, se perciben nuevas formas de expresión del movimiento social, donde el ámbito de lo político parece ser un lugar privilegiado.

El modelo de región que las elites políticas han delineado quiere imponerse; en ese proceso, el capital empresarial, los comerciantes, los ganaderos y el gobierno buscan abrirse espacios. Por su parte, la sociedad local, golpeada por las políticas neoliberales, define escenarios alternativos para garantizar su reproducción, al tiempo que busca democratizar los espacios de la vida pública y social, como las presidencias municipales y los comisariados ejidales, ámbitos que reflejan el comportamiento de la sociedad regional, y perfilar la recomposición de las relaciones políticas por parte de los grupos de poder.

CONCLUSIÓN

Existe en La Frailesca un proceso de transformación acelerada de la sociedad regional, el cual está obligando a una recomposición de los actores sociales y políticos. No obstante que algunas de estas transformaciones son resultado de la política productiva y de las necesidades del modelo económico, los principales cambios en la región se han dado como resultado de las intensas movilizaciones sociales protagonizadas por los grupos campesinos, normalmente contrapuestos a las agrupaciones de poder local y a las políticas del estado.

El movimiento social aquí descrito es la forma en que se expresa, de forma abierta, la dinámica del conflicto entre quienes demandan su inserción plena en un proceso social que siempre los ha excluido y que hoy en tiempos de liberalización económica y ciudadanía política amenaza con seguir haciéndolo. Sus luchas no son por reivindicaciones del pasado; son formas de expresión real de los actores sociales, que muestran por donde consideran que se puede avanzar en la solución de sus necesidades.

La movilización social por el precio del maíz desarrollada en los ochenta y, sobre todo, la protagonizada en los noventa —al margen de los líderes que las hayan encabezado— son expresiones abiertas de rechazo a un modelo económico que viene agrediendo a una región y a sus habitantes, quienes al exigir el mejoramiento de las condiciones para la producción enfrentan, también, el previsible deterioro de sus condiciones de vida. En esta lucha, el autorreconocimiento como productores maiceros prevaleció por sobre identidades políticas o partidistas.

La movilización social de los últimos años corre paralela a un aparente desgaste de las prácticas corporativas, desarrolladas por organizaciones de corte oficialista, las cuales mediante prácticas clientelares mantuvieron durante años un fuerte control social a partir de la capacidad de gestionar recursos y vincularse con la burocracia institucional. Este desgaste está llevando a la construcción de dinámicas de organización, las cuales se proponen enfrentar, de manera diferenciada, los retos que la política de apertura económica impone a la región.

Al calor de la coyuntura zapatista, en los noventa, se desarrolla en la región una movilización social múltiple, determinada por el nuevo contexto nacional e internacional, donde cobra importancia la lucha por los derechos civiles y democráticos. La participación en estos procesos muestra, fundamentalmente, el desgaste de las viejas formas de control y las posibles vías de la construcción del sujeto social.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERONI, F., «El movimiento», en *Movimiento e institución. Teoría general*, Editora Nacional, Madrid, 1984
- ALLUP, L., «La ética católica y el espíritu del caciquismo», en M. Villa, *Poder y dominación. Perspectivas socioantropológicas*, URSHSLAC-Colmex, 1986
- ARIAS, A., «Conceptualización de los movimientos sociales», en *Los movimientos campesinos en el desarrollo rural: el caso de la Unión Campesina Democrática (1988-1998)*, tesis de maestría, UAM, 1999
- BLANCO, M., *Estudio de un proceso regional: el caso de La Frailesca, Chiapas*, tesis, Universidad Iberoamericana, México, 1980
- CASTILLO, M.T., *Producción y comercialización de granos básicos: el movimiento de la Unión Estatal de Productores de maíz de Chiapas*, tesis de maestría, UAM-X, México, 1988
- ESCALANTE, M.P., «Cambio y políticas modernizadoras en Chiapas», en D. Guillén, *Chiapas: una modernidad inconclusa*, Instituto Mora, México, 1995
- FOUCAULT, M., «¿Cómo se ejerce el poder?», *Siempre*, 1985
- LARAÑA, E., *La construcción de los movimientos sociales*, Alianza Editorial, Madrid, 1999
- MELUCCI, A., «¿Qué hay de nuevo en los movimientos sociales?», en E. Laraña, *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, s/e, 1994
- _____, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, Colmex, 1999

PROCESOS DE IDENTIDAD ENTRE LA POBLACIÓN CHICHIMECA Y OTOMÍ DE GUANAJUATO (1856-2000)

JORGE UZETA⁹⁵

I. INTRODUCCIÓN

Quiero iniciar con dos sucesos relativamente recientes. El primero: un coro infantil otomí, proveniente del municipio de Tierra Blanca en la sierra gorda guanajuatense, cantándole un popurrí de canciones regionales en otomí y castellano al entonces estrenado presidente Fox. El segundo: meses después, un representante chichimeca de la misma región serrana, del municipio de San Luis de la Paz, hablando ante la marcha zapatista sobre la explotación económica y la subordinación política de su comunidad. Si para explicar este contraste se dijera que la simpatía chichimeca hacia el zapatismo (e incipientemente hacia la idea de autonomía) es una reacción a la ruptura de sus lazos clientelares con el estado posrevolucionario y que la identificación otomí con el presidente panista resulta de algunas coincidencias prácticas de las comunidades indias con el mismo estado, se estarían señalando, de manera simplificada, cuestiones importantes.

Este tipo de altos contrastes, facilitados por la investigación de campo y archivo con un método de síntesis comparativa, son útiles para dilucidar, en términos regionales, las demandas planteadas por el movimiento indio nacional respecto a la autonomía y al reconocimiento jurídico de los pueblos indios, como sujetos de derecho públi-

⁹⁵ Investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato (CICSUG).

co⁹⁶. Ambos sucesos (los cantos a Fox y el discurso prozapatista) invitan a profundizar en la experiencia histórica diferencial de otomíes y chichimecas del noreste de Guanajuato, en su fragmentación interna, en las diferencias de fondo que mantienen entre sí y en la valoración que a través de esas experiencias particulares están haciendo de las demandas de autonomía.

La experiencia histórica diferencial a la que me refiero tiene que ver con la construcción de espacios sociales intrínsecamente contradictorios, en donde el estado posrevolucionario cumplió papeles sobre el efecto acumulativo —y también diferencial— de procesos previos. Me refiero, primero, a la manera en que el liberalismo decimonónico modificó la vida de los grupos serranos otomí y chichimeco y, segundo, a la presencia irregular de los proyectos posrevolucionarios en la zona, específicamente la reforma agraria y la educación pública. Mi argumento es que en el caso chichimeca, las mediaciones corporativas del estado sirvieron para modificar las normas internas y externas de interacción del grupo, afianzando algunos de sus emblemas y símbolos fronterizos, pero socavando sus expresiones de autonomía política; en el caso otomí, mediaciones más laxas permitieron, de manera progresiva, la diversificación política de sus comunidades y su mayor juego en la construcción actual de la alternancia democrática electoral en el ámbito municipal. A continuación, abordo, de forma muy general, el proceso vivido por las comunidades indias del noreste de Guanajuato, teniendo como referente de partida la Ley de 1856.

II. LA SIERRA Y LOS CHICHIMECAS

La sierra gorda guanajuatense puede caracterizarse, regionalmente, a partir de la coincidencia entre el crecimiento de haciendas

⁹⁶ J.R. Martínez Cobo ha definido a los pueblos indígenas a partir de su continuidad histórica con sociedades precolombinas, de su papel social no dominante, de su

agroganaderas sobre comunidades rurales y el auge minero que despuntó hacia 1890. El desarrollo minero organizó un espacio productivo, el cual enlazaba los centros de extracción del Mineral de Pozos y los de beneficio de minerales de San Luis de la Paz con el *hinterland* de haciendas rurales, que proveía de los insumos necesarios. Ramales secundarios organizados a partir del Mineral de Xichú y de la ciudad de San José Iturbide se extendían, con modestia, hacia los municipios serranos de Victoria, Tierra Blanca y Atarjea.

La construcción de redes económicas y políticas, las cuales cohesionaban este espacio social, se vio colapsada por la inseguridad social provocada por la Revolución, por una epidemia de influenza española, que en 1918 devastó demográficamente la zona y por la conjunción un tanto fortuita entre el agotamiento de algunas vetas, la crisis capitalista de 1929 y la rebelión cristera. Empero, la vocación agroganadera de zonas como San Luis de la Paz y San José Iturbide se mantuvo a través de haciendas y ranchos, cuyos dueños debieron enfrentar los embates de grupos agraristas emergentes vinculados con los caudillos revolucionarios.

El desarrollo minero y la expansión territorial de las haciendas, acelerada bajo la Ley de 1856, habían empujado a la dilución del componente étnico serrano a partir de la mixtura socioeconómica del mestizaje. A finales de ese siglo, subsistían, a pesar de todo, un par de poblaciones de raíz chichimeca y varias otomíes. Las primeras estaban ubicadas en la Misión de Chichimecas y en la Misión de Arnedo en los municipios de San Luis de la Paz y Victoria, respectivamente.

La Misión de Chichimecas, a un par de km de la ciudad de San Luis y a poco más del Mineral de Pozos, se encontraba inmersa en el

distintividad asumida y de su transmisión de territorio e identidad, «como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas jurídicos». Citado por Willem Assies, «Pueblos indígenas y reforma del estado en América Latina», en Willem Assies, Gemma van der Haar y André Hoekema (eds.), *El reto de la diversidad*, El Colegio de Michoacán, 1999, p. 24

trabajo de jornal agrícola y obrero, prácticamente proletarizada. Sus miembros, sin embargo, guardaban memoria del despojo que las haciendas agroganaderas de Ortega y San Cristóbal, entre otras, habían hecho de las tierras que la corona española les había reconocido a esas poblaciones desde el siglo XVI. Luego de las cruentas rebeliones serranas decimonónicas, los chichimecas habían insistido en recuperar sus tierras echando mano de vías legales⁹⁷. Años después, a la luz de las disposiciones carrancistas sobre tierras, sus fracasadas gestiones encontraron modos de solución mediante el agrarismo en ciernes: a contrapaso de las comunidades serranas amestizadas, las Misiones de Chichimecas y Arnedo tomaron partido por este proyecto, enfrentando a las guardias blancas y a las bandas cristeras vinculadas a los hacendados.

El agrarismo permitió a los chichimecas recuperar, por la vía ejidal, una pequeña porción de lo que asumían como territorio indio; en reciprocidad, concedieron una base social denodadamente fiel a los grupos políticos surgidos a la sombra de la Revolución. Parafraseando a Florencia Mallon, el estado posrevolucionario asumió demandas chichimecas previas en beneficio de las bases clientelares, que habrían de sustentarlo, aunque distorsionándolas en el proceso⁹⁸.

En este caso, la distorsión radicaba en que la Misión de Chichimecas no fue restituida con sus tierras, sino dotada de las mismas. La Misión había demandado el reconocimiento de sus derechos y en esa lógica sus dirigentes argumentaban que procedía la restitución; por diversas causas, incluido el pequeño número de solicitantes y la incapacidad para comprobar, de forma fehaciente, los despojos realizados por las haciendas, la Misión aceptó la dotación ejidal (que benefició a 143 de 170 solicitantes). Esto modificó, de manera sustancial, las relacio-

⁹⁷ Esta información y la restante provienen del expediente de dotación de Misión de Chichimecas, el cual está en el Archivo del Registro Agrario Nacional en Guanajuato.

⁹⁸ Florencia Mallon, «Reflections on the Ruins: Everyday Forms of State Formation in Nineteenth-Century México», en Joseph Gilbert M. y Daniel Nugent (eds), *Everyday Forms of State Formation*, Duke University Press, 1994

nes internas de la comunidad respecto a la tierra y al estado⁹⁹. La figura de comisariado ejidal, impuesta en el proceso y asumida por los hombres involucrados en la negociación, pronto desplazó a la organización política india tradicional, afincada hasta entonces en la autoridad cívico-religiosa de una gerontocracia. De manera semejante, la noción de comunidad fue supeditada a la de ejido, que adquirió relevancia como unidad político productiva.

En esos términos y mediante el vínculo entre un relevo generacional y uno de los proyectos posrevolucionarios más trascendentales, la Misión encontró el espacio para subsistir, como comunidad india, y para actualizar, con selectividad, ciertas imágenes útiles para la interacción política (como aquella que representa a sus miembros como feroces guerreros). En esta alianza, cumplida a través del corporativismo cenecista, los chichimecas reinventaron parte importante de sus rasgos identitarios de una manera afín a las necesidades políticas regionales del estado.

El perfil agrarista que asumieron los chichimecas reforzó el lenguaje de las relaciones sociales respecto a los mestizos de San Luis de la Paz y a su parroquia católica, ambos reacios a la intervención estatal sobre las propiedades agroganaderas. Previo al reparto, los chichimecas cargaban con el irónico estereotipo de ladrones de ganado, además del de flojos y borrachos, sintetizado en el uso despectivo del término *meco*. Al aceptar tierras del estado, algo moralmente inaceptable, pues era considerado un robo en buena parte de la sierra, las poblaciones urbana y rural mestiza reafirmaron la certeza de aquella perspectiva, convirtiendo al robo en una actividad característica chichimeca. No obstante, ya no se trataba de cualquier tipo de «ladrones»: ahora, estaban vinculados, de forma directa, al grupo encabezado por el localmente famoso

⁹⁹ Definir comunidad india no es sencillo. Aquí, me refiero al espacio social, expresado física y simbólicamente, que resulta de la interdependencia de un grupo de vecinos que ejercitan, de forma cotidiana, sistemas de autoadscripción, creencias, autoridad, etc., y que tienen raíz precolombina y/o colonial mediante instituciones propias (o adoptadas como tales).

agrarista Alfredo Guerrero Tarquín, que luchó por el control de San Luis de la Paz y de buena parte de la sierra en la década de 1920, obteniéndolo durante el cardenismo. Viéndose limitada desde la presidencia de Ávila Camacho, esta misma agrupación política se refugió en las instituciones agrarias, en las ligas campesinas y en las confederaciones del PRI, disputando candidaturas locales y proyectos para desarrollar la región.

Luego del sonado e importante triunfo que representó para los chichimecas su acceso a la tierra (que también fue un triunfo estatal, pues la capacidad institucional para orientar la interacción regional descansaba en el vínculo con los campesinos organizados), el ejido de la Misión encontró un deterioro progresivo a partir de la consolidación del estado posrevolucionario. Como parte del control de las organizaciones campesinas cenecistas a las que pertenecía, un grupo de familias chichimecas se hizo de la estructura del comisariado, manejándola bajo un discurso de reivindicación étnica que le permitió acceder a ciertos recursos —y a su distribución discrecional— y tener representatividad ante instituciones.

A pesar de que para mediados del siglo xx el crecimiento demográfico comenzaba a rebasar las capacidades productivas y políticas ejidales y no obstante que sus miembros debieron ligarse, de nuevo, al trabajo de jornal, la Misión se convirtió en parte de la franja rural que sostenía, fielmente, al sistema político mexicano. Sus luchas se dirigieron, entonces, al acceso de agua para riego (obtenida en los años setenta) y a la constante defensa de sus límites contra empresarios y rancheros vecinos, los cuales, a través de negociaciones ilegales con ejidatarios indios, llegaban a usufructuar extensas parcelas chichimecas.

Sólo la debacle del priismo guanajuatense, anunciada por la mayor beligerancia política de grupos empresariales abajeños durante los años ochenta y coronada por el acceso del PAN a la gubernatura estatal a partir de 1991, evidenció en toda su dimensión la descomposición del ejido

indio. Tras de sí, se acumulaban proyectos productivos fraudulentos¹⁰⁰, deudas bancarias, condonaciones ajustadas a necesidades electorales, renta ilegal de parcelas (avaladas, luego, por las reformas constitucionales promovidas durante el sexenio de Salinas de Gortari) y una lucha fraccional en la que despuntaban, como grupo de interés, las maestras de la escuela primaria.

En la actualidad, la Misión está en la situación de restablecer a la comunidad, como organización política, con autoridades propias que trasciendan y subordinen a las ejidales. Aquí, los jóvenes, de nuevo proletarizados y con un futuro incierto, están presionando para romper con las fidelidades políticas que aún mantienen sus padres y abuelos, aunque ellos mismos no vean, con entusiasmo, la presencia de nuevos partidos y la democracia electoral. Los jóvenes enfrentan la escasez de tierras de cultivo y tres condiciones más: 1) una segregación interiorizada y aplicada, según quién es «más» o «menos» indio, definida por la «pureza» de sangre, la membresía y el uso del idioma jonaz; 2) un ejido con há insuficientes y políticamente fragmentado en su interior; y 3) bajas retribuciones como jornaleros, que les impiden acceder a lotes dentro del mismo perímetro en que está asentada la Misión. Estos espacios están siendo comercializados a mestizos que, buscando sitios económicos para fincar y construir, han desbordando la ciudad de San Luis de la Paz. Al establecerse dentro de la Misión, los avecindados han profundizado las diferencias internas, aun sin proponérselo.

Esta mixtura potencialmente explosiva ha llevado a los jóvenes a valorar las demandas impulsadas por el movimiento indígena nacional, y a pensar en el territorio amplio que la corona española reconoció hace siglos a los chichimecas. El mismo que en su momento sus abuelos recuperaron, de forma parcial, al asumirse como clientela política de la posrevolución.

¹⁰⁰ Véase en Óscar Guerrero Vargas y M. Liliانا López Garfias, *Proyecto de desarrollo comunitario para la Misión de Chichimecas en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato*, tesina, Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro, 1994

III. LOS OTOMÍES SERRANOS

Una cosa distinta sucede con la población otomí del municipio serrano de Tierra Blanca. Ahí, la convivencia entre la cabecera mestiza y las 19 comunidades que forman la Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla se ha estructurado a partir de añejas rencillas por aguas y tierras y, más recientemente, por la competencia política electoral al interior de la estructura municipal.

A diferencia de la Misión de Chichimecas, la relación de la Congregación con el estado posrevolucionario fue oblicua. En primer término, nunca se requirió del ejido; gracias a una transacción infrecuente, para la región y la época, las comunidades otomíes fueron aceptadas como parte de una compañía, integrada por subarrendadores, que en el periodo de 1852-1871 compró y se repartió las tierras de la cercana hacienda del Capulín¹⁰¹.

Con sus parcelas en propiedad, los otomíes atemperaron, en buena medida, su carácter de jornaleros agrícolas y mineros, y diluyeron su perfil de luchadores por la tierra cuando la Ley de 1856 hacía estragos en muchas comunidades indias. Sin embargo, el liberalismo y, después, la Revolución contribuyeron a romper el vínculo existente entre los linajes otomíes y sus parcelas, probablemente recreado en la Colonia, a partir de nociones prehispánicas. A pesar de esto y gracias a una referencialidad mantenida ritualmente entre la geografía local y el orden supraterráneo y a que se trataba de tierras intermontanas de temporal muy limitadas en lo productivo, las parcelas circularon, como mercancías, sólo entre compradores otomíes bajo cierto principio de membresía.

Décadas más tarde, cuando los grupos agraristas emergentes disputaban las tierras de las haciendas y promovían la formación de

¹⁰¹ El Capulín estaba formado por terrenos de los hoy municipios de San José Iturbide, Doctor Mora y Tierra Blanca. Sobre la venta de la hacienda y el papel de los otomíes, véase *Apuntes históricos de la villa de San José Iturbide*, escritos en el siglo XIX por José Luis Mora y Rómulo Romero, edición preparada por Miguel Ferro Herrera, 1997.

¹⁰² P.
cultu.
El Cc
¹⁰³ En
india-
ba, ta

ejidos, los otomíes evitaron la reforma agraria y simpatizaron con las bandas cristeras que repudiaban el reparto de tierras. Su simpatía hacia los alzados obedecía a que el cierre de templos y la presencia del ejército federal en la zona alteraban el desarrollo de sus prácticas rituales, cuya complejidad radica hasta hoy en el entretrejo de referentes geográficos sexualizados, en la circulación continua de imágenes sagradas, en el abundante ofrecimiento de bienes de consumo y en un modelo de relaciones que señala la ubicación de género socialmente deseable¹⁰².

Pacificada la zona, los otomíes mantuvieron relaciones intermitentes con la CNC en su carácter de propietarios, pero un vínculo mucho más profundo con la CNOP, a la que ingresaron junto con los mestizos de la cabecera del municipio de Tierra Blanca, quienes en la década de los cincuenta controlaban los cargos políticos, el comercio, la ganadería, los pastos públicos y el transporte. La subordinación india estaba remarcada por la pérdida del idioma otomí, marginado por ciertas disposiciones del gobierno —las cuales estaban inspiradas en el nacionalismo revolucionario¹⁰³—, y por el peyorativo *tashíngue*, que retrataba a los otomíes como ignorantes, borrachos, flojos y practicantes de rituales tan elaborados como incomprensibles.

Asimismo, como parte del proceso posrevolucionario, la estructura municipal incorporó, en definitiva, a la Congregación como una de sus delegaciones, empatando la autoridad del representante indio con el sistema político nacional. Cabe señalar que entonces la estructura otomí de cargos aún mantenía cierta reminiscencia del sistema escalafonario cívico-religioso, cohesionado por el servicio gratuito a la comunidad y por el prestigio acumulado en el cumplimiento de

¹⁰² Para un análisis del ritual, véase Jorge Uzeta, *El camino de los santos. Historia y lógica cultural otomí en la sierra gorda guanajuatense*, tesis de doctorado en ciencias sociales, El Colegio de Michoacán, 2002.

¹⁰³ En la década de los treinta, se decretó la prohibición de que se vistiera con manta —vestimenta india— en las ciudades del estado. En ese contexto, hablar otomí o chichimeca resultaba, también, una clara desventaja política.

estas prácticas. Aunque el valor social del prestigio y cierta lógica de servicio aún se mantienen, en la actualidad, están claramente diferenciadas las esferas política y religiosa.

El delegado municipal y, de manera secundaria, los mayordomos de los santos se convirtieron en los puntos de confrontación contra los mestizos, reafirmados cuando en los años cincuenta el párroco de Tierra Blanca alentó y apoyó a aquéllos para fundar una escuela primaria en el centro de la Congregación. La idea de la escuela ya existía en el municipio, pero los mestizos gestionaban una sola primaria con la intención de establecerla en la cabecera. La pugna por la escuela, en la que el párroco apeló a relaciones personales —que presumiblemente llegaban hasta el gobernador— y en la que mestizos y otomíes utilizaron, de forma discrecional, sus redes cenopistas y cenecistas, actualizó la animadversión entre ambos.

Finalmente, fueron establecidas dos primarias: una, en la cabecera, y otra, en la comunidad de Cieneguilla, en el centro de la Congregación. La incapacidad del gobierno de Guanajuato para asegurar la asistencia de maestros al interior serrano —precariamente comunicado hasta finales de los años sesenta— abrió la posibilidad para que el párroco negociara con el gobierno de la entidad, con su diócesis (de Querétaro) y con las comunidades indias la incorporación de hermanas religiosas como maestras a la escuela. Muy queridas localmente, hasta hoy imparten clases en la de Cieneguilla.

Confirmando la suspicacia de algunos mestizos, la primaria fue el sitio en el que se perfiló un grupo de interés otomí políticamente sagaz que, primero, utilizó y, luego, desplazó las nociones tradicionales de autoridad y de representatividad que habían recaído en el delegado municipal. Cuando apenas iniciaba ese proceso, la agrupación fue capaz de disputar, con éxito, la candidatura y la presidencia municipal a los mestizos dentro del mismo PRI, en 1967, aprovechando coyunturalmente el relevo en la gubernatura de Guanajuato, sus redes cenopistas y la introducción de una carretera que fisuró el domi-

nio económico de la cabecera. La relevancia política de este grupo otomí, ligada a una esmerada dirección escolar por parte de los maestros (varios de ellos originarios de las mismas comunidades congregadas), se acrecentó a partir de 1982, año en que volvió a ganar la presidencia municipal, la cual fue potenciada con la fragmentación priista en la década de los noventa.

En estos años, la Congregación encaró en su interior el surgimiento de grupos que, pugnando por el control de recursos ante los mestizos e incluso disputándolos entre las propias comunidades, dieron un juego político que el corporativismo priista y las asambleas municipales de ese partido fueron incapaces de acotar. En consonancia, terminó por asentarse un discurso muy elaborado de orgullo étnico que de forma simultánea enfatizaba la oposición a la gente de la cabecera municipal y valoraba el sistema ritual como parte sustancial de la identidad local. Desde entonces, este sistema ritual se ha ampliado, incorporando «nuevas tradiciones» sobre una lógica reconociblemente otomí, lo que ha implicado una creciente circulación de bienes de consumo y un reforzamiento de la identidad en contextos políticamente diversificados¹⁰⁴.

Gracias a alianzas coyunturales facilitadas por un lenguaje compartido, que ubica a los mestizos como enemigos históricos, los grupos políticos de la Congregación lograron controlar al municipio desde finales de los años ochenta y mantenerlo durante más de una década. Al principio, accedieron a la presidencia a través del PRI; pero reaccionando a lo que consideraron un fraude en una asamblea municipal priista, rompieron el monopartidismo *de facto* que había imperado en Tierra Blanca durante más de 50 años para ganar con un PRD recién formado. En una nueva reubicación, en la actualidad, mantienen la presidencia bajo las siglas del PAN, luego de una contienda que presentó a seis partidos

¹⁰⁴ A propósito de las tradiciones inventadas, véase la introducción del texto editado por Eric Hosbsabwm y Terence Ranger: «The Invention of Tradition», Cambridge, University Press, 1988

con seis candidatos, cinco de los cuales provenían de las comunidades indias. Esta capacidad política queda retratada en la frase local que asegura que «los indios tienen el poder en Tierra Blanca».

En este contexto, como parte del discurso étnico de la agrupación encabezada por los maestros, el coro infantil de la escuela primaria de Cieneguilla, dirigido por ellos y por las maestras religiosas, le ha cantado al gobernador y, luego, al presidente Fox. Éste, por su parte, ha puesto al coro como ejemplo de que la educación pública resulta compatible con «valores morales»¹⁰⁵.

IV. REFLEXIONES FINALES

Lo expuesto indica que las contradicciones generadas por la aplicación discontinua de los grandes proyectos posrevolucionarios reafirmaron dinámicas particulares indias que se remontaban al menos al siglo XIX. Como parte de la construcción regional de las redes de poder estatal, los sistemas tradicionales de organización india fueron desplazados a través del agrarismo y la escuela pública. Sin embargo, esto mismo contribuyó para que chichimecas y otomíes reformularan sus rasgos identitarios y se reubicaran con mayores ventajas respecto a los grupos mestizos serranos.

En estos términos, los chichimecas se asumieron como un engraje de la maquinaria autoritaria posrevolucionaria, buscando revertir los efectos del liberalismo decimonónico; además, inhibieron los rasgos de autonomía política utilizados para intentar hacer válidos sus derechos sobre la tierra en el periodo prerrevolucionario. En tanto, los vínculos que unieron a los otomíes con el estado paliaron la notable ausencia del corporativismo y clientelismo ejidal

¹⁰⁵ Esta referencia proviene de una de sus visitas a la Congregación cuando todavía era gobernador. El perfil religioso de las maestras estaría representando los valores a los que se refería.

a través de un laxo corporativismo «popular», obteniendo resultados menos contundentes.

Sin comprometer las cargas histórica, emotiva y política de su identidad étnica, que han sintetizado en símbolos religiosos y en la cantidad de prácticas que dan cuerpo a un complejo sistema ritual, las 19 comunidades congregadas son hoy entidades mucho más diversificadas en su constitución interna. Como consecuencia, están abiertamente comprometidas con la construcción de un entorno de competencia electoral, de definición de grupos de interés y de presencias municipales estrechamente vigiladas. Desde luego, los problemas y las tensiones entre las comunidades se han multiplicado, lo mismo que sus capacidades de acción y la fuerza política de sus discursos identitarios.

Así, la comprensión diferencial del liberalismo y del proceso posrevolucionario en la sierra gorda resulta útil para matizar ideas de dominio, subordinación y resistencia, como la esquemática metáfora de «desde arriba» y «desde abajo», que ofrece la perspectiva de posiciones de control y subordinación bastante fijas. Al respecto, se han hecho continuas propuestas para matizar este esquematismo, pero sin desechar la metáfora verticalista. Por ejemplo, en un esfuerzo reciente, Steve Stern ha propuesto la metáfora de «colonización al revés» para explicar la indianización del proceso de construcción estatal¹⁰⁶. Aunque básicamente estoy de acuerdo con esa perspectiva, las historias otomí y chichimeca sugieren que los grupos indios tienen posiciones variables —a veces de subordinación, de dominio y de cooperación respecto de otros actores (iglesia, estado, mestizos, etc.)— dependiendo del momento histórico que viven, de lo que se encuentra en disputa y de las alianzas que logran articular. Por consiguiente, las relaciones entre comunidades y estado (e incluso

¹⁰⁶ Véase el texto de Stern, «La contracorriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado, siglos XVI a XX», en Leticia Reina (coord.), *Los retos de la etnicidad en los estados nación del siglo XXI*, CIESAS/INI/Porrúa, 2000

entre comunidades y mercado) se muestran menos como contraposiciones automáticas y más como resultado de alianzas y pactos en los que los grupos indios pierden, ajustan y reinventan sus características. Por esto, los jóvenes chichimecas simpatizan con los planteamientos autonómicos, mientras que las comunidades otomíes serranas no se sienten, hasta ahora, aludidas por la cuestión.

A propósito de la autonomía, se ha señalado que uno de sus fines «es garantizar el mantenimiento de la identidad y el desarrollo de los pueblos en el marco de un estado plural». La cita corresponde a Luis Villoro¹⁰⁷; este autor ha propuesto, además, la idea de «ciudadanía restringida» como «un marco común para la unión de pueblos diferentes». A partir de ello, enumera facultades autonómicas, basadas en derechos culturales, a la educación, al mantenimiento de usos y costumbres, al territorio, etcétera. Con esta posición, Villoro esgrime derechos culturales, económicos y jurídico-políticos, soslayando que los elementos que les dan cuerpo (como el uso del idioma autóctono, la educación, los sistemas de usos y costumbres, el control de los medios de vida, etc.) se encuentran marcados por el desarrollo histórico diferencial de los grupos indios. Es decir, estos pueblos y sus identidades son resultado de procesos complejos y desiguales, los cuales han fomentado su heterogeneidad interna en términos económicos, políticos y culturales. Por ejemplo, los usos y costumbres y los mecanismos de consenso en torno a organizaciones políticas tradicionales prácticamente han desaparecido entre chichimecas y otomíes guanajuatenses¹⁰⁸.

Eso último aconteció por imposiciones externas y como estrategias prácticas de los mismos grupos indios serranos a la luz de la

¹⁰⁷ Véase en *Estado plural, pluralidad de culturas*, Paidós/UNAM, 1999, p. 104-105

¹⁰⁸ M. Cristina Velásquez plantea paradojas muy interesantes respecto de los usos y costumbres en «Fronteras de gobernabilidad municipal en Oaxaca, México: el reconocimiento jurídico de los "usos y costumbres" en la renovación de los ayuntamientos indígenas», en Willem Assies, Gemma van der Haar y André Hoekema (eds.), *El reto de la diversidad*, El Colegio de Michoacán, 1999.

satisfacción de necesidades concretas en momentos históricos precisos. Siendo así y más allá de la justicia que anima las aspiraciones autonómicas indias, cabe preguntar: ¿quién y cómo va a definir hoy lo que es tradicional en las formas indígenas serranas de organización política?

BIBLIOGRAFÍA

- ASSIES, W., «Pueblos indígenas y reforma del estado en América Latina», en Willem Assies, Gemma van der Haar y André Hoekema (eds.), *El reto de la diversidad*, El Colegio de Michoacán, 1999
- GUERRERO VARGAS, Óscar, y M.L. López Garfías, *Proyecto de Desarrollo Comunitario para la Misión de Chichimecas en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato*, tesina, Facultad de Sociología-Universidad Autónoma de Querétaro, 1994
- HOBBSBAWM, Eric, y T. Ranger, *The Invention of Tradition*, University Press, Cambridge, 1988
- MALLON, F., «Reflections on the Ruins: Everyday Forms of State Formation in Nineteenth Century México», en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*, Duke University Press, 1994
- MORA, José Luis, y Rómulo Romero, *Apuntes históricos de la villa de San José Iturbide escritos en el siglo XIX*, ed. preparada por Miguel Ferro Herrera, 1997
- STERN, S., «La contra corriente histórica: los indígenas como colonizadores del estado, siglos XVI a XX», en Leticia Reina (coord.), *Los retos de la etnicidad en los estados nación del siglo XXI*, CIESAS/INI/Porrúa, 2000
- UZETA, J., *El camino de los santos. Historia y lógica cultural otomí en la sierra gorda guañajuatense*, tesis de doctorado en ciencias sociales, El Colegio de Michoacán, 2002
- VELÁSQUEZ, M.C., «Fronteras de gobernabilidad municipal en Oaxaca, México: el reconocimiento jurídico de los "usos y costumbres" en la renovación de los ayuntamientos indígenas», en Willem Assies, Gemma van der Haar y André Hoekema (eds.), *El reto de la diversidad*, El Colegio de Michoacán, 1999
- VILLORO, L., *Estado plural, pluralidad de culturas*, Paidós/UNAM, 1999

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

OF

SCOTLAND

IN

SEVEN VOLUMES

THE SECOND

VOLUME

CONTAINING

THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

FROM

THE

END OF

1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

ABRIR MENTES Y CORAZONES EN LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONISTAS¹⁰⁹

GISELA LANDÁZURI BENÍTEZ¹¹⁰

INTRODUCCIÓN

La exigencia actual de las organizaciones indígenas de que sean reconocidos y respetados sus derechos como pueblos indios no concluye con la promulgación de leyes y reglamentos. Este reconocimiento también hay que construirlo socialmente en la interacción cotidiana entre actores indios y no indios. Los proyectos de desarrollo rural, la intervención institucional en las comunidades o el ejercicio profesional de quienes prestan sus servicios en el medio rural son ámbitos en los que se reavivan redes de relaciones, conocimientos, intereses y sentidos en los que las perspectivas culturales de los sujetos se ponen en juego. ¿Cuál es la formación con que se ha armado a dichos profesionistas? ¿Cuál es el sentido de su accionar? ¿Cuál es el lugar del conocimiento, del portador del conocimiento y del proceso de aprendizaje? ¿Qué perspectiva ética y cultural habría que incorporar a los planes de estudio universitarios y a los de actualización de los trabajadores del desarrollo?

La presente reflexión se refiere, en particular, a los profesionistas que pueden desarrollar tareas en el medio rural, o sea, a un gran número de egresados de las carreras de las universidades e institutos tecnológicos de este país (desde las que se inscriben en las cien-

¹⁰⁹ Este texto fue elaborado a partir de Landázuri (2001)

¹¹⁰ Miembro del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

cias sociales, las humanidades, las biológicas y de la salud hasta las áreas del diseño, arquitectura e ingeniería). Los espacios y tareas a desarrollar son múltiples y van más allá de lo que tradicionalmente se realiza.

Durante décadas de experiencias de desarrollo rural junto a los pobladores del campo, en México, se ha dejado sentir la presencia de técnicos, profesionistas y trabajadores del desarrollo. Cientos de programas de desarrollo rural, de políticas económicas, agrícolas, agrarias y educativas y de campañas modernizadoras del medio rural han dejado su huella en la sociedad rural.

Los que pudieron ser encuentros de creatividad y procesos de construcción de opciones con efectos positivos para los sujetos centrales del desarrollo no siempre lo fueron. Se observa un cúmulo de «desencuentros» con los grupos y organizaciones rurales locales que llaman a la reflexión. Por mucho tiempo, los «fracasos» de las acciones de desarrollo¹¹¹ se atribuyeron a las deficiencias, «ignorancia» o corrupción de los involucrados, a la concepción misma de las propuestas gubernamentales, a las condiciones del mercado, entre otros factores.

En las últimas décadas, grupos y organizaciones rurales locales han cuestionado, de manera activa, la orientación de las políticas económicas que los afectan directamente, y algunos han ensayado alternativas menos devastadoras en términos económicos, sociales y ecológicos.

A su vez, la necesaria reforma del estado apunta, en los últimos años, a una nueva relación sociedad-estado, en la cual se redistribuyan tareas, responsabilidades y compromisos entre la administración pública y la iniciativa privada individual y colectiva; así, se habla de la llamada corresponsabilidad con la pretensión de «delegar» tareas a la sociedad civil, delineando un nuevo perfil que se refuerza con un discurso de concertación y de «participación democrática» de la sociedad.

¹¹¹ El término de desarrollo rural incluye iniciativas que en la última década se han denominado de «combate a la pobreza».

No obstante, las condiciones de pobreza, de producción y de reproducción de amplios sectores de la población rural seguirán exigiendo políticas y acciones de desarrollo, como vías para atender innumerables necesidades y abrir opciones que incidan en mejorar el acceso a la educación, la salud, los recursos financieros y otros servicios y recursos que coadyuven a reparar y expandir las condiciones de reproducción biológica, material y cultural de dicha población. De igual manera, seguirá siendo solicitada la presencia de los profesionistas que desde diversos ámbitos —gubernamental, no gubernamental o por medio de organizaciones— han fungido, tradicionalmente, como los operadores o asesores de las iniciativas correspondientes.

Sin embargo, las transformaciones que ha sufrido la vida social nacional y rural en los últimos años han venido a cuestionar las funciones que deben desempeñar dichos trabajadores del desarrollo rural, el sentido de su presencia y los estilos de interacción e intervención en los procesos de desarrollo.

Como especialistas en diversas disciplinas, los profesionistas portan información y habilidades que pueden sugerir o prescribir soluciones a problemáticas específicas: agronómicas, nutricionales, arquitectónicas y legales por mostrar una gama de intervenciones posibles. Durante décadas, los servicios profesionales para el desarrollo rural se inscribían, por lo general, en programas y proyectos alejados de los intereses y perspectivas de sus destinatarios. Día con día, se han ido acotando más las funciones de esos especialistas, porque los «patrocinadores» de los programas presentan nuevas directrices o se han diversificado sus operadores —como el caso de las ONG— y porque los actores sociales locales, sus organizaciones y los procesos más amplios —que van contribuyendo a repensar relaciones, estilos y compromisos del quehacer profesional en el medio rural— están apropiándose de dichos procesos. En consecuencia y como ha sido a lo largo de la historia del desarrollo, las funciones se seguirán actualizando y ahora negociando.

Alumnos de la maestría en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco hablan de ser «acompañantes» de los procesos y de la «construcción conjunta» con los actores rurales locales, así como de definir compromisos. Retomar la función de acompañantes o «facilitadores» no es una propuesta nueva, pues ha sido promovida desde la metodología de Paulo Freire, e impulsada, con energía, en las comunidades eclesiales de base (CEB); es la tendencia actual que se propone, de manera insistente, desde muchas ONG y estudios del desarrollo participativo, como los de Chambers (1997 y 1998). Sin embargo, adquiere otros sentidos frente a las nuevas dimensiones de la participación local. Las relaciones de poder también han cambiado.

Los sentidos que atribuyen los profesionistas a sus tareas y relaciones con los otros actores del desarrollo se ubican en el terreno político y ético, de acuerdo con sus vocaciones y sus visiones de futuro.

El reto para los asesores dispuestos a salirse de las inercias, vicios y estilos heredados y reproducidos durante décadas por generaciones es desestructurar la propia mirada. Propongo explorar —en los ámbitos epistemológicos y teórico-metodológicos— algunas temáticas que puedan constituirse en herramienta para la acción de técnicos y profesionistas vinculados con tareas entre la población rural.

LOS RETOS DE LA ACCIÓN PROFESIONAL

Hasta la fecha, buen número de proyectos de desarrollo rural ha sido motivado por la intervención de instituciones gubernamentales que intentan influir en los destinatarios para que acepten propuestas que implican cambios en sus procesos productivos —económicos o tecnológicos— o en áreas de su vida cotidiana en el caso de programas de salud y nutrición; modificaciones que pueden impactar el modo de actuar, pensar y estar de los individuos y las colectividades. Los téc-

nicos y profesionistas han sido actores clave en esas tareas de promoción del desarrollo. A su vez, los campesinos y el medio rural han sido considerados como «objetos del desarrollo». Durante esos encuentros, se forma una trama en la cual, mediante tácticas, se intercambian, negocian o confrontan las formas y contenidos de un proyecto.

Quiero llamar la atención sobre los factores culturales que afloran en las interacciones a propósito de los proyectos de desarrollo rural: los mapas cognoscitivos de unos y otros actores, que dan direccionalidad y sentido a dichos encuentros y que a menudo aparecen como confrontaciones «silenciosas», y las implicaciones o repercusiones que pueden tener las modalidades técnicas y organizativas que se proponen en la vida cotidiana de los destinatarios. Las diferencias surgen entre locales y externos; entre los protagonistas, un sinnúmero de experiencias y procesos influyen en la construcción de perspectivas.

El punto de intersección entre «actores externos y locales» se da, por un lado, en el discurso y las acciones institucionales en torno al desarrollo rural o al combate a la pobreza y, por otro, en la búsqueda cotidiana que emprenden los actores rurales locales —productores, mujeres y familias campesinas— de opciones económicas y sociales para mitigar las carencias individuales y colectivas.

Ese campo de construcción social es, entonces, una suerte de arena, donde se ponen en juego las perspectivas de los actores, los conocimientos que las sustentan, las formas de comunicación, el afán de control y, a fin de cuentas, los intereses y los sentidos que cobran para ellos las posibles acciones. La infinidad de situaciones que pueden emerger a partir de cada proceso refuerza la sugerencia de analizarlo en particular y de considerar las concepciones, discursos y limitaciones estructurales que orientan las acciones institucionales, así como de pensarlos en el marco específico del desarrollo rural local y de cada experiencia. Los conflictos que surgen o las divergencias que

aparecen en el curso de un proyecto son representaciones simbólicas de un contexto social de por sí contradictorio. En ocasiones, es muy difícil comprender el momento si no se conoce, de manera suficiente, ese contexto social; con frecuencia, éste no está visible durante la dinámica de interacción, pero sí reverbera; los actores locales evalúan los proyectos desde los referentes de su quehacer cotidiano, productivo, económico, social, cultural y político. ¿Cómo afectarán los proyectos su dinámica familiar, social y comunitaria?, ¿qué habilidades se requieren para desarrollar la nueva actividad?, ¿con qué disponibilidad de tiempo, espacio y recursos se cuenta?, ¿se trata de una opción para aliviar su situación actual?, ¿qué intenciones están detrás de la intervención del estado? Éstas y muchas otras preguntas no verbalizadas cruzan la mente de los destinatarios de los proyectos en esos momentos, y sus respuestas afectan los objetivos y propósitos de las instituciones interventoras.

Los estímulos no actúan, de manera automática, como detonadores; sólo si encuentran agentes condicionados para reconocerlos pueden generar algún efecto. Para Bourdieu (1991), lo posible se funda sobre experiencias pasadas más que sobre reglas pasadas, y difícilmente traspasa lo impensable, lo que no se puede conocer a partir de las condiciones de producción sociales e históricas. De allí la importancia de la congruencia y armonía que los actores locales puedan percibir entre su dinámica socioeconómica cultural cotidiana y las nuevas prácticas que se proponen cobrar gran relevancia. Éstas también son relaciones con los poderes.

Lo habitual, lo natural y lo cotidiano no se conciben como modificables y cuando entran en crisis se vuelven problemáticos. El miedo a la pérdida de lo conocido, de lo ya poseído, está ligado a la falta de instrumentos (experiencia) para operar sobre la nueva situación. Esto genera gran ansiedad, inseguridad y un sentimiento de incertidumbre. Las respuestas pueden ser muy diferentes: la resistencia violenta, la

adaptación aparente y la fuga. En todo caso, los cambios ponen en crisis la cotidianidad.

La intervención estatal y de los trabajadores del medio rural requiere mayor comprensión de las respuestas de sus interlocutores, pues frente al cambio no se pueden suponer reacciones lineales o convergentes sino que dependen del contexto y de la historia de los sujetos; dicho en otras palabras, se necesita reconocer «lo posible» desde la experiencia de los sujetos o respetar el significado que para ellos tienen sus hábitos y su visión de futuro.

En cuanto al quehacer del promotor, si en algún momento se consideró que su adscripción laboral a una dependencia gubernamental y sus respectivos programas lo marcaban, ahora habría que agregar el factor humano que está en juego y la verticalidad de cada miembro, o sea, la constitución de cada uno, la historia personal y del grupo social al que pertenece, la cultura, los afectos, las aspiraciones y la resignificación de las experiencias anteriores que lo hacen relacionarse en formas muy particulares y relaborar la información con un enfoque y un estilo determinados. Al igual que en las y los campesinas, la vida cotidiana de las y los asesores va formando una mirada y un sentido de su existencia, que después marcarán la direccionalidad de las propuestas, de las acciones y de las utopías. Es importante tener conciencia de que todos estos elementos norman la interpretación del profesionista sobre los lineamientos de la institución que representa, la visión que se ha construido del otro y, por lo tanto, el lugar desde el cual se coloca frente a él, la actitud, la función y el sentido que le confiere a su trabajo.

LOS RETOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Cuando hablamos de cultura, no nos referimos sólo a lo intangible y a las relaciones simbólicas—, que le da significado a la experiencia hu-

mana, sino a su traducción en las formas de vida de los individuos y los grupos: maneras en que comen, cuidan su cuerpo y su entorno, hacen política, comercian, cantan, organizan su tiempo y espacio, etcétera. Todas las prácticas formales e informales de los hombres (y de las mujeres) tienen sentido en las fronteras de esa cultura y están, a su vez, permeadas por ella. De la misma manera, la información y los marcos de conocimiento en torno a los cuales se forma a los alumnos de las universidades también están impregnados de una visión del mundo que corresponde al proyecto civilizatorio occidental, que da sustento a la cultura que nos ha ido constituyendo como individuos y seres sociales.

En el aula, somos repetidores y reproductores de esa «verdad», la cual, por cierto, no es la verdad; al defenderla, con tanta vehemencia, parece que no reconocemos la existencia de otras verdades que están disputando otros sentidos de la vida. ¿Hasta dónde se capacita al futuro profesionalista para reconocer otras visiones y comprender, respetar y contribuir al fortalecimiento de aquellas prácticas que dan vida a los grupos y a las comunidades, aunque no sean las nuestras?

Un ejemplo sería abrir la discusión del desarrollo rural alternativo —humano, autónomo, democrático y liberalizador, como puede también ser adjetivado—, buscando más que una definición su campo de potencialidades y las intenciones o direccionalidades que respondan a las siguientes interrogantes: el desarrollo, ¿hacia dónde o para qué; quiénes y para quién; cómo? Estas preguntas no siempre se plantean desde las distintas disciplinas.

La primera pregunta tiene que ver con el horizonte de desarrollo que se comparte, elemento que puede vincularse con un proyecto de nación, con una idea de futuro, con un sentido y con el hilo conductor de todos los niveles de la vida humana, desde sus formulaciones abstractas hasta las acciones.

La segunda cuestión se refiere a los actores y beneficiarios directos del desarrollo, así como a individuos que pueden contribuir a la

construcción del proyecto. Desde las experiencias históricas de este siglo, el orden de los actores responsables ha sido: las instituciones, los profesionistas y los campesinos; estos últimos en su carácter de productores, consumidores, trabajadores, pobres, «ignorantes» o «atrasados». Habrá que estar abiertos a que ese orden cambie y a que el protagonismo de los actores sea autoasignado.

También, hace falta abordar, con profundidad, las características de los que son parte del equipo y del drama del desarrollo rural. ¿Cuáles son las identidades de los trabajadores del desarrollo?, ¿cuáles son sus luchas, sus utopías y las visiones y sentidos de sus actividades?, ¿qué los vinculó y los mantiene en ese ámbito laboral, social y profesional?

Hasta dónde se trabaja lo que señalan autores como Devereux (1991) y Landovski (1993): ese antropocentrismo (ignorado o negado) «que busca que los otros se vuelvan “como nosotros”, que trata de ignorar el “derecho a la diferencia” y de no respetar que todo sujeto tiene derecho a ser precisamente “lo que es”», como la asimilación que se ha intentado a través de la política indigenista, o el etnocentrismo, que considera que los valores de la sociedad a la que se pertenece son universales, y menosprecia o condena a quienes actúan fuera de ellos. El etnocentrismo, en otra acepción, está ligado a los «prejuicios nacionales» y a las verdades científicas, entre otros factores.

Tenemos, por un lado, los contenidos que responden a planteamientos ligados al embrujo del progreso, de la modernidad, de la ciencia, de la tecnología, de la homogeneización, etc., y, por otro, lo que está detrás de nuestro discurso.

La apertura y la interdisciplinariedad, que caracterizan propuestas pedagógicas, tienen que ir más allá, pues a fin de cuentas todas las áreas de conocimiento que se imparten en las instituciones de educación superior se estructuran sobre el mismo proyecto civilizatorio y no toman en cuenta que millones de habitantes de este país piensan, sueñan y actúan desde otros lugares.

Para dichas instituciones, la tarea es más amplia: no es suficiente tener el conocimiento de cómo lo cultural atraviesa la acción humana, sino que es necesario saber cómo actuar y conducirnos ante la diferencia, al prestar nuestros servicios.

De acuerdo con la propuesta pedagógica del sistema modular de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, el proceso de enseñanza-aprendizaje apunta, también, a la modificación de actitudes y aptitudes frente a la realidad. En este sentido, incorporar el ángulo de lectura de la cultura debe implicar, también, el nivel de las relaciones humanas. Renato Rosaldo (1991: 35), un antropólogo de Estados Unidos, señala una razón:

«La traducción de culturas necesita que comprendamos otras formas de vida en sus propios términos. No podemos imponer nuestras categorías en la vida de otras personas, porque quizá no se apliquen a éstas; al menos no hacerlo sin una seria revisión».

Vuelvo a la pregunta: ¿desde dónde miramos al otro? y ¿cómo se construye esa mirada?

Al interactuar con el otro —mirarlo, escucharlo, interpelarlo e interpretarlo—, se dispara un proceso de conocimiento que echa mano de las experiencias y de las concepciones conocidas y actualiza los significados sociales. Se asume una postura.

RETOS EPISTEMOLÓGICOS

Lo epistemológico es un procedimiento de razonamiento y marca nuestra postura —posición y actitud— en el proceso de conocimiento. Cuando se trata de conocer, comprender y analizar la realidad con la cual se está o se estará interactuando —por razones laborales, políticas o académicas—, las características del proceso de conocimiento y el lugar en el que se sitúen el sujeto y el objeto de conocimiento darán la pauta para las lecturas que se realicen.

Frente a las explicaciones unidimensionales, es importante reformular el problema que se estudiará desde otros parámetros, rompiendo con las coordenadas habituales-disciplinarias, pues ha sido evidente que por esa vía sólo se obtiene una visión fragmentada de la realidad. Ésta es una tarea difícil para los científicos, pues desde su disciplina o una posición etnocentrista se han erigido como «portadores de la verdad». Se requiere una mirada nueva y una actitud abierta del intelectual, el cual sin poner por delante sus juicios de valor reconozca y ponga a prueba otras formas de construcción del conocimiento, y acepte la validez de la diversidad de representaciones que no caen dentro de la cosmovisión o de las prácticas sociales del grupo al que pertenece.

Las rupturas tienen que partir de la disposición, de la apertura para expandir el campo de la experiencia, de reconocer otros métodos y de aceptar que el objeto de conocimiento se puede reconstruir desde múltiples ángulos de lectura.

Devereux (1975) ejemplifica la necesidad de despojarse de todo prejuicio al encontrarse con lo desconocido, de afinar todos los sentidos y, finalmente, de estar abiertos a nuevos aprendizajes.

A estas cualidades del sujeto cognoscente en el proceso de conocimiento les llamo apertura: darse la posibilidad de enriquecimiento con lo que el otro aporta, estar receptivo a otros criterios de percepción y análisis de lo que se nos muestra y permanecer abierto al diálogo posterior.

Esta actitud es la que requieren los trabajadores del desarrollo cuando se encuentran con distintas formas de apropiación de la realidad y con conocimientos que también suponen otras visiones del mundo.

Un punto inicial es empezar por el reconocimiento de la diversidad de conocimientos y prácticas que se ponen en juego en torno a un proyecto de desarrollo y revisar la comunicación entre dos o más lógicas. En palabras de Bartolomé (1997: 20): «El futuro de una sociedad orgánicamente plural requiere que los protagonistas de los sistemas articuladores interétnicos se conozcan mejor y que esa nueva

relación esté libre de los estereotipos ideológicos y prejuicios estigmatizantes adjudicados a la condición indígena».

En esa línea, Chambers, que en 1983 había titulado uno de sus libros: *Putting the Last First*, 14 años después cambia de foco y da a luz una publicación (1997) con el título inverso: *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. En las primeras páginas, explica que está convencido de que gran parte del problema «somos nosotros, los profesionistas del desarrollo» y de que parte de las soluciones hay que buscarlas en los cambios «en nosotros», pues parece ser que pasar a los poderosos al final es mucho más difícil; esto es, que los privilegiados descendan, se sienten, escuchen, aprendan de los débiles y últimos, y contribuyan a empoderarlos (Chambers, 1997: 2).

Para que los profesionistas cumplan una función más congruente, como asesores o acompañantes, no basta la formación académica tradicional, sino que es necesario tomar conciencia de toda esta problemática y desarrollar actitudes y aptitudes acordes con su planteamiento político y ético. Se requiere partir de la autopercepción de sí mismos, del reconocerse y conocer los ángulos desde los cuales se mira, se comunica con los interlocutores y se actúa.

Reconocer el lugar que se desea ocupar en el proceso de construcción de alternativas de desarrollo está muy ligado al sentido personal que se atribuye a las tareas a desarrollar e implica la reflexión individual y colectiva del compromiso que se adquiere con los actores y en el nivel personal, como constructores de esos procesos.

RETOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS.

MIRADAS DE LOS ACTORES DEL DESARROLLO RURAL

Los conocimientos de la sociedad occidental parten de premisas distintas a las de los grupos y sociedades rurales, y éstas también expresan múltiples matices en su interior.

Aunque confrontar los conocimientos de los miembros de la sociedad occidental con los de los grupos rurales conlleva el riesgo de plantear juicios absolutos en sociedades tan plurales, no puedo soslayar que las preguntas siguen presentes: ¿Cuáles son las diferencias de cosmovisiones de las sociedades a las que pertenecen los profesionistas y los grupos campesinos de distinto origen étnico o no? ¿Realmente son incompatibles? ¿Cuáles rasgos esenciales parecen ser irrenunciables y cuáles se han ido transformando? Este tema tiene muchas lecturas; enumero tópicos útiles para esta exposición con base en autores que se aventuraron a dicha comparación desde sus estudios particulares sobre grupos étnicos y campesinos (Clifford Geertz, Armando Bartra, Miguel Alberto Bartolomé y Carlos Lenkersdorf). Aunque se puede poner en entredicho la validez de sus señalamientos para otras experiencias, propongo examinar más que el contenido específico del análisis su pertinencia, en orden de generar nuevas preguntas sobre las confrontaciones culturales.

Desde hace más de 500 años, los exponentes en turno de la sociedad dominante se han propuesto imponer su cultura y su cosmovisión como universales, mostrando absoluto desprecio por las otras culturas y cosmovisiones y por los que se identifican con ellas. Esta postura etnocéntrica marca, de antemano, una actitud frente a las formas de pensar, sentir y actuar que no comulgan con sus principios y valores. Esto sucede en todos los ámbitos de la vida: en la explicación «científica» del mundo y de la naturaleza, en las prácticas y creencias religiosas, en el sentido de la producción material y en las formas de organización familiar y comunitarias.

En la actualidad, la racionalidad del pensamiento y de las acciones de la sociedad dominante promueve el progreso y la rentabilidad como premisas para la acumulación, por cierto, en beneficio de una reducida minoría «y a costa tanto de las mayorías como de nuestra madre Tierra» (Lenkersdorf, 1996: 65). Los que se guían por la razón establecen una relación sujeto-objeto frente a todo, trátase de cosas,

la naturaleza u otros humanos. Sin discriminar, explotan a todos, no respetan la vida y piensan que todo está a su disposición. Las «recetas» ignoran las formas tradicionales de producción y apropiación de la naturaleza, los conocimientos, las habilidades, las preferencias, las experiencias y los patrones y relaciones sociales de los productores (Arce, 1993: 153) y, por lo tanto, privilegian lo que resulta más conveniente y «rentable» para ese orden social.

Mientras que la perspectiva dominante se asienta en el esfuerzo individual y en la competitividad, como exige la directriz modernizadora actual, para Bartra: «La economía moral del campesinado no siempre es “competitiva”, pero su eficiencia social es muy superior a la del empresario (1998: 13).

«En su ingenuidad, el campesino [aclara Bartra (1998: 21)] quisiera producir alimentos para comer y fibras para vestir, no mercancías para lucrar. Y si en algunos añorantes esto deviene nostalgia por el trueque y la economía natural, en otros es lance y utopía. El campesino con proyecto y vocación de futuro reclama una economía con alma y una modernidad con rostro humano. Alma y rostro que la producción doméstica no ha extraviado por completo».

Lenkersdorf subraya la esencia individualista de la sociedad capitalista actual para compararla con la vida en comunidad de los tojolabales¹¹². Vivir en comunidad para los tojolabales, sujetos de su trabajo, es ser responsables unos de los otros, y relacionarse unos con otros con dignidad y respeto¹¹³. La convivencia, la función

¹¹² «Tesis individualista. En la sociedad capitalista que exalta al individuo, la libertad tiene una condición de posibilidad: la superación de los obstáculos que impiden el desarrollo del individuo conforme a sus deseos. Los obstáculos pueden ser imposiciones sociales, económicas, políticas, geográficas, etcétera. Cuanto menos obstáculos, tanto más libertad para cada uno de nosotros. Puesto que la presencia de la comunidad representa un obstáculo, ya que pone condiciones, disfrutamos de libertad si no hay condiciones comunitarias» (Lenkersdorf, 1996: 85).

¹¹³ Desde su lectura: «Para ellos, la comunidad no representa ningún obstáculo para vivir en libertad sino todo lo contrario; es la vida en comunidad la que proporciona la libertad a los que están bien unidos. Es decir, la libertad será de los comprometidos con la comunidad» (Lenkersdorf, 1996: 85).

que cada uno cumple dentro del grupo¹¹⁴, la disponibilidad y el compromiso hacia la comunidad son exigencias que la sociedad occidental no presenta.

Continúa Lenkersdorf: «Cada perspectiva confiere un sentido distinto a las acciones cotidianas e implica formas de coordinación y de gobierno distintas. Una de las condiciones para que la comunidad marche como un nosotros es el consenso, como principio y sistema de acuerdos, en el cual la decisión definitiva depende de todos más que de los dirigentes o de una "mayoría"». El autor destaca esa dinámica como de «interdependencia en lugar de dependencia y sumisión» (Lenkersdorf, 1996: 83). Esto no quiere decir que haya homogeneidad y que no existan diferencias de criterios o conflictos con el ejercicio del poder personal, pero los mecanismos de consulta y discusión permiten el respeto una vez alcanzado el consenso¹¹⁵.

Esa dinámica de interdependencia se vive de la misma manera respecto a todo: a la naturaleza y al cosmos, que no se conciben como separados del ser humano. La familia extensa los incluye, y esto marca una actitud y un manejo distintos de lo que la sociedad dominante tipifica como recursos naturales. Dicha sociedad, en su antropocentrismo, se considera con derecho a un uso y manejo indiscriminados de los recursos. Desde esta óptica, la tierra, los bosques y el agua se ponen al servicio del hombre y de la acumulación de los mecanismos del mercado.

¹¹⁴ «De la misma manera que los niños, jóvenes, adultos y ancianos realizan desempeños domésticos que se corresponden con las imágenes que la familia tiene de ellos, también estos grupos de edad tienen específicas inserciones políticas que se corresponden, linealmente, con sus obligaciones parentales» (Bartolomé, 1997: 152).

¹¹⁵ «La tradición política occidental tiende a establecer una separación entre las esferas de lo público y de lo privado, diferenciando, claramente, el ámbito de la *polis* (público) del de la *oikia* (casa, privado). Pero para las tradiciones mesoamericanas no existiría tal división sino un *continuum* que va de lo privado a lo público, del cumplimiento de los objetivos domésticos al cumplimiento de los objetivos públicos» (Bartolomé, 1997: 152). «Lo que determinará el comportamiento político es la lealtad que sea asumida como fundamental en un contexto específico, y la historia reciente está demostrando hasta qué punto las lealtades étnicas pueden ser primordiales» (Bartolomé, 1997: 92).

Para las corrientes dominantes de la teoría del desarrollo, la tierra tiene una función técnica, y es sólo un medio para la sobrevivencia, por lo cual ignoran sus otros significados en el terreno de las relaciones de poder, del conocimiento local y de la organización tradicional comunitaria. La producción es vista con una mirada técnica y económica. La tierra, los insumos y la mano de obra sólo son variables económicas que se pueden ajustar para generar un mejor rendimiento. Para la sociedad dominante, la tierra es propiedad y mercancía que se somete a los mecanismos del mercado; en cambio, en las culturas indias, la tierra se venera, pues es la Madre Tierra. Para la comunidad indígena, la Madre Tierra es fuente de vida, merece respeto y culto y en su interior no debe ser objeto de acumulación.

Para entender las prácticas agrícolas en las culturas indígenas es necesario entender su concepción de la naturaleza y la ubicación que se le da al hombre en el cosmos. Así, para los indios, la naturaleza es fuente de sustento, sueños, temores y esperanzas. Por eso es importante escoger, de manera adecuada, las semillas que se sembrarán y realizar los rituales propiciatorios para tener un buen ciclo. Las limpias para curar una enfermedad y ahuyentar las energías negativas para que no dañen una actividad son tan importantes como las habilidades técnicas y los recursos financieros para la perspectiva productivista¹¹⁶. De allí la estrecha relación entre lo sagrado y lo social, partes del mismo orden que comprende a la naturaleza y a la sociedad (Bartolomé, 1997: 100).

En lugares como la comunidad indígena de Cuentepec, Morelos, las prácticas religiosas más importantes se dan en torno a la produc-

¹¹⁶ Una cita del texto de C. Geertz muestra la incompreensión de esta perspectiva, incluso por un antropólogo renombrado: «El niño dice que es brujería. «¡Tonterías!»», dice Evans Pritchard a partir de su propia tradición de sentido común. «Simplemente fuiste terriblemente descuidado; tenías que haber mirado por dónde pisabas...». O tenemos el caso de un hábil alfarero zande que, cuando de vez en cuando se rompe una de sus piezas durante el proceso de elaboración, grita: «¡Brujería!». «¡Tonterías!», señala, de nuevo, Evans Pritchard, quien, como todos los etnógrafos que se precien, parece no aprender nunca: «Claro que a veces las vasijas se rompen durante la fabricación; son cosas que pasan» (Geertz, 1994: 98-99).

ción agrícola. La economía familiar se funda en las actividades productivas más que en la adquisición de bienes; el principio central es cuidar la base. Y la base incluye, además de recursos naturales y materiales, las maneras culturales con las que se hacen las cosas, las personas, los hábitos y el hábitat. Esto explica, también, la organización de los pueblos indios, la parcela indígena, la economía autosuficiente, los niveles de consumo y de acumulación —contradictorios con los objetivos del sistema capitalista—, la interdependencia familiar y el sistema de cargos. Todas estas prácticas y relaciones implican una experiencia acumulada, un conocimiento local y habilidades adecuadas a su mundo de vida.

Mientras que la sociedad dominante divide en áreas los asuntos de la existencia humana (lo social, lo natural, lo cultural, la producción, la salud, la educación, las condiciones ambientales y las creencias), para los pueblos indios todos éstos son elementos interconectados, integrales. A diferencia de la educación formal, la «vida en comunidad es la maestra. La vivencia enseña. Dicho de otro modo, en la convivencia comunitaria se aprende. El método es la práctica y el seguimiento de los modelos representados por el conjunto comunitario. El seguimiento, en cuanto incorporación a la comunidad que nos cuida, nos protege y nos sostiene» (Lenkersdorf, 1996: 138).

Hasta aquí, me he referido a estas dos visiones del mundo como si se hubieran mantenido intactas o como si no hubiera habido interacción, aculturación y actualización de las mismas. Habrá que entender la combinación de las racionalidades que atraviesan la vida rural, las que giran en torno a valores de uso y las que responden a la dinámica del mercado. No se trata aquí de entrar en una discusión ya superada, sino de abordarla desde la perspectiva de la confrontación de dos o más posibilidades culturales.

La economía de subsistencia no se rige por la misma racionalidad de las leyes del mercado. Por ejemplo, opina Escobar, los campesi-

nos innovan, de manera continua, y adaptan sus prácticas a través de la prueba y el error de una manera más cercana al arte que a la racionalidad, aun si la transformación de las actividades de autoconsumo se presenta de manera regular, empujados por la adquisición económica. A pesar de que poco a poco la ganancia se está convirtiendo en una categoría cultural para los campesinos, economizar y ahorrar siguen siendo dos valores centrales (Escobar, 1995: 168).

Los trabajadores del desarrollo, los intelectuales, los administradores de gobierno y los políticos tendrán que reconocer las diferencias culturales y las especificidades en el ámbito rural.

REFLEXIONES FINALES

Para los trabajadores del desarrollo, su participación se inscribe en los ámbitos político y ético. Tiene que ver con el futuro que se quiere construir con ese conocimiento o con esa acción, que puede ir desde el prestigio personal hasta el compromiso con una utopía.

Al hablar de sentido —del para qué—, se cumple con una expectativa del presente y ésta se asienta en una visión de futuro, en principio, del futuro deseable¹¹⁷.

Uno de los elementos más importantes durante la interacción es el mundo de vida de los actores. Éstos, aunque no son puntos a discusión, están presentes, incuestionablemente, en la evaluación de la pertinencia de la nueva actividad propuesta. De allí la recomendación —que comparto con Long— de que se conozcan esos mundos de vida y los procesos de construcción cultural. Éste es un tema frente al cual se requiere sensibilidad desde cualquier posición disciplinaria, pues en la medida en que la acción profesional siga siendo una puerta

¹¹⁷ Todas nuestras acciones están en función del pasado y de la posibilidad del futuro. Éste es una potencialidad, no es un mero deseo, sueño o esperanza. La construcción del futuro se hace sobre memorias acumuladas.

para la generación de cambios que impactan la vida cotidiana, se requiere reconocer ese ámbito.

Conocer el mundo de vida de los actores permitirá a los estudiosos de estos procesos una mejor comprensión de sus actuaciones. Y el reconocimiento de las diferencias que están en juego y de las visiones del mundo que las sustentan permitirá a los técnicos y a los profesionistas, sujetos directos de la interacción, decidir su estilo y el horizonte de su trabajo.

En todo caso, se trata de observar, respetar y permitir un intercambio de visiones que apoyen el enriquecimiento mutuo. Partir del autoconocimiento y del reconocimiento del otro abre una primera puerta de comunicación real.

Al percibir las motivaciones, áreas de interés y conocimientos de los actores rurales locales, será más fácil contribuir en su terreno y generar procesos más duraderos.

Se trata de que la asesoría de los profesionistas, más que buscar el liderazgo y el cambio hacia determinado rumbo, se centre «en la problemática grupal y en la posibilidad de que el grupo gesticione sus propias herramientas» (Rodríguez, 1984-85: 1). Esto implica aprender a escuchar, a interpretar, a leer el lenguaje de los interlocutores, a la autopercepción y a reconocer al otro.

Desde otro punto de vista, desechar el conocimiento y las prácticas locales es negarle al productor el papel protagónico en el desarrollo rural e implica una actitud de desprecio y de no reconocimiento hacia el individuo, el grupo y la sociedad de la que es originario.

Los espacios de formación y capacitación también tendrán que ir respondiendo a los retos prácticos actuales. Así, los nuevos perfiles profesionales deben partir de la aceptación de relaciones horizontales en las que se legitima la negociación de los proyectos de desarrollo. La actitud que asuman los profesionistas abrirá esa vía, la limitará o la convertirá en un campo de batalla.

Un paso obligado en esa dirección consiste en abrir nuestras mentes y corazones al reconocimiento y al respeto de quienes se identifican con perspectivas culturales distintas a las nuestras en el campo, en la ciudad, en el barrio y en las aulas universitarias.

En la formación de los profesionistas, toca a las instituciones de educación superior abrirse a estos retos epistemológicos, teórico-metodológicos e, incluso, instrumentales (como técnicas de educación popular y coordinación de grupos).

El camino es sinuoso, pues en la construcción hay necesidad de deconstruir, destruir lo anterior. Implica repensar el lugar del conocimiento, de los profesionistas y de los destinatarios de sus servicios.

BIBLIOGRAFÍA

- ARCE, A., *Negotiating Agricultural Development: Entanglements of Bureaucrats and Rural Producers in Western México*, Agricultural University, Wageningen, 1993
- _____, et al., «The Social Construction of Rural Development: Discourses, Practices and Power», en D. Booth, *Rethinking Social Development Theory, Research and Practice*, Longman Scientific & Technical, Londres, 1994
- BALANDIER, G., «La aprehensión del otro: antropología desde fuera y antropología desde dentro», *Revista de Occidente*, núm. 140, Madrid, 1993
- BARTOLOMÉ, M.A., *Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México*, INI/Siglo XXI Editores, México, 1997
- BARTRA, A., *La explotación del trabajo campesino por el capital*, Macehual, México, 1982
- _____, «Sobrevivientes. Historias de la frontera», en *Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina*, memoria de las sesiones plenarios del v Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, México, 1998
- BOURDIEU, P., *El sentido práctico*, Taurus, España, 1991 (Humanidades)
- CASO, A., *Los centros coordinadores*, INI, México, 1962
- CASTELLANOS, A., *Asimilación y diferenciación de los indios de México*, mimeo, México, s/f
- CHAMBERS, R., *Whose Reality Counts? Putting the First last*, Intermediate Technology Publications, Londres, 1997

- _____, *Challenging the Professions. Frontiers of Rural Development*, Intermediate Technology Publications, Londres, 1998
- DEVEREUX, G., *Etnopsicoanálisis complementarista*, Amorrortu, Buenos Aires, 1975
- _____, *De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento*, Siglo XXI Editores, México, 1991
- ESCOBAR, A., *Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, 1995
- GEERTZ, C., *Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas*, Paidós Ibérica, Barcelona, 1994
- GIMÉNEZ, G., *Materiales para una teoría de las identidades sociales*, mimeo, IIS, México, 1997
- LANDÁZURI, G., *Visiones, discursos y percepciones de los actores rurales locales y de los profesionistas. Encuentros y desencuentros en Cuentepec, Morelos*, tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, 2001
- LANDOWSKI, E., «Ellos y nosotros», *Revista de Occidente*, núm. 140, Madrid, 1993
- LENKERSDORF, C., *Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales*, UNAM/ Siglo XXI Editores, México, 1996
- LEÓN, E., *Donde se acuesta el sol. Usos y discursos de la vida diaria*, tesis de doctorado en sociología, Colmex, México, 1997
- LONG, N., *From Paradigm Lost To Paradigm Regained? The Case For An Actor-Oriented Sociology Of Development*, mimeo, Agricultural University, Wageningen, 1999a (versión actualizada del capítulo uno de Long, 1992)
- _____, «Demythologizing Planned Intervention», mimeo, Agricultural University, Wageningen, 1999b (versión actualizada de Long y Van der Ploeg, *Sociologia Ruralis*, núm. 29, 1989)
- _____, *Building a Conceptual and Interpretative Framework*, mimeo, Agricultural University, Wageningen, 1999c (versión actualizada de Long, «Agency and Constraint, Perceptions and Practice. A Theoretical Position», en Long y Henk de Haan, *Images of Rural Life*, Netherlands, Van Gorcum, 1997)
- Maestría en Desarrollo Rural (MDR), *Las posibilidades de caminar en un mundo nuevo. Apuntes y reflexiones sobre desarrollo rural*, 7ª gen., UAM, México, 1999
- MAX-NEEF, M., et al., *Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro*, Cepaur/Fundación Dag Hammarskjöld, Suecia, 1986
- MEJÍA, M.C., y S. Sarmiento, *La lucha indígena: un reto a la ortodoxia*, Siglo XXI Editores/IIS-UNAM, México, 1987
- Revista Pasos*, «Prácticas de desarrollo rural», núm. correspondientes a 1990-1991, Grupo de Estudios Ambientales, México

- REVUELTAS, A., «Modernidad y tradición en el imaginario político mexicano», en C. Nava y A. Carrillo (coord.), *México en el imaginario*, UAM, México, 1994
- RODRÍGUEZ, J., «Estructuración del contacto cotidiano», mimeo, Taller de Aprendizaje e Investigación de Grupo Operativo, México, 1984-85
- ROSALDO, R., *Cultura y verdad*, Grijalbo/Conaculta, México, 1991
- ZEMELMAN, H., *De la historia a la política. La experiencia de América Latina*, Siglo XXI Editores/Universidad de Naciones Unidas, México, 1989

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS NIÑOS EN MÉXICO: LA EVIDENCIA DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES, 1984-1996

HÉCTOR V. ROBLES VÁSQUEZ¹¹⁸

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el trabajo infantil en países en vías de desarrollo ha tendido a decrecer, mientras que la asistencia a la escuela y la educación de los niños han tendido a aumentar (Basu, 1999; Duryea y Székely, 1998). En México, durante el periodo 1984-1996, la escolaridad de los niños aumentó, pero —en contraste con las tendencias internacionales— su participación laboral no disminuyó. De acuerdo con la encuesta nacional de empleo (ENE), en el periodo 1988-1996, las proporciones de los niños de 12 a 14 años de los jóvenes de 15 a 19 años en la fuerza laboral han oscilado en el rango 17-20 y 44-48%, respectivamente (Robles Vásquez, 2000). Estas tasas, en especial la de los niños, parecen un poco altas cuando se comparan con los promedios pertinentes exhibidos en países de América Latina: 10% para el grupo de edad 10-14 (Basu, 1999).

Este estudio fundamenta la hipótesis de que la participación laboral de los niños ha persistido en México por el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y porque existe una importante proporción de unidades económicas familiares intensivas en trabajo no calificado. Se documenta la evolución de los patrones de educación y de participación laboral entre los niños mexicanos

Miembro del Centro de Investigación en Matemáticas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se agradece el apoyo del CRIM-UNAM y del Conacyt a través del proyecto 5667-D.

de 12 a 17 años para los ochenta y mitad de los años noventa. Se estudia este grupo de edad por dos razones: *a)* se carece de datos para los niños más pequeños en el periodo de estudio; y *b)* es posible que el trabajo infantil en México se concentre en este grupo de edad. Una evidencia indirecta muestra que el trabajo entre los niños de 11 años y menos tiende a reducirse, debido al aumento en la edad de ingreso al mercado laboral en las últimas décadas. Estimaciones recientes, basadas en información retrospectiva, ubican la tasa de participación en 3% para los niños de 8 a 10 años. Ello sugiere que, en el ámbito nacional, el trabajo infantil es más importante en los mayores de 11 años (Knaul y Parker, 1998). No obstante esta estimación, se conoce que el trabajo infantil en localidades rurales marginadas alcanza magnitudes significativas. En 1997, la participación laboral de los niños de 6 a 11 años en zonas indígenas fue de 16% (Pedrero, 2002).

Entre los principales hallazgos del estudio destacamos que la participación laboral de los niños de 12 a 17 años muestra una tendencia no decreciente y aumentó, de manera significativa, entre los niños rurales, en 1994 y 1996. Los infantes en la fuerza laboral no cuentan con condiciones adecuadas para un buen desempeño escolar y su capacitación laboral puede no compensarlos en el futuro y les acarrea el abandono prematuro de la escuela o la carencia de una buena educación. Básicamente, el entrenamiento laboral infantil fue en empleos intensivos en trabajo no calificado, en particular, en unidades económicas familiares. Los costos de oportunidad para la educación son altos para una importante proporción de niños en México. Destacamos que el trabajo infantil asalariado es muy importante para las familias, pues representa, aproximadamente, la quinta parte de los ingresos monetarios de éstas. Este documento consta de dos secciones adicionales. A continuación, se presenta el análisis descriptivo de la condición laboral y educativa de los niños de 12 a 17 años. En la última

2. EDUCACIÓN Y TRABAJO ENTRE NIÑOS Y JÓVENES: EVIDENCIA DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES, 1984-1996

La discusión se basará en indicadores contruidos a partir de información transversal de los datos individuales de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 1989, 1992, 1994 y 1996. El análisis temporal abarca un periodo dominado por la inestabilidad económica y por casi un nulo crecimiento de la economía e incluye las crisis económicas de los años ochenta, la recuperación de 1989 a 1994 y la crisis de 1995.

Es probable que estas encuestas subestimen la participación laboral, pero son las únicas que suministran información representativa para las áreas rurales de México (localidades de menos de 15 mil habitantes), donde el trabajo infantil es más generalizado. En esas zonas, la producción agrícola y la de la unidad familiar, orientada al mercado o al autoabasto, son actividades importantes para los niños.

2.1 Los datos

La ENIGH es una encuesta de hogares, diseñada para suministrar información de la distribución de los ingresos y gastos. Es de múltiples etapas con dos estratos estadísticos: áreas de alta y baja densidad poblacional, en lo sucesivo denominadas zonas urbana y rural, respectivamente. Si bien no es una encuesta especializada en educación o trabajo de niños, provee información de la condición educativa de los miembros del hogar de 6 años y más y de la laboral para los de 12 años y mayores. Las ENIGH de 1984, 1989, 1992, 1994 y 1996 incluyen 4,735, 11,535, 10,530, 12,815 y 14,042 hogares, respectivamente (INEGI, 1999a, 1999b, 1996, 1994 y 1989).

Distinguimos tres actividades económicas principales de los niños: trabajar en la fuerza laboral, no trabajar y dedicarse a los estudios y

no trabajar en la fuerza laboral, pero sí en los quehaceres domésticos. La ENIGH carece de datos sobre la asignación del tiempo de los niños a la producción doméstica o a su educación y sólo informa el número de horas trabajadas en la última semana por los miembros activos de la población económicamente activa. Otra limitación de la ENIGH es la imposibilidad de saber, con certeza, la condición escolar de asalariados y trabajadores domésticos, pues no permite identificar a aquellos que de forma simultánea son parte de la población económicamente activa (PEA) y realizan alguna de esas actividades. Desde 1992, ha sido posible resolver, de manera parcial, este problema.

2.2 Cambios estructurales en las ocupaciones de los niños y jóvenes: 1984-1996

Debido a que la participación laboral y la asistencia a la escuela difieren con la edad, ya que existen pocas observaciones para conducir un análisis para cada edad, se distinguen dos grupos: de 12-14 años (niños) y de 15-17 años (jóvenes). Las cotas de edad para niños y jóvenes corresponden a los extremos de intervalos de edad para secundaria y preparatoria si ellos ingresan a tiempo al sistema escolar y continúan, de manera ininterrumpida, sus estudios sin reprobar ningún grado. Las cotas para los jóvenes fueron escogidas para tener la misma longitud del intervalo del grupo de niños y porque la mayoría de edad legal en México es de 18 años. El análisis se centra en los niños y jóvenes que reportan alguna relación de parentesco, consanguínea o política, con el jefe del hogar. La mayoría de las descripciones se hace por área geográfica, ya que las zonas rurales y urbanas son heterogéneas.

El cuadro 1 muestra indicadores absolutos y relativos de la actividad económica de los niños de 1984 a 1996. En este periodo, los infantes en la fuerza laboral aumentaron de 0.6 a 1 millón; en tér-

minos relativos, comparadas con la estructura de 1984, las actividades de los niños de 1984 a 1992 no cambiaron, pero sí lo hicieron en 1994 y 1996. En estos años, la participación de los niños en la fuerza de trabajo aumentó a 12.8 y 15.8% del total, respectivamente; en 1984, dicha cifra fue de 9.4%. Sólo en 1996, la composición de los niños inactivos se modificó respecto a la de 1984. Los estudiantes de tiempo completo disminuyeron su importancia de 80.7 a 75.7% del total.

Cuadro 1
Condición económica y ocupación principal de los niños, 1984-1996

Año	Población de niños	Pob. económicamente activa	Pob. económicamente inactiva	Ocupación principal de los económicamente inactivos		
				Estudiante exclusivo	Act. doméstica	Otra
Números absolutos						
1984	5,996,588	563,277	5,433,311	4,839,645	495,035	98,631
1989	6,367,664	574,499	5,793,165	4,977,352	643,661	172,152
1992	6,424,218	708,550	5,715,667	5,042,613	551,078	12,1977
1994	6,764,591	866,373	5,898,218	5,166,580	517,428	214,209
1996	6,619,583	1,042,775	5,576,808	5,013,627	453,032	110,149
Porcentajes específicos (%)						
1984	100	9.39	90.61	80.71	8.26	1.64
1989	100	9.02	90.08	78.17	10.11	2.70
1992	100	11.03	88.07	78.49	8.58	1.90
1994	100	12.81**	87.19**	76.38	7.65	3.17
1996	100	15.75***	84.25***	75.74***	6.84	1.66

*, ** y *** Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel de 1984 al 5, 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios de las ENIGH

De 1984 a 1996, la participación de los jóvenes en la fuerza laboral aumentó en términos absolutos y relativos 25.6 y 65.4%, respectivamente. Desde 1989, los jóvenes trabajan más en extenso que sus pares (1984). En los noventa, el porcentaje de los que trabajaron representó cerca del 35% del total; en 1984, esa proporción fue de

27%. Los estudiantes de tiempo completo decrecieron su importancia, al pasar de 55 a 48% en el periodo 1984-1996; hasta 1996, la proporción de jóvenes en actividades domésticas sólo decreció, aproximadamente, tres puntos porcentuales (cuadro 2).

Cuadro 2
Condición económica y ocupación principal de los jóvenes, 1984-1996

Año	Población de niños	Pob. económicamente activa	Pob. económicamente inactiva	Ocupación principal de los económicamente inactivos		
				Estudiante exclusivo	Act. doméstica	Otra
Números absolutos						
1984	4,935,699	1,336,742	3,598,957	2,725,846	802,586	70,525
1989	6,019,517	1,801,927	4,217,590	3,010,704	1,040,316	166,570
1992	6,071,907	2,121,200	3,950,707	2,792,967	1,000,203	157,537
1994	5,978,859	2,046,967	3,931,892	2,762,925	977,559	191,408
1996	6,198,665	2,211,051	3,987,614	2,988,714	853,596	145,303
Porcentajes específicos (por ciento)						
1984	100	27.1	72.9	55.23	16.26	1.43
1989	100	29.9*	70.1*	50.02***	17.28	2.77
1992	100	34.9*	65.1*	46.00*	16.47	2.59
1994	100	34.2*	65.8*	46.21*	16.35	3.20
1996	100	35.7*	64.3*	48.22*	13.77***	2.34

* , ** y *** Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel de 1984 al 5, 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios de las ENIGH

La estructura de actividades de los niños por área geográfica y sexo está representada en el cuadro 3. Hay similitudes en la estructura, pero diferencias en los niveles de las actividades cuando éstas se desagregan por sexo y área. Las más importantes similitudes por área geográfica son: a) las mujeres participan más en actividades domésticas que los varones; b) los varones participan más en la fuerza laboral que las mujeres; y c) las proporciones de estudiantes de tiempo completo entre varones y mujeres son iguales, desde el punto de vista estadístico. Las diferencias principales son: a) la proporción de mujeres rurales en acti-

vidades domésticas es el doble o más que la de sus pares urbanos; y b) el trabajo infantil en áreas rurales es de 2 a 3 veces mayor que en las urbanas. La mayor importancia del trabajo doméstico y otras actividades económicas en los niños rurales implica que la educación formal en las áreas rurales, como actividad principal, es menos importante que en las urbanas (por ejemplo, en 1996, 64% de las mujeres rurales se dedicaron sólo a estudiar, en comparación con 87% de las urbanas).

Cuadro 3
Proporciones específicas de la condición económica entre los niños por sexo y área de residencia, 1984-1996 (%)

Año	Población de niños	Pob. económicamente activa	Pob. económicamente inactiva	Ocupación principal de los económicamente inactivos		
				Estudiante exclusivo	Act. domésticas	Otra
Varones en áreas urbanas						
1984	100	10.25	89.74	85.03	2.13	2.58
1989	100	7.63	92.36	86.96	2.97	2.43
1992	100	8.39	91.60	88.87	0.96	1.77
1994	100	10.43	89.57	85.75	1.37	2.45
1996	100	10.95	89.05	86.93	0.11	2.01
Mujeres en áreas urbanas						
1984	100	5.19	94.81	82.27	11.64	0.90
1989	100	2.61	97.39	87.68	7.90	1.81
1992	100	3.18	96.82	87.38	8.43	1.01
1994	100	3.12	96.87	89.86***	5.99***	1.02
1996	100	5.15	94.85	85.43	7.14	2.28
Varones en áreas rurales						
1984	100	21.33	78.67	74.62	1.49	2.56
1989	100	25.08	74.92	65.47***	3.38	6.07
1992	100	27.41	72.59	68.53	1.08	2.98
1994	100	30.09*	69.91	62.53**	2.07	5.31
1996	100	33.58***	66.42	63.71***	1.13	1.58
Mujeres en áreas rurales						
1984	100	3.45	96.56	76.28	19.98	0.30
1989	100	4.08	95.92	65.19***	29.71*	1.03
1992	100	5.14	94.86	66.46**	26.50*	1.91
1994	100	7.49**	92.51	64.59***	23.79	4.13
1996	100	15.57***	84.43	63.66***	20.16	0.61

*, ** y *** Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con nivel de 1984 al 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios de las ENIGH

Pruebas estadísticas para verificar diferencias entre la estructura de ocupaciones de los niños, en 1984, con la de otros años prueban que aquélla no se alteró en las áreas urbanas, excepto por un cambio transitorio en la proporción de mujeres que fueron estudiantes exclusivas, en 1994. En contraposición, la importancia de las actividades de los niños rurales sufrió cambios. El porcentaje de varones en la fuerza laboral aumentó de 21, en 1984, a más de 30, en 1994-96. La proporción de mujeres en la PEA se elevó de 4, en 1984, a 7.5 y 15.6%, en 1994 y 1996, respectivamente. El incremento del trabajo infantil rural influyó, de forma negativa, en la proporción de estudiantes de tiempo completo. Entre los varones, ese porcentaje disminuyó de 74.6, en 1984, a 62.5 y 63.7%, en 1994 y 1996. Entre las mujeres, la misma proporción fue de 76.3, en 1984, pero de 64.6 y 63.7%, en 1994 y 1996. La proporción de mujeres en actividades domésticas no mostró cambios consistentes de 1984 a 1996.

El cuadro 4 presenta indicadores de la condición escolar y laboral de los niños. En los años noventa, en la escuela se elevó el porcentaje de niños que trabajaron. De 1992 a 1996, esta proporción aumentó de 3.5 a 8.1%. Cálculos no reportados aquí muestran que fueron los varones rurales los responsables de este cambio. Dos importantes conclusiones adicionales pueden extraerse del cuadro 4: primero, el porcentaje de asistencia escolar a mediados de los años noventa permaneció constante: alrededor de 83-84%; segundo, la proporción de niños y niñas que asistieron a la escuela y trabajaron en quehaceres domésticos es muy pequeña, lo que significa que la asistencia escolar y las actividades domésticas son tareas excluyentes. De este modo, podemos concluir que las mujeres que reportan dedicarse a las labores domésticas, como su actividad principal, no están asistiendo a la escuela. Esto es sorprendente, porque dos y una de cada 10 de las mujeres rurales y urbanas, respectivamente, reportaron las actividades domésticas como su actividad principal en el periodo de estudio.

Cuadro 4
 Proporciones específicas de los niños por ocupaciones
 y condición de asistencia escolar, entre 1992-1996

	1992	1994	1996
Estudiantes			
Estudiante exclusivo	78.49	76.38	75.74
Asistencia escolar y participación laboral	3.52	5.74*	8.09*
Asistencia escolar y actividades domésticas	0.94	0.90	0.41*
Otros inactivos con asistencia escolar	0.07	0.02	0.00
Subtotal de estudiantes	83.02	83.04	84.32
No estudiantes			
Sólo participación laboral	7.51	7.07	7.67
Sólo actividades domésticas	7.64	6.75	6.43
Otros inactivos sin asistencia escolar	1.83	3.13	1.58
Subtotal de no estudiantes	16.98	16.95	15.68
Total de niños	100	100	100

*, ** y *** Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel de 1992 al 5, 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios de las ENIGH

La estructura de las actividades de los jóvenes por sexo y área geográfica se muestra en el cuadro 5. Las características generales de sus actividades son similares a las descritas para los niños. Por ejemplo, sin importar el área geográfica, las mujeres participan menos a menudo en actividades domésticas, mientras que los hombres están más involucrados en actividades económicas. Sin importar el año, los niveles de trabajo entre los varones rurales casi duplican los de sus similares urbanos (59 en comparación con 30%, en 1984). Con independencia del área, la participación de las mujeres es muy similar (en 1984, 11 y 13% para mujeres urbanas y rurales, respectivamente). En las zonas urbanas, las proporciones de estudiantes de tiempo completo para hombres y mujeres duplicaron las de sus pares rurales. En 1996, el 60% de los jóvenes urbanos reportó estudiar como su actividad principal; en las áreas rurales, sólo el 30% de los jóvenes se dedicó, de manera exclusiva, a estudiar. Respecto a la proporción de mujeres involucradas en actividades domésticas, en 1996, alrededor del 40% de las rurales participó en esas labores comparadas con 17% de las urbanas.

Cuadro 5
 Proporciones específicas de condición económica de los jóvenes
 por sexo y área de residencia, 1984-1996

Años	Población de jóvenes	Pob. económicamente activa	Pob. económicamente inactiva	Ocupación principal de los económicamente inactivos		
				Estudiante exclusivo	Act. domésticas	Otra
Varones en áreas urbanas						
1984	100	29.65	70.35	66.38	1.78	2.18
1989	100	35.22	64.78	56.98**	3.34	4.45
1992	100	39.17**	60.83	56.16**	1.14	3.53
1994	100	35.61	64.39	57.31**	1.70	5.38
1996	100	34.00	66.00	59.61*	2.55	3.84
Mujeres en áreas urbanas						
1984	100	11.33	88.67	61.34	26.61	0.72
1989	100	13.89	86.11	64.37	20.08*	1.60
1992	100	20.66***	79.34	58.24	19.29*	1.71
1994	100	17.12**	82.88	60.70	20.38	1.81
1996	100	17.70***	82.30	63.43	17.41***	1.47
Varones en áreas rurales						
1984	100	58.64	41.36	38.24	0.71	2.42
1989	100	63.54	36.46	30.98	1.98	3.50
1992	100	65.33	34.67	28.93*	2.07	3.67
1994	100	64.57	35.25	28.34**	2.35	4.56
1996	100	65.95	34.06	30.68	0.57	2.81
Mujeres en áreas rurales						
1984	100	13.42	86.58	43.54	42.91	0.14
1989	100	11.64	88.58	33.20*	53.65**	1.51
1992	100	20.04	79.96	31.88*	46.54	1.54
1994	100	26.31**	73.69	31.15**	41.45	1.10
1996	100	29.59***	70.41	29.77***	39.85	0.79

*, ** y *** Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel de 1984 al 5, 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios de las ENIGH

Las mujeres son las responsables de los mayores niveles de participación de los jóvenes en la fuerza laboral desde 1989; los varones no alteraron, de forma sistemática, su incorporación en términos relativos (cuadros 2 y 5). Ocurrieron modificaciones en la ocupación principal de los varones, de manera principal, en la composición de los económicamente inactivos: sin importar el área geográfica, menos va-

nes atendieron, de manera exclusiva, la escuela. De 1984 a 1996, proporción de estudiantes de tiempo completo decreció de 66 a 51% en las áreas urbanas y de 38 a 31% en las rurales. Para las mujeres, de 1984 a 1996, sus porcentajes en la PEA cambiaron de 11 a 10% en las áreas urbanas y de 13 a 30% en las rurales. Estas modificaciones fueron acompañadas por transformaciones en la composición de las PEA. En las áreas urbanas, la proporción de mujeres involucradas en la producción doméstica decreció, mientras en las rurales se redujo la proporción de estudiantes de tiempo completo. El análisis de la ocupación principal de los jóvenes, de acuerdo con su asistencia escolar, señala que la proporción de jóvenes que trabajan y asisten a la escuela creció de 4.8 a 6.5%, entre 1984 y 1996, respectivamente. El cuadro 6 también confirma que las actividades domésticas y la asistencia escolar son, en gran medida, incompatibles y que la proporción de estudiantes no se alteró en el periodo de estudio, manteniéndose en alrededor del 50%. Las proporciones de estudiantes en el grupo de edad 15-17 en actividades domésticas, disminuyeron de 40 y 20% de las mujeres rurales y urbanas, respectivamente, duplican las correspondientes proporciones de las niñas de 2 a 14 años.

Cuadro 6

Proporciones específicas de los jóvenes por ocupaciones y condición de asistencia escolar, entre 1992-1996

	1992	1994	1996
Estudiantes			
Estudiante exclusivo	46.00	46.21	48.22
Asistencia escolar y participación laboral	4.76	4.77	6.54***
Asistencia escolar y actividades domésticas	0.45	0.45	0.17
Otros inactivos con asistencia escolar	0.06	0.13	0.04
Subtotal de estudiantes	51.27	51.56	54.97
No estudiantes			
Sólo participación laboral	30.17	29.47	29.13
Sólo actividades domésticas	16.02	15.90	13.60
Otros inactivos sin asistencia escolar	2.53	3.08	2.30
Subtotal de no estudiantes	48.72	48.45	45.03
Total de niños	100	100	100

*, ** y *** Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel de 1992 al 5, 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios de las ENIGH

2.3 Escolaridad de niños y jóvenes, 1984-1996

En esta sección se describe la educación promedio de niños y jóvenes por actividad económica principal y condición de asistencia. Sólo para las mujeres se considera como actividad económica la realización de quehaceres domésticos, porque una proporción muy pequeña de varones reporta esta labor como principal. El cuadro 7 despliega los años promedio de educación para los niños en el ámbito nacional por sexo y área geográfica. En 1996, el alumno típico de tiempo completo tenía 6 años de educación, comparado con 5.3, en 1984. El promedio de la escolaridad entre trabajadores en actividades económicas o domésticas mejoró, de forma marginal, pero, en 1996, el promedio educativo de ambos subgrupos era inferior a cinco años de educación, lo que implica un año de rezago escolar comparado con los estudiantes de tiempo completo.

Destaquemos características importantes de la escolaridad media de los niños por sexo y área geográfica que se infieren del cuadro 7. Primero, la escolaridad de los estudiantes de tiempo completo excede a la de los otros subgrupos. En los noventa, los alumnos urbanos de tiempo completo contaban con primaria completa (seis años y más), mientras que el resto de los niños urbanos no. En las áreas rurales, todos los subgrupos de niños tuvieron menos de seis años de educación formal, aunque la escolaridad de los estudiantes de tiempo completo fue un año mayor que la del resto. Segundo, en cada zona geográfica, en promedio, la educación de las mujeres es mayor que la de los varones, excepto, en 1994, para los varones rurales.

El cuadro 8 presenta los años de educación promedio para los jóvenes por actividad principal y área geográfica. En el ámbito nacional, se observa una mejoría global para todos los subgrupos. En el periodo 1984-1996, los estudiantes de tiempo completo incrementaron su educación de 8.2 a 9.1 años, los trabajadores la aumentaron de 5.8 a 6.7 y los que se desempeñan en actividades

Cuadro 7
Educación promedio de los niños por actividad principal,
sexo y área geográfica, 1984-1996

	Estudiante exclusivo	Participación en fuerza laboral	Actividades domésticas*
Nacional	5.31	4.26	4.36
1984	5.77***	4.32	4.17***
1989	6.21***	5.21	5.02
1992	5.79***	4.64	4.78
1994	6.01***	4.81***	4.74
1996	6.01***	4.81***	4.74
Varones urbanos	5.65	5.13	5.13
1984	6.02***	4.66***	4.66***
1989	6.04***	5.01**	5.01**
1992	6.18***	5.70***	5.70***
1994	6.28***	4.29***	4.29***
1996	6.28***	4.29***	4.29***
Mujeres urbanas	5.74	3.99	5.62
1984	6.32***	4.86***	5.26***
1989	6.40***	5.85***	5.10***
1992	6.21***	6.10	5.37***
1994	6.48***	5.11***	4.81***
1996	6.48***	5.11***	4.81***
Varones rurales	4.56	3.53	4.09***
1984	4.88***	4.09***	4.09***
1989	4.84***	4.34*	4.34*
1992	5.28***	4.26***	4.26***
1994	5.36***	4.82***	4.82***
1996	5.36***	4.82***	4.82***
Mujeres rurales	4.71	4.46	3.64
1984	5.32***	4.30	4.09***
1989	5.25***	4.20	4.44***
1992	5.08***	4.39***	4.67***
1994	5.34***	4.36	4.72
1996	5.34***	4.36	4.72

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel del año previo al 5% de significancia estadística

** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

La educación promedio de los varones en actividades domésticas no se reporta, debido a que su participación en esta actividad es despreciable, estadísticamente.

Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH

Cuadro 8
Educación promedio de los jóvenes por actividad principal,
sexo y área geográfica, 1984-1996

	Estudiante exclusivo	Participación en fuerza laboral	Actividades domésticas*
Nacional	8.23	5.80	5.31
1984	8.73***	6.31***	5.61**
1989	8.76***	6.61***	5.85**
1992	8.81***	6.36***	6.13***
1994	8.81***	6.70***	6.36***
1996	9.13***	6.70***	6.36***
Varones urbanos	8.45	6.91	6.91
1984	8.80***	6.81***	6.81***
1989	8.84***	7.23***	7.23***
1992	8.90***	7.15***	7.15***
1994	9.16***	7.38***	7.38***
1996	9.16***	7.38***	7.38***
Mujeres urbanas	8.75	6.83	5.78
1984	9.07***	7.56***	6.38***
1989	9.19***	7.99***	6.64***
1992	9.21***	7.93***	7.13***
1994	9.45***	7.65***	7.24***
1996	9.45***	7.65***	7.24***
Varones rurales	7.14	4.84	4.84
1984	7.84***	5.54***	5.54***
1989	7.99***	5.61***	5.61***
1992	7.95***	5.30***	5.30***
1994	8.60***	6.12***	6.12***
1996	8.60***	6.12***	6.12***
Mujeres rurales	7.44	4.69	4.72
1984	8.30***	5.84***	5.07***
1989	8.15***	6.09***	5.35***
1992	8.37***	6.23***	5.49***
1994	8.76***	6.18***	5.70***
1996	8.76***	6.18***	5.70***

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel del año previo al 5% de significancia estadística

** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

La educación promedio de los varones en actividades domésticas no se reporta, debido a que su participación en esta actividad es despreciable, estadísticamente.

Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH

domésticas la elevaron de 5.3 a 6.4. Los jóvenes en casa o en actividades económicas se rezagaron más de dos años comparados con los estudiantes de tiempo completo. Comparada a los jóvenes por zona de residencia, la educación de los jóvenes urbanos es mayor a la de sus similares rurales. Por sexo, se tiene un resultado pocas veces destacado en los estudios descriptivos: el promedio de escolaridad de las mujeres es mayor al de los hombres. Con independencia del área, las mujeres en la fuerza laboral son más educadas que las que permanecen en casa realizando actividades domésticas. Finalmente, la brecha educativa entre estudiantes de tiempo completo, por un lado, y trabajadores en actividades económicas y de casa, por el otro, va de 1.5 a 2 años.

Es posible que uno de los factores que explica la brecha educativa entre niños urbanos y rurales es la carencia de escuelas. Niños en regiones rurales tienen que viajar considerables distancias para llegar a sus escuelas, particularmente para acudir a secundarias, que son escasas y aisladas en las zonas rurales. Ni la ENIGH ni otra encuesta de hogares proveen información pertinente para explorar la hipótesis de que los costos de traslado son un importante determinante para la asistencia escolar en las áreas rurales.

2.4 Características de los niños y jóvenes en la fuerza laboral, 1984-1996

En esta parte, se revisa la estructura laboral de los niños y jóvenes. El cuadro 9 presenta la participación de los niños y jóvenes trabajadores en el sector informal. El criterio para definir la pertenencia al sector informal de un individuo en la PEA fue la carencia de servicio médico por parte del empleador. En lo que sigue, omitimos las cifras correspondientes a 1989, porque no son consistentes con las del resto del periodo (no hay una razón obvia para explicar esto). Prime-

y decrecen con la edad. En 1996, casi el 100% de los niños en la PEA formó parte del sector informal; para los jóvenes, esa proporción alcanzó el 90%. Segundo, los niveles de pertenencia al sector informal fueron relativamente estables de 1984 a 1996. Tercero, los niveles de participación en el sector informal para los niños trabajadores por sexo o área fueron similares, pero no fue así para los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes varones participan más en el sector rural que las mujeres; en las regiones rurales, el nivel de informalidad excede al de las zonas urbanas. Probablemente esto ocurra por la prohibición constitucional de emplear a niños de 14 años o a jóvenes de 14 a 16 años en empleos insalubres o peligrosos (Flores, 1999).

Cuadro 9

Porcentajes de niños y jóvenes trabajadores en el sector informal, 1984-1996^a

	Sexo			Área geográfica	
	Nacional	Varones	Mujeres	Urbana	Rural
Niños					
1984	92.16	92.84	89.95	87.78	97.21
1989	78.71*	78.46*	79.94	81.84	77.26*
1992	95.86	96.31	93.84	93.28	96.75
1994	96.68	97.62	92.72	96.48	96.76
1996	98.73**	99.02	98.13	96.16	99.64
Jóvenes					
1984	85.34	88.69	73.38	75.47	92.92
1989	74.21	77.85	61.12	66.27	81.92*
1992	80.47	83.66	73.08	68.44	91.27
1994	83.94	87.29	77.06	77.75	88.26
1996	87.19	90.04***	81.17*	75.58	94.62

^a Trabajadores son los que reportaron pertenecer a la población económicamente activa el mes previo al levantamiento de las ENIGH. El criterio de pertenencia al sector informal fue la ausencia de servicio médico por parte del empleador.

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio respecto al nivel de 1984 al 5% de significancia estadística

** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH

Los niños constituyen una importante reserva de trabajo familiar; por ejemplo, en 1996, alrededor del 58% de los niños trabajadores reportaron ser trabajadores familiares sin retribución. La segunda más importante posición en el empleo fue la del trabajador asalariado en

empleos no agrícolas, que, en 1996, atrajo al 24% de los niños trabajadores. Empleos asalariados en el sector agrícola ocuparon al 14% de los niños de la PEA de ese año (cuadro 10). La estructura de la posición en el empleo no cambió en el periodo de estudio, excepto, en 1989 y 1992, cuando la proporción de niños asalariados en la agricultura aumentó. La desagregación por sexo muestra que la proporción de niños varones asalariados en el sector no agrícola cambió de 11 a 23%, entre 1984 y 1996, respectivamente. Al mismo tiempo,

Cuadro 10
Distribución de la posición en el empleo de los niños trabajadores, 1984-1996

	Total	Asalariado		No asalariado		
		No agrícola	Agrícola	Autoem- pleo	Familiar no retribuido	Otro
Nacional						
1984	100	17.16	9.68	9.00	60.79	3.37
1989	100	26.13	17.94**	6.18	47.60	2.15
1992	100	24.81	18.99*	2.82	47.56	5.82
1994	100	22.64	11.93	3.09	57.00	5.64
1996	100	24.43	13.72	2.24	58.41	1.19
Varones						
1984	100	10.91	11.68	1.82	72.29	3.30
1989	100	21.46**	20.15*	4.64	51.52***	2.23
1992	100	19.60*	19.24	2.80	51.24***	7.12
1994	100	20.29*	12.31	3.72	56.91**	6.77
1996	100	22.69***	15.54	1.98	58.67**	1.12
Mujeres						
1984	100	37.64	3.13	32.52	23.11	3.60
1989	100	48.72	7.24	13.61	28.67	1.76
1992	100	48.16	17.86	2.91	31.06	0.00
1994	100	31.02	10.32	0.42	57.35***	0.86
1996	100	28.07	9.90*	2.79	57.89***	1.35
Áreas urbanas						
1984	100	24.91	7.02	12.63	53.83	1.61
1989	100	54.76**	1.19	5.19	35.39	3.47
1992	100	65.64***	4.94	3.86	21.16***	4.40
1994	100	57.60***	0.86*	3.79	29.67	8.09
1996	100	53.05***	2.19	5.14	37.04	2.56
Áreas rurales						
1984	100	8.23	12.74	4.82	68.81	5.40
1989	100	12.84	25.71***	6.64	53.27***	1.54
1992	100	10.59	23.88	2.45	56.76	6.32
1994	100	8.83	16.17	2.82	67.47	4.71
1996	100	14.35***	17.78	1.22	65.94	0.71

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio respecto al nivel de 1984 al 5% de significancia estadística

** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH

las actividades familiares no pagadas decrecieron de 72 a 59%. La composición del empleo entre las mujeres se modificó, en 1994 y 1996, en comparación con 1984, cuando más mujeres laboraron como trabajadoras familiares sin retribución: 58%, en 1996, y 23%, en 1984. En relación con la estructura del empleo por zona geográfica, la estructura permaneció casi constante en las regiones rurales. La composición del empleo en las áreas urbanas muestra cambios importantes. Desde 1989, la proporción de niños asalariados en trabajos no agrícolas se incrementó del 25 a más del 50%. En 1996, 66, 18 y 14% de los menores rurales económicamente activos participaron como trabajadores familiares sin retribución y en empleos asalariados en los sectores no agrícola y agrícola. La composición del empleo en las áreas urbanas muestra cambios importantes. Desde 1989, la proporción de menores asalariados en trabajos no agrícolas se incrementó del 25 a más del 50%.

La composición del empleo de los jóvenes difiere de la de los niños. En 1996, el más importante tipo de empleo para los jóvenes fue el asalariado no agrícola, seguido por el trabajo familiar sin pago y por el asalariado agrícola. Los porcentajes de jóvenes en la fuerza laboral en esos empleos fueron de 46.5, 32.2 y 16.3%, respectivamente. El autoempleo es reducido (alrededor del 4%). En el ámbito nacional, la estructura del empleo de los jóvenes no exhibió cambios consistentes, pero sí al desagregarla por sexo (cuadro 11). Desde 1992, los varones en empleos no agrícolas incrementaron su participación. En contraste, la composición del empleo entre las trabajadoras no ha cambiado de manera significativa. Comparando la posición en el empleo entre varones y mujeres, puede observarse que una gran proporción de trabajadoras está más involucrada en el trabajo asalariado en el sector no agrícola que los varones, mientras que ellos participan más como trabajadores familiares que ellas.

Respecto a la composición del empleo de los jóvenes por zona de residencia, en las áreas urbanas, la proporción de jóvenes en em-

pleos asalariados no agrícolas se incrementó de 67 a 77%, entre 1984 y 1996. En el caso de las áreas rurales, los incrementos, en 1992 y 1994, no se mantuvieron, en 1996.

Cuadro 11
Distribución de la posición en el empleo de los jóvenes trabajadores, 1984-1996

	Total	Asalariado		No asalariado		
		No agrícola	Agrícola	Auto- empleo	Familiar no retribuido	Otro
Nacional						
1984	100	41.24	17.25	4.05	34.90	2.55
1989	100	46.09	18.30	3.91	29.94	1.76
1992	100	57.29***	10.43**	3.30	27.03	1.95
1994	100	53.24**	11.97	3.61	29.92	1.27
1996	100	46.52	16.31	3.94	32.15	1.08
Varones						
1984	100	32.51	20.22	4.40	40.29	2.38
1989	100	38.76	21.70	4.06	33.50	1.97
1992	100	47.77***	12.99**	2.88	33.66	2.69
1994	100	45.38***	16.55	3.50	33.62	0.96
1996	100	41.43*	20.55	3.14	33.62	1.27
Mujeres						
1984	100	72.33	6.68	2.82	15.02	3.16
1989	100	72.44	6.08	3.36	17.15	0.98
1992	100	79.43	4.47	4.26	11.59	0.25
1994	100	69.37	2.58	3.84	22.31	1.91
1996	100	57.28	7.34	5.63	29.05	0.70
Áreas urbanas						
1984	100	66.85	11.63	2.93	17.25	1.35
1989	100	65.05	8.99	2.07	22.23	1.56
1992	100	85.18***	0.61***	1.45	11.96	0.81
1994	100	79.87**	0.28***	2.06	16.26	1.54
1996	100	77.29*	2.02***	3.63	16.36	0.70
Áreas rurales						
1984	100	21.56	21.57	4.92	48.47	3.48
1989	100	27.69	27.35	5.69	37.33	1.93
1992	100	32.26**	19.25	4.96	40.55	2.99
1994	100	34.63**	20.14	4.70	39.45	1.07
1996	100	26.83	25.45	4.14	42.25	1.32

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio respecto al nivel de 1984 al 5% de significancia estadística

** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.

Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH

La distribución de los niños y jóvenes en la PEA por sector económico se muestra en los cuadros 12 y 13, respectivamente. La agricultura requiere a la mayoría de los niños trabajadores. Alrededor del 60% de los niños está en la agricultura, pero desde 1989, la importancia del subsector de comercio al menudeo se ha incrementado

Cuadro 12
Demanda de niños de los sectores económicos, 1984-1996

	Total	Sector primario		Sector secundario		Sector terciario	
		Agricultura	Otro	Construcción	Otro	Comercio	Otro
Nacional	100	65.2	2.9	1.3	7.4	5.5	17.7
1984	100	58.5	0.2	2.0	9.7	15.8***	13.8
1989	100	61.3	0.2	2.6	12.7	9.6	13.6
1992	100	53.0	1.0	3.6	15.8	11.7**	15.0
1994	100	53.3	0.5	3.3	12.0	17.2***	13.7
1996	100	53.3	0.5	3.3	12.0	17.2***	13.7
Varones	100	78.4	3.7	1.7	5.4	5.3	5.4
1984	100	66.7*	0.2	2.4	9.8	13.1***	7.7
1989	100	68.5	0.3	3.2	10.1	8.6	9.3
1992	100	55.9***	1.2	4.4	15.1	10.1**	13.3
1994	100	60.7***	0.6	4.6*	11.5	12.6***	10.0
1996	100	60.7***	0.6	4.6*	11.5	12.6***	10.0
Mujeres	100	22.1	0.0	0.0	13.8	6.1	58.0
1984	100	18.8	0.0	0.0	9.3	28.8***	43.1
1989	100	28.7	0.0	0.0	24.2	14.0	33.2
1992	100	40.8	0.0	0.0	18.7	18.5**	22.0
1994	100	38.0	0.3	0.5	12.9	26.8**	21.5
1996	100	38.0	0.3	0.5	12.9	26.8**	21.5
Áreas urbanas	100	51.7	1.2	0.7	9.8	7.5	29.1
1984	100	25.1***	0.0	5.2***	21.3	18.2***	30.2
1989	100	7.2***	0.0	9.2***	26.5	20.6***	36.5
1992	100	8.7***	0.0	9.3***	24.4	26.3**	31.4
1994	100	3.7***	0.0	9.0***	20.2	37.2***	29.9
1996	100	3.7***	0.0	9.0***	20.2	37.2***	29.9
Áreas rurales	100	80.7	4.8	2.1	4.6	3.2	4.7
1984	100	74.0	0.3	0.5	4.4	14.7	6.1
1989	100	80.1	0.3	0.3	7.9	5.7	5.7
1992	100	70.0	1.3	1.4	14.5	6.1	8.7
1994	100	70.8***	1.3	1.4	9.1	10.1	8.0
1996	100	70.8***	1.3	1.4	9.1	10.1	8.0

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio respecto al nivel de 1984 al 5% de significancia estadística.
 ** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente.
 Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.
 Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH.

Cuadro 13
Demanda de jóvenes de los sectores económicos, 1984-1996

	Total	Sector primario		Sector secundario		Sector terciario	
		Agricultura	Otro	Construcción	Otro	Comercio	Otro
Nacional	100	48.0	1.7	6.6	14.1	7.4	22.2
1984	100	44.7	0.5	7.1	17.5	9.9	20.4
1989	100	30.7***	0.4	6.0	26.9	13.3***	22.7
1992	100	31.2***	1.4	8.2	21.3	14.0*	21.8
1994	100	37.7***	0.5	4.3	21.5	13.6*	22.3
1996	100	37.7***	0.5	4.3	21.5	13.6*	22.3
Varones	100	57.0	2.2	8.5	12.0	6.8	13.5
1984	100	53.7	0.6	8.8	14.9	7.2	15.0
1989	100	38.9	0.5	8.6	23.2	11.3	17.5
1992	100	42.3	2.1	12.2	18.4	10.8	14.2
1994	100	44.9	0.8	6.0	16.8	11.6	20.0
1996	100	44.9	0.8	6.0	16.8	11.6	20.0
Mujeres	100	15.9	0.0	0.0	21.6	9.2	53.3
1984	100	12.5	0.0	0.0	27.0	19.7***	39.9
1989	100	11.7	0.0	0.0	35.3	18.1***	34.9
1992	100	15.5	0.0	0.1	27.4	20.6**	37.5
1994	100	22.6	0.0	0.9	31.3	18.0**	27.3
1996	100	22.6	0.0	0.9	31.3	18.0**	27.3
Áreas urbanas	100	23.9	0.0	8.5	19.0	13.4	35.2
1984	100	21.0	0.0	7.9	26.5	14.1	30.5
1989	100	4.9***	0.0	7.7	34.6	18.0	34.8
1992	100	1.8***	0.4	10.8	28.7	23.6***	34.8
1994	100	2.7***	0.1	5.8	32.4	21.9**	37.1
1996	100	2.7***	0.1	5.8	32.4	21.9**	37.1
Áreas rurales	100	66.6	3.1	5.1	10.3	2.7	12.3
1984	100	67.7	0.9	6.3	8.8	5.8*	10.6
1989	100	53.9**	0.7	4.5	19.9	9.1***	11.9
1992	100	55.2*	2.1	6.4	16.2	7.3**	12.8
1994	100	60.1	0.8	3.4	14.5	8.4***	12.8
1996	100	60.1	0.8	3.4	14.5	8.4***	12.8

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio respecto al nivel de 1984 al 5% de significancia estadística.
 ** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente.
 Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH.
 Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH.

(cuadro 12). Para los varones, los tres subsectores más importantes son agricultura, comercio al menudeo y construcción (con 61, 13 y 5%, respectivamente, en 1996). Para las mujeres, los dos más importantes son la agricultura y el comercio al menudeo; en 1996, esos subsectores demandaron 38 y 27% de las mujeres económicamente activas.

Como es natural en las áreas rurales, la agricultura es la fuente de empleo más importante para los niños económicamente activos, seguida por el comercio en pequeño. En 1996, esas dos actividades demandaron 71 y 10% de los niños rurales en la PEA. El cuadro 12 sugiere un importante cambio estructural en los sectores que demandan trabajo de niños. Primero, el subsector de comercio al menudeo aumentó su demanda de varones y mujeres en las áreas urbanas. Segundo, la agricultura en áreas urbanas prácticamente desaparece. Tercero, en las áreas rurales, la composición de la demanda de niños permaneció estable durante el periodo 1984-1996.

La demanda de trabajo de jóvenes se muestra en el cuadro 13. En el ámbito nacional, la agricultura es la fuente de demanda más importante entre los subsectores económicos, le sigue el comercio al menudeo y la construcción. Hay un cambio importante entre esas fuentes de empleo. Los niveles de participación en la agricultura han disminuido respecto a los observados en los ochenta (48% comparado con 38%, en 1984 y 1996, respectivamente). Los decrementos del empleo agrícola entre los jóvenes fueron acompañados por incrementos en el empleo en el sector comercio (7%, en 1984, pero 14 %, en 1996). Las reducciones en el empleo agrícola en el ámbito nacional se explican por la abrupta reducción en el empleo de jóvenes en la agricultura en ambas áreas.

En las áreas urbanas, el empleo agrícola se redujo de 24 a 2%, entre 1984 y 1994, mientras en las rurales disminuyó de 67 a 55%. La proporción de jóvenes empleados en el comercio aumenta para cada subgrupo, excepto los varones (la proporción de éstos en el

sector comercio no difiere, de manera significativa, del nivel de 1984). Los mayores aumentos se dieron entre las mujeres urbanas. En las áreas urbanas, el empleo en el sector comercio llega a ser la más importante fuente de empleo de los jóvenes (22% de los jóvenes que están en la PEA). Ese subsector es, también, una de las dos más importantes fuentes de empleo para el trabajo femenino (18% de las mujeres trabajó como empleadas de este subsector en 1996).

Consideremos, ahora, la evidencia respecto a horas trabajadas y tiempo en el empleo. Entre los niños asalariados y los jóvenes que trabajaron el mes pasado, es posible conocer si ellos recibieron salarios durante los seis meses previos al levantamiento de la encuesta. El cuadro 14 exhibe las proporciones de niños y jóvenes que trabajaron más de tres meses y al menos seis meses. Esas proporciones para los niños y jóvenes asalariados son sorprendentes. En 1996, 48% de los niños asalariados trabajó al menos seis meses, mientras que 56.5% lo hizo más de tres. Naturalmente, entre jóvenes asalariados estas cifras son mayores: 61% trabajó, como mínimo, seis meses y 69% laboró, como mínimo, más de tres.

Cuadro 14

Antigüedad en el empleo de niños y jóvenes asalariados, 1984-1996

	Niños asalariados		Jóvenes asalariados	
	6 meses	Más de 3 meses	6 meses	Más de 3 meses
1984	44.0	46.8	64.4	75.2
1989	52.4	59.0	63.9	75.3
1992	44.7	58.2	69.8	78.5
1994	59.0	65.3	69.7	77.4
1996	48.4	56.5	61.3	69.0

Fuente: cálculos propios derivados de las ENIGH

El cuadro 15 muestra el promedio de horas trabajadas por semana por los niños y jóvenes por sexo y área. En general, de 1984 a 1996, para todos los subgrupos de niños y jóvenes trabajadores, esos promedios son altos (más de 29 horas semanales). Sin embargo, los promedios declinaron, de forma continua, de 1984 a 1996,

para todos los subgrupos, exceptuando el de las mujeres jóvenes. En las áreas urbanas, los niños varones, en 1984, reportaron, en promedio, 35.4 horas, pero 33, en 1996, mientras que las horas semanales promedio de las mujeres disminuyeron de 42.7 a 29 en esos años; entre los jóvenes, los promedios de hombres y mujeres declinaron de 1984 a 1996 de 45.2 a 41.5 y de 39.9 a 40.8, respectivamente. En las zonas rurales, las horas trabajadas por varones y mujeres disminuyeron en el periodo de referencia de 40.7 a 33 y de 34.9 a 30.2 horas por semana, respectivamente; entre los jóvenes, las reducciones fueron de 45.5 a 38.6 horas, para los hombres, y de 36.6 a 37.5, para las mujeres.

Cuadro 15
Horas promedio trabajadas por niños y jóvenes trabajadores, 1984-1996

	Trabajadores varones urbanos		Trabajadoras mujeres urbanas	
	Niños	Jóvenes	Niños	Jóvenes
1984	35.38	45.22	42.68	39.87
1989	41.39***	45.54**	40.98	41.46
1992	37.47***	42.21***	46.94**	45.28***
1994	36.46	44.36***	31.71***	41.63***
1996	33.0***	41.50***	28.99***	40.83***
	Trabajadores varones rurales		Trabajadoras mujeres rurales	
	Niños	Jóvenes	Niños	Jóvenes
1984	40.72	45.52	34.85	36.63
1989	39.05***	43.34***	39.63***	43.52***
1992	35.11***	41.23***	38.28***	40.26***
1994	29.12***	41.52***	30.55***	39.20***
1996	33.02***	38.61***	30.23***	37.50***

* Rechazo de la hipótesis nula de ausencia de cambio en relación con el nivel del año previo al 5% de significancia estadística

** y *** Rechazo de la hipótesis nula al 2.5 y 1%, respectivamente

Los errores estándar fueron calculados considerando el diseño muestral de las ENIGH

Fuente: cálculos propios basados en las ENIGH

2.5 Importancia económica del trabajo de niños y jóvenes

En esta sección, revisaremos la incidencia de la participación laboral de niños y jóvenes, medida a través de la proporción de hogares con un menor o un adolescente trabajador, así como la importancia rela-

tiva de los ingresos de estos trabajadores en el ingreso total de la familia. Como se muestra en el cuadro 16, en 1996, 5.4 y 5.1 millones de familias tenían un menor o un adolescente trabajador, respectivamente. En 1984, esas cifras fueron 4.5 y 3.9 millones, respectivamente. Las proporciones de hogares con algún menor o un adolescente trabajador en el total de hogares relevantes son similares a las proporciones específicas del trabajo de niños y jóvenes.

Cuadro 16

Proporción de hogares con al menos un menor o adolescente económicamente activo, 1984-1996

	Hogares con al menos un menor		Hogares con al menos un adolescente	
	Número de hogares	Con al menos un menor en la PEA (%)	Número de hogares	Con al menos un adolescente en la PEA (%)
Nacional				
1984	4,494,404	10.91	3,863,753	27.30
1989	4,944,092	11.10	4,623,903	30.63
1992	5,120,100	11.13	4,746,786	32.63
1994	5,444,316	13.58	4,870,957	32.21
1996	5,434,593	16.04	5,120,170	33.95
Área urbana				
1984	2,814,383	9.43	2,383,664	19.79
1989	2,931,142	5.21	2,902,179	12.70
1992	2,789,249	5.69	2,785,684	26.58
1994	2,973,740	7.42	2,767,951	23.32
1996	2,998,781	7.70	2,970,237	22.93
Área rural				
1984	1,680,023	13.55	1,480,090	39.38
1989	2,012,950	15.70	1,721,724	42.15
1992	2,313,851	17.68	1,961,101	41.21
1994	2,470,577	21.00	2,103,007	43.92
1996	2,435,812	26.31	2,149,933	49.17

Fuente: cálculos propios derivados de las ENIGH

El porcentaje de hogares con al menos un menor trabajador se ubicó en alrededor del 11% en los ochenta y principios de los noventa; para 1994 y 1996, esa proporción se incrementó a 16%. Para los hogares con al menos un adolescente, la proporción de hogares con al menos uno de ellos trabajando se ubicó alrededor del 32% desde 1992. Este nivel excede el de 1984 en poco más de 5 puntos porcentuales. Considerando estas proporciones por área geográfica, se observa que desde 1992 las proporciones de hogares rurales con un

menor trabajador exceden tres veces la correspondiente proporción entre los hogares urbanos. Por ejemplo, en 1996, el 7.7% de hogares urbanos tenía un menor trabajando, mientras que esa proporción fue de 26.3% para sus similares rurales. Una comparación similar entre hogares con jóvenes muestra que la proporción de hogares rurales con un adolescente trabajando es poco más del doble a la correspondiente proporción entre hogares urbanos. En 1996, por ejemplo, el 22.9% de esos hogares urbanos tenía al menos un adolescente en la PEA, mientras que esa cifra fue de 49.2% entre los hogares rurales (cuadro 16).

Entre los hogares urbanos con algún menor, la participación económica de los niños se mantiene relativamente constante, ocurriendo lo contrario entre los hogares rurales. La proporción de hogares rurales con un menor trabajador fue de 13.6 a 26.3% de 1984 a 1996. Entre los hogares con algún joven, la proporción de hogares urbanos con al menos un joven trabajando se mantiene en alrededor del 23% en los noventa; para los hogares rurales, esa proporción fue de alrededor de 42% de 1989 a 1994, y aumentó a 49%, en 1996 (cuadro 16).

La ENIGH no suministra información de la parte de ingresos que los niños y jóvenes que trabajan comparten con su familia. Aquí, suponemos que esos ingresos forman parte de los familiares. Los estándares de vida de los hogares con algún menor o adolescente trabajador, medidos por el ingreso familiar real o por el per cápita, mejoraron, en 1989 y 1992, pero empeoraron, en 1994 y 1996 (cuadro 17). Entre las familias con algún menor trabajador, el ingreso per cápita aumentó de 187 a 292 pesos reales de 1994, pero decayó en los dos siguientes años. En 1996, se ubicó en 146.5 pesos de 1994. En términos relativos, el nivel de 1996 se redujo en 21 y 49.5% respecto a los niveles de 1984 y 1992, respectivamente. Entre las familias con un adolescente trabajador, de 1984 a 1992, el ingreso per cápita se incrementó de 252.7 a 311.7 pesos reales, pero se redujo en 1994 y 1996. En

1996, se ubicó en 217.98. La reducción, en 1996, representa disminuciones de 13.8 y 35.6% de los niveles de 1984 y 1992, respectivamente.

Cuadro 17
 Ingreso familiar promedio real e ingresos reales de niños
 y jóvenes asalariados (pesos de 1994), 1984-1996

	Ingreso total ¹	Ingreso monetario	Tamaño del hogar	Ingreso per capita ²	Ingresos de niños o jóvenes ³
Hogares con algún menor en la PEA					
1984	1,463.19	1,176.38	6.29	187.02	178.10
1989	1,864.15	1,568.84	7.33	214.03	316.98
1992	2,419.21	1,927.45	6.60	292.03	294.25
1994	1,901.04	1,515.19	6.36	238.24	304.56
1996	1,262.79	987.98	6.70	147.46	199.37
Hogares con algún joven en la PEA					
1984	2,178.36	1,862.65	7.37	252.73	468.30
1989	2,642.32	2,216.47	7.11	311.74	478.23
1992	2,805.35	2,230.80	6.59	338.43	442.93
1994	2,480.55	2,030.24	7.04	288.39	456.11
1996	1,826.98	1,493.19	6.85	217.98	322.69

¹ El ingreso total del hogar incluye ingresos monetarios e imputados de todos los miembros del hogar (recibidos o imputados el mes anterior al levantamiento de las ENIGH). El ingreso monetario familiar incluye salarios, ganancias, ingreso derivado de activos, transferencias y otros ingresos monetarios reportados por los miembros del hogar. Ingresos imputados incluyen autoconsumo, pagos en especie, regalos y renta estimada de casa propia.

² Ingreso per capita individual (ver Deaton, 1997)

³ Ingresos de niños o jóvenes incluyen salarios y otras compensaciones monetarias derivadas del trabajo (propinas).

Fuente: cálculos propios derivados de las ENIGH

Los ingresos de los niños y jóvenes asalariados representan una parte importante del ingreso familiar total. Como puede observarse en el cuadro siguiente, en 1994 y 1996, el ingreso de los niños representó alrededor del 20% del ingreso monetario del hogar o 16% del ingreso total del hogar. El ingreso de los jóvenes excedió, muy poco, esos porcentajes. En esos mismos años, el ingreso de los jóvenes representó el 22 y 18% del ingreso monetario y total del hogar, respectivamente.

Cuadro 18
 Proporciones de ingresos laborales de niños o jóvenes en el ingreso del hogar, 1984-1996

	Proporción del ingreso de niños o jóvenes al ingreso monetario del hogar (%)	Proporción del ingreso de niños o jóvenes al ingreso total del hogar (%)
Hogares con algún menor en la PEA		
1984	15.14	12.17
1989	20.20	17.00
1992	15.27	12.16
1994	20.10	16.02
1996	20.18	15.79
Hogares con algún joven en la PEA		
1984	25.14	21.50
1989	21.58	18.10
1992	19.86	15.79
1994	22.47	18.39
1996	21.61	17.66

Fuente: cálculos basados en el cuadro 17

3. CONCLUSIONES

A diferencia de las tendencias internacionales, el análisis descriptivo muestra que el trabajo infantil en México persistió en la década de los ochenta y mediados de los años noventa. Es posible que el deterioro en los estándares de vida de las familias con niños o jóvenes en los años de crisis económicas aumentó la oferta de trabajo familiar, particularmente infantil. Los demandantes principales del trabajo infantil fueron las unidades económicas de tipo familiar o el mercado laboral informal.

El estudio muestra que, hasta 1996, se mantenían rezagos educativos entre los niños y jóvenes urbanos y rurales y entre los estudiantes exclusivos y el resto, que la asistencia escolar no es satisfactoria y que las condiciones de estudio de los niños y jóvenes que trabajan no son compatibles con su buen desempeño escolar. El análisis sugiere la existencia de un balance entre la escolaridad y la actividad económica principal: los que se dedican sólo a estudiar alcanzan una mayor edu-

cación que el resto. Además, un hallazgo interesante es la aparente incompatibilidad entre los quehaceres domésticos y la asistencia a la escuela. Finalmente, destacamos que los costos de oportunidad para estudiar por parte de los niños y jóvenes que trabajan son relativamente altos.

BIBLIOGRAFÍA

- BASU, K., «Child Labor: Cause, Consequence and Cure with Remarks on International Standards», *Journal of Economic Literature*, vol. xxxvii, 1999
- DURYEA, S., y M. Szekely, «Labor Markets in Latin America: A Supply Side History», *Working Paper 374*, Inter-American Development Bank, office of the chief economist, 1998
- FLORES, R., *International and National Law: A Framework for Action Against Child Labour*, a master thesis in educational theory and policy, The Pennsylvania State University, 1999
- INEGI, ENIGH-92: *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Documento metodológico*, México, 1999a
- _____, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1996. Tabulados y base de datos, 1992, 1994 y 1996*, México, 1999b, versión en CD
- _____, ENIGH-96: *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1996. Documento metodológico*, México, 1996
- _____, *Ingreso-gasto de los hogares*, vol. II, México, 1994, versión en CD 2
- _____, *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Cuarto trimestre de 1984*, México, 1989
- PEDRERO, M., «Empleo en zonas indígenas», Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM, México, 2002, manuscrito no publicado
- ROBLES-VÁSQUEZ, H., *A Microeconomic Analysis of Child Labor Force Participation and Education: The Case of México, 1984-1996*, Ph.D. Dissertation/Agricultural Economics-Demography, The Pennsylvania State University, 2000

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM 1630 TO 1800

The city of Boston, founded in 1630, was one of the first English settlements in North America. It grew rapidly and became a major center of commerce and industry. The city was the site of the Boston Tea Party in 1773, a key event in the American Revolution. The city was also the site of the Boston Massacre in 1770, another key event in the American Revolution. The city was the site of the Boston Convention in 1780, which led to the adoption of the Massachusetts Constitution in 1780. The city was the site of the Boston Convention in 1780, which led to the adoption of the Massachusetts Constitution in 1780.

The city of Boston, founded in 1630, was one of the first English settlements in North America. It grew rapidly and became a major center of commerce and industry. The city was the site of the Boston Tea Party in 1773, a key event in the American Revolution. The city was also the site of the Boston Massacre in 1770, another key event in the American Revolution. The city was the site of the Boston Convention in 1780, which led to the adoption of the Massachusetts Constitution in 1780. The city was the site of the Boston Convention in 1780, which led to the adoption of the Massachusetts Constitution in 1780.

MAESTROS Y MAESTRAS RURALES EN LAS COMUNIDADES RURALES: ENCRUJADA DE CAMINOS HACIA LA SUSTENTABILIDAD

ELENA LAZOS CHAVERO¹¹⁹

I. INTRODUCCIÓN

La intención en este artículo es reflexionar sobre los retos y las posibilidades para establecer una vinculación entre tres sectores sociales: maestro(a)s rurales, productores y alumno(a)s de las escuelas primarias con el fin de lograr una participación conjunta en la conservación de los recursos naturales y en la construcción de acciones colectivas para la sustentabilidad de la región. ¿Cómo aprovechar una institución formal para crear un espacio donde se discutan y se decidan acciones conjuntas entre los maestros y los habitantes de las comunidades rurales para conservar los recursos naturales de la región? ¿Podría la escuela convertir proyectos participativos con los niños y niñas de la sierra en procesos de aprendizaje formal?

Debido a nuestra preocupación en el futuro ambiental y social de la región, hemos planteado en otras investigaciones trabajar con diversos sectores sociales para construir, de forma conjunta, procesos de sustentabilidad, la cual se ha encaminado a intentar conservar los recursos naturales y a proyectar alternativas productivas viables para los habitantes de las comunidades rurales de la sierra de Santa Marta, I sur de Veracruz.

Este mismo objetivo general permea la presente investigación, pero ahora la institución comunitaria es la escuela, espacio que permite

¹¹⁹ Miembro del Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.

plantear proyectos de educación ambiental no formal, pero con el objetivo de pasarlos a formar parte de la educación formal de los niños-niñas. La escuela tiene todo el potencial para llevar a cabo proyectos participativos con los padres y las madres de familia a través de los niños y niñas. Por ello, quisimos realizar proyectos que tuvieran como meta dar respuesta a necesidades específicas sentidas por los habitantes, padres y madres de los alumnos. Estas necesidades se habían expresado en talleres con los padres y madres de familia en diversos temas, los cuales abarcaban programas de salud y de alimentación, así como los peligros en el uso de agroquímicos hasta el mejoramiento de la productividad agrícola.

En la región, la escuela es una institución poco atendida, ya que la mayor parte de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales trabaja, principalmente, en el nivel de ejido o de grupos comunitarios (básicamente, productores).

Esto constituía una razón más para abarcar la escuela. En principio, partimos de la imagen de que el maestro rural podría desempeñar un papel participativo en las comunidades. Sin embargo, los maestros tienen el desafío de lograr una retroalimentación positiva en la vida de las comunidades donde imparten sus enseñanzas cuando los espacios escolares cruzan sectores con distintos intereses. Esto nos planteaba enormes retos para lograr un trabajo conjunto entre los sectores. Tendríamos que profundizar en el entendimiento de las relaciones interculturales y las formas de negociación de conflictos sociales y políticos en torno al futuro ambiental y social de una región rica en biodiversidad, pero con altos grados de deterioro.

La sierra de Santa Marta se caracteriza por ser una región con una diversidad de comunidades vegetales, pero bajo una deforestación galopante desde hace varias décadas. Ésta continúa a pesar de que la sierra ha sido declarada, nuevamente, como un área de protección. En la actualidad, la reserva especial de la biosfera, notificada en 1998,

Nuestro trabajo se desarrolla en este contexto de reservas formuladas en un proceso unilateral, donde las comunidades no se han incorporado a un proceso de discusión y decisión conjunta. Por el contrario, la mayor parte de los habitantes (indígenas y mestizos) considera la promulgación de la reserva como una cuestión impositiva. En este sentido, lograr negociaciones alrededor del manejo de los recursos naturales es un reto para todos los habitantes y sectores involucrados. Esta situación se agrava con la pobreza y marginalidad de la región y con la falta de alternativas económicas para la zona (Cervigni y Ramírez, 1996; CRUO-Uach y PSSM, 1997; Lazos y Godínez, en prensa)¹²⁰. Desde 1992, en algunas comunidades, los mestizos de ciudades aledañas han comprado tierras, desplazando a los indígenas o mestizos pobres, antiguos propietarios de la tierra. La falta de tierras para muchas familias campesinas y de trabajo en la región provocan el aumento de la migración en nuevos circuitos migratorios (hacia el norte del país). Esta situación hace que el contexto de cualquier proyecto de desarrollo sea altamente vulnerable económica, política y socialmente.

2. HISTORIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL

La educación formal y sus intentos de vinculación

Desde la década de los veinte, muchos son los ejemplos de maestros rurales que, junto con el cura, jugaban un papel central en el destino de las comunidades rurales. Después de la Revolución, los maestros

¹²⁰ Para 1995, Pajapan tenía el índice de 1.2458; Mecayapan, de 1.3968; y Soteapan, de 1.5798. En 1995, Tatahuicapan todavía estaba incluido en los datos del municipio de Mecayapan, ya que formaba parte de él. Los tres municipios se encuentran entre los 40 más marginados en el nivel nacional (Conapo, 1998; mayor discusión, en Lazos y Godínez, en prensa).

eran considerados como los agentes que provocarían el desarrollo comunitario del medio rural. Por los vínculos tan estrechos entre maestros y campesinos durante 1931-1934, con Narciso Bassols, como secretario de Educación, se inició un programa que creaba las escuelas regionales campesinas en las que se intentaba combinar la formación de los maestros con la capacitación agrícola. El énfasis iba encaminado hacia el mejoramiento de los métodos productivos entre los campesinos. Los estudiantes asistían a un curso de capacitación agrícola o técnica durante dos años y, después de su terminación, podían optar por un año en el cual se centraban en los métodos docentes. Esto alentaba la vinculación entre maestros rurales y las comunidades. Por otro lado, en movimientos campesinos, muchos profesores marcharon por la demanda de mejores condiciones de vida para los habitantes rurales.

Durante el periodo de Cárdenas (1934-1940), la política de una «educación socialista» insistía en las vinculaciones escuelas-comunidades a través de profundas reformas sociales y políticas, que sentaron las bases para una educación consolidada en el medio rural. Sin embargo, a partir de 1940, el énfasis en la educación rural disminuye, y la educación urbana se toma como modelo. Desaparecen las escuelas regionales campesinas y la educación comunitaria adquiere una función compensatoria. A pesar de la creación, en 1951, del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL), cuyos objetivos eran apoyar la alfabetización para adultos y «... proporcionar a las comunidades rurales una cantidad mínima de elementos que les permitieran una mejor adaptación al ambiente y a los requerimientos de la vida diaria contemporánea y de ahí la necesidad de personal capacitado en materias como higiene, agricultura, pequeña industria y artesanías» (Torres Bodet citado en Pieck, 1996: 87-88), sólo la prioridad de la vinculación con las comunidades en el medio rural se concretizó en la Ley Nacional de Alfabetización. Los centros de educación básica rural (CER) se crearon en 1954.

y las misiones culturales¹²¹ perdieron importancia durante la década de los ochenta. No obstante de todos estos esfuerzos, el 24% de la población en edad escolar continuaba, para 1970, fuera del sistema educativo, y las áreas rurales quedaban subordinadas al modelo de desarrollo urbano e industrial (Pieck, 1996). A partir de entonces, las escuelas rurales, sus maestros y sus alumnos carecen de posibilidades para plantear modelos educativos acordes con sus necesidades prácticas y a la problemática regional vivida.

La educación no formal fue fortificada en ciertos periodos —por ejemplo, durante 1976-1982 con el Plan Nacional de Educación, que se esforzaba por extender la educación en el nivel de comunidad mediante el Programa de Educación a Grupos Marginados—. Sin embargo, la educación no formal sigue siendo fortuita y compensatoria en ocasiones y con un énfasis técnico en algunos programas de salud, dependiendo de las políticas poblacionales y agrícolas del momento.

Con esta historia de vinculaciones entre la educación formal y no formal, quisimos analizar las posibilidades y limitantes de las interrelaciones entre el magisterio y las comunidades para edificar proyectos conjuntos. Para ello, requerimos conocer la imagen actual del maestro rural, desde el punto de vista de las comunidades, y las visiones de los profesores respecto a las comunidades con el fin de evaluar las posibilidades de establecer vinculaciones proyectadas a largo plazo. ¿Podrían ser los maestros y maestras interlocutores con grupos o sectores sociales de las comunidades para proponer proyectos educativos con los niños y niñas sobre la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales de la región?

¹²¹ Durante el periodo de José Vasconcelos, como secretario de Educación (1920-1923), nacieron las misiones culturales, como campañas educativas, con el propósito de castellanizar; más tarde, adquirieron el objetivo de brindar oficios y técnicas agrícolas. En las siguientes décadas, dejaron de tener un papel importante en la educación comunitaria. En 1970, las misiones vuelven a recuperarse como un espacio de vinculación comunitaria. En la actualidad, ya nadie las menciona.

La educación no formal como espacio de capacitación agrícola-ecológica: ¿sustentable o azarosa?

Entre 1960 y 1970, hubo un amplio desarrollo de programas de educación para adultos en México en manos gubernamentales (principalmente en la alfabetización, en el control de natalidad, en el extensionismo agrícola y en cursos de tejido y costura) con la esperanza de que contribuirían al crecimiento económico. La educación formal no estaba aumentando a los mismos ritmos que la población, ni proveía las capacidades técnicas requeridas para el mercado de trabajo. Por ello, los programas no formales tenían, para las agencias gubernamentales, un papel significativo en los procesos de desarrollo, ya que se consideraban como una compensación de las debilidades del sistema educativo formal. La teoría del capital humano se convirtió en la contraparte educativa de las teorías del desarrollo. Se le atribuyeron a la educación poderes casi mágicos para combatir las desventajas sociales y económicas. La educación no formal estaba considerada con ventajas, ya que no se necesitaban maestros titulados, aulas especiales ni estudiantes de «tiempo completo» (Pieck, 1996: 43-45).

El conjunto de estos programas fue nominado como educación comunitaria, en el supuesto de que tienen efectos positivos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades (Pieck, 1996)¹²². Sin embargo, a pesar de las altas inversiones financieras y de la participación de varias instituciones gubernamentales (centros de desarrollo del DIF, misiones culturales de la SEP, centros de educación

¹²² La investigación de Pieck (1996) tiene el objetivo de explorar el significado y la función social de los programas oficiales de la educación comunitaria en México para los maestros y para los alumnos. Desde una perspectiva etnográfica y sociológica, llega a la conclusión de que la educación comunitaria transmite los códigos respecto al posicionamiento social, y no es una educación cuestionadora de valores. Las características compensatorias de estos programas son evidentes. Los cursos no tienen impactos en un mejoramiento significativo en los ingresos o en las condiciones de vida, pero trascienden en función de los significados que permanecen en los y las alumnas y en los y las maestras.

del INEA)¹²³, los resultados han sido efímeros y heterogéneos. El extensionismo agrícola, para las comunidades rurales, quedó en manos de las instituciones gubernamentales con el objetivo de que los productores pudieran asimilar «el progreso tecnológico» de los centros de investigación. La extensión agrícola se convirtió en uno más de los ingredientes del paquete tecnológico y casi nunca ha jugado un papel educativo importante en el cual se pudieran discutir las opciones productivas o las ventajas y desventajas de la aplicación de las técnicas (Schmelkes, 1984). La importancia de la capacitación productiva iba con el vaivén de las necesidades económicas, según las políticas nacionales de desarrollo. Con claridad, esta política de capacitación obedecía a toda una política en el nivel internacional.

A partir de la década de los setenta, hubo, nuevamente, un interés por el tema de la organización y capacitación campesina. Se crearon instituciones y programas con este interés: la Dirección General de Extensión Agrícola, el Instituto Nacional para la Capacitación Agropecuaria (INCA), el Fideicomiso para la Organización y Capacitación Campesina (FOCC) y el Programa Nacional para el Desarrollo Rural Integral (Pronadri). Los programas, a pesar de que incluyeron en su currículum cuestiones productivas, administrativas y de comercialización, carecían de la integración necesaria entre los procesos educativos y el desarrollo rural. Para fines de los años ochenta, casi 60 instituciones gubernamentales llevan a cabo actividades de capacitación dentro del sector rural (Latapí, 1982; Schmelkes, 1982; Pieck, 1996).

A pesar de este bloque de capacitación, las áreas rurales permanecían en condiciones de pobreza social y económica. En una investigación sobre la extensión agrícola, se señala que la capacitación no beneficia a los se encuentran en condiciones más desfavorables y favorece a quienes están en condiciones más prósperas (Schmelkes,

¹²³ Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Secretaría de Educación Pública (SEP); Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

1989). Los pocos impactos en el desarrollo social y económico de los pueblos se deben a la falta de planeación, a una distribución desigual de los cursos, a la baja correspondencia entre objetivos y contenidos, pero sobre todo, a la desvinculación con las características marginales y de pobreza de la población (Pieck, 1996: 20-23). Quedó claro que la educación de forma aislada no podía ser la respuesta a los problemas sociales y económicos de los países pobres.

La mayoría de los programas de educación no formal no ha generado cambios importantes en la igualdad genérica, social y económica, ni ha promovido procesos de toma de conciencia. Por el contrario, el contenido y la pedagogía de los cursos refuerzan la transmisión de códigos restringidos y el papel de los habitantes (particularmente el de las mujeres) dentro de la estructura social de una comunidad¹²⁴. Reproducen aspectos como: el papel pasivo de los y las alumnas, el rango de autoridad, las relaciones verticales en la sociedad, las nociones de poder y la carencia de una voz en la sociedad. Las habilidades adquiridas por los y las alumnas les permiten mejorar sus condiciones de vida de manera restringida, pero son muy valoradas, pues crea capacidades comunes y experiencias compartidas. Ello tiende a fortificar procesos de identidad y de posicionamiento social entre alumnos y maestros. Es claro que la educación comunitaria, promovida por el gobierno, cumple una función en términos macrosociales: refuerza la legitimación y la presencia del estado por medio de una actividad educativa que satisface algunas de las expectativas de la población (Pieck, 1966).

En el otro extremo, tenemos a la educación popular. Aquí, nos limitaremos a la educación popular ambiental (EPA)¹²⁵. Desde esta

¹²⁴ Una alumna adulta de 30 años dice: «Yo me siento útil para mi familia», mientras que otra dice: «Para nosotros los pobres..., estos cursos están bien» (Pieck, 1966: 291 y 324). Estas citas reflejan que estos cursos satisfacen necesidades personales, pero no tienen efectos sociales a largo plazo.

¹²⁵ La EPA es un proceso integral participativo en el cual el proceso educativo recupera la práctica de los sectores populares, la profundiza con elementos teóricos y la

óptica, la educación no se ve ni como la panacea ni como una mera transmisión de conocimientos que vienen a «sacar de la pobreza». Al contrario, bajo la filosofía de esta educación, ésta se considera un instrumento político que pretende transformar la conciencia social y política de los sectores participantes. Haciendo una evaluación, se encuentran las reflexiones hechas hasta 1995 por la Red de Educación Ambiental (REPEC). Se resaltaron experiencias valiosas con impactos positivos. Sin embargo, participantes de la Red hicieron críticas importantes hacia organizaciones no gubernamentales por haber planteado proyectos ambientales sin haber logrado una fortaleza y continuidad de trabajo con los sectores populares. Entre los factores que explicaban la falta de consolidación en la mayoría de las vivencias, se podían resaltar tres: *a)* La sobresimplificación, la improvisación y la falta de preparación en educación ambiental de parte de los grupos ambientalistas; *b)* Las demandas de los grupos populares crecían a mayores ritmos que la disponibilidad de tiempo, recursos e innovaciones educativas de las organizaciones; y *c)* Las dificultades para alcanzar las metas políticas de los sujetos participantes (REPEC, 1995). Si hoy en día volvemos a realizar una evaluación, la educación popular ambiental ha superado, en buena medida, las dos primeras críticas que se le hicieron hace ocho años. Sin embargo, todavía queda pendiente el trabajo sobre las metas políticas establecidas.

Si bien la educación popular ambiental ha tenido aciertos importantes en atender la formación de grupos populares (urbanos y rurales), sus esfuerzos han sido optimizados cuando aquélla se ha dirigido a organizaciones populares ya constituidas. Por el contrario, si se parte de proyectos entre pequeños grupos comunitarios con el fin de fortificarlos,

renueva en la actuación de los sujetos estratégicos. La EPA recupera el conocimiento de los sujetos sociales, brinda información técnica a partir de los conocimientos científicos y renueva la interpretación de la realidad circundante de los sujetos participantes. Su enfoque es interdisciplinario y holístico, y su meta es la transformación de la realidad.

esto puede conducir a resultados efímeros y azarosos, principalmente cuando se pierde el interés por la participación a largo plazo.

Existen redes y organizaciones sociales en el medio urbano y rural que han incorporado la EPA como una demanda social y política para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, considerando como meta la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales a través de la planificación participativa y la capacitación para ejecutar alternativas. La Red de Educación Popular y Ecología para América Latina y El Caribe (REPEC) reúne a organizaciones que intervienen en el desarrollo de proyectos y actividades concordantes con las metas y líneas de acción del Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global, suscrito en Río de Janeiro, en 1992. Uno de los institutos más antiguos de la Red, que vienen consolidando trabajos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo desde 1979, es el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina (Iied), el cual ha trabajado más en municipios urbanos de tamaño medio¹²⁶.

En México, cabe resaltar una de las primeras experiencias de la EPA en la región de Pátzcuaro, Michoacán. Desde principios de la década de los ochenta, el Centro de Estudios Sociales y Ecológicos (CESE) impulsó proyectos de educación y desarrollo regional con los lineamientos del ecodesarrollo. Éstos compartían dos enfoques: cambiar a los individuos y modificar las relaciones sociales que fortalecían modelos ambientales no sustentables. La inserción comunitaria se realizaba a través de metodologías participativas. La selección de las comunidades tenía como punto de partida tres criterios:

¹²⁶ En el ambiente urbano mexicano, la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda del Estado de Veracruz (Ucisver-Pobladores), surgida en 1984 y con más de tres mil miembros para 1994, ha sido una de las organizaciones del MUP que ha reivindicado desde un principio la necesidad de dar a los asentamientos promovidos una dimensión ecológica, productiva y popular. El saneamiento ambiental resultó ser el área de atención prioritaria. La definición del problema derivó en un proceso de intercambio de experiencias y en la unión con otros grupos de la región. Esto permitió la instalación de letrinas secas en comunidades del municipio de Coatepec (García y Almazán, 1994).

representatividad, receptividad y efecto multiplicador para la región. El CESE apoyó a líderes para definir una estrategia de organización general en torno a la defensa del lago. Desde su creación, en 1982, la Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Pátzcuaro (Orca) integraba 27 comunidades. Su objetivo era defender los recursos de la región, y combatir los problemas de contaminación a través de la participación organizada de las comunidades. Se elaboró un paquete de capacitación con temas ecológicos, metodológicos, estratégicos, culturales, económicos y políticos, tratando precisamente que la educación ambiental fuera holística. Los talleres regionales y los cursos fueron metodologías que cubrieron niveles y temas. Los resultados han abarcado desde la concientización ecológica y obras de protección ambiental en las comunidades hasta cambios en las políticas gubernamentales con la incorporación de planes y técnicas del ecodesarrollo. Se ha logrado el fortalecimiento de las organizaciones con 120 dirigentes y la creación de nuevas organizaciones regionales (Esteva, 1994). Los sectores con los cuales se ha trabajado menos son el magisterio y los funcionarios municipales, por lo que todavía no ha habido una evaluación de esta interacción.

En la sierra de Santa Marta, no ha habido una organización de tal magnitud¹²⁷ y las luchas o movimientos sociales, que reivindicaron en sus demandas políticas el mejoramiento del ambiente o la conservación de los recursos naturales, se han concentrado en forma de denuncia, responsabilizando al gobierno por los procesos de deforestación de la región¹²⁸. Por el contrario, las contradicciones

¹²⁷ Existe una organización incipiente en la zona popoluca. La organización de Homshuk tiene sus raíces en las comunidades eclesiales de base. Más tarde, algunos de sus dirigentes fueron promotores del Proyecto Sierra de Santa Marta. La organización se separa y forma su propio tejido de redes con profundas reivindicaciones indígenas. Además, proporciona asesorías para proyectos productivos entre los popolucas.

¹²⁸ El programa de la siembra de los eucaliptos fue rechazado por la mayoría de los habitantes de la región. Con las movilizaciones y presiones, la empresa abandonó sus planes productivos.

sociales y económicas, por un lado, y los decretos autoritarios de las reservas, por otro, han llevado a una oposición de grupos de productores a actividades de conservación¹²⁹. Desde la primera declaración, en 1980, de la Zona de Protección de Flora y Fauna, hubo amparos de los habitantes serranos para seguir trabajando en un aserradero. Hoy en día, con el decreto de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, hubo igualmente amparos de los pobladores de ejidos, ubicados en la zona núcleo, contra la expropiación de sus tierras.

A pesar de la complejidad de los movimientos sociales, de sus reivindicaciones y del mar de propuestas contradictorias por parte de los programas gubernamentales y no gubernamentales, los procesos de educación ambiental para adultos en la región han intentado estar orientados por las necesidades prácticas de los grupos o sectores sociales (milperos con programas de abonos verdes, ganaderos con propuestas de intensificación y manejo rotativo de praderas, ixtleros y palmeros con la intensificación del cultivo para la recuperación de acahuales, mujeres con proyectos productivos en solares y manejo de ganado menor, pescadores con innovaciones técnicas para la cría de peces, entre otros).

Las metodologías de los grupos externos no gubernamentales que han trabajado en la región son diferentes, pero siguen un camino más o menos común. El primer nivel del proceso de educación ambiental ha sido la recuperación de la experiencia, la historia y los conocimientos de los habitantes sobre su entorno. El segundo, la concientización a través de talleres de reflexión de los efectos del deterioro. El tercero, la discusión de alternativas y de prácticas a realizar. Estos talleres de

¹²⁹ Un ejemplo dramático han sido los problemas vividos por la comunidad de El Pescador, municipio de Pajapan. El Comité Ecológico de Protección al Cangrejo Azul, avalado por la asamblea comunitaria, decidió la captura controlada por parte de los habitantes de las comunidades aledañas a la Laguna del Ostión. Esto provocó enfrentamientos con otras poblaciones, las cuales capturaban el cangrejo en grandes cantidades de forma indiscriminada. La determinación de vedas por el Comité Ecológico se contraponía a los intereses de los habitantes de otras comunidades, quienes habían vivido de la captura del cangrejo desde hacía varios años.

integración participativa se convirtieron en potentes mecanismos no formales de educación ambiental. Los grupos locales resultantes recogen las propuestas, pero aún no logran articularse con instituciones locales que las avalen. Sin embargo, ¿cómo mantener la participación y la reflexión de grupos comunitarios sobre su problemática ambiental, social y cultural? Es una pregunta fundamental para seguir una planeación integral e intersectorial. Los resultados obtenidos son fruto de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, gubernamentales y académicas, y sus alcances y metas varían, enormemente, en el tiempo y en el espacio¹³⁰. A veces, hay que evaluar más las discontinuidades de varias de las iniciativas, aun las propias, y hay que seguir insistiendo en la articulación de las propuestas de conservación con las instituciones locales.

3. LA ESCUELA COMO UN ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DE LOS RECURSOS NATURALES: LA PARCELA ESCOLAR DE PAJAPAN

El cúmulo de estos aprendizajes en las experiencias de talleres con productores, junto con incipientes vivencias en el seno de la escuela, nos llevaron a la situación de trabajar con la educación formal y a verla como un posible espacio de reflexión continua sobre el futuro de los recursos naturales. Primero, las enseñanzas que reciben los niños y niñas no les ayudan a reflexionar sobre su propia problemática regional (ambiental y social). Segundo, los derechos ambientales de los niños y las niñas deben fortalecerse. Se requieren políticas educativas comprometidas a rescatar, capacitar y formar a la población infantil con valores y prácticas ambientales que tiendan a construir procesos de sustentabilidad. Tercero, el impacto de los programas

¹³⁰ Los resultados están plasmados en documentos inéditos del Proyecto Sierra de Santa Marta, en documentos de Culturas Populares y de Proaft, así como en Paré y Velásquez, 1997.

ambientales en las comunidades puede tener alcances significativos cuando los proyectos logren una participación intersectorial, debido a que están en el eje de las necesidades y adecuados a las posibilidades de vulnerabilidad, pobreza y marginación. Este impacto puede ser directo a través de las actividades realizadas con grupos comunitarios o indirecto por efecto de algún sector (en este caso, los niños) en las actitudes y valores de grupos comunitarios (en este caso, las familias). Nosotras partimos de la idea de provocar estos efectos de tipo directo e indirecto.

La primera experiencia en el nivel escolar realizada fue el intento del rescate de la parcela escolar¹³¹ de la escuela Cándido Donato Padua, primaria general de la SEP en la comunidad nahua de Pajapan. Por conflictos e inercias entre los maestros y el director, la parcela escolar había quedado sin ser trabajada por décadas. Por lo mismo, la parcela cubierta de una selva alta perennifolia se constituía en el manchón de selva más importante cercano al pueblo. Su estado de conservación permitía tener una alta diversidad en poca superficie —44 especies en 8 hectáreas— (Ramírez, datos de campo). La parcela era como una pequeña isla de selva de 12 há, rodeada de un mar de milpas y pastos. Era el área de selva más importante en la periferia del pueblo con un extraordinario potencial para convertirse en un jardín botánico, en una zona recreativa o en una parcela demostrativa que incorporara aspectos productivos alternativos.

En 1995, las decisiones de las asambleas escolares (maestros y asociación de padres de familia), influidas por los ganaderos pajapeños,

¹³¹ La parcela escolar es una extensión de terreno de propiedad ejidal, privada o comunal, asignada a la escuela. Las superficies son variables, dependiendo de la época en que fue creada la escuela. Su administración está a cargo de un presidente (el director de la escuela), de un tesorero (el tesorero del comisariado ejidal) y de un secretario (presidente de la asociación de padres de familia). Las utilidades del lugar se distribuyen por estatuto como sigue: 50% para fomento educativo, 25% para fomento agrícola y 25% para los maestros que atienden la parcela, alumnos y padres de familia (SEP-DGEI, 1991). Sin embargo, esta distribución puede variar dependiendo de la escuela y de las decisiones tomadas por la sociedad y por la asamblea.

se dirigían a derribar la selva de la parcela escolar, para establecer potreros e introducir ganado de doble propósito bajo un manejo extensivo. Frente a estas decisiones, el Proyecto Sierra de Santa Marta¹³² propuso un plan alternativo de manejo, y consiguió financiamiento para ello. A pesar de las dificultades organizativas, al participar más de 300 padres de familia, y gracias a la intervención de un promotor del Proyecto Sierra de Santa Marta, se llegó al acuerdo de no tumbiar 8 há y de transformar 4 há en milpas con distintos manejos agrícolas.

El objetivo de dar a las milpas dos manejos tecnológicos era comparar y cotejar resultados: uno sería el tradicional, que incluía la quema de la vegetación tumbada, y el otro sería el alternativo, que eliminaba a la quema como práctica agrícola e incluía siembra de abonos verdes y barreras vivas. Éstas últimas, con el fin de frenar procesos de erosión, y los abonos verdes, con el propósito de recuperar, con lentitud, la fertilidad de la tierra.

La organización del trabajo fue muy complicada. Los padres de familia aportaron su mano de obra con un esquema de faenas (quien no aporta trabajo, debe pagar el jornal para otra persona). Sin embargo, la participación de más de 300 padres de familia era un enorme reto en una comunidad conflictiva y desorganizada.

En cuanto a los resultados de la cosecha, la productividad de la milpa fue alta. No se pudieron hacer las mediciones de cosecha de cada pequeña área experimental, ya que mucho del maíz fue robado, pues la parcela estaba en el camino para ir a las de muchos productores¹³³. Para fines comparativos, los rendimientos entre el sistema de RTQ y el sistema con abonos verdes no

¹³² El Proyecto Sierra de Santa Marta es una asociación civil que tiene más de 10 años trabajando en la región con el fin de conservar los recursos naturales y encontrar alternativas productivas para los habitantes.

¹³³ La mayor ventaja de la ubicación de la parcela era que se convertía en una parcela demostrativa, pero la desventaja eran los robos cotidianos de la cosecha y de las plantas sembradas.

podieron evaluarse. Sólo se demostraron las bondades de la milpa con abonos verdes y se dieron las condiciones para que se convirtieran en semillas de propagación.

La cosecha fue excelente (se recogieron, en promedio, 1.5 ton/hectárea). Sin embargo, las decisiones sobre la repartición y la venta de la cosecha entre los productores entraban en contradicción con el programa de trabajo de los participantes. Mientras unos habían cumplido con todas sus faenas, otros habían pagado sus cuotas y algunos no podían pagar las faenas donde no participaron. Para la repartición de la cosecha, se presentó un gran número de productores, trabajadores y no tan trabajadores. Los maestros aducían que la venta de la cosecha debería servir para la reparación de la escuela. La falta de una estructura organizativa llevó a tomar decisiones sin consenso y a manejos descoordinados, que provocaron pérdidas financieras por una mala venta de la cosecha. Esto ocasionó disgustos y enfrentamientos entre maestros y productores en la mesa directiva de la asociación de padres de familia, la cual estaba poco comprometida. Además, el presidente de la asociación, influido por ganaderos, no apoyó un proceso claro y democrático. Esto provocó un gran malestar que no fue reparado.

A pesar de todos estos problemas y gracias al apoyo del promotor del Proyecto Sierra Santa Marta y de padres de familia, el plan propuesto seguía sus pasos. El objetivo era convertir para el segundo año a la mitad de la superficie milpera (es decir, 2 há) en un potrero con un manejo intensivo de ganado y con la instalación de un cerco eléctrico habría un manejo adecuado de los pastos con la rotación del ganado en pequeñas áreas. La otra mitad de la milpa continuaría bajo un manejo permanente y con la siembra continua de abonos verdes. El manchón selvático se seguiría conservando con la intercalación de plantas no maderables, como el ixtle. Además, para ese segundo año, se construiría un pequeño salón para las reuniones del Centro de Capacitación Campesino, proyecto que venía funcionando con altibajos.

El Centro había surgido durante el proceso inicial de la recuperación de la parcela escolar con el apoyo financiero de una fundación internacional (Interamerican Foundation, IAF) y de la Semarnap. Se convertía en un posible espacio de discusión entre maestros y productores sobre alternativas agropecuarias y de información respecto el manejo de plagas, de fertilizantes y de abonos verdes y sobre cuestiones de comercialización. Los y las maestras serían los responsables del Centro. Se compuso una incipiente videoteca sobre técnicas alternativas y experiencias campesinas y comunitarias en defensa de sus recursos naturales¹³⁴.

Con estos antecedentes, un equipo de estudiantes¹³⁵, bajo la coordinación de la autora de este artículo, realizó programas participativos con maestros y maestras, con madres y padres de los alumnos y alumnas y con los niños y niñas de la escuela. El objetivo era convertir a la parcela escolar en una demostrativa, donde se experimentaran alternativas agropecuarias, se discutieran resultados y se aprendiera mutuamente. Los programas comenzaron. Con los productores (madres y padres de los y las alumnas), diseñamos cinco talleres sobre temas productivos: 1) Problemas y alternativas para las milpas; 2) Manejo de plagas; 3) La ganadería de doble propósito: metas y dificultades; 4) Las selvas y el agua; y 5) Los sistemas agrosilvopastoriles. En los dos primeros talleres, participaron muchas mujeres. A los siguientes, fueron casi exclusivamente hombres. Este cambio se debió a que las mujeres sintieron que los temas eran para los hombres y a que no eran tópicos en los cuales ellas pudieran participar, pues en estos espacios las mujeres no to-

¹³⁴ El proyecto intitulado Dinámica Socio-Cultural y Ecológica de las Transformaciones de los Sistemas Productivos y de las Adopciones de Tecnología en una Zona Indígena de Veracruz, financiado por la DGAPA-UNAM, autorizó la compra de una televisión con videograbadora para el Centro de Capacitación.

¹³⁵ Alex Castellanos, estudiante de licenciatura en antropología social de la ENAH; Esperanza Ignacio, estudiante de maestría en antropología social de la ENAH; Denise Soares, estudiante de doctorado en antropología social de la UNAM; ing. Ramón Pino, asistente en el Proyecto Sierra Santa Marta y en los proyectos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

man decisiones. Esto se trató de resolver aduciendo la importancia de tomar decisiones conjuntas en las parcelas. No obstante, es claro que las decisiones en la ganadería son tomadas casi exclusivamente por los hombres. Esta situación no pudo cambiarse. Las divisiones espaciales por género se tradujeron, claramente, en la asistencia a los talleres.

Los y las maestras participaron en cuatro talleres de reflexión (dos sobre la conservación y dos sobre los sistemas agrosilvopastoriles). Junto con los maestros participaron inspectores y supervisores de área. Los niños y niñas, debido a su alto número en toda la primaria (alrededor de 400), se dividieron en 10 grupos, por lo que sólo participaron en dos talleres: 1) Importancia de la biodiversidad en México y en el mundo; y 2) Conservación y producción: ambas necesarias para la vida.

El objetivo de los talleres era motivarlos para ver en la parcela escolar y en las familiares posibilidades de hacerlas producir. El programa de reforestación de acahuales y selvas para la conservación de la biodiversidad era discutido para poder incluirlo entre las actividades de los productores. De todas las experiencias, los talleres dirigidos a los y las niñas fueron los más exitosos: cuestionamientos, reflexiones y (más importante) comunicación propiciada con sus padres. Todos los talleres estuvieron apoyados con videos (para los niños, caricaturas y experiencias de conservación con niños en otros países; para los productores, experiencias de manejo en otros grupos de campesinos y ganaderos; para los y las maestras, vivencias de conservación), pláticas y discusiones para llegar a un diseño propositivo de la parcela escolar.

La organización de una salida con los y las niñas de cuarto, quinto y sexto a la parcela escolar estuvo concurrida por maestros y por jóvenes productores (promotores del Proyecto Sierra de Santa Marta). Se formaron cinco grupos, cada uno coordinado por un estudiante de nuestro equipo y por mí. Para la mayoría de los maestros, era la

primera vez que visitaba la parcela. Es decir, las decisiones y las opiniones antes vertidas por los maestros se daban en el aire.

Se dieron intercambios de aprendizaje entre campesinos, maestros y niños. Las niñas reconocieron especies de frutas silvestres y los niños maderas buenas para la construcción de casas. Las enseñanzas se las transmitieron a sus maestros. Los productores hablaron sobre las bondades de abonos verdes y barreras vivas, así como del enriquecimiento de cultivos comerciales en la selva y los acahuales. Los y las maestras aprendieron a escuchar y a provocar preguntas en los alumnos.

Con esta salida, se generaron un aprendizaje mutuo, donde se desvanecieron barreras verticales de enseñanza y estatus sociales entre maestros y productores, y una percepción colectiva de la importancia de conservar la selva y de aprender métodos alternativos de producción agrícola y pecuaria. Se fortaleció una cultura ambiental, que empezó a reconocer los derechos ambientales de los y las niñas. En este reconocimiento de derechos, los y las niñas fueron escuchados y se planteó la importancia de la participación creativa y emotiva de los niños en el diseño de la parcela escolar.

Además de estas aportaciones de intercambios de conocimientos y de esta experiencia que ponía en contacto a maestros, alumnos y productores, los niños se percataron de un manejo diferente. Unos defendieron el modelo conocido por ellos a través de las parcelas de sus padres; otros empezaron a discutir con sus compañeros sobre las ventajas y desventajas de otros modelos:

Esta parcela es muy diferente a las de por aquí; primero, está muy montosa y eso a mi papá no le gusta. Si está llena de monte, está sucia y eso está mal. Una parcela chapeada, sin árboles, está limpia, así como lo hace mi papá (Aída, alumna de 4º grado, hija de un ganadero).

Pues tiene mucho monte [la parcela]. Eso está desperdiciado, ¿no? Eso pensaría mi papá, pues él la tiene sin nada de monte. Él dice que

hay que dejarla toda limpiecita para que crezca bien el pasto» (Javier, alumno de 5° grado, hijo de ganadero).

Yo digo que la basura sirve para abonar. Eso es lo que vimos en el video. La parcela tenía como mucha basura, pero eso era bueno, porque les iba mejor a las plantitas, pues no se secaban tan rápido; servían de abono tantas hojas. Yo nunca lo había visto (Mónica, alumna de 6° grado, padre sin tierras).

La parcela a la que fuimos está muy bonita, pienso yo, pues tiene muchos árboles. De por aquí, ya casi es la única con tanto árbol. Y, luego, vimos al tucán. Si todas tuvieran un poquito de árboles, habría más animales y se verían mejor. Debemos cuidar los árboles. Los campesinos no los tienen que quemar (Roberto, alumno de 6° grado, hijo de ganadero).

En la visita a la parcela y en los talleres realizados con los niños, nos percatamos de una falta de comunicación de los problemas productivos y del deterioro ambiental entre niños-niñas y los adultos. En las tareas, las cuales intentaban recuperar conocimientos de la milpa, de la selva y de los ríos mediante un trabajo conjunto entre los niños con sus padres y madres, hubo poco diálogo. Algunos niños relataron que sus padres no habían tenido tiempo de platicar con ellos, mientras que otros aseguraron no tener este tipo de pláticas con sus padres. Muchos mencionaron la ausencia del padre en el hogar debido a abandonos o a migraciones temporales a las ciudades vecinas. Entrelazar preocupaciones ambientales entre padres e hijos es una cuestión que se construye con lentitud, puesto que los actuales canales de comunicación entre ellos no facilitan este tipo de conversaciones¹³⁶. Los niños que platicaron con autoridades locales con el fin de indagar sobre los problemas ambientales del poblado tuvieron una mala experiencia y resultados muy efímeros. Esto nos refleja, nueva-

¹³⁶ Los talleres realizados un año más tarde suscitaron un poco más de intercambio generacional. Sin embargo, los niños seguían comentando la dificultad de comunicarse con sus padres para platicar sobre temas productivos y ambientales.

mente, que los adultos no tienen «la costumbre» de discutir sobre la problemática ambiental y social de la comunidad con los niños y niñas¹³⁷.

Finalmente, la mesa directiva siguiente no tomó en cuenta estas experiencias ni las preocupaciones ambientales externadas durante los talleres. Para ese tercer año, la mesa directiva de la asociación de padres de familia cambió y con ello se modificó el rumbo de la parcela. La dirección de la nueva mesa estaba bajo un expresidente municipal y ganadero, cuyo interés no estaba en el plan propuesto para la parcela. La nueva sociedad de padres de familia, influida por los grandes ganaderos, quería tumbar la selva y convertir la parcela en un potrero; por tanto, no trabajó bajo los lineamientos ni bajo la transparencia de la mesa directiva anterior.

En una asamblea, pensamos destruir todo el monte que hay ahí, pero me habló el presidente y me dijo que no, porque habían firmado un convenio en Catemaco: que el monte alto se quedara así, que eso está prohibido tumbarlo y así quedó (don Eugenio, presidente de la asociación de padres de familia, 2000).

Para este año, la cosecha de maíz volvió a tener buenos rendimientos, pero en el potrero hubo pérdidas. Debido a la falta de toma de decisiones y a la gran cantidad de conflictos, hubo un desfase. Los pastos cultivados el año anterior crecieron demasiado, ya que el ganado fue introducido tarde y con descuidos, por lo que los pastos mejorados (pasto taiwán, insurgentes y chetumal) se perdieron en

¹³⁷ Una situación semejante ha sido estudiada entre los mazahuas del Estado de México. Investigaciones etnológicas de la educación concluyen que la actitud y el comportamiento de las madres hacia sus hijos no se deben a la falta de capacidad de comunicación o de orientación, sino al respeto y a la independencia otorgada al niño desde temprana edad. «El aprender haciendo, intentando y repitiendo las tareas sin instrucción verbal alguna por parte de la madre; el resolver los problemas a partir del propio esfuerzo; el invitar al hacer de los niños a través del hacer adulto y el respetar el ritmo de ejecución y resolución de problemas en los menores son algunos rasgos socioculturales que caracterizan el aprendizaje de los niños mazahuas de Los Capulines» (Bertely, 2000b: 29).

proporciones importantes. Después, el ganado se quedó tanto tiempo en cada división, que dañó el estado del potrero. Esto provocó que se tuviera que retirar el ganado del potrero por falta de pastos y se tuvo que pagar renta de pastos en otros potreros.

Esta situación, aunada al robo de plantas de ixtle en el área de selva restante, creó un fuerte malestar entre los productores, maestros y directivos de la mesa de la asociación de padres de familia. La incapacidad de tomar decisiones consensadas, los malos manejos de los recursos financieros, la falta de información a los padres de familia, el robo de parte de la cosecha y la falta de transparencia generaron, por un lado, la negativa por parte de los productores para participar en la cosecha y limpia del potrero y, por otro lado, la desconfianza y el desinterés en la participación de las decisiones a seguir.

Con esta situación, los productores y los maestros decidieron interrumpir los talleres y las propuestas en la parcela escolar hasta aclarar los «malos manejos» de la mesa directiva. Sin embargo, esta aclaración nunca pudo darse y, por el contrario, las decisiones y acciones se fueron cada vez oscureciendo más. La mesa directiva ocultó la corrupción. Las decisiones comenzaron a tomarse fuera de las asambleas. Esto cada vez generó mayor desconfianza y los productores dejaron de cooperar en el trabajo colectivo de la parcela. Inclusive, los maestros plantearon derribar el área de selva con el objetivo de construir casas de interés social para viviendas de los maestros de las escuelas de la comunidad. El resultado fue un enfrentamiento entre el magisterio y la comunidad. Las recriminaciones entre los dos sectores reflejan la falta de confianza, de comunicación y de un trabajo conjunto en bien de los niños:

Los maestros sólo quieren que uno trabaje, pero ellos quieren las ganancias. Mejor que cada quien trabaje en lo suyo. Que ellos se ocupen de enseñar bien a los niños, pues, de lo contrario, no van a hacer nada bien (madre de familia).

Los padres de familia no se ocupan de nada, quieren todo y que uno haga todo, pero ellos no ayudan; la parcela es para tener útiles en la

escuela y que el lugar esté mejor. Desde hace varios años que no se pintan los salones. Pero ellos creen que uno se queda con el dinero de la cosecha (maestro de 4^o de la escuela Cándido Donato).

La falta de un liderazgo en favor de la propuesta para la parcela escolar, la ausencia de compromiso de la sociedad de padres de familia y de los maestros frente a la corrupción de la mesa directiva y la desinformación llevaron a la cancelación del proyecto. Sin embargo, los niños y las niñas seguían motivados para trabajar con talleres de educación ambiental con el fin de reflexionar y tener acciones sobre su propia problemática ambiental.

4. REFLEXIONES DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN LA EXPERIENCIA ESCOLAR

Las vivencias de tres años respecto a las decisiones y actividades realizadas en la parcela escolar de Pajapan muestran un patrón recurrente. Los procesos detectados que explican la interrupción del plan alternativo para la parcela son: *a)* La ausencia de canales de comunicación adecuados que lleven a interactuar, de forma cordial, a los maestros con los productores; *b)* La falta de transparencia en el manejo financiero de la sociedad de padres de familia; *c)* El desequilibrio absoluto en los trabajos (invertidos por los padres de familia en la parcela escolar) por la ausencia del padre, debido a migraciones laborales, y por falta de interés de un bienestar común; *d)* La inexistencia de motivaciones para realizar actividades nuevas, debido a historias anteriores de fracasos o a una sobrecarga de trabajo; y *e)* Los intereses quedan polarizados sin posibilidad de mediaciones. Esto nos indica que hubo falta de consenso y que no existe la cultura de la negociación¹³⁸.

¹³⁸ Mercado (1995) analiza el agrupamiento o la confrontación entre los sectores sociales, según sus diferentes intereses en torno a la escuela. Los grupos tamizan las disposiciones oficiales o ponen en acción la operación de las escuelas desde sus propias prioridades. Analiza el caso de las negociaciones y discrepancias respecto a la construcción de los sanitarios en un plantel escolar. Finalmente, los sanitarios no se construyen, por el robo, en contubernio entre el director y el presidente de la comisión de las cuotas recabadas.

Los productores y la sociedad de padres de familia partieron de dotaciones de recursos de uso común, adquiridos por derecho al ser miembros de la institución escolar (parcela, fuerza de trabajo, créditos para la compra de infraestructura). Sin embargo, por las discrepancias y la falta de coordinación, sus derechos para tener un control efectivo y legítimo sobre la parcela quedaron cooptados por un grupo pequeño, pero poderoso, de la sociedad de padres de familia. Ese grupo conjuntaba a grandes ganaderos y sus intereses eran diferentes a las propuestas alternativas para la parcela.

La acción colectiva quedó bloqueada por discrepancias en las visiones de los actores respecto al futuro productivo de la parcela. La toma de decisiones vertical y la falta de canales de comunicación bien establecidos forman parte de los modelos de comportamientos comunitarios. El no cuestionar a las autoridades es parte de los usos entre comunidad y autoridades, pues existe una larga historia de cooptaciones políticas de tipo clientelista regional. El presidente de la sociedad de padres de familia, como expresidente municipal y como gran ganadero, gozaba de un poder clientelar en la región, y no era fácil enfrentar a ese personaje. La organización inicial y sostenida a través del promotor del Proyecto Sierra Santa Marta y de un equipo coordinado por la autora de este artículo se fue derrumbando cuando el promotor no pudo llevar a cabo negociaciones y cuando nosotros, como grupo asesor, nos retiramos de las asambleas, ya que los informes financieros eran turbios y salían de nuestra competencia.

Estos conflictos, aunados al contexto sociopolítico y económico de alta vulnerabilidad, nos conducen a comprender la fragilidad de procesos autogestivos. El modelo alternativo exigía una mayor inversión de trabajo y de tiempo de planeación. Los maestros y maestras quedaban comprometidos para continuar la experiencia, lo cual quedaba, para muchos, fuera de sus planes futuros. La sociedad de padres de familia necesitaba mayor fuerza para exigir la transparencia de las cuentas del tesorero, pero también requería de una mayor co-

ordinación para exigir las faenas o el pago en caso de no poder asistir. Para ello, debía contar con la legitimidad para hacerlo y para sancionar a los padres de familia. «La gente no va» y «la gente no quiere pagar» eran las quejas constantes de los comités.

Las autoridades ejidales no intervenían en el cumplimiento de la reglamentación acordada, ya que tenían fuertes intereses en convertir la parcela en potreros para introducir el modelo de ganadería extensiva. Los padres y madres de familia participaban, de manera intermitente, por sus actividades económicas o domésticas. Por lo anterior, se interrumpía, con facilidad, el hilo de la comunicación. Todos los acuerdos tomados en las primeras asambleas para apoyar el manejo alternativo de la parcela (mantener 8 há de selva enriquecidas con la siembra de ixtle, cultivar 2 há de milpa con abonos verdes y barreras vivas y mantener la ganadería intensiva en 2 há) se desvanecieron durante los múltiples enfrentamientos entre maestros-maestras y productores.

El nivel de conciencia de los derechos ante las decisiones a tomar, por parte de los padres y madres de familia, no fue alcanzado. Incluso, las mujeres fueron rápidamente desplazadas de la toma de decisiones en las asambleas. En los talleres, discutíamos estos puntos (el papel de las mujeres en las asambleas), pero los problemas financieros invadieron los temas de los talleres y los tópicos fundamentales quedaron totalmente marginados. El desarrollo de sus capacidades fue muy heterogéneo, ya que los padres de familia sí tenían mucha claridad del proceso y exigían sus derechos, mientras que la mayoría se perdió en las confusiones administrativas y en la cultura autoritaria del «aquí no pasó nada, compañeros».

A pesar de estos desentendidos entre el mundo de los adultos, los niños y las niñas seguían motivados para trabajar con talleres de educación ambiental, con el fin de reflexionar y tomar acciones sobre su propia problemática ambiental. Muchos niños habían hecho dibujos con pequeñas historias sobre la parcela escolar y seguían preguntando sobre la continuación de los talleres o de las visitas.

Esta experiencia nos sirvió para plantear un proyecto de investigación más amplio, pues habíamos aprendido las bondades y los conflictos que se generaron por trabajar de manera intersectorial (productores, magisterio y alumnos) con un objetivo común. A pesar de todos los problemas y enfrentamientos, los y las niñas se habían enriquecido, enormemente, con la experiencia, y los y las maestras habían pensado continuar con las reflexiones vertidas durante los talleres y la salida a la parcela. Esto vinculaba a la educación formal con el currículum en ciencias naturales y sociales y con la problemática ambiental y social de la propia comunidad de Pajapan.

Durante los talleres, los niños nos habían explicado el ciclo del agua, la fotosíntesis y las cadenas alimenticias, pero no relacionaban estos fenómenos naturales con la deforestación de la selva de los volcanes Santa Marta y San Martín, ni con la caza clandestina de aves y mamíferos de la selva, ni con el uso indiscriminado de plaguicidas y herbicidas en las milpas y potreros de sus familias. Parecían temas desvinculados y era difícil relacionarlos de manera continua.

Con ello, se generó en la escuela la discusión sobre los derechos ambientales de los niños y niñas pajapeños y sobre la importancia de su participación en la toma de decisiones sobre su futuro ambiental. Faltaba ver si estas reflexiones podrían comunicarse entre padres, madres e hijos. Nuestras siguientes inquietudes fueron: ¿Cómo incluir a los niños y a las niñas, como sujetos estratégicos, en la validación social de la reserva declarada a finales de 1998? ¿Cómo valorar los conocimientos de sus abuelos dentro de su propia cultura nahua en relación con el mundo natural? ¿Cómo tender los puentes de la comunicación entre generaciones y géneros para dar voz a los abuelos y las abuelas, a los padres y a las madres y a las niñas y a los niños con el fin de que reclamen sus derechos ambientales, culturales y sociales en una participación continua y en la toma de decisiones en sus comunidades? ¿Cómo construir los puentes de una comunicación ambiental entre el sector magisterial,

el productivo y el alumnado? ¿Cómo rescatar esta experiencia para otras escuelas de la región?

BIBLIOGRAFÍA

- ACEVEDO, L., «Políticas lingüísticas en México de los años cuarenta a la fecha», en B. Garza Cuarón (coord.), *Políticas lingüísticas en México*, La Jornada Ed./Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, México, 1997
- BONFIL, G., «Los diversos rostros de la infancia en México», *Tierra Adentro*, núm. 85, México, abr-may, 1997
- CERVIGNI, R., y F. Ramírez (coords.), *Desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad: un estudio de caso en la sierra de Santa Marta Veracruz, México*, PSSM/Global Environment Facility/Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo, Xalapa, Veracruz, 1996
- Conapo, *Índices de marginación municipal, 1995*, México, 1998
- CORONADO SUZÁN, G., «Espacios para el bilingüismo entre la imposición estatal y la apropiación comunal», en B. Garza Cuarón (coord.), *Políticas lingüísticas en México*, La Jornada Ed./Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, México, 1997
- CRUO-Uach y PSSM, Diagnóstico y propuesta del Plan de Desarrollo Comunitarios de San Fernando, municipio de Sotepan, Veracruz, taller comunitario realizado del 15 al 18 de abril para el Proders-Semarnap, Xalapa, Veracruz, 1997
- D'EMILIO, L., «Pobreza de la educación y propuestas indígenas: lecciones aprendidas», en *Educación y pobreza: de la desigualdad a la equidad*, Unicef/Colegio Mexiquense, México, 1995
- DÍAZ, E., «El Programa de Maestría en Lingüística Indoamericana», en B. Garza Cuarón (coord.), *Políticas lingüísticas en México*, La Jornada Ed./Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, México, 1997
- ESCOBAR, A., *Lenguaje y discriminación social en América Latina*, Ed. Milla Batres, Lima, 1972
- ESTEVA, J., «Educación popular ambiental en la región de Pátzcuaro, Michoacán, México», en Red de Educación Popular y Ecología (Repec), *Once experiencias de educación ambiental y popular en América Latina*, núm. 1, año 1, Repec del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), Santiago, Chile, 1994

- ETSA, «Los alcances de la noción de "cultura" en la educación intercultural. Exploración de un ejemplo: Sociedad y cultura bora», en J. Godenzzi (comp.), *Educación e interculturalidad en los Andes y la Amazonia*, Centro de Estudios Regionales y Andinos Bartolomé de las Casas, Perú, 1996
- GARCÍA, Helio, y C. Almazán, «Educación ambiental en colonias populares de Xalapa, Veracruz», en Red de Educación Popular y Ecología (Repec), *Once experiencias de educación ambiental y popular en América Latina*, núm. 1, año 1, Repec del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), Santiago, Chile, 1994
- GASHÉ, J., «Más allá de la cultura: lo político», en M. Bertely y A. Robles (coords.), *Indígenas en la escuela*, COMIE, México, 1996
- GORTARI KRAUSS, L. de, «Alcances y limitaciones de las políticas de educación en zonas indígenas en la actualidad», en B. Garza Cuarón (coord.), *Políticas lingüísticas en México*, La Jornada Ed./Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, México, 1997
- GUTIÉRREZ, N., *Nationalist Myths and Ethnic Identities. Indigenous Intellectuals and the Mexican State*, Univ. of Nebraska Press/Lincoln y Londres, Estados Unidos, 1999
- HAMEL, Rainer, y H. Muñoz, «Perspectivas de un proceso de desplazamiento lingüístico: el conflicto otomí-español en las prácticas discursivas y la conciencia lingüística», *Estudios Sociológicos*, núm. 11, Colmex, 1986
- INEGI, *XI Censo Nacional de Población y Vivienda, 1990. Resumen general*, INEGI, México, 1992
- LATAPI, P., *Política educativa y valores nacionales*, Ed. Nueva Imagen, México, 1982
- LAZOS CHAVERO, E., y L. Godínez Guevara, «Género en los procesos de sustentabilidad: potencialidades y límites», en Fernando Lozano (coord.), *La población de México al inicio del siglo XXI*, Ed. Somede/CRIM-UNAM, México (en prensa)
- NOLASCO, M., «Educación bilingüe en Oaxaca: su impacto en la participación política de los pueblos indios», en B. Garza Cuarón (coord.), *Políticas lingüísticas en México*, La Jornada Ed./Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM, México, 1997
- PEÑA, G. de la, «Orden social y educación indígena: la pervivencia de un legado colonial», en S. Glantz (comp.), *La heterodoxia recuperada. En torno a Ángel Palerm*, FCE, México, 1987
- PIECK GOCHICOA, E., *Función social y significado de la educación comunitaria. Una sociología de la educación no formal*, El Colegio Mexiquense/Unicef, México, 1996

- Repec del CEAAL, «(Pre) Diagnóstico mexicano sobre educación popular ambiental», Seminario Regional sobre Capacitación de las Comunidades para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, Pátzcuaro, 1995
- ROCKWELL, E. (coord.), *Evaluación parcial del proyecto experimental de educación bilingüe en la enseñanza primaria de la región de Puno, Perú, informe final*, Cinvestav-IPN, 1988
- ROJAS, A., *Escolaridad e interculturalidad. Los jóvenes wixaritari en una secundaria de huicholes*, tesis de maestría en antropología social, CIESAS, Guadalajara, 1999
- SCHMELKES, S., «La investigación sobre educación de adultos en América Latina», en Carlos Torres (ed.), *Ensayos sobre la educación de adultos en América Latina*, Centro de Estudios Educativos, México, 1982
- _____, «Un enfoque de la investigación empírica sobre la relación entre educación, productividad e ingreso para el caso de México», *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, núm. 1 y 2, 1984
- _____, «La educación de adultos en México. Una visión general del trabajo desde el estado», *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, núm. 3, 1989
- TRAPNELL, L., «Pueblos indígenas, educación y currículo. Una propuesta desde la Amazonia», en J. Godenzzi (comp.), *Educación e interculturalidad en los Andes y la Amazonia*, Centro de Estudios Regionales y Andinos Bartolomé de las Casas, Perú, 1996



EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA:
LOS AYUUJK DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC (MIXE), OAXACA:
UN PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL

JOSÉ MANUEL JUÁREZ NÚÑEZ
SONIA COMBONI SALINAS¹³⁹

La educación constituye un factor de desarrollo para las naciones en la medida en que el progreso de la escolaridad va acompañado de un proceso de inversión productiva, que impacte al aparato productivo, por lo menos en el sector de la mediana y pequeña industria, en el cual la mano de obra intensiva es necesaria.

La misma exigencia de nivel de escolaridad que se plantea para las poblaciones mayoritarias del país se presenta para los grupos étnicos minoritarios y con una fuerza mucho mayor, ya que el grado de desarrollo es menor que en las poblaciones favorecidas por las políticas estatales y las ventajas comerciales y económicas comparativas.

La educación, si bien no incide, de forma directa, en la producción, sí eleva los índices de calidad y por esta vía influye en una mayor productividad, ya que el individuo con una preparación adquiere una mayor capacidad y mejores competencias, que le permiten un desempeño social y laboral con horizontes más amplios. Por tanto, la producción se puede ver beneficiada, al contar con la posibilidad de elevar sus índices de competitividad en el mercado.

¹³⁹ Los autores son profesores investigadores adscritos al área de investigación educación, cultura y procesos sociales del Departamento Relaciones Sociales, de la DCSH de la UAM-X.

Además, la educación escolarizada impacta al campo laboral y económico, influye, de manera directa, en la conservación y reproducción de la cultura, necesaria para la sobrevivencia de cualquier pueblo o sociedad, y pone bases para cambios sociales, culturales y políticos, que se pueden dar en el devenir histórico trastrocando las relaciones sociales de producción y, por ende, de la economía.

EL DERECHO A LA CULTURA

Todos los pueblos, según los principios de los derechos humanos, tienen el derecho y la obligación de preservar su cultura, su lengua, sus creencias, sus costumbres particulares, sus valores, su ideología y sus formas de representación e imaginación social. Evidentemente, este derecho conlleva la necesidad y la obligación de la tolerancia de lo diverso, de lo otro, de lo diferente; es decir, la tolerancia de las otras culturas que se encuentran en convivencia en un espacio o territorio determinado geográficamente en un momento histórico específico.

Este derecho se traduce en la capacidad que cada pueblo tiene para determinar su rumbo histórico, lo que Alain Touraine¹⁴⁰ denomina «la historicidad de su sociedad», y vivirlo de acuerdo con su propio proyecto cultural, político, económico y social, considerando que el territorio que los sujetos ocupan y construyen como espacio social en el cual se producen y se realizan como sujetos hacedores de la historia provoca la historicidad de su sociedad a través de la transformación de sí mismos en el devenir y en el vivir de sus experiencias y vivencias en un proceso permanente de construcción de sí mismos. De acuerdo con el mismo autor, «la apelación al sujeto es la única respuesta a la disociación de la economía y de la cultura, y también

es la única fuente posible de los movimientos sociales, que se oponen a los dueños del cambio económico, los citadores comunitarios. Afirmación de libertad personal: el sujeto es también y al mismo tiempo un movimiento social»¹⁴¹.

El sujeto, que es el actor en su capacidad reflexiva y constructiva de sí mismo, puede ser el individuo o el colectivo; de aquí que podamos hablar de sujetos sociales o de actores sociales. Los actores no sólo se construyen a sí mismos y representan un papel, sino que juegan el rol determinante en las relaciones de la sociedad; la manera como se relacionan, se reconocen, se aceptan o se rechazan constituye el entramado social en el cual se desenvuelven en su cotidianidad. En la misma línea del autor citado, se puede afirmar que «la transformación del individuo en sujeto sólo es posible a través del reconocimiento del otro como sujeto que también trabaja, a su manera, para combinar una memoria cultural con un proyecto instrumental»¹⁴². En otros términos: la construcción del sujeto individual requiere y exige la aceptación de otro actor en construcción y el reconocimiento del otro. De esta manera, a través del reconocimiento mutuo, se construyen actores sociales, como sujetos actuantes y hacedores de la historia individual y colectiva. La sociedad es, por tanto, producto de la historia; como tal, refleja a las organizaciones humanas que han contribuido a crearla, pero esconde las relaciones sociales que constituyen el tejido fino de esa sociedad. Por ello, la cultura aparece como un todo que subsume lo particular, lo específico y lo propio para mostrar lo universal, lo homogéneo y lo común.

La ideología de los grupos dominantes ha hecho lo demás: imponer la visión propia del mundo como la única válida, verdadera y digna de ser reproducida; por tanto, impuesta a quienes no pueden contrarrestarla con la fuerza de las armas ni con la del dominio político.

¹⁴¹ Alain Touraine, *¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: El destino del hombre en la aldea global*, FCE, Argentina, 1996, p. 20 y s.

¹⁴² Ídem

co y económico. En esta lucha, los pueblos más perjudicados fueron los originarios, los indios, pues a la destrucción militar siguió la devastación de su mundo ideológico, de su cultura y de su propiedad comunal, el trastocamiento de su orden social y la pérdida de su identidad individual y colectiva. La ideología de la superioridad de la raza europea dejó secuelas en los criollos y en los mestizos herederos de la colonia y en los sobrevivientes de la guerra de independencia y de la revolución mexicana: el racismo del mestizo mexicano, solapado, pero eficiente, para dejar de lado en su camino hacia el progreso a los indios y a los que se les asemejaban, como los jornaleros agrícolas. Se legitimó la pequeña propiedad de los campesinos, pero no la propiedad colectiva del indígena, que para ser reconocido, de manera oficial, debía asimilarse al campesino mestizo.

El derecho a la cultura propia nunca fue abandonado por los grupos indígenas, quienes siempre han resistido a la penetración ideológica de Occidente a través de la escuela o mediante el intercambio comercial; de aquí el poco interés por la educación «indígena» que el sistema les ofrecía y por incorporarlos a una economía de mercado, lo cual al grueso de la población le parecía lo más adecuado para lograr el progreso. La resistencia de estos grupos para incorporarse a la economía de mercado siempre fue objeto de desprecio por parte del ciudadano «civilizado» de las urbes.

No es por azar del destino que los zapatistas exigen el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, de los cuales mencionamos, de forma específica, el referente a la educación, discutido en la mesa de los Derechos y Cultura Indígena: «La federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con el concurso de los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación y combatir toda forma de discriminación. Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en con-

sulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional en los que reconocerán su herencia cultural».

EDUCACIÓN Y DESARROLLO EN EL MUNDO INDÍGENA

La educación indígena o para los indígenas ha significado una controversia permanente, ya que la disyuntiva hasta ahora había sido con ellos o contra ellos, es decir, una visión etnocéntrica por ambas partes o una visión paternalista por parte del mestizo, quien decidió la educación que conviene a los grupos étnicos originarios. Incluso, al día de hoy, se sigue decidiendo por ellos el tipo o la clase de educación que hay que darles o impartirles en función de los intereses nacionales, del mercado capitalista (de tierras o de productos) y de las visiones de desarrollo gubernamentales y en consonancia con las imposiciones de la globalización.

En la política contemporánea, no se pone el acento ni en la educación indígena ni en la educación para los indígenas sino en dos vías alternativas: la educación bilingüe y la intercultural bilingüe, en las cuales no se exagera la postura indígena, no se desplaza al indio y no se insiste sólo en la alfabetización vernácula para abordar, después, el castellano, sino se vincula, de manera estrecha, el aprendizaje de la lengua, la cultura y los valores de la tradición indígenas con el aprendizaje del castellano, de la cultura de los valores y tradiciones del resto de la población en la búsqueda de una educación liberadora, cooperativa y solidaria con los demás grupos sociales, que conlleve el potenciamiento de las costumbres propias de los pueblos indios y el desarrollo de sus saberes, preservando su identidad y el bagaje cultural, lingüístico y científico del mundo indígena. De esta manera, la educación

intercultural bilingüe viene a ser el lazo de unión entre los pueblos que cohabitan en el país y la unidad en la diversidad de un país multicultural y plurilingüe¹⁴³. Sin embargo, para que se dé efectivamente una educación intercultural en los programas de estudios de todo el país deberían incluirse contenidos de las culturas étnicas y de la cultura hegemónica. En otros términos, la EIB no es sólo para los indígenas habitantes en el campo sino para todos los ciudadanos. Únicamente de esta manera podremos recuperar lo local como parte y componente de lo universal. En un país como México, la posibilidad de éxito para construir una sociedad realmente multicultural pasa no sólo por la voluntad del estado y la aceptación del grupo mestizo, sino por la voluntad de los grupos étnicos de reconstruir su propia cultura y tradiciones en una estrecha convivencia con la concepción del derecho a la diversidad no sólo de ellos, como pueblos, sino de los otros, participando en la construcción de la sociedad nacional en un esfuerzo mutuo de tolerancia y aceptación, que implica la colaboración y la solidaridad en una relación de integración.

Educación y desarrollo es un tópico fundamental para los pueblos indígenas, ya que todos ellos contienen principios filosóficos que hoy denominamos ecológicos en su relación con la naturaleza. Estos principios implican una relación de exportación y, de manera principal, una relación de cuidado de la relación armoniosa, aunque con frecuencia la ignorancia los hace destruir parte de su hábitat: la quema de árboles en la búsqueda de energéticos accesibles para sus actividades cotidianas. Sin embargo, hay una búsqueda de armonía entre la vida de la comunidad y el equilibrio de la naturaleza.

Pueblos, como los ayuuik de Santa María Tlahuitoltepec (mixe), Oaxaca, tienen una visión de la educación y del desarrollo sustentable que se enmarca en su propia cosmovisión: Tierra-vida, dualidad de esencia y proyección planetaria; humano-pueblo, dualidad de iden-

tividad cultural y trascendencia comunitaria; trabajo-tequio, dualidad de transformación ascendente y profunda. Estos principios enmarcan su relación y su manera de interactuar con la naturaleza, el entorno social y los seres vivos, en general.

Dentro de esta gran visión y como producto de su búsqueda de una alternativa para mejorar sus condiciones de vida, estas comunidades han logrado formular un Plan Comunal de Desarrollo Sustentable, el cual sienta las bases para el establecimiento de nuevas relaciones y una nueva forma de sociedad comunitaria. El Plan contiene siete líneas prioritarias, tendientes a solucionar la problemática sentida y la real: producción, alimentación, salud, educación, cultura, justicia y comunicación.

La educación ha sido considerada como la línea estratégica prioritaria para promover el desarrollo de Santa María Tlahuitoltepec de manera orgánica, pues se propone el desarrollo integral de la niñez y de la juventud, como motor de cambio, afirmando la identidad de los sujetos sociales, y generando la reconstrucción de la comunidad a partir del rescate de las prácticas comunitarias, como el tequio, de la vinculación de la comunidad con los centros educativos y de sus consejos y autoridades locales, y promoviendo la interculturalidad como estrategia para el desarrollo sustentable. Encerrarse en su propia educación, sin relación con la educación nacional, no se considera opción. Se requiere del reconocimiento de los planes y los programas de estudio, que incorporarán el conocimiento universal y los saberes de los pueblos, particularmente a partir de sus necesidades de subsistencia, que se traducen en las líneas de investigación y capacitación para el aprendizaje significativo (LICAS) como objetos de estudio que nuclean diferentes conocimientos, técnicas y procesos, los cuales conducen a la transformación de la realidad cultural, socioeconómica y política del pueblo ayuujk.

El proyecto BICAP lo sintetiza de la siguiente manera: «Se trata de recuperar la expresión de la cultura ayuujk en un contexto globalizado

[y globalizante], en donde la identidad del pueblo se integre dentro de la universalidad con sus propias características, valores, tradiciones, creencias y costumbres, enriqueciendo, de esta manera, la cultura universal, y dando una dimensión nueva a la cultura local en su expresión surgida de los propios miembros de la comunidad»¹⁴⁴.

EL PROYECTO CULTURAL Y EDUCATIVO

Los mixes son un pueblo de artistas, particularmente dotados para la música y la danza, por lo cual su historia contemporánea está jalonada por intentos de instituir una educación propia que rescate su lengua, sus tradiciones, sus valores y su cosmovisión; en pocas palabras, que los distinga de los mestizos y de otras etnias que habitan la región. De esta manera, desde los años treinta, se empezó a conformar un proyecto de cultura y educación con el fin de encontrar un camino para el desarrollo. Por ello, muchos de sus intelectuales, después de concluir sus estudios profesionales en universidades o en institutos superiores de la República, volvían a la comunidad de origen iniciando acciones tendientes a impulsar la educación y la cultura en la región mixe. A estos esfuerzos se sumó el apoyo de autoridades gubernamentales y educativas, dando principio a lo que ellos llaman «el renacimiento de los ayukjäá' y por la similitud con el proceso europeo, guardadas todas las proporciones de espacio, tiempo y alcance, por cuanto se impulsa la creatividad y las expresiones artísticas, como la música, el canto, el teatro, la poesía, la oratoria, la reflexión comunitaria, el deporte y la sistematización de la grafía ayuujk» (manuscrito del proyecto BICAP, s/n).

En el aspecto educativo, los mixes se han distinguido por su lucha permanente para lograr de las autoridades la instalación de diferentes

¹⁴⁴ Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP), doc. ejecutivo (fotocopia)

tipos de escuelas: desde la Escuela de Música y un CEBTA hasta una Normal Rural y desde la primaria hasta el bachillerato. Varios intentos terminaron en fracaso, debido a la falta de apoyo institucional, pues una vez que se crea la institución se les ha dejado solos con escaso presupuesto. A pesar de ello, no se han doblegado y, aprovechando coyunturas y amistades de personas en el poder, han logrado, una y otra vez, levantar su voz y revitalizar su proyecto. En la actualidad, sus esfuerzos se concretizan en un plan educativo y cultural de educación integral comunitaria, que se constituye en una asociación denominada Edicom con personalidad jurídica propia.

Los mixes se consideran como una comunidad integrada, a pesar de las diferencias que existen entre comunidades —en particular por el territorio— con fuertes lazos identitarios, que se resignifican a partir de la renovación cultural y de la formación en el conocimiento universal y local. A la luz de esta percepción, sobresalen las siguientes características:

- 1) Sentimiento de pertenencia a un pueblo indígena. Conciencia de pertenencia étnica.
- 2) Intensa interacción entre sí, que da lugar a una solidaridad fomentada por la aceptación recíproca, la vecindad y la conciencia del deber como resultado de una voluntad común. Conciencia ética y moral.
- 3) Las relaciones son directas, jugando un papel importante los lazos de parentesco y vecindad. Conciencia social.
- 4) Comparten una historia, una religión y un idioma propio. Conciencia de nacionalidad.
- 5) El ejercicio del poder es compartido en forma comunitaria. Conciencia de derecho consuetudinario.

En otros términos, de acuerdo con la teoría del nacionalismo de Hans Kohn, cuentan con todos los elementos suficientes para considerarse a sí mismos como un pueblo con identidad y orgullosos de sí.

En esta perspectiva, resulta lógica su visión de la educación y de la cultura, como procesos de resignificación de su historia y de potenciación de sus virtudes y posibilidades de desarrollo. Por otra parte, Tlahuitoltepec, ubicado en la zona alta, tiene pocas perspectivas de un desarrollo económico sustentable, por lo cual su apuesta, como municipio, es sobre el desarrollo cultural y educativo, a fin de irradiar a toda la región mixe las luces de la modernización y la globalización cultural.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO AYUUIK POLIVALENTE (BICAP)¹⁴⁵

La propuesta educativa se fundamenta en la búsqueda de una educación integral como posibilidad de potenciar las facultades y capacidades del ayukjäá' y en todas sus dimensiones que permitan al hombre generar, transmitir y recrear la cultura de su pueblo para su desarrollo integral y armónico con la tierra, con sus semejantes y con el trabajo y que permitan la identificación del individuo con las preocupaciones y aspiraciones de la comunidad mediante la socialización para la solución de los problemas comunes como parte de un proceso de búsqueda continua en su desarrollo individual y social.

Se persigue una educación que garantice el desarrollo armónico del indígena, pugnando por un constante mejoramiento económico a través de las actividades productivas con un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, sustentándolo con ideales de fraternidad e igualdad de derechos de los hombres bajo la vigilancia del municipio y del estado.

Los mixes consideran que la educación es integral cuando se atiende la parte intelectual o del conocimiento científico y los valo-

¹⁴⁵ La siguiente información se fundamenta en el manuscrito del Proyecto BICAP, versión s/n, elaborada por varios autores y asesores.

res humanos del estudiante o el alumno. Lo cual sucede cuando se educan y fortalecen las habilidades, las destrezas físicas, las expresiones emocionales o psíquicas y la identidad de la historia a través de expresiones artísticas, como la pintura, la música, la escultura, la poesía o el canto, y del respeto a su identidad cultural.

En términos conceptuales, están recuperando los principios de la moderna pedagogía, la cual por educación integral entiende el desarrollo del educando en los campos psicosocial, cognitivo, afectivo y motriz con los principios de la libertad y la capacidad creativa.

FUNDAMENTO DIDÁCTICO DEL WEJËN-KAJËN

El proyecto educativo tiene su fundamentación filosófica en los principios comunitarios duales: Tierra-vida, dualidad de esencia y proyección planetaria; humano-pueblo, dualidad de identidad cultural y trascendencia comunitaria; trabajo-tequio, dualidad de transformación ascendente y profunda. Las interrelaciones de estos principios traen como consecuencia el principio de complementariedad, que ha posibilitado la existencia, conservación y reproducción de la identidad cultural de este pueblo indígena. De aquí que el wejën-kajën¹⁴⁶ signifique «el ejemplo transformador» o «transformar por el ejemplo», como principio de construcción y reconstrucción histórica de la comunidad y de su identidad en una relación dialéctica con la naturaleza mediante el proceso educativo propio de la comunidad de los ayukjäá' y asentado en las dualidades trascendentes:

¹⁴⁶ Wejën-kajën significa despertar, desamarrar, abrir los ojos a la inteligencia. Es un concepto que utilizan para la construcción de la sabiduría en la vida personal, familiar y comunitaria; significa, también, la apertura a la disponibilidad y a la razón para nuestra realización como seres humanos, señalándonos el horizonte de la trascendencia (manuscrito, s/n). De aquí la noción de proceso de educación transformadora del individuo y de la naturaleza, que los representantes de la SEP han formulado como «enseñar con el ejemplo».

El wejën-kajën se fundamenta, didácticamente, en un diagnóstico¹⁴⁷ propio de la realidad de la educación federal, estatal y municipal:

Administrativamente, en cuanto a personal docente, no existe una diferencia sustancial entre la escuela federal y la de educación indígena básica, salvo que en la primera no existe la obligación de contar con maestros bilingües y de usar el mixe en su docencia y en la segunda sí, aunque esto es relativo. En relación con los contenidos de la enseñanza, existe una discordancia con la realidad cotidiana del educando. En cuanto al método didáctico, es una enseñanza demasiado verbal y marcadamente abstracta y no tiene utilidad alguna de forma inmediata. Pedagógicamente, la enseñanza en castellano impide la comprensión de los contenidos escolares por los niños.

De estas constataciones, los responsables de la educación en la comunidad de Santa María han derivado la necesidad de una educación propia, adecuada a sus necesidades, a su realidad social y a su entorno natural.

En cuanto a los maestros, se ha detectado que están mal preparados, debido a que han realizado sus estudios en cursos de verano, lo cual les impide profundizar y adquirir los conocimientos necesarios para verterlos en el aula. Por otra parte, los que son bilingües se sirven de las dos lenguas sin ninguna disciplina, lo que provoca un problema lingüístico en ellos y en los niños, porque utilizan el mixe para apoyar la «castellanización». Esto impide el aprendizaje de la lengua materna. El ausentismo de los maestros, que no son mixes y que no habitan —de manera regular— en la zona, es nocivo para el aprendizaje de los alumnos.

Es importante precisar que este diagnóstico, que puede ser común en las diferentes zonas indígenas del país, es una percepción de los miembros de la comunidad, cuyo interés se centra en la necesidad de for-

¹⁴⁷ Este diagnóstico ha sido realizado por los dirigentes de la educación. Como asesores, hemos respetado sus expresiones y valoraciones, ya que a partir de ellas generaron su proyecto alternativo.

mar a «sus maestros» pedagógicamente, de manera que sean capaces de fomentar y favorecer situaciones de aprendizaje a partir de las cuales los niños recreen y se apropien del conocimiento de manera colectiva y cooperativa. No se trata de «llenar las cabecitas huecas de los estudiantes» (idea dominante en el paradigma educativo tradicional), sino de la manera en que el maestro debe actuar en el aula. Lo cual, según los dirigentes de la educación, consideran que no se logra con los cursos de verano. Por otro lado, lo que ellos denominan el «uso de las dos lenguas sin ninguna disciplina» por parte de los maestros bilingües tiene que ver con el nivel de bilingüismo de los niños, los cuales se encuentran en un monolingüismo en lengua originaria y no dominan los códigos en los cuales el maestro se dirige a ellos para ayudarles a superar un obstáculo conceptual, creando confusión e incertidumbre frente al conocimiento y el aprendizaje, debido a una enseñanza bilingüe de transición de la lengua materna para apoyar «la castellanización».

En relación con los alumnos, a los problemas generalizados de la desnutrición o subalimentación se añade la memorización, como método de enseñanza en una lengua que les es desconocida y de una cultura que se muestra como superior a la propia. Como consecuencia, los jóvenes que han logrado permanecer en el sistema educativo sólo aspiran a abandonar el pueblo y, en muchos, crean un sentimiento de inferioridad que los lleva a avergonzarse de ser mixes, particularmente en medios urbanos, en donde la discriminación sutil, pero eficaz, los lleva a tratar de identificarse con el mestizo, a no hablar su lengua y a abandonar sus costumbres y tradiciones para asimilarse al medio en el cual se encuentran, perdiendo su propia identidad. Este fenómeno de diglosia¹⁴⁸ provoca, también, la aceptación acrítica y no reflexiva de la supuesta superioridad de la cultura dominante.

¹⁴⁸ La diglosia se expresa en la relación asimétrica y de conflicto que existe entre el español (lengua dominante) y las lenguas originarias (lenguas dominadas), la cual define formas de dominación simbólica que abarcan el sentido mismo de la concepción de la persona. En esta relación, el español tiene funciones exclusivas en relación con ámbitos centrales como la

Los padres de familia, por su parte, también padecen la «superioridad» del maestro, por lo cual se alejan del mundo escolar, contribuyendo con ello a aumentar la incomunicación entre la escuela y el hogar y la escuela y la vida comunitaria. Esta incompreensión mutua hace que se privilegien los tiempos de la vida cotidiana, de la siembra y de la cosecha, época en que los niños y los jóvenes son requeridos para aportar su mano de obra a la economía familiar, dejando de asistir a la escuela por largos periodos. Esta situación provoca retrasos, reprobaciones, repetición de años y, finalmente, abandono de la escuela. La incompreensión mutua se manifiesta, también, en la exigencia de útiles escolares, uniformes y trajes para danzas y fiestas, demandas de los maestros con frecuencia exageradas. Por ello, algunas familias prefieren no enviar a sus hijos a la escuela y otras no los envían para evitar el riesgo de que un día se vayan de la casa y de la comunidad. Una escuela con estas características no les es funcional, no cumple su papel estructurador de la sociedad y no realiza su acción liberadora.

En respuesta a esta problemática, estos pueblos crean su propia alternativa educativa, apoyados por sus intelectuales orgánicos en el sentido en que Gramsci los definía como intelectuales insertados, de forma activa, en la vida práctica, como constructores y organizadores permanentes y no momentáneos o externos al grupo social¹⁴⁹. Un proyecto gestado por sus propios miembros con un sentido crítico y propositivo para la socialización-interiorización del modelo cultural

escritura, la educación, la administración, etc.; es decir, cumple las funciones que son de alto prestigio. En cambio, el espacio de las lenguas originarias, dominadas, subordinadas y «arrinconadas» es el de la vida familiar. En la comunicación cotidiana, no gozan del alto prestigio que tiene el castellano, ni ocupan funciones de prestigio como la escritura, la educación, entre otras áreas; al no reflejarse en ningún espacio de la vida pública, resignifican el sentido de la dominación interiorizada en un habitus y en unas prácticas, que da el sentido de minorización a la propia dominación en la vida cotidiana, redefiniendo el rol de la lengua, de la cultura y de los beneficios que conlleva el pertenecer a la «otra cultura», trayendo como consecuencia, en muchos casos, la negación de lo propio y el mirar al otro como el legítimo otro.

¹⁴⁹ Ver Antonio Gramsci, «Los intelectuales y la apropiación de la cultura», *Obras de*

propio, que influye en la construcción de la identidad y de la personalidad de los individuos pertenecientes a su sistema social y cultural en relación con el sistema de la sociedad nacional dominante. La comunidad se constituye en la fuente del proceso educativo, al determinar en las reuniones del consejo la orientación que los responsables deben imprimir a la educación escolar en función de las necesidades del conjunto social.

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Ante esta situación muy compleja, el pueblo ayuujk propone un proyecto educativo y cultural para la región mixe y, en particular, para la comunidad de Tlahuitoltepec, que comparta la educación bicultural y bilingüe y estando consciente de la necesidad de capacitar a sus maestros dentro del marco de respeto y de amor a la propia cultura y a la lengua, con una visión de desarrollo sustentable, fincada en su propio proceso de recuperación cultural en el marco de la regionalización y de la mundialización. Inclusive, proyecta recuperar sus conocimientos locales, así como enriquecerlos con los universales, en un proceso de integración del conocimiento controlado, manejado y dominado por él mismo.

Se propone buscar la continuidad y la correspondencia en los contenidos de los estudios nacionales y la innovación en los métodos de enseñanza-aprendizaje, procurando que el alumno que por cualquier circunstancia abandone la escuela y la comunidad no tenga problema alguno para incorporarse a diferentes escuelas, y siga estudiando sin dejar de incorporar en su currículum la enseñanza de la lengua materna, la cultura y la cosmovisión propia de su pueblo.

Su concepción de educación integral permea todos los niveles educativos y las edades de los alumnos desde la educación inicial hasta los estudios terminales, desde la primera educación hasta

los estudios profesionales. Por ello, los actores nos invitan a participar de su reflexión, porque «consideramos de suma importancia que se reflexione con nosotros sobre lo siguiente:

- «Nuestra comunidad es la que debe decidir en qué forma quiere adquirir la ciencia y la tecnología que ofrece la civilización, porque tanto la ciencia como la tecnología modernas deben reforzar la vida, y su relación con la naturaleza es una enseñanza que el mundo Occidental debería recuperar y poner en práctica, lo mismo que su concepción de justicia y solidaridad. Por otra parte, nos enseñan cómo podríamos situarnos frente a la globalización, recuperando nuestros valores locales y regionales para incorporarlos en el movimiento permanente de la cultura mundial.
- «El aspecto social no se descuida y se propone: que los estudios en las escuelas no provoquen diferencias políticas, económicas y sociales, sino que todos tengan las mismas oportunidades.
- «La educación integral requiere del desarrollo del espíritu, por lo cual se debe de dar un lugar importante en la nueva concepción de educación a las bellas artes, que constituyen un elemento característico del pueblo mixe y de la comunidad de Tlahuitoltepec en particular. Bases de nuestra vida y filosofías comunitarias.
- «El contenido del proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse en el amor a la tierra en donde hemos nacido y que nos han heredado nuestros antepasados, en la vida en comunidad, como una forma manifiesta de nuestra igualdad social, y en el tequio, que nos garantiza la armonía de nuestras formas humanas con las de la naturaleza y que nos permite asegurar la construcción conjunta de nuestro futuro como individuos, como pueblo y como ciudadanos de un país y de un mundo civilizado y globalizado» (manuscrito del Proyecto BICAP, s/n).

De esta manera, no rechazan los avances de la ciencia y de la tecnología, ni desconocen las nuevas relaciones internacionales que se dan en el mundo de la economía y de la cultura por la globalización y la mundialización del conocimiento, de la cultura, de la ciencia, de las artes y de la comunicación misma. Sin embargo, supeditan todo ello al provecho de la comunidad y a los intereses primordiales de su población. Se podría pensar que siendo marginales a la cultura nacional no tienen nada que aportar ni que perder en un mundo globalizado, empero su concepción de la vida y su relación con la naturaleza es una enseñanza que el mundo Occidental debería recuperar y poner en práctica, lo mismo que su concepción de justicia y solidaridad. Por otra parte, nos enseñan cómo podríamos situarnos frente a la globalización, recuperando nuestros valores locales y regionales para incorporarlos en el movimiento permanente de la cultura mundial.

Estas propuestas se hacen operativas en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente, que es un bachillerato anclado en la Dirección General de Bachilleres (DGB) con características de un bachillerato tecnológico, en cuanto a los contenidos propuestos por la comunidad para responder a las necesidades productivas de la misma a través de sus líneas de investigación y capacitación para el aprendizaje significativo, denominadas LICAS; éstas se incorporan al currículum de la DGB para dar respuesta a las necesidades de la población, en cuanto a la agricultura y a la ganadería de traspatio, al mejoramiento de cultivos en la zona y al cuidado de los animales domésticos y de la salud de la población.

El modelo pedagógico adoptado fue el modular, de manera que la investigación en estos campos se convirtió en el centro del aprendizaje y en el aglutinante de los conocimientos, contando para ello con un cuerpo profesoral en formación permanente y con la asistencia de asesores de la SEP, de instituciones educativas (como la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la UNAM, la Universidad

Autónoma de Chapingo), de direcciones estatales y federales, así como del ILCE, que dotó al establecimiento con equipo de cómputo con acceso a internet, con antena parabólica, con equipo necesario para recibir teleconferencias y cursos a distancia y con equipo de grabación y de reproducción de sonido.

Los recursos financieros obtenidos han permitido a los pobladores de la región estudiada equipar los talleres de tejidos, de joyería y de alfarería, con lo cual se implementa el proyecto productivo del bachillerato para el aprender produciendo, lo cual se complementa con la distribución comercial de sus productos en el mercado artesanal en la ciudad de Oaxaca. Con ello, se busca hacer autosuficientes y autofinanciables los proyectos productivos.

VINCULACIÓN Y DESARROLLO RURAL EN LA COMUNIDAD AYÚUJK

Una de las preocupaciones mayores de los responsables del proceso educativo es la vinculación con la comunidad, ya que en la propuesta pedagógica de la comunidad se plantean los siguientes objetivos para este proceso:

- Lograr la relación escuela-comunidad desde preescolar hasta el nivel superior, considerando a la comunidad como el salón de estudios y de investigación sin paredes
- Lograr la concientización como comunidad mediante la educación ambiental, respecto a su responsabilidad de conservar y armonizar el desarrollo y la explotación racional de los recursos naturales renovables, y buscar la cuidadosa explotación de los no renovables para conservar el equilibrio ecológico
- Propiciar la vinculación de la escuela con las actividades productivas y económicas de la comunidad, mediante la aplicación racional de los conocimientos científicos y tecnológicos

El bachillerato se vincula con la comunidad educadora de varias maneras: una de ellas y la principal es a través de la investigación, acción con enfoque comunitario de los alumnos guiados por los asesores y organizados en equipos interdisciplinarios, que toman como objetos de transformación las condiciones de existencia, de producción y de desarrollo comunitario para apoyar a las familias interesadas y a la comunidad en general.

Las LICAS constituyen objetos de transformación con un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; por tanto, influyen, de manera directa, en el desarrollo sostenible, ya que se orientan a solucionar problemas de producción y de organización social.

La agropecuaria se orienta al desarrollo de cultivos de traspatio, útiles para solucionar problemas alimenticios de la población y cuya principal fuente de subsistencia es el autoconsumo. Se ocupa, también, de la cría de especies menores y de aves, para garantizar la higiene y las mejores condiciones de producción.

La social se interesa en los problemas de organización de la comunidad, de desarrollo urbano y de la mejora de servicios, por lo cual los alumnos deben investigar y proponer soluciones a los problemas encontrados.

La de salud y ecología se ubica en el contexto de la zona para detectar fuentes de enfermedades y de contaminación del medio ambiente que pueden afectar los procesos de salud-enfermedad de la población y el equilibrio ecológico.

De esta manera, la educación busca una vinculación directa con las necesidades de la población y genera un proyecto de largo alcance en el cual se involucra a los estudiantes, a las autoridades locales y al conjunto de la población, que interviene en la determinación de los problemas a resolver, convirtiéndose de esta manera en una comunidad educadora dentro de la tradición indígena, en la cual la responsabilidad de educar a la niñez y a la juventud es de todos los miembros y no nada más de los maestros.

Otra modalidad de vinculación es a través de los proyectos productivos, ya que, por una parte, se emplea personal de la comunidad y, por otra, se utilizan estos proyectos para la educación de los alumnos. Dentro de esta concepción, los talleres de orfebrería y de tejido constituyen fuentes de empleo y una manera de aprender produciendo, al aportar conocimientos, habilidades y destrezas en los participantes, que les permiten fortalecer sus capacidades, y obtener mejores desempeños en la puesta en práctica de sus competencias en los campos respectivos.

Los talleres de danza sirven para recuperar las tradiciones locales y para aprender los bailes regionales del país. El seguimiento de las autoridades municipales a través del regidor de educación garantiza la presencia de la comunidad en los proyectos educativos. De esta manera, la educación se vincula con las necesidades de la comunidad, promueve el desarrollo social y sienta las bases para su sostenimiento permanente o sostenible.

LOGROS

El Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente es una experiencia única en el contexto indígena, porque marca una posibilidad de desarrollo alternativo siempre y cuando (independientemente del apoyo que se le puede y debe brindar) se le deje tomar sus decisiones y encaminar el proyecto hacia donde él quiere.

Sus planes y programas de estudio, cumpliendo con los requisitos generales del bachillerato nacional, incluyen módulos, cuyos objetos de transformación responden a la situación concreta de su contexto ambiental y social, por lo cual el aprendizaje es significativo. De esta manera, los principios filosóficos se incorporaron en el currículum como líneas de investigación y capacitación para el aprendizaje significativo.

La enseñanza de la lengua ayuujk se hizo obligatoria y los resultados han sido positivos, por lo que maestros y alumnos han avanzado en el dominio de la lectura y la escritura del ayuujk.

Los proyectos finales de investigación han sido exitosos y de calidad, lo que demuestra que el aprendizaje mediante la investigación es pertinente y significativo. De los alumnos que optaron por seguir estudios superiores en universidades estatales o en institutos tecnológicos, el 90% de los que presentaron examen de admisión logró ingresar en dichas instituciones.

El éxito conlleva el peligro de manera dialéctica, pues jóvenes con preparación y conocimiento de la informática, ¿elegirán permanecer en su comunidad o carentes de empleo emigrarán hacia lugares que les ofrezcan mayores oportunidades de desarrollo profesional? Por otra parte, la situación actual es halagüeña en el sentido de que existe un equipo de 10 profesionales ayuujk que han vuelto a la comunidad y están impulsando el proyecto educativo y cultural del BICAP, del CECAM y ahora del Instituto Tecnológico, pues con la aprobación de la Subsecretaría de Educación Científica y Tecnológica se ha creado el Instituto Tecnológico Ayuujk. Esto puede ser un gran acierto o puede significar el gran fracaso del Instituto, como fracasó en su momento la Normal Indígena, y del BICAP, que para este año escolar se ha vuelto a transformar en un CEBTA, dividiendo a los asesores entre el Bachillerato y el Instituto. Una gran oportunidad y una gran incógnita al mismo tiempo.

PROBLEMAS

- Financieros:
 - o Falta de recursos económicos
 - o Inquietud sobre el futuro desarrollo de las instituciones educativas por el cambio de régimen
- Pedagógicos:

- o Falta de maestros bilingües con formación para la enseñanza bilingüe
- o No existen libros de texto adecuados
- o Es necesario instaurar un sistema de formación permanente para los maestros a fin de fortalecer el sistema e introducir innovaciones
- Sociales:
 - o Dudas de padres y alumnos acerca de la utilidad de aprender su lengua en un mundo castellanizado
 - o La presencia de profesores mestizos a quienes no les interesa aprender la lengua ayuujk. Sin embargo, su aportación es muy valiosa dadas las condiciones de trabajo que existen
 - o Fuga de los alumnos formados para ingresar a universidades en diferentes lugares del país, principalmente en Oaxaca, en Chapingo y en el DF, o para encontrar empleo, con lo cual se favorece la emigración de la juventud
- Políticos:
 - o Imposición por parte de los miembros de la SEP de una determinada orientación del proyecto, que puede ir al fracaso si se insiste demasiado en dirigir el proyecto, haciendo de los responsables mixes meros ejecutores de los deseos de los promotores del centro
- Económicos:
 - o Falta de fuentes de empleo en la zona
 - o Tierras de cultivo escasas o agotadas
 - o Sin tierras aptas para la ganadería
 - o Nulas o escasas fuentes de ingresos fijos para la población
 - o Circuitos de comercialización muy limitados. Todavía se practica el trueque en los mercados, lo cual indica la persistencia de sus tradiciones y la extrema pobreza en la que vive la mayoría de la población

CONCLUSIÓN

A partir de un diagnóstico sencillo, sin grandes pretensiones teóricas, pero que atiende a los resultados observados en los niños, y con frecuencia a partir de una reflexión retrospectiva, los maestros mixes intentan enfrentar el problema educativo de su comunidad en Santa María Tlahuitoltepec. El proyecto cultural y educativo cuenta con ventajas comparativas sobre el proyecto educativo de la Dirección General de Educación Indígena, pues: 1) está llevado a cabo por los propios indígenas, aunque el origen haya sido una iniciativa de agentes externos; 2) los indígenas han logrado darle una orientación, de acuerdo con su cosmovisión e intereses comunitarios, impulsando el aprendizaje de su propia lengua y cultivando sus cualidades artísticas, particularmente a través del Centro de Capacitación Musical (Cecam), que cuenta con dos orquestas filarmónicas: la infantil y la de adultos, ambas de renombrado prestigio internacional, y con la preparación de grupos de danza regional en el BICAP; 3) el equipamiento tecnológico para el uso de la cibernética es de primer mundo y abre horizontes ilimitados para la formación de los alumnos y la investigación de los asesores; 4) es indudable que el proyecto productivo es fundamental para la enseñanza fundada en el aprender-produciendo y la comercialización de los productos es una posibilidad de autofinanciamiento, por lo menos de los talleres; y 5) la vinculación con la sociedad es un ejemplo a seguir en la relación sociedad-escuela, en la colaboración y en la corresponsabilidad del proceso educativo.

El entusiasmo de los asesores y su entrega al trabajo educativo están haciendo realidad un proyecto que parecía imposible de realizar. Si logran sortear los peligros políticos que hemos mencionado, podrán continuar con su experiencia que en sí es repetible y se puede homologar en otras latitudes y en otras etnias preocupadas por la conservación de sus tradiciones, su cultura, su lengua, sus costum-

bres y su identidad, para lograr la unidad dentro de la diversidad en este México heterogéneo, pluricultural y multilingüe.

BIBLIOGRAFÍA

- Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP), documento ejecutivo, fotocopia
- BULLE, N., *Sociologie et Éducation*, PUF, Francia, 2000
- FLORESCANO, E., *Etnia, estado y nación, ensayo sobre identidades colectivas en México*, Nuevo Siglo/Aguilar, México, 1998
- GRAMSCI, A., «Los intelectuales y la organización de la cultura», *Obras de Antonio Gramsci*, núm. 2, Editorial Juan Pablos, México, 1975
- JUÁREZ NÚÑEZ, José Manuel, y S. Comboni Salinas, «¿Educación indígena en una sociedad global?», en *Globalización, educación y cultura, un reto para América Latina*, UAM-X, México, 2000
- KOHN, H., *Historia del nacionalismo*, FCE, México, 1949
- MATUTE, E. (coord.), *Diversidad cultural y educación*, Universidad de Guadalajara, México, 1999
- NAHAMAD, Sitton S., *Los mixes. Estudio social y cultural de la región del istmo de Tehuantepec*, INI, México, 1965
- OLIVÉ, L., *Multiculturalismo y pluralismo*, UNAM/Paidós, México, 1999
- ROMO BELTRÁN, ROSA M., *Una mirada a la construcción de identidades: los psicólogos de la Universidad de Guadalajara*, Universidad de Guadalajara, México, 2000
- SÁNCHEZ CASTRO, A., *Historia antigua de los mixes*, DGEI-SEP, México, 1952

DEL DERECHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO.
LA INTOLERANCIA RELIGIOSA EN LAS SOCIEDADES RURALES

MIGUEL J. HERNÁNDEZ MADRID¹⁵⁰

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observación.

Declaración Universal de Derechos Humanos, art.18
(10 dic, 1948)

Se relata en la *Biblia* que cuando Jesús volvió a su tierra para predicar en la sinagoga, la gente que lo escuchaba se preguntaba de dónde había aprendido todo lo que decía el hijo de José, el carpintero. Según el *Evangelio de Marcos*, Jesús le dijo: «Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y su propia familia» (Mc, 6: 4). El evangelista Lucas, por su parte, completa este episodio escribiendo que la gente de la sinagoga, indignada al escucharlo, se levantó y empujó a Jesús fuera del pueblo con la intención de arrojarlo por un barranco, pero él pasó por medio de ellos y siguió su camino (Lc, 4: 29).

¹⁵⁰ Miembro del Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán

Para los cristianos que han depositado su confianza en la creencia de que la *Biblia* es inefable, el relato anterior es una referencia obligada para identificarse con situaciones de desprecio y persecución que padecen quienes han cambiado de membresía religiosa, en especial cuando el cambio se percibe como el «abandono de la religión católica». Debido a que la fe religiosa se basa en una profunda creencia en principios revelados, sin más reafirmación concreta que la comunión de creyentes, la raíz de la intolerancia radica en el temor a la diferencia.

Al respecto, Iring Fetscher ha escrito que cuanto más incierta e insegura es la propia fe, tanto mayor es la necesidad de hacer a un lado a aquellos incómodos testigos de que se puede vivir también de otra manera y que se puede encontrar apoyo en otras creencias¹⁵¹. Como toda respuesta, se ahuyenta a los heterodoxos, se les obliga a practicar su credo en privado y a desaparecer de la vida pública; en casos extremos, se les expulsa de sus casas y terrenos o se les arroja a «un barranco», como en el relato del evangelio. En México, los medios de comunicación se han encargado de divulgar noticias e imágenes de conflictos religiosos en poblaciones rurales, donde las minorías de alguna denominación protestante o paraprotestante son agredidas por los católicos. San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas (en Chiapas), Monte Tabor (en el Ajusco), La Paz (en Baja California) e Ixmiquilpan (en Hidalgo) son sitios emblemáticos de una geografía de la intolerancia religiosa cada vez más frecuente¹⁵².

En el marco de un fenómeno tan complejo, el tema que nos interesa tratar en este ensayo es el problema para ejercer el derecho de libertad de creencia en sociedades rurales, donde los códigos culturales consuetudinarios tienen en la práctica significados y normatividades intransigentes con los derechos universales, cuyo

¹⁵¹ Iring Fetscher, *La tolerancia*, 1994, p. 13

¹⁵² Cfr. Kevin Boyle y Julien Sheeen, *Freedom of Religion and Belief. A World Report*,

ejercicio requiere de una sociedad plural. Un actor social que enfrenta este dilema en las sociedades rurales está representado por los hombres y mujeres vinculados a los procesos de movilización entre México y Estados Unidos. Sobre todo de aquéllos que deciden cambiar de membresía religiosa en la medida en que sus horizontes culturales se amplían debido a la movilidad espacial y en la religión encuentran un nuevo sentido de autodefinición social, que es otra manera de nombrar al proceso de construcción de identidades¹⁵³.

EL CÉSAR EN FUENTEVEJUNA

En ningún lugar estaría mejor ubicado el dilema entre el estado de derecho y los derechos consuetudinarios que en la actual normatividad de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992). Sin duda, el jurista podrá encontrar en este importante documento, que definió una nueva etapa de las relaciones entre las iglesias y el estado, la normatividad necesaria para establecer las fronteras entre «lo que es del César y lo que es de Dios». Pero a los ojos de los observadores, que siguen con atención los conflictos de intolerancia religiosa en varias partes del país, la ley no es suficiente para propiciar las condiciones de pluralismo que se requieren para garantizar la libertad de creencia.

La razón resulta obvia. En México, la iglesia católica ha sido una institución de peso en la configuración histórica del campo religioso y de una forma de cultura nacional. Incorpora a la mayor parte de los creyentes: alrededor de 74 millones de mexicanos (que representa-

¹⁵³ Desde los puntos de vista sociocultural y cognitivo, el fenómeno de la migración de mexicanos a Estados Unidos requiere problematizarse en una perspectiva más amplia a la del acontecimiento de desplazamiento espacial de un punto a otro. Una propuesta interesante, que para el caso de este trabajo tomamos en cuenta, es el concepto de movilización espacial, desarrollado en los trabajos de Alain Tarrus (1989 y 2000), por sus posibilidades para comprender el sentido social y cognitivo que los actores van imprimiendo a sus horizontes históricos y culturales en el marco de sus experiencias de movilización territorial.

ban el 89% de la población, en 1997)¹⁵⁴, los cuales son herederos y practicantes de un catolicismo que, cultural y socialmente, atraviesa los llamados «usos y costumbres» en gran parte de los espacios comunitarios rurales y urbanos. Peso agobiante, que se traduce en un reto jurídico y social para construir los espacios de tolerancia, donde pueda convivir la mayoría católica con los casi 7 millones de mexicanos que tienen un credo religioso distinto.

Existe una gran diferencia entre la tolerancia surgida de los gobiernos y la brindada por los textos constitucionales¹⁵⁵ y la tolerancia de la población y de la «opinión pública». Ésta última depende, todavía, de la voluntad de una mayoría católica, que imprime a la tolerancia religiosa ese significado ofensivo, al que se refería Goethe, afianzada en el poder de ejercerla o negarla y no en el reconocimiento y el respeto a los derechos de otros para ser diferentes¹⁵⁶. Con estas circunstancias, la tolerancia religiosa acaba siendo la frontera mínima para que las diferencias religiosas desciendan a un «nivel soportable».

Entre las denuncias que durante el sexenio anterior fueron recibidas en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos por violación a los derechos de libertad de creencia¹⁵⁷, estaban los casos en los que las autoridades civiles locales no intervinieron, con oportunidad, para evitar todo tipo de agresiones contra las minorías religiosas. Sus intervenciones, sobre todo en las poblaciones rurales, sucedieron después de ocurridos los lamentables hechos. ¿Complicidad o indiferencia? No es quizá la pregunta adecuada para entender esta situación, sino otra que nos permita explorar hasta qué punto los encargados del orden público pueden tomar distancia de sus propias creen-

¹⁵⁴ INEGI, *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica* (1997)

¹⁵⁵ Cfr. los trabajos que abordan este tema, publicados en el órgano de información de la LVI Legislatura, *Crónica Legislativa*, núm. 13, año VI, nueva época, feb-mar, 1997, H. Cámara de Diputados y Poder Legislativo Federal, México

¹⁵⁶ Johann W. Goethe, *Máximas y reflexiones*, 1991

¹⁵⁷ Registros que se podían consultar en la página de internet de la Secretaría de Gobernación

cias religiosas, especialmente cuando el pensamiento laico no forma parte de su ideología como funcionarios.

Los casos de intolerancia religiosa, documentados en Oaxaca y Chiapas por el Reporte Mundial de Libertad de Religión y Creencia (1997), muestran que los conflictos religiosos son la punta del *iceberg* de problemas relacionados con la propiedad de la tierra, el acceso a recursos naturales estratégicos (agua y tierras de riego), enfrentamientos de clases sociales y etnias y disputas entre facciones políticas para controlar los municipios. Desde un punto de vista weberiano, el estigma del «extraño» sale a relucir cuando las relaciones de fuerza en estos campos políticos no son favorables a los grupos que tienen poder y posicionamiento para imponer su voluntad a otros. Pero así como la anterior situación es sólo una de las oscilaciones del péndulo, del otro lado, los grupos religiosos representan una clientela política importante en coyunturas electorales y de conflictos sociales para ejercer presión o inclinar la balanza en favor de alguna facción¹⁵⁸.

La lista es larga y las evidencias del vacío que en los espacios rurales tiene el estado laico abundantes. Mientras esto prevalezca, seguiremos presenciando la dramatización en la que el César aparece para sancionar a la turba que se ha hecho justicia por su propia mano en algún San Miguel Canoa o *Fuenteovejuna* a la voz de «¡mueran malos cristianos y traidores!»¹⁵⁹.

¹⁵⁸ En Chiapas, en Jalisco y en Michoacán, la prensa ha documentado casos de las vinculaciones entre las iglesias evangélicas organizadas con partidos de oposición al PRI o con el mismo partido oficial, alianzas que salen a relucir en las elecciones locales. Por ejemplo, en Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán —la mítica ermita de los católicos cismáticos que se separaron de la iglesia a consecuencia del concilio Vaticano II—, sus habitantes representan una clientela cautiva para el PRI en las elecciones estatales y federales. Ello se debe a los favores y apoyos de las autoridades civiles a los/dirigentes religiosos de la ermita cuando se presentan en su contra denuncias por despojos de tierras o abusos en contra de la población. Los que no votan a favor del hasta hace poco partido oficial pierden sus posesiones y son expulsados del poblado. Cfr. Juan Carlos Ruiz, «Dios nunca muere y también vota», 1996

¹⁵⁹ Félix Lope de Vega, *Fuenteovejuna*, 1975, p. 72

A EXCEPCIÓN DEL MUNDO, NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA

Los actores sociales que encuentran en lo religioso un sentido a las experiencias forjadas en su movilidad espacial han introducido cambios en sus terruños que afectan la certidumbre en las costumbres consuetudinarias, especialmente las orientadas por las tradiciones católicas.

Las historias personales que nos han narrado hombres y mujeres de la región de Ecuandureo (Michoacán) destacan como experiencias reveladoras que los motivaron a adoptar una nueva confesión religiosa y al conocimiento de otras formas de entender la fe y practicarla en ámbitos donde había condiciones propicias para el pluralismo religioso. Católicos de fuertes convicciones convivieron en Los Ángeles, Houston y Chicago con hispanos que pertenecían a iglesias evangélicas y a congregaciones de testigos de Jehová, de pentecostales y de católicos del movimiento de renovación carismática. Varios de ellos accedieron ahí, por primera vez, a la lectura de la *Biblia*, y su itinerario de conversión llegó al clímax cuando decidieron adoptar una religión distinta a la católica. La reconstrucción de este proceso es tema de otros trabajos y, por ahora, nos interesa tomarlo como contexto para ilustrar disyuntivas que se les presentan para ejercer su derecho de libertad de creencia al retornar a sus terruños¹⁶⁰.

La primera de ellas es la forma como se asume o mediatiza la ruptura que los conversos entablan con las estructuras de organización familiar y comunitaria en las cuales fueron socializados. La conversión religiosa, tal como se presenta en el universo poscristiano, exige al nuevo miembro un corte radical entre su pasado y el momento actual en el que encuentra «la verdad», a la cual debe rendir un testimonio impecable de fidelidad al interior de su congregación reli-

¹⁶⁰ Cfr. Miguel J. Hernández, *El proceso de convertirse en creyente*, 2000a y *La construcción del reino imaginado*, 2000b

giosa. Esta radicalidad tiene matices importantes, de acuerdo con la ideología, las disciplinas y las prácticas de la iglesia o congregación a la que se ingresa. Veamos dos ejemplos.

La mayor parte de los conflictos entre católicos y neocristianos se da en los escenarios seculares y no tan «seculares» cuando se requiere de la colectividad su cooperación monetaria en faenas o en especie para una obra de beneficio común. En los lugares donde el liderazgo religioso y social del sacerdote católico sigue siendo dominante para dar curso a este tipo de obras, la tensión puede llegar a extremos, pues entre los creyentes no católicos habrá resistencia para reconocer la legitimidad del cura en asuntos de orden público. A la par de acontecimientos de acoso, expulsión y linchamiento contra los remisos religiosos, también hemos encontrado situaciones interesantes donde las minorías de creyentes han ganado terreno en el todavía endeble espacio del orden civil. En uno de los pueblos de Ecuandureo, Michoacán, donde hay varias familias testigos de Jehová, quedó demostrada su participación ciudadana, no por su homenaje a los símbolos patrios sino por el pago puntual de sus impuestos para servicios públicos, que les valió el reconocimiento de la autoridad municipal cuando el comité de las fiestas guadalupanas quiso expulsarlas por no cooperar para la celebración del 12 de diciembre.

En este ejemplo, es interesante destacar una relación entre ciudadanos y autoridad civil, que desplazó la mediación del dirigente religioso católico, pero sin la intención de sustituirlo. En el caso de los testigos de Jehová, su ideología religiosa impugna a cualquier tipo de gobierno civil por estar influido por el diablo, pues el único gobierno que ellos reconocen es el de Jehová, representado por su sociedad teocrática de la Torre del Vigía. A pesar de esta ideología, los testigos de Jehová tienen como disciplina aprender a convivir en la sociedad de los hombres para predicar en ella el

advenimiento del reino de Dios, pero sin la intención de mejorarla, sino de invitar a los que quieran a seguir «el camino de la verdad»¹⁶¹.

A los testigos les sucede que «muchos son los llamados y pocos los elegidos», porque a la larga no son numerosos los paisanos y familiares que se interesan en cambiar de religión, a excepción de aquéllos que llegan a tener otro tipo de experiencias religiosas fuera del terruño.

Un segundo ejemplo es el de las redes sociales paralelas a la familia y a la comunidad tradicional, que los conversos religiosos construyen a través de su congregación. Éste es un hecho muy importante de considerar en las nuevas configuraciones de las sociedades rurales, pues las congregaciones religiosas poscristianas tienen una función de bisagra. Por un lado, en torno a un credo alternativo, incorporan en el sujeto una forma de organización cerrada y total (los investigadores la identifican con los grupos sectarios) dentro del espacio geográfico y social que delimita al terruño, pero, por otro, esta congregación es uno de tantos nudos que se articulan con corporaciones y sociedades religiosas de alcance mundial.

Vale la pena reflexionar este dato en la perspectiva histórica de la comunidad indígena, creada e instituida desde el siglo xvi y estructurada y reproducida culturalmente en el seno de la iglesia y las creencias católicas, pues nos servirá para comprender el conflicto que representa la intersección entre el catolicismo de los pueblos indígenas y la inculturación de un cristianismo americanizado, predicado en la actualidad por sus habitantes conversos.

Si para terminar retomamos las cifras, que en números absolutos separan a una mayoría católica de la minoría no católica, conviene considerar que los ahora 7 millones de creyentes en un credo protestante, paraprotestante o judeocristiano han ido aumentando de una

¹⁶¹ Cfr. Tower Bible y Tract Society, *Razonamiento a partir de las escrituras*, Nueva York, Watch Tower Society, 1985

proporción de 4 de cada 100 habitantes, en 1970, a 11 de cada 100 habitantes, en 1997¹⁶². La tendencia anterior se observa en los municipios del noroeste de Michoacán, de donde proviene la mayor parte de los migrantes a Estados Unidos, pero cabe aclarar que los procesos de evangelización y conversión religiosa han seguido una trayectoria que va de las ciudades (de México o Estados Unidos) hacia los pueblos rurales.

Esta ponencia sólo quiere presentar el entendimiento de algunos hechos relacionados entre sí; por lo tanto, las conclusiones no son por ahora pertinentes, pero sí mi interés por compartir dos reflexiones finales.

Una es que, ante la importancia de los procesos de diversificación religiosa en las sociedades rurales, habrá que ubicar en su justa dimensión social y cultural el papel del hecho religioso como artífice de nuevas estructuras organizativas e ideológicas. El ejemplo de la congregación es un caso sintomático de esta apreciación.

La segunda reflexión es una preocupación por la poca claridad que se percibe en los escenarios políticos actuales del país para avanzar en la construcción de una sociedad plural, legitimada por el fortalecimiento de un estado laico. Fuera de ciertos ámbitos donde «la transición democrática» parece captar el pulso de la «nación» (si es que todavía podemos hablar de «nación» en México), siguen existiendo esos otros lugares o «no lugares» donde sus habitantes están librando una batalla cotidiana para ejercer sus libertades, entre ellas el derecho a creer. Y si acaso Manuel Castells tiene razón, es en estos espacios donde de alguna manera se ejerce una resistencia contra la globalización a través de una utopía paradójica: el retorno a la comunidad vía internet o por la estafeta bíblica fundamentalista¹⁶³.

¹⁶² INEGI (1997)

¹⁶³ Cfr. Manuel Castells, *La era de la información, vol. II. El poder de la identidad*, 1999, cap. I

BIBLIOGRAFÍA

- BOYLE, Kevin, y J. Sheen (eds.), *Freedom of Religion and Belief. A World Report*, Routledge, Nueva York, 1997
- CASTELLS, M., *La era de la información, vol. II. El poder de las identidades*, Siglo XXI Editores, México, 1999
- FETSCHER, I., *La tolerancia. Una pequeña virtud imprescindible para la democracia*, Gedisa, Barcelona, 1994
- HERNÁNDEZ M., Miguel J., «El proceso de convertirse en creyentes. Identidades de familias testigos de Jehová en un contexto de migración transnacional», *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, núm. 83, vol. XXI, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2000a
- _____, «La construcción del reino imaginado. Los testigos de Jehová: ¿Vino viejo en odres nuevos?», *ILHA. Revista de Antropología*, núm. 1, vol. II, Florianópolis, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, 2000b
- GOETHE, J., «Máximas y reflexiones», en *Obras completas*, vol. I, Aguilar, México, 1991
- INEGI, *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica*, INEGI, México, 1997
- LOPE DE VEGA, F., *Fuenteovejuna*, Orión, México, 1975
- RUIZ G., Juan C., «Dios nunca muere y también vota. Elecciones federales de 1994 en la Nueva Jerusalén michoacana», *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, núm. 65 y 55, vol. XVII, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1996
- TARRIUS, A., *Anthropologie du Movement*, Paradigmes, Caen, 1989
- _____, «Leer, describir, interpretar. Las circulaciones migratorias: conveniencia de la noción de territorio circulatorio. Los nuevos hábitos de la identidad», *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, núm. 83, vol. XXI, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2000

EL MALTRATO AL VIEJO ENTRE LOS ZOQUES DE CHIAPAS

LAUREANO REYES GÓMEZ¹⁶⁴

INTRODUCCIÓN

El trato que recibe el viejo en el seno familiar y en el social es muy heterogéneo en lo cultural y en lo económico. La relación sociocultural con el anciano es cambiante, según las sociedades y los tiempos. Por ejemplo, en la comunidad africana, para los ambunes, una etnia de la región de Kuilu en la República de Zaire, «las personas de edad avanzada son los verdaderos cimientos de su aldea» y las tratan con sumo respeto. En cambio, para los pueblos que viven en la pobreza extrema, no es posible pensar en el futuro, sólo en el presente. Así, en Melanesia, «es habitual enterrar vivos a los viejos cuando son incapaces de proporcionar un trabajo útil»; entre los yacutas siberianos, «los viejos poseían toda la riqueza y ejercían sobre los hijos una autoridad absoluta, pero en cuanto se debilitaban, los hijos se aprovechaban de todo y los dejaban morir o los esclavizaban» (Ortiz P., 1995: 50-51).

El caso genérico del trato que recibe el anciano en las culturas mesoamericanas se ha registrado como una relación familiar y social bastante armónica y, muchas veces, en favor del viejo. Por ejemplo, en la cultura mexicana, era percibido «como un *yoltéotl*, como el artista, el inventor, el hombre muy sabio y el adivino; considerado con facultades extraordinarias». Según los nahuas, la «sombra» de los viejos «ha adquirido poder con los años, y puede dañar a los niños muy débiles de “sombra” a través de la mirada» (López-Austin, 1983,

¹⁶⁴ Miembro del Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas

vol 1: 288). Entre los actuales tzotziles de Chiapas, se hace referencia a los ancianos como seres dotados de extraordinarios poderes, poseedores «de la gran fuerza anímica de los ancianos, que puede convertirlos en seres peligrosos» (Ortiz P., 1995: 52-53).

En su estudio sobre los tzotziles de San Pedro Chenalhó, Guiteras H. hace referencia específica al «calor» que los viejos poseen, «el cual, según la creencia, se va acumulando a través de los años. El que los ancianos se las hayan compuesto para sobrevivir es una prueba de sus poderes de resistencia al mal y de su sabiduría. El calor es una fuerza que puede (o no) manifestarse a voluntad: con su sola presencia abate el alma de una persona más joven que no se haga a un lado para permitir el paso al más añoso. También, el calor puede dañar, enfermar y hasta causar la muerte a cualquiera que se atreva a no tomar en cuenta la voluntad de uno de sus mayores» (Guiteras H., 1988: 69). El estatus de la ancianidad no se muestra por medio de privilegios materiales sino por el respeto (y temor) al «calor» que el viejo ha acumulado con el tiempo.

En este pequeño ensayo, se verá que la vejez y su relación estrecha con la pobreza extrema, al menos para el caso de algunos zoques, dista mucho de lo que registraron otros autores, tiempos y lugares. La posición idílica del viejo, como el más respetado, venerado, protegido, poderoso, sabio, artista, inventor, adivino, consejero, líder y otros atributos de posición gerontocrática sólo queda en el recuerdo o como buenos deseos en la vejez. La realidad muestra que el viejo va perdiendo, en forma acelerada, atributos que antes eran propios de los roles gerontocráticos y se observa que se ve a la vejez como un periodo crítico de la vida en donde el otrora estatus social alto es puesto en duda, en evidencia y en seria desventaja con otros periodos de la vida.

Sin embargo, en el aspecto religioso, el viejo aún conserva un espacio ritual de importancia, pero que no pone en riesgo el poder que tienen en la toma de decisiones políticas los jóvenes o personas

maduras, quienes ejercen el poder político y económico. Por ejemplo, «en sus festejos es característico observar a los invitados separarse por grupo de hombres y mujeres por edades, o sea, viejos y jóvenes, tradición que aún se nota entre los ladinos (mestizos). Esta conducta obedece a una actitud de respeto del hombre y del joven al viejo» (Instituto Chiapaneco de Cultura, *Notas de cultura zoque*, s/a, 1998: 7).

La realidad social indica que cuando la enfermedad, la soledad y la pobreza se conjugan, éstas constituyen el detonador del abandono del viejo a su suerte. Sin embargo, en esta investigación, se detectó, entre otros, un problema que funciona como catalizador: el alcoholismo crónico, muy a pesar de que otros autores no lo consideran como prioritario.

Por ejemplo, De la Cerda Silva (1940: 76) en la década de los 30 y Báez-Jorge (1985: 38) en los 80 concluyen que «el problema del alcoholismo entre los zoques de Chiapas es prácticamente inexistente». Sin embargo, los registros epidemiológicos (cirrosis hepática, la violencia y los accidentes) y la acelerada introducción del protestantismo entre los zoques revelan lo contrario, ya que éste utiliza lo anterior como una de sus banderas de penetración, al considerar al alcoholismo como un grave problema local (Reyes G., 1992: 63). Por desgracia, ahora, a esa complicación se le suman otras, principalmente en la población joven, como la drogadicción con enervantes, que en opinión de algunos pobladores es costumbre que se trajo del exterior, cuando las personas van como jornaleras a los centros de trabajo.

El origen del maltrato que sufre el viejo es muy complejo, pues obedece, en gran parte, a la combinación de factores como las enfermedades crónicas y degenerativas, la viudez, la falta de afecto y apoyos de las redes familiares, pero, sobre todo, parece que la cuestión económica es la base que sustenta tal práctica, ya que, de acuerdo con la cultura zoque, cuando el anciano no tiene propiedades (casa,

terreno y/o ganado), no representa interés para brindarle cuidados y atención en la decrepitud a cambio de la herencia de bienes materiales. Suena muy cruel decirlo, pero la atención a un viejo se medirá, por lo general, por intereses instrumentales y no por altruismos o lazos sentimentales.

Además, el maltrato se alimenta por una serie de factores combinados, como la improductividad y la enfermedad crónica (cuadros reumáticos agudos, ceguera, parálisis, incontinencias, sordera, enfermedades del corazón, etc.), en viejos que demandan atención e inoportunan con sus achaques. La viudez en la mujer complica el cuadro anterior, pues es víctima de despojo, toda vez que no tiene derecho a heredar, principalmente, la tierra.

En la pobreza, el interés se pone en los ancianos que son productivos y en los que representan una función económica. Se arriesga a cuidar a los viejos que, una vez que recuperen su salud, sean capaces de reintegrarse al trabajo lucrativo; los ancianos saben esto. Por otro lado, están conscientes de que sufren enfermedades propias de su edad, que no tienen cura; por ello, a pocos se les atiende; los ancianos asumen este hecho y, muchas veces, piden ser abandonados a su suerte o se suicidan (o los inducen a este acto) cuando ya se sienten un estorbo o carga para la familia. Una expresión muy común que se les hará escuchar es: «¿por qué no te mueres?».

Pero la pobreza va acompañada de marginación social. Aunque un viejo quiera atenderse, muchos de los servicios de salud no son accesibles, ni siquiera los de atención primaria, menos los geriátricos.

Los zoques saben del abandono en el que viven y lo manifiestan sin tapujos. Asimismo, están hartos de los problemas de corrupción de que son objeto y de la malversación de los programas oficiales de apoyo hacia las comunidades indígenas, que terminan afectándolos y enemistándolos en varios planos sociales. También, existe una evidente desconfianza hacia el gobierno, pues están cansados de promesas que sólo terminan en eso: en promesas.

Ante tal situación, si los viejos quieren sobrevivir, tienen que trabajar hasta que las fuerzas los abandonen o la enfermedad los venza.

La información empírica demuestra que la imagen idílica del anciano respetado, protegido y venerado es ya sólo un mito. Quizás en tiempos ancestrales sí se dio tal cosa; pero, en la actualidad, sólo son motivo de cierta protección los viejos y viejas que representan, en su muerte, un interés económico, que se traduce en herencia material.

Ante las condiciones tan crueles en que viven los zoques contemporáneos, surgen preguntas: ¿qué tipo de vida les espera a las nuevas generaciones de viejos mejor preparados (bilingüistas, alfabetas, trabajadores asalariados)?, ¿cuál será la nueva forma de vivir la vejez?, etc., pero, sobre todo: ¿qué propuesta podremos sugerir para ayudar a orientar el mejoramiento de atención a la vejez indígena? y ¿qué calidad de vida le espera a este grupo poblacional?

LOS ZOQUES DEL NOROESTE CHIAPANECO

Los criterios que se utilizaron para delimitar la región de estudio se construyeron por rasgos que combinan temporalidad y fenómenos sociales, que toman dimensiones de espacialidad territorial. El corte temporal se refiere a la época actual, a un tiempo «moderno», en una comunidad indígena. La dimensión social tiene atributos de una compleja interacción de sus actores al interior y al exterior de la región de estudio.

El grupo étnico tiene como rasgo más o menos homogéneo, pero también diferenciador, el idioma común, característica que le da cierta identidad de pertenencia grupal, y la conciencia de sus hablantes de que son un grupo diferente del resto de la sociedad con la que interactúa al interior y al exterior en un complejo entramado social.

La región zoque del noroeste de Chiapas se integra por 12 municipios serranos: Ocoatepec, Chapultenango, Tecpatán,

Pantepec, Tapalapa, Francisco León, Rayón, Jitotol, Copainalá, Ostuacán, Tapilula e Ixhuatán. Estos municipios tienen, a su vez, fronteras políticas con otros estados y grupos étnicos: al norte limitan con Tabasco; al sur, con tzotziles; al este, con mestizos; y al oeste, con Veracruz y Oaxaca.

La población del noroeste chiapaneco cuenta con dos centros comerciales de importancia en los cuales gira la vida económica y política de la región: Copainalá, en la depresión central, y Pichucalco, en la vertiente del Golfo de México. En Copainalá se concentra, por lo general, el comercio de los municipios zoques de Ocoatepec, Tapalapa, Tecpatán y el del municipio mestizo de Coapilla. En Pichucalco predomina la influencia comercial y política con los municipios zoques de Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, Jitotol, Ostuacán, Pantepec, Rayón y Tapilula.

PRINCIPALES PRÁCTICAS DE MALTRATO A LOS ANCIANOS ZOQUES

El maltrato de parte de la población hacia los ancianos se refiere a tratarlos con dureza, con violencia física, verbal y emotiva y con interacción ruda cara a cara en la vida cotidiana (despojo, engaño, burla, segregación, inducción al suicidio, senilicidio, abandono, menosprecio, etcétera).

En el marco de las investigaciones geriátricas, el maltrato al viejo se ha llamado síndrome del viejo maltratado, que consiste en cualquier tipo de sufrimiento que presente un individuo de edad avanzada, el cual le causó otra persona en lo físico, económico, psicológico o en su calidad de vida.

El abuso psicológico consiste en toda una gama de comportamientos que causan sufrimiento emocional: abuso verbal, como amenazas, insultos, órdenes rudas o agresión; aislamiento, es decir, ignorar al anciano; infantilismo, cuando se le trata como a un niño pequeño y

acepta, de forma pasiva, su dependencia; humillaciones; provocaciones de miedo o temores e interferencia en la toma de decisiones.

El maltrato físico produce una gran cantidad de lesiones corporales. Consiste en golpes, empujones, quemaduras, apretones, ataduras, negligencia, alimentación inadecuada, privación del sueño, sobredosificación o carencia de medicamentos, negación a la atención médica, ausencias de custodios y agresión sexual.

El abuso económico es el manejo erróneo, la explotación o la falta de atención a las propiedades y al dinero de una persona mayor. Incluye la apropiación y el uso irresponsable de dichos bienes, así como la presión sobre la víctima para que los distribuya (Carrillo A., 1998: 10).

En la comunidad indígena, el maltrato al viejo se vuelve más evidente en los pobres, que constituyen, por desgracia, la mayoría. Para conocer más de cerca cómo se da el maltrato, es preciso ver cada uno de los espacios sociales en que se genera y su desarrollo. Los casos que aquí se presentan están documentados; también, se vierten las experiencias por los propios actores sociales: los viejos.

1) El engaño institucional

Como todos saben, Chiapas atraviesa por un clima de violencia generalizada, que se exacerbó por el surgimiento de la guerrilla zapatista en enero de 1994. A partir de entonces, se instrumentaron programas oficiales y no oficiales de atención hacia los pueblos indígenas. Por ejemplo, haciendo referencia a los programas que —debido a problemas de corrupción— terminaron afectando, de manera negativa, a la población envejecida, se tienen las siguientes experiencias:

El DIF lanzó un ambicioso programa de atención a los ancianos. Les brindaba, cada mes y en forma gratuita, una despensa que consistía en: 2 kg de harina de maíz (Minsa y/o Maseca), 1 o 2 litros de aceite de cocina, 2 kg de arroz y 1 kg de azúcar. El reparto se hizo a través

de un censo comunitario que consideraba viejas a personas de 60 y más años de edad. En los primeros meses, la despensa se repartía sin mayor problema; sin embargo, se avecinaron las elecciones y la distribución tomó un matiz político. El sr. Benjamín narra su experiencia:

En esos tiempos, pues daban la Minsa a los pobres, pero cuando entró el agente municipal (del PRI) ya no me dan a mí la Maseca; me la quitaron, nada más porque no apoyé al PRI, nada más por eso. Vino el problema del partidario y otro del PAN. Estábamos en el partido PAN.

Los del PRI ofrecían leche y Maseca; hasta dentistas traían (ríe a carcajadas) y no sé qué otro más. Venían personas de Tuxtla; vienen a ofrecer lentes a los ancianos que ya no ven; iban a traer anteojos a las dos tandas de pago (el costo total de los lentes era de \$375.00); pagamos (la primera tanda, la de mi mujer y la mía), pero se perdió ese dinero. Pregunto yo: ¿Adónde se fue esa mujer que nos vino a ofrecer, pues, ese lente? Me decían que se fue; ella no dijo adónde se fue; era una trabajadora del DIF (entrevista a profundidad, don Benjamín, 11 abr, 1997).

Experiencias como ésta se repiten, a menudo, en las historias de vida de los viejos. Aprovechándose de sus necesidades, hay quienes abusan del poder para condicionarles cualquier tipo de ayuda gubernamental, que lejos de solucionar un problema los confronta y distancia por cuestiones ideológicas e intereses partidistas.

No importó la ayuda dirigida a los viejos, sino que el interés se centró en la manipulación de la despensa con fines políticos o de lucro personal, como el fraude en el ofrecimiento de anteojos y en el reparto de la despensa.

Otro tanto sucede cuando los ancianos requieren, por ejemplo, de una silla de ruedas. Tendrán prioridad los afiliados al partido oficial. Si el solicitante es simpatizante de otro partido político diferente al

PRI, la ayuda será condicionada para que cambie de adscripción partidaria con el argumento de que quien ofrece estos servicios es el gobierno oficial y no la oposición. Este fenómeno de manipulación ha enemistado y afectado, con seriedad, a sectores como el de adultos mayores.

2) El maltrato físico

En lo físico, la forma más común en que se maltrata al viejo son las *majizas* o las *marejadas*; éste último es un término regional de Copainalá. Se refieren a reprimir al anciano muy fuerte con golpes propinados repetidamente con una vara sobre el cuerpo. Existen otros mecanismos de azote, como los ejecutados con lazos de ixtle (riatiza) o cuero (cueriza); aunque también se suele escarmentar al viejo de manera directa con puño cerrado (puñetazos), pero estos casos son los menos. Lo más común es que se propinen estos castigos al anciano (masculino), pero también la mujer puede resultar golpeada.

Las rencillas en el desacuerdo por el monto o la falta de herencia parecen ser la causa principal que motiva la enemistad entre el heredero y su padre. Para entender la importancia que tiene la herencia entre los zoques basta conocer la traducción literal de tal término: *tsajkayu øjara'is yø yoskuk*, «me dejó mi papá este trabajo».

Para justificar que su actitud fue inconsciente, el golpeador recurrir, por lo general, a intoxicarse con alcohol; bajo sus efectos, comete el maltrato físico¹⁶⁵. Para ejemplificar este tipo de violencia,

¹⁶⁵ Menéndez (1987b: 83-84) señala que la irresponsabilidad del alcohólico (y de sus actos bochornosos) ante la sociedad se justifica y le está permitida, justamente, por estar borracho, y dice: «La embriaguez constituye una máscara que permite la transgresión y, en determinado caso, la crítica a las instituciones, donde el borracho expresa al conjunto social de pertenencia y donde éste se reconoce/desconoce en su "irresponsabilidad"».

se presentan dos testimonios. Uno corresponde a un padre golpeado y otro a su hijo golpeador:

Mi hijo ya se había casado y quería casa (aparte). Me dijo que quería vivir solo en mi casa, en mi terreno. Me quiere chingar. Ya le di mujer y casorio; le ayudé a construir su casita (en mi solar). Ahora, quiere sembrar flor en mi terreno. Todo quiere regalado. Así, los dos no entramos (bajo el mismo techo, en el mismo terreno). Actúa por voluntad de su mujer. Ya tiene cinco años que mi hijo no me habla.

El solar es mío; todos los documentos están a mi nombre. Para evitar más problemas, yo me fui; le dije: «yo voy a salir»; llevó mi manguera y me insultó. Por su mujer nos separamos (guarda silencios prolongados). No me hablo con mi hijo; no, porque me pegó una vez que nos emborrachamos; estábamos en una cantina y me golpeó (señala el puño derecho), y me tuve que defender y le pegué [también].

Después, vendió el terreno; ya dejó el solar. No quiere tener recuerdos. Tiene interés en la herencia de su padre, ¿qué va uno a hacer si no hay nada que heredar? Como en mi caso, mi papá me dejó sin casa, sin solar y sin mujer; en cambio, yo pedí a la mujer, según la costumbre (entrevista a profundidad, don Miguel, 23 mar, 1997).

La comunidad se enteró, con rapidez, del suceso, y era el tema de conversación en boga. Las opiniones estaban divididas: unas veces eran a favor del golpeador (hijo) y otras a favor del golpeado (padre), pero no pasó a mayores. Así como la noticia corrió muy aprisa de boca en boca, con la misma rapidez se fue olvidando, como si el suceso fuera algo «natural» o «normal» y socialmente aceptado, pues no hubo ningún tipo de represalia. El incidente pronto se convirtió en una anécdota más de la comarca.

El segundo testimonio, en el cual un hijo acepta haber propinado singular *majiza* a su padre —actuando bajo los efectos del alcohol—,

es muy interesante, pues, por lo general, los hijos golpeadores se deslindan de su responsabilidad negando los hechos con el argumento de que si lo hicieron estaban fuera de sí, inconscientes y, por lo tanto, libres de culpa. El testimonio es el siguiente:

Sí, lo *marejé*, pero fue por defender a mi madre y otros aspectos (la herencia), por borracho y briago. Nunca adoptó su lugar de padre; entonces, los hijos son los que vienen a aplicar un correctivo en determinado momento.

En mi caso, mi padre es una persona que vivió su vida en su tiempo. Tuvo la oportunidad de hacer su vida y manejó dinero. Desgraciadamente, su alcoholismo lo hizo quedar en nada. Entonces, nosotros quedamos chiquitos y desde pequeños desamparados de él. Todos crecimos. Ahora, lo estamos viviendo. Casi todos mis hermanos le han dado la espalda a mi padre; yo fui uno de ellos. Me he estado recuperando un poquito de todo ese trauma que traigo.

Ahora, él ya no vive con mi madre; ella se dejó, definitivamente, de él. Yo actué mucho tiempo en contra de él, porque no me heredó, no me dio nada. Por desgracia, fuimos 11 hermanos; ninguno siquiera tiene la primaria. A los 15 años, me salí a vagar, buscando buena suerte; logre estudiar y terminé una profesión. Todo ese tiempo estuve resentido con mi padre. Viví mucho tiempo atormentado. Los casos de maltrato físico a los viejos se dan, frecuentemente, en la región. Mi padre tiene hijos con dos o tres mujeres, pero quedó abandonado; anda del tingo al tango; tirado, sin nada, sin protección, sin hogar, sin esposa, sin hijos... (hace grandes esfuerzos por no llorar).

Durante el tiempo que viví con él, le daba de beber alcohol, lo emborrachaba y allí lo dejaba tirado en la casa; se paraba y le volvía a dar trago. Me divertía con él dándole trago. Era una burla que le hacía y me causaba placer. Muchas veces, le decía yo en su cara, le reclamé y lo ofendí diciéndole viejo, pobre, pendejo y no sé qué tanto más, al tiempo que lo *marejaba*.

Por eso le digo que tanto resentimiento se crea en el ser humano; pero también pienso que es parte de la cultura que nosotros vivimos;

no es tanto culpa de nosotros sino de la cultura que se ha vivido. Yo disfrutaba el maltrato que le daba a mi padre, porque estaba resentido con él. Cuando uno está enfermo del alma, es capaz de todo. Raro es aquel padre que le va bien y que le salga un hijo consciente, pero la mayoría de los casos que aquí se dan terminan en abandono del padre. O qué, ¿actué mal? (entrevista a profundidad, Rosario C., 11 abr, 1997).

En este caso, la comunidad también se enteró de las *majizas* que el hijo propinaba al padre, pero sin mayor repercusión social; por el contrario, parecía avalar la actitud del hijo, pues el padre, aparte de haragán, alcohólico, mujeriego, irresponsable, derrochador, sinvergüenza, orgulloso y de «no querer dar su brazo a torcer» (no querer reconocer sus errores), quería vivir bajo la protección de sus hijos y de sus esposas, sin haberlos heredado.

Por eso, cuando el hijo *marejaba* al padre, disfrutaba el maltrato y sentía placer, porque actuaba, de acuerdo con la costumbre del pueblo, con la idea de estar enfermo del alma, lo cual significa muchas cosas: rencores acumulados, descarga emotiva, aplicación de un correctivo, defensa de la madre, la desatención del padre hacia la familia o, simplemente, el cumplimiento de la costumbre, cobijada por la influencia del alcoholismo.

3) Burlas públicas socialmente toleradas

Los registros etnográficos, que tiene el autor del presente trabajo, de estas situaciones se documentaron a través de la observación directa *in situ*. Se trata de la burla en público en la que unos jóvenes, que se encuentran ingiriendo bebidas embriagantes en una cantina que expende al aire libre que se denomina La Curva, someten a un viejo de aproximadamente 80 años.

A pesar de que el maltrato se toleró socialmente, porque nadie reprochaba lo que sucedía, su registro en video hubiera sido un suicidio, ya que habría documentado y puesto en evidencia la violencia que se ejerce contra el anciano, así que se optó por las notas de campo que dicen así:

Un bullicio llamó mi atención. Un grupo, como de ocho personas —todas jóvenes—, celebraba, con grandes carcajadas, las bur-las de que era objeto un anciano como de 80 años, que se unió a otros tres jóvenes que se encontraban tomando cervezas.

El adulto mayor tenía facha de vagabundo y para acceder a una cerveza en forma gratuita dejaba que los jóvenes le hicieran maldades como las siguientes: uno le pintó con carbón descomunales bigotes, otro le hizo preguntas chuscas de contenido sexual y el tercero le pegó un letrero en la espalda con la siguiente leyenda: «dame una patada». Las risas de algunos transeúntes no se hicieron esperar, pero otros mostraron una actitud indiferente. El anciano sólo alcanzó a tomar tres cervezas antes de quedar tirado en el suelo.

Un par de horas más tarde, se levantó, con dificultad. Para entonces, estaba solo y decidió ir a descansar. Mi sorpresa fue grande cuando lo vi dirigirse hacia el panteón del poblado. En tal sitio, dormía en una capilla bastante grande y colectaba monedas, que dejaban los deudos en calidad de limosnas, y vasos de las veladoras, mismas que lavaba en el río y las vendía o intercambiaba por algún otro satisfactor.

Le pregunté que si no le daba miedo dormir en el panteón, a lo que respondió: «miedo hay que tenerle a los vivos; los muertos están descansando» (Diario de campo, Ixtacomitán, Chiapas, 18 mar, 1997).

La burla pública que sufre el viejo, y que es tolerada por la sociedad, se da en forma muy especial con los efectos de la intoxicación alcohólica y en el ámbito de la cantina, lugar «donde se representan las transgresiones, donde se puede llegar a “hablar”, donde se está acompañado, pero también se puede morir... Beber y embria-

garse suponen dos importantes posibilidades sociales: hablar y actuar no responsablemente» (Menéndez, 1987b: 82-83).

La situación que se describió antes se trataba, evidentemente, de un viejo que a nadie importaba y como tal era tratado. Vivía de la caridad y su soledad la refugiaba en el alcoholismo. Durante mi estancia, en personas sobrias nunca observé alguna burla similar.

4) El abandono

Sobre este caso, hay uno que fue confiado al autor de esta investigación. Se dio en una situación de contingencia y merece especial atención por su dramatismo. El 28 de marzo de 1982, dio inicio una de las catástrofes más grandes que han afectado a los zoques del noroeste chiapaneco en las últimas décadas: la erupción del volcán El Chichonal.

El fenómeno marcó una era caracterizada por muerte, desolación, hambre, desaparición de pueblos a 10 km a la redonda a partir del cráter, y propició la migración masiva, forzosa, violenta y repentina de sus pobladores. A éstos los enfrentó a los retos que exige la sobrevivencia en condiciones totalmente desfavorables después de una tragedia sin precedentes. Con el referente anterior, la historia se desarrolla así:

La noche del domingo 28 de marzo de 1982, como a las nueve, oí que gritaba la gente: «¡ya el volcán está reventando!». Pasaba gritando atrás de mi casa. Iban a ver el volcán. También, me salí de mi casa y fui a revisar (divisar) pronto.

El volcán ardía, como castillo; tronaba, como bombas y cohetes; echaba humos negros y rojos. La tierra se sacudía. Dentro de un momento, empezaron a caer piedras y grava. Algunos de mis compañeros querían huir; decían que se iban a Ocotepéc o Campeche; otros regre-

saban en el camino y unos iban a la iglesia a hacer oración. La gente lloraba por tanto miedo y porque pensaba que era el fin.

Empezó a zumbear el volcán y se sentía como si la tierra se fuera a hundir. Llegó un momento en que no se oía nada, pues tanto ruido nos volvió sordos. Personas lloraban por sus pecados. Yo lloré, pues se apoderó de mí un miedo que no podía controlar. Eso sí, a la hora de la hora, los que no acostumbraban mucho entrar a la iglesia cuando hubo peligro fueron los primeros en ingresar a ella.

Hubo varias erupciones. Todo el tiempo era como de noche. Los caminos quedaron tapados y muy feos: árboles caídos, ceniza caliente, ríos tapados y pura piedra para la subida a Ocotepéc. ¿Cómo caminar en la ceniza caliente?, en vez de avanzar, retrocede uno. Aun así, la gente salió huyendo.

Varias personas quedaron aquí tiradas o abandonadas. Le contaré la historia de una señora a quien sus hijos dejaron aquí desprotegida. Yo la tuve que cuidar, pues no pude salir, porque atendía a tres personas enfermas de sarampión, mis hijos padecían calentura, mi esposa tenía siete días de alivio y debía cuidar a mi *pichi*, «recién nacido», Benjamín. Teníamos con nosotros a la señora; era una viejita como de 75 años de edad. Sus hijos la dejaron, porque huyeron de la comunidad cuando explotó el volcán y porque era ciega. Uno de sus hijos se llama Lorenzo Jiménez González y el otro Juan Jiménez González. Yo tuve que mantener y proteger a la pobre viejita durante los días que estuvimos sufriendo. Días después, salí en busca de ayuda. Más delante de Chapultenango, venían 50 federales del ejército mexicano y me preguntaron cómo estuvimos y les platiqué. Después, volví a mi colonia, pero cuando regresé, habían venido por mi familia mis paisanos desde Ocotepéc para llevarla a como diera lugar.

Dejé a la viejita ciega, pues pensé: «si me quedo a cuidarla, vendrán esos soldados y me obligarán a cargarla hasta Ocotepéc»; mejor doy parte a la autoridad para que vengan por ella, pues sus hijos la han tirado. Por fin, la rescataron, pero murió ocho días después de que llegó a La Chacona (campamento de refugio en Tuxtla Gutiérrez).

Finalmente, la anciana me dijo: «sólo te pido de favor que, cuando vayas a la colonia Viejo (Vicente Guerrero), busques a Lorenzo

Jiménez González, quien vive atrás de la iglesia, y pregúntale ¿dónde dejó a su mamá? Si acaso tienes miedo, ¡dile que vas de mi parte!» (entrevista a profundidad, José R., 11 abr, 1991).

Historias como la anterior se repiten en esta fase histórica de excepción que vivieron los zoques. Muchas personas, principalmente viejas, se negaron a abandonar la zona núcleo del complejo volcánico durante la crisis de El Chichonal; prefirieron morir en sus tierras que salir de ellas. También, se da el caso de que pidieron ser abandonadas, pues sabían que la evacuación debería hacerse en forma rápida, y viendo su situación de enfermedad grave o vejez avanzada preferían suicidarse que estorbar o hacer más difícil la huida. Pero también muchos jóvenes fuertes y sanos abandonaron, conscientemente, a sus padres, como en el caso anterior.

El abandono de los viejos no sólo se da en situaciones de contingencia, como la que se describió, sino también en casos de extrema pobreza o enfermedad muy grave, donde incluso el anciano pide que se le ayude a morir. Entonces, irá disminuyendo, de forma gradual, la cantidad de alimentos de por sí raquíta para acelerar su enfermedad y provocar su muerte. Esta práctica se conoce como *kie'ba kia'kuy*, «llama su muerte». La traducción más cercana al castellano de este concepto podría ser la eutanasia.

5) El senilicidio

En realidad, hay muy pocos casos de disposición directa de la vida de los viejos por parte de los hijos. El senilicidio se practica como una extensión de actos de venganzas de sangre, es decir, «cuando la o las personas que quieren vengarse llegan al lugar y no está el sujeto sobre el cual se ejercitará la venganza, suelen, entonces, buscar y matar a algún familiar (del que querían matar) lo más cercano posible en términos parentales. Aun

buscando a un solo sujeto, puede ser asesinado más de un pariente cercano. Para este sistema de relaciones, el sujeto aparece como secundario; lo significativo es el grupo. Cada sujeto más que así mismo representa a su grupo de pertenencia familiar» (Menéndez, 1987a: 85-86).

Por desgracia, los actos de venganzas de sangre suelen recaer, por lo general, en el anciano (el más débil en correr y defenderse), como es el caso a tratar, pero pueden ser sobre cualquier otro miembro de la familia que se encuentre presente:

Vera usted, el viejito se llamaba Luis. Era muy pacífico, sacaba la suerte en el oráculo y era muy entendido. Con él, consultaban las suertes; la gente iba a consultar su suerte, su futuro. Usaba maíz colorado y alverjas para leer la suerte.

Su nieto, quien vivía con él, tuvo problemas con otro grupo de jóvenes y se enemistaron a muerte. Ya se andaban *venadiando* (buscando y huyendo uno del otro para victimarse a muerte).

El año pasado nomás fueron sus enemigos a buscarlo a su casa de día; el muchacho ya había huido; sólo encontraron al viejito durmiendo en su hamaca. ¿Que no lo despertaron? Primero, lo torturaron y, después, lo mataron; le quitaron la cabeza. El pobre murió sin delito a los 92 años de edad (entrevista a profundidad, don Teófilo, 26 mar, 1997).

Este senilicidio fue del dominio de todos. Se supo quiénes habían sido los culpables, pero, al igual que en los casos anteriores, nadie reclamó nada. La casa de don Luis quedó abandonada. Nadie se atreve a reclamarla o denunciar el hecho por temor a recibir el mismo trato.

6) El despojo

Las mujeres viudas reciben, en forma muy especial, este tipo de maltrato, pues a la muerte del esposo, los hijos disputan las propiedades,

ya que la mujer prácticamente no tiene derecho a la herencia, sobre todo si se trata de la tierra. Cuando esto sucede, la viuda pasa a depender, de forma total, del ultimogénito hijo varón, que es a quien, por lo general, le quedan más propiedades. Sin embargo, este fenómeno tiene sus variantes, como lo muestra el siguiente caso.

Hay un joven; no es de aquí (de la cabecera municipal) sino de la Rivera de Mazono, ejido que corresponde a Tapalapa. Ahí, vive un muchacho y la señora ya muy viejita.

La señora tenía su marido, ya viejito también. El pobre señor murió y quedó, pues, la señora viuda. El muchacho creció con ellos. Cuando estaba pequeñito, ellos lo cuidaban y lo mantenían hasta que se hizo grande. ¿Qué hizo la viejita al quedarse viuda?, la viejita lo quiso tener como su marido, y se casaron.

La viejita, a la muerte de su esposo, no quedó muy rica, pero tenía bestia de carga, cafetal, su casa allá en la Rivera y otros animalitos. Nomás se enteraron los hijos de que el papá murió, le empezaron a quitar sus cositas antes de que se casara con el joven; sólo le dejaron su casita.

La señora vive todavía, pero está muy viejita. Ahora, ese hombre es joven todavía y su mujer camina apoyada con bordón. Pobre mujer y su marido joven (entrevista a profundidad, don Teófilo, 26 mar, 1997).

Este caso de despojo de los hijos hacia la madre quiso, desde la perspectiva zoque, evitar que las propiedades del padre pasaran a manos ajenas de la familia del primer matrimonio, pues las segundas nupcias de la madre representaban esa posibilidad. Si el padrastro quería bienes, debería trabajar, con dureza, para conseguirlos. Asimismo, los hijos sabían que el segundo matrimonio no engendraría hijos; entonces, a la muerte de la señora, el esposo se casaría otra vez, pero con una joven y las propiedades pasarían a una familia totalmente nueva. Para evitar este riesgo, los hijos recurrieron al despojo de la madre y a regresar las propiedades a sus legítimos dueños.

Desde la cultura zoque, este acto no constituye, estrictamente, una acción de despojo sino una restitución de propiedades a los dueños originales. En lengua nativa, este sistema de rescate de propiedades se conoce como *pøjkwiru'kuy*, término que hace referencia a «recoger de nuevo, a tiempo, antes de que suceda otra cosa». Como se ve, el despojo a la mujer de sus propiedades está institucionalizado e internalizado en la cultura del grupo.

Si el hombre queda viudo, el viejo tendrá que ser muy frío y calculador para no heredar todo antes de su muerte, pues si pierde el control de sus propiedades significa no sólo su ruina sino la pérdida del seguro de su vejez, ya que a partir de entonces no representará ningún interés económico. Sólo tendrá el compromiso moral que contrajo con el hijo al que más propiedades haya dejado, siempre y cuando éste último considere que el monto de lo heredado haya sido suficiente.

Finalmente, el fenómeno del envejecimiento apenas comienza; sin embargo, hay muestra de poder enfrentar con éxito el problema. ¿Qué futuro depara a las generaciones venideras si la población envejecida mantiene su curso de crecimiento?

BIBLIOGRAFÍA

- BÁEZ-JORGE, Félix, Armando Rivera B. y Arrieta P., «Cuando ardió el cielo y se quemó la tierra», *Serie Investigaciones Sociales*, núm. 14, INI, México, 1985
- CARRILLO AGUADO, José L., «El maltrato del anciano», *Suplemento Investigación y Desarrollo, La Jornada*, núm. 63, año VI, México, 11 ago, 1998
- CERDA SILVA, R. de la, «Los zoques», *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, vol. II, México, 1940
- GUITERAS HOLMES, C., *Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil*, Ciencias Sociales, Cuba, 1988
- Instituto Chiapaneco de Cultura, *Notas de cultura zoque*, Instituto Chiapaneco de Cultura, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1988
- LÓPEZ-AUSTIN, A., *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*, UNAM, México, 1983

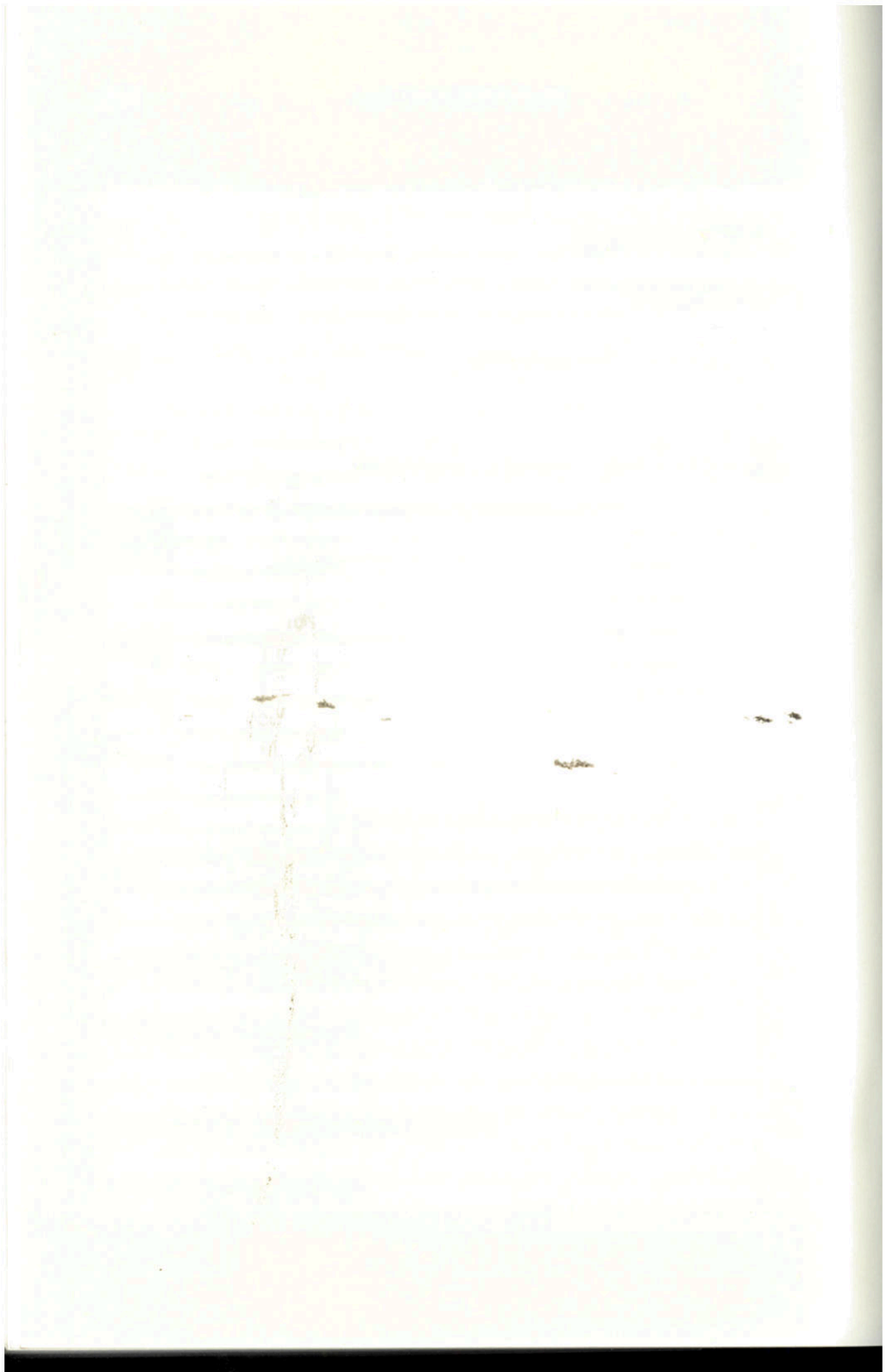
- MENÉNDEZ, Eduardo L., «Alcoholismo, II. La alcoholización, un proceso olvidado... patología, integración funcional o representación cultural», *Cuadernos de la Casa Chata*, núm. 150, México, 1987
- ORTIZ PEDRAZA, José F., *Envejecimiento: ¿programa genético o desgaste?*, INAH, México, 1995 (Colección Científica)
- REYES GÓMEZ, L., «Notas sobre "alcoholismo" entre los zoques de Chiapas», en Eduardo L. Menéndez (ed.), *Prácticas e ideologías «científicas» y «populares» respecto del «alcoholismo» en México*, CIESAS, México, 1992 (Colección Miguel Othón de Mendizábal)

ÍNDICE

- 5 Presentación
- 31 Introducción
- 49 Lista de abreviaturas, siglas y acrónimos usados en este tomo
- 55 Posibilidades de una vida de calidad en el entorno de la pobreza rural. Notas para estudiar la relación entre pobreza y políticas sociales, RENATO JAVIER MARTÍNEZ y VÍCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ
- 69 Evaluación del Progreso, VERÓNICA VILLARESPE REYES
- 85 Un nuevo enfoque en el estudio de la pobreza rural: la perspectiva femenina, MIRIAM NÚÑEZ, TOMÁS MARTÍNEZ y FERNANDO MANZO
- 111 Políticas de seguridad alimentaria campesina de los años 90 con asignación genérica, IVONNE VIZCARRA BORDI
- 143 Opinión del campesino sobre el Programa de Subsidios Directos a la Agricultura (Procampo) en una región del estado de Puebla, BENITO RAMÍREZ, PEDRO JUÁREZ y GUSTAVO RAMÍREZ
- 169 La evolución del consumo del frijol de los pobres rurales y urbanos en México, MARIO DEL ROBLE PENSADO LEGLISE
- 187 Hacia un cambio estructural para el desarrollo sostenido y sustentable en Chiapas, GUILLERMO MONTOYA, FRANCISCO HERNÁNDEZ y JOSÉ MIJANGOS
- 217 Políticas de salud y tradición médico-herbolaria en áreas rurales de Nuevo León, VERONIKA SIEGIN
- 243 Condición campesina y participación social. Los campesinos guanajuatenses ante los procesos de cambio, MARÍA DEL CARMEN CEBADA CONTRERAS
- 267 Globalización, crisis azucarera y luchas cañeras en los años noventa, FRANCIS MESTRIES BENQUET.

- 297 Movimiento social y relaciones de poder en La Frailesca, Chiapas, ÁLVARO MARTÍNEZ QUEZADA
- 315 Procesos de identidad entre la población chichimeca y otomí de Guanajuato (1856-2000), JORGE UZETA
- 331 Abrir mentes y corazones en la formación de los profesionistas, GISELA LANDÁZURI BENÍTEZ
- 353 Educación y participación laboral de los niños en México: la evidencia de las encuestas de hogares, 1984-1996, HÉCTOR ROBLES VÁSQUEZ
- 381 Maestros y maestras rurales en las comunidades rurales: encrucijada de caminos hacia la sustentabilidad, ELENA LAZOS CHAVERO
- 411 Educación y construcción de la identidad en una comunidad indígena: los ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec (mixe), Oaxaca: un proyecto de desarrollo social, JOSÉ MANUEL JUÁREZ y SONIA COMBONI SALINAS
- 435 Del derecho al hecho hay mucho trecho. La intolerancia religiosa en las sociedades rurales, MIGUEL HERNÁNDEZ MADRID
- 445 El maltrato al viejo entre los zoques de Chiapas, LAUREANO REYES GÓMEZ

Esta primera edición de *Acciones sociales públicas y privadas contra la pobreza* fue impresa en los talleres de Editorial Praxis, Vértiz 185-000, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, 06720, México, DF, en octubre de 2005. La composición tipográfica se hizo en Times[®] New Roman de 32 a 8 puntos. El tiro, sobre ahuesado de 44.5 kg, es de 1,000 ejemplares. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Carlos López.



Los coordinadores generales de esta colección cuentan con una trayectoria significativa en el estudio del medio rural en México. Yolanda Massieu Trigo es profesora de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco. Su interés se ha centrado en los estudios referentes a los impactos sociales de la biotecnología en el agro. Michelle Chauvet Sánchez, también profesora de la misma institución, inició su trayectoria en los estudios rurales dedicados al análisis de la ganadería. En la actualidad, también se dedica al estudio sociológico de la biotecnología agrícola. Rodolfo García Zamora se ha destacado por sus interesantes trabajos relacionados con la migración, además de haber participado, de manera activa, en el fomento y asesoría de proyectos organizativos de los migrantes en nuestro país.

La diversidad de respuestas que desde los actores sociales rurales genera el contexto actual, globalizante y privatizador, conforma el tema principal del presente tomo de esta colección. La primera parte está dedicada a los análisis de las acciones públicas institucionalizadas; la segunda sección contiene las actividades que impulsan las organizaciones y los individuos. El aporte de este libro a la reflexión sobre el nuevo papel del estado, las formas organizativas surgidas desde los afectados por las políticas públicas y por el actual contexto es de suma importancia. La reflexión de las políticas neoliberales, la globalización y las reformas a las leyes e institucionales, inducidas a partir de la apertura comercial, proporcionan una perspectiva de análisis para abordar las acciones concretas desde la sociedad rural. Es notable la búsqueda ética y teórica para humanizar los conceptos de desarrollo rural y pobreza. Nuevas nociones explicativas, como el capital social y la autonomía, hacen presencia en este valioso esfuerzo; la situación de prácticas tradicionales campesinas atraviesa muchos de estos estudios. El lector encontrará aquí una sugerente reflexión sobre el concepto de pobreza, de la acción gubernamental, de la ética en torno a las acciones públicas y privadas, así como una variedad de experiencias concretas que le proporcionarán un panorama interesante de este acontecer en el campo mexicano.